



00464
4 V-I y VII
2 ej
**Universidad Nacional Autónoma
de México**

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

**HACENDADOS Y RANCHEROS
QUERETANOS: 1780 - 1920**

T E S I S
Para obtener el Título de
MAESTRIA EN SOCIOLOGIA
p r e s e n t a

MARTA EUGENIA GARCIA UGARTE

TOMO I

México, D. F.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

1990



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

PAGINAS

INTRODUCCION.....	7
-------------------	---

CAPITULO I

ESPLENDOR Y DECADENCIA DE LA HACIENDA QUERETANA.....	28
--	----

1. Las tendencias señoriales de los hacendados..... 32
2. Los sistemas de trabajo y su impacto en la lucha por la independencia..... 58
3. Querétaro: de corregimiento novohispano a estado de la federación..... 74

CAPITULO II

LAS TRANSACCIONES DE TIERRA EN QUERETARO: DE HACENDADOS A RANCHEROS.....	95
--	----

1. Insolvencia económica de las testamentarias queretanas: formación de un nuevo tipo de propietario rural 104
 - 1.1 Las ventas convencionales y de oportunidad.. 111
 - 1.2 Los capitales piadosos en litigio..... 130
2. Reparto de los ranchos, haciendas y tierras baldías: formación y expansión de los rancheros..... 144

CAPITULO III

CONFIGURACION DE UNA SOCIEDAD DE PROPIETARIOS INDIVIDUALES.....	166
---	-----

1. Las componendas religiosas de la sociedad queretana..... 170
2. La aplicación de las leyes de Reforma en el Querétaro agrario..... 188
 - 2.1 Confusión en la administración de los bienes nacionalizados: arreglos privados..... 209
 - 2.2 Las dificultades de los rancheros..... 227
 - 2.3 Las estrategias de los hacendados para evitar las leyes de nacionalización..... 234

3. La adjudicación de los bienes urbanos.....	247
4. Balance de una década.....	262

CAPITULO IV

LA LUCHA POR EL AGUA Y LA TIERRA: EXPANSION TERRITORIAL DE LA HACIENDA.....	269
1. Los saldos de la reforma liberal.....	281
2. Las luchas de los pueblos y las comunidades indígenas en defensa de la tierra.....	306
3. La defensa de los límites.....	322
3.1 Fortalecimiento del Distrito de Querétaro.....	332
3.2 El Distrito de San Juan del Río.....	348
3.3 La Sierra Gorda: Distritos de Cadereyta, Tolimán y Jalpan.....	363
4. La reorganización de los pueblos en su lucha por la tierra.....	381

CAPITULO V

ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA DE QUERETARO: LA SUIZA DE LA REVOLUCION.....	395
1. La modernización de la economía: legalización de la gran propiedad.....	415
2. De la propiedad comunal a la propiedad individual..	440
3. La sociedad queretana en los albores del despertar democrático.....	456
4. La propiedad rural durante la Revolución.....	489
CONSIDERACIONES FINALES.....	528
FUENTES.....	549

INTRODUCCION

El estado de Querétaro, el "gran ausente" durante la Revolución iniciada en 1910, tiene una historia singular. Desde fines del siglo XVIII hasta el día de hoy, esta entidad de la República ha tenido un desarrollo social y político claramente diferenciado de los grandes lineamientos nacionales y de los procesos sociales acontecidos en otras regiones del país. La especificidad histórica de Querétaro y su siempre particular inserción en la vida nacional ha sido, y sigue siendo, motivo de asombro: desde la etapa en que Querétaro era Corregimiento novohispano, pasando por las reformas borbónicas cuando el territorio de la Nueva España se dividió en Intendencias, hasta 1920 en que acontece la revuelta agrarista local encabezada por Saturnino Osornio que tomó 20 años en resolverse, la entidad parece caracterizarse por su inmunidad a las ideologías y a las circunstancias nacionales, a pesar de que en México se empezaban a consolidar las nuevas instituciones del poder revolucionario y la estabilidad social con base en la instrumentación de las demandas sociales más apreciadas por los sectores populares.

El análisis del curso de la propiedad agraria en el estado durante ese largo periodo (1780-1920), y un estudio más detallado de los cortes históricos en que se conformaron los procesos sociales más significativos que le otorgaron al estado esa singularidad en la vida nacional, demuestran que la entidad tuvo un desarrollo económico y político autónomo e independiente: sus prioridades se definían de acuerdo a las condiciones geográficas

del territorio queretano y a los intereses particulares de sus clases dirigentes, hacendados, comerciantes, industriales textiles y eclesiásticos. De la misma manera, se observa que la resolución de los procesos políticos, sociales y económicos de la región tendía a coincidir y a vincularse a los proyectos y planes emitidos desde el centro del poder político.

Estas coincidencias, claras y transparentes hoy día a más de un siglo de distancia, no fueron percibidas por los diferentes actores sociales involucrados en el desarrollo de los acontecimientos. Para los dirigentes nacionales que se sucedieron en el país desde 1824 hasta el inicio del porfiriato en 1876, y durante el periodo revolucionario (1910-1917) las diferencias queretanas resultaban incomprensibles y, por lo mismo, se tipificaban como "extrañas" al conjunto de las regiones mexicanas.

La percepción y clasificación política de la entidad hasta 1876 como diversa y distante del interés de forjar una unidad nacional, revestía una gran importancia por las tendencias centrífugas regionales que sistemáticamente se presentaron en México a largo del siglo XIX. Bajo la imperiosa necesidad de vincular las provincias que emergían del periodo novohispano, la naciente República, federal o central, ponía especial énfasis en someter a los estados, en el proyecto liberal, o a los departamentos, en el proyecto conservador, que se mostraban reacios a la instalación de un poder político central. En este sentido, Querétaro, con nitidez definida en pro del proyecto político y económico de los conservadores, y renuente a relegar sus raíces históricas fuertemente enlazadas a la etapa en que

había sido Corregimiento Novohispano por el espectacular esplendor económico y social alcanzado en ese entonces, fue tenazmente acosado por la ideología liberal concentrada en destruir las bases sociales del régimen colonial.

Para los dirigentes nacionales y la opinión pública del siglo XIX y de los inicios de la Revolución mexicana -expresada en la prensa nacional- la participación política de los queretanos era un enigma. El México independiente nunca entendió las grandes contradicciones queretanas: sus habitantes fueron acusados de proespañoles en 1810 y fue en la ciudad de Querétaro en donde se prendió la mecha independentista; denunciados como conservadores a lo largo del periodo de la anarquía (1824-1870), y fue en su territorio en donde se aplicaron con mayor eficacia las medidas liberales; defensores de Fernando Maximiliano de Habsburgo y fueron los primeros en establecer un sistema político y económico distante del Imperio; ridiculizados en 1910 porque en la entidad "no pasaba nada", y tuvieron la energía de sostenerse en paz cuando el país se tambaleaba al calor de los Ejércitos Revolucionarios; porfiristas convencidos y en su suelo se escribió la Constitución de 1917. Ciertamente, en cada particular circunstancia la historia de los queretanos parecía incomprensible.

Los mismos queretanos, imbuidos de su historia colonial, embelesados con sus triunfos, orgullosos de sus obras, celosos de sus documentos, se han negado a esclarecer los procesos que los separaban de la identidad nacional. En realidad, había tantas cosas que ocultar durante el siglo XIX, para respetar las sólidas

y férreas alianzas con que se enfrentaban los embates liberales que atentaban contra el propósito de las clases dirigentes locales, reiterado desde 1830, de restablecer la estructura política y económica propia del Corregimiento, y contra los intereses de la aristocrática clase propietaria de la tierra (por la emisión de las leyes de Reforma), que no tuvieron otra salida: relatar las gestas heroicas de los pobladores de esta entidad, como leyendas y hechos sobrenaturales, inexplicables e incomprensibles a la racionalidad humana. (Valentín F. Frias: 1910) Así, se privilegiaron los géneros literarios (la poesía, la crónica, el cuento y la leyenda) y se relegó la ciencia histórica.

Los queretanos querían olvidar y deseaban que se borrarán de la memoria nacional dos sucesos históricos de vital importancia: las grandes dificultades sostenidas en 1824 cuando se le negaba a Querétaro el derecho a constituirse en un estado libre y soberano del México independiente bajo la acusación de "no haber luchado por la libertad de México"; y, años más tarde, en 1867, cuando de nueva cuenta "el honor de la entidad" se había puesto en entredicho por haber defendido, hasta el último momento, al emperador Fernando Maximiliano de Habsburgo. En los relatos históricos de la época, publicados por el diario oficial "La sombra de Arteaga", la única publicación continua del estado durante el porfiriato y que era un medio eficaz de concientización política y social, se procuraba pasar por alto los momentos "tan difíciles" que había vivido la ciudad de Querétaro en los días "memorables" del sitio republicano. En el propósito de "recuperar el buen nombre de la ciudad" (Sombra de Arteaga: 1879) la

historiografía queretana de la época ocultó una condición política que es característica del estado aún hoy en día: la intensa participación de los queretanos en las etapas de desenlace de los conflictos, habla de una sociedad siempre dispuesta a la negociación y al arreglo privado para recomponer el curso de la historia; negociaciones que llevan el propósito de sepultar los errores del pasado. Cualidades, la negociación política y el arreglo privado, que los identifican plenamente con las grandes tendencias nacionales. ¿Acaso México no se distingue precisamente por la negociación y el arreglo privado de los asuntos de interés público?

El rechazo de los queretanos a escribir la historia de los procesos regionales, rechazo formado en virtud de las vicisitudes políticas, militares y sociales propias del siglo XIX, aún se resienten en la actualidad. La historiografía queretana contemporánea tiende a relatar los grandes logros conquistados: el esplendor de las postrimerías del Siglo XVIII, el auge agrícola durante el gobierno del Ing. Francisco González de Cosío en el porfiriato, el auge industrial logrado a partir de 1960 con Manuel González de Cosío. Sin embargo, se extiende un manto sobre los acontecimientos que no desean, como en el pasado, que sean conocidos. Por ejemplo, la revuelta agrarista encabezada por Saturnino Osornio en 1920, la "Osorníada queretana" para uno de los escritores queretanos (Fernando Díaz Ramírez: 1979), era prácticamente desconocida en sus principales componentes sociales y en sus vínculos con el Querétaro industrial que emerge a partir de 1940. Desconocimiento que posiblemente radicaba en el

propósito de "ocultar" la participación activa que tuvieron en el suceso algunas personas de reconocido prestigio social en el estado como eran el general Joaquín de la Peña, después importante industrial sanjuanense, o los gobernadores Abraham Araujo (1927-1929) y Ramón Rodríguez Familiar (1935-1939).

Precisamente, la historia sobre Saturnino Osornio que había sido peón y mediero de la hacienda de Cazadero, ubicada en el distrito de San Juan del Río, y de la hacienda de Xajay, ubicada en el estado de Hidalgo, además de propietario individual de los terrenos otorgados bajo las leyes de desamortización de los bienes de manos muertas, que circulaba como "leyenda negra" en el estado de Querétaro, me despertó el interés para indagar las especificades sociales y políticas de este período de la historia de Querétaro.

El desarrollo de la investigación y la búsqueda de los antecedentes sociales, políticos y económicos que permitieron y auspiciaron la pugna regional entre agraristas y cristeros, pugna que en el período 1920-1940 se presentaba como un conflicto entre los rancheros y los hacendados por la tierra, me llevó a remontarme al pasado. Inmersa en la paz porfiriana de Querétaro y sin encontrar conflictos evidentes entre los rancheros, ya para entonces abundantes, y los hacendados, sólidamente establecidos en la entidad durante este período (1880-1910) y también sin que se reflejaran en el estado los "grandes problemas nacionales" relatados por Andrés Molina Enriquez en 1910, decidí retroceder a la etapa que los escritores queretanos del XIX memoraban: al Corregimiento novohispano.

La decisión tomada de estudiar el período 1780-1920, y dejar para más adelante la investigación sobre la "Osornuada queretana" fue positiva. Las particularidades del curso de la propiedad agraria y las posiciones políticas de los queretanos de 1780 a 1920 no solamente le otorgan un papel singular al estado en la historia del país, también permiten apreciar la fuerza social y política de los grupos sociales con arraigo. En el caso del siglo XIX, hacendados e indígenas. Debo aclarar, sin embargo, que al inicio de la investigación, y por la fuerte presencia de los rancheros en 1920, presencia que motivó esta indagación histórica, tenía como hipótesis que las grandes pugnas entre rancheros y hacendados se habían iniciado durante el siglo XIX. El curso de la investigación demostró que no era así.

Bajo estas condiciones fue preciso reestructurar los objetivos del estudio y concentrarlos en encontrar las regularidades presentes entre los dos procesos que articulan la historia de la propiedad agraria en el estado de Querétaro: los momentos de la expansión territorial de la hacienda y las fases de fraccionamiento o división de la propiedad en pequeñas parcelas, ranchos y haciendas de menor extensión. Por otra parte, era necesario realizar el seguimiento histórico de los dos procesos, a fin de entender los cambios registrados en la conformación social de los propietarios rurales y también rescatar las condiciones políticas y sociales que auspiciaron la expansión de una determinada cultura productiva en el sector agrícola. Cultura que en medio de la fragmentación de la clase propietaria de tierra en Querétaro en hacendados, rancheros y propietarios individuales, se

sostendría imperturbable desde fines del siglo XVIII hasta 1920.

Si bien es posible delimitar los diversos factores que inciden en la conformación de los propietarios rurales durante el siglo XIX -variables económicas como son la expansión de los mercados regionales y la introducción de cultivos de fácil acceso al mercado nacional e internacional; factores geográficos, climatológicos y la desigual distribución de los recursos naturales que dividían y siguen dividiendo a la entidad en tres regiones claramente delimitadas, la Sierra Gorda, San Juan del Río y Querétaro-, también se deben incluir las situaciones políticas que se generaban ante la confabulación de intereses creados. Condiciones estrechamente vinculadas con los decesos naturales de la generación que, en el período inmediato anterior, había tomado en sus manos la definición del modelo de desarrollo.

Para cubrir los objetivos propuestos, el estudio fue estructurado en cinco capítulos de acuerdo a los cortes sincrónicos y a los grandes componentes sociales impuestos por el proceso histórico: 1780-1830 en que acontece el esplendor y la decadencia de la hacienda queretana; 1830-1860, etapa del fraccionamiento de la gran propiedad; 1860-1870, el período de la aplicación de las leyes de reforma liberales y de la legislación del Imperio de Maximiliano que propiciaron la conformación de una sociedad de propietarios individuales; 1870-1880 la década que registra el proceso de reconcentración del agua y la tierra y, finalmente, 1880-1920 que comprende el período de la larga estabilidad política y social del estado.

La obra en su conjunto demuestra que la paz porfiriana en

Querétaro (1880-1920) es producto de un largo proceso histórico que arranca con la muerte de los viejos propietarios de fines del siglo XVIII, con la ley de 1823 que había dictado la disolución de los mayorazgos y finalmente con la aplicación de las leyes de reforma en Querétaro en 1860. Procesos entrecruzados que generaron el cambio de manos de la propiedad, y de los patrones sociales tanto de los hacendados como de los trabajadores rurales. Es preciso señalar, sin embargo, que el cambio de manos de la propiedad tuvo dos periodos de singular importancia: el que va de 1830 a 1860 y el que comprende de 1900 a 1910. Etapas ambas de relevo generacional. En 1830 fenece la clase aristocrática que había levantado su fortuna a fines del siglo XVIII y en 1900 lo hace la generación que, cansada de los fracasos ideológicos de los conservadores y los liberales, había optado por el modelo político y económico que había sido exitoso a fines del siglo XVIII.

No obstante, las condiciones políticas y sociales que propiciaron la proliferación de los ranchos en uno y otro periodo fueron radicalmente diferentes. El intensivo traslado de la propiedad realizado entre 1830 y 1860, se dió fundamentalmente por la debilidad económica de las testamentarias queretanas para solventar las hipotecas particulares y los capitales religiosos y de "sangre" que gravaban las fincas desde fines del XVIII. Etapa que históricamente se encuentra enmarcada entre la crisis generada por la lucha independentista y por las profundas transformaciones culturales que suscitaron las leyes de reforma aun sin aplicarse en Querétaro en 1860. La década siguiente 1860-1870, estuvo determinada por las transacciones obligadas por la aplicación de

las leyes de la Reforma liberal y posteriormente por la legislación emitida durante el Imperio de Maximiliano sobre los bienes de manos muertas. Legislación que también obligaba el reconocimiento de los capitales piadosos y de sangre que gravaban las propiedades rústicas y urbanas a favor de la Iglesia. Leyes particularmente significativas porque propiciaron la formación de un nuevo tipo de propietario: el hombre de negocios que especulaba con los bienes raíces rurales y urbanos que las leyes de reforma habían liberado.

El segundo período (1900 a 1910) se caracteriza porque la expansión de los ranchos y las haciendas de menor extensión responde a un proceso netamente mercantil: se realiza bajo las leyes de la oferta y la demanda. También por la costumbre, nunca erradicada del suelo queretano, de gravar las propiedades con fuertes hipotecas.

Así, los efectos generados por las políticas liberales dictadas a lo largo del Siglo XIX, cubren un amplio período: de 1833 a 1870. En esos 37 años, no solamente se fragmentó o diversificó el grupo de los hacendados, sino que también se creó un nuevo tipo de propietario: los rancheros.

Para los inicios del porfiriato, algunos de estos rancheros se habían convertido en importantes hacendados, como fue el caso de Felipe Soto dueño de la hacienda de Obrajuelo. En algunas ocasiones, y debido a que los miembros de una misma familia eran arrendadores de las fracciones de la hacienda, como sucedió con los Olvera en Cadereyta, a la vuelta de escasos 5 años la tierra adjudicada a diversas personas empezó a ser adquirida por el

miembro de la familia que era políticamente más fuerte, convirtiéndose así en dueños de las haciendas fraccionadas por las leyes de Reforma. Es preciso señalar que este fraccionamiento variaba en tamaño. De hecho, el tamaño de las propiedades asignadas dependía de la cantidad de tierra que estaba siendo arrendada en el momento de la aplicación de las leyes y de los vínculos que existían entre los arrendadores y los jefes políticos de los distritos. Al depender la adjudicación de la tierra del tamaño de la porción arrendada a la hacienda hubo adjudicaciones que tenían el tamaño de los ranchos de las haciendas, 200 has y otras adjudicaciones que no llegaban a las 25 has. Los adjudicatarios de las porciones de tierra más grandes, en general tendieron a comprar las parcelas individuales de los rancheros vecinos de menos recursos.

Posteriormente, con la circular del 9 de diciembre de 1856, las tierras comunales empezaron a ser desamortizadas y entregadas a propietarios individuales que podían adquirirlas mientras su valor no fuera superior a \$200.00.(1) Por otra parte, fue muy extendida, por las facultades extraordinarias de que gozaban los gobernadores, la costumbre de apropiarse de las haciendas, incluso cuando estas estuvieran en regla. En general, las formas que asumieron la desamortización y la nacionalización de los bienes de la Iglesia y la liberación de las propiedades comunales y de los municipios, contribuyeron a empobrecer el campo queretano. Si bien las estadísticas disponibles, como la elaborada por del Raso

(2) Revisar el libro de Andrés Molina Enriquez, Los grandes problemas nacionales, ed. Era, 1978, pág. 128.

en 1848 o la de Septién en 1875, e incluso el relato de Guillermo Prieto de 1857, son altamente positivas, no podemos confiar totalmente en estos datos puesto que fueron calculados en etapas de recuperación política, bajo el dominio de los conservadores con excepción de 1875, y cuando efectivamente se hacían empeños notables por recuperar la bonanza agrícola característica de Querétaro.

Hasta 1870 el propósito de los hacendados de recuperar el esplendor de la agricultura no tuvo éxito. Ante la desolación y la miseria que acompañó el triunfo de la República, en 1867, los hacendados y rancheros sobrevivientes al período de la anarquía se empeñaron en obtener los niveles productivos alcanzados por la hacienda en el siglo XVIII. El propósito no era fácil de alcanzar porque los hacendados y los rancheros no conformaban un grupo social integrado. No sólo pertenecían a distintas clases sociales sino que, sobre todo, tenían distintas experiencias y diferentes concepciones sobre las formas de explotar la tierra: unos eran los que dirigían las labores de la hacienda en la forma tradicional desarrollada en las haciendas de los Valles durante el siglo XVIII, otros eran rentistas y algunos más eran los rancheros, después convertidos en hacendados, que no podían evitar trabajar sus propiedades en unidades parcelarias al viejo estilo de los hacendados; por último estaban los rancheros que se habían sostenido como tales a lo largo de estos años.

A la derrota de Maximiliano y al calor de la persecución ideológica que emprendieron los enardecidos republicanos en contra de los imperialistas, en Querétaro se tenía claro que la gran

pelea a dar debía orientarse a recuperar las bases económicas que habían hecho famoso a Querétero durante el siglo XVIII, la industria textil, la agricultura y la ganadería. En la primera se busca la excensión de impuestos para que la "casa Rubio", venida a menos después de la aventura de Maximiliano, recuperara el impulso que tenía a mediados del siglo XIX. En cuanto a la agricultura, se aspiraba recuperar la unidad de la gran propiedad y se pretendía conformar un grupo de hacendados sólidamente unidos en lo político y en la forma de producir.

Sin embargo, las políticas de los liberales hasta 1870 habían dividido de tal manera el territorio, sobre todo por la creación de nuevos poblados a costa de la hacienda, que la unidad productiva, la hacienda, había perdido parte del control que ejercía sobre el agua que irrigaba las propiedades. Por otra parte, al observar el fuerte impulso que se daba a la fragmentación individual de las tierras de los ayuntamientos y de los pueblos a partir de la circular de 1878, los hacendados consideraron que era el momento no solamente de detener las medidas que entorpecían su propósito de conservar sus bienes, sino también la ocasión propicia de recuperar todo lo perdido a lo largo del XIX. Se definió entonces, bajo la influencia de los hacendados, un doble programa: que la Constitución local estableciera la soberanía estatal para evitar los vaivenes políticos del centro y sus interferencias en la política local y, la más importante, imponer en la gobernatura del estado a un hombre de origen queretano perteneciente al grupo de los hacendados, de reconocido prestigio familiar. Es decir, a un

heredero de los viejos hacendados para que apoyara jurídica y políticamente el proceso de acaparamiento de la tierra y el agua que se iniciaría desde entonces como un proyecto para el "bien público".

El proyecto político fue logrado hasta 1880 cuando se nombró a un heredero de los hacendados de la Sierra, a Francisco González de Cosío, quien se mantuvo en la gubernatura de 1880 a 1883 y nuevamente de 1887 a 1911. La ampliación de los límites de la hacienda, sin embargo, se realizó en medio de una gran violencia antes que González de Cosío asumiera la gubernatura y en medio de los conflictos nacionales que surgieron en la década 1870 hasta el Plan de Tuxtepec de 1876.

Aparentemente, los hacendados queretanos no tenían otra salida política y económica que la tomada en 1867: proteger y fortalecer sus propiedades bajo el sistema que había dado resultado durante el Corregimiento novohispano en donde se había logrado articular una autoridad política central con la autonomía administrativa de las haciendas, según su giro y productividad.

En los avatares de la república en 1870, cuando las tendencias centrifugas regionales parecían de nueva cuenta desbaratar el país, como en 1824, los hacendados requerían de todos los apoyos políticos y jurídicos para constituirse en una clase propietaria fuerte que enfrentara las ambiciones de los mismos de su clase que, asentados en los estados vecinos, deseaban crecer apropiándose de los recursos de Querétaro.

La estrategia de mantener la autonomía política y económica regional articulada al centro eficaz en su momento, perdió la

fuerza que tenía en sus orígenes cuando fue llevada a sus últimas consecuencias a raíz de los conflictos políticos suscitados en 1870, cuando la entidad fue declarada en estado de sitio. A partir de entonces y con el claro empeño de fortalecerse económicamente, la voracidad de los hacendados no tuvo límites. La concentración del agua y la tierra realizada por la hacienda aniquiló la vida de los pueblos; fue causa directa de los largos litigios entablados entre los pueblos y las haciendas y entre los estados colindantes y motivo de resentimientos sociales profundos; dividió el territorio estatal bajo intereses particulares. El acaparamiento de las tierras por donde corrían los ríos y depósitos de agua, modificó la distribución política del territorio. Pueblos y municipios constreñían o ampliaban sus fronteras en función de los recursos acuíferos que disponían y la voracidad de los hacendados por apropiárselos.

Para 1880, el proceso de reacaparamiento de la tierra y el agua había terminado. La hacienda como unidad productiva en base a la gran propiedad se había restablecido. A su lado seguían estando los ranchos como entidades autónomas paradójicamente vitales para la vida de la hacienda. También se restablecieron las formas de producción agrícola vigentes a fines del siglo XVIII y se delimitó la especialización de las líneas de producción y de los intercambios comerciales en base a la división del estado en las tres microregiones que habían funcionado durante el siglo XVIII, la Sierra Gorda, los valles de San Juan del Río y Tequisquiapan y la ciudad de Querétaro. Sin embargo, a diferencia del siglo XVIII, y bajo la experiencia adquirida por los efectos

causados por las leyes territoriales y sobre los fundos indígenas de Maximiliano, los hacendados de fines del XIX cuidaron que el fortalecimiento del poder político central solamente se hiciera efectivo en articulación con los poderosos hacendados de las zonas autárquicas de la Sierra y San Juan del Río.

Desde 1880 a 1910 que empieza la Revolución, la hacienda queretana, basada en la gran propiedad y en el establecimiento de una delimitación geográfica que respetaba los límites e intereses de los hacendados más poderosos, mantuvo una paz inalterable. Con prácticas arraigadas como era mantener hipotecadas las tierras y con problemáticas nunca resueltas como era hacer productivo todo su terreno, la hacienda queretana impuso un modo de vida social que perduró hasta 1920 sin alteración alguna.

Esta larga estabilidad de la hacienda queretana que sobrevive a la revolución mexicana, tiene que ver con los sistemas de trabajo definidos a fines del siglo XVIII y el vínculo laboral que mantuvieron los rancheros con las haciendas. La articulación de intereses entre rancheros y hacendados y el restablecimiento de las formas de organización política y productiva de fines del XVIII, a la larga detuvieron el desarrollo de Querétaro. Se tomaron casi 40 años (de 1920 a 1950) para alcanzar los niveles de desarrollo que ya predominaban en el país.

Sin embargo, a fines del XIX, los comerciantes, los hacendados y los industriales textiles de nuevo habían logrado forjar grandes fortunas familiares como en el siglo XVIII pero a diferencia de sus antepasados que habían invertido fuertes cantidades en infraestructura para la producción, los hacendados

del porfiriato no invirtieron sus capitales en nueva tecnología, excepto en la irrigación, puesto que la articulación política lograda con los rancheros y con los trabajadores libres les permitía la producción agrícola extensiva a bajo costo. El rendimiento de la tierra, y el sistema de cultivo de los rancheros en sus propias parcelas y en las tierras de las haciendas, había mejorado el nivel de vida de los trabajadores rurales, aunque fuera a costa de la intensificación de sus jornadas de trabajo.

También, por el interés de los hacendados en fortalecer económica y políticamente a la ciudad de Querétaro, se habían abierto nuevas posibilidades de trabajo para la clase media, la cual también disfrutó de los beneficios del despegue económico del porfiriato queretano. El bienestar general de la población queretana a fines del XIX fue determinante para que la entidad se mantuviera al margen del movimiento revolucionario, hasta la caída del General Chicarro impuesto por Victoriano Huerta. Los propietarios rurales temieron entonces que los programas agrarios de las fuerzas zapatistas y villistas pudieran introducirse en sus dominios. Además, las diatribas internas de los profesionistas y administradores públicos de la ciudad no les garantizaba -a los hacendados- la firmeza de sus convicciones ideológicas. Bajo estas circunstancias, en 1915 aceptaron la imposición de un carrancista no queretano en la gubernatura local, el general Federico Montes. Entre todos los jefes de la revolución los queretanos se sentían más cercanos ideológicamente a Carranza, de quien sabían no estaba interesado en afectar a la gran propiedad.

El general Montes que se mantuvo en el poder de 1914 a 1917,

con excepción de los seis meses que estuvo Villa y el periodo del Dr. José Siurob -también carrancista- respetó a los hacendados queretanos en sus bienes y modos de vida. Tan es así que ninguna hacienda fue intervenida en Querétaro hasta 1919 cuando, en esas contradicciones queretanas determinadas por los poderes federales, fue intervenida la hacienda que Federico Montes tenía en Cadereyta.(2) Las afectaciones que se hicieron durante estos años fueron más bien simbólicas y se encaminaron a satisfacer añejas demandas de los pueblos de Querétaro, como era el Pueblito, San Ildefonso en Amealco y Santa Rosa de Jáuregui, en pleito abierto por la tierra que disputaban a los hacendados desde principios del siglo XIX.

Por otra parte, por la muerte de los hacendados durante el porfiriato, la hacienda empezó a fraccionarse sin violencia en ranchos y haciendas de menor tamaño que las famosas grandes propiedades. Este mismo fenómeno favoreció la ampliación del número de familias propietarias y contribuyó a la conformación de un grupo de "agricultores" directamente responsable de la productividad y producción de las tierras que poseían en propiedad privada. Aparentemente, tanto los rancheros como los pequeños hacendados se encontraban satisfechos y conformes con el orden social que permitía una gran movilidad social, siempre que se respetaran los parámetros -tamaño de la tierra y ubicación de la misma- puestos por el hacendado.

- (2) Federico Montes, había permanecido leal a Venustiano Carranza. En este sentido cuando la pugna Obregón-Carranza que originó la rebelión de "Agua Prieta" y el asesinato de Carranza en 1920, los bienes de Federico Montes en Querétaro fueron intervenidos.

Este proceso es simultáneo a la proliferación de los también propietarios de tierras por el repartimiento de las tierras comunales de los pueblos en propiedad individual, después de las circulares emitidas en 1889. Reparto que tendió a disolver los viejos conflictos de tierras en la región.

De esta manera, para 1910 tanto los hacendados como los rancheros y los propietarios individuales en Querétaro, no tenían un interés particular en modificar la estructura social que los había favorecido en los últimos 20 años. Después de un siglo de revueltas y asonadas, Querétaro estaba apacible.

Sin embargo, existen algunos elementos que sugieren que la estabilidad política de 1910 no descansaba en el temprano fraccionamiento del latifundio y en el reparto de las tierras comunales, sino en los sistemas de trabajo que mantuvo la hacienda desde mediados del Siglo XIX, fraccionada o no, y que obligaba a los nuevos propietarios en sus diversas acepciones (rancheros, hacendados o particulares -individuales-) y situación económica, a depender de la vida de la hacienda. Prácticamente ningún rancho o pequeño propietario, y mucho menos los propietarios individuales de parcelas, rompieron sus relaciones laborales con la hacienda. Los administradores dueños de fracciones, seguían siendo administradores de las haciendas. Los propietarios de los ranchos que rentaban fracciones de las haciendas para trabajarlas, lo seguían haciendo todavía en 1930. Los campesinos, propietarios de parcelas individuales, eran a la vez mayordomos o peones de "raya" y trabajadores a medias, al quinto o al rajar de los ranchos de la hacienda. Es decir, una vez consolidada la hacienda como sistema

productivo y social, tuvo un largo período de estabilidad y control político en la entidad.

Estrechamente vinculado con la estabilidad política de la hacienda y la distribución del poder político regional en tres regiones geográficas autárquicas, se formula otra de las hipótesis claves en el estudio. El sistema de control interno basado en la división del poder político impidió la acumulación de resentimientos políticos y económicos que fueron comunes en otras regiones del país. La autonomía política y económica que disfrutaban los hacendados que controlaban las tres microregiones en que se dividió el estado: el distrito de San Juan del Río, Querétaro y la Sierra Gorda no solamente les permitió amasar grandes fortunas sino que los mantuvo unidos políticamente. La fuerza interna así adquirida y sostenida hasta 1920 fue un factor clave en la estabilidad social queretana, incluso en medio de los vaivenes políticos y la guerra militar sostenida durante la Revolución mexicana.

Los cambios administrativos y políticos introducidos durante las últimas décadas del siglo XIX, ágiles y efectivos en su momento, pero siempre acordes con los intereses particulares de los hacendados, conformaron una distribución geográfica de carácter caciquil inadecuada para impulsar el desarrollo de Querétaro en el siglo XX. Las tres regiones claramente definidas por las clases propietarias, la Sierra Gorda, San Juan del Río y Querétaro, fueron los escenarios geográficos en donde se organizaron y movilizaron las huestes agraristas de los hombres fuertes de Querétaro de 1920 a 1940. Caciques y líderes de

extracción ranchera. La violencia del periodo (1920-1940) hasta ahora no suficientemente estudiada en esta región del país, descansa precisamente en una inalterable desarticulación regional que sobrevive a la revolución mexicana y que ya estaba configurada en los aciagos días de la revolución por la independencia.

La escasa participación política de los rancheros después de 1880, cuando ya aparecen consolidados al lado de la hacienda, no solamente expresa la dependencia económica que tenían de la hacienda sino también que los grupos sociales para conformarse como una fuerza social requieren de periodos largos de maduración. Si el siglo XIX fue el mundo de los pueblos indios y de las haciendas, el siglo XX se amarra definitivamente al mundo de los rancheros. De esos rancheros que empiezan a formarse en 1830 y que se incrementan en proporciones insospechadas durante la década 1900-1910. Para 1920, casi un siglo más tarde, este grupo de rancheros estaba listo para dar la gran batalla a favor de sus intereses. Y así lo hicieron en medio de una gran violencia. Sin embargo, no lograron destruir la hacienda queretana. La hacienda queretana, "se rindió a su destino", como decían en el siglo XIX, no por los embates de la revuelta agrarista o por las leyes de la reforma agraria, sino por el proceso industrial que ya avanzado el siglo XX impuso nuevas relaciones sociales y nuevos sistemas de vida.

CAPITULO I.

ESPLENDOR Y DECADENCIA DE LA HACIENDA QUERETANA

Las crisis agrícolas y las hambrunas que en ciclos sucesivos de los "años buenos" se presentaban en Nueva España durante el siglo XVIII (1), por lo general iban precedidas y acompañadas de las epidemias y las calamidades naturales que asolaban y diezaban a la población. La muerte y la miseria que estos factores combinados dejaban a su paso eran de tal magnitud que, en una primera vista, se manifiestan como el signo característico del Siglo XVIII novohispano.

En verdad, entre las epidemias de viruela en 1710, en 1761 y nuevamente en 1779, el devastador matzahuatl entre 1736-1737 (2), y los años de hambruna como los de 1740 y el recordado 1785 con horror, tristeza y miedo, según relata Orozco y Berra (3), ahora nos parece imposible que simultáneamente se pueda hablar de prosperidad y riqueza cuando lo que predominaba era la mortandad, el hambre, la estrechez de los mercados y la pobreza.

Sin embargo, como consecuencia de las conocidas reformas borbónicas introducidas en Nueva España por Carlos III, en las últimas décadas del Siglo XVIII se registraron transformaciones

- (1) Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas 1708-1810, México, El Colegio de México, 1969.
- (2) Revisar la Obra de Donald B. Cooper, Las epidemias en la ciudad de México 1761-1813, IMSS, México 1980. También los dos tomos de Ensayos sobre la Historia de las epidemias en México, Compilado por Enrique Florescano y Elsa Malvido, IMSS, México, 1982.
- (3) M. Orozco y Berra, Historia de la dominación española en México, citado por A. René Barbosa Ramírez en la estructura económica de la Nueva España 1519-1810, México, 3a. edición, Siglo XXI, Ed., 1975..

radicales en la organización social y productiva. Bajo la protección de la monarquía ilustrada y con el aval de las grandes fortunas familiares acumuladas, se iniciaron nuevos cultivos, se construyeron obras de riego, se roturaron caminos y en 1789 se estableció el comercio libre. (4)

El auge y esplendor de la economía en todos sus giros, antecedido por el fomento a las ciencias y a las artes, propios del Siglo XVIII, fue acompañado de un notable crecimiento demográfico y de una nueva distribución política del territorio en 1779: las intendencias. Antecedente administrativo de organización provincial que, junto con la apertura del comercio, favoreció y estimuló el proceso de concentración de la tenencia de la tierra registrada en estos años y la consolidación del sistema de la hacienda como unidad productiva dominante.

En Querétaro, el auge de fines del Siglo XVIII fue espectacular. El crecimiento poblacional fue tan notable como lo la expansión económica de los obrajes y de la fábrica de tabacos establecida en la ciudad. Las haciendas agrícolas y ganaderas diseminadas en la zona de los valles de San Juan del Río y Querétaro, alcanzaron una alta productividad, sin duda estimulada por la privilegiada ubicación geográfica del territorio queretano y el resurgimiento económico de la minería. El comercio, la agricultura y los obrajes se beneficiaron de los continuos flujos poblacionales que transitaban por Querétaro. Territorio que además de ser garganta de "tierradentro" y frontera chichimeca,

(4) Ver la Obra de Eduardo Arcila Fariás, Reformas Económicas del Siglo XVIII en Nueva España, Industria, Minería y Real Hacienda, Tomo II, Sepsetentas, México 1974.

era paso obligado entre la capital del virreinato y el mineral zacatecano. Estas circunstancias convirtieron a la ciudad de Querétaro en una de las jurisdicciones novohispanas más ricas y más pobladas.

El esplendor alcanzado por la agricultura a fines del XVIII, con todo y el sistema de prohibiciones que imponía la Corona española a las colonias, fue registrado con gran admiración por Lucas Alamán en su Historia de México:

la agricultura mexicana cambiaría hoy con gusto la estéril libertad de cultivar viñas y olivos, por una exportación de 500 000 arrobas de azúcar y 20 000 tercios de harinas.(5)

En particular, Alamán registró el auge de las fincas productoras de trigo de Querétaro y Guanajuato, que realizaban sus ventas en la ciudad de México, "proporcionando todo este activo tráfico animación y vida al comercio interior".

La caracterización política y social del siglo XVIII novohispano, con sus lazaretos, sus hospitales, su bruma espiritualista, la miseria y la hambruna de la "plebe" y la siempre presente necesidad de los "grandes hombres" de realizar sus arreglos de conciencia a través de la caridad cristiana y la donación de capitales para obras pías, guardaba en Querétaro una singularidad: las condiciones sociales, políticas geográficas y económicas, determinaron una particular articulación de las clases

(5) Lucas Alaman, Historia de México desde los Primeros Movimientos que prepararon su Independencia en el año 1808 hasta la epoca presente, Tomo I, Instituto Cultural Helenico y F.C.E., México, 1985, Pág. 111.

dominantes y el surgimiento de nuevas formas de organización del trabajo que sustentaron el esplendor alcanzado en las postrimerías del siglo XVIII. Se consolidó en esos años una clase social aristocrática que si bien tenía tendencias señoriales, también aplicaba métodos de trabajo que transformaron la hacienda en un sistema productivo económicamente rentable.

La hacienda queretana de fines del siglo XVIII era, más que un símbolo del poder y la nobleza de sus propietarios, una actividad económica con fuertes intercambios comerciales. Fue así como los señores, los hacendados y los dueños de los obrajes, a su vez prósperos comerciantes, concentraron sus esfuerzos en expandir y consolidar el sistema de la hacienda basados en la gran extensión territorial y en las innovaciones tecnológicas, racionalmente introducidas de acuerdo a la calidad del suelo.

La situación de Querétaro con una clase aristocrática y pragmática interesada en hacer rentables sus negocios urbanos y rurales, ya fuera bajo el empleo intensivo y explotador de la abundante fuerza de trabajo existente en la ciudad, o bajo las nuevas formas de contratación de trabajadores libres con asignación de un salario, que favorecía el abundante flujo poblacional en tránsito entre la capital del virreinato, Zacatecas y sus minerales y las amplias extensiones territoriales de tierradentro, fueron condiciones que pese a las epidemias, las hambrunas y los malos temporales, avalaron la prosperidad registrada a fines del XVIII.

Contra todo pronóstico a partir de 1810 se inicia la decadencia económica y la merma de la población en más de la mitad

de la que existía en 1790, tanto por las convulsiones políticas propias de la guerra de independencia como por las pestes que hubo entre 1811 y 1821. El deterioro de la economía queretana de 1810 a 1830 fue intensivo e impresionante. Si no se contara con la evidencia histórica, el cambio radical que medió entre el final del XVIII y el principio del XIX podría hacernos pensar que uno de los dos acontecimientos ha sido desvirtuado con el correr del tiempo. No obstante, ambos momentos tuvieron lugar en escasos 40 años y fueron vividos por una misma generación.

1. Las tendencias señoriales de los hacendados queretanos

El dominio jurisdiccional sobre las mercedes de tierra y de la servidumbre indígena ganado a la Corona española como premios por el servicio de la conquista (6) en Querétaro era un derecho todavía exigido durante el Siglo XVIII. Las concesiones territoriales y nobiliarias obtenidas por José de Escandón para sí y para sus huestes en la segunda mitad del Siglo XVIII, y las enormes fortunas particulares creadas, por la tardía pacificación

(6) "...Las Instituciones Indianas Fluctuaron en el periodo posterior a la conquista, entre el interes de los particulares amparado por la obligación del estado de premiarlos en virtud del sistema privado autorizado para la ocupación de América, y la tendencia de la Corona favorable a sus miras regalistas y fiscales y a la protección de los indios...Lo anterior explica por qué los premios concedidos por el estado a los conquistadores de América fueron menores a sus pretensiones, y que la organización de las colonias, aunque influido por tendencias señoriales, no reprodujera las formas nobiliarias del medievo, incompatibles con la Constitución de la Monarquía Española del Siglo XVI". Silvio Zavala, *Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de América*, 2da. Ed., Revisada y Aumentada, Ed. Porrúa, México, 1971, Pág. 202.

militar y religiosa de la Sierra Gorda, arraigaron en el suelo queretano los vicios propios del sistema legado por el medievo: las ambiciones señoriales de los terratenientes y la desarticulación política y geográfica del territorio que en 1794 se había constituido en Corregimiento. Remanentes políticos que aún cuando se oponían a las avanzadas tendencias centrales y regalistas del Estado moderno español del siglo XVI (7), habían fincado gran parte del esplendor productivo de Querétaro de fines del siglo XVIII.

José de Escandón "Coronel del regimiento de la ciudad de Querétaro y Teniente de Capitán General por S.M. de la Sierra Gorda, sus misiones, presidios y fronteras", en el informe que rinde en 1743 (8), sin ningún ambage sostiene que "...la conservación de las misiones ... consiste en la guarnición de soldados que asisten en ella y la visitan ayudando a los misioneros...". Por tanto, al viejo estilo de los conquistadores medievales y de los hijosdalgo que hicieron la conquista de América (9), solicita que se conserven y aumenten los soldados de

(7) Idem, Pág. 201

(8) "Informe del Coronel José De Escandon Acerca de su visita a la Sierra Gorda y Proyecto de reorganización de sus misiones (Querétaro 23 de febrero de 1743), en Lino Gómez Canedo, Sierra Gorda, un típico enclave misional en el Centro de México (Siglos XVII y XVIII), Documentos de Querétaro, Querétaro 1988, Págs. 175-200.

(9) Bernal Diaz del Castillo, al Relatar los "Meritos que tenemos los verdaderos conquistadores..." señala que, "...Eramos todos los demas hijosdalgo...de mas de nuestras Antiguas Noblezas con heróicos hechos y grandes hazañas que en las guerras hicimos...sirviendo a Nuestro Rey y Señor, descubriendo estas tierras...ni tener otro socorro alguno , salvo el de nuestro Señor Jesucristo....y si miramos las Escrituras Antiguas que de ello nos hablan...en los tiempos pasados fueron ensalzados y puestos en grande estado muchos caballeros, asi en España como en otras partes...también he notado que algunos de

la Sierra, "y más cuando sirven a S.M. sin sueldo sino a su costa, contentándose con la concesión de algunas gracias y privilegios, a que parece les hace acreedores su lealtad y puntualidad en el Real Servicio".(10)

La petición de Escandón no escondía el propósito de fundamentar la creación del territorio de la Sierra Gorda como independiente de todo poder que no fuera el del Señor Teniente de Capitán General, quien respondería ante el poder central tanto por la lealtad y sumisión de los soldados como por el control, "...de los excesos de los indios". Pretensión que no se encuentra distante de las aspiraciones sostenidas durante el siglo XVI (11).

aquellos caballeros...no iban a tales guerras, ni entraban en las batallas sin que primero les pagasen sueldo y salarios, y no embargante que se les pagaban, les dieron villas y castillos y grandes tierras y perpetuos privilegios con franqueza, los cuales tienen sus descendientes...he traído esto aquí a la memoria para que se vean nuestros muchos y buenos y notables servicios que hicimos al rey nuestro señor y a toda la cristiandad, y se pongan en una balanza y medida...y hallaran que somos dignos y merecedores de ser puestos y remunerados como los caballeros por mi atras dichos...". Bernal Díaz Del Castillo, Historia de la conquista de Nueva España, ed. Porrúa, S.A. Col. Sepancuantos, México 1960, Pág. 577. subrayado mio.

(10) Jose de Escandon, op. cit. Pág. 194

(11) Bernal Díaz del Castillo relata que, "...fueron ciertos caballeros con el oro y por procuradores del Perú a suplicar a su majestad que fuese servido en hacernos mercedes para que mandare hacer el repartimiento perpetuo, y según pareció otras veces antes de aquella se lo habían suplicado por parte de la nueva españa cuando fue Un Gonzálo López y un Alonso Villanueva...fueron con otros caballeros por procuradores de México...se platicó que siendo perpetuos (los indios) serían muy mejor tratados e industriados en nuestra santa fe...que cesarían pleitos y contiendas sobre indios, y no habría menester visitadores en los pueblos, y habría paz y concordia entre los soldados y en saber que ya no tienen poder los presidentes y gobernadores..." Bernal Díaz del Castillo, op. cit. Pág. 588

Dos eran los privilegios que pedia Escandón en 1743: uno que los militares de la Sierra "...quedaran inhibidos de todos los alcaldes mayores y sus tenientes... quedando sujetos en todas sus causas y negocios, así civiles como criminales, a el Teniente de Capitán General de los que por su gravedad lo necesiten...". El otro privilegio era que se asignara a los soldados la "merced de las tierras realengas de la Sierra" (12). El poder de Escandón, Conde de Sierra Gorda, devenido de merced real, se concretaba en el control de las tierras y en el dominio -usufructo- de la fuerza de trabajo indígena concedido a sus subalternos, quienes lograron bajo su protección fortunas considerables.

Los capitanes y soldados de mayor confianza y lealtad al servicio de Escandón obtuvieron grandes beneficios del dominio que se les dió sobre la población indígena y las tierras adjudicadas como merced real. Por ejemplo, para José Díaz Maldonado, quien encabezaba 50 soldados, Escandón recomendaba se le encargara

el cuidado y la vigilancia de la misión de Soriano con total exclusión (por ahora) de la justicia ordinaria...y por el trabajo que en ello ha de tener, y que le sirva de estímulo, será conveniente darle tierras para que siembre seis fanegas de maíz, de año y vez, y las necesarias para pastos de los ganados que demanda esta corta labor. (13).

En Querétaro nadie desconocía que las fortunas de Gerónimo de Labra, Cayetano de la Barrera y del Capitán Gaspar Fernández de la Rama, poderosos hacendados de la Sierra, se habían formado con mercedes y concesiones obtenidas por la pacificación militar de la región. Los bienes del Capitán de caballos corazas, Gaspar

(12) "Informe del Coronel José de Escandón Op. Cit., Pág. 194-195

(13) Idem. Pág. 178.

Fernández de la Rama, relatados en el informe rendido por José de Escandón en 1743, eran más que cuantiosos. Sin embargo, es evidente que su fuerza económica, basada en la propiedad de un vasto territorio que comprendía haciendas, sitios de ganado menor y varios sitios de tierra, descansaba, sobre todo, en el dominio que tenía sobre los indígenas. En su hacienda de Conca, contaba, dice Escandón

con 46 familias de gente de razón (suyos), en que se incluyen algunos esclavos, con número de 215 personas..." a estos junto a los que vivían en colindancia con la hacienda..."los tenía instruidos en la doctrina cristiana....(14).

Es similar el caso de la hacienda de minas de Diego Navarrijo y María Valdés, que tenían encomendado el "adelanto espiritual" de los indígenas que laboraban en la hacienda.

Estas condiciones permitieron que en la Sierra Gorda queretana ubicada en el territorio de los actuales municipios de "...Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Jalpan, Pinal de Amoles, Peñamiller y San Joaquín, más un tercio de Cadereyta y la mitad de Tolinán" (15), fuera usual la práctica de la esclavitud y la de encerrar a los indígenas, hacerlos prisioneros y exigir fuertes sumas o dones por su rescate (16). Circunstancias que no solamente permitieron la formación de grandes fortunas familiares

(14) Idem. Pág. 190-192.

(15) Jaime Nieto Ramírez, Los habitantes de la Sierra Gorda UAQ, Temas de Investigación, No. 4, Querétaro, Qro., 1984, Pág. 35.

(16) Leticia Reina, Las rebeliones campesinas de Sierra Gorda (1847-1850), Mimeo, Pág. 2

sino que también mantuvieron en constante conflicto social a la zona a lo largo de todo el siglo XIX y hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX.

Los conflictos generados en la Sierra fueron perdiendo importancia en el medio social queretano de fines del Siglo XIX porque los hacendados de la región lograron conservar sus propiedades y su poderío en medio de las luchas constantes y la diversidad ideológica de los movimientos. Conflagraciones armadas que generalmente enarbolaban la defensa de la tierra de las comunidades indígenas. La sobrevivencia de los terratenientes de la Sierra después de las luchas por la independencia, cuando en la zona de los valles prevalecía el abandono de las fincas rurales, ponía en evidencia que sus sistemas de trabajo, sus modos de apropiación de la tierra, sus formas de hacer fortuna y las relaciones culturales que establecían con "las gentes suyas" eran las adecuadas para impulsar la expansión de la agricultura y la riqueza de los propietarios de bienes rurales. Se enaltecíó entonces la dispersión política y geográfica que propiciaban y estimulaban las tendencias señoriales que sostenían las grandes figuras de la Sierra.

Sin embargo, no eran el de Escandón y el de los demás propietarios de la Sierra los únicos casos en que podían apoyarse los queretanos para defender la organización social novohispana. No menos importantes habían sido los logros de Juan Antonio Urrutia y Arana, Caballero del orden de Alcántara y Marques de la villa del villar de la Aguila, gestor del acueducto de Querétaro

(17), y también los del reconocido protector de Querétaro Juan Caballero y Osio, cuyo testamento, dado el 2 de septiembre de 1688, es una muestra de la generosidad de estos prohombres y de la fortuna por ellos acumulada. (18) Espectacular fue también el testamento de María Josefa Vergara Hernández, dado el 22 de diciembre de 1808, dueña, entre otros bienes, de la hacienda de Nuestra Señora de la Buena Esperanza, quien dejó por albacea testamentaria al Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Querétaro. (19)

También se admiraban las grandes extensiones de algunas propiedades y la riqueza en ellas concentrada que había dado lugar a ricos mayorazgos (20). Fincas eternamente amarradas por sus dueños con fundaciones piadosas, obras pías, dotes y capellanías laicas o de sangre y religiosas, como medio no solamente de mantener indivisa la propiedad sino también de perpetuar el buen nombre del fundador y el linaje de la familia.

El caso de la testamentaria de Pedro Guevara y de su hijo Francisco a fines del Siglo XVIII propietarios del Rancho del Cerrito Colorado, también llamado Hacienda del Cerrito Colorado

-
- (17) Revisar la obra de Manuel Septién y Septién, *Acueducto y fuentes de Querétaro*, Documentos de Querétaro, Querétaro 1988.
 - (18) Gabriel Rincón Frías, "Testamento de don Juan Caballero y Osio", *Revista Investigación*, octubre-diciembre de 1985, UAQ, Pág. 6 a 11.
 - (19) Testamento María Josefa Vergara Hernández, ed. Gobierno del estado de Querétaro, Querétaro 1987.
 - (20) Por ejemplo el mayorazgo de Don Ignacio Leonel Cervantes que entre otras fincas comprendía la de Huerta Grande, y la famosa hacienda de la Llave de la jurisdicción de San Juan del Río. Revisar de Rafael Ayala Echavarrí, *San Juan del Río Geografía e Historia*, 2a. ed. México, 1981.

Alias Buenrostro, anexa de la Hacienda de Carrillo, es muy claro sobre los propósitos que perseguían los hacendados fundadores de capellanías, dotes y obras pías.

En 1782, Francisco Guevara hijo de Pedro Guevara y albacea testamentaria de los bienes de su padre estableció una renta de \$4 000.00 de oro común que "impuso, situó y cargó" a censo redimible, "declarando como declaro estar libre de otro gravamen según consta del testimonio citado de hipoteca...y mientras no se le quitare esta carga no se ha de poder vender, trocar, cambiar ni enagenar (sic) sin ella ni se podrá partir ni dividir aunque sea entre herederos" (21). Francisco Guevara no sólo cuidó que el patrimonio familiar no se dividiera privilegiando en el testamento "al de línea varón", sino que dejó claramente explicitado que se debería de procurar el cuidado y el incremento de los bienes que resguardaba la capellanía. Textualmente dice en el testamento:

tengan cuidado como yo que el que me suceda en el patronato que la finca sobre el que está el principal de esta capellanía esté reparada de todo lo necesario de manera que vaya en aumento y no venga a disminuir y no haciéndolo pueda apremiarlo a ello el Sr. Juez eclesiástico de este partido o visitador de esta Diócesis o nombre persona que lo ejecute a nuestras expensas y pido y suplico al Sr. Arzobispo Diocesano, Sr. Juez de testamentos, capellanías que son y fueren de este Arzobispado se sirvan administrarla erigiéndolas en bienes espirituales y de su fuero y hagan y tengan por tales patronos a mí y a la venerada Congregación de Santa María de Guadalupe y por capellanes a los nombrados.." (Los herederos de línea varón).(22)

La exposición testamentaria no deja lugar a dudas de que se

(21) AGN Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 18. Subrayado mio.

(22) Idem.

había cuidado el patrimonio familiar y que la herencia recibida se había incrementado mediante el trabajo. La fortuna personal de Francisco Guevara en 1782 era más que suficiente para responder por el capital que gravaba. El testamento también pone en evidencia las fuertes inversiones de capital realizadas en infraestructura de riego y en las mejoras de "la fábrica" de la Hacienda:

heredé (como único heredero instituido en el testamento de Pedro Guevara) de mi padre difunto una tienda de mercancia, las Haciendas y una casa, y que en quinto del caudal que actualmente gozo, cabe sobradamente el capital de \$4 000.00 con que intento fundar la capellanía...En la Hacienda del Cerrito de Buenavista hay un sitio de ganado menor que evaluaron en \$4 000.00. Reconocieron sus desmontes y tierras en que se pueden sembrar 18 fanegas de maíz del año y ver...por sus nopaleras, quesquites y grangeno...apreciaron \$1 224.00 pesos...de 34 fanegas una caja de agua en la misma Hacienda cuyo bordo de céspedes tiene 1327 1/2 varas le dieron el valor de \$331.00 y 7 reales. A otro bordo de cal y canto de 442 1/2 varas con el alto de 5 y grueso de 3/4 cuartos sus pilares, cortinas, compuertas, lo apreciaron en \$1 795.00 un real expresando que con esta agua pueden sembrar 15 cargas de trigo, que para regarse necesitan 10 días con sus noches, y por ser agua pluvial y no perenne le dan el aprecio de \$500.00 por día y así importa \$5 000.00. La fábrica material con dos trojes de a 25 varas de largo cada una, una capilla toda de cal y canto la valuaron en \$800.00. Una noria toda adornada en \$200.00. 4 arcos que están haciendo de cal y canto para pasar de la Hacienda de Carrillo a la del Cerrito la agua, no se apreciaron por estar actualmente con solo la cimbria y si la caja de agua que está en la Hacienda de Carrillo que es la que se ha de conducir por dichos arcos para la del Cerrito cuyo bordo de céspedes tiene 2035 1/2 varas, su compuerta de cal y canto de 5 de alto otras tantas de grueso, 8 1/2 varas de cortina y su maciso enlunado regularon en \$3 000.00. Como era nueva de cal y canto cuyo círculo es de 72 varas 2 de altura con 16 pilares...y la caja de adobe reparada con cal y canto y enladrillados algunos aparentes, todo lo pusieron en \$3 000.00 de manera que todo suma \$19 354.00...de que rebajados los \$7 000.00 que costó la Hacienda del Cerrito Colorado o de Buenrostro, parecen resultar \$12 351.00 pesos el valor de las mejoras...del quinto de mis bienes (se incluía la Hacienda de Carrillo)

podía sacar abundantemente el capital de que va hecha relación para hacer la fundación expresada....yo tengo más de \$50 000.00 (deduzco los gravámenes que sufren mis haciendas) de lo que se sigue que del quinto de mi caudal actual que pasa de \$10 000.00 puedo...cómodamente deducir los \$4 000.00. (23)

De hecho, el gravamente de \$4 000.00 era parte de los \$7 000.00 en que se había comprado la Hacienda y que según recibo que había entregado la Rvda. Madre Abadesa del Real Convento de Santa Clara de Jesús, Francisco Guevara había redimido \$3 000.00 de ese capital.

Las obras hidráulicas construidas a fines del siglo XVIII admiraban y sorprendían por su riqueza y eran símbolo, bien lo sabían los propietarios, del poder económico adquirido. Antonio del Raso en 1845, registra el respeto que se habían ganado estos ilustres hacendados queretanos:

la presa de Santa Catarina, en jurisdicción de Santa Rosa, tiene dos acueductos de cal y canto: el uno surte de agua a las labores de Montenegro, y el otro a las tierras de Santa Catarina, tiene ambas 40 000 varas de largo, y la segunda tiene 2 alcantarillas que sirven de garitas a los aguadores: pasa el agua en un bajío por una hermosa cañería de 80 y un ojos que forman un paisaje sorprendente. En esta obra utilísima brillan con emulación el genio, el buen gusto y el poder, para perpetuar la memoria de su autor, D. Francisco de Velasco y Bolio".(24)

Así, a principios del siglo XIX, los propietarios de bienes urbanos y rústicos, herederos o no de los hacendados de fines del

(23) AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 25.

(24) Antonio del Raso, Notas estadística del Departamento de Querétaro, por la asamblea constitucional del mismo, Querétaro, imprenta de José Mariano Lara, 1848, Pág. 16. Subrayado mío.

siglo XVIII, sabían que tanto las grandes inversiones hidráulicas, como las fastuosas viviendas levantadas tanto en el campo como en la ciudad, eran manifestaciones tangibles de la prosperidad alcanzada por la agricultura. En el empeño de los viejos terratenientes en que se fundían el boato de las ambiciones señoriales con el afán productivo, las fincas más ricas del Corregimiento fueron gravadas con capitales que se reconocían a la Iglesia o que se establecían en beneficio de los herederos de los antiguos dueños. Por lo general, los propietarios del siglo XVII y XVIII que fundamentaban su fortuna en la producción agrícola de sus fincas, habían tomado las precauciones jurídicas para garantizar dos condiciones: la primera, que la prosperidad del sitio quedara para siempre vinculado a su nombre y, la segunda, que sus herederos varones, en línea directa, por generaciones recibieran los beneficios del trabajo y los bienes por ellos acumulados.

Esta situación sostenida a través de las cláusulas testamentarias que regulaban ambas condiciones eran, para los nuevos propietarios de las tierras, una garantía de la riqueza que podía usufructuarse en la propiedad que se tratara. Es decir, que a principios del siglo XIX, cuanto más gravada estaba una propiedad por capellanías laicas o de sangre y por fundaciones piadosas, mayor certeza había de su potencial productivo. Por ejemplo, la cláusula 5a. del testamento de Francisco Guevara, ya citado, otorgado el 1ro. de julio de 1785, especificaba esta particularidad:

Es condición que todas las veces que yo o cualquiera de mis hijos y sucesores y poseedores de la hacienda expresa (la de Buenrostro anexa de la hacienda de Carrillo) quisiéramos redimir este censo (de 4 000.00 pesos en oro común) lo podamos hacer y los capellanes o patrones sean obligados a otorgar escritura de redención y cancelación en forma y siempre que se redima el principal se ha de volver de nuevo sobre buenas fincas y seguras posesiones para la permanencia de esta capellanía. (25)

Aún cuando se tratara de fundaciones piadosas para asegurar la manutención personal de los individuos consagrados a Dios, el capital impuesto se colocaba sobre finca "segura". Tal fue el caso de María Josefa de San Luis Gonzaga, novicia del convento de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, llamada en el siglo (como se decía en la época y hasta el concilio Vaticano II realizado en 1965) María Josefa García, originaria de San Juan del Río. La religiosa María Josefa, para cumplir con las disposiciones del Concilio de Trento, antes de emitir sus votos emitió su testamento otorgado el 4 de febrero de 1802, a fin de hacer "renuncia y desapropio" de todos los bienes y acciones que le pertenecían o que le pudieran pertenecer. Sin embargo, a la usanza de la época, impuso una capellanía sobre el capital que le correspondía de su herencia paterna. En la cláusula 4a. del testamento señala:

Quiero que del tercio de mi legítima paterna y materna y en el caso que sobreviva a mis padres se separen \$10 000.00 y se impongan réditos de un 5% en finca segura los que se me entreguen para subvenir mis necesidades religiosas, y para socorrer a mis parientes si lo hubiera menester, o a otras personas pobres... (26) Capital que se impuso sobre la hacienda de Michintepéc (4 000.00) y el rancho de Santa Cruz. (\$6 000).

(25) AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 26. Subrayado mío.

(26) Idem.

Era un hecho. Solamente las fincas productivas registraban la imposición de capitales. El conocimiento de esta situación se había generalizado porque el gravamen de las fincas rústicas (también de las urbanas) a favor de la Iglesia, de los herederos, o en su defecto los individuos indicados por el fundador de la capellanía (generalmente nombraban a hijos legítimos de españoles pobres) como expresión de la riqueza y la devoción del propietario, habían pasado a ser, por cláusula testamentaria, parte intrínseca de la propiedad. A lo largo del tiempo, así como los sucesivos propietarios de las fincas gravadas iban reconociendo, y en ocasiones ampliando, los capitales donados para obras pías, dotes, o para las capellanías religiosas y de sangre, los beneficiarios, tanto las organizaciones eclesiásticas como los individuos que eran nombrados capellanes o herederos de los capitales otorgados, recibían las rentas que los capitales cargados sobre las fincas rurales y urbanas especificaban.

Por mencionar algunos casos: en 1865 Manuel Truchuelo y Ecala, era "patrono" y capellán de una capellanía laica fundada por Francisco Yañez Gómez por cláusula testamentaria dada el 8 de abril de 1693. Capellanía que es reforzada por Fernando Fentocha hijo político de Francisco Yañez, por testamento dado en 1730. Se imponía bajo las condiciones testamentarias un capital de \$2 000 sobre la hacienda del Ciervo. De hecho, la labor de Santa Rosa llamada hacienda de Juriquilla la había comprado Francisco Yañez en 1677 a Martín Lozano. Sin embargo, las tierras le fueron disputadas por el Marques de Buenavista. Para 1732, el prior del

Convento del Carmen del Espíritu Santo reclamó el censo impuesto por Francisco Yañez a favor del convento que era de \$1 000.00 en oro común. Se alegaba entonces que no se podían pagar los réditos al convento porque las tierras estaban en litigio. En 1793, Pedro Antonio Septién Montero "más antiguo poseedor de la hacienda de Santa Rosa hijo político y apoderado de Felipa Villanueva, dijo que "dicha finca la poseyó como dueño Francisco Yañez quien desde 31 de octubre de 1689...cargó sobre ella el capital de \$1 000.00...Capital que Bartolomé Alvarez Caballero dió al convento de Carmelitas...". La hacienda para 1857 había pasado a manos de Timoteo Fernández de Jáuregui por los bienes de su esposa, heredera de Antonio Septién Montero. Timoteo Fernández de Jáuregui tuvo que resolver el pago del capital que se trataba y que para 1865 había pasado a ser propiedad de Truchuelo y Ecala, heredero legítimo y directo de aquellas capellanías fundadas en el Siglo XVII y XVIII, por ser hijo del que era su poseedor, José María Truchuelo y Besara casado con Dolores López de Ecala en 1842.(27). Los capitales que disfrutaba la familia Truchuelo también incluían capellanías fundadas sobre fincas urbanas. Puede citarse el capital de \$3 000.00 que reportaba la casa ubicada en la calle de la Alhondiga de Querétaro de cuyos réditos era capellán y patrón el mismo Truchuelo y Ecala.

Otro caso que puede consignarse como ejemplo de individuo rentista es el de Carlos Pozo Neyra quien heredó las capellanías que tenía en propiedad Sebastian Neyra Otero. Fundación que pesaba sobre las haciendas de Otongo y Amazcala en Querétaro.

Haciendas que en 1860 eran propiedad de los herederos de Francisco Manuel Sánchez de Taggle, importante comprador de los bienes de la Iglesia nacionalizados. También sobre la hacienda de San Nicolás Tepetongo de Morelia en 1860 propiedad de José María Cuevas y la hacienda del Señor San José y Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Cruz y San Juan Amaninalco en territorio de los pueblos de Apam y Tepeapalco y el Rancho del Batán en territorio de la Villa de Coyoacán.

Félix Osoreo cura de Santa Ana de Querétaro, en su calidad de Canónigo de la Iglesia Catedral, Juez Ordinario, y visitador de Capellanías y Obras Pías del Arzobispado de México, en 1840, reconoció a Pozo Neyra el derecho que tenía a la capellanía de \$4 000.00 fundada por Melchora Ruiz según escritura dada el 12 de diciembre de 1729. Capital cargado sobre la hacienda de Atongo y Amazcala. Pozo Neyra también era propietario de la capellanía fundada por Francisco Fagoaga con hipoteca especial (de \$4 000.00) sobre la hacienda de la Cañada, Otongo y Palogrande en territorio del pueblo de Tula, según escritura de 10 de noviembre de 1829. Un año antes, en 1839, Osoreo había reconocido el derecho de Neyra Otero a la dote de \$4 000.00 que había cargado Fruto Saenz Merino con hipoteca especial sobre la hacienda de San Nicolás tepetongo, según escritura de 22 de octubre de 1774. Finalmente, en 1842, Pozo Neyra heredó la capellanía de Francisco Moreno Bezares con dote de \$3 000.00, cargada sobre una casa y pulquera de Celaya y sobre las haciendas de Señor San José, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Cruz y San Juan Amaninalco y el Rancho del Batán, fundada el 2 de mayo de 1818. Así, de 1840 a 1860 en que se

publican las leyes de Reforma en Querétaro, Pozo Neyra disfrutó de los réditos anuales del 5% que rendía el capital de \$14 020.00 que había heredado de su familiar Sebastian Neyra Otero.(28)

Por lo general las capellanías religiosas se concentraban en los herederos de los fundadores que seguían la carrera sacerdotal. En virtud de esta práctica, hubo presbíteros que acumularon las rentas de varios capitales. Este es el caso de las capellanías llamadas "de Arce" muy conocidas a principios del siglo XIX por su cuantía. El bachiller José María Arce y Lamas heredó la capellanía colectiva de \$2 000 y otra de \$3 000 fundadas, en 1783, por la señora Francisca de Chávez Lizardi, viuda del capitán Pedro de Estrada Altamirano. Capitales impuestos sobre la hacienda de Santa Ana del Salitrillo situada en "términos de la ciudad de Querétaro". Al deceso de José María, en 1801, heredó las capellanías el también sacerdote Ignacio Arce y Lamas quien disfrutó de ellas hasta 1835. En este año hubo una fuerte disputa sobre quien de las familias más cercanas tenía mayor derecho a gozar de la renta de los numerosos y cuantiosos capitales en poder de la familia Arce:

\$3 000 fundados por la religiosa de Santa Clara María Teresa de Jesús. \$5 000 de las dos capellanías fundadas por la Sra. Francisca de Chávez Lizardi. \$2 000 fundados por Bernardino Suasnavar. \$4 000 impuestos por el capitán Bernardino Susnavar. \$4 000 impuestos por el capitán Juan Estaban Arce. \$3 000 fundados por la señora Josefa Suasnavar de Sosa. \$2 000 de Francisco Aguilar y Francisca Monroy. \$4 000 del sargento mayor Bernardo Pereda y Juana Chavez Lizardi. \$6 000 de dos capellanías fundadas por la señora Baltazar Rodríguez. \$3 000 de uno de los capitales fundados por Juan Manuel Rodríguez. \$2 000 del doctor José Lizardi del Valle. \$2 000 de Francisco González y Elvira

(28) AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 493, Exp. 1

Martín. \$2 000 de la señora Francisca González. \$3 000 de una de las capellanías fundadas por Francisco Garmer Ceballos. \$2 000 del Pbro. Juan Rodríguez Suasnavar. \$6 000 de dos capellanías fundadas por Josefa Rodríguez de Suasnavar y \$3 000 fundado por Josefa Suasnavar y Sosa y su marido Pedro Arce. (29)

En total, el propietario de estas capellanías disfrutaría del 5% anual sobre un capital que ascendía a \$52 000. Suma que si bien era considerable en toda época adquiriría mayor importancia a principios del siglo XIX, por la decadencia económica experimentada en el Querétaro de esos años. Fijados los edictos convocatorios en 1835, se presentó el niño Pedro Terezo de Arce, sobrino del último capellán, quien de 1836 a 1853 disfrutó de la renta de estos capitales, además de la producida por la capellanía de \$4 000 fundada por Pedro Urtiaga Salazar.

La costumbre, después de más de dos siglos de vigencia, generó una clase propietaria de capitales que percibía réditos anuales al 5% (en el siglo XIX sube al 6%) sin ningún esfuerzo productivo y sin ninguna relación con la tierra o los bienes que daban origen a las rentas. La situación no era nueva. Ya en 1799 Abad y Queipo había señalado el problema de las cargas hipotecarias que gravaban las fincas. De manera independiente del propósito que llevaba su exposición en ese año, defender la propiedad eclesiástica frente a la emisión de las cédulas reales de expropiación, Abad y Queipo clarifica la situación de las fincas rurales y urbanas:

siendo pocos los poseedores, pocas las posesiones, y estas indivisibles y rarísimos los que podían disponer del todo de ellas, debieron ser también pocas sus donaciones

(29) AGN, Fondo bienes nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/133

piadosas, y no pudiendo hacerlas en tierra sino en dinero como sucedió en efecto; y así no pasaron a las manos muertas... (30)

También Lucas Alamán comentó las dificultades que enfrentarían los propietarios si se aplicaba la real cédula de 26 de diciembre de 1804, que mandaba se enajenasen las fincas de fundaciones piadosas y se recogieran los capitales impuestos cuyas escrituras estuvieran cumplidas, porque

se había ido acumulando aquel género de fundaciones a los que reconocían capitales en sumas muy cuantiosas,... y como una vez hecha la imposición que era por 9 años, nunca se exigía la devolución del capital mientras se pagaban con puntualidad los réditos, las más de las escrituras se hallaban cumplidas o debían de estarlo dentro de poco tiempo; de donde resultaba, que todos los propietarios iban a tener que exhibir sumas muy considerables que no estaban en estado de pagar, con lo que haciéndose efectivas las hipotecas habíanse de disponer en venta multitud de fincas, no de bienes eclesiásticos, sino de hacendados particulares, arruinando gran número de familias y haciendo bajar el precio de las mismas fincas (31)

Las fortunas consolidadas por los propietarios de tierras en Querétaro durante el Siglo XVIII y las fuertes inversiones de dinero en infraestructura de riego, habla de un grupo social emprendedor que no dudó, avalado en su riqueza y en su trabajo, en hipotecar sus fincas para obtener los recursos financieros que les permitiera acelerar la construcción de las obras hidráulicas y

(30) Abad y Queipo, "representación sobre la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes del nuevo código, en la cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harían la base principal de un gobierno liberal y benéfico para las américas y para su metrópoli", en José María Luis Mora, Crédito público, UNAM y Miguel Angel Porrúa, México 1986, Pág. 16.

(31) Lucas Alamán, Op. Cit. Tomo I, Pág. 138.

mantener el buen nombre de la familia. Créditos que se obtenían de los mismos eclesiásticos que recibían las rentas de los capitales donados por capellanías y obras pías. Abad y Queipo en la representación de 1799 ya citada, reconocía que,

la poca propiedad de la Iglesia y el clero en América no consiste en posesiones (sino)..en capitales que, en calidad de depósito regular (que es contrato más frecuente en el país) circulan en manos de los seculares, fomentando la agricultura y el comercio.(32)

Las transacciones hipotecarias con la Iglesia, en sus diversas modalidades, en su mayoría fueron realizadas a fines del Siglo XVIII (33). Transacciones que no se circuncribían a la localidad (34). Sin embargo, algunas fundaciones se otorgaron durante la primera mitad del siglo XIX: unas antes de la disolución de los mayorazgos en 1823 y otras más, con anterioridad al primer intento de Gómez Farías de aplicar las leyes de nacionalización en 1833. Aunque menos, también se crearon fundaciones piadosas entre 1840 y 1861. No obstante, estas

(32) Abad y Queipo, op. cit. Pág. 16

(33) Además de los casos ya citados se pueden mencionar el censo reservativo redimible por \$10 000.00 que en 1796 reconoció Luis Sánchez del Villar al convento de Santa Clara, mediante hipoteca de su Hacienda San Juan y San Pablo, popularmente conocida como la Era. Hacienda que junto a la casa No. 14 de la primera calle de San Antonio de la ciudad de Querétaro, también aseguraba, según escritura dada en 1815, un capital de \$2 000.00 a favor de la hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe. AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 137/1

(34) Lla Hacienda del Fresno, ubicada en la vecina población de Celaya, Dpto de Querétaro en 1860, propiedad del español Pedro Ortiz, reconocía por escritura de 1780 dos capellanías de sangre de \$7 324.00 fundadas por Doña Agueda y Don Juan de Nava y Hermosillo. Capellanías que disfrutaba la familia Huidabro residente en México. AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 494, Exp. 1

fundaciones piadosas, tardías, consideraban la vía jurídica para defender los capitales en caso de que se dispusiera la nacionalización de los bienes eclesiásticos.

La disposición testamentaria de la Sra. Josefa Plaza propietaria de la Hacienda de "Lo de Casas" después denominada "Lodecasas" es ilustrativa sobre la tendencia generalizada a hacer legados. La Sra Plaza fundó dos capellanías, una de \$6 000.00 y otra de \$4 000.00 en 1838. Sin embargo, en ese año ya existía la Ley de 1823 y el gobernador Lino Ramírez ya había intentado poner en vigencia en Querétaro la legislación de Gómez Farías de 1833. Pese a estos antecedentes y porque en Querétaro socialmente se esperaba que el gobierno local no cumpliera las disposiciones sobre esta materia, la Sra. Plaza fundó las dos capellanías. No obstante previendo dificultades, insertó una cláusula en su testamento que condicionaba la vigencia de las capellanías

a condición de que si alguna vez pretende el gobierno acaparar esos capitales se entendieran por no ser dedicados a las capellanías y se entreguen a mis herederos y sobrinos, Manuel Leonardo y Trinidad Zepeda(35).

En 1841, Francisco Antonio de la Puente reconoció un capital de \$200.00 a favor de la Congregación de la Santa Veracruz y del Santo Entierro, cargado sobre la hacienda de San Antonio de Apapataro, (36). Agustín Frias y Tovar, en su testamento dado el 9 de noviembre de 1859, dejó un capital de \$1 000.00, gravado sobre la hacienda de Gamboa, a fin de que se sufragaran misas por la salvación de su alma, sin especificar el lugar en donde se

(35) AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 66/13

(36) AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/135

celebrarían las misas y sin especificar nombre de capellán alguno, como estrategia para que dicho capital quedara en propiedad de sus familiares. Sin embargo, para evitar problemas, Frías y Tovar especificó en el testamento: si llegara el caso de que se considerara desamortizable el capital, se procurará su redención para que entren al concurso de los bienes en favor de los herederos. Por otra parte, el capital no era denunciante puesto que los \$50.00 que daban de renta, \$10.00 debían repartirse entre los herederos y solamente \$40.00, el rédito de \$800.00, se destinaban al pago de las misas (37).

Es importante señalar que las donaciones y legados "piadosos" y la práctica de "vincular" las propiedades, realizadas después y a pesar de la emisión de la legislación del 9 de agosto de 1823 que ordenó la supresión de los mayorazgos y de las medidas nacionalizadoras de los bienes eclesiásticos, respondía a la necesidad "espiritual" de una generación que había heredado la costumbre de establecer legados como una manera de "componer su conciencia" y reparar los daños ocasionados a terceros. Por ejemplo, la testamentaria de Manuel Casabal, quien había venido a ser propietario de la Hacienda de San Clemente, y Ranchos anexos, el Ahorcado, Palomas, Santa Cruz y el Muerto por herencia de una de sus hijastras, es significativa porque expresa el deseo de restaurar los derechos de terceros. Al dejar sus bienes al único superviviente en línea directa de los antiguos propietarios de la Hacienda: Antonio Díaz y Torres, hijo de Esteban Díaz González viejo hacendado que a su muerte había legado la hacienda a su (37) AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/133

esposa quien había casado en segundas nupcias con el administrador de los bienes de su esposo, Manuel Casabal buscaba restituir la hacienda que le había heredado su hijastra. Por otra parte, a semejanza de Díaz González, Casabal también se interesó en dejar su nombre grabado para la posteridad.

En 1861, cuando las leyes de Reforma estaban siendo aplicadas en Querétaro, y por tanto obligaban a su cumplimiento, Manuel Casabal redacta su testamento. De su enorme fortuna, valuada conservadoramente en 1868 en \$164 227.34, destina varios capitales con un total de \$67 615.00 para obras caritativas y de beneficio social para San Juan del Río. Dejaba \$25 000.00 "...para que su albacea..según su prudencia tino y acierto los repartiera entre pobres...". \$9 400.00 para el hospital de San Juan de Dios, de San Juan del Río. Al Ayuntamiento \$13 160.00 para la introducción del agua y diversos capitales de capellanías fundadas en el pasado por Esteban Díaz González y Concepción y Rafaela Díaz. Casabal, sin herederos en línea directa, legó su fortuna a Antonio Díaz y Torres familiar de la familia Díaz fundadora de las capellanías laicas que reconocía la Hacienda de San Clemente. Sin embargo, Antonio Díaz y Torres falleció algunos meses antes que Manuel Casabal, lo que suscitó un largo litigio sobre quien era el sucesor más directo.(38)

Tanto la Sra. Plaza en 1838 como Frías y Tovar en 1859 y Manuel Casabal en 1861, no escondían sus motivaciones religiosas y su deseo expreso de donar capitales para el sostenimiento de obras caritativas llevadas a cabo por las corporaciones religiosas, o (38) AGN, Fondo Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 66/83

para el "socorro de los pobres". No obstante, estas donaciones tardías, sobre todo la de Casabal que se ubica en 1861, constituyen la excepción de la regla: fue a fines del Siglo XVIII cuando la mayoría de las Haciendas queretanas fueron vinculadas a censo enfiteúutico, hipotecadas a diversas corporaciones eclesiásticas o gravadas con fuertes capitales a favor de parroquias, conventos, dotes de monjas, capellanías laicas y obras pías. Situación que no era exclusiva de Querétaro. En Puebla, por ejemplo, el intendente Flon dice Chevalier,

muestra en 1790 por medio de una estadística precisa y detallada que las haciendas están hipotecadas por 73.9% de su valor, del cual 69.7% es en favor de la Iglesia; Flon concluye que los hacendados no son en la práctica sino administradores de los censualistas eclesiásticos a causa de las rentas considerables que deben pagarles (39)

En la representación que a nombre de los labradores y comerciantes de Valladolid de Morelia envía Abad y Queipo al Rey sobre la imposición de la Real Cédula de 26 de diciembre de 1804, que pretendía la enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías, se afirma que,

de 200 000 vecinos en que se puede estimar el número de agentes que dirigen este ramo en Nueva España, no se hallarán ciento que manejen sus negociaciones en cualquiera de las tres ramas con capital propio ni puede haber diez mil que les pertenezca en propiedad el tercio del capital que giran. La masa general de estos agentes obra con caudal ajeno, y se sostiene por opinión y a fuerza de talento. (40)

(39) Francois Chevalier, la formación de los grandes latifundios en México, F.C.E. México, F.C.E.2da.ed., 1976, Pág. 503.

(40) Abad y Queipo, 24 de octubre de 1805 en José María Luis Mora, Op. Cit. Pág. 77. También Lucas Alamán, Op.Cit. Tomo I, Pág. 139.

Sin embargo la carga hipotecaria que sostenían casi todas las 82 haciendas existentes en el distrito de Querétaro, y las 42 existentes en el distrito de San Juan del Río, no se percibía como un obstáculo inmediato a la expansión del sistema de la hacienda. En ese entonces, al igual que todas las demás actividades productivas, la agricultura experimentaba un fuerte auge económico lo que hacía predecible la pronta recuperación de los capitales, sin necesidad de enajenar los bienes. Existía, por otra parte, una gran facilidad para obtener recursos de los abundantes fondos piadosos. Facilidad, indica Alamán, que era contraproducente y

motivo de ruina para las familias, pues con la desgraciada propensión de los mexicanos a gastar pródigamente cuanto tienen, sin pensar en el porvenir, iban gravando las fincas de que solo eran nominalmente dueños, para venir a parar en quiebras que los dejaban arruinados. (41)

Pese a la crítica aguda de Alamán, en el Querétaro de fines del siglo XVIII los gravámenes hipotecarios respondían a una situación innegable de bonanza. Por otra parte, frente al desequilibrio económico suscitado por la lucha de independencia, los hacendados queretanos demostraron tener una conciencia social clara y transparente de, contrario a lo que dice Alamán, no seguir gravando las propiedades. Por ejemplo, Mariano Tinajero en 1818, imposibilitado para pagar los réditos que debía al Convento de San Francisco dice:

Soy hombre de bien, tengo honor y vergüenza, y yo correspondería mal a estos sentimientos y a la confianza de mis acreedores si contraigo otras deudas para cubrir

(41) Lucas Alamán, Op. Cit. Tomo I, Pág. 140

esta responsabilidad (su adeudo a San Francisco). No debo más réditos que los referidos a San Francisco y por tanto para satisfacer los capitales basta la hacienda (San Nicolas del Pozo) que los reconoce, y para cubrir el rédito caído, los pendientes hasta la fecha y el mueble que me han robado (los rebeldes), sobra también el valor libre de la casa de mi habitación, pues solo reconoce \$800.00 al propio San Francisco. Esto es todo cuanto poseo y desde luego lo cedo en beneficio de mis referidos acreedores sin reservarme más que la ropa de uso mío y de mi familia y una mula de silla y unos cuantos trastos de casa (43)

En Querétaro nadie pensaba que las fuertes cargas hipotecarias fueran un problema. Las dificultades para el corregimiento surgieron por la organización social que había permitido y auspiciado la formación de fortunas tan considerables. Tanto la agricultura, como la minería, el comercio y la industria habían experimentado una fuerte expansión que estaba estrechamente vinculada a la privilegiada posición geográfica de la ciudad. Inserto en la zona del Bajío, Querétaro se encontraba a la mitad del camino de la capital del virreinato a Guanajuato y muy cercana de sus vecinas Celaya, San Miguel y Salamanca, también importantes ciudades industriales. Como lo demuestra Brading (43), estas condiciones del Bajío -mercado en expansión y un aumento de la oferta de mano de obra- propiciaron la formación temprana de una población urbana predominantemente mestiza.

El incremento de la población mestiza en la ciudad en donde por otra parte, al igual que en la Sierra Gorda, predominaba el sistema de trabajo basado en la esclavitud, el encarcelamiento y el peonaje por deudas, incubó resentimientos sociales entre la

(42) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/35

(43) D. A. Brading, Mineros y Comerciantes en el México borbónico (1763-1810), ed, F.C.E., México, 1975, Pág. 306

población. Problemas serios que los señores no llegaron a vislumbrar en su real dimensión. Los aristócratas queretanos confiaban sin duda en que el control militar los avalaría como otras veces, y controlarían las divergencias sociales que ya se apuntaban. Incluso Abad y Queipo que desde 1799 venía anunciando la fermentación social existente en América, en el Edicto dado en Valladolid el 19 de marzo de 1812, reconocía que nadie podía prever este espantoso suceso, ni menos imaginar la rapidez, extensión y la universalidad de sus estragos:

En efecto, nadie ha podido prever este espantoso suceso, ni menos imaginar (sic) la rapidez, la extensión y la universalidad de sus estragos. Obstruyó casi en un momento todo el giro de la sociedad desde Veracruz a Sonora, y desde Acapulco al Nuevo México. Degolló a sangre fría una gran porción de ciudadanos de los más interesantes y preciosos. Arruinó las rentas del soberano y de la Iglesia, y los capitales de comercio y de habilitación de toda industria rústica y urbana. Puestos en anarquía las ocho décimas de la nación, esa gran masa de indios y castas disiparon y devoraron en poco tiempo toda la riqueza acumulada, los frutos, los muebles y semovientes de la agricultura... estos facciosos ocupando por sí una porción de haciendas y quitando los medios de cultivar las otras, han privado y privan en todo o en la mayor parte a los propietarios y colonos de su posesión y goce" (44).

Al lado de la organización del trabajo basado en la esclavitud y en el peonaje por deudas, consecuencia lógica de la encomienda, el repartimiento y las concesiones de tierra y servidumbre como premio por los servicios militares prestados a la Corona, en las haciendas de los Valles, las ubicadas en Querétaro, San Juan del Río y Tequisquiapan, se presentaba una nueva forma de contratación que se sostenía en el trabajador libre, y en el

(44) En José María Luis Mora, Op. cit. Pág. 158

arrendamiento y subarrendamiento de las tierras excedentes de la hacienda. Sistema que aparece cuando la hacienda se ha consolidado en su gran extensión territorial y cuando ya se cuenta con mejoras de infraestructura en los suelos ricos para la labores agrícolas. Pese a estas condiciones que sugieren una mejoría en las condiciones de los trabajadores rurales, nadie pudo impedir, como señala Abad y Queipo, las destrucciones ocasionadas por la guerra de la independencia.

2. Los sistemas de trabajo y su impacto en la lucha por la independencia

Querétaro se introduce al siglo XIX como una ciudad histórica, afamada por su arte, por la hidalguía de sus pobladores y por la paz que supuestamente anidaba en sus calles. Parecía que los motines, tan frecuentes de la clase menesterosa, nunca hubieran sucedido y que la lucha por la sobrevivencia de los trabajadores urbanos y del campo fueran asuntos de poca monta. La historia de los señores aniquiló la de un pueblo, dramáticamente descrito por Guillermo Prieto, "...que no se caracteriza ni por sus virtudes, ni por sus vicios como si careciera de todo sentimiento". (45)

También John Super no resiste la tentación de comentar la gran paradoja de Querétaro. Siendo cuna de planes políticos subversivos pudo eludir dice,

(45) Guillermo Prieto, -Fidel- Viajes de orden suprema, Querétaro, Documentos de Querétaro, ed. Gobierno del estado de Querétaro, Tomo I, 1988, Pág.133.

una gran parte de la violencia de 1810. Miguel Hidalgo y sus ejércitos marcharon victoriosos hacia Guanajuato en donde ya habían ocurrido disturbios. Evitaron pasar por Querétaro que era una ciudad en donde prevalecía la estabilidad.(46)

Sin embargo, Querétaro no era una tierra paradisiaca. Las contradicciones sociales se habían venido agudizando por el antagonismo que prevalecía entre los españoles y los mestizos de la ciudad. El sistema carcelario que había dado lugar el peonaje urbano por deudas -pago adelantado- en los obrajes de Querétaro (47), auspiciado por el fuero militar que disfrutaban la mayoría de los dueños de estas fábricas por ser oficiales de la milicia, generaba fuertes inconformidades en la población urbana. Empeñados (rentados) los hombres, decía el Corregidor Miguel Domínguez en,

treinta, cuarenta, cincuenta o más pesos...y puesto por lo consiguiente en la necesidad de pagar esta deuda con los abonos parciales que proporciona su trabajo, esto es dos o tres reales semanarios (porque no se les permite volver el dinero) ya conocerá Vuestra Excelencia el tiempo que necesita para devengarla...estos operarios encerrados lo están tanto que no pueden salir ni de noche ni de día de los obrajes hasta que devengan sus deudas (48)

Las desventajas de esta práctica -peonaje urbano y encarcelamiento por deudas- común en las ciudades de la Nueva

(46) John C. Super, la vida en Querétaro durante la colonia. 1531-1810, México, F.C.E., 1983, Pág. 228.

(47) "En 1803, los dueños de fábricas reconocieron que tenían a más de dos mil hombres encerrados dentro de los muros de sus establecimientos que casi parecían prisiones..." D.A. Brading, Mineros y Comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), México, F.C.E., 1975 Pág. F.C.E. 1975, Pág. 312.

(48) Miguel Domínguez, Querétaro 17 de noviembre de 1801. "Memorial sobre los obrajes de Querétaro", publicado por D.A. Brading, en Noticias sobre la Economía de Querétaro y de su Corregidor don Miguel Domínguez, 1802-1811, Pág. 287.

España eran muchas. No solamente eran causa de conflictos continuos entre los operarios y los dueños de los obrajes, sino que también afectaban la marcha de los negocios, los ingresos de las arcas reales -pago de tributos- y derivaba en vicios sociales acertadamente descritos por el Corregidor de letras de Querétaro, el Lic. Miguel Domínguez. En algunos párrafos de su Memorial sobre los obrajes, fluye la indignación por las consecuencias morales que acarreaba la esclavitud práctica en que eran mantenidos los operarios queretanos, "en ninguna parte del Reino incluso esta capital, hay tantos adulterios como en este infeliz lugar...". Pero, sobre todo, Domínguez resaltaba las consecuencias políticas acarreadas por esta miseria: "...¿parece que no hay más desorden? Pues lo hay y de aquellos cuyas funestas consecuencias son trascendentales para la República..."(49)

Del texto del Corregidor se desprende que el peonaje urbano por deudas era una práctica que debía desaparecer puesto que no dejaba nada positivo. Por el contrario, aparecía como un elemento de inconformidad política que no ocultaba el resentimiento social acumulado en contra de los empresarios españoles y sus sistemas de trabajo y control de la población. Decía Domínguez:

Por más que me he fatigado en buscar la necesidad que se pondera de anticipar dinero, no la he podido encontrar; y lo único que acerca de ella he oído es que como los indios y plebeyos de que se compone la gente de los obrajes nunca tiene dinero junto, cuando llega el caso de pagar el tributo, los derechos de un entierro, casamiento, bautismo u otra cosa semejante, si no se les suple lo que importa no tiene con qué hacerlo; pero, sin embargo, a mí me parece que no se ha visto este punto con toda la madurez y reflexión que merece por su gravedad. Yo veo que en esta

(49) Idem, Pág. 289

ciudad hay una fábrica de cigarros donde ningún dinero se adelanta a casi tres mil personas de esta misma plebe que diariamente trabajan en ella, y a pesar de que nada se les adelanta ellas pagan su tributo...yo veo que en esta capital hay también otra fábrica de cigarros, una casa de moneda, un apartado, una multitud de tiendas de artesanos, donde es innumerable la gente de esta misma plebe que trabaja y que ha pesar de que nada se les adelanta, ellas pagan su tributo (50)

La observación de Dominguez en 1801 es a todas luces notable. El peonaje por deudas como vía de extracción de los tributos en el periodo colonial y como sistema de conservación de la clase trabajadora en las fábricas y las haciendas, trasciende el periodo y en 1900 todavía era causa de escándalo. Aún cuando es preciso señalar que durante el porfiriato la práctica se había hecho exclusiva de las haciendas. Llama la atención entonces, que un siglo más tarde de la denuncia hecha por el Corregidor de Querétaro, Refugio Galindo presente -en el segundo Congreso Agrícola de Tulancingo celebrado en 1905- un estudio que recoge la opinión de 45 hacendados sobre el peonaje por deudas. Las respuestas vertidas por los hacendados coinciden, en su mayoría, con la valoración hecha por el Lic. Domínguez. Galindo basado en la experiencia de los hacendados, concluía su estudio señalando que el peonaje por deudas fomentaba los vicios -alcoholismo y ociosidad- desalentaba al peón, obraba contra los intereses del patrón y aumentaba la abyección del trabajador. Luego, decía, "la costumbre de dar habilitación a los peones en días señalados, es una mala costumbre que debe suspenderse". (51)

(50) Miguel Domínguez, Op. Cit. Pág. 290-291

(51) Refugio Galindo, "Informe presentado al Segundo Congreso Agrícola de Tulancingo", en, *la servidumbre agraria en México en la época porfiriana*, México, SepSetentas 303, 1976,

El impacto político social del peonaje urbano por deudas y las medidas de control ejercidas por los españoles se agudizaban por la importancia que tenía la población trabajadora en la organización social de Querétaro a principios del siglo XIX. Importancia que se desprende del alto número de operarios ocupados en las fábricas y negocios urbanos. Según el estudio realizado por Antonio del Raso, de 35 000 habitantes radicados en la ciudad (Querétaro) en 1800, aproximadamente 3 300 trabajaban en los obrajes y trapiches; 2 916 en la industria urbana y 3 000 en la fábrica de tabacos. (52) Casi 30% de la población de la ciudad capital (9 200 personas) denominada en la época como indios o plebeyos y plebe, era un grupo social escasamente valorado por las clases dominantes. Despojados de su identidad individual y social, eran considerados como masa incivilizada, carente de todo sentimiento que había que domesticar a través de los medios que se tuvieran a la disposición. En esta época, el encarcelamiento, el azote y el destierro eran cotidianos.

En San Juan del Río y Tequisquiapan, en donde no se recurre a la esclavitud en las haciendas y que, incluso, el peonaje por deudas tendía a desaparecer porque de hecho no lo requerían dado que había abundante mano de obra, tenían un fuerte negocio con la venta de los esclavos a los que eran adictos los hacendados de la Sierra. Ayala Echavarri transcribe algunos documentos que ponen en evidencia la venta de esclavos en las subastas llevadas a cabo en

Pág.134.

(52) Antonio del Raso, *Notas estadísticas del Departamento de Querétaro*, por la Asamblea Constitucional del mismo, Imp. de José Mariano Lara, Querétaro, Qro., 1848 Págs. 60-61

el pueblo. Ventas que no cesaron comenta Echavarri, "hasta el año 1827, en que salió una Ley que prohibía cualquier negocio sobre esclavos..."(53).

Así, a diferencia de la Sierra, en las 82 haciendas de Querétaro, y en las establecidas en San Juan del Río y Tequisquiapan, predominando el sistema de la aparcería "de una o más fanegas de sembradura", había diferente tipo de trabajador. Los arrendatarios, los que recibían la tierra para sembrarla mediante pago en efectivo. Los medieros, ya fuera a medias al quinto o al rajar; los arrimados que trabajaban con los arrendatarios; los peones asentados en los terrenos de la hacienda y los "trabajadores libres", informaba el Corregidor Domínguez,

que ocurren a ellas en ciertas temporadas, como las siembras y las cosechas, las cuales concluidas pasan a otra parte porque son personas o cuadrillas volantes que llaman 'gente alquilada' (54)

Estos últimos trabajadores libres "gente alquilada" en la época, al igual que la plebe urbana era, continúa Domínguez, "...indios, mulatos o castas, cuyos ranchos están distantes...". Gente al final de cuentas ladina que era renuente a pagar tributo. No aparece en las haciendas de esta región, las ubicadas en la zona de los valles, en lo que hoy llamaríamos el corredor industrial del Bajío, el peonaje por deudas. Por lo menos, el peón acasillado siempre amarrado a la hacienda -como lo estaban

(53) Rafael Ayala Echavarri, San Juan del Río, Geografía e Historia 2da. edición, México 1981, Pág. 68-69.

(54) Miguel Domínguez, "La agricultura en Querétaro. El modo de tributar en Querétaro. 12 de octubre de 1802, en D.A. Brading, la economía...Pág. 298-299.

los operarios de los obrajes en la ciudad de Querétaro- porque no podían acabar de saldar sus cuentas con el patrón, no eran la mayoría en estas haciendas de los valles.

El peonaje por deudas, urbano y rural, especie de trabajo forzado herencia colonial de la encomienda y el repartimiento (55), y la misma esclavitud que se practicaban en regiones y actividades tan diferentes del estado, eran condiciones que prevalecían en todo el país.

Fray Servando Teresa de Mier destaca el efecto que tuvo en las luchas por la independencia el resentimiento acumulado en los trabajadores indígenas y en los mestizos por los sistemas de trabajo impuestos por los españoles, sus patrones en el campo y la ciudad. Fray Servando registró en su historia,

Ninguna cosa les era más odiosa a los indios, que en Nueva España ascienden a 2 millones y medio, que el tributo impuesto desde su conquista, el cual aunque no excede anualmente por cabeza de un duro por soltero y doble por casado desde 16 años hasta 60, ha sido gravosísimo por el modo y los abusos horribles con que se ha cobrado...Hidalgo publicó la libertad de tributos y los indios corrían de todas partes a alistarse bajo sus banderas azules y blancas que eran los colores destinados a los antiguos emperadores del Anáhuac. (56)

De esta manera cuando en 1810 se inicia la conspiración por la independencia, las clases dominantes habían abonado el terreno

(55) Friedrich Katz, "Condiciones de trabajo en las haciendas de México durante el Porfiriato: modalidades y tendencias", en la *Servidumbre agraria en México...*Pág. 74

(56) José Guerra -Fray Servando Teresa de Mier- *Historia de la Revolución de la Nueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813*. Edición facsimilar, México, IMSS, 1980, Tomo I, Pág.

para que la plebe urbana queretana y los peones, esclavos e indios de las haciendas participaran con los alzados. Sin embargo, y en esto no hay ninguna paradoja, la ciudad se logró mantener apaciguada a pesar de ser el centro irradiador de la conspiración -o por ser eso precisamente- por el fuerte control militar sobre ella ejercido; cuando se supo que las supuestas juntas de la llamada "Academia literaria" (57) que presidía Josefa Ortiz de Domínguez, era el punto de arranque de la independencia de México, el gobierno virreinal movilizó los recursos militares que disponía para controlar el foco de la insurrección y los centros subsidiarios amarrados a la sublevación programada en Querétaro.

La crónica que sobre los acontecimientos da Francisco Xavier Argomaniz (58), presenta a Querétaro como una ciudad fuertemente defendida contra los alzados y sus ejércitos de indios armados con "flecha y piedra" y como centro organizador de la batida contra los levantados. Relata Argomaniz:

Salió de esta ciudad (el 22 de octubre de 1810) con dirección a la villa de San Miguel, el ejército de tropa que estaba reforzando esta ciudad, compuesto de la columna de granaderos, regimiento de la corona, infantería y caballería, regimiento de Puebla, Dragones de México etc, que compondrá tres mil hombres, algo más o menos. Va la compañía de artilleros con su comandante y llevan 8 cañones con sus carros de munición y demás pertrechos de guerra. Va así mismo, una gran provisión de víveres para el ejército, en que se ocupan más de 800 mulas de carga. (59)

-
- (57) "Con el nombre de Academia Literaria se había establecido en Querétaro una reunión a que concurrían el Corregidor y otras muchas personas que profesaban las mismas opiniones", Lucas Alamán, *Op.Cit*, Tomo I, Pág. 349.
- (58) Francisco Xavier Argomaniz, *Diario de Querétaro*, Año 1810, Querétaro, Qro., Documentos para la historia, ed. Gobierno del Estado, 1972.
- (59) *Idem*, Pág. 13-14

La tropa movilizada, el armamento disponible y la vitualla del Ejército virreinal que relata Argomaniz, destacan la relevancia que tenía Querétaro. Fray Servando también reseña la movilización rápida que fue efectuada:

Cuando el virrey supo de los progresos que hacía Allende, y que catequizando los pueblos a toda prisa, era ya necesaria la fuerza armada para perseguir y contener la insurrección, dispuso inmediatamente que marchasen a Querétaro 3 000 hombres de infantería y caballería con 4 cañones volantes al mando del Coronel Flon Conde de la Cadena, gobernador de Puebla...La prontitud con que estas tropas llegan a Querétaro salvó a esta ciudad (de 80 mil almas) (60)

Por otra parte, los relatos sobre las incursiones de los insurgentes en la ciudad de Querétaro y sus alrededores que Argomaniz, testigo de los acontecimientos, identifica como "el enemigo", caracterizan más bien el carácter popular e indígena del Ejército de Hidalgo y Allende que los supuestos destrozos que las tropas insurgentes hacían en el estado de Querétaro. La descripción de las batallas realizadas en la ciudad, ponen en evidencia que los ciudadanos queretanos, por lo menos en 1810, no se sentían amenazados por la turba levantada por Hidalgo. Poco podían hacer los indios con sus arcos y sus hondas frente a los soldados del virreinato. En la anotación de Argomaniz correspondiente al 30 de octubre de 1810, se lee:

A las siete de la mañana por la parte del Oriente se ha avistado porción considerable de indios insurgentes y alguna caballería, que poco a poco se fueron aproximando

(60) Fray Servando Teresa de Mier, Op. Cit. Pág. 350-351

por los arcos de la cañería y hacienda de Carretas, haciendo mofa y algazara a nuestra gente alarmada. A las once y cuarto del día acometieron por una de las bocacalles de la Plazuela de la Santa Cruz con la mayor intrepidez; pero nuestra gente, sin embargo de ser muy poca pues apenas hay dos o tres compañías del regimiento de Celaya, algunos soldados de Sierra Gorda, voluntarios y paisanos, les hicieron el más valeroso recibimiento con carga cerrada de fusiles y cañón, que duró el tiroteo cerca de dos horas. Muchos de los enemigos huyeron. Se recogieron prisioneros y heridos como trescientos, y seguramente pasaron de doscientos los enemigos muertos. De nuestra parte hubo algunos heridos de piedra por los muchos hondos que despedían, sin que se haya advertido otra desgracia. Religiosos de la Santa Cruz, de N. P. San Francisco y de San Diego andaban a caballo absolviendo a nuestros guerreros y ayudando a las fatigas como buenos soldados. (61)

La participación de los clérigos a favor de los soldados del virreinato, era criticada por los que estaban a favor de la insurgencia, destacando la dureza con la que se atacaba a Hidalgo y Allende y la suavidad que merecían estos frailes revoltosos.

Relata Fray Servando,

Por qué lejos de ser excomulgados, sus gazetas (sic) están plagadas de elogios a los clérigos y frailes europeos del Carmen, de San Fernando de México y Cruz de Querétaro, porque son los primeros en ir a la acción contra los insurgentes y animar la tropa, y porque hacen de soldados y artilleros (62)

Epigmenio González, a quien Manuel Septién y Septién señala como "protagonista principalísimo y testigo idóneo de la revolución de 1810" (63), en sus memorias, con gran ironía destaca la labor de los frailes:

(61) Francisco Xavier Argomaniz, Op. Cit. Pág. 16

(62) Fray Servando Teresa de Mier, Op. Cit., Pág. 371

(63) Memorias de Don Epigmenio González. Relato histórico de los principios de la Revolución de Independencia en 1810. Querétaro, Qro., ed. Gobierno del estado, 1970. Prólogo de Manuel Septién y Septién.

La misión extraordinaria que hicieron los religiosos, a quienes el vulgo llamaba padres santos, los apóstoles de propaganda fide. A la verdad que estos misioneros cumplieron en cuanto les fue posible con su verdadera misión, la regia; trabajando, permitaseme la expresión, no en la viña del señor, sino en la mina del Rey de España (64)

Por su parte, Alamán asienta que "la verba" de los religiosos era empleada por uno y otro bando:

Aldama, exhortó a los eclesiásticos a predicar en las calles y plazas, persuadiendo al pueblo a que defendiese la religión y pelease por ella hasta morir, demanda cumplida por el franciscano fray Bernardo Conde. Por el lado contrario, los eclesiásticos que seguían al partido realista hacían iguales prédicas, distinguiéndose especialmente el padre misionero de la Cruz de Querétaro fray Francisco Bringas, que acompañaba a Calleja. La religión servía así de instrumento a uno y otro partido, y el pueblo no sabía a quien creer. (65)

De hecho Querétaro fue asediada por el General insurgente Sánchez. Pero no la pudo tomar porque la ciudad estaba defendida con fosas, trincheras y tropas, "...fuera de su vecindario armado por disposición de su Ayuntamiento. (66)

Muchas dudas podían quedar del papel que jugaron los queretanos en 1810. No obstante, es el mismo Flon, el conde de la

(64) Idem. Pág. 8

(65) Lucas Alamán, Op. Cit. Tomo II, Pág. 30-31

(66) Fray Servando Teresa de Mier, Op. Cit. Pág. 392. Epigmenio González por su parte relata, "Luego que se supo en Querétaro el pronunciamiento de Dolores, comenzaron a abrir fosos, levantar trincheras y hacer todos los preparativos de defensa para cuyos gastos pidió Rebollo al Ayuntamiento, albacea de Doña Josefa Vergara, el dinero legado a beneficio de la ciudad, el cual era mucho. Y para exhonorar a los albaceas de toda responsabilidad el cura de Santa Ana Lic. Don Félix Osoreo trajo un extenso dictamen apoyándolo en numerosas autoridades, alegando que se empleó en beneficio de la patria. Conocidamente no fue así...". Memorias de Don Epigmenio González...Pág. 7-8

Cadena, en su discurso de despedida de la ciudad el 21 de octubre, el que indica que la población fue obligada a repeler a los insurgentes. También, que la ciudad estuvo amenazada por este personaje. Decía el bando transcrito por Fray Servando:

El conde de la Cadena, comandante en jefe de la 1ª división del Ejército de S.M. el Sr. D. Fernando VII, por el Excmo. Sr. Virrey, para aniquilar la gabiña de ladrones que han reunido los dos monstruos americanos cura de Dolores y Allende. A los Ciudadanos de Querétaro= Queretanos: vuestro proceder durante la residencia de mi ejército en esta ciudad: vuestra sumisión a las legítimas autoridades: vuestro empeño y eficacia en defender la ciudad y la buena causa, me han llenado de satisfacción, noticiándoos, que salgo mañana a convertir en polvo esa despreciable cuadrilla de malvados. Es de mi obligación, y la cumpliré, el instruir al superior gobierno de vuestra fidelidad; pero algunos genios suspicaces quieren atribuir vuestra docilidad a las fuerzas que tengo en esta; no pienso yo de esta manera, y en prueba de ello dejo la ciudad confiada a vosotros y a la guarnición valiente que os queda: vosotros habéis de ser también los defensores; pero si contra mi modo de pensar sucediere lo contrario, volveré como un rayo sobre ella quintaré a sus individuos, y haré correr arroyos de sangre por las calles (67)

Ante estas amenazas, los inconformes, que eran muchos, se unieron a las partidas de insurrectos que se levantaron en la Sierra (68). Región en donde las condiciones de esclavitud y sometimiento de indios y castas mantenidas por los hacendados, habían convertido a estos trabajadores en un caldo de cultivo para la insurgencia. El control militar de la región se dificultaba, a diferencia de lo que sucedía en la capital que era la otra zona efervescente, por lo incomunicado y abrupto de su territorio.

(67) Fray Servando Teresa de Mier, Op. Cit. Pág. 393. subrayado en el original.

(68) La Revolución de Independencia en la Sierra Gorda, Manuscrito inédito con los partes de Guerra en los años 1814 y 1815, Querétaro, Documentos para la historia de Querétaro No. 4, ed. Gobierno del Estado, 1971

Condiciones que convirtieron a la Sierra Gorda, como lo registra Tutino, en un bastión de las rebeliones agrarias. (69)

Los serranos levantados en armas con frecuencia asaltaban las haciendas situadas en los valles de San Juan del Río y Querétaro y en la misma Sierra Gorda. Entre los muchos hacendados afectados por los rebeldes se puede citar a Mariano Tinajero quien había adquirido la hacienda de San Nicolás del Pozo, en 1809, en remate público de los bienes de la testamentaria de la señora Nicolasa de la Vía. Testamentaria que se había declarado en incapacidad financiera para liquidar a sus acreedores. No obstante, en 1818, Mariano tinajero explica que no había podido cumplir con sus obligaciones crediticias -adeudos con que había adquirido la hacienda- , "acosado como estaba por los continuos robos de los rebeldes". Hasta entonces el hacendado había disfrutado de la confianza de los acreedores quienes le habían concedido un plazo de prórroga confiados en que la inestabilidad social sería controlada. Sin embargo para ese año 1818, Tinajero llega a la conclusión que sus esperanzas y las de los acreedores eran infundadas:

continuyendo los saqueos no me han dejado mulas para el cultivo de la hacienda, ni arbitrio para girarla y pagar los réditos...asi me veo descubierto en \$200 a favor del convento de San Francisco cuyo R.P. Guardiano me amenaza con la ejecución. (70)

La hacienda de Nuestra Señora de Buena Esperanza, propiedad

(69) John Tutino, From insurrection to Revolution in México. Social bases of agrarian violence 1750-1940, Princeton University Press, USA, 1988, Págs. 196-197.

(70) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/35

del Ayuntamiento de Querétaro, también estuvo sujeta a las incursiones de los rebeldes. En 1814, por ejemplo, Agustín Casuso administrador de la hacienda, envía una nota del capitán Pedro Sierra en donde se asegura que la hacienda está en "inminente riesgo de ser invadida de los enemigos". Para evitar el daño, el Ayuntamiento no sólo solicita una tropa que resguarde aquel punto, sino que también indica a Agustín Casuso que venda el maíz al "precio que pueda" mandando el dinero diariamente a la ciudad de Querétaro y todo el maíz que pueda acumularse en la alhóndiga. (71). En diciembre de 1818, la hacienda fue invadida por los rebeldes dejando como saldo 9 soldados muertos de la tropa afincada para la defensa de la hacienda. (72) Mariano Fernández de Jáuregui, 2do hijo del Marques del Villar, en diciembre de 1817 camino a sus haciendas "y más allá de la cañada" fue asaltado y fusilado por una gavilla de 300 insurgentes que comandaba Sebastián González. (73)

Es innegable hoy día que la lucha por la independencia afectó los distintos renglones de la economía y modificó la vida social. Enfrentó a los españoles con los mestizos y se acumularon rencores personales y familiares entre los pequeños comerciantes como Epigmenio González que fueron denunciados-traicionados y perseguidos sin tregua -encarcelados unos y desterrados otros- hasta acabar con el foco de la insurrección queretana. No obstante, en la ciudad de Querétaro no fue la furia irreverente de

(71) Testamento de María Josefa Vergara Hernández, Op. Cit. Pág 121.

(72) Idem. Pág. 204.

(73) Acuerdos Curiosos, Tomo IV, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1989, Pág.373,

la "masa incivilizada", que relata Abad y Queipo, la que consumió el caudal acumulado por los ricos empresarios y comerciantes de la ciudad. El Corregidor Miguel Domínguez en la carta que dirige al Virrey Francisco Javier Venegas el 4 de diciembre de 1811, no oculta los sentimientos de opresión y furia contenida en Querétaro por el deterioro económico y social sufrido en la ciudad por la persecución tenaz de las fuerzas virreinales. Señala que si bien algunos obrajes -fuente fundamental de la economía de la ciudad- se habían parado por falta de materias primas, otros lo habían hecho porque se "...convirtieron en cárceles, como que se llegaron a reunir aquí más de 1 000 prisioneros y en otros porque sus dueños recelaron juntar gente plebeya..." (74)

Distante de los acontecimientos. Antonio del Raso midió los efectos de las luchas por la independencia en la agricultura a partir de los diezmos. Dice,

Allá por los años de 1796 a 1800, importaban los diezmos 140 007 pesos, deducidos de 1.406 070 pesos a que llegaba el valor de la agricultura...Por motivo de la insurrección decayó de tal modo este ramo que un quinquenio de 1816 a 1820, que tenemos de la contaduría nacional de diezmos...se ve que solo producen los diezmos 80 000 pesos en el departamento (75)

Si bien los efectos de la lucha por la independencia fueron devastadores en lo que al valor de la propiedad raíz se refiere en virtud de que las propiedades disminuyeron 50% de su valor en 1810 (76), posiblemente una de las repercusiones mas serias de la lucha

(74) Miguel Domínguez, "El sueldo del Corregidor", en D.A. Brading, Noticias sobre...Pág. 316.

(75) Antonio del Raso, Op. Cit. Pág. 41

(76) Abad y Queipo, Edicto 12 de diciembre de 1812, Op. Cit. Pág.

por la independencia en Querétaro haya sido su impacto social. La represión política y el control militar que se mantuvo en la ciudad para impedir que fuera tomada por los insurrectos, porque entonces Querétaro era símbolo de la libertad y al mismo tiempo símbolo de la fortaleza y del poder español, aniquiló las aspiraciones políticas de los queretanos. Los insurgentes y sus simpatizantes fueron obligados a vivir escondiendo sus verdaderas opciones políticas. La corriente española y realista se impuso en la sociedad. Sin embargo no se pudo arrancar de raíz la rebeldía acumulada en los pequeños comerciantes y en los mestizos. Convivieron así las dos posiciones. Una franca y abierta, la oficial, que representa desde entonces la ideología política queretana. Ideología que llega a las Cortes españolas de 1810 y 1821 y al Congreso Constituyente de 1824. La otra, la rebelde, oscura y subterránea, que mantiene en pie de lucha a la Sierra Gorda del lado queretano, llega al Congreso de Apatzingán en 1814.

Paradójicamente, estas dos posiciones antagónicas, desde sus trincheras ideológicas, sentaron las bases que dieron lugar a la conformación de Querétaro como una entidad política y geográfica, soberana del México independiente. Como dice Antonio Septién y Villaseñor, "si la importante ciudad de Querétaro era un punto de apoyo para las operaciones militares de los realistas, para los independientes continuaba siendo el núcleo de la revolución".(77)

Fue esta participación de los queretanos en la Revolución de 1810 la que quedó asentada en el primer decreto constitucional

(77) José Antonio Septién y Villaseñor, Memoria Estadística del Estado de Querétaro, obra póstuma publicada por los hijos del autor, Querétaro, Tip. González Legarreta, 1875, Pág.69-70

del México independiente. Cuando "El Congreso nómada pudo disponer en el ardiente pueblo de Apatzingán, durante septiembre y octubre de 1814, de cierto margen de seguridad..." dice Ernesto Lemoine, se promulgó el 22 de octubre de 1814 el Decreto Constitucional para la libertad de la América mexicana.(78) Entre los 11 constituyentes firmantes figuraba el Lic. Manuel Alderete y Soria, representante de Querétaro,.

3. Querétaro: de corregimiento novohispano a estado de la Federación.

El peso político de Querétaro en la lucha por la independencia y su representación en el Congreso de Apatzingán, le garantizó su inserción, por primera vez, como una provincia independiente de México, aunque fuera, como dice José Miranda que consideraban los constituyentes, "...mientras no se hiciese una demarcación exacta del país". Entre las 17 provincias mencionadas en el Decreto de 1814 figuraba Querétaro. Provincias que, comenta José Miranda, "...no podrían separarse unas de otras en su gobierno, ni menos enajenarse en todo o en parte... .(79)

La mención de Querétaro como provincia independiente en 1814, llama la atención de Edmundo O'Gorman quien considera que, "la aparición de Querétaro como provincia es novedad". Y así era en efecto desde la perspectiva jurídica. Hasta 1814 en que aparece como provincia independiente en el primer decreto constitucional

(78) Ernesto Lemoine, "Ideario político de la Revolución de 1810" en *Independencia y Revolución mexicanas*, México, UNAM, 1985, Pág.36

(79) José Miranda, *Las ideas y las instituciones políticas mexicanas*, México, UNAM, 1978, Pág. 358-359. También en Edmundo O'Gorman, Op. Cit. Pág. 32

de México, Querétaro pertenecía a la Provincia de México. Sin embargo, había antecedentes históricos y jurídicos que avalaban a la ciudad y a su partido. Si bien no había sido erigida en cabecera de intendencia como dice Ramón María Serrera Contreras, "... a pesar de que tanto la población como la actividad económica de la ciudad y su jurisdicción superaban con creces a las de otras intendencias establecidas..."(80) El ayuntamiento de la ciudad había logrado, como caso excepcional en el virreinato, después de serios conflictos reseñados por Serrera Contreras, que Santiago de Querétaro siguiera siendo considerado en 1794 como un corregimiento administrado por un Corregidor de Letras.(81)

El antecedente jurídico de 1794 que había creado el puesto de Corregidor de Letras, a principios del siglo XIX desempeñado por el Lic. Miguel Domínguez, situaba a Querétaro como una entidad independiente. Sin duda esta peculiar característica de Querétaro de ser territorio de la Provincia de México, pero administrado por un Corregidor, determinó la otra condición que abrió el camino a Querétaro. En la convocatoria de la Real Audiencia Gobernadora en 1810, se considera a Querétaro como una entidad provincial que debía mandar diputado a las Cortes extraordinarias que habían de celebrarse, como decía el Bando, con la concurrencia de Diputados de los dominios españoles de América y de Asia.

(80) Ramón María Serrera Contreras, "La ciudad de Santiago de Querétaro a fines del siglo XVIII apuntes para su historia urbana", en Anuario de Estudios Americanos, 1973, Pág. 489

(81) Idem. Pág. 523. El carácter de corregimiento se le había otorgado a Querétaro en 1700. Ver Arturo Domínguez Paulín, Integración histórica, política, social y económica del Estado de Querétaro, Sociedad mexicana de Geografía y Estadística en la provincia, México, 1966, Pág. 89.

Vendrán a tener parte en la representación nacional de las Cortes extraordinarias del Reino, Diputados de los virreinos de Nueva España, Perú, Santa Fé y Buenos Aires, y de las capitanías generales de Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Provincias Internas, Venezuela, Chile y Filipinas. Estas diputaciones serán una por cada capital cabeza de partido de estas diferentes provincias..

Debiendo en consecuencia a procederse sin la menor demora a las elecciones de Diputados por el Ayuntamiento de esta capital, y por los de Puebla, Veracruz, Mérida de Yucatán, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Tabasco, Querétaro, Tlaxcala, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander (82)

La importancia que tiene el que la Real Audiencia Gobernadora en 1810 incluyera a Querétaro como cabeza de partido de una provincia de manera similar a las Intendencias radica en el precedente sentado. Como indica Hale, "Las intendencias formaron las unidades para las diputaciones de 1821 y más tarde para los estados del sistema federal..."(83) No obstante este precedente, en la división territorial de la Constitución Española de 1812, se sigue considerando a Querétaro como parte de la provincia de México.

La inclusión de Querétaro como Diputación provincial a las Cortes extraordinarias de 1810, adquirió su justo valor hasta 1820, cuando se jura la Constitución Española de 1812 que restablece las diputaciones que habían sido suprimidas por Fernando VII el 4 de mayo de 1814 al abolir la Constitución (de

(82) Bando dado en el Real Palacio de México a 16 de mayo de 1810. Por mandato de S.A. la Real Audiencia Gobernadora. Consultado en Biblioteca Condumex.

(83) Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, Siglo XXI, Ed., México 1977, Pág. 82

1812). (84) Estos antecedentes pesaron en ultramar y la convocatoria a Cortes de 17 de noviembre de 1821 de nueva cuenta incluía a Querétaro. (85)

Bajo el Imperio de Iturbide, según el Bando de Jose Antonio Andrade del 3 de diciembre de 1822, la Junta Nacional Instituyente del Imperio mexicano, había decretado -por la consulta hecha por la diputación provincial de Querétaro sobre la renovación de individuos de su ayuntamiento- que se rigiera por lo que previene el decreto de las Cortes de España de 27 de septiembre de 1813. Es decir, a finales de 1822 ya no se ponía en duda la situación de Querétaro como diputación de provincia y como sede de un Jefe político, como lo indicaba la instrucción para los ayuntamientos constitucionales, Juntas provinciales y Jefes políticos superiores, decretado por las Cortes Generales y Extraordinarias el 23 de junio de 1813 (86) . Finalmente, mediante el decreto de 22 de agosto de 1823, se define la posición de Querétaro como provincia:

El soberano Congreso mexicano ha tenido a bien decretar que interin se hace la división territorial de las provincias, la de Querétaro, para su gobierno económico y

(84) Idem, Pág. 82

(85) Es importante señalar que tanto D.A. Brading como Argomaniz, Francisco Javier, en el Diario de Querétaro correspondiente al año 1821, señalan que fue elegido diputado a Cortes por Querétaro el Dr. Félix Osóres, cura de Santa Ana. Sin embargo, José Antonio Septién y Villaseñor en la Memoria Estadística ya citada, señala que Querétaro nombró como su diputado a Cortes a José Manuel Septién y Primo.

(86) Condumex, Fondo I, 2 L.G. 1031. Durante el año 1821, Querétaro que no había dejado de ser defendida por los realistas, cayó finalmente frente a Iturbide quien dejó al Teniente Coronel D. Miguel Torres al mando de la Provincia de Querétaro...". Antonio Septién y Villaseñor, Op. Cit. Pág. 128

político, se compondrá del que hoy tienen los partidos de su capital, Cadereyta y San Juan del Río.

Estos antecedentes jurídicos, políticos y sociales parecían hacer incuestionable la independencia de Querétaro. Sin embargo, en el Congreso Constituyente de 1824, la naciente nación mexicana exacerbadamente antiespañola y celosa de la libertad de las provincias, negaba a Querétaro el derecho a constituirse en un estado libre y soberano. En los debates del artículo 7 del Acta Constitutiva de 1824 se levantaba la acusación, exagerada decían los representantes queretanos, "de no haber luchado por la libertad de México..." (87)

Crítica que parece "injusta y desproporcionada" como lo decía el cura Osoreo. Sin embargo no se puede negar que el dominio de los españoles sobre la ciudad de Querétaro se mantuvo hasta 1821, aún cuando este dominio estuviera fincado en la sujeción religiosa de la iglesia católica (88) y el control político y militar ejercido sobre la ciudad.

Las dificultades enfrentadas en 1824 para lograr la

(87) En Defensa de Querétaro, Discurso pronunciado por el Dr. Félix Osoreo en el Congreso Constituyente de 1824, Querétaro ed. Facsimilar del Gobierno del Estado, 1969

(88) Lucas Alamán en el Tomo III de la historia de México ya citada, relata el fermento que había en Querétaro a favor de la insurrección, y las misiones religiosas realizadas por los religiosos que apoyaban a los realistas para influir en la opinión de la población. Indica Alamán, por ejemplo, que el padre Manuel Toral, a pesar de la oposición de la mayoría de los religiosos de Querétaro, continuó con su empresa (de las misiones), "llevándola tan adelante que intentó formar una especie de inquisición: él mismo y sus compañeros, así como los religiosos de la Cruz que todos eran europeos, negaban la absolución a los penitentes, si no iban a delatar a los que sabían o suponían que eran afectos a la revolución". Pág. 394-395.

independencia del territorio queretano, si bien nacían en aquella acusación temprana a Querétaro como bastión conservador, no evadían el ser producto de los serios problemas que enfrentaban los constituyentes de 1824 para precisar las fronteras geográficas de los estados libres y soberanos de la emergente nación mexicana. Aún cuando las dificultades eran diversas, todas incidían en el campo de lo político, en el de la construcción de un Estado nacional. Las resistencias eran claras. Por un lado se expresaban las relaciones de poder que se establecían entre las distintas élites regionales para ampliar las extensiones territoriales de las provincias, y, por otro, la debilidad jurídica, política, social y económica en que se encontraba México -a raíz de la revuelta contra Iturbide- por carecer de un gobierno central que concentrara las fuerzas regionales. Así, la necesidad de recrear un gobierno central que mantuviera "ligado lo que estaba desunido", como dice Reyes Heróles en su clásica obra *El Liberalismo mexicano*, dió lugar a la Constitución federalista de 1824. Sin embargo, el esfuerzo integrador no pudo liquidar los conflictos y diferencias suscitados entre los diversos grupos regionales por expandir su fuerza política y económica, fundamentada en la gran propiedad. Tal parecía que la lucha por la independencia no había cuestionado el sistema de la hacienda y los privilegios y prebendas que representaba.

Las diferentes concepciones jurídicas existentes entre los grandes pensadores de esta época, defensores del federalismo, como lo eran Mora, Ramos Arizpe, Mier, Zavala y Gómez Farías, por mencionar sólo algunos, se enraizaban como lo demuestra Charles A.

Hale (89), en lo tocante a la prerrogativa de los estados y los municipios. En el ámbito en donde sus decisiones afectaban sus intereses políticos personales y las exigencias y prerrogativas de los hacendados. Condiciones que llevan a Hale a "...insinuar que el federalismo, como forma jurídica, no fue un rasgo distintivo del liberalismo político mexicano". (90)

Las discusiones más álgidas se sostenían sobre los asuntos administrativos de índole práctica que, sin lugar a dudas, tenían una fuerte connotación política. En 1824 no solo había que fundamentar constitucionalmente la soberanía y autonomía estatal que hiciera factible el pacto federal, sino también, había que precisar la extensión de los estados y su organización interna, que para los liberales radicaba en el gobierno municipal. Fue en este terreno, en el de los municipios y su autonomía administrativa, en donde se dieron las peleas más encarnizadas en todo el país porque afectaban el predominio de la aristocracia terrateniente. Asunto que no era desconocido por los pensadores liberales. Mora llegó a insinuar, asienta Hale, "...que quienes se oponían a la libertad municipal eran realmente quienes consideraban que un consejo municipal independiente minaría sus antiguas posiciones de señores feudales".(91) José María Luis Mora expresamente señalaba que era sumamente difícil modificar la división territorial heredada de las intendencias, "...sin experimentar grandes resistencias provenientes sin duda de los

(89) Charles A. Hale, *El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853*, Siglo XXI Ed. 2a ed., México 1977, Págs. 86-87.

(90) Idem, Pág. 87

(91) Idem. Pág. 91

poderosos y mutos intereses que las localidades de cada sección ha contraído entre sí y que han sido fortificadas por el tiempo y la costumbre..."(92) Por otra parte, en el pueblo predominaba una visión mítica de las gestas heroicas realizadas por la aristocracia terraniente: la sombra de las regias personalidades y fortunas de los señorones de Querétaro, -los condes de Sierra Gorda y los condes de Regla y marqueses de Guadalupe y del Villar del Aguila y Sierra Nevada, los grandes bienhechores y protectores de la ciudad- en 1824 todavía impregnaba el medio social. Algunos años más tarde, Guillermo Prieto consignaba el hecho de que en Querétaro, "...aún se endiosan los viejos recordando aquellos señores sus antepasados." (93)

Las diatribas políticas entre conservadores y liberales no llegan a opacar el trasfondo económico y el predominio de los intereses particulares de las clases propietarias que lograron, en medio de los conflictos nacionales, imponer las demandas de expansión territorial de sus fincas rurales. Los hacendados, como un factor real de poder, fueron los que definieron el debate sobre los límites estatales y los que administraron como materia privada los asuntos públicos de los municipios, los gobiernos estatales e, incluso, el gobierno central, el de la República.

Sobre esta materia, Francois-Xavier Guerra encuentra que la tendencia al desmembramiento del territorio nacional, observada en "el clima de guerra e inseguridad de la primera mitad del siglo

(92) José María Luis Mora, México y sus Revoluciones, México, ed. Facsimilar, F.C.E. e Instituto Cultural Helénico, Tomo I, 1986, Pág. 177.

(93) Guillermo Prieto, Op. Cit. Pág. 118

XIX", favorecía la situación de que, "para sobrevivir muchos individuos o regiones más o menos vastas se pusieran de hecho bajo la protección de los poderosos grandes hacendados y jefes militares". Afirma que "el gobierno central, favorece, a su vez, la aparición de nuevos estados para hacer desaparecer a los rivales capaces de llegar hasta la independencia" (94). Bajo esta lógica, Guerra explica la fragmentación del estado de México que comprendía en 1827 además de su territorio actual, a los hoy estados de Morelos, Hidalgo, (erigidos en 1869) (95) y la mayor parte de Guerrero (erigido en 1849) (96). Con anterioridad, en 1824, el territorio del estado de México había dado lugar al Distrito Federal. Cada uno de estos despojos territoriales fueron

(94) Francois-Xavier Guerra, México del Antiguo Régimen a la Revolución, México, F.C.E., 1988, Pág. 46.

(95) El estado de Hidalgo se formó el 16 de enero de 1869, con la porción que formaba "el 22 distrito militar, creado por decreto de 7 de junio de 1862...comprendida en los distritos de Actopan, Apam, Huascalzotla, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipan y Zimapan..." Archivo Histórico del estado de México, Catálogo Ramo de Límites, México, Gobierno del estado de México, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Instituto Mexiquense de Cultura, Dirección de Patrimonio Cultural, 1988, Pág. 29. En este mismo Catálogo se incluye el decreto del 16 de abril de 1869 (publicado el 24 del mismo mes) que crea el estado de Morelos con la "...porción comprendida en los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que formaron el tercer distrito militar, creado por decreto de 7 de junio de 1862". Pág. 33

(96) El decreto publicado el 27 de octubre de 1849 que creaba el estado de Guerrero decía en su artículo 1º: "Por cuanto ha sido ratificada por las Legislaturas de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas, la ley del Congreso de la Unión de 15 de mayo del corriente año, queda erigido ...un nuevo estado...con el nombre de GUERRERO, compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa y la municipalidad de Coyuca, pertenecientes antes los tres primeros al estado de México, el cuarto al de Puebla y la quinta al de Michoacán". Idem. Pág. 26

motivo de querellas profundas entre las élites dirigentes.

En lo que respecta a Querétaro, provincia que según el diputado Félix Osoreo a nadie rivalizaba ni daba que sentir, (97) los problemas se agravaban porque los queretanos sabían que su territorio no era uno. Eran pedazos, girones de tierra, regiones aisladas que los hacían débiles ante el empuje integrador que se impulsaba en el país. También sabían que la lucha por la independencia había ocasionado un fuerte deterioro en todas las ramas de la economía, concentrada en la zona más productiva de la entidad, la de los Valles de Querétaro y San Juan del Río, la zona del Bajío que termina en Guanajuato. Estaban políticamente conscientes de que se tenía que hacer un gran esfuerzo productivo y social para impedir que su territorio árdamente conquistado, les fuera poco a poco arrebatado por las ambiciones y fuerza de sus vecinos; fuerza equiparable a la debilidad de Querétaro después de tantas diatribas internas.

La energía de los queretanos en su propósito de defender el espacio geográfico y político ratificado en 1824 quedó sintetizado en el famoso discurso de Félix Osoreo en el Congreso constituyente de ese año. Claramente se asienta que las necesidades de Querétaro, sus grandes retos como estado soberano, se integran en la lucha frontal por el acopio y concentración del agua, fondo real de los conflictos fronterizos entre las entidades federativas. Decía Félix Osoreo:

La capital de Querétaro y su peculiar partido, necesitan de habilitación y fomento para restablecer su industria y

tejidos de lana y algodón, para introducir en ellos, el cultivo y elaboración de cera y seda. San Juan del Río con cuarenta y tantos mil habitantes en su partido y 42 haciendas muy pingües, aún necesita todavía de grandes arbitrios para sacas y acopios de agua, y para plantíos de árboles, principalmente en sus célebres llanos del Cazadero, que desde el tiempo del virrey Mendoza en que se aumentaron los cazadores de venados, empezó a dejar de ser aquel territorio un bosque y un mesquital espeso. El de Cadereyta exige convergencia para multiplicar riquezas a vuelta de pocos años, sumas competentes para poblar sus minas, habilitar sus estancias y crias de todo ganado, para hacerse venir un río y fertilizar un desmedido llano que en el umbral mismo de la villa pueda sembrar más de seiscientas fanegas de maíz, para restablecer sus manufacturas y comercio de jarcia y lechugilla (98)

Con el programa de fortalecer la economía del estado y de unificarlo políticamente, de inmediato se tomaron medidas para defender la soberanía estatal, por el punto que se consideraba el más amenazado, el de la Sierra Gorda, por sus nexos geográficos con los estados de México y noreste de Guanajuato. Estados, con los que los habitantes de los poblados de la Sierra del lado queretano (Landa, Cadereyta, Real del Doctor, Santa María Peñamiller, Real de San José del Pinal y el pueblo de Jalpan), (99) tenían mayor relación e intercambio social y económico, mientras se mantenían alejados del centro político de Querétaro. siempre armado y dispuesto a combatir a los rebeldes serranos.

Para evitar el desmembramiento de las poblaciones de la Sierra entre los estados circunvecinos, primero se buscó el apoyo de los gobernadores, de los jefes políticos y militares y posteriormente se emitieron dos decretos de suma importancia para hacer popular al gobierno de Querétaro.

(98) Idem, Pág. 12.

(99) Los gobernadores de Querétaro. Historia (1823-1987), Jr. Fortson, y Cía. S.A. ed. 1987. Pág. 17.

Uno, el más notable, fue el decreto de 15 de noviembre de 1825 que prohibía la esclavitud, práctica usual en la Sierra y fuente de ingresos para los comerciantes sanjuanenses. El otro decreto, buscaba el repoblamiento del municipio más lejano, el de Jalpan, con gente industriosa queretana: "...Diez Marine ...ofreció exentar de alcabalas y diezmos por...diez años a quienes se trasladaran al municipio de Jalpan y ahí levantarán sus viviendas y labrarán la tierra".(100)

Aún cuando sería preciso indagarlo con mayor profundidad, es posible señalar la hipótesis de que el desmembramiento de la Sierra Gorda entre los tres estados sobre los que extendía su territorio, Querétaro, México y Guanajuato, respondió a esa corriente ideológica de un sector de los españoles en contra de los indios que había permeado el pensamiento de los criollos liberales. Porque es indudable que por su extensión y composición geográfica, física y socialmente la Sierra Gorda podía haber constituido un estado libre y soberano (101) El carácter de sus pobladores, "los bárbaros chichimecas", sin duda era el factor de mayor peso para impedirlo. Además como lo indica el decreto de colonización de Diez Marine, la población indígena, carne de cañón de los ejércitos y de los laborios, había sido diezmada también por las enfermedades endémicas y epidémicas que asolaban al país.

(100) Idem. Pág. 21

(101) Es importante señalar que el decreto del 1º de diciembre de 1853 creaba el nuevo territorio de Sierra Gorda compuesto de las excolonias militares de San Ciro y Arista y "la parte correspondiente de la Sierra de Guanajuato hasta la de Santa Rosa Uraga" (Art.1º). la Villa de San Luis de la Paz sería la capital del territorio (Art. 2). Por decreto de 7 de marzo de 1854 se señalan los límites de la nueva entidad. Ver Dublán y Lozano No. 4125 y 4224.

De cualquier manera, la incomprensión que demostraron tener los criollos liberales sobre el problema indígena, favoreció a Querétaro en la defensa de su territorio.

El otro cometido no menos importante fue realizado en 1826 por Manuel Yañez. Era necesario levantar un mapa con las especificidades territoriales del estado, no solamente por el mandato dado por el Congreso Constituyente de 1824, sino también para defender el suelo queretano. Así, como lo señala Arturo Domínguez Paulín, una vez emitida la primera Constitución del estado de Querétaro, sancionada el 12 de agosto de 1825 y promulgada el día siguiente, se indica en el título II la división del territorio:

El territorio del Estado se compone por ahora del que han comprendido los partidos de la capital, San Juan del Río y Cadereyta. Art. 4: El territorio se dividirá para lo sucesivo en seis distritos que serán: Amealco, que comprenderá las municipalidades de su capital y Real del Doctor, San Juan del Río, que comprenderá la municipalidad de su nombre, San Francisco Tolimanejo, Santa María Peñamiller, y San Miguel Tolimán. Querétaro, que comprenderá las municipalidades de su capital, San Francisco Galileo, San Pedro de la Cañada y Santa Rosa. Xalpam, (Sic) que comprenderá las municipalidades de su capital, San José de los Amoles, San Pedro Escanela, Landa, Arroyoseco y Nuestra Señora de Guadalupe Ahuacatlán. Pacula y Jiliapan, pertenecerán a este distrito, cuando se declare que corresponden al estado". (102)

Los problemas limítrofes de Querétaro con los estados vecinos, fuente inagotable de conflictos durante el porfiriato, se

(102) Arturo Domínguez Paulín, Integración histórica, política, social y económica del estado de Querétaro, México, Sociedad mexicana de Geografía y Estadística en la provincia, 1966, Pág. 49-51.

inician desde 1825. Con el entonces estado de México, los conflictos se originan por la defensa de Pacula y Jiliapan. Muchos años más tarde, Antonio Septién Villaseñor, consigna la pérdida de esos dos lugares:

Los cerros más notables que circuyen (sic) el Estado, a partir del S.O. hacia el N.E., son los de San Francisco, Santa Rosa, y el Mastranzo, siguiendo en la misma dirección una extensa cordillera que atravieza el distrito de Cadereyta, avanzando por las municipalidades de Pacula y Jiliapan, que en otro tiempo formaron parte del territorio de Querétaro y hoy pertenecen al de Hidalgo (103)

La subdivisión política de Querétaro contenida en la carta constitucional del estado de 1825 fue asentada en el mapa elaborado por Manuel Yañez:

comprendido todo desde San Juan de Güedo, en jurisdicción de Santa María Amealco, hasta Nuestra Señora de Guadalupe de Arroyoseco, en jurisdicción de Santiago de Jalpam: (Sic) tiene de largo 52 3/4 leguas comunes de Sur a Norte y 26 de oriente a Poniente en su mayor anchura, tomada del Batán del Aguacate, en términos de Cadereyta, a la Estancia de las vacas, en los de la villa del Pueblito. En su menor longitud tiene 10 leguas de Nuestra Señora de la Luz Tancoyol al citado Arroyoseco, últimos pueblos del departamento, al Nor. Nord. E. de la capital (104)

Nadie a partir de 1824 podía disputar a Querétaro su derecho a ser un estado libre y soberano.

Ganada la posición política los queretanos podían dedicarse a recuperar la bonanza perdida, bajo el amparo del orden y la estabilidad que enarbolaba el Plan de Jalapa. Plan que llevó a

(103) Antonio Septién y Villaseñor, Op. Cit. Pág. 139

(104) Antonio del Raso, Op. Cit. Pág. 12

Anastasio Bustamante al poder ejecutivo el 31 de diciembre de 1829. Administración conocida como de Alamán (1830-1831).

Las tendencias centralistas del nuevo régimen, también distinguido por los sangrientos métodos usados para someter a las facciones y grupos sociales opuestos al cambio de gobierno (105), si bien amedrentaban a los queretanos por lo reducido de su territorio, la falta de unidad política de la Sierra Gorda y la pobreza que todavía predominaba en las ramas de la economía, no lograban detener su impulso para iniciar un plan de recuperación.

La clase política dirigente de Querétaro, los aristócratas hacendados y los dueños de los obrajes, sabiamente consideraban que había que tomar medidas oportunas para fortalecer económicamente la región y enfrentar así los devaneos políticos que predominaban en el país. Era preciso delimitar claramente los límites estatales y distritales para detener los afanes expansionistas de los estados vecinos. Simultáneamente había que fortalecer la agricultura, reanimar la producción de los minerales e impulsar el crecimiento de la producción textil, aprovechando el crédito que abría el Banco del Avío creado por Alamán en 1830.

Estos proyectos se iniciaron en Querétaro durante el corto periodo de la administración Bustamante-Alamán, bajo la dirección de los llamados "hombres de bien", la clase propietaria que pugnaba por la paz tan necesaria a la expansión de la economía.

(106). Bajo sus manos se intentó introducir maquinaria moderna

(105) Silvio Zavala, *Apuntes de historia nacional*, México, SepSetentas, 1975, Pág. 74.

(106) El gobernador nombrado, Manuel López de Ecala pertenecía -como Anastasio Bustamante- a las clases aristocráticas del país. Formado, como los grandes pensadores y luchadores

"telares de moderna invención" (107), y se procuró incentivar la producción agrícola para recuperar la bonanza característica de Querétaro a fines del siglo XVIII.

Sin embargo poco se podía hacer en un país convulsionado por las guerras internas y los conflictos internacionales y con una población temerosa y siempre a la expectativa frente a las disposiciones jurídicas y las extracciones obligatorias que sin prurito alguno dictaba cada gobierno en turno. La situación política parecía inmovilizar a la clase dirigente, siempre activa en la defensa de sus intereses. Esta posición no era exclusiva de Querétaro. Al reinstalarse de nuevo el centralismo, dice Ignacio M. Altamirano:

los antiguos estados de la federación convertidos en departamentos, impotentes, sin caudillos, sin aliento, al ver la inestabilidad de aquellas cosas, se encerraban en un silencio egoísta o se adherían servilmente a esos gobiernos que se sucedían en la metrópoli como vistas disolventes, y que solían a veces no durar ni el tiempo necesario para reabrir la adhesión. (108)

La decadencia que registraban todas las ramas de la economía nacional y las turbulencias políticas a la orden del día durante estos años, condujeron al desastre el proyecto que encabezaban las

sociales de esta época, en las filas de la Iglesia católica, había recibido las órdenes sacerdotales. Era también un rico hacendado -dueño de la hacienda de Patehé y su familia dueña de más de una hacienda en el distrito de Querétaro- y sin duda propietario de obrajes en la capital.

(107) Tadeo Ortiz, "Agricultura, industria y comercio", en Antología, preparada por Alvaro Matute, Lecturas universitarias México en el siglo XIX, México, UNAM, 1972, Pág. 98.

(108) Ignacio M. Altamirano, "Biografía de Ignacio Ramírez", en Ignacio Ramírez, México en pos de la libertad, México Empresas editoriales S.A., 1949, Pág. 27

familias de bien. Al triunfo del pronunciamiento de Santa Anna en 1832, Manuel López de Ecala cedió el poder gubernamental a Lino Ramírez, quien intentó aplicar en Querétaro la reforma que a nivel nacional encabezaba el vicepresidente de la República, Valentín Gómez Farias. El proyecto de Gómez Farias, el primero en el país que pretendía la incautación de bienes del clero, la secularización de la enseñanza y la liberación de los votos monásticos, estaba dice Mora, "sólidamente apoyado en las Cámaras de la Unión y eran ardientemente deseados por las legislaturas de los estados".(109) Sin embargo, el propósito, que enfrentaba abiertamente a las clases aristocráticas, fue acremente rechazado por los hacendados miembros activos del partido conservador y por la Iglesia la institución directamente amenazada.

En Querétaro, Lino Ramírez tuvo que luchar, en versión de Altamirano,

contra el clero, poderosísimo todavía y dominando energicamente las sublevaciones del partido centralista y fanático, como la acaudillada por Domínguez en San Juan del Río, hasta que Santa Anna, ya unido a aquel (y destituido Gómez Farias), envió en 1834 al coronel Franco con fuerzas de México para arrebatárle el gobierno de Querétaro.(110)

Aún cuando la reforma de 1833 fue detenida por Santa Anna,

(109) José María Luis Mora, *Revista Política de las diversas administraciones que ha tenido la República hasta 1837*, México, UNAM, Porrúa, 1986, Pág. 81.

(110) Ignacio M. Altamirano, "Biografía de Ignacio Ramírez", en *Ignacio Ramírez, México en pos de la libertad*, México, Empresas Editoriales S.A., 1949, Pág. 20. Mora señala que el que controló a Querétaro fue el General Mejía, concretamente, las fuerzas comandadas por el general Cortázar. *Revista Política*, UNAM, y Miguel Angel Porrúa, México, 1986, Pág. 84.

después de este ensayo, precedido de diversos proyectos regionales encabezados por Mora y también por Lorenzo Zavala, cada vez fue más claro que la liberación de los bienes de "manos muertas" generarían recursos fuertes a las exhaustas arcas del erario público y romperían el dique que desde fines del siglo XVIII, se afirmaba, obstaculizaba la expansión de la producción agrícola.

Para la Iglesia fue un aviso casi premonitorio de la legislación que se dictaría en la segunda mitad del siglo XIX, las llamadas Leyes de Reforma. Notificada de las intenciones, tomó sus prevenciones dice Mora:

Desde antes de la revolución de Arista habían empezado las enajenaciones simuladas, o a precios muy bajos de las fincas de los conventos y provincias de regulares. Una asociación de compradores la propuso al provincial y definitorio de Carmelitas, y D. Francisco Sánchez de Taggle se constituyó el centro y alma de este negocio. El era a la vez, director de los asociados, consultor de los Carmelitas y comprador él mismo por su cuenta...el gobierno no fue de esta opinión y empezó a prohibir y declarar nulas las ventas...Los frailes...asustados con el riesgo que les amenazaba...estimulados por la esperanza de hacerse dueños personales del producto de las ventas...se prestaron a todo, malbaratando casas muy valiosas y haciendo desaparecer cantidades de mucha consideración. El clero secular más circunspecto e infinitamente más diestro en las intrigas de sacristía, se contentaba con conspirar y fomentar desconfianzas...(111)

El proyecto de desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos a partir de 1833 empezó a ser una realidad política y económica que tendría importantes repercusiones en la formación del Estado moderno.

Ante el empuje de las fuerzas sociales innovadoras y su
(111) Mora, Revista Política...Pág. 152

empeño en destruir para siempre la organización social y jurídica propia de la colonia, las clases aristocráticas no pudieron sostener sus modos de hacer fortuna. El proceso de construcción de México como nación necesariamente atacaba de muerte a las instituciones, los sistemas y las teorías emanadas de la metrópoli española. Imponía, casi por necesidad, la libertad del comercio, del trabajo y de la propiedad de la tierra. El latifundio, el agio y los llamados "bienes de manos muertas" por improductivos, herencia algunos de la ley de premios (112) y mercedes reales, y otras de las prácticas rentistas de cesantes y pensionistas militares, religiosos y herederos de capellanías laicas y religiosas, fueron combatidos con empeño.

Carentes del apoyo jurídico que los sostenía los representantes del viejo orden que se negaron a modificar su concepción del mundo fueron destruidos. Su extinción, como señala Mora, "...vino de su peso, y sin ningún esfuerzo para acordarla, tan destituido así se hayaba de apoyo y tanto le era contraria la opinión de todo el público..."

En Querétaro bastaron dos décadas para sumir en la pobreza a muchas de las antiguas fincas rústicas famosas por su riqueza productiva. La cercanía que existía entre el esplendor y la decadencia de la hacienda fue determinante porque los queretanos en sus dos posiciones de clase -aristócratas y plebe- se mantuvieron atados a la riqueza alcanzada a fines del siglo XVIII,

(112) Silvio Zavala, *Las instituciones Jurídicas en la Conquista de América, México*, Ed. Porrúa 2a. ed. 1971: "más allá del reparto del botín y de los cautivos, los conquistadores aspiran a gozar de premios estables en la sociedad que nacía de la sujeción de los indios..."

que sabían se había fincado en la gran propiedad. Posiblemente por eso apostaron sistemáticamente por el viejo régimen o por un sistema de gobierno que favoreciera sus intentos de conservar la gran propiedad y el feudo caciquil. Forma de organización que había garantizado la protección social y política de los individuos y, sobre todo, el bienestar material de la clase aristocrática.

Pese al esfuerzo tomado en mantener bajo control el destino de la entidad, el deseo de los queretanos de conservar intacta la gran propiedad, estimulados por la fijación histórica de recuperar los modos de producir y las estrategias políticas exitosas de fines del Siglo XVIII, se vió frustrado. La crisis económica que dejó la lucha independentista y el empuje liberal de crear una sociedad de propietarios individuales, introdujo modificaciones sustanciales en la vida cultural y social y en la organización de las actividades productivas.

La inestabilidad política de la época, la restricción de los mercados, el pillaje de las haciendas y la merma de la población en más de la mitad de la que existía a fines del siglo, fueron factores combinados que precipitaron la decadencia productiva de la hacienda y la pobreza de los propietarios. Las hazañas de aquellos ilustres queretanos, españoles de origen, de fines del siglo XVIII pasaron a la historia. Los sistemas de trabajo por ellos impuestos y la organización política sólidamente asentada en los privilegios y prebendas de clase y en los principios religiosos, se resquebrajaron. En medio del caos y la incertidumbre la aristocracia terrateniente asistió a la

destrucción de su obra. Sin alternativa, se vió obligada a liberar las tierras que con tanto empeño y energía había mantenido vinculadas y que habían sido el orgullo y el prestigio de la casa.

Con la venta, traspaso y cesión de los ranchos y las labores anexas de las haciendas y de las haciendas mismas, fraccionadas, y la hegemonía de la aristocracia se hizo añicos. Se inició entonces un largo proceso de reacomodo de los grupos sociales en el campo y la ciudad y de reorganización de las actividades productivas, que no auguraba ni arrojaba, en su momento, saldos favorables. Por el contrario, el debatido nacimiento de Querétaro como estado de la federación y las vicisitudes recorridas hasta 1830 no sólo destruyeron la infraestructura económica, también contribuyeron a exaltar, más allá de lo real, el sistema novohispano. Bajo la óptica productiva del siglo XVIII, el proyecto republicano, federal o central, tendía a inhibir las fuerzas sociales regionales.

CAPITULO II

LAS TRANSACCIONES DE TIERRA EN QUERETARO: DE HACENDADOS A RANCHEROS

Los empeños de la aristocracia terrateniente en frenar los desequilibrios de la producción y los mercados y sus esfuerzos, nunca escatimados, en proteger la gran propiedad fueron en vano. La inestabilidad política de la época y el deterioro económico de las familias propietarias, fueron factores que, sumados a las exacciones económicas cotidianas hasta 1867, minaron la eficacia de la unidad agropecuaria y cercenaron la capacidad de hacer mejoras. Las instalaciones de riego, los caminos, drenajes, eras, trojes y demás fábricas y avíos, sin mantenimiento, inevitablemente tendieron a desmejorar. Por otra parte, la restricción de los mercados y la merma de la población en más de la mitad de la que existía en 1790 tanto por la insurrección independentista como por las pestes que hubo de 1811 a 1821, interrumpieron el proceso de expansión de la agricultura fundado en la abundante fuerza de trabajo existente en Querétaro a fines del siglo XVIII.(1) Los hacendados y los dueños de los obrajes, quienes a la vez eran prósperos comerciantes, se vieron obligados a relegar las tendencias productivas que los habían caracterizado: expandir y consolidar el sistema de la hacienda basados en la gran propiedad territorial y en las innovaciones tecnológicas

(1) En 1810 había en la capital de 58 a 60 000 habitantes y en el padrón de 1822 apenas se reconocieron 20 000 y 32 249 en todo el distrito. Antonio del Raso, Op. cit. Pág. 98.

racionalmente introducidas de acuerdo a la calidad del suelo.

Durante ese largo periodo de 20 años (1810-1830) los propietarios de las haciendas asistieron al derrumbe de los esquemas jurídicos y los patrones culturales que les habían permitido mantener indivisa la propiedad. Por un lado, la legislación del 9 de agosto de 1823 que ordenó la supresión de los mayorazgos. Por otra, el deterioro económico de los propietarios y el auge que tuvo, en el México independiente, la doctrina ilustrada encabezada por Melchor Jovellanos, que atacaba los bienes de manos muertas y proponía la propiedad individual, interrumpió la práctica de vincular las propiedades con fundaciones piadosas y con la imposición de capitales, capellanías de sangre o religiosas, colocados siempre sobre fincas "seguras". Desde otra lógica, los terratenientes también descuidaron la atención de sus haciendas y negocios particulares porque tuvieron que enfrentar los dilemas y los problemas que planteaba el nacimiento de México como nación y la defensa del territorio estatal.

Las transformaciones políticas, económicas y sociales que tendían a destruir las bases del sistema colonial modificaron la visión de los hacendados. A partir de 1824 las propiedades, las fortunas y los negocios particulares dependían, y esto lo sabía la aristocracia terrateniente, de la capacidad política de los gobernadores para conservar a Querétaro como una entidad autónoma y soberana. El empeño por obtener el reconocimiento de la soberanía estatal para sobrevivir en medio del caos nacional, consumió las energías y las fortunas de las familias más

reconocidas, siempre dispuestas a apoyar los movimientos y líderes nacionales que les garantizaban la permanencia de sus posesiones.

Una vez emitida la Constitución del Estado en 1825 y tomadas las decisiones políticas y administrativas más emergentes, los hacendados en el poder intentaron recuperar los niveles productivos de la hacienda, que era el ramo que podía recuperar más rápidamente los niveles de productividad alcanzados a fines del siglo XVIII, porque se mantenían casi intactas las obras hidráulicas. Sin embargo la ruina alcanzada fue de tal magnitud, que los propósitos de recuperación reiteradamente realizados parecían, en 1830, destinados al desastre.

Para ese año, era inocultable la decadencia económica de las familias de los poderosos hacendados de fines del siglo XVIII, quienes habían hecho fuertes inversiones agrícolas y habían tomado las providencias legales para proteger el patrimonio y el buen nombre de su progenie. Sin embargo, los herederos de aquellos prohombres fueron incapaces de absorber las cargas hipotecarias y los gravámenes piadosos que se habían ido acumulando sobre las haciendas y los ranchos. Las fundaciones piadosas después de dos siglos de existencia (XVII y XVIII) habían generado una clase propietaria de capitales que percibía réditos anuales al 5% -posteriormente al 6%- , sin ningún esfuerzo productivo y sin ninguna relación con la tierra o con los bienes que daban origen a las rentas. Individuos rentistas que, al calor de la amenaza de las leyes de nacionalización y desamortización de los bienes de manos muertas tempranamente introducidas en Querétaro por el gobernador Lino Ramírez, reclamaron con energía los capitales

piadosos heredados por generaciones.

Sin embargo, en 1830, las familias propietarias de bienes raíces carecían, de capital líquido para enfrentar las demandas jurídicas interpuestas por los acreedores y por los beneficiarios de las dotes y las capellanías fundadas en tiempos remotos. Falta de liquidez que puede seguirse en las disposiciones contenidas en los contratos de compra-venta de las propiedades y en los arreglos negociados en el caso de aquellas sucesiones testamentarias que se vieron obligadas a ofrecer sus bienes raíces en almoneda pública al mejor postor.

Las transacciones de tierra realizadas entre 1830 y 1860 presentaron una rica diversidad de arreglos. El abanico de posibilidades que la época abría y las especificidades presentes en cada contrato de compra-venta de las propiedades, constituyen, de suyo, una "casuística" generosa para profundizar en las condiciones sociales que auspiciaron la desintegración del sistema de la hacienda en sus unidades anexas, ranchos y labores, y su descomposición en fracciones. En el proceso, si bien no nuevo (2) pero si intensivo durante estos años, se fue abriendo camino el estilo de organizar la producción propios de un sistema con menores alcances fundiarios que los de la hacienda: el denominado

-
- (2) "La gran propiedad no sólo se formaba y conservaba, sino que también se transformaba y deshacía y, muchas veces, en su persistencia secular, dejaba establecidos a su rededor otros tipos de propietarios de menores alcances fundiarios pero con nuevas perspectivas económicas y sociales: rancheros, arrendatarios, apareceros, comuneros y medianos y otros nacientes dueños mayores", Heriberto Moreno García, coordinador, Después de los Latifundios (La desintegración de la gran propiedad agraria en México), El Colegio de Michoacán, Fonapas, 1982, Pág.IX.

en la época "rancho" y que vendría a ser, en el lenguaje del siglo XX, equiparable a la pequeña propiedad. Por otra parte, la disgregación de la gran propiedad propició la diversificación social, política y económica de los propietarios rurales.

El traspaso, venta, cesión y fraccionamiento de las propiedades iniciado en 1830, se intensificó durante la década 1850-1860, porque los acreedores particulares de los hacendados empezaron a mostrarse agresivos en el cobro de los préstamos realizados, una vez que observaron que la emisión de las leyes liberales, la del 25 de junio de 1856, la Constitución de 1857 y los decretos de 1859, podía perjudicar sus intereses. Si bien es cierto que las temidas leyes de nacionalización de los bienes eclesiásticos fueron aplicadas en Querétaro hasta los decretos del 21 de noviembre y el del 4 de diciembre de 1860, emitidos por el gobernador José María Arteaga, las acaloradas polémicas que se habían suscitado durante la celebración del Congreso Constituyente en 1856-1857 y la fuerza ideológica que demostraron los liberales para sostener y consignar sus pretensiones de crear un estado laico y soberano, un poder público claramente diferenciado de la esfera privada y la igualdad de los mexicanos ante la ley, atemorizaron a las clases privilegiadas. Tanto los prestamistas, comerciantes y hacendados, como los rentistas y las congregaciones religiosas sintieron en riesgo sus bienes y la privilegiada posición social que disfrutaban -fueros y privilegios-.

Apreciación que estaba apegada a la realidad. De hecho, a lo largo de los enfrentamientos con los conservadores que apostaban la continuidad, los liberales fueron aquilatando que el éxito de

sus propósitos se asentaba en la destrucción de los baluartes que apuntalaban el antiguo régimen (la aristocracia terrateniente, la jerarquía eclesiástica, las instituciones indianas), y en la formulación de nuevos esquemas jurídicos que obligaran la transformación de las relaciones sociales. En lo básico, los cambios se esperaban de los efectos sociopolíticos suscitados por la definida igualdad de los mexicanos ante la ley, por el despliegue de las oportunidades de ascenso social y por la promesa de una más equitativa distribución de los beneficios sociales.

Con esta claridad de miras, los esfuerzos de los caudillos liberales se concentraron en romper el cordón umbilical que mantenía atada a la República con la España colonial para formar la nación fuerte y soberana que venían soñando desde 1824. Para lograrlo, bien lo sabían, era preciso sostener dos postulados: impulsar una economía libre de ataduras, sana y próspera, enfocada al porvenir, y emitir todas las disposiciones necesarias para propiciar la formación de un grupo social innovador y secular. Condiciones fundamentales para asegurar el carácter irreversible de los cambios introducidos en la sociedad. En este marco se inscribe la insistente y tenaz lucha por acelerar, mediante la legislación emitida, la formación de propietarios individuales que desde distintas posiciones económicas (pequeños, medianos y grandes propietarios) revolucionaran tanto los tradicionales modos de hacer fortuna, como las hasta entonces clásicas maneras de obtener status social.

En medio de estos cambios, los primeros en reaccionar fueron los prestamistas, las corporaciones religiosas y los beneficiarios

de los capitales piadosos. Los hacendados, preocupados por sus premuras económicas y en defenderse del embate de sus acreedores y de los "rentistas" -religiosos y seculares-, poca atención pusieron, durante este periodo, a las propuestas liberales. Para los prestamistas y comerciantes la situación política predominante era un caldo de cultivo para enriquecer su patrimonio. No obstante temían que, en el desorden administrativo propio de estos años, se confundieran los créditos particulares concedidos a los hacendados con los créditos más comunes otorgados por las congregaciones religiosas. Confusión que podría agravarse por el número, casi incontable, de las fundaciones piadosas que gravaban las fincas. La dispersión existente podía suscitar, como de hecho sucedió después de 1860, la posibilidad de que se pusieran en entredicho los derechos de los prestamistas a las propiedades.

Los temores entonces enfrentados estaban más que justificados: los hacendados queretanos se habían allegado recursos no sólo de una congregación religiosa o de un prestamista en particular. Por el contrario, habían acudido a varios prestamistas y a diferentes congregaciones religiosas en todo el país. Bajo estas condiciones la disputa sobre las propiedades requería de complicadas negociaciones entre los prestamistas privados y las congregaciones religiosas, todos interesados en salvaguardar los derechos adquiridos sobre los bienes. Los litigios celebrados y los arreglos de compra-venta condicionados al mejor postor, favorecía a los acreedores que en esa década (1850-1860) contaban con mayores recursos. Prestamistas que vinieron a ser dueños de varias de las haciendas y de las

mansiones queretanas, como fue el caso de los hermanos José Luis y Gabriel Manuel Legarreta.

La entramada red de dificultades y problemas políticos y sociales que tuvieron lugar entre 1830 y 1860, no logra opacar uno de los procesos que ejerció gran impacto en la transformación de la cultura y de las condiciones sociales de los propietarios de la tierra en Querétaro: la debilidad financiera de las testamentarias queretanas, sin duda amarrada a la crisis económica suscitada por la lucha independentista y al proyecto liberal de crear una sociedad de propietarios individuales, permanece como una constante histórica que, con antelación a la aplicación de las leyes de la reforma liberal, permitió el traspaso y la fragmentación de algunas de las grandes propiedades, la proliferación de los ranchos con autonomía administrativa de las haciendas y, sobre todo, generó una nueva conformación social de los propietarios rurales.

Al lado de los viejos terratenientes empezaron a surgir los hacendados de nuevo cuño: los rancheros fundamentalmente integrados por los administradores y los antiguos arrendadores y subarrendadores de los ranchos de las haciendas y de las tierras municipales, y por los terratenientes que fraccionaron o repartieron las haciendas entre los herederos y los compradores. Por su parte, los apoderados de los propietarios y los albaceas de las testamentarias, los prestamistas y comerciantes, y los presbíteros y curas párrocos de la ciudad de Querétaro se convirtieron en hacendados. Aún cuando todavía en forma incipiente, también empezó a conformarse un nuevo grupo de

propietarios de la tierra, claramente diferenciado de los hacendados y de los rancheros: los propietarios individuales. Grupo compuesto por los indígenas que, desde 1847 y después en 1857 y más concretamente a partir de 1888 y 1889, vinieron a ser dueños "individuales" de la propiedad comunal que poseían desde los tiempos virreinales. También se pueden considerar dentro de la denominación "propietarios individuales" a los peones de las haciendas y los ranchos que fueron beneficiados con los terrenos propiedad de los municipios. Terrenos que fueron afectados por las leyes de desamortización de los bienes de manos muertas.

Es preciso señalar que la singularidad que tuvo cada una de las transacciones de tierra, determinada por el origen y arraigo social de las familias que vendían los bienes, no impidió la presencia de dos rasgos comunes en las negociaciones realizadas: salvo excepciones, se caracterizaron por el bajo o nulo precio en que fueron rematadas las propiedades y por la incapacidad de algunos compradores para mantener los terrenos bajo su propiedad. Condiciones de compra-venta que las más de las veces agudizaron el deterioro de las instalaciones físicas de las haciendas y de los ranchos.

También cabe aclarar que los propietarios rurales "caídos en desgracia" contaban a su favor la acumulación de los bienes rústicos y urbanos realizada por la élite terrateniente queretana de fines del siglo XVIII. De esta manera, frente al acoso de los acreedores (posteriormente de las ambiciones de los políticos) y la inevitable pobreza que los consumía, los hacendados tenían la posibilidad de seleccionar, de entre sus bienes, aquellos que

podían ceder en permuta por las deudas contraídas. Bajo este recurso intentaron conservar dentro del patrimonio familiar las haciendas y los ranchos que habían sido, por tradición, el origen de la riqueza y del prestigio de la "casa". No obstante, los balances financieros jugaban en su contra y fueron muchos los que asistieron primero al embargo de sus bienes y después a su liquidación total.

**1. Insolvencia económica de las testamentarias queretanas:
formación de un nuevo tipo de propietario rural**

Los años que corren entre 1830 y 1860 fueron penosos para las familias de viejo arraigo en la entidad. En ese lapso, la mayoría de ellas perdió algo de su prestigio social y de muchas, cuya fama y fortuna eran legendarias, sólo quedó el apellido. Impotentes contemplaron el traspaso de sus propiedades y fueron testigos del surgimiento de un nuevo grupo de propietarios de la tierra de cuya extracción social y económica se encontraban muy distantes.

Descapitalizadas las fortunas y depreciadas las propiedades rústicas y urbanas, las viejas familias sufrieron el embargo de los bienes sistemáticamente acompañado por la cesión de sus haciendas, sus ranchos y sus casas habitación en permuta por las deudas acumuladas. Tal fue el caso de la señora Manuela Duque que hizo cesión de la hacienda de Lagunillas para que sus acreedores se pagaran con los capitales y los réditos fincados sobre la hacienda. Famosas fueron las situaciones de las testamentarias de Laureano Segura en 1856 y la del General Julian Juvera en 1861.

Jose Luis Legarreta, albacea testamentaria del finado Antonio De Ordiz uno de los acreedores de Laureano Segura, sacó a concurso los bienes de esta testamentaria en 1856. En este caso los herederos pugnaban por preservar la casa ubicada en la calle del Biombo que se separaría de la subasta para pagar los bienes de otros acreedores. Reserva que se hacía, en realidad, para pagar las capellanías contraídas con la Venerable Congregación y con la Cofradía de la Purísima Sangre. No obstante, José Luis Legarreta y Gabriel Manuel Legarreta, albaceas testamentarias de Ordiz, se oponían a esta separación porque aseguraban:

Si en aquellos días los bienes no alcanzaban ni con mucho a cubrir nuestros dos créditos, menos alcanzan hoy que la finca ha continuado desmejorándose y recargándose de réditos. Este mal inevitablemente nos ha sugerido la idea de pedir la adjudicación del bien, conviniendo un acuerdo particular con la Congregación y la Cofradía.(3)

Propuesta que se aceptó, y los hermanos Legarreta se apropiaron de todos los bienes de la testamentaria de Segura, bajo el acuerdo, especificado en el contrato celebrado, de que seguirían pagando los intereses de los capitales piadosos por 7 años.

La testamentaria del General Julián Juvera, quien fuera gobernador de Querétaro del 9 de abril de 1842 al 15 de mayo de 1844 y del 24 de noviembre al 22 de diciembre de 1844, también intentó preservar las haciendas de su propiedad, la de

(3) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/70

"Lodecasas", que había pertenecido a la Sra. Plaza, y la de Jacal Grande. La viuda de Juvera, Carmen Gelaty, pedía que se le aceptara la casa de "su morada", cita en la esquina de la Plaza de la Independencia, como pago por la deuda acumulada al fisco. (4) La pérdida de la finca urbana, valuada en \$18 000.00 era un mal menor comparado con la posible pérdida de las haciendas de Jacal Grande y la de Lodecasas, sobre las que gravitaban mayor número de hipotecas y de capitales piadosos.

Años más tarde, los queretanos que estaban sumidos en la miseria seguían cediendo sus bienes para liquidar las deudas. Por ejemplo, cuando el Ayuntamiento de Querétaro inició una nueva indagación sobre los capitales ocultos para destinarlos al fondo Vergara, como le había sido sugerido por el Presidente de la República el 17 de marzo de 1868, muchos propietarios de los bienes denunciados no podían pagar el monto de los adeudos y de los intereses que entonces se les cobraban. En esta situación estuvo Marcelino Hidalgo, quien informó a la Oficina de Hacienda el 1º de agosto de 1873:

he dispuesto ceder la casa de mi morada en pago del capital que reconoce y de sus réditos...encontrándome gravemente enfermo, deseo morir tranquilo...de la magnanimidad de la comisión espero que me concedan continuar en la mencionada casa los pocos días que me quedan de vida. (5)

Testamentarias que se pensaba que eran solventes como la de Juan Fernando Domínguez, que fuera escribano en la ciudad de

(4) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 137/6

(5) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 137/123

Querétaro durante la lucha por la independencia, "uno de los más celosos y activos del partido de los europeos, según Alamán, (6) se vieron en serios apuros para finiquitar los adeudos y evitar el remate de los bienes en almoneda pública al mejor postor. El heredero de esta testamentaria Sabás Antonio Domínguez, quien fue gobernador de Querétaro en varias ocasiones (30 de noviembre al 18 de diciembre de 1840; 1° de noviembre de 1841 al 1° de febrero de 1842; 15 de mayo al 24 de noviembre de 1844; 22 de diciembre de 1844 al 30 de abril de 1846) (7), no pudo evitar el remate de los bienes de su padre en 1852.(8)

En otras ocasiones, los acreedores se negaban a seguir concediendo plazos de misericordia a los hacendados adeudados y sacaban a remate los bienes. Esta fue la situación de Tomás Gómez LLata, a quien le fueron embargadas sus propiedades y puestas a remate público por gestiones del Lic. José LLaca, representante de los acreedores. Las propiedades que fueron sacadas a concurso y rematadas en enero de 1843, por la incapacidad de Gómez LLata para satisfacer los adeudos, eran la hacienda de San Nicolás del Monte más conocida como Tunas Blancas, ubicada en Cadereyta, la de Quitillé y la de Tardejé además de una casa de alto, conocida como del portal y otra situada en la calle de la Florida, la aduana vieja.

De hecho, la hacienda San Nicolás del Monte alias Tunas Blancas, por ejemplo, estaba hipotecada al convento de Santa Clara por varios capitales: \$2 000, según escritura del 25 de noviembre

(6) Lucas Alamán, Op. Cit. Tomo I, Pág. 365-366

(7) Los gobernantes de Querétaro, Op. Cit. Pág. 38

(8) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/69

de 1787 y otros \$2 000 por escritor de 4 de noviembre de 1793. En favor de la Cofradía de Nuestro Señor, Manuel Gómez LLata había extendido una escritura de reconocimiento por \$3 079, el 18 de marzo de 1799. Posteriormente, el 23 de marzo de ese año 1799, el mismo Gómez LLata hipotecó la hacienda por un capital de \$1 253 en favor de la hermandad del Señor San José. Para el 30 de marzo de ese mismo año, reconoció sobre Tunas Blancas el capital de \$976 pesos dos reales a favor de la hermandad San Nicolás Tolentino. Al día siguiente, hipotecó de nueva cuenta la hacienda con \$ 2 300 a favor de Nuestra Señora de los pobres. En total, amén de otras fundaciones, Tunas Blancas debía a finales del siglo XVIII, \$11 308 pesos dos reales.

En el concurso de estos bienes, se puede apreciar que los prestamistas, fueran religiosos o particulares, se negaban a conceder créditos cuantiosos a los hacendados que concentraban la propiedad de varias haciendas. Era evidente, para 1840, que los terratenientes, dueños de varias haciendas, eran los más imposibilitados para satisfacer los capitales adeudados y sus respectivos intereses. En virtud de esta situación, los prestamistas empezaron a diversificar los créditos, estimulando así el fraccionamiento de las haciendas y su traspaso a varios individuos. Por ejemplo, en el remate de los bienes de Gómez LLata se presentó Rafael Ramírez, a nombre de Sebastián Ocampo, ofreciendo por todos los bienes las mismas cantidades que se habían planteado por los diversos concursantes. Con la diferencia que Ocampo se comprometía a dar en el acto \$2 000 al contado. \$7 000 al cabo de dos meses y otros \$7 000 en el resto

del año y \$2 000 en cada uno de los años subsecuentes, hasta completar el precio de venta. Aclaraba que de los capitales, pagaderos al término de tres años, pagaría los correspondientes intereses desde el año siguiente a la realización de la compra-venta. A esta transacción, aparentemente favorable a los acreedores, se oponían los otros concursantes asegurando en su defensa que las fincas se habían ofrecido individualmente. Por lo tanto, las posturas tenían que hacerse individualmente. No obstante esta oposición, la propuesta de Ocampo no prosperó porque el representante de los prestamistas, el Lic. LLaca, defendió la venta de los bienes a diferentes postores, señalando las siguientes razones: se mejoraban los ofrecimientos hechos y se reducían los plazos de realización de los pagos; también libraba a los acreedores de disputas y litigios en la adjudicación y distribución correspondiente de los capitales y sus respectivos intereses, y porque siendo más los compradores había más número de personas obligadas. Situación que facilitaba la gestión de los cobros y el pago de las responsabilidades.

De esta manera, en presencia del representante de los acreedores, el Lic. José LLaca, el dueño de los bienes embargados Tomás Gomez LLaca y de los señores que habían hecho posturas a las fincas embargadas, se procedió a la venta individual de los bienes, pese a que había algunos compradores, además de Ocampo, interesados en varias propiedades. Por ejemplo, el bachiller y Pbro. Eusebio García, en representación de José Solórzano, estaba interesado en la hacienda de Tunas Blancas sacada a remate público en \$15 500.00. José Solórzano exhibió para la adquisición de la

hacienda \$3 000 quedando a reconocer el resto de \$12 500 a nueve años. Solórzano también deseaba adquirir la hacienda de Tardejé por la que ofrecía las dos terceras partes de su valor. Para esta transacción ofrecía \$2 000 al contado y el resto al término de siete años. Por la casa de alto y la ubicada en la calle de la Florida ofrecía \$3 800, y \$3 000 los quedaba a reconocer en el plazo establecido de nueve años. Por su parte Agustín Pardo ofrecía \$500 pesos más de lo que ofrecía el bachiller García por la hacienda de Tunas Blancas. Por la hacienda de Quitillé se interesó Juan Pardo quien ofrecía \$7 900 al contado. Sobre la casa de Alto, Juan Pardo dijo que ofrecía \$4 000: \$200 los pagaría al contado y el resto en seis años, mejorando así la oferta hecha por el bachiller García. A su favor alegaba el fuerte desenvolso que tenía que hacer por la hacienda de Quitillé. Al final, la hacienda de Tardejé se remató al señor Sebastián Ocampo, de Ajuchitlán. La casa denominada aduana vieja en la calle de la Florida se remató a Vicente Díaz de la Vega, de Pati. La de alto, o del portal, se remató a Antonio Trejo. La hacienda de Tunas Blancas se remató a José Solórzano, de Vizarrón y la hacienda de Quitillé a Rafael Romo y tres fincas urbanas situadas en Cadereyta.

Como fue usual, Tomás Gomez Llata se rebelaba a entregar las propiedades. Insistía en dejar a salvo sus derechos para deducirlos cuando y como le conviniera. A este efecto retrasó la entrega de los títulos de propiedad pese a la insistencia que le hacía el juez de primera instancia de Cadereyta, Antonio Vega. No obstante su renuencia, y debido a que los títulos los tenía en su

poder el Lic. LLata, el remate de los bienes, celebrado en enero de 1843, se dió por bueno en septiembre de ese mismo año, cuando se extendieron los títulos de propiedad a los mencionados señores, quienes habían satisfecho la respectiva alcabala de los bienes.

(9)

Otras de las haciendas rematadas en la década 1840-1850 fue La Noria originalmente llamada hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de la Noria, ubicada en la jurisdicción del pueblo de San Pedro de la Cañada, que pertenecía al teniente Coronel Miguel Rubin de Noriega por legado realizado por Ana María de Hidalgo, antigua poseedora de la finca. La hacienda fue vendida en remate público en 1841 a Ignacio Alvarado en \$8 686.00. Los \$20 000.00 restantes del original precio de venta, \$28 686.00, eran capitales piadosos que siguió reconociendo Alvarado al convento de Santa Clara de Querétaro, comprometiéndose a pagar un 5% de interés anual. (10) Al momento de la venta contaba la hacienda con "51 caballerías y tres centavos de otras tierras de diferentes clases, la mayor parte montañosa. Lindaba al norte con la hacienda del Colorado, por el oriente con La Griega, los Corrales y Corralejo y pertenencias del pueblo de la Cañada, por el poniente con la hacienda de Carretas y Miranda y por el sur con estas mismas haciendas y la de Machorra". (11)

1.1 Las ventas convencionales y de oportunidad

(9) AGN, bienes nacionalizados, Caja 502, Exp. 105/30

(10) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 493.

(11) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 137/68

Cotidianas y comunes fueron las ventas convencionales, mediante las cuales los dueños se conformaban con salvar cantidades irrisorias frente al valor del bien que perdían. Contratos que no ocultaban el propósito de los hacendados de hacer atractivas las ventas de sus predios, por su bajo costo, a fin de traspasar las deudas arrastradas por las capellanías fundadas y por las hipotecas adquiridas. Estos traslados de dominio no solo evitaban el costo que implicaba el embargo de las propiedades, sino que también eran el camino más socorrido para preservar la honra de las familias propietarias: por su medio eludían la "pena social" de declararse en quiebra. Por su parte los compradores de estos bienes apostaban a su favor la posibilidad de no tener que pagar los capitales ocultos que gravaban las fincas y que ellos seguían reconociendo al momento de realizar la compra de las propiedades. En todo caso, las negociaciones pactadas les aseguraban márgenes de tolerancia más que suficientes para cubrir, sin problemas, los gravámenes adquiridos.

En la venta de los bienes de la testamentaria de Frías, se pueden seguir todos estos elementos, además de que se pone en evidencia que los que tendían a adquirir estas propiedades gravadas eran los familiares de los capellanes beneficiados con los capitales. En 1797, María Cornelia Codallos había vendido las haciendas Santa Cruz y Dolores, ubicadas en el Distrito de Querétaro, a José Ignacio Frías. (En algunos documentos posteriores se dice que era José Manuel Frías). Dicha señora había fundado una capellanía colectiva o eclesiástica de \$4 000.00, "deducidos de \$30 000.00 que a depósito irregular y por el término

de 9 años corrientes desde 4 de diciembre de 1797 tiene en su poder Jose Manuel Frías, vecino de Querétaro con hipoteca especial de las haciendas de labor Santa Cruz y Dolores, como residuo de su venta". La Sra.Codallos también había fundado otra capellanía de \$4 000.00 a favor de su sobrino Felipe Suasnavar. En total, Frías reconocía un capital de \$12 000.00 por las tres capellanías fundadas por la Sra. Codallos.

Fallecido Suasnavar en 1811, según certifica Félix Osoreo de Sotomayor, "abogado de la real audiencia individuo de su ilustre y Real Colegio de Abogados de México, Vice rector del mismo en esta ciudad de Querétaro del claustro de teólogos de la Real y Pontificia Universidad de esta ciudad y México y cura propio de la parroquia de Santa Ana", el padre provincial de la provincia de religiosos franciscanos y San Pedro y San Pablo de Michoacán nombró como beneficiario de la capellanía a Francisco Javier Sánchez, hijo del regidor capitular del Honorable Ayuntamiento de Querétaro, Luis Sánchez del Villar. De la otra capellanía, la eclesiástica, se había nombrado como capellán a Agustín Oyarzabal.

Para 1832, Luisa Servín, albacea de su esposo José Ignacio Frías y heredera de su hijo Ignacio, profeso en la religión de Misioneros Apostólicos Franciscanos, a nombre propio y de sus hijos (Rafael, Agustín, Margarita, Francisca, Maria de la Concepción y José Dolores), vendió una fracción de la hacienda Dolores, explicando, muy detalladamente las condiciones económicas que la llevaban a ello:

Por muerte de su padre...y mi marido quedaron como bienes de su testamentaria las haciendas de Santa

Cruz y Dolores situadas en esta jurisdicción gravadas a varios capitales, sin poder no solo redimirlos sino teniendo la mortificación irremediable de que los arrendatarios que la han tenido desde aquella fecha se la entregaron en peor estado sin alcanzar los \$300.00 que pagaban por la de Dolores a cubrir los réditos de su terreno y menos a reponer el deterioro de sus edificios, razones por las que han determinado vender parte del terreno de la última al Sr. Ministro Don Mariano Oyarzabal cuya hacienda del Agua del Coyote linda por el norte con la expresa de Dolores todo el terreno que hay de este lindero hasta la cerca de en medio de los potreros que cierra el de las tortugas y atravieza por el sur desde el camino que de esta ciudad baja para el Pinal y une en la cerca que de Norte a Sur sube desde la mohonera que está en el río que actualmente linda la referida hacienda. Que por el oriente será el lindero esta cerca que sube desde la citada mohonera por el poniente el referido camino que va para el Pinal. (12)

Las condiciones de venta sólo preveían la entrega en efectivo de \$1 000.00, y los réditos de los capitales. El capital gravado, \$12 000.00, sería pagado a la Sra. Servín de Frias en 7 u 8 años para que ella pudiera liberar su conciencia:

El Sr. Oyarzabal sólo exhibirá, para el giro de la hacienda Santa Cruz, \$1 000.00 y el importe de la alcabala escritura que es de su cuenta y el resto lo reconocerá en el mismo terreno asegurando a más con dicha su hacienda de Agua del Coyote, libre de otro gravamen a favor de la capellanía de que es actual poseedor el Bachiller Joaquian Oyarzabal, del ramo de otra que goza Francisco Sánchez del Villar y la parte que queda en el capital que a favor del convento de Santa Clara se reconoce sobre el mismo Dolores y Santa Cruz. Que será obligación del comprador además, la cancelación de las escrituras respectivas a los capitales de que habla la condición anterior...el Sr. Ministro entregará a la vendedora los réditos correspondientes para que ellos los satisfagan y dentro de 7 u 8 años a lo más sin pedir prórrogación al término ni moderación en la cantidad les entregará dichos capitales para que ella los redimina y concluyan los instrumentos de

esos adeudos y quede a par y salvo su responsabilidad.

Esta fracción de terreno vendida a Oyarzabal, será la denominada hacienda de Dolores que en 1860 aparece a nombre de su esposa, Rodriga C. de Oyarzabal, quien tendrá que enfrentar las denuncias de los capitales piadosos en 1861: \$2 260.00 a Vicente Mora; \$2 317.00 al convento de Santa Clara de Jesús y \$4 000.00 a Francisco Pastor. Ultima capellanía que estaba en litigio pues nadie sabía cómo había pasado de manos de Pastor. Sin embargo, el cobro de estos adeudos demuestra que Oyarzabal no había liquidado el capital de \$12 000.00 que, según el contrato de compra-venta de 1832, entregaría en 7 u ocho años a la Sra. Servín. Para 1867, ante la denuncia de un capital de \$17 912.08 que supuestamente reconocía la hacienda de Dolores, alias "La Vega", se sabe que la propiedad había pasado a manos de Cayetano Rubio y que esos capitales los debía a la testamentaria de la Señora Vergara, según escritura dada el 14 de marzo de 1866. (13)

Posteriormente, el 8 de abril de 1839, la señora Servín viuda de Frias, vendió la hacienda de Santa Cruz y Dolores (lo que quedaba de ésta) a Francisco González de Cosío. La hacienda de Santa Cruz, ubicada en el pueblo de San Pedro de la Cañada reconocía \$26 417.00, mismos que habían sido redimidos en tiempo oportuno por González de Cosío, una vez aplicadas las leyes de reforma en Querétaro en 1860. Sin embargo, a la muerte del viejo hacendado González de Cosío, su testamentaria no pudo continuar

(13) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/109

con el pago de las mensualidades que éste había quedado a deber al fisco, y tanto por éste como por otros compromisos se vió en la necesidad de vender la Hacienda de Santa Cruz (14), el 31 de octubre de 1862, al Lic. Jesús M. Vázquez hermano político de Luis Legarreta.

El caso de la testamentaria de Frías deja ver muy claramente que los hacendados buscaron preservar algunos terrenos de las haciendas bajo su propiedad. Esta intención los llevó a fraccionar sus haciendas. Fracciones que en ocasiones, como pasó con Santa Cruz y lo que restaba de Dolores que se vendió a González de Cosío, pasaban a formar un sistema diferente integrado con terrenos de diversas haciendas. Generalmente, dado el prestigio de la finca, la nueva propiedad conservaba el nombre de una de las haciendas. Santa Cruz que pasó a manos del Lic. Vázquez y Dolores que se integraba al sistema de la de Agua del Coyote de Oyarzábal.

La escasez de dinero que existía en la época y las peculiaridades de pago que se establecían en algunos contratos se puede observar en el contrato de compra-venta celebrado en 1849 entre Carlota Iriarte de Flores (compradora) y Fernando Porto y esposa, Atanasia Quintanar (vendedores). Peculiaridades que, en el corto plazo, hacían que las propiedades vendidas, o parte de

-
- (14) La hacienda de Santa Cruz lindaba por el norte con el camino real de México por tierradentro, por el oriente con la hacienda de Amazcalilla por el sur con la de la Griega y por el poniente con la de Dolores. La de Dolores, lindaba por el sur con Nicolás del paro, rancho de los Servines, San José de Menchaca y San José el alto. Al Poniente, con el camino real de la hacienda de San Vicente Chichimequillas a Querétaro y por el norte con la hacienda de Agua del Coyote.

ellas, retornaran a las familias vendedoras de los bienes. Fernando Porto y esposa tenían en propiedad, "por compra y reconocimiento de capital" la hacienda Santa Rita -jurisdicción de San Juan del Río-, así como también la parte del rancho de San Isidro, anexo a la hacienda, que se había comprado a Simón Espino-Barros. Propiedad que lindaba al poniente con tierra de la hacienda de Magdalena, Chombo y San Jacinto. Por el Sur con tierras del rancho del Savino, de Buena-vista (sic), San Isidro en la parte que le quedó a Trinidad Espino-Barros, y la Manga. Por el oriente con ésta y tierras del rancho de los Vargas o Zatlauco, y por el norte con terrenos de la hacienda de Santiaguillo y la Soledad. Hacienda que venden a Carlota Iriarte, y también parte del rancho San Isidro, "con sus tierras, cercas, aguages (sic) su casa y con todo lo que hoy tiene y le pertenece", en trece mil pesos.

Transacción que debía realizarse de la siguiente manera: en el año 1849, la compradora debía entregar \$2 000 el 15 de marzo, \$2 000 durante el mes de agosto, \$1 000 en el mes de octubre y tres mil en el año de 1850. Los tres mil restantes los seguiría reconociendo la compradora "a favor de la obra pía de la misa de once que se celebra los domingos en la parroquia de San San Juan del Río, de cuyos réditos a razón de 5% se pagan dos pesos cada domingo y el sobrante se satisface al fin del año". Se advierte en el contrato que, sobre los \$ 10 000 de que se ha hecho mención, se tendrán que pagar los réditos del 5% de toda la cantidad. Los aperos y enceres de la finca los pagaría la compradora al contado, según el valor que a ellos otorgaran dos peritos, -cada uno

nombrado por las partes que celebran el contrato- . Se especifica que el mueble que tenía la hacienda sería así mismo pagado por la misma compradora según el avalúo que se hiciera pero no con dinero, sino con mueble del mismo estilo e igual al que existía en la hacienda de Santa Rita y a elección del señor Porto, pero también valuado por dos peritos. Condición precisa de este contrato era que en caso de que la compradora no exhibiera las cantidades estipuladas en los términos establecidos, aun cuando lo hiciera de las tres cuartas partes, se daría al señor Porto, "por vía de indemnización por los perjuicios que resienta", la cantidad de \$800. Cantidad que se entendía correspondía a los siete mil pesos que debía entregar la Sra. Iriarte en el año 1849. Garantizaban los vendedores que la venta era segura y que nadie molestaría a la compradora con reclamos injustificados.

Por su parte, la Sra. Iriarte hace la compra, con autorización de su marido Ignacio Flores, "por sí como albacea de su finado marido Vicente Otero y como curadora ad bonon de sus hijos menores y con la hacienda de estos, y previa autorización del curador ad litem que lo es Pedro Villasana". El pago lo hará, indica en el contrato, como lo piden los vendedores, en moneda de plata del cuño mexicano. Para mayor seguridad de la deuda contraída, la Sra. Iriarte hipoteca la misma hacienda Santa Rita y la parte del rancho de San Isidro que ha adquirido, así como la casa de "su propiedad", situada en la plazuela de la Cruz en la ciudad de Querétaro, "valiosa en más de dos mil pesos y sin gravamen alguno que la comprometa". Por otra parte, la Sra. Iriarte se compromete a realizar parcialmente el mueble que tenía

en la hacienda de Tlacote el Alto, jurisdicción de Querétaro.

Para marzo de 1850, Carlota Iriarte había hecho los pagos estipulados con excepción de tres mil novecientos pesos. Por este motivo, obtiene una carta de Fernando Porto en la que su acreedor la autoriza a vender la casa de la Plazuela de la Cruz, misma que no debe considerarse, dice Porto, afecta a la deuda que todavía tiene la Sra. Iriarte. No obstante, como Carlota Iriarte únicamente había pagado siete mil pesos, la parte del rancho de San Isidro que se incluía en el contrato de 1849, volvió a propiedad de Fernando Porto y esposa en 1851. (15)

En la venta de la hacienda de Santa Catarina Montenegro y Buenavista muy conocida por la infraestructura de riego levantada por su propietario, Francisco de Velasco y Bolio, también se puede apreciar el carácter que asumían estas ventas convencionales. En 1854, los herederos de Velasco y Bolio no pudieron hacer frente al adeudo de \$121 823.00 que reportaban los bienes familiares. Ante la magnitud del descalabro económico, la hacienda perdió su esplendor productivo amén de que sus propietarios la habían abandonado. Sin cuidados y sin inversión alguna, se deterioró el antiguo acueducto que conducía el agua a las tierras de Montenegro. (16) En esta situación, el precio de la propiedad se depreció en más de un 50% y fue traspasada a Manuel Gabriel Legarreta en \$151 000.00 bajo el supuesto de que asumiría la deuda acumulada. La transacción realizada únicamente preservó

(15) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 502, Exp. 105/97

(16) Juan María Balbontín, Estadísticas del Estado de Querétaro, Preparada en los años 1854 y 1855, Imprenta de Vicente G. Torres, México, 1867, Pág. 14

\$30 177.00 para la familia Velasco y Bolio. Por su parte, Manuel Legarreta dispuso de más de una década para liquidar las cuentas pendientes de la hacienda. Por ejemplo, uno de los capitales gravados sobre Santa Catarina, el de \$5 000.00 que se reconocía al Colegio de San Ignacio y San Javier de Querétaro, fue liberado por Legarreta hasta el 18 de agosto de 1864. Once años más tarde la fecha de compra de la finca" (17)

Similar fue la venta de la hacienda de Santa María de los Molinos más conocida como San Juanico que adquirió en 1854 Timoteo Fernández de Jauregui, quien dispuso de 9 años para liquidar a los acreedores "que tuvieron lugar en la graduación del concurso a que corresponde la finca".(18)

Las penurias económicas de la época también afectaron los fondos asistenciales manejados por los Ayuntamientos. Razón por la cual, los municipales buscaban no solamente preservar sin afectación el monto de los legados piadosos destinados a la beneficencia, la atención hospitalaria y la instrucción pública, sino también obtener que la administración de estos fondos recayera en la Tesorería Municipal. Tesorería siempre abierta para el financiamiento de la guerra y siempre en bancarrota "por las contribuciones tan exageradas" que les hacían las distintas administraciones gubernamentales en turno. Condición que impedía llevar a cabo las obras de beneficio social.

El de San Juan del Río, por ejemplo, en 1865, dirige un oficio al Ministro de Instrucción pública y cultos del Imperio

(17) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/44

(18) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 137/69

francés, rindiendo algunas explicaciones que podrían, decían, incidir en el ánimo del ministro para que los legados de Esteban Díaz Gonzáles y de su hija, Rafaela Díaz y Torres, quedaran considerados como bienes asistenciales del Ayuntamiento, y no como capitales piadosos sujetos al proceso de desvinculación:

La falta de utilidad que generalmente han tenido las Juntas ya de Beneficencia o de Instrucción pública, ha sido causa, con muy raras excepciones, para que se les haya dado el carácter cuando han existido de auxiliares del Ayuntamiento; han tomado sus recursos de la Tesorería Municipal, que ha sido establo, (establecimiento a favor del cual se hacía la donación) y al extinguirse, (el legado) caso muy frecuente, la Corporación (municipal) queda al cuidado de los ramos que le estaban encomendados. Hoy hay establecidas solamente la de Instrucción pública, pero no teniendo fondos especiales sino en cantidad muy corta el Ayuntamiento le da los necesarios de los suyos generales. Por esta razón han sido puestas todas las escrituras (del legado de Díaz González) a favor de la Corporación, aún cuando pertenecían a los ramos de Beneficencia e Instrucción. (19)

El legado de Díaz González ascendía a \$21 000 y el de su hija Rafaela, a \$25 380.00. El ayuntamiento de San Juan del Río también consideraba el capital de más de \$50 000.00 que había donado Manuel Casabal, padrastro de Rafaela y Albacea testamentaria de ésta a su muerte. Capitales todos gravados sobre la hacienda San Clemente, ubicada en la jurisdicción del Distrito de San Juan del Río. De esta manera, el Ayuntamiento de San Juan del Río, disputaba el capital de \$96 380.00.

(19) Carta del presidente del Ayuntamiento de San Juan del Río, Ramón Macotela, al Ministro de Instrucción pública y cultos, fechada el 15 de julio de 1865. AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/112.

De manera particular, el municipio de Querétaro, por concentrar el poder político y militar del estado, frecuentemente pasaba por serias dificultades para subvencionar los gastos corrientes de la administración pública. En estos casos, y cuando se veía en la necesidad de obtener fondos extraordinarios para alimentar las arcas federales de los gobiernos en turno, los municipales volvían los ojos a los legados "piadosos" que administraba el Ayuntamiento. En particular se recurría al legado de la señora María Josefa Vergara Hernández, quien había nombrado albacea de sus bienes al ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Querétaro. Legado considerable pues cedía para la beneficencia pública una de las haciendas más rica de Querétaro, la de Nuestra Señora de la Buena Esperanza. Hacienda que se encontraba compuesta por seis labores principales, El Blanco, San Vicente, el Coyote, Viborillas, Peñuelas, la Caja y dos ranchos anexos: Urecho y Cenizas. (20)

De hecho, durante la insurrección de 1810 se había recurrido al fondo Vergara para financiar los gastos ocasionados, por el ejército realista, en la defensa de la ciudad. No obstante, las cuentas presentadas por el cura de la parroquia de Santa Ana, Félix Osores, en realidad no se sabe a cuánto ascendió el monto tomado del fondo en ese entonces. Es evidente que era mayor de \$85 000.00 según consta por lo dicho por el Sr. Barasorda en la sesión del Ayuntamiento del 18 de noviembre de 1815: "(según) el

- (20) Testamento, María Josefa Vergara, Documentos de Querétaro, Querétaro 1987, Pág. 23. Según la cláusula 4 del testamento, la señora Vergara también donó su casa habitación de la Calle del Perdón y otras 2 casas en la misma calle, además del mobiliario, menaje, plata y alhajas.

tenor de la cláusula 18... y la 25 de la última disposición de la Sra. Vergara no tiene el ilustre Ayuntamiento facultad de dar otro destino a los intereses de la testamentaria hasta cumplidos todos los establecimientos que previene la testadora; demanda se le vayan reintegrado de los fondos de la ciudad o cica 84 654 pesos cuatro reales que se le restan del dinero entregado para la defensa de la ciudad, de los mismos intereses de Esperanza" (21)

El testamento de Josefa Vergara, dado en 1809, no incluía, como todos los de su tipo, una cláusula para preservar la conservación de los bienes que heredaba, porque ya lo tenía dispuesto la testadora en la cláusula 10ª de la "Memoria Testamentaria" que había dado el 14 de diciembre de 1808.

Cláusula que a la letra dice:

Jamás, ni con pretexto alguno, se venda, ni enajene la hacienda de Esperanza, ni se separe de ella alguna de las labores anexas, sino que permanezca total e indivisa para los fines que expreso en esta memoria...(pero) si por algún acontecimiento que ahora no se puede prevenir no alcanzaren las fuerzas de mi albacea a impedir la venta de dichas haciendas o la de cualquiera de sus labores, en tal caso digo y dispongo que el precio de ella, se invierta indispensablemente en cumplir, primeramente todo cuanto tengo ordenado en esta memoria...(22)

Las disposiciones de la testamentaria Vergara eran bien conocidas por todos los queretanos quienes se sentían orgullosos del legado. Pese a esta condición que podía revertirse en su contra, en 1849 Cayetano Rubio ofreció al entonces presidente del

(21) Idem, Pág. 161.

(22) Idem, Pág. 26

país, Santa Anna, comprar la hacienda de Buena Esperanza. Según las cuentas proporcionadas por Fernando Díaz Ramírez, la oferta de Cayetano Rubio era irrechazable: "ofrecía \$300 000.00 pagando \$75 000.00 en dinero constante; otros \$75 000.00 en obligaciones al gobierno y el resto de \$150 000.00 lo reconocería con hipoteca de la finca a pagar al 6% anual o sea, \$7 500.00 cada año, en dinero efectivo al Ayuntamiento para fines del legado" (23)

Rubio no hizo la compra de Buena Esperanza a ciegas. Sabía que la inversión era recuperable en el corto plazo: los abundantes rendimientos de la hacienda, incluso estando mal administrada y sujeta a una continua malversación de sus fondos por los sucesivos administradores que tuvo, garantizaban con creces la pronta recuperación del capital. La producción de "la grande hacienda de Buena Esperanza" causaron admiración al barón de Humboldt quien aseguró que en sus tierras, "una fanega de maíz produce a veces 800: algunas tierras fértiles dan unos años con otros de tres a cuatro cientos". Años más tarde, del Raso indicaba que Buena Esperanza no había sostenido su nivel productivo. Sin embargo aclaró: "Este hecho no desmiente lo dicho por el barón, porque Esperanza es tan buena, como asegura, y el año 1830 dió 60 000 fanegas de cosecha por 150 que sembró con sus medieros. Fundamentado por los varios quinquenios revisados sobre la producción de Buena Esperanza, del Raso observó que "seis de ellos fueron muy buenos, quince medianos y 12 malos." (24)

(23) Fernando Díaz Ramírez, Historia del Estado de Querétaro, Tomo II (1837-1851), Ed. Gobierno del Estado de Querétaro, 1979, Pág. 62

(24) Antonio del Raso, Op. Cit. Págs. 50-51

Las aparentes dificultades jurídicas para adquirir la hacienda eran fáciles de sortear puesto que Cayetano conocía las estipulaciones legales del legado. La compra sin duda estuvo avalada en la cláusula 10ª de la Memoria testamentaria de la Sra. Vergara. Por otra parte, los enfrentamientos políticos locales, que podía suscitar la compra, no lo amedrentaban porque desde 1821 Rubio mantenía estrechos contactos con la élite terrateniente e industrial de la entidad. Había sido síndico procurador de Querétaro en 1821 (25) e importante hombre de negocios como contratista de la empresa del tabaco (26) y como dueño de la muy querida y famosa fábrica queretana "El Hércules".

No fue éste el único negocio de tierras de Cayetano con el gobierno de Santa Anna. En la sesión del 31 de marzo de 1856 del Congreso Constituyente, relata Francisco Zarco,

La comisión de hacienda dio principio a la interminable serie de escándalos que forman la historia de la administración conservadora, y pidió la revisión de la adjudicación...de la alcabala de la hacienda de Amoladeros, hecha a D. Cayetano Rubio. (27)

Sin embargo, a diferencia de muchos de sus coterráneos, industriales, hacendados y prestamistas como él, Rubio no aprovechó las leyes de la Reforma liberal para acumular bienes inmobiliarios. Sus adquisiciones más significativas, la hacienda de Buena Esperanza, el Molino de San Antonio y la casa No. 8 de la calle del Biombo, fueron realizadas no bajo las leyes liberales,

(25) Diario de Querétaro, Año 1821, Op. Cit. Pág. 44

(26) Jean Bazant, Los bienes de la Iglesia en México 1856-1875, Colegio de México, 1971, Pág. 26.

(27) Francisco Zarco, Congreso Extraordinario Constituyente 1856-1857, El Colegio de México 1957, reimpresión 1979.

sino bajo las condiciones propias de las "ventas de oportunidad" que abundaron en la época. Ventas realizadas por la urgencia de los gobiernos conservadores con los que Rubio no dudaba en negociar -tampoco se negaba a realizar transacciones con los gobiernos liberales- y por las penurias de la élite terrateniente local que conllevaba la venta obligada de los bienes. El pragmatismo comercial de Cayetano Rubio lo dejó asentado Guillermo Prieto:

El Sr. don Cayetano Rubio, en México, audaz para los negocios, flexible y sin ver en los gobiernos más que cifras más o menos combinables con las de su escritorio, tal vez por no ser hijo del país, frío con los hombres a quienes no lo acerca su conveniencia, sin arredrarse por dificultad ninguna en los negocios, dejando ver al andaluz simpático y travieso bajo las serias maneras del palaciego, el Sr. don Cayetano Rubio, en Querétaro, tiene muy justos títulos a que se le considere con los caracteres de bienhechor y amigo generoso de aquella población (28)

Después de la compra de Esperanza en 1849, y de la de Amoladeras que le era cuestionada por los congresistas constituyentes, Cayetano Rubio celebró un contrato con esta administración para la elaboración de vestuarios. En la sesión del 17 de mayo de 1856 se emite la orden para que se le pague la cuenta de los vestuarios ya hechos y para que "construyera", dice Zarco, otros 600 más. (29)

Al margen de los negocios con los gobiernos que se tratara, Cayetano Rubio compró a Santiago y Félix Malo el molino de San Antonio anexo a la fábrica de hilados y tejidos "El Hércules", ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Querétaro, en el

(28) Guillermo Prieto, Op. Cit. Pág. 381

(29) Francisco Zarco, Op. Cit. Pág. 121

barrio de San Sebastián Bajo. Molino que reconocía dos escrituras de imposición por un capital de \$18 000.00. Una escritura con valor de \$15 000.00 a favor del convento de Santa Teresa y una capellanía de \$3 000.00 a favor del convento de Santa Clara, fundadas por Pedro Ignacio Carbajar. En 1857, Rubio compró la casa No. 8 de la calle del Biombo, según consta por escritura dada por Francisco de Paula Meza como albacea testamentaria de Manuel García Orgí; compra que fue realizada a través de Manuel M. Rubio, sobrino de Cayetano, en \$7 000.00. Capital que incluía una hipoteca de \$3 000.00 que cargaba la casa y de la que era patrona la madre abadesa del convento de Santa Clara de Jesús. También reconocía una capellanía por \$3 000.00 a favor de la Cofradía del señor San José.

El interés de Cayetano Rubio de invertir en Querétaro se intensificó entre 1860-1870, con el claro propósito de ampliar su acceso al agua que era vital para su industria textil y para el molino de harina San Antonio; sin duda, también para recuperar los préstamos hechos al gobierno. Combinando la hipoteca de sus bienes -en 1864 la casa No.8 de la calle del Biombo fue hipotecada a favor de Ambrosio Molina por \$3 360.00 valor de un contrato de piezas de manta (30)- con la subrogación de capitales y la adquisición de bienes cuyo valor nominal era superior al representado por las capellanías (31), la fortuna de la casa Rubio

(30) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 1

(31) En 1862, Cayetano se subrogó un capital de \$4,000.00 que una casa, dice Bazant, reconocía a la Beneficencia. Rubio pagó \$300.00 en efectivo y \$3,700.00 con un crédito dado en 1862 por un valor nominal de \$56,428.00. Jean Bazant, Op. Cit. Pág. 229

llegó a alcanzar proporciones que fueron causa de admiración en la época. (32)

No sólo los prestamistas, los industriales y los comerciantes aprovecharon las ventas de oportunidad que proliferaron en la época. Para semejarse a aquellos sacerdotes que por su origen social eran dueños de haciendas como el presbítero Manuel López de Ecala que era dueño de la hacienda de Patehé, los presbíteros y los curas de las parroquias en Querétaro se convirtieron en importantes compradores de los bienes de las testamentarias. La hacienda de la Purísima Concepción Aguas Calientes y el Ranchito de Marroquín (33), perteneciente a la testamentaria de Nicolás Sarmiento, por ejemplo, fue rematada en almoneda pública el 29 de julio de 1859. Año en que fue adquirida por el Pbro. José María de Jesús Barbosa en las dos terceras partes de su valor, además de incluir los gastos de la escritura y alcabala respecto al capital de una capellanía de Morelia que gravaba la finca. El presbítero Barbosa se comprometió a seguir reconociendo dos capitales: uno de \$2 260.00, que reconocía la hacienda al Juzgado de Capellanías de

(32) El costo total de la fábrica en 1856, registra Balbontín, no podía bajar de un millón y medio de pesos, produciendo 1,560,000 libras de hilaza y 170,000 piezas de manta. Tenía 2,500 empleados y operarios, hombres y mujeres, "cuyas rayas y sueldos importan anualmente 460,000 pesos. El molino de harina reducía 20,000 cargas de trigo en el año, produciendo una harina de "suprema calidad que tiene gran demanda desde México hasta Veracruz y otros puntos". Balbontín, Op. cit. Pág. 77

(33) La hacienda estaba ubicada en la jurisdicción de Apaseo, Depto. de Guanajuato, y a 5 leguas al poniente de la ciudad de Querétaro. Había sido valorada en \$12,519.00. En el remate de los bienes de Sarmiento, además de la hacienda se incluía la casa ubicada en Querétaro que hacía esquina con la calle de Monte Sacro y Callejón del Pintor, evaluada en \$3,079.73.

Morelia y la otra por la misma cantidad al Juzgado de Capellanías de México. El respeto que se tenía a los sacerdotes en Querétaro, fue determinante para que el arrendador de esta finca, el señor Maciel, al presentarse la propuesta del Pbro. Barroso, renunciara al derecho al tanto que como arrendatario de la finca tenía. (34)

José Guadalupe Perrusquía cura de la parroquia de Santa Ana de Querétaro, quien años más tarde sería uno de los principales asesores de Guadalupe Paniagua cuando éste, cruzado por una crisis de conciencia, dudaba en adquirir bajo las leyes de nacionalización la casa que arrendaba a la Cofradía del Divísimo de la Parroquia de Santa Ana, compró a Ignacio Trejo en 1846 la hacienda de San Miguelito ubicada en la jurisdicción de Santa Rosa. La hacienda se componía de 29 caballerías de tierra y 7 novenos; de figura irregular, lindaba por el oriente con la hacienda de Juriquillas y al sur y poniente con la de Buenavista. En 1863, el cura Perrusquía vendió la hacienda a Ramón Sáenz Mendiola. (35)

Bajo estas circunstancias de venta, cesión, remate público y de "oportunidad", muchos individuos de escaso capital pudieron acceder a estos bienes rústicos. No obstante la capacidad financiera que se tenía para comprar los bienes, ofrecidos en condiciones tan ventajosas, no garantizaba ni la propiedad ni la pronta recuperación de la inversión. Por lo contrario, las fincas rústicas no solamente eran vendidas de nueva cuenta, o puestas en remate público al mejor postor, como sucedió con San Miguelito, y

(34) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/17

(35) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/3

con Santa Cruz, sino que, en cada traspaso "obligado" de la propiedad por las deudas acumuladas, los bienes iban depreciándose por el deterioro que experimentaban las instalaciones.

Las sucesivas ventas de la Hacienda de Carranza, situada en el municipio de Amealco de 27 caballerías de tierra, y sus precios de venta, permiten apreciar la incapacidad financiera de algunos compradores. La hacienda de Carranza lindaba al oriente con la hacienda de Lagunillas (la que había cedido Manuela Duque), al norte con la hacienda de Lodecasas (que había sido propiedad de Josefa Plaza y posteriormente del General Julián Juvera) y por el poniente y Sur con las haciendas de Apapátaro y Vegil. Entre 1830 y 1860, la hacienda de Carranza fue vendida tres veces. En 1836, la hacienda se traspasó en almoneda pública por el valor de los capitales que sobre su terreno se reconocían, \$7 545.00; de los cuales pertenecían \$7 000.00 al convento de Santa Clara y \$200.00 al convento de San Antonio de la ciudad de Querétaro. En 1841, de nueva cuenta la hacienda fue puesta en concurso posiblemente porque se había "desbaratado" la asociación que había formado Miguel Larraínzan para comprar la hacienda en 1836. Años más tarde, en 1856, José Borja compró la finca a Nicolás Guillen en \$11 317.00, Exhibiendo, como se decía en la época, únicamente \$4 117.00 porque siguió reconociendo los viejos capitales, \$7 200.00, que gravaban la finca a las corporaciones religiosas ya mencionadas. La diferencia que media entre el precio de venta de la hacienda en 1836 y 1841 y el de 1856, \$4 117.00, como caso excepcional, corresponde a las mejoras que se habían introducido en la finca, según consta en el avalúo realizado por el perito Mariano Gorraéz. (36)

1.2 Los capitales piadosos en litigio

En ocasiones los individuos que habían comprado las propiedades enfrentaban los litigios entablados por los herederos

(36) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 4.

de los capitales piadosos. En estos casos, el monto del capital gravado excedía con mucho las posibilidades económicas de los nuevos propietarios. Uno de los muchos casos que pueden citarse es el del sacerdote Ignacio Arce y Lamas quien disfrutaba de los réditos de 19 capellanías que ascendían en su conjunto a \$52 000.00. A la muerte de este sacerdote en 1835, su sobrino el niño Pedro Terezo Arce siguió disfrutando las rentas hasta el año 1853. Año en que sus herederos, José María Pastor y José María Canalizo y Pardo disputaron el derecho a las capellanías y exigían, cada uno por su cuenta, a los propietarios de los bienes gravados (la hacienda de Venegas y la Tenería de los Garza) el pago de los capitales. De hecho la tenería de los Garza había sido comprada por Tomás Ecala en \$20 000 con dos capellanías incluídas. La de Jacobo Pardo de 4 000 y la que fundó Juan Sánchez Jordán con valor de \$1 000. Por su parte, Joaquín López de Ecala, después propietario de la tenería, fincó un préstamo con el Ayuntamiento de Querétaro, sobre un capital de \$4 000 que pertenecía al fondo de la hacienda de Esperanza. Capital impuesto a depósito irregular sobre la misma tenería en el año de 1856.

En medio de la larga disputa sostenida por los herederos de las capellanías, los bienes pasaron a otras manos. Propietarios que carecieron de los recursos para satisfacer el pago de los capitales adeudados. Tanto Crescencio Mena entonces dueño de Venegas como Francisco Padilla, propietario de la tenería, obraje y terrenos de labor que incluía, carecían de recursos para satisfacer la demanda de pago. Incapacidad económica que los había llevado a celebrar contratos de arrendamiento y a obtener

créditos hipotecarios con particulares. El largo litigio sostenido con los supuestos propietarios de los capitales piadosos los obligaron a traspasar sus bienes que, para 1870, pertenecían a Jose M. Siurob la hacienda y a Juan Balvanera, acreedor y arrendador de Padilla, la tenería. Juan Balvanera, por ejemplo, demandado por la Secretaria de Hacienda para pagar capitales ocultos indica en 1892, que la tenería de los Garza, "es propiedad particular y no pertenecen sus adeudos, como lo acredita la copia simple de la sentencia pronunciada por el tribunal de circuito de este estado, al gobierno de la nación. (37)

La dispersión de las fundaciones piadosas y de los reconocimientos otorgados a las congregaciones religiosas dieron ocasión a que muchas propiedades pasaran, a la muerte de los propietarios, a la corporación que había otorgado el crédito mayor. Este fue el caso de las haciendas de Atongo y Amazcala que en 1803 pertenecían a Juan Manuel Landerivar y que fue adquirida en condiciones poco claras por Francisco Sánchez de Taggle. Estas haciendas ubicadas en La Cañada debían:

Al Convento de Capuchinas de Guadalupe:	\$ 3 000.00
A la Congregación de San Pedro:	1 000.00
" " " " Jesús María:	8 000.00
Al Colegio Seminario de México:	20 000.00
A la Cofradía de la parroquia de Huastepec:...	2 000.00
A la Archicofradía del Santísimo de México:	4 000.00
Sociedad de la Cantoral de México:	4 221.00
Capellania de Carlos Pozo:	3 000.00
Capellania de José de Juárez:	1 000.00
Capellania que posee Florencio Rivera:	5 000.00
Capellania que posee Miguel Uriá y Tellez:	4 000.00
Capellania que posee el Pbro. Capilla:	7 000.00
Capellania que posee Joaquín Caro:	7 019.00
Capellania de Victoria Vargas:	3 000.00

(37) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 501, Exp. 131/26

Capellanía de Remigio Orihuela y Sánchez:	4 000.00
Capellanía de Toribio Rodríguez:	3 000.00
TOTAL.....	\$79 230.00 (38)

El caso de estas propiedades también ilustra los convenios que hacía la Iglesia con los hacendados. Desde 1856 y de manera más constante al triunfo liberal de 1860 las corporaciones establecieron acuerdos privados con los hacendados y con los arrendatarios a fin de que estos aparecieran como propietarios de los bienes que habían pasado a su propiedad por ser los acreedores más fuertes. Las haciendas de Atongo y Amazcala aparecen, y así lo reconoce Francisco Sánchez de Taggle, como propiedad mancomunada de este comprador y el seminario conciliar de México.

En otras ocasiones, por intrincados manejos jurídicos y privados, las haciendas cambiaban de manos sin que aparentemente exista documentación alguna que avale las transacciones. El caso de la hacienda San Clemente, propiedad de Esteban Díaz González, es muy ilustrativo. Díaz Gonzáles nombró como sus albaceas testamentarios, fideicomisarios y tenedores de bienes, a su esposa, Ramona de Torres y Arroyo, y en caso de su falta, a su hijo Joaquín, mayor de edad, o a su hijo Esteban. Como herederos universales de sus bienes quedaban, por cláusula testamentaria, sus hijos, Joaquín, Esteban, Rafael, María de los Dolores, Antonio, María de la Concepción y María del Refugio y el póstumo que diere a luz su mujer y los demás que podían haber de legítimo matrimonio. No obstante, al momento de hacer su testamento, 31 de marzo de 1829, eran famosos en Querétaro los juicios de sucesión

(38) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495.

que dejaban desprovistas a las familias propietarias. Deseando evitar esta condición a sus herederos, Díaz Gonzáles, aclaraba que, "sí, lo que no es de esperar, en la división de sus porciones hereditarias, se ofrecieren disputas ó disgustos, se podrán terminar por jueces árbitros y amigables componedores, evitándose de este modo el menoscabo o destrucción que regularmente originan los juicios". Cláusula que abrió el camino para el traspaso de la propiedad, una vez fallecido Díaz González, sin que medie información alguna escrita.

El 15 de agosto de 1832, Díaz González revisó sus disposiciones testamentarias de 1829 "después de diez meses de padecimientos en la salud por el desgano de alimentos en medio de la avanzada edad de sesenta y cinco años, advertí que se me empezaban a inchar y endurecer las gargantas de las piernas, lo cual me ha hecho persuadir mi cercana muerte", y para la tranquilidad de su "conciencia", dispone cambios en el testamento.

Uno de los cambios fundamentales en este entonces, fue que nombró albacea de sus bienes a su hija María de los Dolores, que estaba casada con Manuel de Alvear, apreciado, decía el testador, por su honradez y apego a la familia. Díaz González declara en esta última disposición testamentaria que era propietario de la Hacienda San Clemente, de los ranchos de los Cerritos y de Bocas, el del Muerto "de cuya mitad soy dueño por hallarse despoblada de habitantes", rancho que estaba gravado con \$5 000.00. Capital que era reconocido por los Ogaldes, dueños de la hacienda El Ahorcado. Indica que la testamentaria de Jose Manuel García, le debe ocho mil pesos procedentes de la liquidación general de

cuentas "que jiré como socio en la hacienda de la Estancia grande bajo administración de Pablo Toca, a quien con objeto de beneficiar hice cesión de los resultados de la sociedad". No obstante, también señala que durante dicha sociedad, estuvo ministrando a Pablo Toca, "cuanto dinero necesitó para impulso de la hacienda y también a la testamentaria para sus urgencias, a buena cuenta de las utilidades que le resultaran, cuyos desenvolsos me cubría Don Pablo Toca con el producto de semillas..." Habiéndose suscitado el conflictos de intereses entre Toca y Díaz González, conflictos que se habían debatido en juicios, Díaz González en 1832 dice que, en conciencia, nada debe a Toca.

Treinta años más tarde, en el testamento de Manuel Casabal, dado en 1860, se aclara que este señor era padrasto y apoderado de Rafaela Diaz y Torres, quien vino a ser la única dueña de la hacienda. De esta manera, se deduce que Casabal se había casado con la viuda de Díaz González; mediante el matrimonio se convirtió, sin duda, en administrador de los bienes de esta familia. Concretamente de la hacienda de San Clemente. Posteriormente, a la muerte de Rafaela, Casabal quedó como dueño de los bienes por la cláusula testamentaria No.23 del testamento de Rafaela quien asentaba que si entraba en disputa la propiedad, esta debería concederse a su padrasto.

A su muerte, en 1862, Casabal aparece como el propietario de la hacienda de San Clemente y sus ranchos anexos. En su condición de gran hacendado, compartió, como otros en su época, la característica de no tener herederos directos. Situación que

predeterminaba que a su muerte sus bienes pasaran a manos de terceros porque los familiares que jurídicamente lograban demostrar tener parentesco con el hacendado, no tenían interés en las haciendas sino en el capital que éstas podían reeditar a través de la venta. Este fue el caso de los bienes de Manuel Casabal dueño de la hacienda de San Clemente y sus ranchos El Ahorcado, Palomas, Santa Cruz y El Muerto, ubicada en el Distrito de San Juan del Río. Manuel Casabal murió después de aplicadas las leyes de reforma en Querétaro y aún así dejó un fuerte capital, \$67 616.12, destinado a obras conocidas entonces como piadosas. Sin embargo, para evitar las leyes de nacionalización, Casabal especificó en su testamento que era un legado para "obras públicas de beneficio social" de la ciudad de San Juan del Río. Parte del legado se dejaba para introducir mejoras en el hospital del lugar y para socorrer a las gentes de pobreza extrema, españoles de preferencia. Especificación en la que se amparaba el municipio de San Juan del Río para reclamar este legado y los de los antiguos propietarios, como propio de la tesorería municipal y no de los bienes nacionalizados.

Denunciados los capitales como "bienes ocultos" se presionó a la testamentaria para que diera a conocer el testamento. Motivo por el cual Antonio Vertiz, albacea del señor Casabal, mostró el testamento en cuya cláusula 8, Casabal dejaba como heredero de sus bienes a Antonio Díaz y Torres (heredero en línea directa de los viejos dueños de la hacienda de San Clemente), sin duda para "tranquilizar su conciencia". Sin embargo, Antonio Díaz y Torres había fallecido meses antes que Manuel Casabal por lo que se

llamó a los posibles herederos ab intestato.

Esta situación suscitó un largo litigio para determinar quien era el legítimo sucesor de Casabal. El familiar más cercano, constituido heredero, Miguel Casabal, no se quedó con la propiedad que pasó a manos de Gil Echevarría en la cantidad de \$113 000. Según se aprecia en la evaluación de los bienes de Casabal, realizada por M. Perrusquía en 1864, Gil Echeverría no sólo adquirió la finca a un precio muy por debajo del valor de los bienes, sino que también disfrutó de un tiempo considerable para realizar el pago de la hacienda.

Por otra parte, en esta negociación se puede apreciar que los avalúos de las fincas se realizaban a discreción. En el caso de la valoración sobre los bienes de Casabal, sin duda existe una inequívoca intención de reducir el valor de los bienes alterando las sumas totales. La diferencia que existe entre el valor de las propiedades según las sumas del tasador Perrusquía y según las sumas reales (las diferencias detectadas se anotan en paréntesis en el avalúo realizado por Perrusquía) de los bienes vendidos a Gil Echevarría es de \$16 778.00. También se ignora quien asumió \$50 000.00 que Casabal había invertido en la hacienda de Xajay y \$2 670.00 que aparecían en el avalúo como créditos cobrables. Es decir, en la venta de los bienes de Casabal, \$69 448.00 simplemente desaparecen de la testamentaria sin que nadie de cuenta de ellos.

La hacienda de San Clemente, situada al N.O. y a 5 leguas de la ciudad de San Juan del Río, tenía como 100 caballerías de tierra, clasificadas y evaluadas de la siguiente manera:

15	caballerías de riego enlame a \$1,800, c/u:	32 400
32	" de temporal a \$700.00 c/u:	22 400
18	" de inferior clase a \$600 c/u:	10 800
11	" de cerriles a \$150.00 c/u:	1 650
9	" de medio riego a \$1,000.00 c/u:	9 000
10	" de temporal en El Muerto \$700.:	7 000
2	" de cerriles en " " \$150.:	300

TOTAL LAS 100 CABALLERIAS DE TIERRA: 83 550.00

FABRICAS

La casa de la hacienda con sus oficinas:	7 000
trojes en El Jacal, Buenavista, Cruces, Caracol y Palomas con eras, asentadores y Noria	10 000
Presa y puente en el río La Estancia	7 000
Casa y capilla en El Muerto	3 000
Obras de campo	27 000
9 bordos	12 000
cercas	4 300
Zanjas para conducir agua a los bordos	4 000
Aperos, herramientas y útiles de capital	1 878

TOTAL FABRICAS: 22 178.00 (En realidad: \$76 178.00)

ANIMALES

470 bueyes a \$18.00 c/u:	8 460
40 mulas a \$25.00 "	1 000
38 yeguas a \$6.00 "	228
15 burros de carga a \$16.00 c/u	240

TOTAL ANIMALES: 9 928

Semillas para ración y siembra 9 928

Valor aproximado de San Clemente 142 656
(En realidad: \$179 584.00)

El rancho de Santa Cruz 10 500

Total 153 156
(En realidad: \$180 084.00)

La testamentaria de Casabal disponia de otros bienes: en asociación con Antonio Díaz, un capital de 50 000.00 invertido en la hacienda de Xajay, ubicada al este de San Juan del Río en el Distrito de Huichapan. La casa de San Juan del Río con menaje y

plata labrada además de dos solares se había valorado en \$12 000.00. En deudas activas cobrables y no cobrables 9 670.00

También registraba una pérdida de \$7 000.00. Es decir, que de este capital adeudado se podían recuperar \$2 670.

En total el capital activo de la Testamentaria era de \$220 006.00. (En realidad: \$244 754.00) Capital del que debía descontarse los pasivos de la testamentaria en legados y fondos que ascendían a \$79 615.12. De este modo el capital líquido era de \$140 390.88. (En realidad era de \$165 138.88) (39)

Gil Echevarría compró la Hacienda de San Clemente en \$96 000, el rancho de Santa Cruz en \$9 000 y la casa y solares de San Juan del Río en \$8 000. Es decir, compró todos los bienes de la testamentaria en \$113 000, cuando ésta, en los respectivos bienes, acumulaba el valor de \$175 306.00, según la suma de Perrusquia y de \$192 084.00 según la suma real. Por otra parte, Echevarría no tuvo que liquidar los \$113 000.00. Retendría el capital de \$67 615.12 del legado dejado por Casabal y \$12 000.00 para el pago de los réditos de los capitales piadosos que pudieran deberse. Es decir, únicamente debía entregar \$33 384.88. El pago se haría de las siguiente manera: \$18 384.88 en efectivo y los \$15 000 restantes por tercios a los 6, 12 y 18 meses, contados desde la fecha de la firma de la escritura. Plazos que consideraban el 6% anual de intereses.

Ya como propietario de la hacienda, Gil Echevarría tuvo que hacer frente a los denunciante de los capitales ocultos. Sin embargo ninguno de ellos pudo comprobar que efectivamente los

(39) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 66/85

bienes piadosos no habían sido redimidos. Constaba, por documentos emitidos durante el Imperio, que Gil Echeverría había redimido \$8 000.00 como único capital piadoso que Esteban Díaz González había dejado gravados sobre la hacienda San Clemente a efecto de que se dijeran misas en favor de su alma, en el altar del Perdón de la Santa Iglesia Catedral. De esta manera, el 24 de abril de 1902, el presidente de la República ordena que se archive el expediente de la hacienda de San Clemente. (40)

El traspaso de las propiedades en condiciones tan ventajosas para los compradores, y la inestabilidad política del periodo, imprimieron cambios sustanciales en la relación existente entre los hacendados y la tierra. El desarrollo económico y social de los nuevos propietarios no dependía, como hasta entonces había sido, de la productividad de las haciendas y los ranchos, sino de su habilidad para realizar convenios y alianzas con los sucesivos gobiernos nacionales y estatales.

Las relativas facilidades existentes para hacer negocios y arreglos económicos con el gobierno que se tratara (republicano, imperial, liberal, conservador, federal o central) y la avidez de estos por obtener recursos y avíos para la guerra, al precio que fuera, fueron factores que devastaron la agricultura. Como se sabía que los arreglos y convenios eran igual de efímeros y fugaces que los sucesivos gobiernos en el país, ninguno de los nuevos propietarios cometió el error de invertir en infraestructura agrícola. Por el contrario, el interés se concentraba en obtener la máxima ganancia al mínimo costo y

(40) Idem.

esfuerzo. Bajo estos criterios, las haciendas y los ranchos fueron explotados irracionalmente. Dilapidados los bienes y abrumados los poseedores por las cargas hipotecarias, las propiedades eran de nueva cuenta vendidas al mejor postor o eran intervenidas por la hacienda pública y convertidas en valores de cambio útiles y efectivos en las componendas políticas. Para 1860, era evidente que los militares y los políticos más fuertes tendían a concentrar las fincas rústicas y urbanas con fines especulativos.

A largo plazo, el ininterrumpido proceso de compra-venta de las propiedades fue violentado por la aplicación de las leyes de la Reforma en 1860. Los bienes rústicos -y los urbanos- que por tantas manos habían pasado y cuyo dominio y propiedad en ocasiones no estaba muy claro, porque los viejos dueños habían muerto o habían cambiado de lugar de residencia y porque los nuevos propietarios muchas veces no pertenecían al grupo de los poderosos, se convirtieron en una fuente de litigio y conflictos entre los legítimos dueños, los prestamistas, los políticos y los militares, en disputa franca a partir de 1860, para obtener y conservar estos bienes.

Es evidente, porque los casos abundaban, que los herederos de las testamentarias, famosas por su riqueza, intentaban evitar el despojo de sus propiedades. Pese a este esfuerzo muchas fueron las que no pudieron evitar la realización de sus fincas. La complejidad de los procesos seguidos y la multiplicación de los interesados en los bienes, alargaron los plazos de las disputas. El tiempo que tomaban los litigios, a veces 20 años, permitía y

auspiciaba que a la vuelta de los años, los haciendas pasaran a manos del interesado que menos derechos tenía pero que había podido esperar atento al proceso o, lo que era más común, el que contaba con un amigo influyente en los niveles directivos.

En el envés de esta historia de decadencia y pobreza y también de despojo y latrocinio, se inicia el surgimiento de un nuevo grupo social: los rancheros. Los individuos arrendadores de las tierras de los hacendados, de las propiedades de la Iglesia y de los terrenos de los municipios. Grupo social que durante el periodo 1830-1860 tendió a incrementarse notablemente por la falta de liquidez de los hacendados y de los arrendadores más importantes de las fincas. Ante la imposibilidad de invertir en la producción agrícola hacendados y arrendadores se veían obligados a establecer varios contratos de subarrendamiento. De esta manera, en la producción de las labores de las haciendas intervenían activamente diversos individuos que si bien no contaban con fuertes recursos económicos, podían disponer de las cantidades mínimas necesarias para girar por su cuenta pequeñas porciones de terreno. En sus Notas Estadísticas del Raso anota sin contemplaciones esta situación:

Unos y otros, los arrendatarios y los dueños, por falta de caudales para dar a estos predios todo el vuelo de que son susceptibles, han adoptado el sistema de repartir las tierras en arriendos parciales; y entre colonos (rancheros por otro nombre) y terrazgueros, distribuyen la mayor parte de las labores.(41)

(41) Antonio del Raso, Op. Cit. Pág. 34

Para ejemplificar la cantidad de medieros que podrían utilizarse en una hacienda, podemos tomar el caso de la Era que solamente cultivaba por su cuenta 14 tercios de trigo y $\frac{3}{3}$ de garbanzo. El resto del terreno se cultiva mediante contrato con 12 medieros: José María Arteaga, tres cuartillos de sembradura de trigo. Camilo Martínez, $\frac{1}{2}$ cuartilla de cebada. Francisco González, 5 tercios de trigo, 30 cuartillos de garbanzo y tres tercios de cebada. Manuel Lonino, 18 cuarterones de garbanzo. José María Tongo, tres tercios de cebada y dos cuarterones de garbanzo. Doroteo Morales, 10 tercios de cebada, "un melonar y un sandial". Juan Vega, 7 tercios de cebada y $14 \frac{1}{2}$ tercios de trigo. Andrés Mendoza, $\frac{2}{3}$ de cebada. Lorenzo López, $\frac{2}{3}$ trigo. Ramón Magaña, 100 surcos de melón y $\frac{1}{3}$ de garbanzo. Faustino Sánchez, $\frac{1}{3}$ cebada. Y, finalmente, Guadalupe N., un melonar.(42)

La composición social de los agricultores queretanos en 1840, también incluía una porción considerable de "labradores en pequeño". Propietarios -2610 en 1841- que "apenas podían mantenerse", registró del Raso, sujetos como estaban a la voracidad de los comerciantes y prestamistas que adquirían sus cosechas a precios muy por debajo del valor real de las cementeras.(43) Sector de propietarios que gradualmente se fue incrementando por la adjudicación temprana de los terrenos de las corporaciones civiles. Terrenos otorgados, sobre todo, para controlar los levantamientos armados de los indígenas de la Sierra Gorda, mantenidos en pie de guerra desde 1810. Estos

(42) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/4

(43) Idem.

propietarios, denominados por del Raso, "labradores en pequeño", por la escasa extensión de sus terrenos, de 1830 a 1860 modificaron su conformación interna por la diversidad social de las personas que fueron adjudicadas con los terrenos de las corporaciones civiles: militares de rango, soldados de la tropa, indígenas de la Sierra Gorda, trabajadores rurales de los valles, hacendados venidos a menos y también algunos denunciante de bienes ocultos que por razones de la suerte o malabarismo político vinieron a ser dueños de pequeños terrenos (huertas) y fracciones o ranchos de las haciendas afectadas por la Reforma liberal.

Las disposiciones legales y la particular inestabilidad política de estos años, fueron determinantes para modificar la composición social interna de los tres grupos de propietarios de la tierra en Querétaro: hacendados, rancheros y labradores en pequeño.

2. Reparto de los ranchos, haciendas y tierras baldías: formación y expansión de los rancheros

La formación y expansión de "los rancheros" como un grupo de propietarios rurales claramente diferenciado de la élite terrateniente tradicional y de los denominados "labradores en pequeño", tanto por la organización productiva de sus propiedades como por su conformación cultural y económica, estuvo determinada por las diferencias geográficas y sociopolíticas que dividían al estado en dos grandes regiones: la Sierra Gorda o Sierra de

Jalpa, según Lucas Alamán (44), agreste, recóndita, sostenida en pie de guerra desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, y la zona de los valles, caracterizada por el esplendor productivo de sus haciendas, ranchos y obrajés y por el auge comercial que su privilegiada posición geográfica fomentaba. (45)

La Sierra Gorda siempre rebelde y cruzada por continuos levantamientos armados desde la lucha por la independencia, y espacio geográfico donde tuvo lugar la revolución de Euliterio Quiroz y los frecuentes levantamientos de Mejía, fue considerada tanto por los liberales como por los conservadores como una zona conflictiva en donde la entrega temprana de los terrenos podía funcionar como un medio catalizador de las necesidades de aquella población, y como recurso eficaz para atraer su voluntad tan preciada en los conflictos armados.

Por otra parte, desde 1824, y de manera particular a partir de la formación de la República central y de la emisión de las Bases Orgánicas en 1843, el gobierno de Querétaro, pretendió disolver las demandas agrarias de los serranos no sólo mediante el reparto de terrenos entre los lugareños, sino también promoviendo la colonización de la Sierra con "gente industriosa de los valles".

Sin mucha evidencia empírica, pero con gran visión política, en las conclusiones y recomendaciones dadas por Antonio del Raso en sus Notas estadísticas del Departamento de Querétaro, elaboradas en 1845, se asienta, en primer lugar, el necesario

(44) Lucas Alamán, Op. cit. Tomo 4, Pág. 690

(45) Las condiciones particulares de una y otra región fueron desarrolladas en el Capítulo I de este trabajo.

repartimiento de los terrenos baldíos de la Sierra, para promover una mejor distribución de la población concentrada en 4 distritos: Querétaro (460 1/3), San Juan del Río (271), Tolinán (237) y Cadereyta (183 2/8). En contraposición, el distrito de Jalpan, el que se proponía colonizar, solamente tenía 64 y el distrito restante, Amealco, 80. Bajo esta lógica, Del Raso sostiene:

Sabiendo como se sabe, a no poderlo dudar, que hay en el departamento 351 leguas cuadradas de baldíos, los más en Cadereyta, Amealco y Jalpan, (Sic) debe hacerse un exámen riguroso sobre este punto, reconociendo los que tocan a los particulares por sus títulos, y los que pertenecen a los pueblos por sus fondos legales, para promover lo conveniente a la colonización de esos terrenos, en lo que se interesa el aumento de la población, que es la base de la riqueza. (46)

Sin embargo, los terrenos puestos en venta o adjudicados en la Sierra, no provinieron, durante estos años, de los llamados terrenos baldíos sino de las tierras de los Ayuntamientos, de las comunidades indígenas y de las viejas haciendas serranas.

En 1847 por la revuelta encabezada por Quiroz, contra la expansión de la hacienda y sus sistemas de trabajo, se repartieron terrenos entre la tropa. Revolución que por sus demandas de tierra fue acremente calificada y vilipendiada por los sectores amenazados por ella, los hacendados. En algunos casos, las soluciones tomadas en contra de los levantados bajo las banderas del Plan de Río Verde fueron radicales. Quiroz aprehendido por Tomás Mejía fue fusilado. Pero también hubo concesiones de amnistía para los rebeldes. Y la decisión más notable por sus (46) Antonio del Raso, Op. Cit. Pág. 123.

repercusiones sociales fue la fundación de las colonias militares.

Relata Moisés González Navarro que,

A cada uno de los tres establecidos se le concedieron 4 sitios de ganado mayor para repartirlos entre los proletarios. El 15 de noviembre de 1849 se dió preferencia en el reparto a miembros de la guardia nacional que habían luchado en esa guerra a los indultados y a los habitantes pacíficos. 5 días después se decretó que los 478 prisioneros fueran enviados 100 a cada uno de los estados de Durango, Chihuahua y Tamaulipas, 132 a Coahuila y 46 a Guanajuato...el gobierno de Guanajuato... había sido autorizado para hacer...a los pobladores mercedes de los terrenos realengos de la Sierra (47)

Los conflictos de la Sierra de hecho habían tomado un nuevo cariz durante la guerra de la intervención americana. En esta especial situación, relata Leticia Reina,

los gobiernos de los estados de Querétaro, Puebla y México, decretaron la ocupación de los bienes de manos muertas. Es decir, el gobierno quedaba facultado para poner a la venta las tierras de las corporaciones, entre ellas la de las comunidades indígenas. (48)

La medida tomada para allegarse recursos para la guerra, fue dada nacionalmente por el decreto de Gómez Farías del 11 de agosto de 1847. (49) Decreto que posteriormente fue suspendido por Santa Anna.

-
- (47) Moisés González Navarro, Anatomía del poder en México 1848-1853, México, El Colegio de México, 2da. edición, 1983, Pág. 40-41. También revisar de Leticia Reina, Las Rebeliones Campesinas en México, (1819-1906) México, Siglo XXI, 1980.
- (48) Leticia Reina, Las rebeliones campesinas de Sierra Gorda (1847-1850), Mimeo, Pág. 10
- (49) Silvio Zavala, Apuntes de historia nacional, SepSetentas, Pág.81.

De una u otra manera, desde 1846 se presentan algunas adjudicaciones de los terrenos que pertenecian a los municipios de la Sierra, cuyo costo de redención se caracteriza por ser exiguo. De acuerdo a la manifestación rendida por el Ayuntamiento de Cadereyta en 1865, de 1846 a 1857, 63 individuos habian sido beneficiados por el reparto de los terrenos municipales.

**Manifestación de los propietarios de fincas o capitales
pertenecientes a las municipalidades.**

Adjudicatarios	Población	Año	Tamaño terreno	valor
José María Cabrera	Bernal	1846	No/especifica	235.00
Melitón Montes	"	"	"	13.00
Tomás Montes	"	"	"	120.00
Ignacio Olvera	"	1856	"	165.00
Antonio Cabrera	"	"	"	9,210.00
Landino Amaro	Cadereyta	1857	1 fanega 13 cuartillas.	123.00
Fco. Barreda	"	"	2 Fanegas/siem- bra	166./5R
Ramón Nava Sánchez	"	"	Idem	166./5R
José María Amaro	"	"	46 cuartillas	79./6R
Gabriel Olvera	"	"	Idem	74./9R
José María Maldonado	"	"	1 fanega 46 cuartillas	161./3R
Ignacio Magos	"	"	2 Fan.43 Cuart.	239./4R
Juan Resendiz	"	"	1/2 Fan.	41./6R
Bonifacio Vega	"	"	1 Fan.	83./2R
Bonifacio Vega	"	"	1 Fan. 40 Cuart.	192./2R
Vicente Barrera	"	"	1 Fan.	83./2R
Miguel Olvera Cantú	"	"	1/2 Fan.	40./5R
Vicente Arias	"	"	1 Fan.	83./2R
Lavino Resendiz	"	"	36 Cuart.	71./7R
Cristóbal Olvera	"	"	1 Fan.	83./3R
Juan Neponuceno	"	"	Idem	83./2R
Ramón Luque	"	"	Idem	83./7R
Ramón Vega Sánchez	"	"	Solar	8./2R
Germán Olvera	"	"	1/2 Fan.	40./5R
Vicente Ledesma	"	"	1 Fan.	83./2R
Antonio Vega y Vega	"	"	1/2 Fan.	41./5R
Antonio Vega y Vega	"	"	2 Fan.	166./9R
Concepción Espíndola	"	"	1 Fan.	83./2R
Toribio Vega	"	"	2 Fan.	166./9R
Cayetano Mendieta	"	"	22 Cuart.	38./1R
Josefa Guillén	"	"	18 Cuart.	31./2R

Marcelo Pérez y socio Manuel				
Morales	"	"	40 Cuart.	67./9R
Manuel Barrera	"	"	1 Fan.	83./2R
Paula Diaz	"	"	Idem	104.00
José María Aguilar	"	"	1 Fan.	83./2R
Francisco Trejo	"	"	2 Fan.	166./9R
Antonio Resendiz	"	"	1 Fan.	83./2R
José María Vega y Pérez	"	"	Idem	83./2R
Trinidad Ledesma	"	"	2 Fan.	166./9R
Antonio Resendiz	"	"	1 Fan. 45 Cuart.	161./2R
Prudencio Nieto	"	"	1 Fan.	83./2R
Domingo Hernández	"	"	Idem	83./2R
Juan Hernández	"	"	2 Fan.	161./3R
Rafael Olvera	"	"	1 Fan. 45 Cuart.	161./3R
Marcelo Trejo	"	"	2 Fan.	166.00
José Ma. Lezama	"	"	1 1/2 Fan.	129.00
José Espindola Trejo	"	"	2 Fan.	166.00
José Resendiz	"	"	10 Cuart.	11.00
José Ma. Herrera	"	"	1 Fan.	83./2R
Luis y Antonio Trejo	"	"	Idem	83./2R
Antonio Ledesma	"	"	Idem	83./2R
José María Formosa	"	"	42 Cuart.	72./2R
Finado esposo de Damiana Vega	"	"	2 Fan.	166./9R
José María Ledesma	"	"	1 Fan.	83./2R
Antonio Vega	"	"	2 Fan.	166./9R
Hijo de Antonio Vega	"	"	1 Fan.	83./2R
Marcos Olvera	"	"	5 Cuart.	92.00
Santa Ana Ledesma	"	"	Agostadero El Magallal	1,600.00
Santa Ana Ledesma	"	1856	Sitio El Sombrerete Charco Largo y El Quemado	4,000.00
Bonifacio Vega	"	1857	40 Cuart.	192./6R
José Trejo	Bernal	1857	Terreno La Cañada	700.00

Manifestación que se hace a disposición del artículo 18 de la Ley de 5 de julio de 1865. Cadereyta 3 de octubre de 1865. (50)

Muchos de los terrenos adjudicados en ese periodo siguieron perteneciendo a las familias de los adjudicatarios. Pero otros muy pronto vendieron sus bienes, o fueron expropiados por los más poderosos. Entre los compradores de los terrenos se destaca la

(50) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 494, Exp. 6

familia Olvera y la familia Vega, rancheros de origen, y la de los Resendiz, quienes eran herederos de los hacendados de la Sierra afectados por la política del centro.

De las batallas del general Mejía en 1847, data el inicio de la concentración de las tierras iniciada por Rafael Olvera, general imperialista, quien era segundo de Mejía. El mismo Rafael Olvera quien en 1857 aparece adjudicado con una fanega 45 cuartillas de terreno en Cadereyta.

El caso del latifundio formado por los Olvera en la Sierra Gorda es bastante ilustrativo sobre la forma como los militares vinieron a ser dueños de bastas extensiones de tierra. En enero de 1865, los vecinos de San José de los Amoles solicitaron se revisaran los títulos de propiedad de la hacienda del Extoraz (Sic) y del pueblo de Bucareli, porque les habían usurpado sus terrenos. El prefecto del distrito de Jalpan, ante la solicitud, indica que se infería, en el lugar, que el pueblo había pertenecido al Real y Minas de Escanela puesto que no había tradición alguna sobre su fundación. Sin embargo, indica que las dificultades entre Bucareli y Amoles se habían sucitado porque en los títulos de Bucareli se encontraba enmendada la palabra potreritos con la de potrerillos, cambio que ampliaba los límites del pueblo. El Prefecto sugiere que se aumente la dotación de Amoles "señalándole una legua por cada viento en lo que no se perjudica ni los pueblos ni las haciendas con que linda". (51)

Muchos años más tarde, los expedientes expropiatorios de la hacienda del Estoraz que pertenecía al latifundio de los Olvera, (51) AGN, Gobernación, Caja 511, Exp. 15

relatan las versiones de los vecinos de Vizarrón de Montes:

esta hacienda forma parte de la gran extensión territorial que pertenece a la testamentaria del finado señor Gregorio Olvera uno de los más ricos terratenientes del estado donde a últimas fechas se le consideró como millonario. (52)

La misma argumentación sostenían los solicitantes de Ahuacatlán de Guadalupe, quienes además señalaban que,

Rafael Olvera, finado, hizo el gran acaparamiento de estas tierras, para su único beneficio, expulsando a los que representaban como dueños de los terrenos y a otros esclavisándolos y reduciéndolos a la vida del miserable jornal como se podría comprobar con algunos títulos de los perjudicados, que aún existen sin el menor indicio de traslación de dominio. (53)

La extensión de las propiedades de los Olvera, asegura el exgobernador de Querétaro, Noradino Rubio, (1939-1943), abarcaba desde las puertas de la ciudad de Querétaro hasta el estado potosino de Arroyo Seco. Estamos hablando así de casi medio estado bajo el control de un hacendado de extracción militar. Para fines del siglo XIX, Gregorio Olvera, heredó del general Olvera las 17 haciendas que conformaban este latifundio: el Pilon y hacienda Vieja en el municipio de Lagunilla, en San Luis Potosí, y Conca, Ayutla, la Florida y Rayo, San Francisco, Tancama, Pitzquintla, el Tejamanil, Estoraz, Higuierillas, La Noria vieja y Miranda...ubicada ésta última a las puertas de Querétaro. (54)

(52) Diario Oficial del Estado, Sombra de Arteaga, 11 de agosto de 1927, pág. 336.

(53) Idem, Pág. 337.

(54) Noradino Rubio, "La familia Olvera de Jalpan" en Revista

No sólo el general Olvera se benefició de la protección de Tomás Mejía. También Diego Vega fue favorecido por las decisiones tomadas por el general conservador: Santa Ana Ledesma, quien era síndico del pueblo de Bernal, certifica que el agostadero conocido como el Magallal de Vizarrón, los sitios del Sombrerete, Charco Largo y el Quemado de Cadereyta fueron adjudicados en \$4 000.00 en 1856. El rancho del Sombrerete por fallo judicial lo vendió José María Maldonado por precio de \$1 000.00 que a censo redimible y con réditos al 6% quedó reconociendo al municipio y los tres mil pesos restantes fue obligado a redimirlos por órdenes del C. Sr.General Tomás Mejía a cuyo efecto tuvo que vender Rancho Quemado a Diego Vega en \$1 500.00.

En el municipio del Doctor en Cadereyta, radicaba la vieja hacienda "San Rafael de Agua de Patos" de Antonio Resendiz (finales del siglo XVIII) dividida a su muerte en tres fracciones. Para el 11 de mayo de 1847, algunos terrenos de dicha hacienda se convirtieron en pueblo anexándole otras rancherías y haciendas para completar el censo necesario. Surgió así el pueblo de Boyé y las fracciones de Dotigá y Boñú. (55) San José Bizarrón, rancho dado en merced por la pacificación de la Sierra a finales del siglo XVIII, también fue convertido en pueblo en 1847. El mismo origen tuvo San Sebastián Bernal erigido en pueblo en 1850. De los terrenos de las haciendas de Amoladeras y la de Albercas que pertenecían a Vicente González de Cosío, se formaron las colonias militares de la Sierra en 1851. (56) En el documento del prefecto

Querétaro, año IV No. 41, noviembre de 1988, Pág. 80.

(55) Antonio Septién y Villaseñor, Op.Cit. Pág. 439

(56) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/17

de Jalpan, ya citado, se refiere que en los títulos de la hacienda de Conca aparecía que se había dado posesión de los terrenos de la hacienda a los pueblos de Amoles, Landa, Conca, Arroyoseco y la Purísima.

El traspaso de los terrenos era muy frecuente en la Sierra, por la inestabilidad política predominante en la región. En la Villa de San Nicolás Tolentino de Cadereyta, Arcadio Pérez, vecino del rancho de "Los Pérez", era dueño en 1858 de 3 fanegas de tierra de sembradura con algunos magueyes por compra que había hecho a Vicente Trejo en \$300.00, quien había sido arrendador de las clarisas y con quienes tenía una deuda sobre el rancho de \$180.00. No obstante que Trinidad Olvera aparece como propietario del rancho de "Los Pérez" que se había subrogado en 1871 por el valor de \$230.00, para 1899 el poseedor del predio era Vicente Vega.

El rancho de los Encinos con 28 ó 30 fanegas de sembradura y una tabla de tierra nombrada del "Pelado" de una caballería de tierra propia de María Josefa Vega, esposa de Francisco Olvera, estaban valorados en \$10 111.00, por adquisición que se había hecho a la Venerable Congregación de Sacerdotes de Santa María de Guadalupe de Querétaro. Propiedad que reconocía \$2 500.00 a la mencionada Congregación y que fueron liberados por Francisco Olvera Lizundia en 1871. Año en que el Rancho, entonces denominado hacienda de los Encinos, es denunciado por Feliciano García, por un capital de \$4 300.00 que se dedicaba, decían, a obras pías. El capital fue redimido por Francisco Olvera quien demuestra que la propiedad había sido adquirida en 1794 por

Francisco Olvera, por compra hecha a Joaquín Gutiérrez.

La familia de los Olvera, arrendadora de las tierras de las Cofradías y después importantes Rancheros de la región, tenían algunas de sus familiares mujeres como religiosas en los conventos de la ciudad de Querétaro. Su condición económica, al momento del ingreso de sus hermanas al convento no era lo voyante que aparece para mediados del siglo XIX, puesto que no pudieron otorgarles dote de manutención como era lo usual. Con la exclaustación de las religiosas y pese a que no habían introducido dote, "el convento de Santa Teresa les había aplicado de sus bienes \$4 000.00 cuyos réditos disfrutaron hasta su exclaustación en octubre de 1867". Las religiosas, Mercedes Olvera, hermana de Francisco Olvera Lizundia y Manuela Olvera junto con Ignacia Castillo, reclamaron al gobierno local, en 1869, una dote para sobrevivir en el mundo. Dote que la oficina de hacienda de Querétaro asignó al familiar de las religiosas y que debería asegurarse sobre los capitales que gravaban la hacienda de los Encinos.

Después de un complicado litigio, el rancho de los Encinos fue embargado en 1888 y se puso como depositario del mismo a Hilario Pérez. En ese año, Pérez informa que no hay en el rancho efectos vendibles a fin de cubrir los adeudos y que la corta existencia de maíz que existe "se está consumiendo entre los que están haciendo la labor el presente año, por lo que creo que hasta fines del año se podrá realizar alguna cantidad". Ese mismo año, el dueño del rancho, Francisco Olvera, pagó su adeudo de \$100.00.

El expediente, no obstante, se cerró hasta 1919. (57)

Se puede observar que en la Sierra Gorda los propietarios rurales siguieron un proceso particular. En la base se encuentran los propietarios individuales que en su mayoría no lograron trascender su propio origen como peones, amarrados como estaban a los esquemas de trabajo, esclavitud y peonaje por deudas, aplicados en las viejas haciendas de la Sierra. En este sentido, los mestizos e indígenas de Cadereyta, Bernal, Tolimán y Jalpan, dotados o adjudicados con pequeñas parcelas de sembradura, si bien vinieron a ser dueños de estos terrenos, carecieron de la experiencia productiva necesaria para organizar las labores de sus tierras en forma comercial. En un lapso muy breve sus ranchos fueron adquiridos por aquellos de entre ellos más avezados que lograron superar su propia condición de "peones" y arribar al caracter comercial y productivo que tipifica a los llamados "rancheros".

En este caso se encuentran algunos individuos de la familia Olvera, de la familia Vega y también de los Resendiz, quienes a largo plazo lograron acumular vastas extensiones de terreno, aún cuando siempre explotadas de manera individual como ranchos independientes.

Es decir, la conformación del grupo de los rancheros en la Sierra Gorda no siguió un proceso uniforme. Algunos rancheros serranos proceden de aquellos peones que fueron adjudicados de manera individual con los terrenos de los Ayuntamientos. El grupo también se conformó con los arrendatarios y subarrendatarios de (57) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 137/164.

las fincas, que vinieron a ser dueños de las tierras arrendadas. Pero también se dió el caso de algunos hacendados, venidos a menos, como los Resendiz, quienes optaron desde entonces por el modelo de producción propio del rancharo para proteger sus fincas.

La diversificación de los rancharos serranos en cuanto su origen, expresa con nitidez la tipología propia del rancharo: el propietario de terrenos agrícolas y ganaderos de corta extensión, bajo prácticas de cultivo que mantienen un uso racional e intensivo del suelo y que organiza su producción a escala comercial. El rancharo, por definición propia, aun cuando posea varios ranchos, no cae en la tentación de formar con ellos una sola propiedad al estilo de los hacendados. En el momento que el rancharo pretende extender los límites de sus ranchos e integrarlos bajo un solo sistema, el de la hacienda, en ese momento pierde la característica esencial que lo definía como rancharo.

La concepción ranchera de la producción agrícola en parcelas de corta extensión y con criterios comerciales, también es sostenida en los Valles. Los rancharos conservaron su calidad de rancharos, aún cuando extendiendo el número de sus ranchos, por la experiencia adquirida como arrendadores de los ranchos de las haciendas. Las grandes extensiones que contenían las haciendas, algunas de cuyas porciones ellos administraban bajo los contratos de arrendamiento, pese a los sistemas de control establecidos para centralizar la producción y evitar el desvío de los fondos, permitía obtener ganancias más cuantiosas de las que se estipulaba en los contratos. De esta situación se dió cuenta Esteban Díaz

González a la muerte de su administrador Ignacio Rumayor y Toca, por la azarosa circunstancia de que Rumayor y Toca lo había nombrado albacea testamentaria de sus bienes. Dice Díaz González en su testamento:

Ignacio Rumayor y Toca quien sirvió muchos años exclusivamente la administración de mis haciendas (y sin conocimiento de sus operaciones los últimos diez años) con solo el sueldo de Quinientos pesos mensuales del cual y de los productos de las sementeras que hacía en los Ranchos de los Cerritos y de las Bocas que yo le tenía dados en arrendamiento y de una que otra fanega por separado, apareció en su fallecimiento un caudal de más de cien mil pesos que no pudo haberlos producido en los objetos relacionados, ni en el rescate o compras anticipadas de maíz que solía hacer a algunos pehualeros, únicas especulaciones personales que le ocuparon los últimos 15 años: (hasta cuya época era muy corta su fortuna y a mi vista sus procedimientos) en medio de la confianza que me merecía su conducta y manejo de intereses, hay que tener en consideración que nunca llevó ni me dió cuentas de los de su administración: que en la enagenación de mis semillas estaba yo notando considerables bajas de los cálculos formados en las existencias de las trojes, que tenía poca proligidad en llevar con absoluta separación los mutuos intereses y cuenta; y que poco antes de morir aseguró a mi capellán y a mí propio que le oprimía el temor de que en esta mezcla de intereses consideraba la necesidad de recompensar el daño que creía haber inferido a los míos aunque sin malicia; en medio de estas consideraciones yo he estado cumpliendo los legados de su testamento hasta más allá de cien mil pesos, quedando solo en mi poder cosa de quince mil poco más o menos; en cuyo estado y no pareciéndome prudente gravar el interés de mis hijos, consulté todas las circunstancias con Teólogos y juristas imparciales...me resolvieron de acuerdo que podía sin temor de responsabilidad omitir el cumplimiento de dicho resto aplicándolo a mis bienes. (58)

El proceso seguido por los rancheros en la zona de los valles de Querétaro y San Juan del Río, también pone en evidencia que aquellos individuos que habían sido arrendadores y administradores de las haciendas, y cuya posición laboral los había acercado a la cultura propia del hacendado, tendieron a despreciar su calidad de rancheros. En un plazo corto asumieron la cultura y los sistemas de cultivo practicados por los hacendados.

Entre los arrendadores de los ranchos de las haciendas que vinieron a ser propietarios de los terrenos que trabajaban se encuentran Pedro Ortiz, empleado de la Sra. Vergara que trabajaba unos terrenos entre las labores de Peñuelas y Viborillas de la hacienda de Buena Esperanza. Arrendador que para 1860 es propietario no sólo de esa franja de terreno de Buena Esperanza sino también de la hacienda del Fresno, que estaba ubicada en la vecina población de Celaya.

Muy conocido fue en su época el caso de Guadalupe Guerrero, arrendador durante varios años de la hacienda de San Pedro y San Pablo de la Era, más conocida como hacienda La Era, ubicada en las inmediaciones de la ciudad de Querétaro. Hacienda muy conocida aún hoy día porque sus terrenos fueron reservados por el gobernador Agapito Pozo (1943-1949) para la expansión industrial del Querétaro moderno.

La hacienda propiedad del Luis Sánchez del Villar reportaba varios capitales gravados por el señor del Villar entre 1796 y 1805. En total la hacienda estaba gravada con \$26 500: \$20 000.00 a favor del convento de Santa Clara, \$1 000.00 a favor de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Querétaro,

\$2 000.00 en favor del convento de San Francisco, \$1 500.00 en favor del convento del Carmen y \$2 000.00 en favor de la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe. Concurzada la finca a la muerte del propietario del Villar, no alcanzaron lugar muchos de los capitales gravados y por este motivo pasó al dominio del convento de Santa Clara que era el acreedor más fuerte de la testamentaria. Posteriormente, en 1832, Guadalupe Guerrero, arrendador de la hacienda llegó a un acuerdo con Francisco de Paula Meza, mayordomo de las clarisas: adquiriría la finca por el capital de \$9 000.00 con intereses al 6% que seguiría reconociendo al convento de Santa Clara. Los autos del concurso mediante el cual Guerrero había venido a ser el propietario de la hacienda se habían perdido porque los archivos fueron quemados en 1855.

Posteriormente, con la aplicación de las leyes de reforma en Querétaro, la hacienda estuvo sujeta a un largo litigio. Se la disputaban al legítimo propietario, Dolores Guerrero, hija de Guadalupe Guerrero, Federico Cassina, denunciante de los capitales ocultos, el prestamista español que también disputaba la hacienda de Lodecasas, Gutiérrez García, quien en 1861 había embargado las cementeras de la finca y después se apropió de ella como acreedor mayoritario, y, sobre todo, después de 1862, por Joaquín Garma quien acudió a cuanto recurso administrativo y político disponía para apropiarse de la hacienda. Hacienda que permaneció, en medio de las temporadas de embargo y de las concenciones legales a Garma, en propiedad de Dolores Guerrero.

Aún cuando algunas adjudicaciones de los ranchos y las haciendas se realizan para recabar fondos para la guerra es

evidente que las propiedades adjudicadas prácticamente estaban en poder de los arrendatarios. Cuando en 1862, el administrador de rentas de Querétaro informa que "de acuerdo a los poderes extraordinarios se procederá a la enajenación de varias fincas pertenecientes a la beneficencia pública, se enlista la hacienda de Buena Esperanza y la hacienda de Obrajuelo, situada ésta última en la jurisdicción de Guanajuato. De hecho la hacienda de Obrajuelo no pertenecía como Buena Esperanza a los bienes de la beneficencia pública, sino que pertenecía a la Congregación de Guadalupe de Querétaro. La hacienda había sido arrendada por el señor Letona desde épocas muy remotas. Arrendador que no la trabajaba por su cuenta sino que la tenía subarrendada a Felipe Soto en 1858. En este caso, después de una serie de negociaciones entre los varios arrendadores de la finca, los herederos del señor Letona, el Sr. Manuel Abasolo y el Sr. Domínguez, sobre si se debía o no aprovechar la ley de nacionalización, el gobierno local cedió los derechos a Felipe Soto subarrendador de la hacienda quien se convirtió así en el dueño de la hacienda de Obrajuelo.

De esta manera, de 1830 a 1860 en Querétaro se realizó una transformación radical en la composición social de los propietarios rurales. El tradicional grupo de los hacendados dejó de ser un grupo monolítico. Surgieron los rancheros con formas de producción definidas y los propietarios individuales, los que surgieron por el fraccionamiento "individual" de la propiedad comunal indígena, que se empezaron a constituir en arrendadores y subarrendadores de los rancheros y de los hacendados. La diversificación de los propietarios rurales iniciada en 1830,

alcanzó dimensiones inimaginadas a partir de 1860 con la aplicación de las leyes de la Reforma liberal y con las leyes agrarias emitidas por el transitorio Imperio de Maximiliano.

Si bien es cierto que los decretos Ley que pusieron en circulación los bienes de manos muertas (las propiedades de las corporaciones religiosas, de las comunidades indígenas y los terrenos municipales) tenían el cometido de recabar fondos para el erario público (propósito presente en todos los intentos de nacionalización de los bienes eclesiásticos desde la disposición española de 1804), y que también tuvieron el carácter de "premio" para aquellos que de una u otra forma habían apoyado la lucha liberal, y que, sin duda, en diversas ocasiones la medida fue empleada para disolver los conflictos que se suscitaban en las regiones, es innegable que después de 1857 el principal objetivo perseguido era dotar de tierras, antes que a nadie, a los arrendadores de las fincas y de los ranchos. Es decir, hacer propietarios a aquellos que hasta entonces se habían considerado como clases subalternas, como "vil populacho".

Esta acción, clara y transparente en los decretos dictados por Juárez en Veracruz -Decretos del 12 y 13 de julio de 1859- impulsaba la formación de un nuevo grupo social a fin de generar la reacción política buscada a tientas por los liberales durante casi medio siglo: consolidar, de manera independiente a las ideologías políticas en boga, una coalición de intereses entre los liberales y los sectores desprotegidos, sin descuidar la consolidación de una alianza fuerte con los grupos sociales medios, algunos elementos de la clase aristocrática y los

empleados públicos y militares. Los grupos sociales de nuevo cuño que fueron profundamente beneficiados por la reforma liberal.

Para 1861, la aplicación de las leyes de Reforma tendía a favorecer la concentración de la propiedad en manos de los administradores públicos, los prestamistas y los militares, frustrando las expectativas de los liberales que habían confiado en revolucionar la vida de los trabajadores del campo y de los arrendatarios, convirtiéndolos en propietarios de las tierras que trabajaban. Algunos estudiosos del periodo como Scholes, consideran que el resultado más evidente de esta distorsión fue un hecho indiscutible: "la tierra iba a parar a manos de especuladores y negociantes que lo único que deseaban era que el pobre cambiara de amos" (59) porque la legislación había sido "mal preparada".

En realidad, el proceso de definición e integración de los grupos propietarios fue lento y lleno de aristas no solo por la mala aplicación o por la aparente desvirtuación ideológica de las Leyes de Reforma, sino también porque el contexto social predominante en el país, caótico y anárquico, estimulaba la formación de una sociedad en donde las fronteras de clase parecían desdibujarse y perder la importancia que habían tenido durante todo el periodo colonial. Sin embargo, esta gran flexibilidad social, concreta y real por las oportunidades abiertas, en ocasiones chocaba drásticamente con los arrestos clasistas de la élite terrateniente que de cuando en cuando resurgían con fuerza

(59) Walter V. Scholes, *Política mexicana durante el régimen de Juárez, 1855-1872*, F.C.E., México, 1972, Pág.95

incontenible.

Los herederos de los viejos aristócratas que habían conservado a ultranza sus propiedades y que habían negociado con cuanta fuerza política opositora a sus intereses se levantaba en el centro y en las regiones, se negaban a desaparecer del medio social. Estos individuos, inmersos en el grupo amplio de los hacendados, conservaron la idiosincracia cultural de sus antecesores. Por su arraigo tuvieron la fuerza social suficiente para enfrentar y despreciar, por advenedizos, al grupo amplio del que formaban parte. Grupo que estaba conformado con los propietarios de bienes rústicos que habían aprovechado al vuelo la decadencia y las premuras económicas de algunas de las familias de "bien", adquiriendo las haciendas famosas por su esplendor productivo. También se incluían en el grupo de los hacendados, los militares, los administradores y los prestamistas que habían sido premiados por medio de las concesiones políticas y también por los malos manejos administrativos propios del periodo. Los denominados por Andrés Molina Enríquez como "criollos nuevos". Aquellos que, "merced a la minería, al comercio, al contrabando, o al agio privado u oficial, habían logrado reunir capitales de relativa consideración... obrando como denunciante... pudieron aprovecharse de dichas Leyes (las de la Reforma), en virtud de ellas pudieron adquirir fincas que antes no podían... porque no estaban en el comercio, no estaban jamás en venta..." (60).

La administración Juarista buscó corregir las desviaciones

(60) Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales 1909, Ed. Era, México 1978, Pág. 121.

políticas y sociales registradas en la aplicación de las leyes de nacionalización en las regiones, mediante la centralización de los expedientes y de la toma de decisiones. De manera especial se intentó controlar la autoridad y autonomía que en una primera instancia se había concedido a los gobernadores de los estados.(61) No obstante, estas medidas tampoco tuvieron el efecto esperado. Los expedientes de las transacciones se perdían o, como fue la regla en Querétaro, con motivo de la pugna entre liberales y conservadores y después a causa de la guerra de intervención, los archivos habían sido quemados y saqueados.

Condiciones complejas que, sumadas a la fuerte carga de intereses particulares y políticos creados, daban lugar no a una mejor distribución de los terrenos sino a largos litigios y también a oscuros y complicados procesos para ocultar el despojo descarado de las propiedades y la concentración que de ellas hacían los caudillos y los caciques regionales.

En medio de los avatares armados, las diatribas políticas, y los resabios de los hacendados de 1830 a 1860 se generó un reacomodo de la clase propietaria. La debilidad económica de las testamentarias queretanas auspició la movilidad social de las familias que tradicionalmente se habían mantenido supeditadas a las clases dominantes. Las familias que habían sido el sostén de muchos de los negocios de los propietarios tradicionales y que constituían la fuerza de trabajo pensante de la administración pública. Su rápido ascenso social, también vinculado a las coyunturas políticas y armadas, y su avidez para acumular los

(61) Walter V. Sholes, Op.Cit. Pág. 95

bienes rústicos y urbanos, liberados por los viejos propietarios de la tierra, fue decisiva en la organización de la agricultura. Estos individuos, eran famosos en la época por su industriosidad y por su empeño en recuperar la bonanza agrícola de las haciendas. Empero, ni ellos ni los viejos hacendados pudieron contrarrestar la desolación que se produjo en la agricultura por la voracidad de los políticos, los militares y los prestamistas que carecían de una historia productiva previa en el ramo agrícola. Nuevos propietarios que no fueron capaces de emprender las actividades que eran necesarias para iniciar el despegue de económico del ramo y recuperar el esplendor que era propio de las haciendas.

CAPITULO III

CONFIGURACION DE UNA SOCIEDAD DE PROPIETARIOS INDIVIDUALES

La historia política del país hasta 1870 se presenta como una incontrollable sucesión de desastres y penurias. A las adversidades naturales propias del clima mexicano y a la decadencia y a la pobreza en que quedó sumida la economía a consecuencia de la lucha por la independencia, se sumaron las asonadas y levantamientos armados, las mini-revoluciones, las intervenciones extranjeras, las proclamas y los planes políticos, los gobiernos liberales y los conservadores, las repúblicas y los imperios. Tanto las fantasías y las ilusiones políticas más inimaginables como las aventuras oportunistas y los afanes honestos y transparentes de crear el país del mañana, eran posibles en medio de esa sociedad inmersa en procesos de cambio profundos y radicales.

El desastre militar, político y económico que regía la vida de la nación, la pobreza de las familias otrora famosas por su riqueza y la aplicación de las leyes de nacionalización de los bienes de la Iglesia consolidaron el traspaso de las propiedades, en la década 1860-1870 bajo el carácter de adjudicaciones, que se venía efectuando desde 1830. No obstante, en el medio social queretano, "en otro tiempo florido recodo de la riqueza de media república" (1), la proliferación de los ranchos y de las haciendas fraccionadas se asociaba a la pobreza productiva y a la decadencia social que consumía a la entidad. En este sentido, el propósito

(1) Guillermo Prieto Op. Cit. Pág. 117

liberal de crear una sociedad de propietarios individuales enfrentó un férrea y cerrada resistencia hasta que, bajo la intervención francesa, el gobierno republicano recurrió a la persecución por oficio de los bienes gravados con capitales piadosos.

El conflicto de intereses creados entre los denunciante, adjudicatarios y censatarios y una vez resentidos los efectos de la aplicación de las leyes de Reforma liberal y de las medidas nacionalizadoras y agrarias del Imperio francés, que no fueron lo favorables que esperaban las clases aristocráticas, fueron factores combinados que abrieron el camino a las divergencias ideológicas y políticas que cruzaron la época.

De manera independiente al tiempo que llevaban como poseedores de las fincas y de la forma como las habían adquirido (propietarios que lo eran desde fines del siglo XVIII por herencia familiar, propietarios que habían adquirido las haciendas y los ranchos entre 1830 y 1860, y los denunciante de bienes ocultos, arrendatarios y prestamistas del gobierno que habían sido adjudicados por las leyes de reforma entre 1860 y 1869), los dueños de las haciendas, de los ranchos y de las parcelas individuales, sufrieron intensamente las rencillas acumuladas entre los dos tradicionales bandos existentes en el país.

Tal parecía que el destino de la entidad y el de los particulares se jugaba en la satisfacción de las venganzas personales acumuladas y en la consecución de los intereses "bastardos" de aquellos que solapados en las circunstancias políticas, ambicionaban concentrar el poder y la gloria que los

viej os hacendados habían conquistado por su trabajo en la tierra y por el sistema de dominación y vasallaje que la estructura virreynal había impuesto.

En medio del carácter errático e incierto de las dotaciones realizadas y del caos informativo que predominaba en los asuntos agrarios (2), los tres grupos de propietarios de la tierra, los hacendados, los rancheros y los propietarios individuales, que siguieron fungiendo como peones, capataces y mayordomos de las haciendas, tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por los cambios sociales registrados. Adecuación que durante esos años se traduc ía en la fortaleza y la capacidad de negociación política, económica y militar para sostener la calidad de propietarios en una sociedad en disputa constante por la tierra.

Las pugnas ideológicas y militares entabladas entre los liberales republicanos y los conservadores imperialistas tiñeron las adjudicaciones otorgadas primero por la aplicación de las leyes emitidas por Juárez en Veracruz mediante los decretos del general José María Arteaga del 21 de noviembre y el del 4 de diciembre de 1860, y después afectaron las adjudicaciones otorgadas por la Ley del 26 de febrero de 1865 y el reglamento

(2) Andrés Molina Enriquez en su obra ya citada, Los grandes Problemas Nacionales 1909, registra en la pág 128: "...la propiedad proveniente del fraccionamiento de los pueblos de indígenas, vino a ser todavía inferior (que la desamortización de los ayuntamientos) por varias razones... La repartición de los pueblos se ha hecho desde entonces hasta ahora de un modo tan sumario e imperfecto, que apenas puede haber un 10% en toda la república de títulos de repartimiento que merezcan completa fe: casi todos contienen errores de mensura o de deslinde, cuando no de ubicación..."

respectivo de 9 de marzo, del emperador Maximiliano de Habsburgo, que obligaba a la manifestación de los conocidos como capitales "ocultos" o "piadosos", para su redención.

Los conflictos habidos para imponer los postulados liberales y deshacer las componendas realizadas bajo el imperio de Maximiliano, amén de las diatribas personales y las crisis políticas y económicas que experimentó la élite terrateniente en su entrecruce con la trayectoria seguida por los propietarios individuales, los rancheros y los administradores públicos, sacan a la luz, con toda nitidez, las limitaciones del proyecto liberal, las oscuridades de la perspectiva conservadora y el desaliento de una generación que, después del "fatídico" año 1867, apostó todo a la reconstrucción regional por encima del interés nacional. Las ideologías políticas cayeron del pedestal de la gloria en que estaban y fueron sustituidas por una visión pragmática de la realidad social que hasta entonces parecía imposible. Sobre las bases sociales creadas por las leyes liberales, los propietarios de la tierra en Querétaro iniciaron el restablecimiento de los modos tradicionales de hacer fortuna en la entidad y los procesos productivos que, a ellos, les habían probado sus bondades.

La fragmentación de la propiedad y la proliferación de propietarios rurales (hacendados, rancheros y propietarios individuales), procesos inciertos y ambiguos hasta 1870, inevitablemente tuvieron un cariz político, hasta que los grupos sociales emergentes de este período tuvieron la capacidad de enfrentar sus miedos y sus temores y estructurar la visión de país que necesitaban para prosperar. Bajo esta lógica, en 1867, con la

República restaurada, los hacendados lucharon por restablecer, oficialmente, el proyecto de consolidar la gran propiedad y su hegemonía política como única vía posible para recuperar la prosperidad de la región.

En su preocupación y en aras a satisfacer las demandas del gobierno nacional, se permitió y propició la adjudicación de la propiedad urbana de la Iglesia, abundante en rentas de bajo costo, a los inquilinos, generalmente artesanos, que las arrendaban. También cuidaron, y muy bien, de satisfacer las ambiciones de los administradores públicos y los militares con estos bienes urbanos y algunas fincas rústicas a la vez que procuraron salvar para sí las mansiones de los religiosos que tenían mayor valor y las haciendas famosas por su esplendor productivo. Estos criterios de adjudicación, construyeron una sociedad de propietarios individuales en las ciudades y sentaron las bases para reiniciar la consolidación de la gran propiedad agraria.

1. Las componendas religiosas de la sociedad queretana

La clase propietaria de fincas rurales y urbanas conocía perfectamente el estado que guardaban sus posesiones con respecto a la Iglesia. No en valde, año con año, religiosamente cumplían con los pagos estipulados a las parroquias, congregaciones, asociaciones y conventos. También satisfacían, se podría decir que con orgullo, las capellanías de sangre y las religiosas cargadas sobre sus bienes. Estos propietarios, aún cuando mermados en sus recursos e imposibilitados para satisfacer los

pagos anuales que las fundaciones piadosas y los créditos hipotecarios obligaban, propiciaban la venta de sus bienes con los gravámenes incluidos no sólo bajo la necesidad moral de satisfacer las deudas y para no interrumpir un proceso social por generaciones cumplido, sino que, en lo básico, para preservar la propiedad raíz en manos de los particulares. Capellanes, prestamistas y beneficiarios de los capitales piadosos extendían al máximo los plazos de "misericordia" para favorecer la recuperación del propietario que demostraba encontrarse en apuros económicos.

No obstante, desde 1856 y de manera más constante al triunfo liberal en 1860, los prestamistas y los laicos beneficiados con los capitales gravados sobre la propiedad raíz, urbana y rural, pugnaron por defender sus intereses. Entonces no solo se negó todo plazo de "misericordia" a los propietarios de los bienes, sino que se exigió el pronto pago de los réditos y se procuró obtener la mayor ganancia posible en las transacciones realizadas. En escasos 4 años, todavía sin aplicarse en Querétaro, las leyes que ordenaban la desamortización y la nacionalización de los bienes de manos muertas modificaron el ambiente cultural: frente al conflicto de intereses y la cauda especulativa inevitable que suscitaba la liberalización de las propiedades y de los capitales religiosos y de sangre, la preocupación por cumplir y respetar las fundaciones piadosas pasó a un segundo término. También la Iglesia y los hacendados, los directamente afectados con los cambios, trastocaron sus principios y sus pautas tradicionales de conducta. Ante la certeza de que sus bienes estaban en un alto

riesgo de perderse buscaron, ante todo, fortalecer sus vínculos económicos.

Estos factores culturales se pueden identificar en la carta que Agustín Francisco Sánchez de Taggle envió al arzobispo de México, solicitando una prórroga para el pago de sus adeudos. En 1860, Agustín Francisco Sánchez de Taggle, viejo comprador de los bienes de la Iglesia, no había podido pagar los réditos de un capital de \$20 000.00 que gravaba a las haciendas de Atongo y Amazcala en favor del Seminario Conciliar de México. Apremiado por el mayordomo del Seminario para hacer el pronto pago, Taggle escribió al Arzobispo el 15 de septiembre de 1860 explicándole que no había podido hacerle los pagos porque "la ocupación de Querétaro por las fuerzas pronunciadas" había cortado toda comunicación con la ciudad de México. Textualmente Taggle señalaba que Silvestre Cano, el mayordomo del seminario, lo amagaba con "medidas violentas" para que hiciera el pago de su adeudo. Exigencia que sería "muy perjudicial" al crédito de su casa, sin obtener por ese medio, aseguraba, una mayor prontitud en el pago. El Arzobispo intervino en el asunto buscando preservar los bienes de la Iglesia. De no favorecer los intereses de la familia Taggle, el capital gravado y la hacienda misma (que Taggle reconocía en propiedad mancomunada con la Iglesia) se encontraría en un alto riesgo por lo eminente que parecía el triunfo liberal a mediados de 1860. Triunfo que conllevaría la aplicación de las leyes de reforma en el estado y la subsecuente denuncia de los capitales por individuos poco sumisos a la religiosidad católica. En estas circunstancias, la Iglesia perdería los derechos que

tenía sobre la propiedad y sobre los intereses del capital que gravaba la finca. La decisión no podía dudarse. Era preciso satisfacer la demanda de tiempo que pedía Taggle, quien así pudo disponer de una prórroga de cuatro meses para satisfacer los intereses vencidos sobre el capital y mantener la propiedad de las haciendas en su poder. (3)

También con las propiedades urbanas que pertenecían a la Iglesia se hicieron arreglos particulares. Entre los muchos casos habidos se puede citar el de la casa No. 3 de Santa Rosa. En 1864, el vicario general del obispado y la rectora, vicaria y conciliaria del Colegio de Santa Rosa, certifican ante el notario Mariano Maldonado que, "debiendo el mismo colegio al Pbro. Vicente Hernández como su capellán y gestor de todos sus negocios más de cinco mil pesos se había acordado, en el capítulo celebrado en 1851, cederle en pago un terreno y una casa contiguos al colegio y dos pajas de agua limpia valuada aquella en setecientos pesos y ésta en seiscientos". Aclararon que desde aquella época había quedado el Pbro. Hernández como cesionario en posesión de los bienes cedidos. De manera independiente a esta argumentación, en 1870 es denunciado el capital de esta casa, en ese año en propiedad de Luis G. Borja. Los denunciantes alegaban a su favor que, de acuerdo a las leyes, eran nulos los acuerdos del capítulo de las monjas. (4)

La confabulación económica establecida entre los propietarios de las haciendas y las fincas urbanas, y el clero, dueño de los

(3) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 493.

(4) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/125

capitales piadosos y acreedores importantes de los hacendados y casatenientes, constituyó el principal obstáculo a la aplicación de las leyes liberales que afectaban los bienes de la Iglesia y los capitales piadosos que gravaban las fincas rústicas y urbanas.

Atemorizados los hacendados por la amenaza liberal que gravitaba sobre sus cabezas desde el intento de Gómez Farías de 1833, en "malahora" experimentado por Lino Ramírez en Querétaro, de expropiar y nacionalizar los bienes del clero, siempre encontraron, hasta 1860, los medios políticos y administrativos eficaces para ocultar el valor real de sus propiedades y el monto de los capitales piadosos y de sangre que gravaban las fincas. Situación que no hubiera sido posible sin la vinculación de intereses, a todas luces ilícita, sostenida entre los hacendados, los eclesiásticos y los políticos, todos interesados en mantener inalterable el estado de la propiedad.

Los arreglos y las componendas queretanas de esta época fueron consignadas en la Estadística elaborada por Juan María Balbontín en los años 1854-1855. Con indignación Balbontín relata las vicisitudes por él recorridas y su desesperación e impotencia para recabar datos confiables sobre las propiedades rústicas de Querétaro:

Nada nos ha costado más afanes que la reunión de las noticias sobre fincas rústicas, porque alarmados algunos propietarios con la idea de nuevos impuestos, conformes otros con el estado actual de atraso en que se hallan entre nosotros aun los conocimientos más importantes, y ensimismados muchos en sus negocios u ocupaciones, se han negado constantemente a darme esas noticias...haciéndome una resistencia pasiva tanto más invencible, cuanto que no alcanzaba medios

humanos para contrastarla...Debe suponerse que con tan malas disposiciones por parte de los señores propietarios para darme dichas noticias,...y antes bien con un empeño decidido en ocultar los valores de sus fincas, reconocimientos, cosechas, muebles, extensión de terrenos, etc., era imposible de todo punto sacar la verdad para marcar los resultados ciertos de todas las circunstancias que ellas abrazan... Me he visto obligado a hacer esta relación, para que se vea lo difícil que es adquirir estas y otras noticias estadísticas...por la sola razón de que dependen de la voluntad de muchas personas que no tienen disposición para darlas. (5)

La organización social de los queretanos para evitar la implantación de las medidas liberales, rebasó con mucho el ocultamiento de los datos sobre el estado que guardaban sus bienes. La sociedad queretana se oponía, terminante, a los préstamos forzosos de los gobiernos en turno, y a las leyes que directa o indirectamente afectaban el estado de la propiedad. Propiedad de suyo profundamente lesionada por la crisis económica que arrastraban las familias de los hacendados desde 1810. Por ejemplo, cuando Gómez Farías emitió la Ley No 11 del 19 de noviembre de 1846, para recabar 15 millones de pesos en todo el país, según datos del queretano Fernando Díaz Ramírez (6) y de dos millones, según datos de Bazant (7), se impuso una cuota a Querétaro (\$40,000.00 según Bazant y un millón según Díaz Ramírez). La disposición de Gómez Farías, motivada por la necesidad de recursos económicos ante la invasión norteamericana ordenaba que se deberían poner los bienes de la Iglesia como aval

(5) Juan María Balbontín, *Estadística del Estado de Querétaro*, México, 1867, Págs. 38-40 Imprenta de Vicente G. Torres.

(6) Fernando Díaz Ramírez, *Op. Cit.* Pág. 144

(7) Jean Bazant, *Op.Cit.* Pág. 144

del crédito. Para este propósito, los bienes del clero, tanto las propiedades como las hipotecas y los gravámenes piadosos, debían ser inventariados. No obstante el día de la publicación de la ley en Querétaro, el 18 de diciembre de 1846, el pueblo se amotinó para evitar la ocupación de los bienes de la Iglesia posiblemente estimulados por los hacendados quienes se verían en un grave apuro económico al verse obligados a liberar los capitales piadosos. (8)

La defensa que de los bienes de la Iglesia hacían los hacendados queretanos tenía una fundada razón económica: de llevarse a cabo las medidas liberales, pocos tendrían la oportunidad de salvar sus bienes porque los gravámenes acumulados sobre las fincas rústicas y urbanas eran superiores al valor real de las propiedades. Así, bajo una sólida cobertura religiosa, los propietarios defendían a ultranza sus haciendas, sus ranchos y sus casas habitación. En la vorágine, la Iglesia favorecía y estimulaba los convenios ocultos con los hacendados para preservar las propiedades y los capitales en su poder.

A través de las turbulentas negociaciones con las distintas administraciones federales, parece evidente que las estrategias queretanas para impedir la aplicación de las leyes de nacionalización fue eficaz hasta 1860, no solamente por el

- (8) En la "Manifestación de los obispos en defensa del clero y de la doctrina católica con ocasión del Manifiesto y Decretos expedidos por Juárez en Veracruz, del 30 de agosto de 1859" publicada por Alfonso Alcalá-Manuel Olimón en Episcopado y Gobierno en México, Cartas Pastorales colectivas del Episcopado mexicano 1859-1875, Ediciones Paulinas S.A. y Universidad Pontificia de México, México 1989, los obispos refieren la fecha al 11 de enero de 1947. Textualmente dicen: "...decretose la ocupación de los bienes eclesiástico bajo el velo hipócrita de una necesidad imperiosa traída por la invasión americana...". Pág. 26

dominio que los conservadores mantuvieron en el estado sino, fundamentalmente, porque los mismos gobernadores eran a su vez importantes propietarios: ¿cómo podrían, Pánfilo Barasorda, Sabás Antonio Domínguez o Julián Juvera, por mencionar sólo algunos de los gobernadores queretanos, apoyar las medidas liberales que directamente afectaban sus bienes particulares?

En 1857, por ejemplo, Balbontín, por la renuencia de los propietarios a proporcionar información sobre la situación jurídica y económica de sus fincas, no pudo conocer el monto real de los capitales piadosos y de las cargas hipotecarias. De hecho aventuró un cálculo, sosteniendo que las 107 haciendas y los 226 ranchos existentes en Querétaro para ese año (1857), reconocían en conjunto \$470 000. Cantidad que era, decía, la mitad del monto que gravaba a las fincas rústicas. (9)

La confabulación existente entre los gobernadores, el pueblo, los hacendados y la Iglesia para proteger la propiedad raíz fue registrada por Jesús Dueñas, administrador de rentas de Querétaro, quien sostenía que la renuencia de los queretanos para denunciar los bienes del clero respondía al carácter fanático de la sociedad. El 28 de septiembre de 1865, aseguraba:

Querétaro es...en primer grado fanático y hostil por ello mismo a la reforma; sus autoridades siguen el mismo camino

Si en un principio podía existir una motivación religiosa para oponerse a las leyes de reforma, es ineludible que el rechazo

(9) Balbontín, Op. Cit. Pág. 101

se fundamentaba en los intereses patrimoniales de los hacendados y en la defensa de la cultura aristocrática que seguía viva en la sociedad queretana. Todavía en 1865, cuando las realizaciones de las fincas rurales y urbanas a causa de las leyes de nacionalización eran frecuentes, la sociedad queretana se seguía oponiendo a las leyes de reforma, no en aras de una defensa de los bienes de la Iglesia o por problemas de conciencia, sino por los métodos arbitrarios e ilícitos que se seguían para adjudicar los capitales y las propiedades y porque la mayoría de los propietarios no podía enfrentar el pago de los réditos vencidos y el 10% sobre el capital gravado que exigían las leyes.

Los denunciante y los adjudicatarios de los capitales piadosos y de sangre eran rechazados y despreciados por los queretanos, no por atacar los bienes de la Iglesia sino por demostrar "intereses mezquinos" y una falta de providad en su palabra. Comportamientos considerados del todo punto "amorales" y lesionantes de la legítima propiedad de las viejas y honorables familias de la localidad.

Cuando José Siliceo intentó realizar los capitales piadosos gravados sobre la hacienda Lodecasas de la testamentaria Juvera, cuyos fuertes gravámenes la habían convertido en una propiedad fuertemente disputada entre los mismos hacendados, los prestamistas, los denunciante y el fisco, el representante de la testamentaria Juvera, José Ramón Plascoe, asentó en una expresión lapidaria:

viendo (Siliceo) que le era del todo imposible el cobrar los capitales (por la quiebra de la

testamentaria) y por la guerra que se hacía a las leyes de reforma hasta el grado de dudar si quedarían consolidados sus efectos en esta época, convino en darse por pagado como subrogante de \$15 000.00 sin exigir derecho alguno sobre la hacienda Lodecasas...más una vez confirmada por el gobierno local la disposición de la materia y así que nada hubo que temer en este terreno, se afanó por desvirtuar el lenguaje del último documento con perjuicios a terceros.(10)

Todavía en 1869, ya restablecida la República, los capitales piadosos que gravaban las fincas rústicas y urbanas seguían estando ocultos. Romero, jefe de la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público, asienta en la circular del 5 de junio de 1869:

Habiendo comunicado el Gefe (Sic) de Hacienda de Puebla que no podía ministrar los informes que se le han pedido, por haberse extraviado las noticias que algunos escribanos dieron a la misma Gefatura, (sic) en cumplimiento de la ley del 13 de julio de 1859, como consecuencia de los trastornos originados por la guerra extranjera, lo cual han expuesto igualmente otras Gefaturas, alegando el mismo motivo; y no siendo justo que la nación reporte como consecuencia la pérdida de los capitales que se reconocían a la mano muerta, los que continuarían ignorados en su mayor parte, siendo así que deben constar en los protocolos de los escribanos, el C. Presidente de la República ha tenido a bien acordar con tal motivo lo que sigue:

"Junio 4 1869: Contéstese a la Gefatura (Sic), que en virtud del extravío que menciona, pida nuevamente noticia nominal de las imposiciones de capitales que consten en los protocolos de los escribanos y de los registradores de hipotecas, en los términos del art. 36 de la ley de 13 de junio de 1859, con todas las anotaciones que tengan las escrituras respectivas". (11)

(10) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 66/58

(11) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 507, Exp. 66/9. Textualmente el art. 36 de la ley del 13 de julio de 1859 decía: "A fin de evitar las ocultaciones que, con fraude de todo lo dispuesto en esta ley, pudieran verificarse, todos los escribanos públicos o registradores de hipotecas deberán presentar a la oficina de hacienda a quien corresponda, dentro de los veinte días contados desde la publicación de esta ley, una noticia

Los escribanos públicos, en toda la República, se negaban a dar las "noticias" que se les pedía alegando algunos, como Francisco Ruiz de Querétaro, que el tiempo que tenían que dedicar a compilar la información les impediría su dedicación laboral en diversos oficios. Actividades complementarias que tenían que realizar para sostener a su familia puesto que el salario como escribanos no les alcanzaba. Por otra parte, el volumen de la información, lo anárquico de las imposiciones y los cambios registrados, imposibilitaba cumplir con el mandato de la Secretaría de Hacienda en los plazos otorgados. En realidad los escribanos buscaban no sólo la compensación económica -se les concedió \$80.00 mensuales y \$30.00 a los auxiliares- que parecía el argumento fundamental, sino disponer de tiempo para que los propietarios pudieran componer sus asuntos. Algunos escribanos de otros estados, pese a que corrían el riesgo de perder su trabajo, no buscaron subterfugios para negar la información. Por ejemplo, Valdovinos y Tercero, escribanos de Morelia, se negaban a "ministrar las noticias" de los gravámenes que constaban en sus protocolos porque aseguraban que, "sería de fatales consecuencias" para los propietarios.(12)

Aun cuando el ocultamiento de los capitales piadosos era una realidad, las leyes de reforma se empezaron a aplicar en Querétaro

nominal de las imposiciones de capitales que consten en sus protocolos, correspondiente a los bienes que ella menciona. La falta de cumplimiento de esta disposición será motivo de suspensión de oficio por uno o dos años, según la gravedad del caso"

(12) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 507, Exp. 66/9

en 1861. Antes de ese año, como ya ha apuntado Bazant, no se efectuaron transacciones con los bienes eclesiásticos. A 1856,

sólo se habían amortizado fincas por \$251 809.00, pero de esta cantidad, solo \$83 333.00 correspondían a los inmuebles de la Iglesia (venta de una hacienda del Carmen) casi todo el resto consistía en la venta de las fracciones de la hacienda de Esperanza". (13)

La ley Lerdo de 25 de junio de 1856 y los posteriores decretos de Veracruz de 1859, no tuvieron una cálida acogida en Querétaro. Pese a ello, algunos bienes de la Iglesia -casas de los conventos en Querétaro y en San Juan del Río- fueron desamortizados en esa época y posteriormente, cuando la ley de Felix Zuloaga del 28 de enero de 1858, que derogaba la disposición de 1856 (14), algunos de estos bienes fueron devueltos a sus antiguos poseedores. No obstante, los efectos de la Ley Lerdo (1856) se dejaron sentir, con gran impacto, en los municipios de la Sierra en donde se repartieron muchas pequeñas parcelas, tomadas de los terrenos que los Ayuntamientos tenían en arrendamiento. En Cadereyta, por ejemplo, en un sólo año, 1857, se habían beneficiado 56 personas, todas ellas acogidas a la Ley Lerdo. (15)

Si los liberales por su lado emitían y llevaban a efecto exacciones directas al clero e indirectas por las leyes de

(13) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 66/58

(14) Jean Bazant, Op. Cit. Pág. 147

(15) **Manifestación de los propietarios de fincas o capitales pertenecientes a las municipalidades**, que rinde el Prefecto de Cadereyta para dar cumplimiento a la disposición del art. 18 de la Ley del 5 de julio de 1865.

desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos, para, entre otros objetivos, obtener recursos para el erario, también los conservadores se veían obligados a recurrir a la riqueza de la Iglesia para solventar sus necesidades.

Presionada la Iglesia para satisfacer las necesidades económicas del partido que ella suponía le sería más favorable, intentaba, por todos los medios a su alcance, obtener los recursos que, regionalmente y por congregaciones religiosas, les asignaban los distintos gobiernos conservadores. Sin embargo, para 1860, la situación económica de la Iglesia se había debilitado en proporción equiparable a la crisis financiera que sufrían los hacendados.

Por tradición sus ingresos líquidos más fuertes se encontraban fincados en los intereses -rentas- obtenidos a través de los capitales gravados al 6% de interés anual. De esta manera, la incapacidad económica de los propietarios de los bienes gravados, que les impedía cumplir con sus obligaciones crediticias, piadosas y de sangre, la afectaba directamente puesto que dejaba de percibir las sumas de dinero que antaño la habían convertido en la institución más fuerte económicamente. Por otra parte, en los sucesivos traspasos de las propiedades gravadas a su nombre, y por influencia de las leyes liberales, se había ido perdiendo la responsabilidad moral de hacer los pagos adeudados. En medio de esta pobreza, y de la secularización de la sociedad, es evidente que la Iglesia se empeñó en recuperar los ingresos y la influencia social que se le iban de la mano. Con este objeto desde 1830 procuró vender, a personas seleccionadas por su

disposición a la religiosidad católica, las propiedades que por la bancarrota de los dueños volvían a sus manos, y también las que mantenía bajo el sistema del arrendamiento, en orden a obtener mayores márgenes de seguridad en el caos que imperaba. (16)

Si bien es cierto que en 1860, tanto sus bienes, sobre todos los urbanos, como las hipotecas y los capitales piadosos seguían siendo considerables, es innegable que su disposición de dinero había disminuido de forma notable. Su falta de liquidez era similar a la que tenían los gobiernos -liberales o conservadores- y los propietarios de la tierra.

Las dificultades financieras de la Iglesia fueron evidentes en 1858, año en que, para satisfacer el compromiso adquirido con Félix Zuloaga de prestarle millón y medio de pesos, como detalla Bazant, se vió obligada a realizar algunas de sus propiedades. (17)

-
- (16) También intentó, enarbolando la amenaza de la condena eterna que contenía la disposición por ella lanzada de "castigar" con la "excomunión" no sólo a los liberales que habían emitido los decretos sino también a los bautizados, es decir los fieles de la Iglesia católica, que hubieran cooperado al cumplimiento de las Leyes, que los católicos no aceptaran la adjudicación de los bienes de la Iglesia. Los obispos decían: "No es lícito obsequiar este decreto (el del 12 de julio de 1859) en ninguna de sus partes ni cooperar de modo alguno a su ejecución, que ninguna autoridad tiene el Sr. Juárez, ni gobierno alguno, para hacer entrar al dominio de la nación todos ni parte de los bienes de la Iglesia: que por lo mismo este decreto... está sujeto a las censuras de la Santa Iglesia, y especialmente a la excomunión mayor fulminada por el Santo Concilio Tridentino en el cap. XI de la ses. 22 De Reformatione. En consecuencia, están incursos en esta pena canónica, no solamente los autores y ejecutores del decreto repetido y de cuantos otros han expedido, o medidas han dictado, o hechos han ejecutado contra la propiedad de la Iglesia y los templos las autoridades de Ayutla; sino también aquellos que de algún modo cooperen o hayan cooperado a su cumplimiento. "Manifestación del 30 de agosto de 1859", Op. Cit. Pág. 65
- (17) Jan Bazant, Op.Cit. Pág. 157

Zuloaga acudió de nuevo a la Iglesia en el mes de julio de ese año, y, posteriormente, también el general Miramón se vió precisado a recurrir a los bienes del clero o de los prestamistas, avalando el crédito otorgado con los bienes de la Iglesia.

De la urgencia de reunir el capital establecido por estos préstamos data el acuerdo firmado entre José María Brilante y el Prior del Convento del Carmen de Querétaro. El prior del convento le había vendido a Brilante dos capellanías en 1860: una de \$1 000.00 y otra de \$4 000.00 que reconocía timoteo Fernández de Jáuregui sobre la hacienda de San Juanico o hacienda de Santa María de los Molinos y los \$1 000.00 que reconocía sobre la hacienda de Juriquilla o de Santa Rosa. Brilanti indica que adquirió el capital mencionado el 14 de mayo de 1860,

época en que las corporaciones religiosas gozaban la plena propiedad de sus bienes y tenían derecho a administrar y disfrutar sus bienes como les pareciera, pues aún en la suposición de estar vigente la Ley de 25 de junio de 1857, mi adquisición es legítima porque esta Ley no quitó a las corporaciones referidas ni la propiedad de sus bienes ni la facultad de disponer de ellos, limitándose a prohibirles la tenencia y la adquisición de bienes raíces. (18)

De hecho, el prior del convento del Carmen había sido autorizado en 1859 para vender los capitales que reconocía sobre sus haciendas Fernández de Jáuregui, para acabar de redimir las contribuciones que le había impuesto el "Supremo Gobierno". La cantidad asignada al Carmen era de \$8 000.00 por el millón y medio de préstamo que exigió el gobierno en enero de 1858 a más de uno

(18) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 137/60

de \$1 832.00 que adeudaba de otro préstamo y donativo. Sin embargo, Timoteo Fernández de Jáuregui se opuso a pagar a Brilanti las capellanías mencionadas, fundamentado primero en el triunfo liberal y más tarde en la ley reglamentaria del 5 de febrero de 1861; oposición que contó con el apoyo del gobierno liberal, según consta en la carta del 1º de marzo de 1865:

Era tan expresa la ley en ese punto y eran tan conocidos los negocios que el gobierno del General Miramón hizo con la casa de Jécker que ninguno de los ministros declaró otra cosa que lo que la ley declaraba; esto es que las cesiones que hizo el clero sin la autorización del gobierno eran nulos y sin ningún valor y mucho más tratándose de aquellos que tuvieron por fin el fomento de la guerra civil.(19)

En esta misma situación estuvo Domingo de la Vega quien había adquirido el rancho de Arroyoseco mediante transacción con la Cofradía de las Animas del Convento de la Cruz en 1859. Sin embargo, la situación de este rancho permaneció oculta hasta el año 1867 cuando el coronel Manuel García de León hizo la denuncia de los capitales piadosos que reconocía. De hecho el monto denunciado había sido el precio de venta de Arroyoseco.

Hasta el triunfo liberal, después de la guerra de reforma, el gobernador José María Arteaga emitió el Decreto del 21 de noviembre de 1860 que aplicaba en Querétaro las leyes del 12 y del 13 de julio de 1859, dictadas por Juárez en Veracruz, con el objeto de, asentaba Arteaga, "contribuir eficazmente a la subdivisión de la propiedad territorial y ceder en beneficio (19) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 137/66

general de la nación que es el gran fin de la reforma que ella envuelve".

Posteriormente, haciendo uso de las facultades extraordinarias de que gozaba, Arteaga reguló, por medio del decreto del 4 de diciembre de 1860, el trato especial que recibirían los individuos que habían apoyado la causa liberal.

En el artículo 1° de la Ley del 4 de diciembre, se asentó: "todos aquellos que hubieran suministrado cantidades de dinero a las fuerzas defensoras de la Constitución de 1857 y tuvieran que hacer redención del capital conforme a las leyes de nacionalización del 12 y 13 de julio, se les abonaran aquellas cantidades prestadas como dinero en efectivo".

Arteaga favorecía aun más a los liberales. El Artículo 20 señalaba que las cantidades de que hablaba el art. 1° se descontarían a los interesados "del 20% que en dinero en efectivo corresponde según la citada Ley al gobierno general sobre los capitales de obras pías y corporaciones eclesiásticas respecto a las cuales piden redención".

Finalmente, el artículo 3° de la Ley, introdujo lo que sería una práctica constante en Querétaro durante toda la década 1860-1869, que vendría a complicar aun más el caos que predominaba en la aplicación de las leyes: "Los prestamistas que no tuvieran que hacer redención conforme lo previenen las leyes de nacionalización quedan expeditos para endosar a otras personas sus vales o documentos en donde conste la suma que hubieran proporcionado en calidad de préstamo bajo el concepto de que su valor será reconocido en su totalidad y que se abonará con el 20%

según se expresa en el artículo 2o".(20)

No obstante las condiciones favorables del decreto de Arteaga, la denuncia de los bienes ocultos y la liberación de los capitales piadosos se realizaba a cuenta gotas no sólo por el rechazo social a las leyes sino también por el desconocimiento que había sobre las propiedades gravadas. Por esta razón, en esta primera etapa de aplicación de las leyes (1860-1863), primordialmente se afectaron aquellas propiedades que habían sido traspasadas, vendidas o fraccionadas entre 1840-1860. Sin duda porque se tenía fácil acceso a las escrituras otorgadas durante esos años. Escrituras que registraban la información de los capitales piadosos e hipotecas de todo tipo que gravaban las propiedades. La alternativa de reportar las propiedades que habían sido vendidas, traspasadas o fraccionadas en los últimos años, fue un recurso tomado por los escribanos puesto que la indagación histórica se les complicaba porque los protocolos de oficio se remontaban a 1596, como dice Francisco Ruíz en 1869, "de letra antigua de gusanillo y abreviaturas" y los de hipotecas a 1697. Por otra parte, ante la premuras económicas tanto el general Arteaga como el gobernador José Linares, quienes habían solicitado a los escribanos queretanos la información sobre la situación de las fincas gravadas, no se preocuparon por integrar un reporte que abarcara en forma sistemática las cargas hipotecarias y piadosas de los bienes. Se interesaron en disponer de listas concretas de propietarios a quienes exigir el pago para subvencionar los gastos de la guerra.

(20) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 3

Una sociedad con flujos constantes de información, como era la de Querétaro durante estos años, y en estado de alerta ante cualquier intento que afectara la propiedad, permitió que la disposición y estrategia seguida para obtener las listas de las propiedades gravadas fuera conocida por los nuevos dueños desde el momento en que se emitió la solicitud y antes de que los gobernadores sacaran los listados presionando a los propietarios a liberar los capitales. Así, se apresuraron a hacer las declaraciones o reconocimientos del capital que se tratara para evitar el embargo por oficio de las propiedades.

2. La aplicación de las leyes de Reforma en el Querétaro agrario

Las declaraciones o reconocimientos de capitales fueron hechos de acuerdo a la situación económica de los propietarios y al monto de los capitales piadosos fundados. Por ejemplo, los propietarios con capacidad económica para resolver la situación de las fincas hicieron los pagos correspondientes. Aquellos que tenían problemas económicos para satisfacer el porcentaje de liberación y los intereses acumulados, procuraron llegar a arreglos favorables tanto para el fisco como para ellos. Los propietarios con varios capitales gravados procuraban litigar sobre algunos de ellos a fin de que pasaran desapercibidas las fundaciones más fuertes. En el corto plazo estas modalidades dieron resultado puesto que los propietarios con dificultades económicas para satisfacer los pagos pudieron disponer de una década para resolver sus asuntos. Otros lograron, los menos, que

algunos de los capitales que reconocían no fueran descubiertos a lo largo de las revisiones periódicas realizadas hasta 1892. Sin embargo, a partir de la revisión ordenada en junio de 1869, y también en 1873 en virtud de que el 25 de septiembre de ese año se anexaron a la Constitución las Leyes de Reforma y posteriormente en 1875, por la emisión de la Ley Orgánica expedida por Congreso Nacional el 10 de diciembre de 1874 durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, la mayoría sufrió el acoso del fisco, de los denunciantes y de los administradores públicos interesados en rematar las propiedades para adquirirlas. También hubo ocasiones en que el fisco salía perjudicado después de tantos denunciantes y liberadores de capitales.

Entre los propietarios que no tuvieron dificultades para hacer los reconocimientos y liberación de los capitales piadosos se puede mencionar a Cayetano Rubio. Rubio liberó los capitales que reconocían sus propiedades el 13 de abril y el 10 de junio de 1861. Fechas en que realizó la redención de \$24 000 que reconocían el molino de San Antonio y la casa de la calle del Biombo. Con las disposiciones del Imperio francés, Rubio demostró que había hecho las redenciones presentando los certificados No. 30, 32 y 88, expedidos por la Tesorería General de la Nación, incluyendo los réditos del capital que ascendían a \$14 666, según el certificado No. 266. (21). Esta liberación fue de las pocas que hubo en la época que nunca fue cuestionada. Cuando la revisión de los expedientes de nacionalización de 1869 y 1892, las propiedades de Rubio no aparecían.

(21) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 1

Entre las ocasiones en que el fisco salió perjudicado se puede mencionar el caso de las capellanías con valor de \$18 500.00 fundadas por Nicolás Ruiz de Castañeda y que reconocían diversas propiedades. El propietario de estas capellanías, Agustín Mateos, llegó a un acuerdo con la oficina de hacienda de Querétaro en 1861: se comprometió a pagar en 20 meses el 10% del capital, quedando como aval de este crédito, Luis Hernández. En ese mismo año, se exigió a Trinidad Mateos que redimiera \$3 000 de los capitales fundados por Castañeda. De estas cantidades, Fernando Pontones había pagado los réditos de este capital a Trinidad Mateos hasta 1862, porque recibió la orden de la oficina de Hacienda de Querétaro de reconocer como dueño del capital a Remigio Mateos. De estos capitales, Raymundo Mora liberó \$1 300.00 en cuenta de la desvinculación de la capellanía que se reconocía sobre su hacienda de En Medio y Jesús Fagoaga canceló otros \$250.00 por el mismo 10%.

Posteriormente, en 1868, R. Riba denunció un capital de "nueve mil y pico de pesos" que reconoce el rancho de Arroyoseco al exconvento de la Cruz. Aclara más tarde que el capital es en realidad de ocho mil nueve pesos porque ya se habían hecho redenciones. En ese mismo año de 1868 Domingo de la Vega, quien era propietario del rancho, solicitaba que se levantara el embargo que se había impuesto sobre Arroyoseco y que se le concediera hacer la redención en los términos de la ley de 12 y 13 de julio de 1859, puesto que él había celebrado un contrato con la comunidad del Colegio de la Cruz en 1859. No obstante el Presidente Juárez dispone que se niegue esta solicitud puesto que

el decreto del 29 de agosto de 1862 había dispuesto que los bienes del clero pertenecían a la nación. Medida que impedía o prohibía la enagenación de las propiedades por parte de la Iglesia desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 23 del mismo mes de 1860. (22)

En enero de 1869, Alejo Marín informa que Rivas efectivamente tenía razón: ya se habían hecho redenciones. Por otra parte, señala que el resto que se adeuda se cobrará brevemente para pagar al coronel Manuel García de León, quien había sido "el descubridor del relacionado capital" en 1867, la parte que le corresponde según la ley. (23) Por su parte, en 1869 Rafael Iglesia reclamó al fisco \$200.00 que se le adeudaban del capital de \$1 800.00 que había pasado a su poder, y Trinidad Mateos pide que se le aplique la cuenta de \$800.00 en que está arrendado el rancho de Arroyoseco, embargado por un capital de \$8 902.25, por buena cuenta del capital de \$3 000.00 que liberó en 1861. Capital que estaba cargado sobre la hacienda de Nanacamilpan. El Ministro de hacienda de México, en virtud de la multiplicación de los denunciantes a los que el fisco les debía, ordenó la subasta pública del Rancho de Arroyoseco. Rancho que no se pudo vender en las tres almonedas realizadas en 1868 porque las posturas no alcanzaban a satisfacer los adeudos: \$3 000 a Mateos, a Manuel Sánchez \$2 000, a Rafael Iglesias \$200.00 quedando el gravamen de \$4 802. En la última almoneda del rancho, celebrada el 19 de junio de 1868, se dispuso que se adjudicaría el rancho al acreedor

(22) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 501, Exp. 66/82

(23) La denuncia del coronel García de León, no sólo consideraba al rancho de Arroyoseco, también incluía un "pedazo de terreno situado en jurisdicción de San Juan del Río y unas accesorias en la plaza de la Cruz de la ciudad de Querétaro.

de estos intereses en la cantidad de \$2 500.00, Antonio Isla, según escritura que presentó, ya que no se había presentado persona alguna que se interesara en los bienes embargados. El rancho se adjudicaría al Sr. Isla no sólo por su crédito sino por el que reportan a favor del fisco, debido a que Isla hacía la exhibición que se reclamaba a Domingo de la Vega. Sin embargo, Isla no estaba interesado en el rancho sino en recuperar el crédito otorgado a de la Vega. Por ello propuso que el capital que se adeudaba, se destinara a la beneficencia pública. Así las cosas, el rancho de Arroyoseco no fue adjudicado a nadie. En marzo de 1869 fue sacado a remate de nueva cuenta Arroyoseco obteniéndose los mismos resultados que en 1868.

Cuando los propietarios tenían serias dificultades económicas para satisfacer los montos que se les exigía para liberar las propiedades, la oficina de hacienda, presionada para obtener recursos para la guerra, embargaba las fincas y las sacaba a remate público al mejor postor. Remate que, la mayoría de las veces, permitía la adjudicación de la propiedad en precios muy por debajo del valor de la hacienda. Concesiones que mantuvieron en litigio las propiedades. De los casos que pueden citarse iniciados en 1860 y 1861, con los decretos de Arteaga, están la hacienda La Noria y la de Lodecasas que tardaron casi 20 años en resolverse. No obstante, salvo excepciones, como fue el caso de la hacienda La Era, se sostuvieron las adjudicaciones realizadas bajo las disposiciones de las leyes del General Arteaga 1860-1861 y las emitidas por el gobernador José María Linares en 1862. Por otra parte, las propiedades adjudicadas, a que se hace referencia,

Lodecasas y La Noria, más que probar la pobreza del erario y de las familias propietarias, demuestra el manejo político de los bienes nacionalizados.

El 7 de diciembre de 1860, Ignacio Alvarado, quien había comprado la hacienda La Noria en 1841, solicitó redimir los capitales que reconocía sobre su hacienda. Para no desembolsar dinero, del que carecía, solicitaba que el adeudo se dejara consignado para la manutención de las religiosas y el gasto del culto de las clarisas, como lo prevenían los decretos de 1859. Su propuesta fue aceptada, conminándolo la oficina de Hacienda a que liquidara los réditos vencidos. Réditos que se habían acumulado porque Alvarado solo había pagado doscientos sesenta pesos de intereses, según constaba por el recibo dado por el mayordomo del convento de Santa Clara en enero de 1850. De tal manera que de 1841 a 1860, Alvarado debía, descontados los \$260.00 que había pagado en 1850, \$18 740.00. A este adeudo se sumaban los réditos acumulados a partir de la negociación realizada en 1860, que imponía un interés anual del 6% sobre el capital de \$20 000.00. Por tanto, en 1862, Alvarado debía al erario público \$ 21 140.00 sólo en réditos.

Incapacitado para hacer el pronto pago, al que lo urgía la oficina de hacienda por los problemas de guerra, Alvarado pidió a dicha oficina que le permitiera vender directamente la hacienda para poder finiquitar sus deudas. Alvarado buscaba evitar la subasta pública de la propiedad en manos del gobierno local que lo dejaría sin posibilidad de recuperar alguna cantidad, aunque fuera mínima, sobre la venta de la hacienda. La petición fue denegada

bajo el recurso de que la finca reportaba un gravamen superior a su valor en \$21 766.00; el gobierno local decidió embargar los bienes de Alvarado que se reducían a la mencionada hacienda La Noria. Embargada la hacienda, Alvarado solicitó de nueva cuenta que se le permitiera vender la propiedad a Vidal Martínez de los Ríos en todo el valor que la había comprado en 1841.

En 1862 enterada la sociedad queretana de que la finca de Alvarado estaba en entredicho empezaron a proliferar los compradores haciendo propuestas al "Supremo Gobierno" que en ese año, por el embargo de la finca, aparecía como dueño de la propiedad. En disputa por la hacienda estuvieron Cayetano Rubio y Francisco Venegas, amigo del entonces gobernador de Querétaro, José María Linares (17 de agosto al 30 de septiembre de 1862 y del 2 de febrero al 16 de noviembre de 1863). En apariencia sin justificación legal, el gobernador Linares acordó la enajenación de la finca a Venegas en la forma siguiente:

Valor de la finca según avalúo.....	\$30 200.00
Se le dispensó una tercera parte y se le dedujo de aquel precio.....	16 666.66
Quedó por precio de la redención	20 133.34

Aun más, se le hizo a Venegas un descuento del 40% como si pagara en efectivo, de acuerdo a lo estipulado por el decreto de 4 de diciembre de 1860. Bajo tantas concesiones el precio real de venta de la hacienda fue de \$5 900.00. Era público en Querétaro, como lo decía Alvarado, "que los procedimientos de enajenación de la finca habían violado las leyes de lo justo y lo honesto y que su operación era ilegal bajo cualquier aspecto que se considere".

Pese a la inconformidad de Alvarado, la hacienda La Noria se remató a Venegas en la cantidad dispuesta por el gobierno de Linares. De este monto Venegas debía enterar, dice Ocampo al jefe de Hacienda de Querétaro, \$3 000.00 al contado y \$2 000.00 a dos meses y \$900.00 en cuatro meses, "lo que participo a Ud. para que haga efectivo el contrato y ponga al interesado en posesión legal de la finca".

Lo ilegal de la venta de hacienda a Venegas en los \$5 900.00 era más que evidente para todos los involucrados. Situación que hizo explícita Alvarado el 21 de enero de 1863, al expresar que Vidal Martínez de los Ríos estaba dispuesto a comprar la hacienda en el precio que tenía en 1841: \$28 680.04. Venta a todas luces ventajosa para el gobierno, decía Alvarado, si se tiene en cuenta que la hacienda referida:

Amén de faltarle todo el mueble conque (en 1841) la recibí pues solo existen unos cuantos aperos de labor; en el transcurso de todo este tiempo, las circunstancias desfavorables que notoriamente han causado a la agricultura grandes padecimientos que no solo embargan sus adelantos sino que le han ocasionado trastornos y pérdidas muy considerables, han demeritado sus fábricas materiales, surcos, montes, aguajes...Así es que no cabe duda que se ha abonado mucho al conseguir den por ella lo mismo que pagué hace 22 años, no obstante su deterioro. (24)

Dos meses más tarde, el 2 de marzo de 1863, Alvarado dijo textualmente:

No perteneciendo la finca a la Hacienda pública, el C. José María Linares despóticamente y de manera verdaderamente escandalosa vendió esa hacienda a Francisco Venegas, esa venta de Linares es enteramente nula...aunque

pretextó facultades extraordinarias ninguna se han dado jamás para que los gobernadores enajenen lo que pertenece exclusivamente a los particulares. (25)

A pesar de la insistente oposición de Alvarado, dueño de la hacienda, la venta de Linares a Venegas se impuso.

Cuando en agosto de 1861 se supo que las fuerzas "reaccionarias" -en versión de los liberales- que acaudillaba Tomás Mejía se hallaban en camino a la capital, y careciendo el gobierno liberal de los recursos necesarios para "mover violentamente" una fuerza sobre aquellos pronunciados, se dispuso una orden terminante: que se recabaran los fondos necesarios disponiendo la redención de cuantos capitales se pudieran y haciendo a los censatarios, para animarlos, el descuento del 40%. (26). Disposición que se basaba en la llamada ley reglamentaria del 5 de febrero de 1861, que definía la forma de desvincular las capellanías piadosas y las de sangre, aún cuando exceptuaba los bienes de la beneficencia pública. (27)

En esta ocasión, Carmen Gelaty viuda del General Juvera, hizo la manifestación de los capitales piadosos que reconocían sus propiedad. En realidad en ese año 1861 redimió dos capellanías de \$4 000 que estaban impuestas sobre la casa No.1 de la Plaza de Independencia y la calle del Biombo, bajo el claro propósito de

(25) Idem.

(26) Certificación que hace Hipólito Alberto Vieytez el 24 de marzo de 1875, para defender los derecho de Ramón Veraza.

(27) El artículo 1 de la circular de 13 de marzo de 1861 textualmente señalaba: "Quedan exceptuados de toda contribución, de cualquier género que sea, los establecimientos de beneficencia pública, y las fincas, capitales o cualesquiera otros bienes que les estén afectos para su conservación y mejora". AGN, Fondo Gobernación, Caja 483, Expediente 9.

desviar la atención de los administradores o para ofrecerlos, en el caso que se descubriera la situación financiera de sus haciendas, como pago de sus adeudos. Sin embargo, como se sabía que los hacendados que tenían gravadas sus casas habitación también tenían gravadas sus haciendas y ranchos, esta estrategia provocaba la reacción contraria. La administración de rentas acentuaba sus pesquisas y lograba encontrar la documentación pertinente que demostraba los reconocimientos piadosos. Descubierta la situación de la hacienda que se trataba, en este caso la de Lodecasas, proliferaban los denunciantes de los bienes. Por otra parte, los acreedores particulares de los hacendados también concentraban su atención en las denuncias de los capitales ocultos puesto que la frecuente adjudicación irregular de los bienes a los denunciantes, bajo coaliciones políticas fuera de su control, afectaba sus intereses.

De hecho los planes de Carmen Gelaty de salvaguar la hacienda de Lodecasas, que estaba fuertemente gravada, se vinieron por tierra cuando, por su incapacidad económica, uno de sus acreedores le siguió juicio a fin de cobrarse el crédito. A este objeto se propuso embargar la finca. Estando la hacienda por venderse en subasta pública para satisfacer los intereses del prestamista José Gutiérrez García, el gobierno también exigió la redención de los capitales piadosos y sus intereses acumulados, fundando su cobro en la misma hacienda de Lodecasas. En esta situación el prestamista Gutiérrez García consideró que le era más útil comprar los capitales que la testamentaria de Juvera debía al gobierno a fin de quedar como único acreedor, y no entrar en conflicto con

los intereses gubernamentales. Realizada la compra, el gobierno le otorgó en forma sus derechos al prestamista el 18 de junio de 1863. Avalado con estos documentos Gutiérrez García quiso sacar a remate la finca para salvaguardar sus intereses, pero entonces perdió la razón y todo el proceso judicial se detuvo.

En ese año, recién llegado el Imperio a Querétaro y presionada la Sra. Gelaty por sus acreedores y por la administración liberal, envió una larga misiva al Emperador Maximiliano el 18 de junio de 1863, sin duda para motivar una disposición a su favor. En la carta se reconoce deudora de la Hacienda pública por la suma de \$27 204.86, pero aclara que el remate de la hacienda resulta inadecuado porque la testamentaria se encuentra totalmente en quiebra: sus pasivos ascienden a \$120 000.00 y sus haberes en las tres fincas raíces que posee, la hacienda de Lodecasas, la de Jacal Grande y la casa de la plaza Independencia es de \$122 000.00. Capital que deduciendo la tercera parte en que podía venderse la hacienda, dejaba un déficit contra la testamentaria de \$40 000.00. En estas condiciones pide se acepte la casa "de su morada", valorada en \$18 000.00, como pago de su adeudo con la Hacienda pública. Aclara que la pobreza en que se encuentra la testamentaria se debe:

a la persecución que sufrió por el gobierno del Sr. Juárez... pues desde finales de 1860 se impusieron a la testamentaria préstamos forzosos exorbitantes que se me obligó a enterar en efectivo, para lo cual tuve que girar los bienes. Más adelante se me pidieron animales, semillas y pasturas con tanta irregularidad e imprudencia que no me quedó ningún recurso para administrar la hacienda por mi cuenta y me vi precisada a arreglar un

arrendamiento. (28)

La Sra. Gelaty no mentía en lo referente a la pobreza de su familia y sobre el arrendamiento de la finca. La hacienda se había arrendado a Vicente Licea en 1865 por \$2 000 anuales. Renta que se pagaría por semestres vencidos de \$250.00 y que serviría, especificaba el contrato de arrendamiento, "para alimentos de la menor Guadalupe Juvera" hija del general.

En 1864, el curador de los bienes de Gutiérrez García, el español José Noriega LLaca, inició de nueva cuenta el proceso de embargo de la finca Lodecasas. La testamentaria en este entonces cuestionó la validez del contrato celebrado por Gutiérrez con el gobierno de Juárez a pretexto de la Ley de 23 de julio de 1863, Ley que declaraba nulos y sin ningún valor los contratos hechos con el gobierno de Juárez desde que salió de la capital. Para evitar las influencias locales que se confabulaban para apropiarse de la hacienda, el curador recurrió a la regencia del Imperio, quien resolvió a su favor. No obstante la resolución de marzo de 1864 que hacía efectivos los derechos de Gutiérrez García, tanto la Prefectura como la oficina de bienes nacionalizados de Querétaro no informaron de la decisión al interesado ni a su apoderado el Sr. Noriega LLaca. Así quedaron las cosas detenidas por otro tiempo indefinido, hasta el surgimiento de nuevos interesados que aparecen como acreedores de la testamentaria Juvera, Esteban Lamadrid, Manuela Fernández Munilla y Rafaela Múgica. De esta forma, el representante de Carmen Gelaty, José

(28) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 137/6

Ramón Plascoe señala,

Conociendo el deudor el pésimo estado de sus intereses los cedió a sus acreedores en la forma acostumbrada y demostró con las listas de ambos que los primeros no alcanzaban a cubrir a los segundos. Quedó así a la expectación pública una quiebra con sus consiguientes estragos y de ellas han surgido las pretensiones de algunos interesados de convertirlo en su provecho

En este caso estaban no solamente los prestamistas sino los denunciante y los compradores de bienes como José Siliceo, quien (representado en este juicio por Ignacio Costera) se había hecho acreedor de la testamentaria por el capital de \$15 000.00 de las capellanías laicas. Finalmente los acreedores particulares de la testamentaria llegaron a un acuerdo privado mediante el cual la hacienda de Lodecasas y la de Jacal Grande que reportaba un capital de \$24 000.00 pasaron a mano de María de las Mercedes Herrera, esposa de Esteban Lamadrid.

Otra de las personas que acudió a pedir clemencia al Emperador Maximiliano fue la viuda Carlota Iriarte dueña de la hacienda Santa Rita ubicada en la jurisdicción de San Juan del Río. La señora Iriarte había hecho la redención de los capitales piadosos que gravaban la hacienda en 1861. Sin embargo al enterarse de la Ley emitida por el soberano y su reglamento respectivo de 9 de marzo, solicita se le acepte la redención hecha como buena. Por otra parte, la viuda aclara que no había hecho la declaración oportunamente por "ignorancia" ya que al residir en la hacienda no se había enterado oportunamente de la "soberana medida". En marzo de 1866 se le informa a la Sra. Carlota Iriarte

que "S.M. el Emperador ha tenido a bien" admitirle la manifestación del capital de \$2 000.00 que reconocía sobre la hacienda Santa Rita de su propiedad, "con la calidad de que enterará por vía de multa el 25% del capital conforme al espíritu del art. 30. de la Ley de 3 de julio de 1865".

La Sra. Iriarte insiste ante el Emperador que le condone la multa:

Si no obstante lo expuesto S.M. tiene a bien insistir en la pena, repito que estoy dispuesta a hacer el pago pero siéndome absolutamente imposible hacerlo en el acto como Ud.me previene le suplico que teniendo en consideración los muchos saqueos y vejaciones de todo género que sufrimos los hacendados de la Administración pasada, y la pérdida de la cosecha de los dos años anteriores se sirva recabar de quien, corresponde se me concedan ocho o diez meses de plazo para proporcionar los \$500.00 que importa la multa para lo que si se creyera necesario estoy pronta a otorgar la correspondiente escritura

A esta solicitud se le responde en abril de 1866 que "la expresada multa no es exigible desde luego, sino hasta la liquidación final". De esta manera, la Sra. Iriarte redimió el capital que reconocía la hacienda de Santa Rita por las disposiciones del General Arteaga en 1861, de igual manera que pagó la multa impuesto por la administración imperial en 1866.

(29)

Entre las personas a las que en 1861 se les solicitó la redención de los capitales piadosos y de sangre, también se encontraba Fernández de Jáuregui que poseía las fincas San Juanico, adquirida en 1854 por remate público, y Juriquilla que

había pasado a su poder como albacea de su esposa Dolores Septién, heredera de Pedro Antonio Septién Montero que se reconocía como más antiguo propietario de la hacienda, hijo político y apoderado general de la Sra. Señora Villanueva y Terreros, viuda del señor Pedro Bernardino de Primo. Las haciendas debían varios capitales a diversas congregaciones religiosas (a Santa Clara, a la Congregación de Guadalupe y una capellanía a favor de Ramón Zelao y Araujo). Su casa habitación, la No.4 de la calle de la Verónica, también reconocía otros capitales. Fundaciones que en su totalidad reportaban la cantidad de \$59 369.75.

Urgido por el fisco, en agosto de 1861, para que saldara los capitales que adeudaba, Fernández de Jáuregui aclaró que no lo había hecho porque:

en esos días se aproximaron a Querétaro las fuerzas disidentes de la Sierra al mando del General Mejía y este acontecimiento que con frecuencia se repetía causaba en la ciudad un gran trastorno y en los negocios una paralización mayor

De hecho Fernández de Jáuregui se encontraba entre los listados por el decreto No. 21 de Arteaga. Ante los escasos fondos públicos para la guerra y con Mejía a las puertas de Querétaro, Arteaga había dispuesto un préstamo forzoso. Emitió el decreto No. 21 en donde aclara, en sus considerandos, que las disposiciones anteriores no habían dado el resultado económico esperado. Por lo tanto, se especifica en el artículo 1º:

Los ciudadanos que constan en la presente lista, sin excusa ni pretexto alguno, enterarán a la administración de rentas de esta capital, las

cantidades fijadas en aquella, dando el término perentorio de 24 horas que comenzará a contar desde las 6 de la mañana del presente día.

El artículo 2º especificaba:

Al hacer el entero los causantes, se les expedirá el correspondiente recibo visado por el gobierno el cual sin más requisitos se les recibirá como dinero en efectivo. (30)

Posteriormente, y ante la emergencia nacional de la invasión francesa el gobierno de José Linares (17 de agosto al 30 de septiembre de 1862 y del 2 de febrero al 16 de noviembre de 1863), le exigió a Fernández de Jáuregui el pago de \$5 000.00 que era el capital que reclamaba Brilanti, cuando en realidad debía \$59 369.75. Al esclarecer los motivos por los cuales en esta ocasión no se había negado a redimir este capital, -como lo había hecho en 1861- Fernández de Jáuregui expresa, con toda nitidez, la situación que prevalecía en Querétaro y lo comprometido de la situación por la invasión francesa:

Aunque alguna duda me quedara sobre si en efecto estarían o no en los archivos la escritura de los \$4,000.00 no podía manifestarlo sin hacer grave ofensa al gobierno que tampoco me hubiera librado del pago pues la ocupación de la capital por las fuerzas francesas ponía al gobierno en una situación verdaderamente difícil, además estaba yo y estoy persuadido de que la repetida escritura está en el archivo del Ministerio de Hacienda... así pues no teniendo ninguna razón para resistir el pago y penetrado de que aunque lo hubiera en esa vez de nada me hubiera servido hice al gobernador mis proposiciones para la redención total de los \$5 000.00

Ante la invasión de "la Francia", Nemesio Escoto administrador de Rentas de Querétaro informó, el 14 de noviembre

(30) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 499, Exp. 66/10

de 1862, que habían procedido a la enagenación de varias fincas pertenecientes a la beneficencia pública (que exceptuaba la ley del 5 de febrero de 1861), para cumplir con el decreto del gobierno de la nación, que ordenaba el procedimiento, "en uso de las facultades omnimodas con que se encuentra investido para poder salvar a la nación en momentos en que sufre una formidable invasión extranjera". El bando entonces emitido, el del 3 de agosto de 1862, por Ignacio Echegaray General de Brigada encargado de los mandos político y militar del estado de Querétaro (del 28 de junio al 17 de agosto de 1862), estipulaba que los adjudicatarios de la hacienda de Obrajuelo y de la hacienda de Esperanza, debían presentarse a redimir los capitales que estaban reconociendo en las mencionadas fincas.

Es de destacar que Nemesio Escoto, el encargado de enagenar las fincas listadas, había estado interesado en conocer la situación económica que guardaban las fincas rústicas en Querétaro. Bajo este interés había impulsado la realización del estudio estadístico efectuado durante 1854-1855 por José María Balbontín, con el objeto, entre otros, de detectar la condición de las haciendas y de los ranchos, identificar sus propietarios, el monto y volumen de los gravámenes hipotecarios y piadosos, su avalúo y, también, "encontrar" los supuestos terrenos baldíos que del Raso había asegurado que existían en la Sierra Gorda. No obstante, que Balbontín no pudo obtener información confiable sobre las propiedades gravadas, la información fue útil para tener una visión general del estado de la propiedad.

Sobre todo, La importancia y oportunidad del estudio

estadístico de Balbontín sobre el estado de Querétaro se destaca por anteceder a la conocida como Ley Lerdo (la de 1856), que ordenaba la desamortización de los bienes de la Iglesia. También puede considerarse la posibilidad de que estos estudios estadísticos sobre el estado de la propiedad constituyeran un recurso para conocer con oportunidad los bienes de la Iglesia que podrían ser denunciados. Por ejemplo, Walter V. Sholes registra los nombres de varias de las compañías que antes de 1861 habían hecho la denuncia de los bienes de la Iglesia; entre las firmas nombradas, Limantour y Cía., F.F.Rodríguez y Cía., José Lelong y Cía., se menciona, precisamente, la de Balbontín y Cía. (31). El administrador queretano Nemesio Escoto aprovechó este estudio y la información a la que tuvo acceso por su función pública en su beneficio: aparece, entre 1860-1865, como adjudicatario de algunos bienes urbanos de la Iglesia en Querétaro y también de algunas haciendas cuyos derechos de adjudicación no aparecían claros.

No obstante el estudio de Balbontín y las noticias que sobre las fincas rústicas y urbanas habían pedido Arteaga y Linares, la orden que en 1862 obligaba la enagenación de las haciendas de la Beneficiencia Pública contenía diversos errores. Equivocaciones que no dejan lugar a dudas: los capitales piadosos seguían estando ocultos. También se desconocía cuál era la extensión de las propiedades y quienes eran los propietarios. Situación que el mismo Balbontín reconocía en el estudio estadístico ya citado:

(31) Walter V. Scholes, Op. Cit. Pág. 97

La reunión de las cantidades que representan las tierras labrantías, forman las cultivadas y sin cultivo, y sumando a estas los bosques, resulta la extensión total enunciada (20 000 caballerías, 10 fanegas). Más como para llegar a las 876 leguas cuadradas que tiene el Estado faltan 15,855 caballerías, 2 fanegas, quitaré 366 caballerías que resultan de $113 \frac{3}{4}$ de fundos de los pueblos y $254 \frac{1}{4}$ de caminos públicos, y aún quedan sin aplicación 15 489 caballerías, 2 fanegas, que no pueden ser otra cosa que baldíos nacionales...pero es muy expuesto determinar por cálculos aventurados, y sólo se lograría este objeto poniendo en práctica los medios de que ya he hablado en otro lugar (medición de terrenos y levantamiento de planos, para determinar lo que a cada uno corresponde de extensión según sus títulos). (32)

Bajo esta desinformación, una de las haciendas listada en el bando del 3 de agosto de 1862, la de Obrajuelo, situada en la jurisdicción de Guanajuato, no pertenecía a la beneficencia pública sino a la Congregación de Guadalupe.

Pese al error, la hacienda de Obrajuelo, valorada en \$46 000.00, fue adjudicada a Felipe Soto con todos sus anexos, El Zapote, Ixtla, Santa Clara, La Punta y San Ignacio. La hacienda lindaba al oriente con terrenos de Castilla, San Pedro, y Tlacote el Bajo; por el poniente con tierras del pueblo de Yatla, Ojo Zarco, y ¿Amiose? (33); por el sur con el terreno de Almeche, el Rayo y Castilla y por el norte con Tlacote el Alto. (34)

La oficina de rentas de Querétaro, no sólo se equivocó en establecer la propiedad de la finca. También se equivocó al asignar como mejores los derechos de Felipe Soto. Situación que

(32) Balbontín, Op. Cit. Pág. 50

(33) Ponemos en interrogante el nombre del pueblo puesto que en el documento revisado no es legible la letra

(34) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 66/60

no era extraña en esos años, puesto que los gobiernos locales y el nacional enfrentaban problemas al adjudicar los bienes rústicos que estaban arrendados, por las costumbres seguidas por las congregaciones religiosas. Cuando algunos de los arrendadores se mostraban indecisos en continuar con el arrendamiento de la finca, los mayordomos de las haciendas que estaban en manos de la Iglesia, preservaban la seguridad de cultivar los terrenos celebrando contratos simultáneos con otros arrendadores. Contratos en donde se asentaba una cláusula que garantizaba los derechos del viejo arrendador si acaso se decidía a seguir realizando el arriendo. Este fue el caso de la hacienda de Obrajuelo, desde 1856 arrendaba por el señor Letona. Aparentemente en 1858, por motivos de salud, el señor Letona tuvo que subarrendar la finca a Felipe Soto y la Congregación de Guadalupe, por su parte, aseguró la siembra de las labores de la hacienda firmando contrato de arrendamiento con Manuel Abasolo y con el señor Domínguez. De esta manera, en 1860, aún cuando Felipe Soto no era arrendador directo de la congregación sino subarrendador del señor Letona, en la práctica él tenía a su cargo los trabajos de la hacienda.

Publicadas a finales de 1860 las leyes de reforma, los tres arrendadores de la Congregación de Guadalupe se preguntaban unos a otros si estaban dispuesto a redimir la finca como lo estipulaba la ley. Aparentemente ninguno se animó hasta que corrió en Querétaro el bando de 3 de agosto de 1862, que publicaba la disposición del gobierno del 26 de julio de ese año; ocasión en que Felipe Soto, tomado como arrendador de Obrajuelo, fue

presionado por la oficina de rentas de Querétaro para hacer la liberación de la finca.

Felipe Soto realizó la redención del capital de \$46 000.00, en que fue valorada la hacienda, ofreciendo que las 2/3 partes del valor, \$30 666.00, pagaderos en bonos de la deuda pública, los realizaría a los tres meses de tirada la escritura. La otra tercera parte, \$15 333.33 los pagará, dice Soto, con semillas, animales y forrajes. Los 10 000.00 restantes en 10 libranzas aceptadas de \$1 000.00. Ofrece, además, que por las dos últimas libranzas entregará 2 000 fanegas de maíz a razón de \$2.00 por carga. Soto aclara que en el corto tiempo que le daban para hacer la operación y por la pobreza en que lo había reducido la guerra civil, no le era posible hacer una proposición mejor.

La hacienda fue adjudicada a Felipe Soto pese a la oposición del Sr. Domínguez que intervino activamente para impedir la realización de la venta y conservar la hacienda en manos de la congregación de Guadalupe. Sus esfuerzos fueron en vano: la hacienda de Obrajuelo pasó a manos de Felipe Soto.

2.1 Confusión en la administración de los bienes nacionalizados: arreglos privados

En el entretanto, la invasión de "la Francia" fue una realidad. Motivo por el cual el presidente Juárez emitió el decreto de 29 de enero de 1863 que pretendía acelerar el embargo y la venta al mejor postor "de los bienes que en punto no ocupados por el enemigo existan y pertenezcan a los reos de cualquier delito de traición o sedición", o de aquellos que "hubieran escrito a favor de la intervención extranjera o la hubiesen pedido oficial o privadamente". También se consideraba el embargo y la venta de aquellas propiedades, rentas y frutos "que en los lugares sometidos a la autoridad del gobierno produzcan y causen beneficio de mexicanos residentes en puntos dominados por el ejército francés". Sin embargo, para 1863 el gobierno de Juárez ya sabía que el manejo de los bienes nacionalizados había sido arbitrario y muchas veces injusto. Por este motivo, y considerando que la disposición anterior podía dar pie a negociaciones ilícitas se aclaraba que únicamente se podía proceder al embargo y a la venta de los bienes si se contaba con información suficiente y confiable. Por otra parte, el producto de las ventas, sin excusa alguna se aplicaría para la atención de la guerra y se consideraban como de carácter expropiatorio. Por tal motivo, el prejuicio que la expropiación arrojaría sería indemnizado a los dueños al restablecimiento de la paz. No habría derecho a indemnización si se probaba la traición a la patria.(35)

(35) AGN, Gobernación, Caja 493, Exp. 16

Aun cuando no es fácil identificar las transacciones que se hicieron bajo esta disposición, sin duda fue el antecedente para el decreto de la Regencia del Imperio del 17 de agosto de 1863 que declaraba "nulos y sin ningún valor ni efecto, todas las ventas, enagenaciones o donaciones de cualquier género de bienes particulares efectuados por el ex-gobierno de D. Benito Juárez, o sus agentes en virtud de pretendidos decretos de confiscación...se consideran como abuso de fuerza".(36)

Como resultado de estas debatidas leyes y decretos tuvieron lugar varios conflictos como fue el suscitado entre el administrador de rentas de Querétaro y el agente de los bienes nacionalizados durante el Imperio. El administrador de rentas de Querétaro había recogido las fincas que fueron adjudicadas después de la salida de Juárez como lo indicaba la ley del 23 de julio y el decreto del 17 de agosto de 1863. Entre los propietarios que recuperaron los bienes en esta época se encuentran, entre otros, Cenovio Díaz, Casimiro Medina, Francisco Fuentes, Camilo Hernández, Vidal Martínez, Hilario Torres, Alejo Marín, Nemesio Escoto, José González, Agustín I. Legarreta, Luis Zorrilla, Francisco Ricardo Gallegos, Juan Vargas, Vicente Hernández, Gregorio Cortés, Antonio Mariscal, Pedro Hernández, Doroteo Camargo y Jesús Herrera.(37)

No obstante, al hacer las devoluciones respectivas surgieron infinidad de problemas. Entre otros, los productos de las rentas recogidas, no correspondían a las personas que habían sido

(36) AGN, Gobernación, Caja 493, Exp. 2

(37) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 16

adjudicadas. Para el 30 de marzo de 1865, el problema se había agigantado por el conflicto que surgió entre el agente de instrucción pública y cultos que se encargaría del manejo de los bienes nacionalizados y la oficina de rentas. Ambas instancias que se disputaban la administración de las rentas recogidas.

El asunto aparecía a tal punto entreverado con los intereses personales de los administradores públicos, que la Contaduría General se vió precisada a indicar que las rentas podían ponerse "donde les parezca más seguro".

Se argumentaba que no se verificaba la devolución de los productos "porque no hay conformidad entre lo que la administración de rentas dice haber cobrado a los adjudicatarios y lo que estos reclaman hasta fines de julio último en que la agencia especial se estableció. El 30 de octubre se exigió al agente de Querétaro, Antonio Plata, que informara sobre las sumas que recibió de la administración de Rentas y la lista de personas a quienes pertenecía ese ingreso. Cantidad que ascendía a \$1 498.84. Plata aclaró que no se podía relacionar el monto de las rentas con los adjudicatarios porque no se llevaron libros con los registros debidos. De esta forma, se resolvió devolver dinero solamente a aquellos adjudicatarios que demostraran, con recibos, la suma que se les adeudaba o se conformaran con perder sus bienes. Todos habían aceptado ese arreglo, excepto, dice Plata, Díez Marine porque "ni justificó su cobro, ni se conforma y pretende que se le pague en efectivo". No se puede hacer depuración alguna, concluía Antonio Plata, "en una cuenta que no se llevó con las formalidades debidas".

En México, según consta en las notas manuscritas que sobre los informes que llegaban de Querétaro ponía el administrador de bienes nacionalizados, al ministro, se dudaba sobre "quienes de los dos empleados contendientes tenía razón". Ante la duda, el 14 de noviembre de 1865 se le pide al administrador de rentas de Querétaro que rinda un informe minucioso de los depósitos. El administrador de Querétaro respondió el 25 de noviembre de ese mismo año:

La ocupación que he tenido por muchos días de andar en el comercio buscando dinero para facilitar la salida de las fuerzas que deben operar en la Huasteca me ha impedido dar a Ud. una explicación bien clara de todo lo ocurrido en la entrega de los bienes nacionalizados y sus productos al agente Antonio Plata

En el informe rendido el administrador de rentas niega todos los cargos que le hacía Plata, indicando que había entregado una lista que incluía todas las fincas que se recibieron en depósito con la fecha del hecho. No obstante, aclaraba, no todas las fincas se recibieron en noviembre de 1863, "que fue cuando llegó a esta ciudad la intervención".(38)

Al margen de la disputa, que lo único que pone en claro es la

(38) El 11 de julio de 1863, la Asamblea de Notables había decretado que la nación mexicana adoptada como forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria con un príncipe católico. Se disponía en el artículo No. 2 de este decreto que el soberano tomaría el título de Emperador de México. La corona imperial de México se ofrece a S.A.I.R. el príncipe Fernando Maximiliano, Archiduque de Austria para sí y para sus descendientes. En el caso de que el archiduque no llegara a tomar posesión del cargo, la Asamblea de Notables asentaba que se pediría a Napoleón III que indicara el nombre de otro príncipe católico. AGN, Gobernación, Caja 496, Exp. 11

mala administración que prevaleció en el manejo de los bienes nacionalizados, es evidente que los bienes se habían confiscado a administradores públicos como Nemesio Escoto, a los activos denunciante de bienes ocultos como Gregorio Cortés y también a personas que entonces tenían gran reconocimiento social como era Agustín Legarreta. Pero también se había perjudicado a personas de escasos recursos.

La pretensión de cobrar las contribuciones causadas por las fincas sin restituir las rentas, sería buena si se notare en los que suscribimos pertenecen a esa jerarquía de los especuladores de los bienes del clero, de esos grandes empresarios que en asociaciones de gran importancia tienen una caja fuerte para llenar con lujo las obligaciones contraídas con el fisco, pero los pobres artesanos de Querétaro, después de tanto contratiempo, ¿cómo podrían? (39)

La confusión reinante en la nacionalización de los bienes de la Iglesia y su respectiva adjudicación a los que tuvieran derecho a la liberación o redención de los capitales no sólo provenía de la escasa información que se tenía sobre el estado de la propiedad raíz. La mala organización existente para registrar a los denunciante de los bienes y para hacer y anotar los cobros estipulados por las redenciones de capitales piadosos, suscitaba conflictos sobre los derechos de los denunciante.

En ocasiones, aparecía como si la redención de los capitales gravados hubieran sido hechos varias veces por distintas personas, cuando en realidad se trataba de redenciones distintas. En estos casos, la confusión se daba, sobre todo, cuando las haciendas (39) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 16

habían sido fraccionadas y vendidas a distintos propietarios. Propietarios que, a su vez, quedaban reconociendo distintas fracciones de los capitales piadosos o de sangre. Este fue el caso del rancho de Cerrogoro, ubicado en el Distrito de San Juan del Río.

El 21 de febrero de 1861 Ignacio Romero se subrogó un capital de \$2 700.00 a favor del convento de San Juan de Dios que reconocía el rancho de Cerrogoro. Al triunfo de la República, en 1868, el propietario del rancho, Francisco Ugalde, redimió \$2 472.50. En este caso, la oficina de rentas había recibido dos redenciones de capitales gravados sobre Cerrogoro. El de 2 700 de Romero y el de Ugalde por 2 475.50. Esta doble redención se debe a que Francisco Ugalde era propietario de una fracción de Cerrogoro. Cuando se revisan los expedientes de nacionalización en 1874, solamente se presentó Romero a verificar la redención efectuada, pues Ugalde no se había enterado de la convocatoria, según lo indicó su representante,

en razón de que vive en un rancho distante...y para cuyo punto no hay correo...de manera que se necesita espiar una oportunidad para comunicarse o pagar un mozo que lleve las notificaciones que se le hagan. (40)

El dueño de la 4ª fracción de Cerrogoro en 1856 era Antonio Silis que estaba casado con Ma. de Jesús Osornio. Esta fracción lindaba al oriente con propiedades de Miguel Paz, por el poniente con tierra de la hacienda de La Llave y por el sur con la suerte (40) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 499, Exp. 66/153

de tierras de Antonio Osornio y por el norte con terrenos del rancho Los Enríquez; fracción que estaba gravada con un capital de \$1 672.00

Los herederos de Sánchez de Taggle, dueño de Atongo y Amazcala, desde por lo menos 1860 no lograron sostener la hacienda en sus manos. Con motivo del cobro de un capital de \$4 000.00 se menciona el fraccionamiento de la hacienda de Atongo. La escritura de los capitales que reconocían las haciendas de Atongo y Amazcala correspondían al 11 de enero de 1844 por \$4 000.00 y réditos del 5% con fianza de José Adalid. De este capital se habían redimido \$1 000.00 los mismos que fueron impuestos en las cajas de Consolidación según se ve en la escritura No.4136. El 4 de marzo de 1868, Alejo Marín informa al ministro de hacienda que ha hecho el cobro de ese capital de \$4 000.00 que grava a Atongo y Amazcala, pero que el propietario le informó:

Se compró la fracción de Atongo en los términos siguientes: fue comprada en \$28 000.00 cuya cantidad hizo la distribución el albacea de Don Luis del Villar y Bocanegra como sigue: se dieron al contado \$1 000.00. \$7 000.00 pesos pagaderos a uno año. \$7 000.00 pagaderos a dos años y \$4 000.00 redimibles a los cinco años. Lo primero todo está arreglado y sólo reconozco los \$4 000.00 últimos de la testamentaria que representa el referido Lic. Luis del Villar quien podrá contestar a estos cargos como albacea y al Sr. Taggle como propietario que fue de esta hacienda cuando estaba toda reunida.(41)

Por otra parte, amparados por los decretos de Arteaga, los denunciante de bienes ocultos, adquirirían los vales o documentos

(41) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/4

de los prestamistas para pagar los bienes nacionalizados con el 20 y 40% reconocido por los decretos del general Arteaga. Los prestamistas que no tenían derechos adquiridos sobre capitales ocultos, tenían la oportunidad de recuperar los capitales entregados a los liberales sin sufrir ningún detrimento sobre los réditos acumulados.

Iniciadas las negociaciones bajo la forma de arreglos particulares que el decreto de Arteaga de diciembre avalaba, se empezaron a dar en forma incontenible dos situaciones: las ventas de los derechos de adjudicación, hasta en tres personas distintas y el traspaso de los adeudos de las capellanías de unas fincas rústicas (y urbanas) a otras. Ultimo caso que era, de hecho, un acuerdo privado entre los hacendados que habían formulado empréstitos hipotecarios a los particulares convertidos, en 1860, en dueños de haciendas.

Bajo estas nuevas modalidades de obtener crédito, las fincas que a lo mejor no habían estado gravadas por sus antiguos propietarios, aparecían a mediados de la década (1860-1870), cargadas con capitales ocultos, denunciados en 1860.

Por ejemplo, Luis Larrani era dueño, en 1865, del rancho de la Cruz, ubicado en San Juan del Río, y de la casa No. 8 de la calle de Don Esteban. Propiedades que estaban fincadas con un capital de \$9,600.00, propiedad de Rafaela Palacios y Bringas. Las capellanías laicas, de las que era poseedora Rafaela Palacios y Bringas, correspondían a las fundadas en 1804 por María Josefa García, religiosa del convento de Nuestra Señora de la Purísima Concepción; una capellanía con valor de \$4 000.00 y otra de

\$6 000.00. Capitales que habían sido impuestos sobre la hacienda de Michinteppec propiedad en aquel entonces de José María García. La hacienda para 1861 había sido fraccionada entre diversos propietarios. A Pablo Berruecos pertenecía la fracción I y la fracción II pertenecía a Gil Echevarría. Pagados un porcentaje de los capitales, unicamente quedaban pendientes \$9 600.00 que Rafaela Palacios y Bringas había aceptado, en 1864, que quedaran reconocidos sobre la fracción II de Michinteppec de Gil Echevarría por otros 7 años, siempre bajo el rédito anual del 6%. Posteriormente en 1865, Rafaela aceptó que los capitales adeudados por los propietarios de las fracciones I y II de Michinteppec se pasaran a gravar la casa No. 28 de la calle de Don Esteban y el rancho de Santa Cruz, propiedades que pertenecían a Luis Larrani, quien aceptó el gravamen de este capital de \$9 600.00 al 6% de réditos anuales. (42)

Los sucesivos traspasos de los derechos de los denunciante no solamente respondían a diferentes causas, sino que, también, la resolución oficial tomada en cada caso variaba de acuerdo a la posición política y económica de los sujetos involucrados en el litigio que se tratara. A pesar de la gran diversidad y la complejidad habida para asignar los derechos, en los traspasos de los derechos de adjudicación se pueden encontrar dos constantes. Por un lado, la incapacidad económica de los propietarios de las haciendas y de algunos de los denunciante de bienes ocultos, limitación que indirectamente se convirtió en una fuente importante de problemas, y, por otro, la habilidad política de los

(42) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/2

administradores públicos y de los prestamistas más fuertes del estado. Avalados los administradores en la posición laboral que ocupaban, y los prestamistas en la disposición de los recursos para comprar conciencias y derechos, vinieron a ser, a fines de la década 1860-1870, dueños de algunas de las haciendas y los ranchos de la entidad.

Como muchos hacendados carecían de recursos para pagar los intereses de los capitales ocultos que habían sido adjudicados a los denunciante, éstos, interesados en recuperar las inversiones realizadas, con frecuencia vendían sus derechos (sobre los capitales) a otros denunciante con mayor capacidad económica. La venta de los derechos de adjudicación se oscurecía, aún más, por las ventas de las haciendas, y por los sucesivos denunciante y compradores de los derechos de adjudicación que iban proliferando con el correr del tiempo.

El denuncia que se hizo sobre los capitales que grababan la hacienda San Miguelito y San José el Alto puede tomarse como un modelo, entre los muchos similares habidos en el periodo, de los conflictos de intereses suscitados entre los compradores de los derechos de adjudicación, los compradores de las propiedades, y los administradores públicos que aprovechaban al vuelo los litigos de adjudicación, para a la vuelta de los años aparecer como propietarios de los bienes.

En el caso de San Miguelito estaban involucrados el cura de la parroquia de Santa Ana de Querétaro, dueño de la hacienda de San Miguelito desde 1846, Ramón Saenz Mendiola, hacendado del lugar, quien había comprado la hacienda al cura Guadalupe

Perrusquia en 1863, y los denunciante de bienes ocultos.

El primer individuo que denunció los capitales que gravaban a San Miguelito (\$6 000.00 reconocidos al convento de Santa Clara) fue Eduardo Guillén, conocido denunciante de bienes ocultos, quien únicamente denunció \$3 600.00 en 1860. Perrusquia liquidó a Guillén \$600.00 en efectivo y se comprometió a pagar el resto de \$3 000.00 a dos años. Los $\frac{2}{5}$ restantes para completar los \$6 000.00 que se adeudaban a Santa Clara de Querétaro, Perrusquia los quedó reconociendo como dote de la monja exclaustrada de las capuchinas, la R.M. Coria. Acción que pudo realizar en virtud de las disposiciones de la ley del 6 de marzo de 1861, que establecía que se podían dejar $\frac{3}{5}$ del capital en hipoteca a dotes de monjas y cultos.

No obstante, para 1863, Eduardo Guillén cedió sus derechos de adjudicación a dos personas: a Carlos Antúnez \$1 500.00 e igual suma a José María Ortiz. Como para 1863 la hacienda ya pertenecía a Sáenz Mendiola, éste liquidó, en 1865, los capitales de Ortiz y de Antúnez. Unicamente quedó reconociendo los \$2 400.00 cuyos réditos anuales del 6% entregaba a la religiosa exclaustrada, Coria. (43).

En ese mismo año, 1865, José Guadalupe Barragán pidió se le reconocieran los derechos de redención de diversos capitales: \$10 000.00 fincados en la hacienda La Labor a favor de la Congregación de Guadalupe. \$6 000.00 de la hacienda de San Miguelito a favor de la misma Congregación; \$6 000.00 fincados sobre la hacienda de San José del Alto, y \$5 000.00 fincados

(43) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/4

sobre la hacienda del Sáuz a favor del convento de Santa Clara.

Pese a que fueron varios los que se opusieron a esta adjudicación, el 21 de noviembre de 1865, el Consejo de Estado declaró que era "subsistente la redención verificada de todos los capitales realizada por el Sr. Barragán". (44).

El fallo del 21 de noviembre de 1865, no surtió efecto en lo que competía a San Miguelito porque Ramón Sáenz Mendiola se había opuesto a esa adjudicación por medio del ocurso presentado el 14 de mayo de ese mismo año. Ocurso que no se había tenido presente por el Consejo del estado en el fallo dictado seis meses más tarde.

El juicio sobre los derechos a los capitales que gravaban la hacienda El Sauz, La Labor, San Miguelito y la de San José el Alto, que había iniciado José Guadalupe Barragán por la manifestación que hizo el 15 de abril de 1865, para los efectos de la ley del 26 de febrero y su reglamento de 9 de marzo de 1865, todavía persistía en 1867.

En ese entonces el jefe de hacienda de Querétaro certificó que no se había hecho el reconocimiento a Barragán por el ocurso que con anterioridad a su denuncia había presentado Ramón Sáenz Mendiola. Sin embargo, Barragán aparece como adjudicatario de la hacienda San José el Alto que pertenecía a la señora Rodriga Castro y Oyarzabal, quien también era dueña de la hacienda de los Dolores. Derechos de adjudicación que Barragán había comprado a Eduardo Guillén. (45)

(44) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/3

(45) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 137/29

Para 1868, se embargó la hacienda de San José el Alto que fue puesta al cuidado del depositario Jesús Mansalve. En este entonces, valorada la finca en \$15 746.00 fue sacada a remate público, haciendo posturas Luciano Frias y Soto, el Lic. Sebastián Larrondo y Jesús Gutiérrez Verdugo. Los documentos consultados sugieren que de 1869 a 1870, la hacienda había sido adjudicada a Francisco Macias y no al presunto denunciante Barragán. Período en que, por otra parte, la hacienda estaba arrendada al depositario J. Jesús Mansalve en \$600.00 anuales por 5 años.

Los acuerdos locales para adjudicar las fincas, no de acuerdo a los derechos de los involucrados en los litigios, sino en función de los intereses creados entre los mismos administradores públicos, aparecen con gran nitidez en el informe (segunda noticia) que sobre el estado de los bienes nacionalizados rinde Alejo Marín el 22 de junio de 1869. En este informe, a un año escaso de los conflictos sobre la hacienda San Jose el alto, se indica que las haciendas El Sauz, la Labor, San Miguelito y San José el alto, cuyos capitales piadosos habían sido denunciados por Barragán, pertenecían a la testamentaria de Antonio Zúñiga, además de la casa No. 6 de la 1a. de San Felipe. Afirmación que no estaba apegada a la realidad. Por otra parte, parece evidente que como sobre los capitales gravados sobre El Sauz "no se tenían antecedentes" y no se tenía certeza de que el capital estuviera cargado sobre la hacienda, y sobre San Miguelito Ramón Sáenz Mendiola había clarificado sus derechos, unicamente quedaba en entredicho la hacienda de San José el alto, puesto que la Labor pertenecía a la jurisdicción de Guanajuato.

San José el alto, cuya propiedad se atribuye a la testamentaria de Zúñiga y no a la Sra. Castro de Oyarsabal, estaba gravada por la capellanía de \$6 000.00, fundada por Tadea de la Vía. Capital denunciado primero por Guillén y después adquirido, mediante compra de los derechos a Guillén, por Barragán. Sin embargo, la oficina de rentas de Querétaro en 1869, desconoce los derechos de Barragán, bajo el pretexto de que no había antecedentes: "aunque se asegura por el denunciante Barragán que se redimió este Capital, la oficina no tiene antecedentes. Además la finca está embargada y solicitada su enagenación", explicaba Alejo Marín en la nota No. 39 del informe.(46) Rechazados los derechos de Barragán, se dejaba libre el camino para la adquisición de Luciano Frias y Soto. Sacada a concurso la finca, en 1868, se presentaron tres concursantes. Entre ellos, Luciano Frias y Soto ofrecía \$10 497.00 contra \$12 588.00 que había ofrecido Gutiérrez Verdugo y \$10 940.00 ofrecidos por el Lic. Sebastián Larrondo. El manejo administrativo de esta venta, pone en evidencia el claro propósito de favorecer los intereses de Frias y Soto.

Para 1902, el presidente de la república, ordena que se archive el expediente que trata sobre el arrendamiento de San José el Alto y los cobros que Mansalve hacía de su salario de \$40.00 como depositario de la hacienda -se le adeudaban \$283.13- y el expediente sobre la compra que hizo Luciano Frias y Soto en 1870.

(47)

(46) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/67

(47) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 498, Exp. 66/85

Otro caso famoso en Querétaro, fue el de los capitales que gravaban la hacienda de San José y San Pedrito de la testamentaria de Agustín de la Lastra, que reportaba \$16 000.00 a favor del convento de Santa Clara y \$1 000.00 al de Santa Teresa. Capitales que habían sido denunciados en 1866 por Manuel Baranda. En virtud de este denuncia Raymundo Mora, albacea testamentaria de de La Lastra con gran ironía aclara la situación de la finca:

los capitales fueron denunciados en 1861 por tres diversos adjudicatarios... todos se me presentaban cobrándome y aún proponiéndome arreglos y a todos les contesté que los terrenos estaban a su disposición para que los vendieran o hicieran de ellos lo que quisieran porque a la testamentaria no le convenía hacer combinación alguna... los adjudicatarios litigaban entre sí sobre sus derechos de preferencia y las cosas se conservaron así hasta 1863... cuando el jefe de hacienda de Querétaro sin previo aviso sacó a remate la finca.

La situación de la hacienda no estaba clara debido a que Raymundo Mora, al hacer el listado de los bienes de de La Lastra, había omitido incluir la hacienda de San Pedrito y San José en razón de que todo su valor se reconocía a una corporación religiosa. Así, denunciados los terrenos y sacados a remate, no le convenía a la testamentaria informar que eran suyos, puesto que la consideraba como finca perdida. En virtud del silencio guardado por Raymundo Mora, la finca estuvo abandonada durante toda la década.

También fue usual que algunos de los prestamistas poderosos económicamente y con reconocimiento público, exigieran el derecho que supuestamente les asistía a ciertos terrenos adjudicados a terceros. Por así convenir a sus intereses despojaban a los

arrendatarios de los bienes adquiridos. Por ejemplo, un desconocido arrendador de las monjas capuchinas, José María Fuentes, había sido adjudicado el 26 de octubre de 1863 con el solar letra Y de la calle Lozada valuado en \$333.00. Solar que tenía sembrado con alfalfa. Sin embargo, dos años más tarde, considerando Esteban Lamadrid que se le seguían graves perjuicios con esta enajenación, el solar del exconvento de capuchinas lindaba con su propiedad, "convino con el adjudicatario para que le traspasara sus derechos mediante suma estipulada al respecto".

(48)

La confusión existente para designar a la persona que en justicia tenía el derecho legítimo a desvincular los capitales y, en su caso, a enajenar las propiedades, se agravaba por el mal manejo administrativo seguido en estos asuntos y por el extravío de los documentos y de los expedientes sobre los procesos de nacionalización. Para ilustrar lo sucedido se puede mencionar, entre los muchos casos, el de Mariano del Corral, propietario de dos capellanías laicas que se cargaban una sobre la casa No 1 de la calle de Santa Clara y la otra sobre el rancho del Cerrito Colorado. Derechos heredados por ser bisnieto y tataranieta en línea materna de los respectivos fundadores de las capellanías (Pedro y Francisco Guevara). Cuando Ramón Blasco, apoderado del demandante, manifestó por la desvinculación de los dos gravámenes, indicó que no podía acompañar ni los documentos que certificaban la propiedad de los capitales ni los títulos originales en donde constaba que se había nombrado a su hermano, a Del Corral, como

(48) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/46

capellán de una y otra, porque,

no permitió el gobierno que se le devolvieran los documentos originales y hoy es imposible recobrarlos porque no existe el archivo de la jefatura de hacienda. (49).

En otras ocasiones los expedientes se perdían por los continuos cambios políticos: los gobiernos en turno, al salir de la ciudad, se llevaban consigo los protocolos y los documentos negociados durante su administración.(50) Luz Cortés de Costera al manifestar el 10 de mayo de 1865 por la casa No. 7 de la calle de 5 señores, de acuerdo a lo estipulado por la Ley del 20 de febrero de 1865 y su reglamento de 9 de marzo, asienta sin ningún titubeo:

no recuerdo a qué convento pertenecía la casa -adquirida en subasta pública por su esposo Ignacio Costera- ni es fácil inquirirlo porque el archivo y el protocolo se lo extrajeron de esta

(49) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 72/119

(50) Este problema no era exclusivo de Querétaro. Por ejemplo, en la sesión del 12 de marzo de 1856, Guillermo Prieto refiriéndose a la administración de Santa Anna señalaba que como entonces en un mismo asunto intervenían todos los ministros, era imposible encontrar el hilo de semejante laberinto y que la parte reservada a los expedientes no aparecía. El Sr Arrijoa manifestó que estaba de acuerdo con lo señalado por Prieto pero aclaró "que no es tan general el desorden de las oficinas; que en los ministerios de Relaciones, Justicia, Fomento y Gobernación existe todo bien arreglado, y que el desorden sólo es cierto en las Secretarías de Guerra y Hacienda. Sin embargo Prieto replicó que, "en el ministerio de Gobernación falta índices y expedientes que corresponden a seis meses de la administración de Santa Anna; que todos estos documentos fueron extraídos por el ministro respectivo y que el libro de acuerdos no tiene formalidad ni sustancia", Francisco Zarco, Crónica del Congreso Constituyente, Op. Cit. Pág. 38

ciudad al verificarse el cambio de gobierno. (51)

En la mayoría de los casos, los documentos y los archivos se extraviaban por el desorden y el caos que prevalecía en el manejo de los asuntos públicos. Esta situación es transparente en la argumentación de la rectora del Colegio de Carmelitas de Querétaro al manifestar por la casa letra F de la calle de Santa Teresa, propiedad del convento de Carmelitas. Casa que para 1865 todavía no había sido adjudicada.

No presento escritura, dice la rectora, porque ignoro el paradero de ellas, en virtud del extravío que sufrieron los documentos en la nacionalización de los bienes de la Iglesia. (52)

El desorden que prevalecía favorecía a los hacendados, quienes en muchas ocasiones se evitaban, de litigio en litigio, pagar los susodichos capitales tantas veces denunciados. No obstante, a mediano plazo quienes fueron beneficiados con el desorden predominante fueron los administradores públicos, los militares y los políticos quienes tuvieron la oportunidad, por su posición social, de seguir los procesos de adjudicación de las fincas y de influir en la voluntad de los encargados de asignar los bienes. Bajo recursos pocos claros obtuvieron el derecho a la adjudicación de la propiedad rural y urbana en condiciones más que favorables. Así lo hicieron, en su momento, Venegas, Vieytes y Frías y Soto. Y lo intentaron, sin éxito, los coroneles Benito

(51) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 72/122

(52) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 147/58

Zenea quien, en 1873, se había propuesto apropiarse de la hacienda la Noria que había sido adjudicada a Francisco Venegas en 1863, y el coronel Joaquín Garma, originario de Salamanca, quien pretendía, fundado en el desorden predominante y en el extravío de los documentos, adjudicarse la hacienda de San Pedro y San Pablo de la Era.

2.2 Las dificultades de los rancheros

Avalados en la desinformación existente y en el escaso peso político que tenían algunos arrendadores que habían adquirido las propiedades entre 1830-1860, los individuos poderosos económicamente pretendieron, con métodos poco transparentes, apropiarse de las propiedades. El litigio de la hacienda de San Pedro y San Pablo de la Era, más conocida como La Era, ilustra los mecanismos utilizados por algunos militares para quedarse con las propiedades cuyos dueños carecían de papeles para demostrar la propiedad de la finca, porque se habían perdido, y cuya posición social no era plenamente aceptada por la sociedad queretana puesto que provenían de ese sector de "oscuros arrendadores de las haciendas del clero".

En el año 1861 Silvestre Méndez denunció los capitales que supuestamente gravaban a la hacienda de la Era, en favor de Santa Clara, \$10 500.00, y \$2 000.00 a la hermandad de pobres de Nuestra Señora de Guadalupe, capitales impuestos por el viejo propietario de la hacienda, Luis Sánchez del Villar. Como lo disponía la legislación de Arteaga del 24 de diciembre de 1860, el denunciante

Méndez quedó como subrogante del erario. No obstante, el 4 de abril de 1861, Silvestre Méndez informó a la oficina de hacienda de Querétaro que todos sus intentos por cobrar a la censataria Dolores Guerrero los $\frac{3}{5}$ del capital habían sido infructuosos. Cantidad que ascendía a \$7 500.00. En virtud de lo cual pide que la oficina de hacienda haga el cobro mediante el uso de su facultad coactiva. La señora Guerrero, propietaria de la hacienda La Era, sostenía que el capital adeudado por su padre a las clarisas era de \$9 000.00 y no como pretendía Méndez \$12 500.00. En virtud de que la denuncia de los capitales era errónea, Dolores Guerrero se negaba a satisfacer la redención del capital.

Ante la firme posición de la propietaria de la Era, la oficina de hacienda de Querétaro, avalada en la petición del subrogante del erario, decidió embargar y poner en remate público la finca en la cantidad de \$13 084.00. Precio de remate que no difería del valor asignado a la propiedad en 1795 (\$13 568 pesos, 2 reales), año en que la había adquirido Luis Sánchez del Villar. No obstante, en 1795, Luis Sánchez del Villar ofreció \$17 550.00 por la hacienda para mejorar la oferta que había hecho el otro concursante, Antonio Marroquín.

El bando que anunciaba el remate de la hacienda a mediados del siglo XIX, publicado el 12 de junio de 1861, también subastaba otros bienes que "habían sido embargados a los censatarios por no haber satisfecho los adeudos correspondientes". La subasta programada para los días 17, 18 y 19 de junio, ponía a remate además de la hacienda La Era, la casa No. 2 de la calle de la Reja, valuada en \$2 133.00, la casa No. 7 de la calle de

Carmelitas valorada en \$753.62, la casa No. 3 del callejón de los Ciegos, tasada en \$9 312.12. También la casa de la esquina del Descanso y malfajadas valorada en \$5 028.52, el Mesón del callejón de Aspeitia en \$6 778.84, la casa de la esquina del Hospital y 5 Señores en \$13 476.00 y la casa de la calle de la Laguna en \$1 850.00.

El anuncio hizo surgir a todos los acreedores de la hacienda la Era que deseaban preservar sus intereses. El señor Benavides solicitó que se pusieran en depósito 350 cargas de trigo y 100 de garbanso que le debía la señora Guerrero. Por su parte, el prestamista Gutiérrez García embargó las sementeras que en ese año 1861, había cosechado la finca.

Como la propietaria de la finca, Dolores Guerrero, no lograba demostrar la propiedad de la hacienda y el adeudo que ella aseguraba que era de \$9 000.00, porque los archivos se habían quemado en 1855, la oficina de Querétaro nombró como depositario de la hacienda a Dolores Trejo. Al poco tiempo se observó que Dolores Trejo dilapidaba los bienes y que, incluso, la parte material de la finca se estaba deteriorando por la falta de cuidado. Se decidió entonces separar del cargo a Trejo y proceder, sin demora, al remate de la hacienda. Decisión que no esconde el claro propósito de despojar a la legítima propietaria para otorgar la hacienda al coronel Joaquín Garma.

Al concurso celebrado sobre la Era, únicamente acudió Joaquín Garma, representado por el español Zacarías Garita, quien a nombre de Garma hizo la propuesta para comprar la hacienda tasada entonces en \$13 084.24. Ante la disputa de la Sra. Guerrero, y

las dudas que prevelecián en la oficina de hacienda, Joaquín Garma con gran cinismo afirmó:

son correctos los datos que tiene la oficina de hacienda y mientras no se pruebe lo contrario está expedida para proceder a embargar la hacienda pues en todos tiempos y sin excepción el erario jamás ha litigado despojo...le pido informe excrupulosamente por qué razón pasó dicha finca a manos de doña Dolores Guerrero puesto que pertenecía a Luis Sánchez del Villar quien realizó diversos depósitos poniendo como aval a la hacienda de la Era. Por tanto hago la propuesta...doy por la finca \$8 333.00 de los cuales pagaré en bonos las 3/5 partes esto es \$4 999.00 y en dinero en efectivo las 2/5 partes que ascienden a \$3 364.00 los cuales satisfaceré en 40 mensualidades o al contado con el descuento del 40%..(53)

En 1862, el visitador Francisco Ocampo, sin averiguación alguna que le permitiera conocer la situación real de la finca, la adjudicó y remató al coronel Joaquín Garma, en las condiciones por él propuestas. Dolores Guerrero no se quedó inmóvil frente a los acontecimientos de 1861-1862. Durante ese año y hasta 1869 en que se mantuvo en litigio franco con Joaquín Garma, no desaprovechó ocasión alguna para defender la propiedad.

En 1861, manifestó que la hacienda había sido adquirida por su padre hacía más de treinta años (en 1832). Adquisición realizada cuando el mayordomo de las clarisas, Francisco de Paula Meza, había sacado a concurso la hacienda. Guadalupe Guerrero, su padre, que había sido arrendador de las clarisas (de 1827 a 1832), propietarias de la hacienda a la muerte de su antiguo poseedor Luis Sánchez del Villar, porque los herederos de Sánchez del

(53) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/4

Villar no habían podido satisfacer los capitales e hipotecas que gravaban la finca, había adquirido la hacienda mediante un acuerdo con Francisco de Paula Meza; de la compra realizada en 1832 se había quedado a reconocer el capital de \$9 000.00, y no los diversos capitales que había gravado el anterior propietario Luis del Villar. (54)

En vista de lo infructuoso de su defensa, Dolores Guerrero le pidió a María del Carmen de Jesús Sacramentado Velasco, Abadesa de la comunidad del monasterio de Santa Clara, que le extendiera una certificación sobre el estado de la hacienda de San Juan y San Pablo la Era, petición que fue satisfecha de manera amplia. La abadesa certificó, el 25 de septiembre de 1864, que la hacienda era propiedad de María Dolores y María del Rosario Guerrero quienes reconocían un capital de \$9 000.00 al convento al 5% anual. Réditos que puntualmente habían satisfecho las propietarias hasta el 10 de febrero de 1861, año en que el capital había quedado en litigio por la denuncia realizada por Méndez. La abadesa extendió la certificación solicitada, aclarando que el capital se destinaba para manutención de las religiosas, con el claro objetivo de favorecer a Dolores Guerrero y también de salvaguardar la renta que, como dote, las leyes les concedían a

(54) La venta de la hacienda se había hecho a Guadalupe Guerrero en \$9,000.00. Capital que quedó reconociendo al mismo monasterio de (Santa Clara) desde el 10 de julio de 1832. Sin embargo Guadalupe Guerrero no pagó los réditos vencidos del capital durante 14 años, razón por la cual debía a las clarisas desde el 10. de julio de 1832 hasta el 30 de junio de 1846 a razón, de \$4,500.00 cada año, \$46,300.00. No obstante, Guadalupe Guerrero, fue pagando el débito de manera que para 1860 únicamente se seguían adeudando los intereses del capital de \$9,000.00 correspondientes a ese año.

las religiosas. Manifestó de manera categórica:

el expresado capital de vida justamente pertenece a la comunidad del Monasterio de Nuestra Madre Santa Clara de Jesús para ayudar a nuestros gastos de vestidos y precisos de alimentación de las religiosas que actualmente existimos alojadas en el convento de Capuchinas. (55)

Un año más tarde, el 25 de septiembre de 1865, a petición de Dolores Guerrero, el que había sido mayordomo de las Clarisas, Francisco de Paula Mesa, certificó que,

Así en su tiempo Don José Guadalupe Guerrero como después sus hijas le hicieron a la hacienda de la Era muchas mejoras en sus fábricas, bordos nuevos y aumento de las aguas para los riegos de sus sembraduras abriendo al efecto las tierras montuosas para su laborio cuyas mejoras las verificaron como legítimas sucesoras del finado Sr. su padre y propietario de la expresada finca únicamente con el reconocimiento de los \$9 000.00 relacionados en el certificado de la madre abadesa. (56)

El documento de Paula Meza ponía en evidencia que el precio de venta de la hacienda concedido a Garma era del todo punto arbitrario, puesto que la hacienda, por las mejoras introducidas, tenía un valor muy superior al tasado a fines del siglo XVIII.

Para su defensa, Dolores Guerrero, también acudió al Escribano Público y de la nación, José Ma. Esquivel, para que certificara que le había entregado los documentos de "liquidación de los arrendamientos de la hacienda de la Era por el tiempo que ha estado de cuenta de Don José Guadalupe Guerrero desde el 10. de julio de 1827, en que escritura, hasta el 30 de junio de 1832,

(55) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/4

(56) Idem.

importan dichas rentas en el expresado tiempo a razón de \$600.00 anuales, \$3 000.00". La certificación también incluía los pagos que sobre el capital de \$9 000.00 había realizado Guadalupe Guerrero ya como propietario de la hacienda. Pagos que ascendían a \$46 000.00 durante 14 años al 6% de interés anual. (57)

El juicio seguido por Dolores Guerrero, parecía llegar a su fin el 13 de abril de 1869, cuando el presidente Benito Juárez, "bien impuesto de la notoria injusticia cometida contra mi padre", dice Guadalupe Guerrero, declaró nula la venta de la hacienda de la Era, indicando en la resolución "que se repusieran las cosas en lo posible al estado que tenían antes de la enagenación de la finca".

La disposición del presidente Juárez se cumplió hasta 1870 en que se dió posesión a la Sra. Guerrero de la finca. Joaquín Garma se amparó contra el acto del Juez 2o. Constitucional de Querétaro que lo despojó, aseguraba, de la hacienda la Era y dió posesión de ella a Dolores Guerrero. En el litigio de amparo, Garma no pudo entregar la documentación que avalaba que el capital que él reclamaba a la Sra. Guerrero había quedado cubierto, "porque los documentos no existen en virtud de que el expediente de 1862 se había extraviado en San Luis Potosí". Cuando finalmente se obliga a Garma a entregar la hacienda a la legítima propietaria, Garma informa que él ya no es propietario de la hacienda porque la vendió a Juan Cutiérrez García quien era dueño de la hacienda de Galeras. El subterfugio no dió resultado y se le informa a Garma que la venta pretendida ha sido nulificada por (57) Idem.

ilegal, y que la legítima propietaria de la hacienda la Era es Dolores Guerrero.

La disputada hacienda de la Era tenía fama por la calidad de sus tierras, por su acceso al agua que le permitían altos rendimientos en las sementeras, por su proximidad a la ciudad de Querétaro, y la facilidad de la comercialización que le otorgaba su ubicación. En el avalúo realizado en 1780 cuando Sánchez del Villar la había comprado a la testamentaria de José Menchaca Soria, se informa que,

tenía 7 caballerías y 22 centavos de otra siendo todas de pan llevar de bastante migajón y de buena calidad, tal vez unas orillas barriales y unos lunares que la desigualan. De este número de caballerías la mitad de una de ellas está surtida de riego con 8 tandas de agua que recibe del río Querétaro en la tierra de Carrillo; las 4 de agua entera de a 21 1/2 días cada una en 22 de octubre, 29 de diciembre, 7 de marzo y 3 de mayo y las otras 4 de media agua de seis días cada una en 18 de mayo, 23 de junio, 29 de julio y 3 de septiembre por cuyo beneficio aprecio dicha 1/2 caballería en \$2 000.00

La finca en ese entonces valorada en \$13 500.00 fue comprada por Sánchez del Villar en \$17 550.00. De esta manera, si la familia Guerrero le había hecho bastante mejoras a la propiedad, como aseguraba Francisco de Paula Meza, el precio de venta a Garma demostraba que había sido una más de las negociaciones oscuras habidas en el periodo.

2.3 Las estrategias de los hacendados para evitar las leyes de nacionalización

Hubo ocasiones en que los hacendados establecieron arreglos privados con los capellanes. Este fue el caso de las capellanías fundadas por Pedro y Francisco Guevara que había desvinculado Ramón Blasco a nombre de su hermano Mariano del Corral.

Advierto, dice Ramón Blasco el 12 de mayo de 1865, que ninguno de los censatarios ha satisfecho todavía los respectivos capitales porque sus circunstancias no se los han permitido. Don Paulino Salgado pretende pagar con la casa hipotecada y a Don Ignacio Herrera se le concedió prórroga por el reconocimiento que se vence el 10 de febrero... Entre tanto, ambos han pagado los réditos correspondientes. (58)

En ocasiones, por lo contrario, los dueños de las haciendas eran presionados por los sucesivos denunciantes; sin embargo, fieles a los compromisos adquiridos por sus mayores, los hacendados resistían la presión que sobre ellos se ejercía para entregar el capital y los réditos, que aseguraba su propiedad, al legítimo propietario. Refugio Rodríguez y Leal que desvinculó el capital de una capellanía de sangre por \$2 666.00 que reconocía su hacienda de San Pedro Mártir a favor de José María Padilla y Munilla, según escritura dada el 19 de octubre de 1863 asentaba:

Si tuve a bien terminar este negocio salvando mi conciencia y los intereses del verdadero dueño de la capellanía, en abuso de infinitos disgustos y quebrantos a mi misma que sufrí en aquella época por los respectivos reclamos que tuve al referido capital que estaba al perderse, por no haberse presentado el interesado a reclamar sus derechos al término legal. (59)

(58) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 72/119

(59) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/15

El arreglo se hizo de acuerdo a la ley del 5 de febrero de 1861, que disponía que si el capital no era redimido por el legítimo propietario en dos meses, el censatario podía hacer el rescate mediante el pago del 15% del capital. (60)

Se daba el caso de que los dueños de las haciendas, no solamente no podían pagar los montos estipulados a los adjudicatarios del capital sino que, incluso, se habían atrasado en el pago de los réditos, obligación que cumplían con religiosidad los hacendados de vieja cepa. De hecho, una vez vendidas las haciendas, los nuevos dueños, que no pertenecían a la clase aristocrática y que no habían tenido experiencia en el manejo agrícola, no se sentían obligados a pagar los réditos de los capitales piadosos. Este fue el caso de Manuel Gabriel Legarreta, comprador de la hacienda Montenegro y Buenavista en 1854. Legarreta dejó de pagar los réditos del capital de \$5 000.00 que se reconocían al Colegio de San Ignacio y San Francisco Javier. Réditos que fueron escrupulosamente cobrados por Próspero C. Vega director del colegio. Cantidad que ascendía a \$2 337.00. (61) Sin embargo, la hacienda Montenegro, Santa Catarina y Buenavista tenían gravado un capital de 79 886.77. Capital que fue liberado por Legarreta en virtud de que Benigno Berdusco había redimido los capitales que debían las haciendas.

Los hacendados recurrían a cuanta estrategia había para evitar la liberación de los capitales que gravaban las fincas.

(60) Jan Bazant, Op.Cit. Pág.199

(61) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/44

Aparentemente la ley del 5 de febrero, que decretaba la disminución del número de los conventos de monjas y también la ley emitida 2 años más tarde, la del 26 de febrero de 1863, que decretó la extinción de todos los conventos, excepto a las hermanas de la Caridad, fue para ellos un medio de evitar los desembolsos de dinero en "exhibiciones de una vez". A las monjas se les asignaba en este entonces \$4 000.00 de dote, conminándolas la ley de 1863 a que aquellas que no hubieran recibido la dote acudieran al ministerio -jefes de haciendas en los estados- "para que desde luego se les entregue su capital o mientras esto sucede se les auxilie con sus alimentos".(62)

No se estaba distante en 1861 y 1863 de la postura sostenida el 22 de agosto de 1859, cuando si bien se solicitaba una estadística de los monasterios de señoras que existen en el estado, que comprendiera:

número de profesas, novicias, criadas y el de todas las demás personas que sirven en el convento, las rentas que tengan y una lista de los capitales que haya impuestos...y de las demás fincas rústicas y urbanas que sean consideradas como sus pertenencias y un presupuesto de los gastos de toda especie que cada convento haga en la actualidad.

Se aclaraba que:

se nombraran administradores de esos bienes...si llega el caso de que los rendimientos de dichas fincas fueran escasos que no basten para cubrir los gastos habituales del convento, se harán aquellos por cuenta del tesoro público y de parte de las mensualidades que los adjudicatario y redentores tienen que pagar al erario.(63)

(62) Jan Bazant, Op. Cit. Pág. 240

(63) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 499, Exp. 66/72

Bajo estas disposiciones, la monja capuchina Sor Angela Villasana (Teodora en el siglo) reclamó la dote de \$4 000.00 que estaban fincados, \$2 400.00 sobre la casa No.2 de la calle del Tesoro, propiedad de Francisco Salazar, y \$1 600.00 sobre la huerta "La Quinta" de Luis Monroy.

Francisco Salazar debía varios capitales cargados sobre sus propiedades: la hacienda de Bolaños, la casa No. 2 de la calle del Tesoro y el Mesón de Aspeitia, todos ellos redimidos, excepto el capital de \$2 400.00 que había dispuesto el jefe de hacienda de Querétaro, Francisco Ocampo, que quedara como parte de la dote de la religiosa Villasana. (64)

En cambio, Luis Monroy se había adjudicado la casa y huerta conocida como "la Quinta", del convento de capuchinas que había sido sacada a subasta pública el 10 de enero de 1863. Propiedad que le fue rematada en \$2 650.00. Con la exclaustación de las religiosas, explica Monroy, se aplicaron, el 28 de agosto de 1863, a la monja Villasana \$1 600.00, y \$791.00 a la dote de Sor Jerónima Lara, ambas religiosas de Santa Clara. De tal manera que Monroy no debía nada y del capital adeudado sólo le restaban al gobierno \$259.00 y \$25.90 de réditos vencidos. No obstante, para 1865, avalado por el decreto del 9 de mayo de Maximiliano, José María River declara, según ocurso del 19 de mayo, que ni la testamentaria de Salazar, ni el propietario Monroy habían satisfecho la dote de Angela Villasana. (65)

(64) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/10

(65) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/10

Las disposiciones de 1863 sobre las comunidades religiosas de mujeres fueron diestramente aprovechadas por los queretanos que eran dueños de bienes raíces gravados con capitales piadosos y de sangre. Apparently, la mayoría de las familias propietarias tenían familiares en los conventos. De esta manera, al disponerse que se les asignara una dote para su sobrevivencia, los propietarios buscaban favorecer a los miembros de su propia familia. Esta condición reducía la proporción de los capitales a redimir, y les evitaba el costo de los largos litigios y las pugnas sobre los intereses del capital. Esta fue la alternativa utilizada por Isidoro Alvarado, quien reconocía un capital de \$10 000.00, al convento de Santa Teresa y al Colegio de la Cruz, impuestos sobre la casa No. 3 de la calle del Biombo. Denunciado el capital por Eduardo Guillén el 15 de octubre de 1862, Alvarado estableció un acuerdo con el denunciante, de manera que le compró los derechos de adjudicación por \$180.00. Una vez adquiridos estos derechos, Alvarado consiguió, dice Alejo Marín, que los capitales se siguieran reconociendo "como parte de la dote de su hermana Cotela Alvarado exclaustrada de Santa Clara, pidiendo, además, que se señalaran otros \$2 000.00 para completar la dote".

(66)

Los propietarios también buscaban que los capitales gravados se asignaran a la manutención de religiosas, de manera independiente al parentesco, pues la asignación eliminaba el pago de la liberación. Trinidad Aranz, por ejemplo, que tenía gravada

(66) Informe de Alejo Marín sobre el estado de los capitales adjudicados, rendido el 11 de junio de 1869

la hacienda de Tlacote en \$15 000.00 a favor del Juzgado de Capellanías, fue autorizada para ceder este capital para la manutención de los monjas de Santa Clara. Estos acuerdos también solían venirse abajo por las decisiones tomadas desde el centro. En el caso de la Sra. Araniz, la decisión había sido tomada por el jefe de la oficina de hacienda de Querétaro, Angel Dueñas, no obstante, en México dieron marcha atrás a lo establecido y ordenaron que de ese capital de \$15 000.00 se desvincularan \$10 000.00 a favor de Alfonso Septién. (67)

En otros casos los denunciante y los propietarios llegaban a acuerdos privados para ceder "amistosamente" los derechos de los capitales denunciados, cuando estos correspondían a dotes de monjas. Este fue el caso de Joaquín Barasorda, quien reconocía un capital de \$9 464.00 que se reconocían sobre la casa No.13 de la calle del Biombo y sobre la hacienda los Cues. Capitales que habían sido denunciados por Ignacio Costera (había denunciado \$1 000.00 de la dote de la monja clarisa Mariana Nuñez). Costera, cedió sus derechos, sin transacción económica alguna para que el capital siguiera estando a favor de la religiosa clarisa.

En otras ocasiones los hacendados liberaban las capellanías de sangre que eran numerosas. Por ejemplo, Domingo Palacios, redimió durante la administración de Maximiliano, la capellanía de \$5 000.00 que disfrutaba la viuda de Helguero, capellanía fundada por Juana María Quintanar, y que se reconocía sobre la hacienda de Cazadero.

(67) Informe de Alejo Marín sobre el estado de los capitales adjudicados, rendido el 11 de junio de 1869.

La proliferación de las denuncias de los capitales que gravaban las fincas rústicas y urbanas acrecentó el deterioro que arrastraban algunas haciendas desde principios de siglo porque los denunciante de los bienes ocultos o piadosos exigían a los propietarios de los bienes, la liquidez de la que carecían desde 1830.

La misiva de la viuda de Juan F. Larrainzan del 28 de septiembre de 1865, cuando el agente de los bienes nacionalizados de Querétaro le cobraba en una sola exhibición el adeudo de \$336.00 que todavía debía su difunto esposo, es más que transparente sobre las condiciones económicas de algunos de los herederos de los hacendados. Habiendo reunido \$80.00 de los \$336.00 adeudados, asienta,

Es público y notorio que me encuentro en la mayor miseria y sin ninguna clase de recursos...solicita entonces, que se le admitan los \$80.00 que ha logrado recabar...supuesto que no hay bienes afectos al pago ni fondos para cubrir la deuda.
(68)

Parece claro que nadie tenía certeza, pese a los frecuentes informes que sobre el estado de los bienes nacionalizados exigía el centro, de la cantidad y monto de los capitales liberados. Los informes rendidos estaban incompletos por lo desordenado de las asignaciones. Sin embargo, el 15 de mayo de 1869, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitó un informe detallado de las redenciones realizadas sobre los capitales piadosos y de sangre, así como la especificación de las propiedades de las
(68) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 105/45

corporaciones religiosas adjudicadas. Alejo Marín respondió a esta solicitud el 11 de junio de 1869. Informe que detallaba las redenciones realizadas en Querétaro en los años 1861, 1862 y 1863. No obstante, Alejo Marín aclaró que:

la falta de antecedentes por una parte y el trabajo que demanda esta formación harán que no vaya en una sola noticia a la que se refiere la resolución de 15 de mayo...sino que sumariamente se manda lo que se adelanta hasta concluir. (69)

Como lo señalaba, durante el año 1869, Alejo Marín envió 5 noticias sobre las redenciones de los capitales piadosos en Querétaro. La primera, contenida en el informe del 11 de junio. La segunda, fue enviada el 22 de junio. La tercera el 20 de julio. La cuarta el 31 de julio y, finalmente la quinta, el 21 de septiembre.

Una síntesis de las cinco noticias enviadas por Alejo Marín en 1869 sobre la redención de los capitales piadosos, nos proporciona una idea, aún cuando no apegada a la realidad, sobre el monto a que podrían ascender los capitales gravados sobre las propiedades y las percepciones en efectivo (numerario), en Bonos del 20% del estado y en Bonos de la deuda nacional. De esta manera según el cuadro No. 1, De 1861 a 1869, fueron liberados \$557 857.71, de cuyo monto el erario recibió únicamente \$191 211.15, según la suma de lo recibido en efectivo y en bonos del Estado y de la deuda nacional.

Cuadro No.1

(69) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/87

Resumen de los informes rendidos por Alejo Marín en 1869
Sumas acumuladas

Fecha Informe	Capitales	Numerario	Bonos Edo.	Bonos/deuda N.
11-6-869	114 683.21	17 574.67	7 219.00	49 009.87
22-6-869	207 983.67	24 441.93	9 214.94	60 783.81
20-7-869	242 283.67	26 469.93	9 234.98	62 383.81
31-7-869	372 242.04	40 875.39	20 873.60	123 452.21
21-9-869	557 857.71	45 594.95	20 906.80	124 706.40

Fuente: Archivo General de la Nación, Bienes nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/87

No obstante, es evidente que los datos proporcionados por Alejo Marín estaban incompletos. Por otra parte, gran parte de los capitales por él informados corresponden a las fincas urbanas que reconocían capitales piadosos. Y si bien reporta la liberación de algunas haciendas y ranchos, la información proporcionadas sobre éstas es bastante limitada y a veces poco confiable. El mismo Alejo Marín en la quinta noticia rendida el 9 de septiembre, tuvo que indicar, por ejemplo, que la información aclaratoria (nota No. 71) sobre el proceso de liberación del capital que gravaba la hacienda de San Pablo, ubicada en la jurisdicción de Guanajuato, no era correcta.

Tomando como modelo el informe de 11 de junio, vemos que fueron 9 los censatarios que en conjunto redimieron los capitales que ascendían a \$114 683.21. Entre los más fuertes se destaca Manuel Acevedo que desvinculó un capital de \$40 783.21 gravado sobre diversas fincas.(70), y Trinidad Araniz, que liberó,

- (70) \$1,600.00, gravados sobre el rancho Arroyohondo (Santa Clara)
 2,000.00, gravados sobre el rancho Arroyohondo (Capuchinas)
 20,000.00, gravados sobre la H. de Bravo (Santa Clara)
 1,183.29, gravados sobre la H. de Bravo (3a.Or.S.Fco.)
 3,000.00, gravados sobre la H. de Bravo, (Juzgado

\$38 500.00 gravados sobre las haciendas de Tlacote y Mompaní, y sobre dos casas situadas en la ciudad de Querétaro. (71) Les siguen Isidoro Alvarado que desvinculó un capital de \$10 000.00 que estaban gravados sobre la casa No. 3 de la calle del Biombo a favor \$8 000.00 del convento de Santa Teresa y \$2 000.00 del colegio de la Cruz. José Borja, desvinculó el capital de \$9 000.00 que estaban gravados sobre el rancho de Carranza y la casa No. 15 del Hospital, a favor de Santa Clara. Cipriano Angeles redimió \$2 000.00 que gravaban la casa No. 11 del Hospital y la capellanía de la testamentaria de Josefa Pérez con valor de \$4 000.00. Carlos C. Ahedo, liberó la capellanía de \$4 000.00 que Sabás Antonio Domínguez cargaba sobre el rancho de las Gascas en jurisdicción de Celaya. José María Araniz liberó la capellanías de \$3 000.00 de la casa situada en la plaza y Margarita Riestra un capital de \$3 000.00 de la casa No. 10 de la calle de San Felipe. Finalmente, José María Aguilar, liberó 2 casas, la No. 1 de Montesacro y la No.13 del Carmen.

Capellanías)

4,000.00, gravados sobre el R. de Amaranto (Santa Clara)
 5,000.00, gravados sobre la H. de Casa Blanca (Santa Teresa)
 2,000.00, gravados sobre la H. de Casa Blanca (C. del Santísimo. Méx.)
 2,000.00, gravados sobre la H. de la Cueva (3a. Or. S. Fco.)
 Alejo Marin aclara que de los \$20,000 que gravaban la hacienda de Bravo a favor de Santa Clara, se tomaron \$8,000.00 para dotes de Monjas.

- (71) La casa No.17 de la calle del Hospital debía \$4,000.00 a Santa Clara y \$3,000.00 en favor del convento del Carmen. La hacienda de Mompaní estaba gravada con \$7,000.00 a favor del convento de Capuchinas. La hacienda de Tlacote, estaba gravada con 3 capitales de \$4,000.00 y uno de \$3,000.00 a favor del Juzgado de Capellanías. También gravitaba uno de \$8,000.00 a favor del Oratorio de Allende. La casa de la Plaza de Guadalupe, tenía gravados dos capitales. Uno de \$1,000.00 a favor de la Congregación de Guadalupe y otro de \$500.00 a favor de la Archicofradía del Cordon.

Es decir, en esta primera noticia, unicamente se proporciona información sobre las haciendas Mompaní, Tlacote, de Bravo, Casa Blanca, y La Cueva y sobre los ranchos Arroyohondo, Amaranto, Carranza y el rancho de los Gascas de la jurisdicción de Celaya.

En la segunda noticia (22 de junio de 1869) se mencionan la hacienda Los Cues, Dolores, El Sauz, La Labor, San Miguelito, San José el alto, Lodecasas, Venega y el Colorado. Además sobre el rancho de Marroquín, y el de Dolores. En la tercera noticia solamente se mencionan: las haciendas de Balvanera, la de Charcas y el rancho viejo de Acámbaro. En la cuarta noticia, la hacienda del Ciervo, Lodepeña, Chichimequillas y huerta de Andrade. En la quinta noticia: Montenegro, Santa Catarina y Buenavista, la de San Pablo (de la que no se explica su situación) la de la Era (manifiesta capitales que no eran los que se denunciaban) y la de Amoladeras.

El informe de Alejo Marín es rico, en las aclaraciones reportadas sobre los descuentos hechos. En las operaciones de estos años los ingresos del erario son bastante inferiores al monto de los capitales gravados. Esta situación se debía a varias situaciones que aclara Marín. Por ejemplo, los \$15 000.00 que gravaban la hacienda de Tlacote a favor del Juzgado de Capellanías, la jefatura de hacienda que estaba a cargo de Angel Dueñas, los había destinado para gastos del convento de Santa Clara. Sin embargo, el ministro de hacienda ordenó que se desvincularan de ese capital \$10 000.00 a favor de Alfonso Septián y en tal virtud, los \$4 000.00 restantes se redimieron en los términos que manda la ley. En este caso el fisco perdió, dice

Alejo Marín, \$400.00 que se descontaron de intereses a razón de un 25% y además se perdieron los réditos vencidos. También se perdían recursos por los descuentos que hacía el gobierno local. Por ejemplo, a la Sra. Trinidad Araniz se le descontaron \$400.00 y los réditos vencidos. También se perdía por los premios concedidos a los que hacían la declaración de los capitales y anticipaban el pago. A Manuel Acevedo se le descontaron \$320.00 y los intereses que adeudaba del capital de \$2 000.00. En la redención del capital que gravaba a Chiquimequillas, \$83 333.37, se perdieron dice Marín, \$13 133.37 de un descuento a razón de un 40% sobre el valor de las 2/5 partes, además de los réditos.

Se puede concluir que a pesar de la oposición de la sociedad queretana y del predominio que todavía ejercía la Iglesia entre 1860 y 1869, amén de los manejos administrativos que otorgaban los bienes a discreción del gobernante en turno, durante ese período muchos propietarios de la tierra fueron afectados por las disposiciones liberales y las imperialistas que obligaban la redención de los capitales piadosos. Sin embargo, la aplicación de las leyes de reforma en el estado afectó con mayor intensidad los bienes urbanos de la Iglesia. Bienes que la Iglesia, a diferencia de la política seguida con sus propiedades rurales que habían sido traspasadas o vendidas desde antes de la emisión de las leyes, todavía mantenía en 1860 en su propiedad. Por otra parte, la ley sobre libertad de cultos (72) que había liberado a

(72) Ley sobre libertad de cultos. Precedida de la nota con que fue circulada por el ministerio de Justicia. México, Imprenta de Vicente García Torres, Calle de San Juan de Letrán, No. 3, 1861

las religiosas de sus votos y ordenado la clausura de los conventos, permitió la venta pública de estos edificios y de sus propiedades que, habían pasado al dominio de la nación.

3. La adjudicación de los bienes urbanos

Los procesos de enajenación de las haciendas, las denuncias de los capitales que hacían "los extranjeros" que no temían ser mal vistos por la sociedad queretana y los liberales que veían la oportunidad de recuperar los créditos hechos al gobierno; amén de la proliferación de los especuladores de la época, convertidos en diestros hombres de negocio, fue limando la renuencia que todavía tenía la clase media queretana (los pequeños comerciantes, los administradores y arrendadores de los ranchos y las haciendas, los operarios de las fábricas a su vez dueños de telares familiares) en adquirir los bienes urbanos que arrendaban.

Los arrendadores de los bienes urbanos de la Iglesia, presionados por los denunciadores de los capitales ocultos, que andaban a la caza de cuanto bien podían, "descubrir", a abandonar sus casas habitación pese a la vigencia de los contratos de arrendamientos establecidos con las corporaciones religiosas, empezaron a utilizar los recursos jurídicos que les permitían obtener el reconocimiento de su justo derecho a vivir en las casas arrendadas. Este primer paso, fue seguido por las consultas hechas a otros arrendadores que estaban en la misma condición que ellos y entre los sacerdotes que se sabía habían venido a ser propietarios de los bienes de la Iglesia.

Sin embargo, para muchos fueron inevitables las crisis de conciencia. Cuando las leyes liberales los obligaban a redimir los bienes que rentaban a las corporaciones religiosas, los feligreses sentían que caían en pecado mortal. Situación que no podían sostener, so pena de condenarse eternamente. Por eso buscaron formular arreglos y negociaciones con los pastores encargados de estos casos para satisfacer los conflictos de conciencia -salvar su alma-, y para, a la vez, adquirir los bienes. El carácter que asumieron estos arreglos con la Iglesia suscitaron una gran falta de claridad sobre quien era el dueño legítimo y quien el real de la propiedad.

El dilema de Guadalupe Paniagua quien desde 1850 arrendaba la casa que formaba esquina con la calle de Cornelias y callejón del Regocijo, que pertenecía a la cofradía de la Lámpara del Divisimo en la parroquia de Santa Ana de Querétaro, así como la resolución tomada por la mitra y el recurso jurídico a que se recurre para avalar la compra de los bienes religiosos por los arrendatarios católicos, son muy esclarecedores sobre la condición socio-cultural que rodeó a la aplicación de las leyes de reforma:

1) Los pequeños comerciantes (esta era la ocupación de Paniagua) se sentían atemorizados por las amenazas y condenas lanzadas por la Iglesia contra los compradores de bienes eclesiásticos. (73) Pero también se sentían atraídos por la oportunidad que se les ofrecía de adquirir los bienes que rentaban. El dilema lo resolvieron, aconsejados por los curas

(73) Manifestación de los obispos del 30 de agosto de 1859.
Op.Cit.

párrocos, cumpliendo los requisitos legales que les permitían, jurídicamente ante la ley, ser los propietarios de los bienes, y firmando acuerdos privados con el clero, mediante los cuales reconocían a la Iglesia su legítimo derecho como poseedora. La costumbre y el tiempo, iría, día a día, dándoles fuerza a los nuevos propietarios para liberarse del compromiso "moral" adquirido con la Iglesia.

2) A sabiendas que la resolución podría serles perjudicial pero con la esperanza de que la medidas les permitiera salvar algunos bienes, la Iglesia permitía y estimulaba la formulación de esos contratos privados, avalada por sus propios cánones y normas morales.

3) Una vez denunciadas las propiedades los denunciantes tenían en sus manos una doble oportunidad: hacerse de los bienes de la Iglesia a un costo muy por debajo de su valor o vender y ceder sus derechos por cantidades que les representaban ganancias económicas considerables. Esta práctica dió lugar a la especulación de los bienes y también a los ya conocidos "largos litigios".

El contrato de arrendamiento de Paniagua sobre la casa de "su morada", había sido renovado en 1856 por el mayordomo de la cofradía, Amado de Jesús Herrera. Contrato que, escriturado por siete años, vencía en 1863. Publicadas en Querétaro las leyes de reforma, la casa fue denunciada en 1861 por Joaquín Luna, quien en 1862 cedió sus derechos a Victoriano Guerrero. Guerrero, como adjudicatario del erario, redimió el capital de \$500.00 y exigió la desocupación inmediata por al arrendador Paniagua. Paniagua

defendió y ganó sus derechos sosteniendo que cuando él firmó el contrato de arrendamiento todavía no se publicaban las leyes de reforma en Querétaro y por tanto sus derechos a vivir en dicha casa estaban asegurados.

A pesar de que había ganado el juicio, Paniagua sabía que tenía que resolverse a adquirir la casa para no ser lanzado de ella por el adjudicatario. Con esta presión, el 18 de noviembre de 1861, escribió a los señores gobernadores de la mitra en México, solicitando su parecer sobre si incurria en censura o gravaba de algún modo su conciencia si hacía uso de sus derechos como arrendador y liberaba a su nombre la casa que ya le disputaba como subrogante Guerrero. Abogando a su favor, Paniagua aclaraba a la mitra, que,

varios eclesiásticos de mejor nota y representación de esta ciudad opinan que ningún gravamen de conciencia tengo rescatando la finca, puesto que mi fin es comprarla sacrificando \$200.00 en favor de la congregación pues aunque disimuladamente sea para mí la propiedad yo la cederé luego a la cofradía haciéndole entrega del total de documentos de adjudicación sin reclamar un centavo de lo que haya gastado. (74)

Manifestaba de paso,

El señor cura Don José G. Perrusquía representante de aquella corporación ya me tiene prestado su consentimiento por el rescate de la casa.

Paniagua aseguraba a la mitra, que ningún dolo a mala fe lo animaba a rescatar la casa sino, "sólo salvar su conciencia y los intereses de la Iglesia y el suyo propio".

(74) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 494, Exp. 1

El adjudicatario Guerrero, le había ofrecido la casa a Paniagua en \$200.00. Sin embargo este no quería resolver a comprarla no solo por temores de conciencia sino también, porque en la sociedad queretana eran mal visto y perseguidos todos aquellos que accedían a rescatar los bienes de la Iglesia. Aún en 1866, José María Siliceo, quien veía la gran oportunidad de enriquecerse mediante la especulación de los bienes eclesiásticos, sabía que tenía que aguardar mucho tiempo para poder realizar los bienes nacionalizados de la Iglesia que había adquirido en condiciones tan ventajosas:

Si la compañía (compradora de bienes que había formado) llega a tener algunas utilidades será con el transcurso del tiempo y mediante los sacrificios y trabajos consiguientes a operaciones de por sí difíciles y hasta peligrosas, por la oposición que hace todavía el ciego espíritu de partido a las personas que la efectúan aunque sea de la manera más legal (75)

Si un hombre con la fuerza económica y apoyo gubernamental como el que caracterizaba a Siliceo se atemorizaba frente a la reacción posible del pueblo queretano, se entiende la afirmación de Paniagua al asegurar que no podía adquirir la casa a menos que contara con la aprobación eclesiástica, "por la reputación que innmercidamente tengo ante el público".

El Dr. José María Díez Sollano, a quien la mitra había remitido la consulta de Paniagua definió:

El caso puede resumirse al de redimir la injusta vejación que según la instrucción 93 de Benedicto XIV y siguiendo la doctrina común, es lícito moralmente hacerla aún en el gravísimo caso de

(75) Idem.

beneficio (76)

Con anterioridad, Díez Sollano había preguntado a la Mitra ¿Es lícito a los que legítimamente habían comprado a la Iglesia alguna casa o finca y se veían amenazados por los rematadores el componerse con estos? Los consultores de la Mitra habían dicho que en estos casos era lícito. Basado en este antecedente, Díez Sollano sugiere a la Mitra que se le responda a Paniagua,

que no incurre en pecado ni en censura si se restringe a redimir la injusta vejación que dice le amenaza valiéndose para ello de comprar al adjudicatario los derechos que pretende tener a la finca en cuestión bajo el concepto que expresa el mismo Paniagua de ponerlos a disposición del legítimo dueño que es la cofradía. (77)

Para 1865, cuando se emiten las nuevas disposiciones dadas durante el Imperio de Maximiliano, Paniagua aparece como legítimo propietario de la casa. ¿lo era?.

(76) Idem.

(77) AGN, Bienes Nacionalizados, Exp. 72/121. Subrayado en el original. Las dudas sobre si era lícito o no redimir los bienes y los capitales "para salvaguardar los bienes de la Iglesia, se fundamentaban en la Manifestación de los obispos de 30 de agosto de 1859 ya citada. Entre las disposiciones de los obispos en esta fecha, enardecidos contra las disposiciones de Juárez y considerando que los fieles no se someterían a las leyes, estaba la que asentaba: "Para precaver en los fieles los peligros de una falsa conciencia, les hacemos saber que por ningún motivo, ni AUN EL DE SALVARLE A LA IGLESIA SUS BIENES, les es lícito cooperar al cumplimiento del decreto dicho, ni entrar en los arreglos que propone, ni aceptar las conveniencias que ofrece: que LA IGLESIA REPELE COMO COSA INDIGNA ESTA FALSA PIEDAD, y prefiere sobre la conservación de sus intereses la inmunidad de sus principios y la pureza de su doctrina". Op. Cit. Pág. 65. Mayúsculas en el original. Es evidente, y el juicio de Paniagua lo demuestra, que al comprobar la inutilidad de sus condenas procuraron arreglarse privadamente con los arrendadores.

Muchos fueron los liberales que se acogieron al decreto del 4 de diciembre de 1860 y al del 5 de febrero de 1861, que intentó regular las diversas legislaciones locales (como la diciembre de 1860 en Querétaro) y la "rica variedad de casos" que bajo las atribuciones extraordinarias concedidas a los gobernadores se daban. Con motivo de la Ley del 5 de febrero de 1863, se publicó en el estado una lista de los bienes nacionalizados. Francisco Díez Marina, quien manifestó por la casa No.20 y la huerta contigua a la calle de Lepe, señalaba:

en el mes de septiembre de 1863 tuve conocimiento de una lista de casas que pertenecían a bienes nacionalizados, entre ellos estaba la marcada con el No. 20 y la huerta anexa de la calle de Lepe, que pertenecía a la parroquia de Santiago. Casa valuada por el perito agrimensor Francisco de Paula Meza en \$662.00. (78)

Hubo ventas de bienes eclesiásticos poco claras. Como fue el del convento de Santa Clara vendido a los generales Pedro Hinojosa y Porfirio García de León en 1862 según se desprende de la carta enviada por José María Siliceo, a nombre de los compradores, al ministro de relaciones y Gobernación el 6 de noviembre de 1862 a fin de solicitar la devolución de los coros para disponer de ellos "como local legítimamente adquirido".

Conforme a la escritura pública que presento se les vendió

(78) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp.105/52. Francisco Díez Marina se encuentra entre los adjudicatarios a quienes se les habían recogido los bienes, negándoles el derecho de adjudicación por la salida de Juárez de la ciudad de México. Propietario del que se quejaba el agente de bienes nacionalizados de Querétaro porque: "ni se conforma ni comprueba los pagos hechos"

el ex convento de Santa Clara con todo lo que comprende exceptuándose solamente la iglesia y sacristía y como en ellas no está comprendido el coro del cual se les dió posesión a mis representados y cuyas llaves entregó el dependiente de aquellos señores al padre capellán para una función religiosa...

Como el capellán se negaba a devolver los coros, Siliceo informa que los generales han dispuesto cederle a la Iglesia la mitad de los coros y así contribuir "a la decencia del culto en el templo de Santa Clara". (79)

La magnitud de las denuncias hechas entre 1863-1865, ponían en aprietos a los dueños de las casas cargadas con varios capitales aún cuando estos gravámenes fueras por cantidades de escaso valor, porque tenían que negociar con los diversos denunciantes de los capitales. Ramón Ramírez, dueño de la casa que hacía esquina con las calles de la Enseñanza y la Laguna, tuvo que negociar con Eduardo Guillén que denunció el capital de \$200.00 que reconocía su casa al convento de Santa Teresa. También con Ramón Barragán, que había denunciado el capital de \$800.00 que reconocía al convento de Carmelitas y los \$400.00 que reconocía a la Congregación de Guadalupe denunciados por la compañía de Siliceo, a través de Gregorio Cortés. (80)

Algunos, como Cosme Varela, aprovecharon el decreto de Arteaga del 4 de diciembre de 1860, reclamando en enero de 1861, a nombre de sí mismo y de la sociedad que representaba,

las supuestas casas ubicadas en Querétaro por haber desistido de sus derechos las personas a las

(79) AGN, Gobernación, Caja 486, Exp.7

(80) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/58; 105/59; 105/60

que se habían adjudicado con arreglo a la ley de junio de 1856: la No.8 de la calle de los Infantes, \$3 824.00. La No.9 de la calle de Lepe (en realidad el adjudicatario de esta casa había vendido sus derechos a otro denunciante de bienes). Las número 1 a 10 de la calle del Carmen \$12 400.00; la número 8 de la calle de los Locutorios \$4 193.00. La No. 2 de calle de las Ratas \$300.00. De la No. 1 a la No. 4 de la calle de Lepe \$1 800.00. La casa sin número de la calle de la espada \$966.00. Un solar en la calle de Ortega \$90.00 (81).

También fue evidente que muchas familias, sobre todo las aristócratas, esperaron hasta el último momento para denunciar los capitales que gravaban sus bienes. Ocasión que sintieron llegada cuando se emitieron las leyes de 1863 y la de 1865. Período en que proliferaron las denuncias de los bienes de la Iglesia en Querétaro.

Francisco de Paula Meza manifestó el 19 de mayo de 1865 el capital de \$4 000.00 que reconocía la casa No. 16 de la calle del Hospital, como dote de Manuela Gómez, profesa del convento de Santa Teresa (en el convento se llamaba María Jesús de San Bernardo). Religiosa que era hermana de la esposa de Paula Meza, Francisca Gómez y Palacios. La madre de ambas, Manuela Gómez y Palacios, había fundado la escritura de imposición el 10. de mayo de 1833, para dote de su hija religiosa. Disposición que había sido respetada en 1863, cuando Ignacio Costera denunció el capital, negándosele el derecho de subrogación. (82)

Francisco de Paula Meza, quien era mayordomo de las monjas clarisas, se vió envuelto en varios conflictos sobre los bienes

(81) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/72

(82) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/64

nacionalizados, por su renuencia a denunciar los capitales ocultos. Esta oposición de los aristócratas generaba confusiones. Por ejemplo, el caso de Gregorio Cortés que se había subrogado un capital de \$3 500.00 que gravaba la casa No. 5 de la calle del Hospital a favor del Beaterio de Santa Rosa. La censataria de este capital era Amada Rodríguez. No obstante, al presentarse Cortés a cobrar el capital a la censataria de acuerdo al decreto de Arteaga de 24 de diciembre de 1860 que en su art.2 prescribía: "los denunciantes que se subrogen en lugar del erario, pueden exigir de los censatarios que no hayan hecho sus manifestaciones...los capitales de plazo cumplido, pagando al gobierno las mensualidades adelantadas", (83) se le informó que Francisco Ocampo había asignado ese capital a Sor Jacinta Pérez en 1863. Religiosa que también tenía asignada una dote de \$4 000.00 que estaba gravada sobre la hacienda del Batán que pertenecía a Margarita Ruiz de Domínguez. Propietaria que estuvo pagando puntualmente los réditos del capital a Francisco de Paula Meza. En estas condiciones Paula Meza venía a ser defraudador de la hacienda pública. (84)

Años más tarde, en 1865, muchos fueron los conservadores que tomaron al vuelo la ley del 29 de febrero y su reglamento del 9 de marzo de 1865, dictada por el Emperador Maximiliano de Habsburgo. Ley que obligaba la manifestación de los conocidos capitales ocultos para su redención.

Sin embargo, la legislación de Maximiliano fue aprovechada

(83) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 499, Exp. 66/61

(84) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 499, Exp. 66/61

intensamente, más que por los conservadores, por los especuladores que no habían reconocido la oportunidad abierta por los decretos de Arteaga de 1860, ni habían podido sacar todo el provecho posible a la ley del 5 de febrero de 1861.

Compradores individuales como Ramón Barragán y Joaquín Espino Barros, originario éste último de San Juan del Río, tendieron a acaparar los bienes de los conventos que habían sido tasados a muy bajo costo.

En algunos casos la subrogación era directa como fue la denuncia del capital que se cargaba sobre la casa No. 4 de la calle de la Laguna, cuya redención se había hecho en 1861 (85), y la adjudicación de la casa en donde estaba el curato de San Juan del Río. Casa que había sido ocupada por el Ejército francés hasta enero de 1865. Para garantizar sus derechos, Espino Barros informaba que al tomar posesión de esta casa, "la había tenido que reedificar por encontrarse en un estado de total deterioro". En otras ocasiones, las subrogaciones eran indirectas, comprando los derechos a los adjudicatarios originales. Por ejemplo, Joaquín Espino Barros compró a Leocadio Guillén la subrogación del capital que reconocía la casa No. 9 de la Calle de Lepe, a la cofradía del Señor de la Humildad. (86)

La denuncia de los bienes urbanos de la Iglesia vino a ser una actividad económica familiar importante. Padres e hijos se dedicaban a la tarea con el mismo empeño que las familias de artesanos se dedicaban a sus telares. Guillermo Espino Barros,

(85) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/57

(86) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/53

padre de Joaquín, denunció el capital de \$2 000.00 que había dejado a la parroquia de San Juan del Río, Juana María Gutiérrez. Capital gravado sobre la casa de la esquina de la plaza principal y calle de los Infantes. A la muerte de su padre, Espino Barros hijo heredó, como albacea de la testamentaria paterna, los derechos a esta subrogación. (87)

Estos negociantes de bienes ocultos compraban "sin ver" los bienes, llevándose en ocasiones desagradables sorpresas. Cuando Joaquín Espino Barros fue a reconocer la casa No. 4 de la calle de Lepe, valorada en \$800.00, que se había subrogado informó a la oficina de rentas de Querétaro que la había encontrado "toda arruinada, por lo que el valor del terreno y lo poco que hoy existe, puede valer cosa de \$200.00". (88)

Estos compradores individuales, liderados por avezados hombres de negocio aceleraron la constitución de compañías compradoras de bienes nacionalizados, en orden a tener capacidad económica y poder concentrar la compra de las propiedades urbanas que era en donde predominaban los arriendo de bajo valor a la Iglesia. Arriendos que estaban, en su mayoría, en manos de familias de escasos recursos, mismas que tendrían serias dificultades para cumplir con los pagos que estipulaba la ley.

Vale aclarar, en honor a la administración del Imperio francés, que los empleados del consejo departamental se rehusaban a satisfacer las demandas de las compañías compradoras, por más que sus propuestas, por pobres que fueran alimentarían las

(87) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/67

(88) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 496, Exp. 105/61

exhaustas arcas del Imperio, argumentando que si se respondía favorablemente a sus ambiciosas solicitudes, se desvirtuaría del propósito que se perseguía: dotar de bienes a los arrendadores de la Iglesia, a las clases sociales más desprotegidas de la sociedad.

Una de estas compañías compradoras de bienes, fue la integrada por José María Siliceo en 1866. Sociedad Anónima, compuesta por Joaquín Rubio, Ignacio Costera, Gregorio Cortés (en representación de José María Siliceo) e Ignacio Castro por sí y en representación de Francisco LLantada (89), que se proponía comprar parte de la propiedad nacionalizada en Querétaro y Celaya. Siliceo quería que el gobierno local de Querétaro lo considerara y lo reconociera como el exclusivo y único comprador de bienes en la región, argumentando que,

por razones de partido y de conciencia errónea nadie quiere efectuar espontáneamente operaciones de nacionalización. Las que se han hecho desde la publicación de la ley a fines de 1860 hasta la fecha las han verificado personas foráneas o extranjeras o los mismos interesados por fuerza mayor y temiendo sufrir males superiores si no acataban la ley.

Siliceo aseguraba que el gobierno local no encontraría compradores para los bienes y que por lo tanto, ganaría enormemente si aceptaba la propuesta que él le hacía. La propuesta era a todas luces favorable para la compañía compradora de bienes, que fungiría como denunciante, comprador, asignador de adjudicatarios e investigador de los bienes ocultos. Funciones

(89) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 495, Exp. 72/122

que le garantizaban, si el gobierno aceptaba, la adquisición de los bienes en un 40, 50 y hasta en un 60% de su valor.

Si puestos los bienes en subasta pública había postores, la compañía pedía el derecho al tanto y la adjudicación por las 2/3 partes del valor pagaderos en 18 mensualidades sin rédito alguno. Si la compañía denunciaba bienes ignorados por el gobierno y no se presentaban compradores se le adjudicarían con un 50% del valor, en las condiciones antes señaladas (18 meses sin réditos) más el descuento de las 2/3 partes, y un 16% del valor para indemnizar los gastos que tuvo que hacer la agencia para descubrir los bienes. Siliceo aclaraba en su propuesta, que si no le interesaban los bienes descubiertos no cobraría nada por haberlos encontrado. La compañía se interesaba de manera particular en los lotes que se formarían con los terrenos de los conventos desocupados. Si daba la casualidad que se presentaran personas y corporaciones que alegaran derechos sobre los bienes nacionalizados adquiridos por la compañía, era preciso que el gobierno se comprometiera a sanear la venta por fallo judicial...si aún así, se tuvieran que devolver los bienes, el gobierno le descontaría a la sociedad el importe respectivo.

En su propuesta, Siliceo aseguraba que la compañía trabajara sin posibilidad de pérdida y con el máximo margen de ganancia. Preveía en la cláusula 8 de la propuesta, la constitución del gobierno local como aliado, siempre dispuesto a ejercer la acción fiscal coactiva en favor de la empresa y también efectivo defensor en orden a proporcionar a la compañía, la "protección necesaria".

La propuesta de Siliceo no fue aceptada "porque era contraria

a las disposiciones de la ley del 26 de febrero de 1865 y por ser algunas de sus condiciones ruinosas para el erario". Sobre todo, los miembros del Consejo Departamental se oponían al propósito de Siliceo de no pagar réditos. También a sus condiciones de compra que nulificaban el propósito de la ley de vender las propiedades al mejor postor. Sobre todo, si se concedía a Siliceo su deseo de concentrar la compra de las propiedades, se vendría por tierra el propósito fundamental de la ley:

procurar que la propiedad se reparta en cuanto fuera posible

De manera independiente a esta oposición formal, la compañía fundada por Siliceo adquirió bastantes bienes nacionalizados, contando, además, con la ventaja que le proporcionaba conocer, con todo apego a la verdad, el valor real de los bienes de la Iglesia, puesto que Siliceo era evaluador oficial del gobierno. Por ejemplo, en mayo de 1866, Siliceo entregó "el avalúo y los planos correspondientes a 86 fincas comunes y a cinco conventos". Entre los conventos evaluados por Siliceo estaban: Santa Teresa, San Francisco, Santa Clara, El Carmen y San Felipe. (90)

A pesar de la certeza de Siliceo en asegurar que la sociedad queretana no se interesaría en obtener los beneficios que redituaban las leyes de nacionalización, si hubo bastantes operarios queretanos que, inmersos entre los especuladores, se acogieron a la Ley del Imperio. Propietarios que por las

(90) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 494, Exp. 1

vicisitudes políticas del período habían sido despojados de sus bienes, según se desprende del ocurso enviado por varios vecinos de la ciudad de Querétaro, el 8 de marzo de 1865.

Nuestros contratos se celebraron después de la salida del gobierno federal de México esto dió lugar a que se nos aplicara por la prefectura política los preceptos de la ley de 23 de julio de 1863 sin tener en consideración que dicha ley se promulgó en este lugar (Querétaro) seis meses después de haber sido consumados los citados contratos. En consecuencia se nos recogieron las fincas y lotes y con ellos los títulos en virtud de los cuales habíamos obtenido la adjudicación así como los productos (las rentas de las casas) de manera que desde entonces se nos privó de un justo derecho...Más como estos males están remediados con el decreto de 8 de mayo expedido en Talapilla y sus resultados han comenzado a verse manifestamos se sirva mandar se mande la posesión que perdimos y se nos exhiban las rentas que han producido esas rentas en todo el tiempo que ha transcurrido desde que se recogieron hasta la publicación de la ley de 26 de febrero.

4. Balance de una década

En 1869, la situación política y cultural de la sociedad queretana se había modificado radicalmente. La Iglesia para entonces había perdido parcialmente el control social de la población y tanto los operarios queretanos como la clase aristocrática sin vínculos morales y religiosos pudieron adquirir las casas del clero nacionalizadas y denunciar los capitales piadosos que se cargaban sobre muchas propiedades urbanas. Por ejemplo en el Estado general de las operaciones de redención realizadas de acuerdo a las leyes del 9 y el 10 de diciembre de 1869, habían sido adjudicadas 44 casas a diferentes personas. En

dicho informe unicamente aparecen cinco redenciones de capital una sobre el rancho de Neri y la casa No. 37, otra sobre la casa denominada de Sotelo, la subrogación sobre la casa letra Y, la casa No. 5 y la quinta correspondiente a la casa de Eumeterio Cruz. Es decir, que con excepción del rancho de Neri, con las transacciones realizadas de acuerdo a las leyes emitidas en diciembre de 1869 fueron repartidas 45 casas.(91)

Las transacciones sobre los bienes urbanos realizadas entre 1865 a 1869, a diferencia de la primera época de aplicación de las leyes, tuvieron un caracter netamente comercial y distributivo que, sin duda, revitalizó la economía de la entidad.

Se puede concluir que la información sobre los bienes rurales nacionalizados hasta 1869 caótica y anárquica, amén de la aplicación de las leyes de Maximiliano que incrementaban el desorden y la dispersión, hizo posible que muchos ranchos y haciendas gravados con capitales piadosos no fueran afectados durante estos años. Posteriormente, con la República restaurada, se efectuó una revisión exhaustiva de los expedientes de nacionalización a fin de dar por concluido un proceso que llevaba tantos años de pugnas y dificultades. En este entonces, 1869, la revisión realizada estimuló la voracidad de los administradores públicos que intervinieron activamente en la formulación del marco jurídico constitucional que les garantizara el control económico y político de la entidad.

Para los queretanos en 1870 era transparente el fracaso de las aspiraciones políticas de los conservadores y su Imperio. La (91) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/87

sociedad en pleno arrastraba con dolor y rabia el sitio de la ciudad y la escena histórica del cerro de las campanas. También tenían claro la derrota y la debilidad de los liberales y su República, que no podían levantar el país que deseaban. Les pareció entonces que había que olvidar esas décadas de desastres y reiniciar la historia en donde la habían dejado de escribir las familias aristocráticas del lugar: en 1821, y concentrar el mando de la entidad en una sola persona: el ejecutivo del estado. Sin temores agazapados, los queretanos buscaban reforzar la soberanía estatal que diera mayor libertad de acción a la clase dominante queretana. El proyecto de la Constitución local de 1868 no ocultaba esta tendencia:

El constante cambio de instituciones políticas ha hecho que los estados pierdan la conciencia de su soberanía y que con el gobierno general se despierten tendencias centralizadoras; por ello vemos que las leyes que se dan con el carácter de generales, traen muchas veces su parte reglamentaria y que esta pugna casi siempre con las constituciones particulares de los Estados. La Ley que estableció el registro civil, la guardia nacional, las electorales, son una prueba de lo que decimos (92)

Los legisladores queretanos encargados de elaborar este proyecto de Constitución (Ángel María Domínguez e Hipólito A. Vieytes) no dejaban ningún resquicio por donde se pudiera obstaculizar o detener el propósito de la clase dominante después de la tragedia de 1867: recuperar sus propiedades, acrecentar su riqueza y diversificar las actividades productivas. El proyecto

(92) Proyecto de Constitución... de 23 de noviembre de 1867, Pág. VII

de 1867 ampliaba considerablemente las facultades del Ejecutivo en contra del Congreso, para evitar la intervención o manifestación del "fanatismo público" y el "celo exagerado de sus representantes", que de cuando en cuando se abrían camino en la legislatura local. Los diputados Vieytez y Domínguez, argumentaban, con ánimo de que no quedara duda en nadie:

En la marcha pública, hay ocasiones en que es preciso sacrificar un poco de libertad para asegurar el resto; los congresos suelen pagar su tributo al fanatismo público y tomar medidas que perturbarían la paz; es preciso en tales casos que la mano del Ejecutivo esté armada para defender al pueblo contra el celo exagerado de sus representantes. Los congresos...pueden legislar libremente y algunos de sus decretos chocan abiertamente con las costumbres del pueblo, o perjudican de alguna manera la buena organización o marcha del estado. ¿Será posible exigir al Ejecutivo que él mismo coadyuve a un mal cuando él será responsable si tal sucede? (93)

Hoy a más de un siglo de distancia parece claro: el proyecto de desarrollo queretano a partir de 1870 certificaba el deseo y la voluntad social de olvidar el pasado inmediato (94) por ajeno y

(93) Idem. Pág. XI

(94) El Diario de Debates de 5o Congreso Constitucional de la unión, Tercer periodo de sesiones, Imprenta del gobierno de Palacio, México 1870, inscribe la larga intervención del Sr. Menocal a favor de la amnistía y asienta el deseo general de perdón y olvido y demanda una decisión pronta "sobre la suerte de los mexicanos que tuvieron la desgracia de tomar parte más o menos grande en el gobierno del llamado Imperio. Después de la reseña por Menocal hecha sobre los grandes triunfos de la República, señala que, "los pueblos sedientos de paz y de orden, no pensaban más que en hacer desaparecer las ruinas amontonadas en tantos años de guerra civil...Tres años han pasado sin embargo desde entonces y en esos sueños encantados se han desvanecido como el humo. La paz...ha sido constantemente alterada, la guerra civil ha venido otra vez a pasear su incendiaria tea..los capitales huyen al extranjero o se esconden arruinando el comercio..El robo y el plagio

extraño a la entidad y también denotaba el firme empeño de reconocer como propio el legado histórico que emergía del Querétaro que era Corregimiento novohispano. Bajo esas premisas, el plan de los queretanos aparece como la culminación exitosa de los planes, los anhelos y los deseos propios de las clases propietarias allá por 1821. No obstante, la propuesta analítica que emerge de la realidad social queretana, es que los conflictos sostenidos en México durante casi medio siglo (1830-1870) eran de suyo las manifestaciones tangibles de una problemática cuyas causas y razones no afloraban de manera tácita y abierta. Problemática que, incluso, ha estado velada por la fuerza y peso que tenían y que se dió a las manifestaciones políticas del momento.

Las largas y cruentas batallas entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores, entre la República y el Imperio, sangrientas y dolorosas ni duda cabe, han escondido el problema fundamental: durante los cuarenta años que corren entre 1830 y 1870 ningún grupo social aparece definido como hegemónico y con una visión clara del país a construir. El caos y el desorden, la convulsión política reinante y la desesperada búsqueda de salidas, aunque fueran inverosímiles y extralógicas, respondían a la necesidad, precisamente, de aclarar el proyecto de nación que se requería. La búsqueda tomó el tiempo necesario para conformar una nueva sociedad.

Por otra parte, el reparto de pequeñas parcelas para la

compañeros inseparables de la miseria han venido a dar el golpe de muerte a la confianza que es la base de la propiedad". Pág. 34. AGN, Gobernación, Caja 559, Exp. 16

explotación agropecuaria con caracter individual y la lotificación de algunos terrenos de uso agrícola para la construcción de viviendas, propiciadas por las leyes de 1856 y los decretos de 1859, también fueron estimuladas por las componendas políticas que creaban pueblos y dotaban de tierra a los "voluntarios" que se sumaban a las fuerzas contendientes. Tendencia a repoblar o colonizar las tierras baldías de la República que tomó carta de naturalización desde entonces hasta el fin del siglo y que auspició el enfrentamiento entre los pueblos y las haciendas. La pugna de las comunidades y de los ranchos asentados en territorios de las haciendas por conservar sus fundos originales y la respuesta violenta y avasalladora de los hacendados se fue estructurando a raíz del proyecto ley para el descubrimiento apeo y deslinde de los terrenos baldíos del Imperio y también por el decreto emitido por Maximiliano sobre el fundo legal de los pueblos, proyecto aprobado el 10 de diciembre de 1866. (95) Los conflictos entonces iniciados tomarían rumbos insospechados durante el porfiriato y su proyecto ley de tierras baldías.

Paradójicamente, la inseguridad de la propiedad raíz y la proliferación de los nuevos propietarios interesados en la especulación de los bienes generó, como reacción paralela, el proceso de concentración violento de la tierra por parte de los hacendados que habían logrado sobrevivir al caos económico y a las diatribas políticas. Como los nuevos dueños de las haciendas habían venido a tener gran poderío económico y político y desde esa posición de poder sus tierras eran intocables, los hacendados

(95) AGN, Gobernación Caja 531, Exp. 9

volvieron sus ojos a las tierras comunales. El despojo de las tierras comunales y de los pueblos para ampliar la extensión territorial de las haciendas, proceso siempre presente en la historia agraria de la entidad pero que había sido alterado por el fraccionamiento de la gran propiedad y el surgimiento de los rancheros, tomó nuevos bríos a partir de 1865. Año en que, aparentemente, se restablece el viejo estilo de producir. La hacienda y los sistemas productivos propios de fines del siglo XVIII fueron restablecidos, con gran cautela, desde 1865. A partir de 1870, no hubo posibilidad de retorno. La propiedad urbana se diversificó entre los ciudadanos y la propiedad rural se concentró en manos de los hacendados. En 1870, con un marco constitucional favorable, la clase propietaria podía respirar tranquila y empezar a trabajar la tierra con la seguridad política que añoraba y que había perdido en 1810.

CAPITULO IV

LA LUCHA POR EL AGUA Y LA TIERRA: EXPANSION TERRITORIAL DE LA HACIENDA

Al restablecimiento de la República en 1867, el país fue alimentado por los odios enconados de los encendidos republicanos contra los mexicanos que habían apoyado al Imperio y por los resentimientos de los imperialistas que habían amanecido con sus sueños y quimeras destruidas. La imagen del país que había legado Fernando Maximiliano de Habsburgo se había deshecho entre sus manos y la desolación, la pobreza y el desencanto eran cotidianos.

La ideología liberal, sin soporte social, se expandía nacionalmente para convencer y convocar la confianza ante un proyecto que ya había probado su ineficacia. El descrédito y desgaste de los liberales, después de tantos años de lucha, y su incapacidad política para negociar la integración de todas las fuerzas contendientes, incrementaron las diatribas políticas en los estados y las "persecuciones por oficio" de todos aquellos que, velada o abiertamente, seguían añorando el sueño del Imperio francés perdido. En estas condiciones, con las garantías individuales suspendidas (1) que dejaban expedito el camino para

-
- (1) Ley de Facultades Extraordinarias expedida por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos otorgada por Juárez y que se había ido sancionado en diversas ocasiones. Por ejemplo, la del 12 de noviembre de 1875 fue prorrogada en 28 de abril de ese mismo año. Prórroga que se debía a la guerra civil que se sentía en toda la República. "la sedición se había extendido a los estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro". AGN, Gobernación, Caja 599, Exp. 5

atentar contra la integridad física de los individuos y lesionar sus bienes y pertenencias, se abrió camino la demanda de una Ley de amnistía que sepultara el odio y los resentimientos que detenían la marcha de la nación. Si los liberales habían ganado, ¿qué sentido tenía ahondar en las diferencias que por 70 años habían dividido a la nación?. Estos sentimientos afloraron, con dolor y rabia, en el tercer período de sesiones del 5o. Congreso Constitucional de la Unión de 1870. La pieza oratoria del señor Menocal, provocada por el debate timorato de los congresistas que sopesaban "el perdón" en lugar de la integración nacional, resaltaba con ironía la ineficacia liberal incluso para vencer las fuerzas francesas:

Vencida la intervención merced a los heroicos esfuerzos de nuestro pueblo, no menos que por la feliz cooperación diplomática de nuestros vecinos del norte, la situación interior de la república fue una de las mejores que jamás se hayan presentado en nuestro país. El gobierno fue reconocido y acatado en todos los puntos, aún en los más remotos. La reacción estaba vencida. El partido liberal orgulloso del triunfo de la nación, se presentaba unido y compacto. Los pueblos sedientos de paz y de orden, no pensaban más que en hacer desaparecer las ruinas amontonadas en tantos años de guerra civil. En una palabra, el gobierno sin enemigos que combatir...pudo consagrar sus esfuerzos a la mejoría de la administración pública y al desarrollo de los elementos de la riqueza nacional...el pueblo pudo y debió concebir esperanzas muy fundadas de un porvenir mejor para nuestra patria. Tres años han pasado sin embargo desde entonces y esos sueños encantados se han hecho humo. La paz...ha sido constantemente alterada, la guerra civil ha venido otra vez a pasear su incendiaria tea por casi todos los estados de la república, dejando tras de sí una huella de sangre, de ruina, de miseria. Los capitales huyen al extranjero o se esconden, arruinando el comercio...El robo y el plagio compañeras inseparables de la miseria han venido a dar el golpe de muerte a la confianza, que es la base de la propiedad.(2)

(2) Diario de los Debates, 5o. Congreso Constitucional de la

En oposición, las dos grandes preocupaciones del Imperio en los lugares que iban ganando a los liberales habían sido: contrarrestar los deseos de venganza y la crueldad frente al "enemigo caído", que tipificaba a algunos elementos del Ejército franco-mexicano, y satisfacer las aspiraciones de paz que como sentimientos encontrados con la renuencia a entregar las armas, fluían en todas las regiones. Los generales del Ejército franco-mexicano no ignoraban que los pueblos "connaturalizados con la guerra" y defensores acérrimos de las banderas por las que combatían, solamente se sometían al Ejército que se tratara bajo la situación de miedo y la inseguridad del resultado final del conflicto. Bajo esta convicción, Maximiliano luchaba, con gran entereza de espíritu, por desterrar de sus filas las actitudes crueles y los comportamientos prepotentes que conducirían al desastre los ya de por sí débiles convenios de paz. En la inestable paz firmada en enero de 1866, en Nonoalco, con el "Jefe disidente" Joaquín Martínez que tenía bajo su mando los pueblos de la Sierra y la Huasteca, claramente se asentaba el propósito de sostener un comportamiento ético frente a esos combatientes y habitantes que la marea fratricida de la guerra dividía:

Joaquín Martínez así como los señores Jefes y Oficiales que le obedecen y las autoridades y empleados civiles obtendrán el pasaporte correspondiente para retirarse al seno de su familia sin que por ningún título se les persiga ni moleste por opiniones políticas ni por los actos que han sido precisos y como una urgencia para

sostener la causa que defendían. Las armas, municiones y pertrechos los conservarán los pueblos para organizar con ellos sus Guardias estables...No juegen, con el sentimiento político de estos habitantes ni se ejerzan persecuciones vergonzosas y otros excesos que comunmente tienen lugar después de una lucha como la que se ha sostenido. (3)

Sin embargo, como los coroneles Eusebio Velarde y José M. Villaseñor, a cuyo mando se habían dejado los municipios de la Sierra y la Huasteca, no se regían por los postulados de Nonoalco, Francisco de Lamadrid, General en Jefe de la Columna expedicionaria sobre la Sierra y la Huasteca del Ejército franco-mexicano, sugiere al Emperador Maximiliano el 10. de febrero de 1866 (a un mes de firmado el convenio de paz) que no se les volviera a otorgar cargo alguno en Tancanhuitz o Tamazuchale porque "la conducta que han observado les ha acarreado la odiosidad (Sic) de los habitantes". El Sr. Velarde dice Lamadrid, "tiene absoluta falta de capacidad como militar, al grado de hacerme perder operaciones que se hicieron sentir bastante...y es algo cruel cuando encuentra al enemigo débil y (también) influye mucho en la venganza o persecución sobre los caídos". Del Señor Villasaña, Lamadrid asienta que era "de corazón algo fuerte" pero con escasa educación y tendiente a la embriaguez. En conclusión, los pueblos los temían y los odiaban y, lo más grave, ponían en riesgo el ya de por sí inestable convenio de paz.

La situación de los pueblos y el prestigio alcanzado por Maximiliano en el país, incluso entre las filas de los republicanos, se expresa en el balance y recomendaciones del

(3) AGN, Gobernación, Sec.3a. 866. 1/1.

General Lamadrid fechado el 10. de mayo de 1866. Para este General imperialista la sola presencia del Emperador, ya afamado por su justo proceder y por su respeto a las poblaciones indígenas y rancheras, garantizaba el orden y la paz:

Estos pueblos se han connaturalizado con la revolución y solo el temor, falta de elementos y ambiciones que los consumían los hizo someterse a los convenios de Nonoalco, y lo prueba que no había mucha religiosidad en cumplirlo principalmente lo que pertenece a las armas y solo la política delicadamente dirigida como Ud. tiene costumbre quitando también con la mayor delicadeza los hombres que pueden alterar el orden y por último la presencia de Ud. en el distrito de Tancanhuitz hará indudablemente mantener el orden, afianzar la pacificación y darle al Departamento de Querétaro una entera seguridad en los más riesgosos de sus distritos que es el de Tancanhuitz que por Villa de Valles se une con los revoltosos de Tamaulipas y por Tamazuchale con la Sierra que se acaba de pacificar (4)

La caballerosidad y generosidad de este soberano austriaco "descendiente de cien príncipes", (5) y la tragedia de su Imperio echó raíces en el suelo queretano. El espectáculo de la ruina de 1867 se tradujo en la desilusión política de los habitantes y en el sabor del fracaso y la impotencia militar teñida con la amargura de la traición del protegido López. Para los queretanos, las acciones de gobierno, la regia personalidad de Maximiliano de Habsburgo y la valentía de Miramón y del queretano Mejía velaron

-
- (4) Idem. Los municipios en conflicto se habían anexo a Querétaro por la División territorial propuesta por el Imperio. Lugares que habían pertenecido a los estados de México y San Luis Potosí. Por los conflictos habidos por la división del Imperio, el 28 de septiembre de 1865 se había decretado que la municipalidad de Valles se reincorporara al Depto. de Potosí (San Luis) y la de Tamuín se agregara en toda su extensión al de Querétaro. AGN, Gobernación, Caja 514, Exp. 5
- (5) Valentín F. Frías, *Las calles de Querétaro*, Ed. Gobierno del Estado de Querétaro, 2a. edición, Querétaro 1984, Pág. 183

el triunfo de la República. El largo sitio de la ciudad (72 días) que culminó en la escena histórica del Cerro de las Campanas y la condena y difamación sufrida en el buen nombre de la ciudad por los acontecimientos de ese "fatídico" año de 1867 (6), se habían grabado en la memoria regional. El desencanto de la generación que había apostado a la grandeza de un Imperio fue acompañada por las desventuras económicas, jurídicas y políticas. Parecía entonces que los años de bonanza no volverían más. Las fincas rústicas continuaban en litigio por las adjudicaciones liberales, "los obrajes y los telares yacían silenciosos y abandonados y aun la casa Rubio parecía doblegarse ante el embate de las fuerzas oscuras y ruinas que asolaban al estado". (7)

En medio de la desolación que imperaba, las pugnas entre el poder ejecutivo y el legislativo y la interferencia de las decisiones del Ejecutivo nacional, a la orden del día, acabaron en la suspensión del gobernador Julio M. Cervantes, en la declaración

- (6) La literatura queretana dejó grabado para la posteridad la desilusión de los queretanos y su deseo ardiente de restablecer el honor de la entidad. Por ejemplo el reportaje que recoge el diario oficial del estado, "Sombra de Arteaga" en 1878, con motivo de la ceremonia de inauguración de los trabajos del ferrocarril de Querétaro a Puerta de Palmillas, San Juan del Río, decía: "el 21 de marzo de 1878 borrará la memoria de los días tan amargos que pasó esta ciudad en el mismo hace 11 años". La obra de Valentín Frías, *Las calles de Querétaro, o sus Leyendas y tradiciones queretanas* (reeditadas por el gobierno del Estado de Querétaro el primero en 1984 y el segundo en 1989), cuantas veces refiere la presencia de Maximiliano de Habsburgo en la entidad destaca la añoranza de esa generación que comprometió su vida a favor del Imperio. También algunos poemas y crónicas de Hilarión Frías y Soto como en la introducción de la *Guirnalda Poética Queretana* se enarbola la defensa del honor de las familias y "el blasón histórico de un pueblo".
- (7) Marta Eugenia García Ugarte, "Prólogo" a las *Leyendas y Tradiciones Queretanas* de Valentín F. Frías, ed. Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro 1989.

que ponía en estado de sitio a todo el estado por decreto del 18 de enero de 1870, y en la división de los parlamentarios en dos bandos o fracciones que disputaban entre sí la legitimidad. Juan N. Rubio y Eleuterio Frias y Soto, diputados nombrados por el distrito de Amealco y los electos por San Juan del Río, Toluca y Jalpan, se separaron de la otra fracción de seis diputados. Denominándose a sí mismos como "mayoría" restablecieron al gobernador Cervantes y publicaron un desplegado contra todos los actos de la otra fracción "a quienes llamaban minoría", diputados que habían solicitado la intervención de los asambleístas del 50. Congreso de la Unión. En este estado de anarquía política, la Asamblea Constituyente, en virtud de que las decisiones del Ejecutivo de la Unión habían sido ejercidas sin facultad alguna, extralimitándose en sus funciones, dispusieron que las cosas volvieran "al estado en que estaban el 17 de enero, víspera de la decisión de declarar en estado de sitio al estado". Se ordenó al Ejecutivo que restableciera la legislatura constituyente y constitucional, al gobernador interino Mariano Vázquez y al Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, "usando si fuera necesario la fuerza armada". (8)

La crisis política de la nación después de 1867 y la acentuación de las disposiciones liberales para afectar las propiedades gravadas con capitales piadosos, suscitó la inconformidad de los hacendados. Con nuevos arrestos enfrentaron el fraccionamiento de la gran propiedad y el surgimiento de los

(8) Sesión del 18 de marzo de 1870. 50. Congreso de la Unión, Op. Cit. Pág. 471.

ranchos con autonomía administrativa de las haciendas, iniciado en 1830 por su debilidad económica. Proceso que se había acrecentado por las adjudicaciones arbitrarias y de carácter político otorgadas bajo las leyes de reforma. En esta condición intentaron, con todos los medios a su alcance, detener la disgregación de la gran propiedad.

Sin embargo, la estrategia por ellos prevista en 1867, clara y específica, de retornar a la administración política, social y económica que había sido propia del Corregimiento a fines del siglo XVIII se fue estructurando no en base y por el modelo liberal. La decisión de implantar la división interna del estado en las tres regiones autárticas y autónomas que habían funcionado durante la última etapa del dominio de la España colonial (la Sierra Gorda, San Juan del Río y la ciudad de Querétaro y su partido), división que había permitido y favorecido la expansión del mercado interno y la formación de grandes fortunas familiares, se tomó, y no deja de ser una paradoja dada la tenaz defensa del Imperio que caracterizó a Querétaro, como una reacción a las medidas que proponía el Imperio francés para organizar la vida pública y social del vasto territorio mexicano.

De manera particular tres fueron las disposiciones imperiales que generaron el empeño inquebrantable de los hacendados de volver al pasado: la emisión del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que consagraba, en el título XII, art. 52, la división territorial en "8 grandes divisiones, 50 departamentos y cada departamento en distritos y cada distrito en municipalidades". (9)

(9) Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, Imprenta de

El proyecto Ley para el descubrimiento, apeo y deslinde de los terrenos baldíos y el decreto, considerado "inoportuno" por los conservadores mexicanos (10), sobre el fundo legal de los pueblos, disposición aprobada el 10 de diciembre de 1866. Proyecto y programa político nacional que, por primera vez en la historia de México como Nación independiente, pretendía la organización del país atendiendo a todos los grupos sociales, una más justa distribución del ingreso y una división territorial acorde con los recursos naturales y la vocación productiva de las regiones. La propuesta de Maximiliano de Habsburgo, estructurada por encima de los devaneos políticos de conservadores y liberales, permitía el desarrollo del "Imperio mexicano" sobre bases sólidas y equilibradas. Con sobrada razón, Edmundo O'Gorman afirma,

La legislación imperial no ha sido estudiada, que yo sepa, con la atención que merece, en muchos aspectos aventaja sin discusión a la republicana en la que se hace sentir tanto el odio político y los partidarismos. Pero no solo por mayor serenidad se distingue la legislación Imperial sino por su tendencia científica...intentó de buena fe desarraigar crónicos males de la administración pública heredados en tantos años de revoluciones egoistas (11)

En 1867, cuando las tendencias centrífugas regionales

Andrade y Escalante, México, 1865, Pág. 8. AGN, Gobernación, Caja 517, Exp. 14

- (10) Faustino Chimalpopoca, el 10. de septiembre de 1866 si dirige al Emperador diciéndole que a pesar de que, "no veía conveniente la publicación del decreto sobre el fundo legal de los pueblos, porque no era oportuna su sanción por las circunstancias actuales, agradece, (dado que había sido aprobado el proyecto ese mismo día 10. de septiembre) el empeño y esmero que toma a favor de los pueblos". AGN, Gobernación, Caja 531, Exp. 9
- (11) Edmundo O'Gorman Historia de las divisiones territoriales de México, ed. Porrúa, 3a. edición, Col. Sepan Cuántos No. 45, México, 1966, Pág. 163.

parecían de nueva cuenta desbaratar el país y las ambiciones territoriales y políticas de los estados vecinos se habían despertado a la luz de la división territorial del Imperio, los dirigentes políticos de la entidad no dudaron en proteger y fortalecer el territorio local bajo el sistema que había dado resultado en épocas ya tan remotas: articular una autoridad política central con la autonomía administrativa de las regiones según su ubicación geográfica, giro económico y productividad. Es decir, los queretanos, profundamente comprometidos con el Imperio, adoptaron los principios de la división territorial por esta administración propuestos y desearon, por contrariar sus intereses personales, la legislación jurídica que pretendía una distribución más equilibrada del ingreso. Distribución que pasaba, inevitablemente, por la disgregación de la gran propiedad y que eliminaba, sin contemplaciones, los cacicazgos microregionales.

Las vicisitudes políticas que rodearon la aplicación de las leyes de la reforma liberal en el estado, la aplicación de las medidas nacionalizadoras y a favor de los fundos de los pueblos del emperador Maximiliano de Habsburgo y la formación de guardias rurales asentadas en los municipios y las haciendas, fomentadas tanto por el Imperio como por la itinerante República Federal, generaron una reacción social que, en 1865, parecía inesperada: se asiste, desde ese año 1865 hasta 1894, a un reagrupamiento de la tierra que no evade los métodos violentos de apropiación de los terrenos comunales de los pueblos y de los municipios. Expansión territorial de la hacienda que alcanza su legitimidad con la ley

sobre "Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de los Estados Unidos Mexicanos" emitida en 1894. También, después de un largo periodo de estancamiento (de 1810 a 1870), empieza a fluir la inversión agrícola, industrial e inmobiliaria.

La recuperación de la economía queretana de fines del siglo XIX resulta más significativa al contemplar la pobreza que rondaba a Querétaro en 1870. En ese año, la clase dirigente se sentía obligada a enfrentar, como se había intentado en 1830, la necesidad de elevar el nivel productivo de la entidad. Bajo estas condiciones, y con el objeto de no quedarse al margen de "la marcha del progreso", los hacendados queretanos no solamente retomaron la estrategia de desarrollo de fines del siglo XVIII sino que la llevaron hasta sus últimas consecuencias a fin de recuperar el agua y la tierra que había perdido la hacienda durante los años de miseria que siguieron a la lucha independentista y a la voracidad suscitada por las reformas liberales.

Empeñados los hacendados en recuperar el esplendor productivo y social que hizo famoso a Querétaro en el siglo XVIII, tendieron a fortalecer política y económicamente a la ciudad de Querétaro para convertirla en el eje y centro de la vida social queretana. En virtud de esta decisión, el título II del Proyecto de Constitución presentado a la H. Legislatura el 23 de noviembre de 1867 se asienta:

subsista la antigua división del estado en los seis distritos que lo han compuesto hasta ahora, pero como la mente de la comisión es dar a estos distritos la verdadera independencia que deben tener lo unos con los otros, ha

sido preciso establecer un juzgado de primera instancia en cada uno de ellos a fin de que ni en lo político, ni en lo municipal, ni en lo judicial queden dependientes más que de la capital (12).

En su propósito, descuidaron integrar las regiones menos favorecidas por la naturaleza que, por otra parte, se encontraban distantes geográfica y culturalmente de la vida política, como lo estaban los pueblos indígenas de la Sierra y los Otomíes asentados en Amealco y San Juan del Río.

Los hacendados también procuraron recuperar las fracciones de las haciendas vendidas, nacionalizadas o rematadas en los años anteriores, y se interesaron en imponer un modelo de producción basado en el uso intensivo de los suelos irrigados y en instituir y consolidar la gran propiedad. El interés de mejorar los niveles productivos de la hacienda y el empeño puesto en restablecer las fortunas familiares perdidas, fueron determinantes para que la lucha por el agua y por los mejores suelos de la entidad ocuparan el primer lugar en los conflictos que, ininterrumpidamente, se presentaron durante estos años (1870-1894) sobre el asunto de "los terrenos", como se decía en la época.

El proceso de concentración del agua y la tierra realizado por los hacendados durante el porfiriato, intensivo y violento, determinó una distribución geográfica del estado tipificada por su desarticulación social y política. Por otra parte, su voracidad

(12) Proyecto de Constitución Presentado a la H. Legislatura del Estado de Querétaro, por la comisión especial nombrada para ello, 23 de noviembre de 1867. Diputados Angel María Domínguez e Hipólito A. Vieytez, Tip. de Mariano Rodríguez Velázquez, Calle de los Locutorios No. 6, Querétaro 1868. Pág. V.

no tuvo límites. La expansión territorial de la hacienda para concentrar el agua que permitiera un desarrollo más intensivo de la agricultura, aniquiló la vida de los pueblos y fue causa directa de los largos conflictos y litigios entablados entre: a) los estados colindantes con Querétaro (Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y México); b) entre los pueblos y las haciendas; c) las haciendas establecidas en los estados colindantes, cuyos terrenos se extendían hasta el de Querétaro, y las haciendas del lado queretano; d) las haciendas establecidas en los estados colindantes y los pueblos indígenas de Querétaro. También acumuló resentimientos sociales profundos en los peones y rancheros radicados en las haciendas y pueblos de la entidad, lesionó las relaciones políticas con los estados vecinos por la defensa de los límites y la expansión de las haciendas de cada estado y, lo más grave, dividió el territorio estatal bajo intereses particulares. La estrategia dió fuerza política y económica a los hacendados, que lograron sostenerse en el poder por 50 años (desde 1870 hasta 1920), pero debilitó al estado en su conjunto.

1. Los saldos de la Reforma liberal

La irregularidad que predominó en la aplicación de las leyes de reforma y la corrupción a la que dió lugar, motivo de largos y costosos litigios finalmente finiquitados por el desgaste político de los contendientes y bajo la sombra de la legislación emitida en 1892 y la prescripción de la ley del 16 de noviembre de 1900,

ocultó por mucho tiempo los atropellos cometidos en nombre de los principios liberales y también los efectuados bajo la bandera de los valores imperialistas. También demostró que, cobijados en el caos político y administrativo y en la férrea unión de la sociedad queretana para ocultar la información sobre las propiedades gravadas, algunos de los aceptados oficialmente como beneficiarios de las capellanías no lo eran en realidad o, por lo menos, no se podía "descubrir" bajo qué circunstancias habían venido a ser propietarios y adjudicatarios de las capellanías. Situación que deja ver que los capitales piadosos impuestos sobre las fincas rústicas y urbanas habían estado, y seguían estando ya en pleno siglo XX, ocultos. Por otra parte, los juicios celebrados en la década 1870-1880 no dejaban lugar a dudas: los administradores públicos, las familias honorables encubiertas con los prestanombres, los hacendados de vieja cepa y los nuevos propietarios, los llamados "criollos nuevos" por Molina Enriquez, habían concentrado los capitales piadosos y las tierras en litigio.

A pesar de las leyes de nacionalización, el abismo abierto entre la propiedad muy grande de origen colonial y la muy pequeña que formaron las leyes de desamortización, no pudo llenarse. Al contrario, habiendo desaparecido con los bienes del clero el motivo radical de la contienda de propietarios que seguían los criollos señores y el mismo clero, y habiendo pasado la propiedad de éste a los criollos nuevos en calidad también de gran propiedad, la propiedad grande se consolidó enfrente de la pequeña, haciendo definitiva la separación de ambas. (13)

(13) Andrés Molina Enriquez, Op. Cit. Pág. 131. Subrayados en el original.

Entre los juicios seguidos por devolución de las capellanías supuestamente mal adquiridas, cuya situación no se pudo esclarecer a lo largo de 52 años de litigio (1853-1905) se encuentra el seguido contra Francisco Pastor. Mismas capellanías que en 1869, cuando se hace el primer intento de sistematizar la información sobre los bienes nacionalizados, "nadie sabía" cómo habían llegado a sus manos.

A Pastor se le venía exigiendo que presentara los títulos de 5 capellanías (capitales que importaban \$11 397.62) y las órdenes que se le habían expedido en 1861 para los censatarios de los capitales pertenecientes a 35 capellanías que había desvinculado. (Los capitales desvinculados ascendían a \$58 160.00). Sin embargo Pastor no justificó -no presentó los documentos- de un capital que ascendía a \$97 707.62. Es decir que Francisco Pastor, se dice en el Informe rendido sobre este asunto por Díaz Soto el 19 de agosto de 1905, "no tenía derechos más que a las cinco capellanías cuyos títulos presentó...tampoco tenía derecho a las capellanías que aparecen aplicadas por el Juzgado de Capellanías a Luis y Juan Pastor con valor de \$7 000.00. La decisión entonces fue tajante: si Francisco Pastor no entregaba los documentos que comprobaran la transacción por él realizada, la Jefatura procedería exigirle los \$28 150.00. Resolución que se publicaría en los periódicos a fin de que llegara a conocimiento de los censatarios y no entregasen los capitales de las capellanías de que se trataba bajo la pena de segunda paga.

La validez de las transacciones realizadas por Pastor se venía cuestionando desde 1879 cuando se presentó una demanda en

su contra, juicio que se sostuvo hasta 1887, año en que se pide a su viuda, Guadalupe Trejo, que manifieste "a qué personas pasaron las fincas y derechos reales que tuviese su esposo, Francisco", y se libra oficio al Administrador General de Rentas del Estado de Querétaro para que informara si la citada señora o sus hijos aparecían en el padrón de la propiedad pagando contribuciones de cualquier naturaleza. A esto se respondió que la viuda de Pastor aparecía como propietaria de la casa No. 3 de la segunda calle de San Felipe por un valor de \$8 000.00. Entonces se llevó a cabo una indagación para saber quienes eran los poseedores de los capitales.

Todavía en 1905, de acuerdo a la revisión del último trámite de la Jefatura de Hacienda realizado en 1902, el asunto seguía estando tan oscuro como en 1853, 1861, 1869 y en 1887. Quiere decir, decía Díaz Soto "que nada se ha avanzado en este asunto sino que está en el mismo punto en que se hallaba en 21 de julio de 1887". Por otra parte, no podía opinarse si el caso estaba comprendido en la prescripción de la ley del 16 de noviembre de 1900 por la falta de información existente para definirlo. En ese año 1905, Luis González de Cosío informa que "ya procede a pedir los expedientes sobre las capellanías de Pastor para conocer el importe del capital con que fueron fundadas, los nombres de los fundadores, de los capellanes y los censatarios". En este entonces, bajo la revisión de los expedientes de 1887 que hace González de Cosío, se aclara que la viuda de Pastor había asentado que "su esposo no había dejado ningunos bienes a sus dos únicos hijos, porque siempre fue dependiente de la casa Rubio". Por otra

parte, las contribuciones sobre su casa No.3 de la segunda calle de San Felipe las pagaba el Lic. Manuel Vázquez Legarreta. Sin embargo, no se pudo saber quien era el albacea testamentaria o intestado de Pastor para pedirle información sobre los capitales porque la Jefatura de hacienda informaba que, "ni en el archivo del Juzgado ni en el de los escribanos públicos a que había ocurrido se encontraban antecedentes que indicaran quien había sido nombrado albacea testamentaria o intestado de Francisco Pastor y que tampoco existen esos juicios".

En vista de este fracaso en 1896 se recurrió a la memoria de personas de reconocida honradez que conocieran a la familia Pastor: Luis Eduardo López y Sebastián Larrondo declararon que "no le conocieron al señor Pastor ningunos bienes". Ese mismo año se le pidió al Lic. Manuel Vázquez Legarreta que manifestara bajo qué título poseía la casa No. 3 de la segunda calle de San Felipe supuestamente propiedad de la Sra. Pastor, aclarando Vázquez Legarreta que la casa había pasado a sus manos por un juicio hipotecario realizado en 1891. (14) En noviembre de 1905, se concluye que, "no habiéndose obtenido noticia de los bienes dejados por Pastor, ni hecho gestión de pago contra los tenedores

- (14) La única información sobre las capellanías susodichas se había publicado en el Periódico Oficial Sombra de Arteaga el 7 de mayo de 1876. Según la nota del periódico, Pastor era capellán de cinco capellanías por valor de \$11 397.62. Se había adjudicado y entregado los correspondientes recibos el capital de \$58 160.00 por 22 capellanías fundadas por distintas personas. No había presentado los documentos del capital de \$21 150.00 correspondientes a 7 capellanías. El periódico incluía los nombres de los fundadores y los respectivos capitales fundados. Capellanías que son las mismas que disputaban José María Pastor (que había cedido sus derechos a Francisco Pastor) José María Canalizo y los menores Terezo Arce. Ver Capítulo II, Pág. 31.

de los capitales en 29 años, procede y así lo propone la Mesa que con apoyo en la ley del 16 de noviembre de 1900, se sobresea este juicio y se archive el expediente.(15)

El caso de estas capellanías, de ser cierta la información de Guadalupe Trejo de que Pastor "siempre había sido empleado de la casa Rubio" y también la proporcionada por las personas consideradas de "honradez intachable" que aseguraban que "no le conocían ningunos bienes a Pastor", sugiere que la familia Rubio había adquirido, mediante el empleo de los conocidos "prestanombres", varios capitales piadosos y posiblemente también algunas fincas rústicas y urbanas. Sin embargo, ¿cómo asegurarlo?

El problema de los prestanombres y las negociaciones particulares realizadas fue evidente en el juicio seguido contra el dueño del terreno del potrero del Añejo situado en Cadereyta. El expediente sobre el Potrero del Añejo del Pbro. Rafael Aguilar, fue abierto en 1880 cuando se le informa al propietario que argumente a su favor lo que él estime conveniente sobre la desvinculación de los \$400.00 que gravaban el rancho a favor de corporaciones religiosas. En este año, Aguilar informa que él ya no es propietario del Añejo sino que lo es Manuel Aguilar. Sin embargo, al hacer la revisión del expediente la oficina de hacienda observa que la denuncia del capital se había hecho en 1865 (lo había denunciado Casimiro Medina a quien por el denuncia se le habían aplicado \$ 133.34)) y que la redención se había realizado hasta 1868. Por lo tanto se le cobran, al propietario

(15) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 507, Exp. 66/9

Aguilar, por instrucciones del Presidente de la República, "los réditos al 5% anual desde el 10. de enero de 1861 al 14 de febrero de 1868, sobre el capital de \$400.00 que reconocía sobre su rancho del Potrero del Añejo. Es decir, \$142.46 para cuyo pago se le conceden tres días. De no hacer el pago en la fecha indicada el rancho sería embargado.

Por otra parte, la revisión del expediente también permitió observar que el denunciante Medina no tenía derecho a ninguna compensación porque el Art.2 de la ley de 19 de agosto de 1867, unicamente lo otorgaba a aquellos capitales de los que nadie tuviera información y de los que no existiera expediente en las oficinas respectivas, (Juzgados y oficinas intervencionistas) y del capital referido existían antecedentes, se afirma, en el expediente "del llamado Consejo". Se decreta entonces proceder contra el Jefe de Hacienda de aquella época, Alejo Marín, "exigiéndole la debida responsabilidad y el reintegro de los expresados \$133.34. Sin embargo, Alejo Marín se encontraba "en la miseria" en 1880, por lo que la oficina de Hacienda de Querétaro, en este entonces a cargo de José Ma. Maldonado, hace el cobro a Medina.

De manera independiente al recurso empleado por Maldonado, Alejo Marín responde a la demanda de Hacienda asegurando que él ya no tiene memoria de esos hechos por los años transcurridos, sin embargo, informa que no fue denunciante de ese capital ni recibió ninguna cantidad como premio por hacerlo. Incluso de no haberlo hecho tiene la certeza porque nunca "los diversos visitantes que han estado en esa oficina revisando las operaciones y expedientes

de desamortización jamás me han reclamado sobre la de que se trata". Sin embargo Medina "confiesa" dice la oficina de hacienda de Querétaro, con motivo de habersele exigido el pago del adeudo porque aparecía como fiador de Alejo Marín, "que sólo prestó su nombre por pura deferencia a la buena amistad que llevaba con el oficial lo. en la época a que se refiere, para suscribir la lista de denuncias de varios capitales", siendo el principal y único interesado este empleado, lo cual, dice el oficial de Hacienda de Querétaro, "constituye un verdadero delito".

Sin embargo, la conclusión de Medina en el ocurso en que "confiesa" la forma cómo había firmado la lista de los denuncios que hacía Alejo Marín es diferente.

Como él mismo lo ha expuesto (Alejo Marín) en una comunicación, de donde se infiere (con) bastante justicia y claridad que todo cuanto hizo y practicó mi fiador en el desempeño de su destino hasta que dejó de ser, quedó bien aprobado (por las autoridades pertinentes). Por otra parte, a poco de haber renunciado la Jefatura de Hacienda, desempeñó por algún tiempo la Recaudación de contribuciones en la Aduana de esta ciudad y todavía después, nombrado por el Supremo Gobierno de la Nación, fue Administrador de Rentas del papel sellado. En cada uno de los destinos confiados disfrutó un sueldo de consideración y si entonces se le hubiera hecho este reclamo, como se le hace ahora, sin duda habría pagado.

Sobre el asunto de Marín, el Presidente de la República dispone que la oficina de Hacienda de Querétaro "consigne los antecedentes que haya en esa oficina al Juzgado de Distrito para que proceda en la órbita de sus facultades, y de cuenta a la Secretaría de Hacienda de los resultados". Por su parte Aguilar pidió una prórroga hasta diciembre de ese año 1880 para hacer la

liquidación del adeudo que se le cobraba. Por equidad, dice la oficina de hacienda se le concede como prórroga hasta el mes de septiembre.

En apariencia el asunto fue demorado para desvanecer las acusaciones que existían contra Alejo Marín. En marzo de 1866, seis años más tarde se cobra al dueño del rancho Añejo, los \$133.34 que se adeudaban de la redención del capital. Al transcribirse el cobro por el Ayuntamiento de Cadereyta se dice que el monto adeudado es de \$166.68. El dueño del rancho, José María Aguilar, responde de inmediato (marzo de 1866) que debe haber un equívoco, "pues nada debe el mencionado rancho como podrá verse en las fojas 22 y 75 del libro general de caudales de esa oficina del año fiscal de 1880-1881". De hecho en 1866 el Jefe de la oficina de Hacienda era el mismo José María Maldonado quien ejercía ese mismo cargo desde 1880 por lo que sin duda estaba enterado de la evolución de este cobro. Por eso resulta inaudito ahora, como lo resultó para el propietario en 1886, que le presentaran cuentas tergiversadas en donde aparece que los \$133.34 se debían porque no se había liberado totalmente el capital de \$400.00.

Aguilar respondió a la reiterada demanda de la Oficina de Hacienda local, anexando los recibos detallados de la forma como, fue liquidado en su totalidad el cobro hecho por Hacienda. En vista de las dificultades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exige a la oficina de Querétaro que le envía el expediente de esta transacción. Exigencia que se hizo en tres ocasiones (16 de abril, 14 de mayo y 29 de octubre de 1886). El 17 de noviembre

de ese mismo año, la oficina de hacienda de Querétaro responde que ya se está "sacando la copia autorizada del expediente relativo a la adjudicación del capital de \$400.00 que reportaba el rancho del "Añejo" y la cual muy pronto tendré la satisfacción de remitir a esa Secretaría". No obstante, para entonces, el Jefe de Hacienda de Querétaro es G. de la Peña. En junio de 1902, Rafael Abogado sugiere se "archive este expediente lo mismo que su correlativo en la Jefatura de Hacienda de Guanajuato". Sugerencia que es aprobada y el expediente se archiva en ese año. (16)

Entre los casos de los administradores que vinieron a ser dueños de las haciendas a partir de 1870 se puede citar el de Hipólito A. Vieytez, uno de los dos diputados comisionados para elaborar el Proyecto de Constitución de estado en 1867. La hacienda de San José y San Pedrito propiedad de La Lastra, pero sin que la testamentaria hubiera hecho pública su propiedad, quedó abandonada varios años. En 1879, cuando se revisaron los expedientes de nacionalización, la oficina de hacienda preguntó si se había realizado la redención de los capitales que gravaban la finca. Ante la solicitud de un informe detallado, la oficina de rentas de Querétaro especificó que el 2 de junio de 1867 Hipólito A. Vieytez había denunciado el capital de \$16 000.00 que la finca reconocía a los conventos de Santa Clara y Santa Teresa. Aclaran los queretanos que en ese entonces se había decidido sacar a remate público la hacienda por el valor de los capitales adeudados a los conventos. Pero el remate propuesto en 1867 no fue aprobado por el presidente de la República. Posteriormente, el 13 de (16) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 503, Exp. 137/114

octubre de 1868, la hacienda fue sacada de nueva cuenta a remate. Para el 11 de julio de 1870 se comunica que, con arreglo a la ley del 10 de diciembre de 1869, se había rematado la sección 6a. de la hacienda a la señora Carmen Soto Carrillo por el capital de \$19 726.10 valor de la hacienda de San Pedrito, habiendo quedado una hipoteca sobre la finca por la cantidad de \$3 287.69. Cantidad que debería cubrir los intereses en 20 mensualidades.

El 27 de enero de 1872 se remiten a la oficina de hacienda de México dos escrituras: una por \$3 000.00 y otra por \$300.00 que demuestran que Manuel Saavedra había quedado reconociendo ese capital sobre la hacienda de San Pedrito. No obstante, en los expedientes consultados no se pudo encontrar información alguna que indicara bajo que negociación la propiedad había pasado, de manos de la Sra. Soto Carrillo a manos de Saavedra. Más tarde, la oficina de rentas de Querétaro remitió otra escritura mediante la cual se indica que Hipólito A. Vieytez se subrogó la obligación contraída por Saavedra.

Sin especificar la transacción realizada, en 1874 se acepta a Vieytez como propietario de San Pedrito y se dice que los \$8 816.63 que todavía se deben se asignen a dotes de religiosas. Sin embargo, no se especificaban los nombres de las religiosas que serían beneficiadas, ni el nombre del convento al que pertenecían. Condición que hace pensar, sin tener certeza alguna, que esos \$8 816.63 adeudados podían desaparecer sin que nadie diera cuenta de ellos. Parecería evidente que Vieytez, involucrado en los asuntos de gobierno, aprovechó su ubicación política para devenir

en propietario de la hacienda (17), como lo había hecho, aproximadamente en las mismas fechas, Luciano Frias y Soto. (18)

En el caso de la hacienda La Noria el expediente volvió abrirse en 1870 a causa de la denuncia hecha por Francisco Macias. Sin embargo el entonces oficial de hacienda de Querétaro, Alejo Marin, informó que la hacienda La Noria no estaba libre sino que era propiedad de Francisco Venegas. Para proteger sus bienes Venegas envió una emotiva carta al Jefe de hacienda el 23 de noviembre de 1870, clarificando los motivos políticos y las condiciones sociales predominantes en Querétaro y en el país, cuando él, con energía liberal, se había posesionado de la hacienda en litigio. El recurso utilizado por Venegas era expedito en estos años debido al enconado odio que los vencedores acumulaban contra todos aquellos que habían apoyado al Imperio, deseo de venganza equiparable a la necesidad de premiar a los que habían apoyado la causa liberal:

En 1863 cuando la República se hallaba en su mayor angustia por la invasión de la Francia: cuando el erario nacional luchaba con las inmensas dificultades consiguientes a los cuantiosos gastos de la guerra y los muy cortos ingresos que trae consigo la alteración de la paz y cuando nadie quería hacer negocios con el gobierno temerosos de perder sus fondos que quedaban expuestos al azar de las batallas, me vendió esa jefatura la hacienda de La Noria. Tomé posesión de la hacienda, a pesar de todo y aun cuando las exigencias del llamado Imperio que, según se sabe, quiso meterse a innovador de las operaciones hacendarias de nuestro gobierno nacional, y hoy, todavía me encuentro disfrutando de mi legítima adquisición.

(17) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 137/140

(18) Ver el Capítulo III de este trabajo, Pág. 48.

El gobierno nacional, sin ocultar su empeño en proteger a los liberales, dio marcha atrás en su decisión de entregar la finca a Martínez de los Ríos. Parecía que Venegas había finalmente triunfado enarbolando las banderas ideológicas.

Sin embargo, el litigio sobre la hacienda no quedó ahí. El 22 de septiembre de 1873, el coronel Benito Zenea informó que Francisco Macías le había cedido los derechos de adjudicación de la hacienda la Noria. Hacienda que le fue adjudicada por la módica suma de \$6 000.00. En este entonces el coronel Zenea se apoderó de la hacienda de la misma manera que lo había hecho Venegas en 1860: por medios violentos y arbitrarios. No obstante que la adquisición aparecía como ilegítima, el conocido y respetado queretano Próspero C. Vega tomó la defensa de Venegas en escrito del 2 de diciembre de 1873, posiblemente para oponerse al empleo de la fuerza pública que ya era cotidiana:

Hallándose ausente Venegas sin haberlo vencido en juicio y sin haberlo oído siquiera, y hasta sin haberlo citado, (la prefectura de hacienda) fue a la Noria con tropa armada y en nombre del mismo Supremo Gobierno le quitó la posesión de ella a Venegas, no sin que mediera una solemne protesta del encargado de la finca.

Para 1874, la hacienda de la Noria fue embargada a Venegas y depositada en manos de Martín Hernández. Estando en litigio la hacienda, Benito Zenea informó a Venegas mediante recurso jurídico publicado en el periódico oficial local:

La protesta que por escritura del 28 del último febrero formuló ante el escribano C. Francisco Ruiz, contra todo contrato de venta, permuta, imposición de gravamen o de

otra especie que afecte a la hacienda de la Noria. (19)

El deterioro sufrido por estas haciendas adjudicadas por razones políticas e ideológicas queda expresa en la carta que envía Vidal Martínez de los Ríos el 24 de abril de 1874 y que el Diario Oficial del estado publicó en su edición del 3 de mayo de ese mismo año. Martínez de los Ríos además de reclamar la posesión de la hacienda hace notar, "aunque muy someramente, algunas de las injustas aseveraciones del Sr. Venegas" :

A nadie como a este señor le conviene que el asunto corriera sin ver la luz pública lo más secreto posible y no es extraña su prudencia porque para el que compra una cosa por la cuarta parte de su valor, siempre puede ser peligrosa cualquiera discusión por la prensa. (Posteriormente) si no la quise recibir cuando me la entregaba el Sr. Alejo Marín, fue porque en el tiempo en que ha estado, no en poder del Sr. Venegas, sino de muchas personas como sus encargados, no tratándose más que de esquilmarla, le han destruido los magueyes, las cercas, los montes, han dejado caer la casa y su deterioro y su ruina son palpables a todos los que transitan por allí.

Cuatro años más tarde, en julio de 1878, el litigio se define sobre la preferencia ante la doble adjudicación de la hacienda La Noria, para ocultar la injusta adjudicación hecha por el gobernador Linares y para declarar como "mejores" los derechos del liberal Venegas. Así, en ese mismo año se resolvió como mejores los derechos de Venegas, dándole posesión de la finca. Posteriormente, en 1884, cuando de nueva cuenta se revisan los expedientes de nacionalización de los bienes de la Iglesia, el

(19) Diario Oficial del Estado de Querétaro, Sombra de Arteaga, 14 de marzo de 1874.

litigio seguido por Venegas en defensa de sus derechos a la Noria, se confunde con el litigio de la hacienda de la Noria de Charcas, ubicada en la Villa de San Luis de la Paz de la Sierra Gorda, que pertenecía a la familia González Cosío. Hacienda que reconocía un capital piadoso de \$13 500.00. Sin duda la confusión no pasó a mayores por el destacado papel que para entonces tenía Francisco Gonzáles de Cosío, el gobernador porfirista de Querétaro. La hacienda La Noria siguió estando en manos de Venegas.

Hubo casos, sobre todo los realizados en 1870, que no pudieron eludir la persecución "por oficio" que en este entonces se seguía contra todos aquellos que habían apoyado al Imperio. La Sra. Carlota Iriarte, quien terminó de hacer la redención de los capitales piadosos que reconocía su hacienda de Santa Rita en ese año (1870), recibió una comunicación en la que se le dice:

Manifiesto a Ud. que, como en la liquidación que existe en esta Jefatura formada por el Administrador de Rentas de ese lugar (San Juan del Río)...aparece que se pagaron al llamado Imperio los \$536.00 a que se refiere la suprema orden de fecha 18 de marzo de 1874 y este pago es nulo en virtud de la circular de 20 de julio de 1863 puesto que por esta se mandó que los que hubiesen otorgado fianza u obligación de pago por redención de fincas cuyo capital es nacionalizado se presentasen por sí o por sus apoderados dentro de un mes ante el Gobierno General y que por el solo hecho de no cumplir con esta obligación se tendrían por perdidos sus derechos; y según la Ley de 11 de mayo de 1865, declara así mismo nulo y de ningún valor el decreto del llamado Imperio de 26 de febrero y reglamento de 9 de marzo...conforme al cual se hizo el pago al agente del dicho llamado Imperio, sin que obste la excusa de que el pago se verificó apremiado el deudor por la fuerza...su morosidad lo sugetó (sic) en todo a lo preceptuado por la ley de 12 de junio de 1859 y a la de 11 de mayo citada que anuló las disposiciones del Gobierno usurpador sobre revisión de las operaciones de desamortización de bienes eclesiásticos.

Para cancelar el adeudo de \$536.00 que Carlota Iriarte había pagado "indebida y voluntariamente" al "llamado Imperio", la Oficina de Hacienda le daba como plazo tres días. Finalmente después de varias aclaraciones, la Sra. Iriarte obtuvo la cancelación de la escritura de imposición de capital en 1880.(20)

La revisión de los expedientes de nacionalización suscitó nuevos intereses. Por ejemplo, la hacienda de Lodecasas desde 1861 disputada por varios concursantes, acreedores y adjudicatarios, estuvo sujeta a un nuevo juicio en 1868 puesto que Carlos Linder exigía la entrega de la hacienda por la adjudicación que le había hecho el gobierno de Juárez desde 1861, como parte del pago de un crédito. Entre los bienes adjudicados a Linder también se encontraban la casa No.1 de la plaza de armas de Querétaro y la hacienda de la Laborcilla que, habían sido sacados a remate público por el gobierno de Querétaro en 1871. En ese entonces Linder protesta y asienta que son de su propiedad por escritura pública. (21) Carlos Linder adjuntó su protesta al ministro Norte Alemán, Keurd Von Shlezer, solicitándole interviniera ante el supremo gobierno,

esos valores y los demás que me consignó el gobierno en Querétaro forman parte de la indemnización acordada por este mismo gobierno en marzo de 1861 por unos \$ 30 000.00 pagados a los comisionados del Sr. Juárez en 1855, en cuya reclamación intervino la legación de Prusia hasta su completo y definitivo arreglo. (22)

(20) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 502, Exp. 105/97

(21) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 66/43

(22) AGN, Idem.

De hecho los bienes no alcanzaban a cubrir el préstamo de \$211 000.00 y sus réditos de \$20 000.00 que desde 1861 le adeudaba a Linder el gobierno de Juárez. Los bienes que demandaba Linder en Querétaro habían sido sacados a remate público por el Ayuntamiento de la ciudad avalados por la carta presidencial de mayo de 1868. Carta en que el presidente Juárez rechaza la solicitud que hacían Francisco Villaseñor y Luciano Frias, a nombre del Ayuntamiento, pretendiendo que el gobierno federal indemnizara \$150 037.57 que estaban fincados sobre la hacienda de Esperanza. Capital perteneciente a los fondos de beneficencia que había sido redimido en 1862 para financiar la guerra extranjera. El presidente resolvió rechazar la solicitud del Ayuntamiento explicando muy pragmáticamente que era natural en esa época que los fondos públicos "cualquiera que fuera su procedencia y por sagrados que sean los objetos", se usaran para la guerra. No obstante, el presidente sugiere a los del Ayuntamiento de Querétaro que investiguen cuáles son los capitales que todavía estaban sin redimir en todo el estado y encontrándolos, se solicite al "Supremo gobierno" se los adjudique para cederlos a objeto de beneficencia.

Bajo estas premisas, el Municipio de Querétaro elabora una lista de los bienes rústicos y urbanos que supuestamente estaban gravados con capitales piadosos sin redimir. El monto de los capitales era \$77 928.34. Pero la lista fue muy mal elaborada de modo que incluía bienes cuyos capitales ya habían sido redimidos por los dueños, y otros que no pertenecían a Querétaro. En virtud de estos errores el Ayuntamiento prácticamente no obtuvo los ingresos que deseaba. La lista elaborada en 1868 consideraba:

La hacienda La Venta	\$ 4 000.00
" " Miranda	10 200.00
La hacienda La Laborcilla	6 808.00
La hacienda del Fresno (Gto)	16 829.00
La hacienda del Batán	4 000.00
Rancho del Batancito	4 000.00
Hacienda de Tetenoco (Gto)	12 861.00
Rancho de Arroyoseco	7 472.00
Rancho del Buey	2 262.00
Hacienda de Amechi (Gto)	95 000.00

También se incluían 9 casas ubicadas en la ciudad de Querétaro (23)

En otras ocasiones salían a relucir los arreglos realizados por el Gobierno federal. En 1880, cuando se le cobra a la Junta Vergara el pago de un adeudo de \$40.00 estos responden:

Por lo demás constando como consta a esa oficina que hay una operación pendiente entre el Gobierno General y la testamentaria Vergara, operación cuyo origen proviene de haber ocupado el propio gobierno varias fracciones de la Hacienda de Esperanza: la Junta Vergara tiene medios justicimos para creer que esa oficina comprendiendo bien el alcance de la observación contenida en este párrafo en ningún caso llevará adelante los procedimientos para hacer efectivo el pago de los \$40.00 mientras está pendiente la resolución sobre el acuerdo principal.

La Junta Vergara tenía razón. De este asunto ya no se supo nada hasta su resolución en 1912 cuando Rafael Abogado indica que el cobro ya no procede "por estar prescripta la acción fiscal conforme a la Ley de 16 de noviembre de 1900. (24)

Por otra parte, el Ayuntamiento de Querétaro, en virtud de la centralización de las actividades administrativas y políticas, disponía de los capitales piadosos a discreción y con mayor razón

(23) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 497, Exp. 137/123

(24) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 503, Exp. 137/137

si los tales capitales estaban destinados al fondo de beneficencia pública, lo que permitía arreglos privados. En 1874, por ejemplo, en el Acta del Cabildo municipal del día 26 de marzo de 1874 se registro el acuerdo siguiente:

Destínese para el pago de los \$2 700. 66 que aparecen a favor de Francisco Herrera y Zavala en la liquidación practicada por el Tesorero municipal, las partidas siguientes: un mil cincuenta pesos resto de mil doscientos que debe de pagar Don Octaviano Muñoz Ledo en los meses de enero a diciembre del presente año. (Por escritura del 19 de noviembre de 1852, Octaviano Muñoz Ledo ratificaba y reproducía la especial hipoteca de las haciendas Mayorazgo y San José. En la escritura de ese año, suscrita ante el escribano Ramón de la Cueva, constaba que ni por el cambio de deudor, ni por la aplicación que se hizo al hospital de esta ciudad del capital de \$20 000.00 y réditos que causa se perjudicaba la escritura de que procedía el rédito ni el registro que de ella se hizo). Seiscientos noventa pesos, rédito de tres mil impuestos en la hacienda de Cuachiti (ubicada en Guanajuato que reconocía ese capital de \$13 000.00 en favor del Hospital civil del estado de Querétaro) y correspondientes al presente año. Valor de réditos que el mismo Sr. Herrera debe por el capital que reconoce su casa No. 4 de la calle de Capuchinas y cuyo importe satisfecerá el municipio al fondo de albaceazgo hecha que sea la liquidación del Sr. Herrera. Para cubrir el resto de su cantidad se le consignarán las rentas de fincas del municipio comenzando con las cobradas en el mes de febrero que ya tiene recibidas y se le entregarán mensualmente hasta que quede devengada. (25)

Otro de los casos resucitados en esta época fue el de la hacienda la Era. La hacienda, que había sido embargada a la señora Guerrero por el juicio que le seguían los vecinos del barrio de San Sebastián, fue fraccionada para sacarla en venta en 1874. Fracciones que el perito agrimensor Nemesio Escoto había valorado en \$2 586.39. No obstante, Joaquín Garma, todavía

(25) Diario Oficial Sombra de Arteaga, 19 de abril de 1874. Los paréntesis son míos.

inconforme con el decreto presidencial que había declarado como legítima propietaria de la hacienda a la Sra. Guerrero, inserta un aviso en el Diario Oficial del estado en el que señala:

Estoy informado que se trata de enajenar algunos terrenos de la hacienda "La Era" por los vecinos de San Gregorio y Santa Catalina en pleito ejecutivo que siguen contra Doña Dolores Guerrero. Como esa finca es de mi propiedad, el que suscribe hace saber al público, para los efectos que hubiere lugar, que se opone a dichas enajenaciones y portesta de nulidad contra ellos, así como reclamar daños y perjuicios a quien corresponda (26)

En 1896, en pleno porfiriato cuando las preocupaciones agrarias eran otras, Herlindo Yrayo denunció los capitales piadosos de la Era. En ese entonces, 1896, se abre de nueva cuenta el expediente de la Era, porque se afirmaba que el fisco a aprovechar cualquier noticia que se le diera sobre la existencia de algún capital nacionalizado. Sin embargo, Dolores Guerrero, quien había fallecido en 1878, había dejado como heredero de sus bienes al entonces menor Herlindo Yrayo y como albacea a Alfonso María Septién. Dolores Guerrero especificaba, en su testamento, que tenía cuentas pendientes con el obispo de la Diócesis y con el presbítero Ayllán. Por estas deudas había dispuesto que se pagara a Ayllán con el casco de la hacienda la Era y con el terreno que le quedaba que sería como de una fanega. Al obispado se le pagaron las deudas con los muebles de la casa (importaron \$104.94) y con \$1 458.00 en efectivo.

El 23 de septiembre de 1879, el promotor fiscal de Querétaro, informó que,

(26) Idem. 13 de enero de 1874

el albacea Septién, el representante del menor Eпитacio Irayo y el administrador de rentas en nombre del fisco del estado, presentaron un escrito, de común acuerdo, al Juzgado común, declarando estar conformes en que la cantidad líquida del caudal mortuorio era la suma de \$1 042.00

En realidad no se puede saber si el heredero era Eпитacio Irayo o Herlindo Irayo puesto que los documentos consultados en unos casos lo mencionan como Herlindo, que fue el que denunció los capitales en 1896 y en otros como Eпитacio. Sin embargo, lo que es cierto, es que el heredero de Dolores Guerrero únicamente percibió \$1 042.00. Lo reducido del legado se debe a que Dolores Guerrero ya había vendido la mayor parte de la finca a Benito Martinez. Propietario que había obtenido, en 1893, la certificación del administrador general de rentas y jefe de la sección de contribuciones directas (Jose Y. Sicilia y José Maria Rubio) de que la hacienda, valorada en \$12 460.00, no estaba gravada ni sujeta a responsabilidad alguna fiscal. De esta manera, la denuncia que había hecho Herlindo Yrayo no tuvo ningún efecto legal y así, el 21 de marzo de 1909, se ordenó que se cerrara el expediente de la hacienda la Era.

Los expedientes de nacionalización eran de nueva cuenta revisados cuando se intentaba vender las propiedades. Por ejemplo la hacienda San Vicente y la de Chichimequillas colindantes entre sí y posiblemente en otras épocas unidas (hay documentos que mencionan la propiedad bajo el nombre de "San Vicente Chichimequillas") propiedad de la Sra. Teresa Peña habían sido

anunciadas en remate en abril de 1886. San Vicente por el Juez tercero de lo Civil Victor de la Peña en el Juzgado No. 8 de México y Chichimequillas por el Juzgado de Querétaro. En virtud de este remate, la Jefatura de Hacienda de Querétaro informa que la Sra. Peña resta un adeudo de \$52.00 en efectivo y \$2 760.00 en bonos, sobre el capital piadoso que reconocía la hacienda de San Vicente. Capital que había empezado a redimir en 1868. (27) En razón de este adeudo la Oficina de hacienda de Querétaro solicita que las transacciones de estas haciendas se realice en Querétaro. De hecho, en la "Cuarta noticia sobre redenciones de capitales" rendida por Alejo Marín en 1869 se informaba que la hacienda de Chichimequillas estaba gravada con un capital de \$83 33.37 a favor del convento del Carmen. Capital que había redimido el censatario Hermenegildo Felms con \$10 000.00 en numerario. \$10 000 en Bonos del estado y \$50 000 en Bonos de la deuda nacional consolidada. Transacción en que la Hacienda pública perdió, dice Marín en la nota de página No. 67, \$13 333.33 que se descontaron a razón de 40% sobre el valor de los dos quintas y además los réditos vencidos. (28)

La disposición en 1870 de continuar adelante con la nacionalización de los bienes de manos muertas suscitaba dudas a los Jefes de Hacienda regionales sobre a qué Ley atenerse, y la forma de realizar los pagos de los adeudos si en efectivo por las dos terceras partes del valor del capital. Si era así y dado el tiempo transcurrido desde la denuncia y la adjudicación de los

(27) AGN, Bienes Nacionalizados Caja 503, Exp. 137/134

(28) Informe rendido por Alejo Marín el 31 de julio de 1869, AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 500, Exp. 66/87

campitales los bienes habian incrementado su valor por lo tanto la hacienda, al regirse por las leyes que normaban en la epoca de hacer los denuncios, salia perjudicada. Esta fue la situación de un "terreno de sembradura" ubicado en Vizarrón que habia sido adjudicado a Ramón Trejo. Luisa Herrera la poseedora del terreno no podia presentar las pruebas de la total redención del capital realizada por Trejo en 1867, porque éste las habia perdido. En virtud de lo cual expresa en 1886 que esta dispuesta a pagar el adeudo que le cobraba la oficina de hacienda que es de \$75.00 en Bonos con más del 50% de recargos, además de los gastos que ya se habian erogado por el embargo del terreno. Para satisfacer la demanda se le habian concedido 15 días. Al cumplirse el plazo, la Sra. Herrera explicó que "no habia podido conseguir los Bonos". Situación que queda esclarecida disponiéndose que se rigiera por la ley de diciembre de 1871. En 1887 con el pago del adeudo se archiva el expediente. (29)

Por otra parte, la serie de indagaciones realizadas, ya sea porque los propietarios habian realizados redenciones en la época del Imperio, o porque se descubrian capitales ocultos o simplemente porque algunos de los personajes de esta época se interesaba de manera particular en alguna finca, propició la formación de las compañías compradoras de bienes. (Compañías que habian empezado a crearse en 1865). Por ejemplo, el 10 de enero de 1870, Vicente Collantes, Luis Zorrila y Antonio Uribe constituyeron una sociedad para comprar los bienes nacionalizados. Sociedades que tuvieron una vida más larga que las formadas en la (29) AGN, Bienes nacionalizados, Caja 503, Exp. 137/135

década 1860-1870. Tal fue el caso de la compañía formada por Collantes y socios, que todavía funcionaba en 1897. Es decir tuvieron una duración de por lo menos 30 años.

Todavía en 1897 y 1898 se siguieron juicios civiles sobre bienes nacionalizados. En 1897 además del ya relatado de la testamentaria de la Sra. Guerrero, se encontraban: las diligencias relativas a esclarecer "si los predios rústicos llamados Batán y San Francisco son bienes de carácter nacionalizable". La casa No. 5 de la calle de Mariposas había sido denunciada por Fernando Rangel como perteneciente a bienes nacionalizados. Se declara nulidad de contrato contra los poseedores de las casas No. 3 de la calle de Velázquez, No. 3 y Letra G de la de Santa Ana; No.2 de la calle de la Huaracha, No. 7 de la del Relox, No. 1 de la de los Higos y cochera ubicada en los bajos del exconvento de San Agustín. Juicio seguido contra Ignacia García y relativo al reconocimiento de \$500.00 de la casa No. 1 de la calle de Tarascos. Denuncia de varias fincas que pertenecen a la testamentaria del Pbro. Manuel Cabeza de Vaca, realizado por Isidoro Lara. (La No.2 de la calle de la Flor baja, Letra E de la del Carrizal, la No. 1 de la calle Sola, No. 2 de la del Mexicano y No. 14 de la calle de Montesacro). Denuncio hecho por Vicente Collante y Cía. de la casa No.3 de la calle de Santa Rosa. También se piden se cancelen escrituras de reconocimiento: José María Lara, la de \$500.00 que reportaba una huerta ubicada en la esquina de las calles de Candiamor y Rivera del Río. El Pbro. José Rico solicita que no se efectúe la venta de la huerta del ex-convento del Pueblito, que había sido embargada a causa de haber sido

denunciado el predio como bienes nacionalizados. Juicio promovido por los menores Terreros en contra del dueño de la hacienda de Balvanera y que seguía el Pbro. José Rico (30). El expediente de la hacienda de San Antonio Apapátaro, y el de San Nicolás del Pozo, que habían sido reabiertos por el denuncia realizado por Santiago Núñez de un capital de \$200.00 que la hacienda reconocía a la congregación de la Santa Veracruz y el Santo Entierro, también se cerró en 1898. (31)

En síntesis, la aplicación de las leyes de la reforma liberal se continuó una vez restablecida la república y muchos fueron los procesos que, iniciados entre 1860-1867, culminaron hasta 1892, favoreciendo a los administradores públicos, los militares y también a las familias honorables. Sin embargo, la adjudicación de las fincas nacionalizadas o gravadas con capitales piadosos realizada entre 1870 y 1892, tuvo un carácter diferente o, por lo menos, respondió a motivaciones diferentes que las expresadas en las adjudicaciones realizadas en la década 1860-1870, bajo las leyes de desamortización.

Si en la primera etapa, con las leyes de desamortización, idealmente se pretendía la redistribución de la tierra y el fraccionamiento de la gran propiedad, propósito que fue desvirtuado por las premuras del erario público ante la guerra de intervención y por las componendas políticas y sociales propias de la inestabilidad que imperó en el país hasta 1870, después de

(30) "Noticia de los negocios civiles en que está interesada la Hacienda Pública y que existen en este Juzgado", Querétaro enero 25 de 1897. AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 507, Exp. 66/90.

(31) AGN, Bienes Nacionalizados, Caja 505, Exp. 66/135

estos años la implantación de las leyes adquirió un nuevo rumbo.

Si se pasan por alto las decisiones tomadas bajo las justificaciones ideológicas que imperaron en los años que siguieron al efímero Imperio de Maximiliano, se observa que la nacionalización de los bienes de manos muertas siguió dos vertientes del todo consonantes con el desarrollo del país: por un lado se quería ordenar y terminar un proceso, de manera tan caótica y anárquica impuesto, exigiendo a las oficinas de Hacienda estatales informes pormenorizados del "estado que guardaban los bienes nacionalizados", como fue la circular de 1869 y la emitida en 1875; por otro, una vez saldadas las cuentas pendientes y resueltos muchos de los litigios que se habían iniciado entre 1861-1865, bajo la sombra de la legislación de 1892 que confirmaba la propiedad adquirida bajo las leyes de desamortización y nacionalización, se deseaba dar seguridad en la tenencia de la tierra. Desde esa fecha se empezaron a cerrar los expedientes de bienes nacionalizados hasta, los más tardíos y los menos, en 1919. Se podría afirmar que en 1892, aun cuando son bastantes los casos que culminan hasta 1900 cuando se establece la prescripción, se cerró el ciclo de los bienes desamortizados y nacionalizados y se sepultaron las tendencias ideológicas que habían pugnado por el fraccionamiento del latifundio. A partir de entonces, el proceso de expansión territorial de la hacienda no tuvo límites.

2. La lucha de los pueblos y las comunidades indígenas en defensa de la tierra

El proceso de disgregación de la hacienda iniciado primero por la crisis económica de las familias propietarias en 1830 y continuado más tarde por las adjudicaciones de los bienes de manos muertas que dieron lugar a la formación de los ranchos y a la división de las haciendas, fue acompañado por la formación de un nuevo sector de propietarios de la tierra formado al calor de las leyes de desamortización en 1856 y por el reglamento del 20 de abril de 1878 que tendieron a fraccionar la propiedad comunal y convertirla a través de las titulaciones en propiedad individual.

No obstante el propósito de estas dos legislaciones de fraccionar los fundos de los pueblos y las tierras de los municipios en favor de las comunidades indígenas, a lo largo de su aplicación suscitaron el despojo de los legítimos propietarios. Los terrenos desamortizados (1856) y los fundos fraccionados por el reglamento del 20 de abril de 1878, tendían a pasar a manos de los hacendados y los rancheros más fuertes de cada localidad. Esta desvirtuación propició una gran movilización en los pueblos y las comunidades que venían pugnando por defender, en algunos casos y, en otros, en recuperar las tierras de sus mayores a costa de las cuales se había expandido la hacienda desde tiempos inmemoriales.

Los problemas de los pueblos para defender sus tierras, que aparecen con fuerza inusitada durante la intervención francesa y después cuando se publicó el reglamento del 20 de abril de 1878, no eran nuevos en el país. En México, desde el siglo XVIII y posiblemente desde finales del siglo XVII, reflexiona Francois

Chevalier,

se da una cierta presión por parte de grupos de modestos arrendatarios y aun de "gañanes" y terrazgueros para conseguir su independencia municipal en el interior mismo de las grandes haciendas . (32)

La tendencia a construir pueblos dentro del territorio de las haciendas y las peleas pertinaces de las comunidades para defender sus terrenos fueron parte de la vida cotidiana de Querétaro por lo menos desde principios del siglo XIX.

En Tequisquiapan, relata Chevalier, desde 1804 muchos "indios terrazgueros" reclamaban a su protector -igual que en Dolores Guanajuato- la fundación de un pueblo "ahí mismo con suficientes tierras por las que no tengan que pagar arrendamientos insorpotables". 45 años más tarde, en el Plan político eminentemente social del Ejército Regenerador de Sierra Gorda, proclamado por Eleuterio Quiroz el 14 de marzo de 1849, se proponían cambios sustanciales en la propiedad territorial que incluía la demanda de conformar pueblos. En transcripción de Leticia Reina, el Plan proponía la

transformación de las haciendas de más de 1 500 habitantes en pueblos, reducción de rentas a los arrendatarios, repartos de tierras incultas, abolición de renta de bienes naturales comunales, abolición del trabajo gratuito (faena) y retribución de la fuerza de trabajo empleado por los propietarios (33)

(32) Francois Chevalier, "Acerca de los orígenes de la pequeña propiedad en el occidente de México. Historia comparada" en Después de los Latifundios, Op.Cit. Pág. 5

(33) Leticia Reina, Las Rebeliones Campesinas...Op.Cit. Pág. 297

Sin duda la presión ejercida por los trabajadores de las haciendas y los avocindados en sus terrenos y sus demandas de crear poblaciones libres a costa de la gran propiedad, se encuentra atrás del decreto de Santa Anna que prohibía a las congregaciones de familias de las haciendas erigirse en pueblos sin el consentimiento de los dueños de los terrenos. Decreto que fue declarado insubsistente en la sesión del 17 de mayo de 1856 del Congreso Constituyente.

Sin embargo, los diputados constituyentes también trataron el debatido asunto de los terrenos baldíos y de las leyes respectivas que habían emitido algunos estados y que Santa Anna había derogado atacando, afirmaban, "la legítima propiedad y en un acto de usurpación". Es decir, si por un lado se protegía el derecho de las poblaciones a fundar pueblos en los terrenos de las haciendas, por otro se buscaba retener las propiedades que habían sido adquiridas, por lo general violentamente, a costa de los terrenos baldíos. Terrenos que la mayoría de las veces no eran tales, sino tierras comunales o municipales.

Tierras baldías que en Querétaro, según del Raso, abundaban en la Sierra Gorda y que años más tarde Balbontín en el estudio estadístico realizado en los años 1854-1855 no lograba ubicar. Aclarando las dificultades que había tenido para levantar los datos sobre las fincas rústicas y precisando que era necesario medir los terrenos y hacer levantamiento de planos para asegurar la información, Balbontín indica que para:

determinar lo que a cada uno corresponde de extensión según sus títulos, avaluarlos conforme a las

circunstancias locales, evitar los litis que se suscitan a cada instante entre los pueblos y los hacendados, o entre estos y aquellos sobre propiedad, y sacar de una vez esos terrenos baldíos de que tanto se habla y que yo no pude encontrar en ninguna parte aun valiéndome de las indagaciones más esquisitas (34)

Este autor más adelante asegura:

la reunión de las cantidades que representan las tierras labrantías, forman las cultivadas y sin cultivo, y sumando a estos los bosques, resulta la extensión total enunciada (20 000 caballerías 10 fanegas). Más como para llegar a las 876 leguas cuadradas que tiene el Estado, falta 15 855 caballerías, 2 fanegas, quitaré 366 caballerías que resultan de 111 $\frac{3}{4}$ de fundos de los pueblos y 254 $\frac{1}{4}$ de caminos públicos, y aun quedan sin aplicación 15 489 caballerías 2 fanegas, que no pueden ser otra cosa sino baldíos nacionales, cuya mayor cantidad existe evidentemente en el Distrito de Jalpam (Sic), que ocupa en el mapa una tercera parte del terreno del Estado, pero que es muy expuesto determinar por cálculos aventurados, y solo se lograría este objeto poniendo en práctica los medios de que ya he hablado en otro lugar (35)

Posiblemente la información proporcionada por del Raso y por Balbontín y las discusiones del Congreso Constituyente de 1856-1857, hicieron que se pidiera información a los ayuntamientos sobre la existencia de los terrenos baldíos. Por ejemplo, en 1856 el prefecto de Cadereyta informó que no se conocía ningún terreno baldío en su distrito y el prefecto de tolíman, más categórico, aseguró que no existía ningún terreno baldío en Tolimán (36)

(34) Juan Maria Balbontín, Op. cit. Pág. 40. Subrayado mio.

(35) Idem. Subrayado mio.

(36) Ramón del Llano Ibañez, "Transformación de la tenencia de la tierra a partir de las leyes de desamortización en Querétaro: 1856-1872", en Historia de la cuestión agraria mexicana, Estado de Querétaro, Volúmen II, Siglo XIX (1765-1910, Juan Pablos Editor, S.A., Gobierno del Estado de Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, México 1989, Págs. 182-183.

Sin embargo, a pesar del interés que concentraban los terrenos baldíos desde 1813, y el muy claro de 1845 cuando del Raso elabora su Estadística y también en 1854 cuando Balbontín, con tantas dificultades integra la suya, aun no ha sido posible encontrar algún documento que indique que en Querétaro se produjo alguna legislación particular sobre estos terrenos, como lo habían hecho otros estados. Por ejemplo, en Guanajuato, según informó el Sr. Lemus, en la sesión del 14 de junio del Congreso de 1856 en que se debatieron estos asuntos, había habido "grandes despojos de terrenos y el gobernador cometió robos escandalosos". (37)

De manera independiente a que en apariencia en Querétaro no se produjeron leyes específicas sobre baldíos y que las leyes de 1856 y los decretos de 1859 se aplicaron hasta 1860, los hacendados y rancheros que son los dos tipos de propietarios que ya aparecen definidos en 1860, procuraron extender sus terrenos en base a la propiedad comunal y de los municipios.(38) De manera independiente a las posiciones políticas que dividían al país, estos propietarios buscaron acrecentar sus propiedades bajo el caos administrativo que caracterizó este período de la historia nacional. Si la preocupación de los liberales era crear una sociedad de propietarios individuales que destruyera para siempre la propiedad comunal y la de las corporaciones civiles y eclesiásticas como bienes improductivos "de manos muertas" que fomentaban la proliferación de los individuos "rentistas" y el

(37) Francisco Zarco, Op. Cit. Pág. 186

(38) La expropiación de los terrenos de algunos de los 65 individuos beneficiados por la ley de desamortización aplicada en Cadereyta fueron desarrollados en el inciso No.2 del capítulo II de este trabajo.

atraso de la nación, para los propietarios de la tierra esa preocupación tomaba dos vertientes:

Por un lado les creaba serios conflictos económicos al obligarlos a reconocer y liberar los capitales piadosos que gravaban sus fincas. Problema real por la falta de liquidez que sufrían desde 1810 y que los había llevado a continuar los reconocimientos hipotecarios a la única institución que en ese entonces seguía teniendo recursos: la Iglesia. Bajo las penurias económicas muchos perdieron sus propiedades. Por otro, para aquellos que lograron mantener sus capitales "ocultos" desde antes de las leyes de desamortización tuvieron oportunidad de expandir sus bienes a costa de los terrenos de las comunidades indígenas y de los pueblos colindantes con sus haciendas.

Si bien las leyes de desamortización en la práctica tendieron a conformar una sociedad de propietarios individuales integrada por los mestizos y los "nuevos criollos" y a convertir a las poblaciones indígenas en fuerza de trabajo de aquellos más diestros para la producción, negándoles en la práctica el derecho a la ciudadanía, parece ser que en Querétaro la apropiación de las tierras de los pueblos se había realizado antes de la aplicación de las leyes liberales.

Juan María Balbontín, relata el despojo que las haciendas habían hechos de las tierras de los pueblos y las comunidades. En San Juan del Río poblado que contaba con un fundo de 7 000 varas a todo rumbo concedido en 1558,

en el día solo tiene algunos pedazos de terrenos insignificantes, porque los particulares dueños de fincas

rústicas están en posesión de esa área hasta en el centro de la población; de modo que exigen a los vecinos renta por los sitios en que están fabricadas sus casas, aun en las calles principales. Tales son las haciendas de Guadalupe, el Barreno, San Jacinto, La venta de San Cayetano, la Guitarrilla, Santa Cruz y más que todas, la hacienda de la Llave, que está posesionada de más de una cuarta parte de los límites del referido radio, ignorándose cuáles sean los títulos que esos poseedores tengan en propiedad.(39)

En la misma situación estaba el pueblo de Tequisquiapan que había recibido "como fundo legal, en 1582, seis caballerías de tierra con sus lindes, y en la actualidad no conserva ni el fundo legal, debido a que las haciendas inmediatas se hallan en posesión de esos terrenos". (40) También el Pueblito (San Francisco Galileo) y Santa Rosa para 1854 habían perdido las tierras concedidas como mercedes reales.

No obstante el despojo arbitrario de sus propiedades después continuado por la desvirtuada aplicación de las leyes que de manera tan manifiesta tendían a despojarlos de sus derechos, los indígenas se negaban a desaparecer del panorama social de la nación mexicana: a lo largo de la historia presentan los recursos para manifestar su oposición a la usurpación de sus propiedades y exigiendo la justa devolución de sus terrenos. Recursos que eran acompañados, cuando los tenían, por los títulos de propiedad concedidos durante la colonia.

Sin embargo, las demandas de devolución de tierras se incrementaron durante el Imperio de Maximiliano, sin duda por la sensibilidad que este gobernante demostró a los problemas de los

(39) Juan María Balbontín, Op.Cit. Pág. 9

(40) Idem. Pág. 11

pueblos y las comunidades indígenas. En su mayoría, las demandas de devolución de los terrenos presentadas durante el Imperio francés, no solo dejan ver que el despojo de los pueblos se venía realizando desde antes de las leyes de desamortización, como lo indica Balbontín, sino también que los pueblos y las comunidades indígenas no tenían acceso a los recursos legales para defender sus propiedades. Recurso que fue puesto en sus manos por la legislación de Maximiliano sobre los fundos de los pueblos (proyecto ley aprobado el 10. de septiembre de 1866) y su mandato expreso a que se reconociera a los indígenas personalidad civil para litigar sobre sus tierras.

En el ocurso de los vecinos de San Juan de Guedo, de la villa de Santa María de Amealco, del 25 de noviembre de 1865, firmado por el Juez de Paz José Eusebio Peña y 25 firmas más, se puede apreciar que muchos despojos -de los terrenos- se habían consumado antes de la emisión de las leyes de desamortización. También deja ver que la falta de los títulos de propiedad, que demostraran la validez de sus demandas, y la coalición establecida entre los funcionarios públicos y los hacendados del lugar, les habían impedido exigir legalmente la devolución de las tierras acaparadas por los hacendados:

A nuestro propio derecho y a nombre del común de dicho pueblo: en el año 1558 el virrey de México Luis de Velasco le concedió a nuestro pueblo la merced de un sitio de tierra de estancia de ganado mayor el cual habían poseído nuestros progenitores desde antes de la conquista para que continuara la congregación del pueblo, como ha continuado desde aquella fecha remota...disfrutando de aquel terreno parte dividido entre particulares parte en común para uso y aprovechamiento de todos los vecinos. Más habiéndose

destruido y confundido con el tiempo las señales que marcaban sus límites y linderos, las colindancias por el viento del Oeste que son los propietarios de la Hacienda de Molinos de Caballeros se han usurpado poco a poco una parte considerable de los terrenos de comunidad al grado de haberse reducido nuestro pueblo a la mitad del que antes poseía y aunque han estado siempre dispuestos a establecer las reclamaciones correspondientes no lo habían verificado porque carecían de los títulos de fundación y propiedad respectiva y después, es decir desde el año 1853 que recabaron testimonio en forma de los originales que obran en el Archivo General del Imperio...el estado de revolución constante nos había retraído. Hoy, alentados por la paz que empieza a renacer...nos hemos resuelto a decir nuestro incuestionable derecho. Como la posición social (de los hacendados) es harto superior a la nuestra porque son personas más poderosas e ilustradas y disfrutan de la amistad y patrocinio del actual subprefecto de la villa de Santa María Amealco, pueden mover a su favor resortes e influencias de la que nosotros carecemos...tememos sufrir la pérdida de nuestros derechos o por lo menos que empleando nuestros contrarios en su defensa no solo recursos legales sino esos que se llaman en el foro chicanas (Sic) alarguen el juicio indefinidamente multiplicando trámites con perjuicio casi insoportable para nosotros. (41)

Las dificultades de los indígenas para recuperar legalmente sus propiedades, pese a la disposición favorable que hacia ellos guardaba el Emperador Maximiliano, suscitaba los enfrentamientos violentos: invasiones de las haciendas. Enfrentamientos que habían sido su único recurso a lo largo de la historia. Por ejemplo, los vecinos de Santiago Mexquititlán, poblado también perteneciente al distrito de Amealco, arrastraban viejos conflictos con los dueños de la hacienda De la Torre. El prefecto del distrito informa a Maximiliano de Habsburgo, quien había indicado, ante las varias demandas de los indígenas, que se "hiciera pronta y completa justicia", que

la cuestión ha tomado un caracter alarmante... a consecuencia de algunas providencias tomadas y llevadas a efecto por los dueños De La Torre. Valiéndose de arbitrios violentos que aquellos han rechazado también de hecho de lo que resultó un motín en que hubo algunos heridos...(en virtud de lo cual) ordena que los vecinos de Santiago y los dueños De la torre se presenten a la prefectura con los títulos en que fundan sus derechos...(42)

Estos pobladores de Santiago Mexquititlan, por orden de Maximiliano, obtienen:

Tambien se les concede conforme a la resolución soberana se expida a los indígenas la licencia respectiva para litigar si de dicho exámen se sostiene su conocimiento de que podrían hacerlo con posibilidades de obtener favorables resultados en el juicio

También los vecinos de Santa Rosa presentan ocurso legal contra los dueños de la Hacienda de Buenavista y los vecinos de la Laja y Echevarría en el Distrito de Cadereyta. En el caso de éstos últimos el ocurso lo promueve Cenobio Días, como apoderado de los indígenas. Por su parte, los vecinos de San José de los Amoles también solicitan se revisen los títulos de propiedad de la hacienda del Extoraz y del pueblo de Bucareli, quienes les habían quitado unos terrenos. Sobre este asunto el prefecto del distrito de Jalpan informa que es cierta la demanda del pueblo de San José de Amoles. La decisión en este caso, para no perjudicar los intereses de los pueblos afectados y las haciendas es: señalarles una legua por cada viento en lo que no se perjudique ni los pueblos ni las haciendas con las que linda.(43)

(42) Idem

(43) Idem

Los problemas entre los pueblos y las haciendas tendieron a agravarse por la formación de las "fuerzas rurales" o fuerzas armadas "populares" formadas al margen de las militares existentes. Fuerzas que quedaban al mando de los hacendados puesto que eran ellos los que tenían que financiar los pertrechos, animales y salarios de los rurales. Por ejemplo, el 19 de febrero de 1863 Juárez emitió el decreto que otorgó bastante libertad a las entidades federativas para organizar fuerzas armadas "populares" al margen de las ya existentes.

Sin perjuicio a la organización militar que hasta hoy se ha dado o en adelante se diere a la Guardia Nacional del Distrito, el gobernador del mismo procederá inmediatamente a la organización de todas las fuerzas populares que puedan ponerse en acción contra los invasores del territorio mexicano.

Por su parte la regencia del Imperio también dispuso la organización y servicio de fuerzas rurales de policía de seguridad el 2 de julio de 1863. En el caso de estas organizaciones populares armadas para Juárez y Guardia Civil para Maximiliano, podría darse el caso que en una misma población se organizaran fuerzas, "para la defensa del lugar", apoyados unos en el decreto de Juárez y otro en el del Emperador. Razón por la que los prefectos no ponían mucho empeño en organizarlas. Por su parte los propietarios de las fincas rústicas de diversos distritos también se oponían a la medida argumentando, "la mucha distancia en que se hallan algunos pueblos de la cabecera del distrito" que hacía inoportuno cualquier ayuda que se les prestara, y sobre todo, "la resistencia de algunos propietarios para contribuir al

establecimiento y subsistencia de las referidas fuerzas". (44) En virtud de esta oposición, se dispuso la formación de una milicia con la denominación de "Guardia civil" de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley que con el mismo fin se había expedido en el país en julio de 1858. Se buscaba contrarrestar con esta guardia el vandalismo que a la sombra de la guerra entre liberales e imperialistas asolaba al país:

La revolución desastrosa e inmoral que ha causado tan hondos males a la nación, deja por todas partes las huellas de su dominio, en el espíritu de subversión y en el vandalismo que ha fomentado haciendo una guerra a muerte a todos los derechos y todas las garantías sociales. Teniendo el ejército franco-mexicano que obrar en campaña contra las mayores fuerzas organizadas de los enemigos del Imperio, no puede dejar en cada una de dichas poblaciones la guarnición suficiente para su seguridad, no siendo fácil tampoco establecer una fuerza pública mantenida por el erario o por los municipios que la pusieran a cubierto de los ataques de los facciosos y malhechores cuyas bandas recorren algunos distritos distantes de los puntos donde pudieran ser auxiliados (45)

La justificación de la ley estaba avalada por los ocursoos que enviaban los prefectos de distritos en todo el país. El prefecto de Jalpan el 26 de febrero de 1863, por ejemplo, había informado que se estaban efectuando varios robos por el rumbo llamado del Tezontle de Cerro Gordo. Su interpretación sobre las causas del vandalismo no podía ser más desalentadora. Consideraba el prefecto que "el estado de desmoralización en que se encuentran aquellas localidades no puede ser más triste". (46)

El propósito de los imperialistas y de los liberales de

(44) AGN, Gobernación, Caja 490 Exp. 4

(45) AGN, Gobernación, Caja 490 Exp. 4

(46) AGN, Gobernación, Caja 501 Exp. 3

evitar el vandalismo y al mismo tiempo de organizar fuerzas que protegieran los lugares conquistados al "enemigo", fue diestramente aprovechado por los hacendados quienes empezaron a utilizar estas fuerzas, que ellos financiaban, para desalojar a las poblaciones vecindades en el territorio de sus haciendas. Esta desvirtuación práctica de las que ya se empezaban a llamar fuerzas rurales, es manifiesta en la protesta que envía la Junta protectora de las clases menesterosas, formada durante el Imperio, por la disposición dada por el Comisionado de la 3a. División territorial al prefecto político de Guanajuato. División que comprendía a Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas. (47). El ocuro también deja ver que la expansión de la hacienda fue brutal en los parajes distantes de las ciudades y las villas. Es decir en la Sierra Gorda, la zona compartida entre varios estados que controlaba la 3a. División. El Comisionado instruía al prefecto para que,

prevenga a las autoridades que le están subordinadas, presten auxilio a los hacendados siempre que lo necesiten para quitar los ranchos mal vecindados que se encuentran en sus posesiones. Esta disposición (decía Faustino Chimalpopoca presidente de la Junta) que aparentemente tiene por objeto garantizar su derecho a los propietarios y destruir los focos de vandalismo, va a ser sin duda el arma terrible que los hacendados de la Sierra de Guanajuato esgrimirán contra los indefensos serranos. En el Dpto. de Guanajuato fuera de las ciudades, villas y pueblos no existe más centro de población que la parte inmediata a las casas de las haciendas y esos ranchos lejanos sólo se encuentran en la sierra, de manera que aunque no se exprese es necesario convenir que dicha disposición fue dictada para los serranos exprofeso... Los serranos tienen sus derechos desde los tiempos del gobierno virreinal en virtud de lo cual han formado sus ranchos y tiene adquiridos sus derechos de los que no

pueden ser privados por los hacendados. (48)

En Amealco, el propietario de la hacienda Molinos de los Caballeros, quien había expandido la hacienda a costa de las comunidades colindantes con la finca, reporta en febrero de 1866 que se había detectado "a un general liberal y las haciendas que quedaban cerca del Río Lerma temen ahora las incursiones de las gavillas". Es evidente que las dichas "gavillas" en ocasiones eran los mismos indígenas usurpados. Sin embargo, bajo el carácter de la pugna con los liberales, el Imperio concede al dueño de la Hacienda Molinos de Caballeros, para la defensa del lugar, que "volviera a armar a los sirvientes que unidos con los gendarmes hacen un fuerte de más de 30 hombres". Hombres armados que quedan en la hacienda como guardia estable.(49)

Los problemas de los pueblos y las comunidades indígenas con los hacendados por la defensa de los terrenos de los que habían sido expropiados, tendieron a agudizarse después del Imperio de Maximiliano. En gran medida, porque durante el breve periodo de la intervención francesa habían probado que legalmente se podía exigir la devolución de sus terrenos. Por otra parte, muchos que carecían de los títulos de propiedad pudieron acceder a ellos por el servicio que prestaba el Archivo de la Nación. Por ejemplo, José Gil Flores, apoderado jurídico del común de vecinos del pueblo de Santiago Tlazala, solicita al Archivo que le envíe copias autorizadas de los títulos de propiedad del pueblo.

(48) Ocurso del presidente de la Junta protectora de las clases menesterosas, Faustino Chimalpopoca al Emperador Maximiliano del 24 de mayo de 1866. AGN, Gobernación, Caja 534, Exp. 3

(49) AGN, Gobernación, Sec. 3/866/1/1

También los hacendados pedían información sobre los títulos de propiedad, a fin de defenderse de las demandas indígenas. Por ejemplo, Maximino Reynoso y del Corral quien estaba interesado en adquirir la hacienda de Chichimequillas de la jurisdicción de Silao, estado de Guanajuato, el 31 de diciembre de 1873 pidió al Archivo le enviara tres copias autorizadas de algunos documentos:

relativos a los litigios que han promovido algunos indígenas habitantes de dicha hacienda a los diversos dueños de ella, con motivo de la reedificación de un pueblo que ellos aseguran haber existido dentro de los límites de dicha hacienda de Chichimequillas (50)

La expropiación de la tierras de los pueblos, como proceso ininterrumpido desde principios del siglo XIX, empezó a tomar otras dimensiones después de 1870. De parte de los hacendados, la lucha se traduce en el acopio del agua, vital para la construcción de la infraestructura de riego que se requería para aumentar la productividad de los terrenos. Lucha por el agua y la tierra que provocó los largos y penosos conflictos suscitados por la defensa de los límites entre los estados vecinos, las haciendas entre sí, entre las haciendas, las comunidades indígenas, los pueblos y los municipios. Proceso que si bien se entreje con la lucha de los pueblos por sus tierras, siguió un curso diferente amarrado a los problemas y dificultades enfrentados, desde 1824, para definir una división territorial acorde a los intereses nacionales. En cambio, para los pueblos si bien la lucha se siguió sosteniendo en torno a la recuperación de los fundos concedidos por las mercedes

(50) AGN, Gobernación, Caja 578, Exp. 14

reales, también, después del triunfo de la revolución de Tuxtepec, empezaron a tomar forma las denuncias contra los "malos tratos" recibidos de los hacendados. Por otra parte, al no ser resueltas sus demandas sino que, por el contrario, se había incrementado la voracidad de la hacienda, empezaron a recurrir a los levantamientos armados y a las invasiones de los terrenos que consideraban de su propiedad.

3. La defensa de los límites

Al consumarse el establecimiento de un nuevo sistema de gobierno el 3 de octubre de 1835, el país se dividió en departamentos. Esta modificación ratificada por las leyes constitucionales de 1836 no alteró la distribución política y administrativa el territorio nacional. El departamento de Querétaro en 1836, al igual que en 1825, estaba compuesto por 6 distritos: Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta, Tolinán, Jalpan y Amealco. Sin embargo, desde la publicación del Plan de Jalapa que llevó a Anastasio Bustamante al poder ejecutivo el 31 de diciembre de 1829, administración conocida como de Alamán (1830-1831) los cuadros políticos queretanos se habían venido preocupando por establecer las dimensiones exactas del territorio estatal y los límites de los seis distritos -en que estaba dividida la entidad- en sus colindancias con los ranchos y las haciendas.

Apoyando la ideología conservadora de mantener el orden y la

estabilidad, que representaba Alamán, los queretanos, al igual que las otras entidades, se preocuparon por defender su soberanía amenazada por las tendencias centralistas del nuevo régimen, también distinguido por los sangrientos métodos usados para someter a las facciones y grupos sociales opuestos al cambio del sistema de gobierno.

Posiblemente Querétaro más que ninguna otra de las entidades del país por lo reducido de su territorio, la falta de unidad política de la Sierra Gorda y la pobreza que todavía predominaba en las ramas de la economía local devastada por la revolución de independencia sentía su debilidad frente al proyecto, que se comentaba tenían los conservadores, de reducir el número de estados o de modificar la organización territorial y política de la República. Plan que no era factible, y así era reconocido por todas las facciones políticas en este momento, porque la constitución Política de 1824 había fortalecido y creado intereses regionales que no se someterían voluntariamente a un cambio radical en el sistema.(51)

Para los queretanos, sin embargo, no bastaba con reconocer que políticamente no había riesgo, por lo menos en el corto plazo, de ser subsumidos por alguna de las entidades vecinas fuertes como lo era el amenazante, por poderoso y extenso, estado de México, o el no menos importante estado de Guanajuato. La clase política dominante de Querétaro, los aristócratas hacendados y los dueños de los obrajes, sabiamente consideraban que había que tomar

(51) Michel P. Costeloe, *La primera República Federal de México 1824-1835*, México, F.C.E. 1975, Pág. 279

medidas oportunas para fortalecer económicamente la región y enfrentar a los devaneos políticos que predominaban en el país. Era preciso delimitar claramente los límites estatales y distritales para detener los afanes expansionistas de los estados vecinos. Simultáneamente había que fortalecer la agricultura e impulsar el crecimiento de la producción textil, aprovechando el crédito que abría el Banco del Avío creado por Alamán en 1830.

El trabajo no menos importante de la delimitación geográfica del estado, fue realizado por el coronel Francisco Camargo en 1831. Plano que sirvió de base a las memorias estadísticas que sobre Querétaro se elaboraron en 1848 por Antonio del Raso. En 1854-1855, por Juan María Balbontín y años más tarde en 1875, por José Antonio Septién y Villaseñor.

Aparentemente de 1825 a 1860, Querétaro no sufre transformaciones sustantivas en lo que se refiere a la extensión territorial y sus colindancias con los estados vecinos (52). Las preocupaciones se concentraban en la recuperación económica de la hacienda. Por otra parte, la muerte de los viejos propietarios (los de fines del siglo XVIII), la ley de 1823 que había dictado la disolución de los mayorazgos y el inicio de la aplicación de las leyes de reforma en 1860, generaron el cambio de manos de la propiedad y de los patrones sociales tanto de los hacendados como de los trabajadores rurales. Condiciones que sumadas a la inestabilidad política que predominaba durante estos años y los continuos levantamientos armados de la Sierra y las incursiones

(52) Las diferencias de tamaño del estado que registran del Raso en 1848 y Balbontín en 1854, parecen deberse a la forma de establecer el cálculo

de los alzados en las fincas de los valles, impedían la consecución de la meta programada de recuperar la bonanza característica de Querétaro a fines del siglo XVIII. Fue a partir de 1876 cuando se alteró la división interna de los distritos y se inició el reacomodo político del estado. Cometidos realizados en medio de una gran violencia. Sumió a algunos poblados en la pobreza y se les despojó de sus terrenos. En la mayoría, quedó grabado el resentimiento político, sobre todo en los pueblos indígenas, por los atropellos sufridos.

Paradójicamente, el esfuerzo por propiciar un fuerte desarrollo económico de la clase propietaria que a su vez garantizara una poderosa fuerza política regional capaz de defender, en su oportunidad, la soberanía estatal, constituyó a la vuelta de los años -segunda mitad del siglo XIX- la debilidad de Querétaro. La tendencia a centralizar las actividades productivas, administrativas y políticas en la ciudad y distrito de Querétaro, y el fortalecimiento de la hacienda con base en la concentración del agua y la tierra de los pueblos, debilitó, aún más de lo que ya lo eran, a los distritos que tradicionalmente habían sido asiento de las comunidades indígenas, como eran Amealco, Jalpan y Toluimán. No es por eso al azar que los grandes litigios sobre los límites estatales tengan lugar en estas zonas fronterizas en donde los hacendados queretanos habían perdido presencia precisamente porque no tenían fuertes intereses económicos de por medio. Así se abrió el camino para que los hacendados de los estados vecinos quisieran expandir el ámbito de poder de sus haciendas a costa del suelo y el agua de las

comunidades indígenas de Querétaro, olvidadas por la clase propietaria regional.

Los conflictos serios sobre los límites se suscitan en aquellos casos en que las clases propietarias queretanas estaban interesadas en conservar o extender sus territorios y el control agua. También cuando los estados vecinos proyectaban ampliar sus límites a costa del suelo queretano. Es decir, cuando los intereses económicos y políticos de las clases propietarias se veían amenazados por las necesidades expansionistas de los hacendados de las entidades vecinas, se entablaban los largos y tediosos litigios sobre los límites.

Las tendencias expansionistas de las haciendas sobre las tierras de los pueblos fueron abiertamente legalizadas por las leyes de 1856, que recrudecieron, nacionalmente, la avaricia de los hacendados. En el proceso, crearon la necesidad política de reordenar la distribución territorial de la República con bases más objetivas y generales. Asunto debatido en las sesiones para la Constitución de 1857. Los debates, acalorados, porque se bordaba sobre los intereses particulares de las clases propietarias del país, afectaban particularmente al estado de Querétaro. Primero a través de la pretensión de crear el Estado del Valle de México y el propósito de trasladar los poderes federales a Querétaro. (También se pensó en Aguascalientes). El artículo 50, "...el Distrito Federal que se establecerá en Querétaro" aparecía como un intento nada fortuito de aniquilar la existencia del estado. La idea fue desechada comenta O'Gorman, porque "el señor Reyes consultó la subsistencia del estado de

Querétaro". (53) La otra amenaza fuerte era la propuesta de crear el territorio de la Sierra Gorda. Asunto que venía desde la administración centralista de 1853, y que en esta ocasión fue desechado.

Aparentemente, los constituyentes de 1857, no lograron en lo que a la distribución política de la República se refiere, superar los intereses personales del poderoso grupo de los hacendados, aún cuando reconocían como dice O'Gorman, "la importancia que tenía para el país la solución del problema territorial". El dictamen de la mayoría, después de ese reconocimiento se excusó, continúa O'Gorman, "de no someter a la consideración del Congreso una división científica en razón de la premura del tiempo, el estado de agitación en que se encuentra la República, y la falta de documentos estadísticos..."(54)

Posiblemente el proyecto de establecer una división territorial más acorde a las necesidades del país se realizó durante el fugaz Imperio de Maximiliano. No obstante la propuesta hecha -Ley expedida el 3 de marzo de 1865- también recibió el rechazo de los estados afectados en sus extensiones (55) y también porque las divisiones limítrofes en ocasiones dividían a los municipios afectando la vida de los pueblos. Por otra parte, al intentar aplicar la ley de división territorial fue evidente que los lugares más alejados de los centros de decisión política -las

(53) Edmundo O'Gorman, Op. Cit. Pág. 132

(54) Idem. Pág. 73

(55) Por mencionar algunos de los estados que disminuyeron su superficie con esta legislación: Yucatán en 6 801 pasó a 4 902; Campeche de 6 801 pasó a 2 975; Chiapas de 2 598 a 1 871; Oaxaca de 3 288 a 1 839; Guanajuato de 1 545 a 1 452.

capitales de los estados- eran totalmente desconocidos.

Bajo la legislación territorial de Maximiliano, Querétaro ampliaba considerablemente su territorio y su población, viejo anhelo de sus habitantes, (su superficie antigua era de 869 leguas y con la nueva ley era de 946. Su población, antes de 165 155, crece a 273 515) pero también, es evidente que las poblaciones anexadas les resultaban extrañas y ajenas.

Confina al norte con los departamentos de Potosí y de Tamaulipas, de los cuales está separados por el cauce del Río Santa María de Bagres o Tamuín hasta su unión con el Moctezuma para formar el Río Pánuco. Al este con los Departamentos de Tuxpan, de Tulancingo y de Tula, sirviendo de límites el cauce del río San Juan Paté o Moctezuma, en todo su curso, hasta reunirse con el Pánuco, y la línea que une el río de San Juan con el Lerma. Al Sur con los departamentos de Toluca y Michoacán, de los cuales está separado por la corriente del río Lerma. Al oeste con el Dpto. de Guanajuato, siendo la línea divisoria la que separaba a los antiguos departamentos de Querétaro y Guanajuato, hasta el punto en donde corre el río de la Laja, y en seguida este mismo río, en todo su curso, hasta su incorporación en el río Lerma. Su capital Querétaro. (56)

La expansión de Querétaro realizada a costa de los municipios de San Luis Potosí generó la protesta de este estado:

Hay que tenerse presente que la línea divisoria con los departamentos de Guanajuato y Querétaro, es el río que tiene diversos nombres de Santa María, Bagres y este en su prolongado curso va dividiendo algunas poblaciones de la Huasteca de la manera como se verifica en la de Santa María del Río, dejando una parte considerable de ella para el departamento de Guanajuato y otro dentro del de San Luis Potosí.

(56) Ley del 3 de marzo de 1865, publicada en el Diario del Imperio No. 59 del 13 de marzo de 1865. AGN, Gobernación, Caja 514, Exp. 5

Para evitar problemas, el prefecto político de la Huasteca potosina sugería que cuando las poblaciones fueran atravesadas por algún río que servía de límite tal población quedara territorialmente como parte del estado de su anterior pertenencia. Esta sugerencia fue aceptada por Maximiliano de modo que el 3 de junio de 1865 en el Decreto expedido en Perote, asienta:

Quando las lines divisorias de los Departamentos marcados por la Ley de 3 de marzo fraccionen una población, no se observarán materialmente los límites legales, sino los designados para los ejidos por la Ley 8 título 3o. Lib. 6o. de la Recopilación de Indias. El artículo 2 de este Decreto manifestaba que: En caso de que resuelven graves inconvenientes del fraccionamiento de una municipalidad, los prefectos del Departamento a que pertenezca la cabecera lo manifestará al gobierno, proponiendo la providencia que estime adoptable.

Todavía más. Conocedor de las pugnas entre pueblos y haciendas, Maximiliano decretaba:

Los sitios en que se han de formar pueblos y reducciones tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas y labranzas y un ejido de una legua de largo donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros de españoles. (57)

Varios fueron los estados que protestaron por los límites establecidos, además de San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, alegando algunos que era imposible establecer la delimitación establecida "por las inmensas gavillas de juaristas que alejan la paz". El prefecto de Querétaro, por su parte, el 11 de septiembre de 1865,

(57) El Decreto se publicó en el Diario del Imperio No. 134 del 12 de junio de 1865.

manifiesta que la parte de la Huasteca que por la Ley de División Territorial debía de contarse en el departamento:

me es totalmente desconocida y para la incorporación de los pueblos y lugares que aquella consta que antes correspondían al estado de México y San Luis Potosí, no ha mediado comunicación alguna entre las prefecturas correspondientes por las cuales pudiera venir ésta (la de Querétaro) así en conocimiento de la posición, circunstancias y necesidades de los pueblos

En este caso, el 28 de septiembre de 1865, la municipalidad de Valles que se había anexado a Querétaro es reincorporada a San Luis Potosí. En cambio Tamuín se anexa en toda su extensión a Querétaro. Sin duda esta distribución que buscaba una integración más racional de las zonas geográficas que guardaban similitudes sociales y económicas, como era la Huasteca colindante con la Sierra Gorda queretana, no fue ratificada al triunfo de los liberales.

Posteriormente, con el restablecimiento de la República, los queretanos se preocuparon por establecer una distribución más racional de los distritos y municipalidades de su territorio. Sin embargo, el asunto de los límites y la organización interna del estado creaba fuertes polémicas entre los políticos hacendados queretanos. Timoteo Fernández de Jáuregui, en el informe que rinde de su visita al distrito de Cadereyta en 1874 decía:

Hay la necesidad de perfeccionar la división territorial de los distritos de Tolimán, Cadereyta y el centro, porque la que ahora tienen es la más inconveniente...para los que conocen ese terreno comprenderán que es un absurdo que las fracciones de Esperanza (hacienda), tan cercanas a la capital, pertenezcan a Tolimán y lo es también que la

hacienda de Ajuchitlán y el pueblo de San Antonio Bernal, que puede decirse que es un arrabal del mismo Bernal, y que distan muy poco de cadereyta...pertenezca al mismo Tolimán... (58)

Asimismo, los problemas que tenía Querétaro para encontrar una demarcación política que facilitara los trámites fiscales, judiciales y administrativos de los pueblos y las haciendas, también tenían lugar en otros estados de la República. La definición de los límites estatales eran fuente de conflicto en otras regiones del país, en donde usualmente, como en Querétaro, tenía que mediar primero el arreglo privado de los hacendados afectados. Por ejemplo, el decreto de Sebastián Lerdo de Tejada del 30 de abril de 1874 decía:

se aprueba el convenio que el 18 de noviembre de 1873 celebraron los gobiernos de los estados de Jalisco y Zacatecas, para fijar los límites de esos estados, en el punto que comprenden la población de Ojuelos y terrenos del Llano y Cacalote, pertenecientes estos dos últimos lugares citados a la hacienda del Cuidado..." (59)

De una u otra manera, después de 1857, Querétaro aparecía débil frente a los estados vecinos. Los intentos por apropiarse parte del territorio queretano se arreciaron a partir de entonces. Sin duda estos afanes fueron estimulados por el decreto del 20 de abril de 1878 que tendió a fraccionar la propiedad comunal y convertirla a través de las titulaciones en propiedad individual que se ponía a la circulación. Legislación que suscitó el llamado asunto de "los terrenos" que no era otra cosa que la agudización

(58) Sombra de Arteaga 1874

(59) Sombra de Arteaga, 17 de mayo de 1874

de los conflictos entre los pueblos y las haciendas por la tierra y el agua. También ejerció una fuerte influencia en los problemas que sobre los límites tiene Querétaro con los estados vecinos, el establecimiento del imperio de Maximiliano en la ciudad capital del estado; acontecimiento que dividió y desgastó a una generación política y económica, y que volvió a sacar a la luz las viejas denuncias a Querétaro como un estado conservador que no luchaba por la defensa de la nación, como había pasado en 1824. En virtud de estos problemas ideológicos, la reconstrucción de Querétaro después de 1867 hasta 1880, gravitó sobre la defensa de su territorio. Defensa que se identificaba con la consolidación de la gran propiedad.

Las influencias reseñadas, de peso e importancia, no restan valor al problema fundamental creado por los queretanos: la debilidad política del estado frente a San Luis Potosí, Guanajuato, México e Hidalgo, se había fincado en el proyecto de consolidar, a toda costa, una clase dirigente fuerte regionalmente. El poder de las clases propietarias se logró sin duda alguna, pero el precio político fue muy alto. No solamente se deterioraron las relaciones sociales de los distritos lejanos del centro del poder del distrito y ciudad de Querétaro, sino que también se contribuyó a fragmentar aun más un territorio que desde la lucha por la independencia se sabía estaba desintegrado.

3.1 Fortalecimiento del distrito de Querétaro

Para los queretanos la ciudad de Querétaro era algo más que la sede del poder gubernamental y el centro de la vida política estatal. La ciudad era el simbolo de la riqueza o de la pobreza que predominaba en la entidad. Firmemente se creía que una ciudad ordenada y rica, merecería el respeto y admiración de sus coterráneos (60). Con este propósito en la mira, de realzar la presencia politico-social de la ciudad en el ámbito nacional, presencia que se esperaba otorgara al estado mayor fuerza en las fluctuantes negociaciones y avatares republicanos de estos años, se reordenó la división territorial de la entidad y se favoreció y estimuló la conformación de una clase propietaria hegemónica.

Sin hacerlo programa de gobierno, en la práctica el desarrollo de la entidad en su conjunto se supeditó a la expansión y fuerza de las actividades económicas del distrito de Querétaro. Amealco, Toluimán y San Juan del Río, fueron los que más resintieron la expansión de Querétaro. Cadereyta y Jalpan, distantes geográfica y políticamente de la ciudad capital, se mantuvieron como feudos militares que negociaban su sometimiento

(60) Había una abundante historiografía que desde el siglo XVIII venía otorgando un gran valor a la ciudad "...la mas hermosa, grande y opulenta ciudad que tiene el Arzobispado de México, así por los muchos templos de suntuosa fábrica, que la adornan, orden de sus calles, y plazas perfectos edificios de casas, crecido número de familias de españoles, y demás calidades, estados eclesiástico y secular como su amenidad". Teatro Americano, de Villaseñor, "De la jurisdicción de Querétaro y sus pueblos", en Relato histórico de Querétaro, de José María Reyes, México, editor Vargas Rea, 1946 Pág. 31. Los elogios de Carlos Sigüenza y Góngora en su no menos famosa obra "Glorias de Querétaro", la descripción del Barón de Humboldt en su "Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España", eran entre otros, documentos que avalaban la riqueza y el poderío que tenía Querétaro y las "glorias" que habían dejado al buen nombre de la entidad.

al centro, precisamente por la tierra que había de por medio y la naturaleza escabrosa de la Sierra.

Por otra parte, la tendencia de las clases propietarias del siglo XIX de invertir sus capitales en las fincas urbanas de la muy noble y leal Santiago de Querétaro, como símbolo de prestigio social, creaba falsas expectativas sobre los ingresos del municipio de Querétaro provenientes del impuesto del 12 1/2 % sobre contribuciones al valor de la propiedad raíz. La práctica, sin duda, rentista de este grupo creaba serios problemas fiscales al municipio del centro de Querétaro y también a los 5 distritos restantes. El ciudadano regidor Hilarión Frias y Soto en la sesión de Cabildo del municipio de Querétaro celebrado el 11 de enero de 1874, señalaba la imposibilidad de que la propiedad ubicada en la municipalidad de Querétaro valiera la mitad del valor de la propiedad raíz de todo el estado valuada en ese entonces en 8 millones. Sin embargo, más enterado el síndico Méndez explicaba a Hilarión que debía

tenerse en consideración el que la mayor parte de los dueños de esta propiedad (la rústica) están radicados en esta capital, y esta circunstancia hace que sus enteros los hagan en la administración general de contribuciones
(61)

El empeño de las clases dirigentes, las propietarias, de consolidar su poderío económico coaligadas con el poder público que les pertenecía, o del que se habían apropiado pacíficamente, es decir, sin oposición de las clases sociales subalternas, asolaron, en su expansión, los pueblos que tradicionalmente
(61) Sombra de Arteaga, 1º de febrero de 1874, Pág. 3

pertenecían al distrito de Querétaro. (San Francisco Galileo -hoy el Pueblito- y Santa Rosa -hoy Santa Rosa de Jáuregui-). Dieron vida y auge a nuevos asentamientos de población (Hércules) del todo amarrados al nuevo estilo de producción que representó la industria textil, y se anexaron las aguas y las tierras que el fortalecimiento de la hacienda como sistema productivo requería. Violentaron así a los viejos pueblos indígenas de Querétaro.

El proceso sin duda alguna realizado con gran abuso de poder, generó la oposición pertinaz de las comunidades que se negaban a desaparecer o a entregar sus recursos naturales. Así, aun cuando los conflictos adquirieron distinto peso e importancia según se tratara de los pueblos asentados en las zonas de los valles o de aquellos ubicados en la Sierra Gorda, en realidad estuvieron determinados por la riqueza natural que poseían.

El proceso concentrador del agua y la tierra realizado por los dueños de las haciendas de Querétaro, requirió del acuerdo político entre todos ellos para "repartirse equitativamente" el suelo queretano y beneficiarse de las obras hidráulicas construidas por iniciativa de los más fuertes económicamente. En este reparto, en donde no contaban los pueblos indígenas, hubo porciones de terreno que quedaron sin dueño aparente. Por ahí se filtraron los intereses de los hacendados de las entidades vecinas que dieron lugar a los conflictos de los límites estatales.

En el Distrito de Querétaro dos fueron los pueblos que sostuvieron la expansión de las haciendas. La Villa de San Francisco Galileo (la del Pueblito) por cuyo suelo corría el río del pueblito que nacía en los cerros de Huimilpan, distrito de

Amealco y también el arroyo del Pueblito. (62) El otro pueblo era Santa Rosa (hoy Santa Rosa de Jáuregui) en cuyo cerro del Jofre y las Piletas nacía el río Juriquilla. Ya para 1848, la presa de Santa Catarina en Santa Rosa tenía dos acueductos de cal y canto, dice del Raso. Uno para la hacienda de Montenegro y otro para la hacienda de Santa Catarina, de 40 000 varas de largo. (63) La hacienda de Lodecasas tenía 4 bordos que se surtian del río Huimilpan, que pasaba por el Pueblito.

Los terrenos de la villa de San Francisco Galileo eran importantes por la cantidad de agua que ellos representaban. Según la descripción de Jose Antonio Septién y villaseñor, el río pasaba por el Pueblito, regaba las haciendas de Vigil, Carransa, Lodecasas, Venta de Zajay y Apapátaro.

Aumentando su corriente con las aguas del Arroyo Hondo y la presa del Bravo, penetraba hasta el distrito del centro por la hacienda de San Francisco Galileo, la cual atravieza...pasa por la Villa de Santa María del pueblito...entra a la hacienda de Balvanera y continúa hacia la Estancia de las vacas, por cuyo punto sale a la del Castillo (hacienda) del territorio de Guanajuato, verificando en las Adjuntas su confluencia con el Río de Querétaro (64).

San Francisco Galileo o el Pueblito, para mediados del siglo XIX ya había perdido sus tierras y sus aguas. Balbontín ya daba por hecho el despojo del pueblo en 1854:

(62) Los arroyos del distrito de Querétaro, Arroyohondo, el del Pueblito, el de Medina, el de Piletas, el de Buenavista, Pinales y el de Solana, surtian de agua dice Antonio del Raso a "la presa de Santa Catarina, cuatro bordes de Jofre, dos de Jurica y 7 en Chichimequillas". Antonio del Raso, Op. Cit. Pág. 13

(63) Idem, Pág. 16

(64) José Antonio Septién y Villaseñor, Op. Cit. Pág. 151

Sus habitantes (los del Pueblito, corta población de indígenas, acotaba) viven especialmente del cultivo de la tierra en las haciendas inmediatas a las que sirven en calidad de gañanes: como otros pueblos del Estado, no tienen ya las tierras concedidas por mercedes de los virreyes que existieron en el gobierno colonial, porque hoy las poseen las expresadas fincas. (65)

En la hacienda del Batán ya en 1844 se alimentaba la fábrica de hilados y el molino de trigo del gobernador Sabas Antonio Domínguez con las aguas del río que nacía en Huimilpan y pasaba por el Pueblito. La hacienda de Balvanera había hecho una gran toma dice Balbontín en 1854, "en los límites del pueblo de San Francisco Galileo o el Pueblito". (66) Los problemas del Pueblito para subsistir en medio de estas grandes haciendas fueron enormes. Contando con abundantes recursos naturales no había logrado, pese a las movilizaciones y demandas de la población, distraer un poco de agua para surtir a la población. "Por abusos punibles" reconocía Vieytez, los habitantes del Pueblito no habían logrado introducir el agua potable. Servicio que se obtiene en febrero de

(65) Juan María Balbontín, Op. Cit. Pág. 13. Las fincas que se ubicaban en los alrededores del Pueblito, o en su jurisdicción a partir de 1876, eran: "La Capilla de la Sra. Doña Guadalupe de Mena. La Comunidad, de la testamentaria de Mena, San Juanico y sus tres fracciones de los Sres. Jáuregui, CasaBlanca de Don Manuel Acevedo, Vanegas de la testamentaria de Mena, Jacal Grande de Don Eduardo Gutiérrez, Tejeda de la repetida testamentaria de Mena, San Francisco de la Dé, propiedad de Doña Margarita R. de Domínguez, El Batán de la misma señora, Balvanera de los señores Cabañas, La Cueva propiedad de la Sra. Doña Guadalupe Acevedo de Covarrubias, Bravo de Don Manuel Acevedo, San Rafael de Don Hermenegildo Feliú, La Estancia de Don Manuel Rubio, San Pedro Martir de Doña Refugio Rodríguez y Los Olvera de la testamentaria de Mena. Existen también los ranchos, Charco blanco, los Olvera, Ojo de Agua, Tinaja, Buenavista, Jaral y la Negrefa"

(66) Juan María Balbontín Op. Cit. Pág. 20

1880.

Los pobladores de Santa Rosa, cuyo río Juriquilla irrigaba la hacienda de Montenegro y Santa Catarina cultivaban al igual que los del Pueblito las tierras de las haciendas inmediatas.(67) Ricas y extensas haciendas y ranchos que hacían más evidente la pobreza e inacción de Santa Rosa. Hipólito A. Vieytes sin escrúpulo alguno comenta la situación de Santa Rosa por 1878:

El miserable pueblo de Santa Rosa, situado al Norte de la Capital del Estado a cinco leguas de distancia, moría de inacción y de pobreza. Sus habitantes habían deseado obtener un fundo legal para un pueblo, y el humanitario y filántropo Sr. Don Timoteo F. de Jáuregui, dueño de una hacienda limitrofe, con laudable desinterés le donó una gran parte de terrenos para su fundo, empero, deseaban más, porque hacia el Norte del pueblo, había habitantes, cuyo piso y cuya habitación pertenecía a los Señores Legarreta dueños de Montenegro, propietarios que no habían querido cederlos por las causas que no es del caso especificar. El Sr. General Gayón consiguió, previamente autorizado por la Legislatura, que los señores Legarreta vendieran no todo el terreno que los vecinos pretendían, pero si el suficiente para sus necesidades.(68)

Por la fundación y expansión de la fábrica El Hércules de Cayetano Rubio (69), en el antiguo molino Colorado, se afectó el

(67) En esta zona estaban las haciendas: "Juriquilla y San Isidro de don Bernabé Loyola e hijos, La Solana de don Isidro Fernández de Jáuregui, San Miguelito de don Ramón Sáenz Mendiola y Buenavista, Santa Catarina, Montenegro y Jofre de don Manuel Legarreta. Hay también algunos ranchos como Pinto, Presa de Becerra, Tecolote, Encinos, Tinajitas, Rochera, Pié de Gallo, Santa María, Barreta y Casa Blanca". José Antonio Sepitén y Villaseñor, Op.Cit. Pág. 367.

(68) Hipólito A. Vieytes, *Reseña histórica de la administración del señor general Antonio Gayón, gobernador del estado de Querétaro, desde el 21 de diciembre de 1876 hasta el 20 de marzo de 1880*. Querétaro, Imprenta de Luciano Frías y Soto 1880, Pág. 37-38

(69) El queretano-español, Cayetano Rubio ya era síndico procurador de Querétaro en 1821, cuando era Alcalde de la

desarrollo de San Pedro de la Cañada y surgió por 1840 con fuerza política importante el pueblo obrero de Hércules. Esta zona del distrito de Querétaro era sumamente importante; por ella corría el río Querétaro que contaba en 1854 con 4 diques que daban energía a los molinos de trigo, el Colorado, Blanco y San Antonio, además de irrigar las haciendas que a su paso iban quedando (70). Para 1848 en el distrito del Centro (el de Querétaro) se había realizado una importante obra hidráulica para el riego de las haciendas y como fuente de energía para la industria textil y los molinos de trigo. Antonio del Raso señala:

Para surtir de agua los molinos situados a la orilla del río hay dos presas bien construidas: por la primera vienen 22 surcos de agua por una acequia de cal y canto que tiene de largo 2 600 varas, 2 tercias de ancho y 3 cuartos de alto, que da movimiento al molino Colorado y a la hermosa fábrica de Hércules...de la segunda presa llevan seis

-
- ciudad Juan José Fernández de Jáuregui y entre los corregidores se encontraba Sabás Domínguez. *Diario de Querétaro* 1821, Pág. 44- Para 1839 Cayetano aparece entre los contratistas para el cultivo, fabricación y distribución del tabaco. Además de Cayetano Rubio eran contratistas, Benito Maquá, Francisco Rubio, Felipe Neri del Barrio, Manuel Escandón y Miguel Bringas. Cayetano Rubio y Manuel Escandón eran de los comerciantes, industriales y prestamistas más importantes de la época dice Bazant, Jan Bazant, Los bienes de la iglesia en México 1856-1875, México, El Colegio de México, 1971, Pág. 26.
- (70) El río Querétaro, dice Septién y Villaseñor, "dirige su curso por las haciendas de Otongo, Chichimequillas, la Griega y Saldarriaga, proveyéndose sus bordos y estanques para beneficio de las siembras de trigo...pasa enseguida por la Cañada...riega muchas huertas de árboles frutales, después continúa su curso hacia la fábrica Hércules...entra en el valle de Querétaro extendiendo algunos ramales...que fertilizan las haciendas de Carretas, Callejas y muchas huertas de la población e imprime movimiento a los molinos de trigo establecidos en su margen derecha...provee agua para las labores de las haciendas de la Era, Carrillo, San Juanico, Santa María Magdalena, la Capilla y el Jacal...sale por la hacienda de San Pedro Mártir a la del Castillo en Guanajuato". Septién y Villaseñor, Op. Cit. Pág. 149-150

surcos de agua a los molinos de San Antonio por una acequia de cal y canto que tiene 174 varas de largo y dos y medio de ancho, y del molino grande sale otra acequia para el chico de veintiuna varas de largo (71)

Sin pretender reseñarlo se puede afirmar que el incremento productivo de Hércules fué notable. Causa de admiración en todo el país y fuente de atracción de la población sin trabajo. En cuanto a lo que nos concierne Cayetano había hecho en 1854 las excavaciones en los manantiales de los Servines (25 surcos, 275 milésimas de agua) que le dieron el control del importante líquido en esta región. (72) Según la estadística de Septién y Villaseñor, Cayetano vendió de éstos, 11 surcos 434 milésimas de agua a diversas personas. A Eulalio León, a Dolores Trejo, a la hacienda de la Capilla, a la de Jacal Grande, Carrillo y San Juanico. Cediendo a la corporación municipal 5 surcos 416 milésimas que a él le sobran. (73)

El pueblo de Querétaro sufría las consecuencias de este acopio de agua para la industria textil, para los molinos de trigo y para las fábricas de aguardiente que se instalaron en la

(71) Antonio del Raso, Op. Cit. Pág 15

(72) Juan Antonio Septién y Villaseñor, Op. Cit. Pág. 329-330

(73) La obra hidráulica construida por Cayetano Rubio databa de 1844 por un convenio con el Ayuntamiento y con el gobernador Sabás Domínguez, quien también recibía los beneficios -de la obra hidráulica- en su fábrica de hilados del Batán: "...con fecha 27 de marzo de 1845, citó (Sabás Antonio Domínguez gobernador de Querétaro)...a todos quienes podían suscribir acciones de la empresa constructora del teatro...y suscribieron \$28,707.00 y a esta cantidad, aportada por los accionistas, se agregó el donativo de \$4,000.00 hecho por el Ayuntamiento, suma que pagaba Don Cayetano Rubio para que se le permitiera traer el agua de Los Socavones al Molino Rojo (Hércules)..." Fernando Díaz Ramírez, *Historia del Estado de Querétaro*, Querétaro, Tomo II (1837-1851), ed. Gobierno del Estado, 1979, Pág. 99.

Cañada. Los vecinos del Barrio de San Sebastián tenían derecho a una cierta cantidad de agua que venía de la presa de San Isidro. Sin embargo, tenían pleito declarado con los propietarios de los molinos y con los fabricantes de aguardiente que hizo famosos Valentín F. Frias en sus *Leyendas Queretanas*, (74) que ponían redes en el canal que conducía el agua al molino de San Antonio (de la casa Rubio). Se quejaban también de que D. Sinece Monfort había puesto una reja de hierro en el molino que poseía...acciones que entorpecían el libre curso del agua.(75)

En total, había en el distrito de Querétaro en 1876, 61 haciendas y 32 ranchos (76). La fuerza de estos hacendados e

(74) Valentín F. Frias, *Leyendas y tradiciones queretanas*, Querétaro, ed. del gobierno del Estado, 1989.

(75) *Sombra de Arteaga*. 1º de febrero de 1874

(76) En la zona de la Cañada estaban las haciendas: "Miranda, de los hijos del Sr. Marine, La Noria de Don José Venegas, La Machorra de Don Ramón de Vicente, El Colorado de Don José María Acevedo, Calamanda de Don Romualdo Mancilla, La Griega de la Sra. Doña Jesús Villar de Espinosa, El Lobo de don Amado Mota, Alfafayuca de Don Manuel Gómez de la Cortina, Atongo del Dr. don José María Flores, Amascala de la Sra. Rivas, Agua del Coyote de Don Andrés Michelena, Chichimequillas y San Vicente de don Hermenegildo Feliú, Santa Cruz del Lic. don Jesús Vázquez, San Pablo y Lagunillas, fracciones de Bolaños y el Pozo de don Vicente Serrano, Bolaños de don Ramón Veraza, Menchaca de don Mariano Pimentel, Palo Alto, de la Sra. Doña María Gutiérrez de Martínez Perea. Los Hernández, El Paraíso, Coyotillos, el Cerrito Colorado, Goymes, Corrales y La Mariola y las Navajas son ranchos de la misma municipalidad". Septién y Villaseñor, *Op.Cit.* Pág. 367-368. Además, en la jurisdicción de la municipalidad de Querétaro estaban las haciendas: Tlacote el Alto, propiedad de la Sra. Doña Guadalupe Llata de Llata, Tlacote el Bajo y Mompaní de los señores Cosío, Jurica el Grande y Alvarado de la Sra. Doña Dolores de Ecala, el Salitrillo de don Raymundo Mora, Carrillo de don Gil Ramírez, La Era de la Sra. Dolores Guerrero, La Laborcilla de don Merced Guevara, Carretas y Callejas de doña Guadalupe Samaniego, San Pedrito de doña Carmen Soto de Carrillo, San José el Alto de don Francisco Macías y Petehé de don Luis Saldivar; existen también algunos ranchos como Mendiola, San Bernardino y Conejo, como más importantes..." *Idem*, Pág. 367

industriales asentados en el distrito de Querétaro y las obras hidráulicas por ellos construidas afectaban a los otros distritos. Particularmente al de Amealco cuyo Río Huimilpan era tan necesario para las haciendas situadas en las cercanías de la Villa del Pueblito. Por eso en 1848, del Raso cita a Huimilpan, que pertenecía al distrito de Amealco, como un pueblo de Querétaro. La misma Villa de Santa Maria Amealco aparece en 1848 como una subprefectura de Querétaro.

Es factible pensar que si los hacendados del centro se habían apropiado del Río de Huimilpan tenían que dejar el resto de pueblos indígenas y sus pocos recursos naturales para los hacendados de este distrito. De tal manera que las congregaciones San José de Ito, San Bartolo, San Miguel Detí, San Juan de Güedo, San Miguel Tlaxcaltepec, San Pedro Tenango, San Ildefonso y Santiago Mexquitlán, quedaban aparentemente bajo el arbitrio de los poderosos dueños de las 5 haciendas asentadas en este distrito y en las de la vecina Villa de Tequisquiapan. Sin embargo, los caminos abiertos ponen en evidencia que los poblados de este distrito tenían más relación con los hacendados vecinos de Michoacán y México, cuyas haciendas penetraban el territorio queretano. La villa de Amealco estaba comunicada con San Juan del Río, con la hacienda de Arroyozarco en el estado de México con San Ildefonso, el pueblo otomí, la Estancia del Batán y Huimilpan (hacienda y pueblo que habían pasado a pertenecer a Querétaro). De San Ildefonso salía un camino para la hacienda Molinos de Caballero en Michoacán. Es decir, la vida de Amealco no dependía exclusivamente de las haciendas El Batán, San Nicolás de la Torre,

~~Galindillo, El Pinillo y la Muralla, asentadas en su suelo.~~

Guardaba estrechas relaciones con la hacienda Molinos de Caballero y con la de Arroyozarco. Relaciones que posteriormente estarán presentes en el debate de los límites de Querétaro con los estados de Michoacán y México.

Cuando en 1848 Querétaro asume como un pueblo de su jurisdicción a Huimilpan (de nueva cuenta en 1876 pertenece a Amealco), se incorporaba a las haciendas Los Cues, Santa Teresa, Apapátaro, Lodecasas Carranza, Lagunillas y vigil. El Batán, por el desarrollo industrial de Sabás Domínguez también pertenecía, de hecho, al distrito de Querétaro. De esta manera, el distrito de Querétaro concentraba los mejores suelos, las haciendas más irrigadas y el desarrollo de la industria textil. Por ende, se volvió centro de atracción de la población indígena y mestiza de los alrededores que había ido siendo expropiada por las haciendas. También afectó el desarrollo del distrito de Amealco, cuyos ingresos, siempre pobres y raquíticos, tendieron a bajar aún más al quedarse sin la circulación económica y vida social que representaban las haciendas irrigadas.

Sin embargo Amealco tenía además del Río Huimilpan el Río San Ildefonso, que nacía en las vertientes del cerro de Nadó en los límites con el estado de México. Corriente de agua que no beneficiaba a las haciendas queretanas de este distrito, sino a las de San Juan del Río, concretamente a la hacienda de Santa Rita en donde el Río San Ildefonso entroncaba con el Río San Juan. De esta manera, los hacendados queretanos no estaban particularmente interesados en el Río San Ildefonso. Agua vital para las

haciendas asentadas en los límites con el estado de México.

Posiblemente el fracaso de los hacendados de este rumbo en 1826 que, dice del Raso, "...tiraba a introducir el mismo Río por el rumbo de Contepec al valle de San Juan..." (77) llevó a olvidar las posibilidades de aprovechar estas aguas para el riego de las haciendas queretanas.

Así, por las aguas del Río San Ildefonso, se gestó el problema de límites con el estado de México. Conflicto en realidad entablado entre el rancho de la Cofradía en Aculco, estado de México, y el pueblo de San Ildefonso del distrito de Amealco, estado de Querétaro.

El asunto planteado por los límites entre San Ildefonso y el rancho de la Cofradía es muy ilustrativo, porque expresa que en muchas ocasiones los límites entre los estados eran ampliados o constreñidos según la importancia económica o amistad política existente entre los hacendados y los gobernantes. También deja ver que había acuerdos tácitos entre los hacendados. Los hacendados queretanos no tenían interés en las tierras irrigadas por el Río San Ildefonso en el estado de México. Por lo contrario, reconocían los derechos que supuestamente asistían al dueño del rancho de la Cofradía. Por eso, en este caso, los límites entre el estado de México y Querétaro no eran cuestionados por los hacendados sino por el pueblo otomí de San Ildefonso que reclamaba su derecho sobre el suelo y el agua. Aspecto en el que no serán escuchados. El arreglo a que se llega, desfavorable en todo sentido para San Ildefonso, ratificaba en la cláusula tercera

(77) Antonio del Raso, Op. Cit. Pág. 43

del convenio firmado el 19 de abril de 1879 en el rancho de la Cofradía, (78) que la división territorial entre los estados en litigio quedaba sin alteración alguna: el Río San Ildefonso. Ni Querétaro, ni el estado de México salían perjudicados con el convenio. Con la división se afectaba a los indígenas de San Ildefonso. De hecho, como los otomíes de San Ildefonso reclamaban las tierras que se adentraban en el estado de México, terreno del rancho de la Cofradía, se les prohíbe terminantemente hacer uso de los pasteos y montes que quedaban ceja arriba del río. De haberles concedido su demanda, la línea fronteriza tenía que modificarse favoreciendo a San Ildefonso, y por tanto ampliando los límites territoriales del estado de Querétaro. El convenio, por otra parte, pone en evidencia la tendencia generalizada de los hacendados de conceder a los pueblos tierras de mala calidad para defender los mejores terrenos y sobre todo concentrar el agua, que es el motivo preciso del conflicto. Además de controlar represivamente y mediante disposiciones jurídicas, las revueltas campesinas a la orden del día por estos años en todo el país por el asunto de los terrenos.

En el convenio firmado en el rancho la Cofradía se consigna que los jefes políticos de Jilotepec, México y Amealco, Qro. Epigmenio Picazo y Rafael Velarde, representantes de sus Estados y a la vez "amigables componedores" nombrados por los señores Juan Polo, dueños del rancho de la Cofradía de la municipalidad de Aculco y por los vecinos del pueblo de San Ildefonso Tultepec, en la jurisdicción de Amealco habiendo tenido a la vista los títulos

(78) Sombra de Arteaga, 26 de junio de 1879

de propiedad de ambas partes, determinaron,

que el arroyo que baja de Aculco y pasa para San Juan del Río conocido con el nombre de "Río San Ildefonso", es y ha sido la raya divisoria de los distritos que hoy tenemos a nuestro cargo y en consecuencia lindero de los citados ranchos de la Cofradía y pueblo de San Ildefonso: que del expresado río para el sur es de San Ildefonso" y para el norte de los señores Polo (79)

El acta-convenio, consigna el hecho de que los dueños de la Cofradía, los hermanos Juan y Miguel Polo, voluntariamente y por gestiones de las autoridades políticas, "cederían" a los indígenas de San Ildefonso Tultepec, "La barranca ladera que se forma de la ceja de la peña al río, desde la mohonera de las ajuntas por todo el cañón que forma río y ceja de peñas hasta donde linda San Ildefonso con el pueblo de la Concepción". Sin embargo, la cesión mencionada no era gratuita. Se concedía a cambio de una irrestricta libertad legalizada para que los Polo no perdieran

la servidumbre de bajar y subir su mueble en todo tiempo a dar agua al río cuando y por donde mejor les convenga por los pasos establecidos o que se quieran proporcionar, sin que los indígenas tengan derecho a reclamar de ninguna manera, ni en ningún tiempo.(80)

El atropello del hacendado sobre el pueblo indígena no quedaba ahí; parte integral del acuerdo fue que, "en ningún tiempo haya lugar a litigio". Aparecía, en la cláusula quinta, la "gentileza" de los Polo que condonaban a "los vecinos de San Ildefonso los cargos de daños y perjuicios que en riguroso juicio pretendían seguir contra ellos".

En resumen, los indígenas de San Ildefonso recibieron las 19

(79) Idem.

(80) Idem. Subrayado mío.

caballerías de mala tierra (81) y perdieron, de por vida, su derecho al uso del agua del Río San Ildefonso que corría por los terrenos comunales otrora de su propiedad. La Sombra de Arteaga alababa el hecho:

laudable es ese acontecimiento porque con esos arreglos amistosos se evita la alteración de la paz pública, la animadversión de los proletarios a los hacendados y se conserva incólume el respeto debido al derecho ajeno que no hay que olvidar constituye la paz. (82)

La evaluación de los hechos vertida por la Sombra de Arteaga, estaba muy lejos de la realidad. La población de San Ildefonso Tultepec había sido violentada en sus derechos ancestrales sobre el agua y no podía estar de acuerdo con la vejación y el atropello de los hacendados. No obstante, se destaca el convenio y el supuesto carácter pacífico de las negociaciones, para asegurar a la clase propietaria tanto la buena disposición de las autoridades políticas en defender las tierras de las haciendas como la voluntad inquebrantable de impedir las revueltas indígenas en la zona de los valles. Asunto en que, se insistía, el gobernador ponía todo su empeño:

No se ha limitado la acción del gobierno a la capital del estado, los distritos cuentan también sus adelantos, y celoso de la tranquilidad pública hemos visto salir más de una vez al ciudadano gobernador (general Antonio Gayón)...para arreglar diferencias entre los vecinos de los pueblos, como en San Ildefonso. (83)

-
- (81) Según medidas agrarias publicadas en la Sombra de Arteaga el 20 de mayo de 1894, "la caballería de tierra tiene 1,104 varas de largo por 552 de ancho, que dan 609,408 varas cuadradas y equivalen a 42 hectáreas, 79 áreas, 53 centiáreas y una fracción.
- (82) Diario Oficial Sombra de Arteaga, 20 de junio de 1879
- (83) Sombra de Arteaga. 4 de enero de 1878

3.2 El distrito de San Juan del Río

La historia del distrito de San Juan del Río y el pueblo de Tequisquiapan durante el siglo XIX se entreteje alrededor de los conflictos suscitados por el control de los manantiales, arroyos y ríos que riegan su suelo.

Además de los arroyos del Cano, Arroyoseco y el de la Dé (rancho) que alimentaban los bordos de las haciendas del Sauz, Lira y parte de San Clemente, en el distrito (84) se contaba con las aguas termales de Tequisquiapan, que irrigaban las huertas del poblado, "16 fanegas de la tierra de la hacienda (Tequisquiapan) 6 en la vega del pueblo en tierras de la hacienda de San Francisco". (85) Por otra parte, el importante Río San Juan, que irrigaba las haciendas, La Magdalena, Hurtados, San Jacinto, Guadalupe, La LLave, Santa Cruz, San Nicolás, Tequisquiapan y que movía el Batán del Aguacate, nacía en la presa del Huapango de la hacienda de Arroyozarco en la jurisdicción de San Gerónimo de Aculco del estado de México. Una vez introducido el río a la entidad por la congregación de San Sebastián de los cajetes y tras un largo recorrido -cosa de 100 kilómetros decía Septién y Villaseñor- (86), el Río San Juan salía del estado de Querétaro, pasa a introducirse, "...en el estado de Hidalgo, en jurisdicción de

(84) El distrito de San Juan del Río en 1848 contaba con la Villa San Juan del Río, el pueblo de Tequisquiapan y las congregaciones de San Pedrito, San Sebastián y Ranchería de la Barranca de Cocheros. Antonio del Raso, Op.Cit. Pág. 29.

(85) Idem, Pág. 12

(86) Septién y Villaseñor Op. Cit. Pág. 153

Ixmiquilpan, para confundir sus aguas con el caudaloso Moctezuma"

(87)

San Juan del Río también estaba irrigado por el río de la Hache (hacienda) y el de Galindo (hacienda), ambos nacían en los límites del distrito de Amealco con el estado de Michoacán. Ríos que se conjuntaban en los terrenos de la hacienda la Estancia hasta desembocar en el Río San Juan, en los terrenos de la hacienda La Llave.

De esta manera, las 15 haciendas y los 41 ranchos ubicados en el distrito de San Juan del Río (88), contaban con suficiente agua para irrigar sus terrenos. En Tequisquiapan, además de la hacienda de este nombre, origen del poblado, en 1876 Villa de Tequisquiapan, se encontraban las haciendas La Laja, La Fuente y Fuentezuelas. Junto a ellas desde tiempos inmemoriales el pueblo de indios de la Magdalena. Los ranchos eran, Santillán, San Nicolás, La Tortuga, Colorado, Puente de Piedra, Cruces y Arroyoblanco. Eran en 1876 (hasta 1930) 4 haciendas y 7 ranchos .

El proceso de integración del agua y la tierra efectuado por las 20 haciendas y los 48 ranchos afectó la división interna del distrito y ocasionó largos conflictos con las haciendas ubicadas

(87) Idem, Pág. 153

(88) Las haciendas eran: Santa Rosa, La Llave, San Clemente, Michintepic, Baya, Ahorcado, Ajuchitlancito, Lira, Sauz, La Estancia, Galindo, La Hache, Cueva, Muralla (en realidad pertenece a Amealco) y Laborcilla. Los ranchos eran: Dolores, la Dé, Cerrogrande, Santa Cruz Quevedo, San Cruz Llano, Minas, Guadalupe, Lagunillas, San Germán, La Laguna, Crucitas, Muerto de Olvera, Muerto de Echeverría, Venta del Refugio, Barreno, San Isidro, Xalauco, Manga, Puerta de Palmillas, Ojo de Agua, Cuasinada (Casinada, posteriormente), Dosocué, Chaparro, Potrerillos, etc. Idem, Pág. 402. No menciona Septién y Villaseñor la importante hacienda Del Cazadero, también ubicada en el distrito de San Juan del Río.

en los límites con el estado de México e Hidalgo. También con las haciendas ubicadas en el pueblo de Huimilpan del distrito de Amealco. Las pugnas y los conflictos registrados en el distrito de San Juan del Río y la Villa de Tequisquiapan encabezados por los pueblos y en ocasiones por los ayuntamientos de estos poblados (San Juan del Río y Tequisquiapan) suscitaron un reparto temprano de los terrenos comunales en propiedad individual. Para 1876, Septién y Villaseñor reporta 68 terrenos en la jurisdicción que controlaba el ayuntamiento de San Juan del Río y 129 en el área que controlaba el municipio de Tequisquiapan.(89) Situación que, sin duda, imprime un desarrollo singular a este distrito en el estado.

Las modificaciones que sufre la organización interna del distrito es notable. Si consideramos que en 1848 el distrito contaba con una Villa, San Juan del Río, un pueblo, Tequisquiapan, 2 congregaciones, San Pedrito y San Sebastián y una ranchería, la de Barranca de Cocheros, y vemos que para 1854 el distrito se había organizado en 4 municipalidades -San Juan del Río, Tequisquiapan, San Pedro Ahuacatlán y San Sebastián de las Barrancas- se puede afirmar que se había intensificado la vida económica y que, por lo tanto, se requería una organización política que facilitara los trámites administrativos. Para 1876, sin embargo, la organización política y la distribución de las localidades refiere una fuerte concentración en la ciudad de San Juan del Río. El distrito, nos dice Septién y Villaseñor, se había dividido en 2 municipalidades, la de San Juan del Río y la (89) Septién y Villaseñor, Op. Cit. Pág. 402-403

de Tequisquiapan. Sin duda, la municipalidad de San Juan del Río se consolidó a costa de la de Tequisquiapan. Mientras la primera contaba con 2 pueblos -San pedro Ahuacatlán y San Sebastián de las Barrancas-, tres congregaciones -Arroyoseco, Barranca de los Cocheros y Santa María Magdalena, Tequisquiapan solamente contaba con la villa y sus 4 haciendas. La distribución no podía ser más desigual.

La organización interna del distrito en 1876 expresa el interés claro de los hacendados sanjuanenses de recuperar fuerza política en esta zona, sumamente abatida primero por las incursiones de los revolucionarios serranos y después por la fuerza política que se concentró en la ciudad de Querétaro. Concentración que los mismos hacendados sanjuanenses habían estimulado y apoyado, no solamente por así convenir a sus intereses económicos y políticos, sino también para obtener reconocimiento social.

Por otra parte, los hacendados sanjuanenses al igual que los hacendados del distrito de Querétaro, procuraron concentrar el agua y la tierra para volver aún más poderosas sus haciendas. El proceso intensivo, para 1854 había sumido a San Juan del Río en la pobreza. Los hacendados lo habían dejado sin agua y sin tierra para los cultivos de las huertas -famosas en San Juan del Río y Querétaro-, incluso, se habían apropiado del suelo de las viviendas urbanas, como lo habían hecho los Legarreta y los Jáuregui con el suelo de Santa Rosa.

Por la abundancia de sus aguas, el distrito de San Juan del Río era, de hecho, territorio de las haciendas en su suelo

asentadas y tierra de promisión siempre presente en los objetivos expansionistas de aquellas haciendas que lo rodeaban.

Así, los límites del distrito en 1870, al Norte con los distritos de Tolimán y Cadereyta; al este con el estado de Hidalgo; al sureste con el estado de México; al sur y oeste con el distrito de Amealco y al noroeste con el distrito del centro, no parecían dar cuenta exacta de su situación. Los límites del distrito se establecían en sus colindancias con las haciendas. Como precisa Ayala Echavarri, "...correspondían sus límites al oriente con la hacienda de Cazadero, al poniente con el rancho del Paraíso, al Sur con el rancho de Zatláuco y al norte con la hacienda del Ciervo" (90)

Los grandes conflictos que se tuvieron para delimitar los límites entre el estado de Hidalgo y el de Querétaro, surgieron precisamente por el control de las aguas del río San Juan, en su desembocadura en el río Moctezuma, en jurisdicción de Ixmiquilpan en Hidalgo. Problemas y dificultades que ya eran añejos en 1894, cuando el gobernador Francisco González de Cosío, informaba:

Para el arreglo de límites con el estado de Hidalgo, se han hecho nombramientos de comisionados por ambos gobiernos y es de esperarse la terminación de este dilatado asunto, dada la honorabilidad de los representantes respectivos y el empeño con que trabajan para hallar una solución conveniente a ambos estados (91)

(90) Rafael Ayala Echavarri. Op. Cit. Pág. 182

(91) Informe rendido por Francisco González de Cosío el 16 de septiembre de 1894, en Colección de Informes Administrativos Leídos por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, de 15 de junio de 1888 a 16 de septiembre de 1906, Querétaro, Tip. de Jesús A. Sierra, 1906, Pág. 55.

El optimismo del gobernador queretano tardó 5 años más en concretarse. Fue hasta el decreto de Porfirio Díaz del 9 de diciembre de 1899, cuando se fijó, definitivamente, la línea divisoria que separaba los territorios de ambas entidades. Límites acordados en los convenios celebrados entre los estados de Querétaro e Hidalgo el 4 de septiembre de ese mismo año. (92)

La línea limitrofe entre Querétaro e Hidalgo, cruzaba una amplia franja geográfica con características naturales y sociales diferentes. Diferencias diestramente aprovechadas por los sucesivos propietarios de las legendarias haciendas de Tampochocho y Xajay de Hidalgo y la del Cazadero de Querétaro, sobre cuyos terrenos pasaba el trazo divisorio.

El acta limitrofe entre los estados de Hidalgo y Querétaro levantada en la hacienda del Cazadero -municipio de San Juan del Río, Qro.-, el 30 de enero de 1900 y firmada por los representantes nombrados, registraba:

eI jefe político del Distrito de Huichapan...José María Villagrán, e Ing. Estanislao Munguía y Adolfo García y los de Querétaro, el Prefecto del Distrito de San Juan del Río, Sr. J. Antonio de Echávarri, el subprefecto de Teguisquiapan Joaquín R. Olloqui e Ing. Pedro Moreno, consignaba la identificación y determinación del decreto del 9 de diciembre. (93)

La división arrancaba de,

la recta que pasando por las cumbres de los cerros de la Cruz y Montalbán, situados en las haciendas del Cazadero y Xajay respectivamente, termina en su prolongación, hacia el sur, en el límite de los estados de México e Hidalgo y hacia el norte con el Río de San Juan. El cerro de la

(92) Sombra de Arteaga, 30 de diciembre de 1899

(93) Archivo Municipal de San Juan del Río, Cabildo 1900-1910, Caja 14, Expediente 5.

Cruz está al nordeste de la casa de la hacienda del Cazadero y el Montalbán al norte de la de Xajay.

Del extremo norte de la línea descrita y en el sentido de su curso, continuará el eje del citado río, que en adelante es conocido con el nombre de Moctezuma, siendo límite de ambos estados hasta la confluencia del arroyo de Camarones próximo al paso del chamal.

De aquí la línea divisoria, seguirá por el mismo arroyo de Camarones, en la extensión en que sirve de lindero a la hacienda de Tampochocho, se dirigirá en seguida hacia el oriente por el lindero de esta última hacienda, hasta encontrar la recta que se trace en la cumbre del Gobernador al peñazco que se ve al noroeste del Aguacate y de este punto por la cresta o línea principal de división de las aguas de la Cuchilla o lomo del Aguacate, hasta encontrar el río Tancuilín, donde termina la común frontera de ambos estados (94)

Sin embargo, en el Relato Histórico de Querétaro, escrito por José María Reyes en la última década del siglo XIX, se cuestionaba el hecho de haber tomado como límite entre Querétaro e Hidalgo, el río Moctezuma. Para Reyes, el río San Juan desembocaba en el Pánuco, "...verdadera línea divisoria entre el estado de Hidalgo y el de Querétaro" (95), según se había especificado en la Ley sobre división territorial de Maximiliano. La arbitraria decisión de fines del siglo XIX, sin duda acorde con los intereses de los hacendados perjudicaba notablemente a los pueblos asentados en los límites, y también obligaba a modificar la división política de los estados. En este caso decía Reyes, "...el importante juzgado de Paz de Pathé queda dentro de esa línea en el estado de Querétaro, perteneciendo por tradición al municipio de Tecozautla en el estado de Hidalgo".(96)

Es importante señalar que a lo largo de los pueblos

(94) Sombra de Arteaga, 30 de diciembre de 1899

(95) José María Reyes, Op.Cit. Pág. 24

(96) Idem.

límitrofes entre Hidalgo y Querétaro se van formando conflictos sociales cuyos orígenes son difíciles de limitar porque no se generan en torno a los territorios estatales. Las pugnas entre los pueblos giran alrededor de los dominios de las haciendas. En esta situación estuvieron el poblado del Carmen, y Tlaxcalilla, Hgo., y El Sitio, municipio de San Juan del Río, Qro., (97) cuyos habitantes eran, en su mayoría, trabajadores -peones, medieros y aparceros- de la hacienda de Xajay entidad política, social y económica, que compartían con los pobladores de El Carmen en Tlaxcalilla, Hgo.

La guerra que se había declarado entre los pueblos de Tlaxcalilla, Hgo. y San Juan del Río, Qro.. también sucedía entre los pueblos de Jalpan, Qro. y los de Pisaflores, Hgo., zona que era cruzada por el río Moctezuma en terrenos de la hacienda de Tampochocho que servía de límite. No obstante, las condiciones sociales de la Sierra de Jacala en Hgo. y la Sierra Gorda en Querétaro eran distintas a las condiciones que prevalecían en la zona de los valles, tanto por los antecedentes "salvajes" atribuidos a los indígenas de la Sierra como por el carácter que, precisamente por ello, tuvo su colonización.

De cualquier manera, las incursiones de los vecinos asentados en uno y otro lado de los estados de Hidalgo y Querétaro, eran harto frecuentes. No siempre revestían un carácter militar: también se movilizaban por asuntos comerciales o por compadrazgos

(97) Sobre la dotación de mercedes de tierra en el pueblo de San Juan del Río y Tlaxcalilla, de la provincia de Jilotepec, revisar el libro ya citado de Rafael Ayala Echavarrí. Pág. 39-40

familiares y políticos. No obstante, los conflictos suscitados a lo largo de esta franja limitrofe no escondían su origen: la lucha por la tierra de las haciendas. También eran frecuentes las gavillas, robos de ganado y de muchachas perpetuados por grupos de uno y otro bando de las poblaciones y que, las más de las veces, acababan en sangrientas matanzas. Sin embargo, casi regularmente aparecía, en medio de las diferencias surgidas entre los poblados los problemas que planteaba la concentración del agua. En el caso de San Juan del Río los problemas se incrementaron por el asunto referido a los derechos del agua almacenada en la presa del Huapango de la hacienda de Arroyozarco del estado de México.

La lucha por la tierra y el agua acumuló problemas y resentimientos entre los pueblos y las haciendas, entre los pueblos entre sí y entre las haciendas entre sí. Este era el caso del pleito casado entre San Juan del Río, Qro. y Polotitlán, estado de México, por el agua que controlaba la hacienda de Arroyozarco.

De hecho, el conflicto se suscita cuando el pueblo de San Juan del Río reclama sus derechos sobre el agua del río San Juan que alimentaba la presa del Huapango, de la hacienda de Arroyozarco. Derechos que San Juan del Río alegaba le habían sido concedidos por el año 1558, porque se incluían en el fundo legal de más de 2 000 varas. No obstante ya por 1853, como relata Guillermo prieto, "... sólo tenían algunos pedazos de terrenos insignificantes, por causa de gatuperios que allí atribuyen a varios hacendados..."(98) Los derechos del agua también eran

(98) Guillermo Prieto, Op. Cit. Pág. 209

reclamados por el pueblo de Polotitlán, fundado relata Ayala Echavarri, "en mayo de 1852".

La presa del Huapango era alimentada por las aguas del río San Juan, que en diferentes fechas (siglos) había sido otorgado a las haciendas de la Guitarrilla y Santa Cruz. Por 1712 dice Ayala Echavarri,

compraron los padres de la compañía de Jesús la hacienda de arroyozarco, quienes intentaron desde luego la construcción de la presa que hoy existe, más como la obra perjudicó a San Juan del Río, se promovió un juicio sucutorio, obteniendo el 10 de diciembre de 1716, San Juan del Río, sentencia en la cual se le amparaba en el goce de las aguas que antes disfrutaban, o sea, la totalidad de los manantiales de Huapango... En quieta y pacífica posesión estuvo San Juan del Río desde esa fecha, hasta mediados del siglo pasado (mayo de 1852) en que se fundó en los comienzos de la planicie del Cazadero, un paradero o remuda de las Diligencias, al que se denominó la Soledad, a cuyo rededor se fueron agrupando diversas familias de apellido Polo... Entre los fundadores del nuevo pueblo, existieron el Padre Basurto y Don José María Garfias, dueños del rancho San Antonio, quienes para regar su finca de su propia autoridad desviaron las aguas del río por un túnel y la llevaron hasta sus terrenos..."(99)

Desde entonces y pese a las demandas y movilizaciones realizadas por el pueblo de San Juan del Río, de hecho dependían de la benevolencia de los dueños de la hacienda y de los volúmenes sobrantes que contenía la presa. Es decir, primero se satisfacían las necesidades de la hacienda y después se dotaba, con lo que sobraba, a los pueblos. Lo relatado en la Sombra de Arteaga en 1879, seguía siendo una función cotidiana del Ayuntamiento de San Juan del Río, todavía en 1938. Decía el periódico:

(99) Ayala Echavarri, Op. Cit. Pág. 192. subrayado mio

La comisión del Ayuntamiento de esta ciudad (San Juan del Río)...marchó a Arroyozarco a pedir al señor Macario Pérez dejase venir de la presa, agua para las pequeñas sementeras de la ciudad, no encontró en la hacienda al señor Pérez, pero habiéndole puesto un telegrama contestó desde México accediendo como era de esperar de su filantropía, a la solicitud del vecindario y el precioso líquido llegó ya a los sedientos terrenos que tanto lo necesitaban (100)

Todos estos problemas preocupaban a los gobernadores de los estados en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. El de Querétaro que intensamente buscó los convenios con Hidalgo porque la zona más conflictiva del estado estaba estrechamente vinculada a esta frontera, creía firmemente, como lo decía, en que una vez señalada la línea divisoria con Hidalgo terminarían "...las dificultades que hoy existen con perjuicio de los propietarios y vecinos que están colocados en los puntos de dudosa jurisdicción".(101)

Es evidente que los propósitos del Ing. Francisco González de Cosío allá por 1890-1900, de acabar con los problemas que se suscitaban a lo largo de la frontera con Hidalgo no se cumplieron. Entre otras razones, porque el problema fundamental de estos pueblos no provenía de su calidad de fronterizos sino de su lucha por la tierra y el agua.(102) No obstante, la alta movilidad que permitían las fronteras ambiguas y los lazos consanguíneos que se

(100) Sombra de Arteaga, 20 de mayo de 1879. Lo mismo había pasado en 1874. El propietario de la hacienda de Arroyozarco era Manuel Rosas. Macario Pérez era el administrador.

(101) Informe rendido por Francisco González de Cosío el 16 de septiembre de 1897- Op.Cit. Pág. 98

(102) No era azaroso que las luchas por la tierra y el agua se confundieran con los problemas familiares. Este fue el caso de Polotitlán y San Juan del Río en donde a la pelea por el agua de la presa de la hacienda de Arroyozarco, se suman los conflictos que sostenían individuos particulares. Los Osornio con los Basurto, por ejemplo.

habían creado, abrían un amplio campo a la solidaridad entre los grupos de trabajadores de las haciendas. La protección ofrecida, por estas circunstancias, a los líderes de las movilizaciones campesinas organizadas a ambos lados de la frontera Hidalgo-Querétaro, eficazmente impedía que las fuerzas armadas - rurales o militares- de uno u otro estado pudieran acabar como lo pretendían, con los líderes sociales que proliferaron a fines del XIX y después en el XX. También propició las rencillas personales y familiares que se revertían como problemas políticos.

Los problemas de San Juan del Río por el agua y la tierra también se suscitaron en la jurisdicción que controlaba la Villa de Tequisquiapan. Lugar en donde es el municipio el que entabla la pelea con la hacienda de Tequisquiapan y San Francisco (que pertenecía al distrito de Amealco, en ocasiones a Querétaro) cuyos terrenos llegaban hasta el suelo del barrio de la Magdalena, viejo pueblo indígena otomí. En reunión del Ayuntamiento de Tequisquiapan con asistencia del gobernador Antonio Gayón en marzo de 1878, el síndico Benigno Ramírez le pidió su aprobación para

pedir... el fundo legal de esta villa, en virtud de no poseerlo cabal, y poder encargar a la casa de agencias del estado el litigio pendiente con las haciendas de Tequisquiapan y San Francisco, limítrofes del municipio, en los derechos que asisten al mismo según documentos (103)

No obstante, al igual que con San Ildefonso Tultepec, el

(103) Sombra de Arteaga, 22 de marzo de 1878

governador Gayón falló a favor de los hacendados; en este caso de Bartolome Savinón, dueño de la hacienda San Francisco. El Municipio de Tequisquipan interpuso juicio de amparo a la Justicia de la Unión contra la orden del gobierno del estado,

por creerla violatoria de las garantías que otorgan a sus poderantes (los vecinos del Barrio de la Magdalena representados por Sóstenes Solís, Francisco González y José María Solís) los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución federal de 1857. La Justicia de la Unión determinó que no amparaba ni protegía a los vecinos de la Magdalena contra el acto que se quejaban. (104)

Todavía más, el ocurso acusaba a los vecinos de la Magdalena por los atropellos que habían cometido contra el hacendado. Decía el documento:

dénse las órdenes respectivas a fin de evitar en lo sucesivo, la repetición de excesos que turban la tranquilidad pública hasta cierto punto: que las providencias preventivas a que se refiere el anterior acuerdo pedidas por el apoderado del C. Lic. Bartolomé Savinón (Lic. José Agustín Borges), consistían en que se previniese a las autoridades de San Juan y Tequisquipan que no permitieran en lo sucesivo a los vecinos de la Magdalena que a mano armada invadiesen la hacienda de San Francisco...que de todo lo anterior resulta que el gobernador del Estado no solo ha obrado en este asunto dentro de la órbita de sus facultades, sino que ha cumplido fielmente con un deber que le impone la constitución y las leyes al reprimir los desmanes, invasiones y depredaciones de los vecinos de la Magdalena, y sostener al propietario de la hacienda de San Francisco en el goce pacífico de su propiedad, empleando para ello sus legítimos recursos

La Sombra de Arteaga, meses después hacía referencia del hecho sosteniendo por encima de todo la defensa a la gran propiedad:

(104) Sombra de Arteaga, 31 de enero de 1879. Subrayado mío

Ese justo fallo, viene a confirmar una vez más, que el gobierno del estado al proteger la propiedad del Sr. Savillón, contra los que sin derecho la atacaban con criminal constancia, año tras año, cumplió con uno de sus indiscutibles deberes, que no se traslimitó en sus determinaciones, que no vulneró garantía alguna individual y que procedió en todo, con perfecta y estricta justicia. (105)

No hay que olvidar que el Periódico oficial llegaba a las manos de aquellos que sabían leer y escribir, casi exclusivamente la clase dirigente. En este sentido el mensaje va dirigido a estos sectores. Por si acaso algún miembro de la clase dominante y más bien de sus empleados o administradores, como el municipe de Tequisquiapan Benigno Ramírez, tenían tentaciones de apoyar a los pueblos en sus demandas legítimas por derechos heredados -ilegítimos desde la perspectiva del gobierno, los hacendados y sus voceros- la Sombra de Arteaga proporcionaba el juicio moral histórico de esos actos:

Jamás los pueblos (por ende nadie debe ayudarlos) deben pretender adquirir por la fuerza la consecuencia de aquello que está fuera de su alcance legal, porque se expone a precipitarse hacia el comunismo, con seguro prejuicio de su honra, de su prestigio y de su porvenir, fuentes inagotables de progreso, de trabajo y de prosperidad". (106)

La concentración del agua y la tierra realizada por los hacendados sanjuanenses -en esta categoría incluimos a los hacendados de Tequisquiapan- fue igual de desencarnada y violenta que la realizada por los hacendados del distrito del centro. No obstante, a lo largo del siglo XIX se conjugaron una serie de

(105) Sombra de Arteaga, 27 de mayo de 1879

(106) Idem

factores económicos, culturales y políticos que le imprimieron al distrito de San Juan del Río una identidad social singular en el estado.

Entre estos factores se pueden destacar aquellos que incidieron en la conformación de un grupo social que si bien subalterno de las clases propietarias, había logrado para fines del siglo XIX conjuntar una fuerza económica personal y familiar, claramente diferenciada de las fortunas de los hacendados. La acumulación de riqueza propia realizada por los administradores de las haciendas y, sobre todo, por los rancheros y aparceros sanjuanenses, fue estimulada y sin duda sostenida por la alta productividad, riqueza natural y extensión territorial de las haciendas en el distrito ubicadas, que daban para todos. Condición estrechamente" amarrada a la circunstancia que prevalecía entre los hacendados sanjuanenses, quienes, en su mayoría, no administraban sus propiedades. Los intereses de los hacendados, generalmente de índole económica, en ocasiones definidos por ambiciones políticas y, los menos, por prestigio social, determinaba su lugar de residencia, que bien podía ser México, y la ciudad de Querétaro, pero también Guanajuato, Cuernavaca e, incluso, Europa.

La misma expansión brutal de la hacienda que devoró tempranamente los fundos de los pueblos, y el carácter indígena que, pese a la temprana liberalización de la clase trabajadora, conservó San Juan del Río hasta finales del siglo XIX, propició una defensa tenaz y no violenta, en términos generales, de los bienes comunales, que quedó registrada en la memoria colectiva de

los pueblos de San Juan del Río.

El repartimiento también temprano de los terrenos comunales en propiedad individual, conformó un grupo de rancheros con una personalidad y capacidad política y económica distinguida notoriamente en todo el estado y destacada, localmente, por su alta capacidad de liderazgo y conducción de los intereses populares.

Importante peso tuvo en la historia de San Juan del Río, (al igual que en la ciudad de Querétaro) su posición geográfica. Situada en el "justo medio", regulaba comercial y políticamente las relaciones de los "belicosos serranos" con los aristócratas ciudadanos de Querétaro. Era San Juan del Río desde el siglo XVIII, garganta de tierradentro y frontera chichimeca. Llevaban y traían los arrieros y comerciantes de San Juan, armas, comestibles, esclavos, prisioneros e información de alto contenido político entre uno y otro bando, ubicados a sus dos extremos.

Todos estos factores, como procesos independientes a lo largo del siglo XIX, desembocaron en el siglo XX. Momento en que, bajo las condiciones sociales, económicas y políticas que se amarran con la revolución de 1910, adquirieron una lógica y eje interno propio que coyunturalmente dieron a los Sanjuanenses el control y dominio de los derroteros políticos de la entidad.

3.3 La Sierra Gorda: Distritos de Cadereyta, Toluimán y Jalpan

De acuerdo a la tabla de la distribución de los manantiales y surcos existentes en el estado proporcionada por Don Antonio del

Raso en 1848, podemos apreciar que los distritos de la Sierra contaban con 36 manantiales, contra 30 en los otros distritos. Sin embargo, el número de surcos es notablemente inferior en la Sierra (140) comparada con los 218 de los Valles. (Amealco 50, San Juan del Río 104, y Querétaro 64). (107) En el número de ríos, en cambio, la región de la Sierra es altamente favorecida. El distrito de Jalpan cuenta con 6 ríos, "Moctezuma, San Pedro Escanela, Ayutla, Concá, Jalpan, el Santa María que pasa por Tolimán y el Estoraz, puesto que el que corre por Cadereyta es el mismo río San Juan que pasa por el Batán del Aguacate". (108) Es decir, proporcionalmente, la Sierra controlaba el 50% de los ríos existentes en el estado (7 de 15), con el agravante de que estaban concentrados en el distrito de Jalpan; y si bien penetraban en las haciendas de Tolimán y Cadereyta, no beneficiaban de igual manera a los poblados.

Precisamente los ríos de Jalpan van a ser motivo de conflictos puesto que con excepción del de Jalpan y el Estoraz vinculados este último a la hacienda del mismo nombre, de viejo arraigo en la Sierra, todos los demás irrigaban haciendas de los estados vecinos. Según nos dice del Raso, el Río Concá de Jalpan, pasaba también por Santa María del Río pueblo de San Luis Potosí. El de Ayutla pasaba por Xichú, pueblo indígena de Guanajuato y el Moctezuma, servía de límites entre el estado de Hidalgo y Querétaro por el rumbo de la Sierra.

Los arroyos de Cadereyta -Tetillas, Redonda y el de Bernal-

(107) Antonio del Raso, Op.Cit. Pág. 7.

(108) Idem. Pág. 9.

surtían de agua a la presa de Santillán (hacienda) y los bordos del Ciervo (hacienda) y de San Agustín (Hacienda); propiedades que no quedaban enmarcadas en su territorio. El arroyo de Tolimán alimentaba a la presa de la hacienda Santa María de Buena Esperanza. De hecho, el pueblo de Cadereyta, para 1854, se había sumido en la pobreza precisamente por la falta de obras hidráulicas en la región, excepto la concentrada en la hacienda de Santa María de Buena Esperanza (Esperanza), que pertenecía a Tolimán. Balbontín señala que por estos años (1854) por los temporales erráticos y la sequía de más de 7 años, la mayoría de los pobladores de Cadereyta emigraban para el estado de Guanajuato u otros lugares de la entidad que ofrecían mejores oportunidades de trabajo.(109) Los malos temporales de Cadereyta también los registra Septién y Villaseñor. Incluso, don José Antonio dice que por esta razón se encarecían las semillas y era así causa de especulación. De tal manera que los vecinos de Cadereyta o emigraban como dice Balbontín, o se dedicaban al pequeño comercio y a la cada vez más extendida arriería:

en Boyé se ocupan los vecinos más pobres en la arriería; en el Palmar...compran maíz, en las haciendas del plano de San Juan del Río y llevan para vender a Tezautlá, Zimapán y otros puntos de la Sierra... en Bizarrón los vecinos se dedican a la arriería; haciendo viajes a largas distancias...con recuas de asnos conduciendo piloncillo de la Sierra para la ciudad de Querétaro y otras partes, en cuyos puntos hacen cargamentos de maíz, frijol y harina, que realizan en Ixmiquilpan, Zimapán y otras poblaciones de la Sierra...conduccción de reses de tierra adentro que ordinariamente llevan a la capital de la República...(110)

(109) Balbontín, Op.cit. Pág. 5.

(110) José Antonio Septién y Villaseñor, Op.cit. Pág. 431.

Esta emigración constante y la ocupación en la arriería, también tenía que ver con el decaimiento registrado en la minería. Recursos en los que era rico Cadereyta pero que se encontraban abandonados, igual que en Tolimán, desde la lucha por la independencia. (111)

La pobreza de Cadereyta, que comprendía los pueblos de la Sierra hasta los peleados Jiliapa y Pacula de Hidalgo, también se debió a la fragmentación que sufrió su territorio para constituir el distrito de Jalpan y fortalecer el estado de Querétaro en la Sierra Gorda.

Por su parte, Tolimán si bien en mejores condiciones que Cadereyta, también expulsaba a muchos de sus pobladores por falta de trabajo en las haciendas de la localidad que eran en su mayoría ganaderas. Excepto la de Ajuchitlán y la de Santa María de la Buena Esperanza que disponían de tierras de "labor", las demás se dedicaban muy marginalmente a la agricultura.

Los habitantes de Jalpan a diferencia de Tolimán y Cadereyta, tenían un nutrido comercio con los estados vecinos y los distritos de Querétaro. La villa de Jalpan en específico, hasta 1940, era el lugar de concentración de los arrieros que caminaban todo el estado. Por su parte las propiedades aparecen dispersas en una proliferación de ranchos y terrenos no claramente señalados como propiedad privada pero tampoco aparecen delimitados como propiedad de los pueblos de las comunidades o de las haciendas. De hecho en

(111) En este distrito había 46 minas dice Septién y Villaseñor. Idem. Pág. 427.

Jalpan solamente existe la hacienda de Concá. Sin embargo las propiedades ubicadas en Tolimán (como el Estoraz) estendian sus terrenos hasta Jalpan y sus propietarios realizaban importantes negocios en esta villa. El caso del General Rafael Olvera ilustra esta situación. El general Olvera tenía una fábrica de aguardiente en Jalpan que estaba, dice Septién y Villaseñor, equipada con "el más moderno sistema introducido en el país".(112) El general Olvera era además propietario de varias haciendas de la región Noradino Rubio Ortiz (113), relata que el General Olvera "...adquirió entre 1867 y finales del siglo en que murió las haciendas de El Pilon y hacienda vieja en el municipio de Lagunilla, en San Luis Potosí y Concá, Ayutla. la Florida y Rayo, San Francisco, Tancama, Pitzquintla, el Tejamanil, Estoraz, Hiquerillas, la Noria Vieja y Miranda...ubicada (esta última) a las puertas de Querétaro..."(114).

Aún cuando sería necesario hacer una investigación más a fondo sobre las haciendas y ranchos de la Sierra (Cadereyta, Tolimán y Jalpan), porque los datos disponibles son insuficientes y poco confiables, se puede afirmar, a partir de los registros

(112) Idem. Pág. 469.

(113) Noradino Rubio Ortiz, importante actor social durante los años 1920 a 1940, Gobernador del estado de Querétaro en el periodo 1939-1943, formado en las huestes del General Porfirio Rubio, cacique de la Sierra, y en las fuerzas agraristas fundadas por el General Calles, sin ser originario de Jalpan, era de suyo ciudadano de la Sierra en donde realizó su trabajo más importante antes de llegar a la gubernatura del Estado. Don Noradino señala esta ciudadanía serrana todavía hoy a tantos años de historia ocurrida: "...Quiérase o no -la Sierra de Hidalgo- forma parte del antiguo territorio denominado Sierra Gorda...". Noradino Rubio Ortiz, "La familia Olvera de Jalpan", en Revista Querétaro, año IV, núm. 41, Noviembre de 1988. Pág. 80.

(114) Ibidem, Pág. 79-80.

proporcionados por del Raso, Baltontín y Septién y Villaseñor, que la proliferación de ranchos se da en el Distrito de Jalpan y. sobre todo, en la empobrecida Cadereyta, sin duda para contrarrestar las movilizaciones campesinas indígenas levantadas para defender sus terrenos.

HACIENDAS Y RANCHOS DE QUERETARO POR DISTRITO EN 1848, 1854 Y 1876.

AÑOS	1848		1854		1876	
Prop. Rural						
Distrito	Haciendas	Ranchos	Haciendas	Ranchos	Haciendas	Ranchos
Querétaro	66	12	51	9	61	31
San Juan del Rio	29	31	28	54	19	48
Amealco	12	256	8	9	12	34
Tolimán	5.	4	5	5	12	14
Cadereyta	11	64	14	93	16	116
Jalpan	1	25	1	56	1	59
TOTAL	124	392	107	226	121	302

FUENTE: Memorias estadísticas elaboradas por Antonio del Raso, José Ma. Balbontín y José Antonio Septién y Villaseñor.

Así, desde principios del siglo XIX la Sierra Gorda se caracteriza por la proliferación de los ranchos medianos sin que desaparecieran las haciendas como concesiones militares para su repoblamiento. La sierra también se particulariza por su notable aislamiento de los centros de decisión política de los respectivos estados a los que pertenecía. Todavía en 1917 (y después en 1950)

se reportaban las dificultades para controlar la Sierra por su aislamiento. Decía el gobernador Ernesto Perrusquia:

El municipio de Jalpan, es el que realmente ha sido azotado con crueldad y asolado frecuentemente por hordas vandálicas, en virtud de hallarse alejado del centro de acción del gobierno y ocupar parte de la región montañosa y casi inaccesible de la Sierra Gorda (115).

Todas estas circunstancias, además del carácter militar que tenían los terratenientes de la sierra desde tiempos remotos, fue determinante para que muchas de las "pugnas internas de las familias" aparecieran con frecuencia como conflictos políticos de la región, zona de suyo plagada de problemas entre los indígenas y los hacendados por el asunto de la tierra. Por ejemplo, cuando en 1847, Eleuterio Quiroz encabeza la guerra de la Sierra Gorda que involucra los resentimientos laborales de los arrendatarios de la hacienda de Albercas del queretano José González de Cosío y suma también los resentimientos políticos de Manuel Verástegui por haber sido suspendido de su puesto de prefecto de Río Verde, las autoridades del centro pensaron, como era lógico hacerlo, que era un conflicto más, de los usuales o comunes entre los hacendados de la sierra. Moisés González Navarro, dice que creyeron que era un enfrentamiento entre los Chaires y el alcaide de su pueblo -Xichú- (116) que sería resuelto en las formas tradicionales por las

(115) Ernesto Perrusquia, Informe Administrativa, rendido el 16 de septiembre de 1917. Sombra de Arteaga del 22 de septiembre de 1917.

(116) Moisés González Navarro, Anatomía del Poder en México. 1848-1853, El Colegio de México, 2da. edición, México 1983, Págs. 40-41. También en Leticia Reyna, Los movimientos campesinos

familias contendientes y que el asunto no llegaría a más. Pero no era así. La revuelta de Quiroz era una revolución social importante y trascendente contra la expansión de las haciendas y sus sistemas de trabajo. Revolución que, por sus demandas de tierra, fue acremente calificada y vilipendiada por los sectores amenazados por ellos, los hacendados.

De una u otra manera, la Sierra Gorda se mantuvo en una sublevación constante. Estas condiciones no hacían factible que políticamente se otorgara mayor independencia a la cabecera distrital de Jalpan que se mantiene como villa mientras Cadereyta, San Juan del Río y, por supuesto Querétaro, eran a principios del porfiriato, importantes ciudades del estado. Pero hacían necesario tomar medidas políticas. Algunas de ellas afectaron a las haciendas y otras, sin lesionar los intereses de los hacendados, favorecieron a los pueblos.

En el municipio del Doctor en Cadereyta por ejemplo, radicaba una vieja hacienda "San Rafael de Agua de Patos" de Don Antonio Resendiz (finales del siglo XVIII) dividida a la muerte de este entre sus herederos en tres fracciones. El 11 de mayo de 1847, algunos terrenos de dicha hacienda se convirtieron en pueblo anexándole otras rancherías y haciendas para completar el censo necesario. Surgió así el pueblo de Boyé y las fracciones de Detigá y Boñú nos dice Don José Antonio Septién y Villaseñor.(117) San José Bizzarrón, rancho dado en merced por la pacificación de la Sierra, también fue convertido en pueblo el 18 de octubre de

en México (1819-1906) México, Siglo XXI, 1948.
(117) Septién y Villaseñor, Op.Cit. Pág. 439.

1847. El mismo origen tuvo San Sebastián Bernal erigido en pueblo en 1850. Todos ellos pueblos arrieros durante el porfiriato, posiblemente porque no les habían dado tierras para cultivo aún cuando habían adquirido el derecho del suelo de sus viviendas. Cuestión que era vital. Al concederles la denominación de pueblo, se quitaba a la hacienda el derecho que le asistía sobre el suelo, lo que de hecho, liberaba a los pobladores de pagar arrendamiento a las haciendas. La ganancia era grande.

Por el rumbo de Cadereyta y Tolinán quedaban algunas de las haciendas que eran propiedad de Fernández de Jáuregui quien, sin negarle su buena intención, pretendía que se reorganizara la división política a manera de favorecer sus intereses. Cuando en 1874 Fernández de Jáuregui propone mejorar la distribución del territorio de Tolinán, Cadereyta y el Centro, pasando la hacienda de Esperanza ya fraccionada al distrito del centro y la hacienda de Ajuchitlán a Cadereyta, prácticamente El estoraz que era hacienda de su propiedad, quedaría hegemónica en el distrito de Tolinán.(118)

Años más tarde a esta propuesta, el Ayuntamiento de Santa María Peñamiller de Tolinán, demandaba a José Fernández de Jáuregui y coherederos, "...para deslindar los terrenos que constituyen el fundo de la población con los que corresponden a la hacienda del Estoraz...". Pleito que se venía entablando desde 1874, cuando Fernández de Jáuregui había pedido una reorganización de los distritos. En este caso se decía que los solicitantes, los del municipio de Tolinán, Peñamiller, no habían mandado "... en (118) Sombra de Arteaga, 1874.

legal forma la requisitoria...". El documento sentencia decía...

en atención a lo voluminoso de ella, que han venido a constituir un litis y a la practica constante de los tribunales con fundamento de las razones y leyes que se han citado, debía de fallar y falló: 1. Que no se aprobaba el apeo practicado por los CC Juan Cortázar y José Llaca. 2. Que en consecuencia, los límites deben ser los que demarcaba el amohonamiento anterior el apeo..."(119)

Se notificó así el Síndico del Ayuntamiento de Peñamiller el C. Antonio Resendiz y a su vez al hacendado José Fernández de Jáuregui.

En Tolinán también se tomaron medidas para contrarrestar las repercusiones sociales que tenía la concentración de la tierra en pocas manos.(120) Sobre todo por la municipalidad de Santa María Peñamiller que había sido convertido en presidio por José Mejía en 1776, lugar a donde pertenecía el pueblo de San Miguel de Las Palmas que poseía 7 sitios de ganado desde esta época. Tierra por la que lucharon intensamente hasta el siglo XX, y por donde se filtraron los problemas limítrofes con el estado de Guanajuato. Sin embargo es de destacar que los problemas suscitados entre la Misión de las Palmas, jurisdicción de Santa María Peñamiller(121) en Querétaro y el de Santa Catarina en Guanajuato, aparecen sin la carga de violencia que caracterizó a otros litigios limítrofes. Decía la Sombra de Arteaga comentando la resolución de los límites realizada el 19 de diciembre de 1877:

(119) Sombra de Arteaga, 23 de noviembre de 1879.

(120) Septién y Villaseñor, Op.Cit. Pág. 439.

(121) En Santa María Peñamiller se ubicaba la hacienda Estoraz y los ranchos Boquillas, Aguacate, Saucillos, Cerro del Mulato, el Portugués, los Moctezumas y el Madroño, según la Memoria Estadística de Septién y Villaseñor.

Es verdad que esta cuestión jamás degeneró en hechos reprobados por algunos de los colindantes, pero también lo es, que los vecinos de aquel lugar se abstenerían de cultivar la tierra en cuestión, temerosos de que se pusiesen obstáculos por parte de los que se creían con igual derecho al mismo cultivo...".(122)

En este caso, existía el problema de tierras comunales separadas por la línea divisoria de los estados. Por ello, los comisionados de Guanajuato -Federico Ernest y Manuel Lozada- y los de Querétaro -el diputado Mucio Segura, Lic. Fausto Olvera e Ing. Mariano Gorráez- se trasladaron al lugar de los hechos en donde, dice el acta levantada en la Misión de San Miguel de las Palmas el 19 de diciembre de 1877, "...

Tomaron todos los datos que creyeron necesarios y oportunos, examinados los respectivos títulos de propiedad y posesión de ambos pueblos y pidiendo informes a los vecinos más acreditados y de mayor edad de las dos poblaciones, en seguida, y en vista de los informes tomados, procedieron las comisiones a practicar sobre el mismo terreno una vista de ojos, reconociendo los puntos que ambas poblaciones se disputan..."(123)

Las haciendas colindantes con las tierras comunales, eran la de San Diego de Pitallas y la de Chapin, además de las Mesas de Salinas y del Membrillo. La línea fronteriza en este punto, comenzaba,

por el puerto de Tepozán donde colindan las tierras de la Misión de Palmas con las de Santa Catarina y las de la hacienda de San Diego de las Pitallas, sigue la línea en dirección sudeste pasando por el punto conocido con el nombre de la Tinaja, a la medianía de las mesas de Salinas

(122) Sombra de Arteaga, 4 de enero de 1878.

(123) Ibidem.

y del Membrillo, quedando los potreros de la primera por el lado de Santa Catarina y los de la segunda por el de la Misión de Palmas, de este punto continúa la línea al divisadero del Raso; de aquí al Ojo de Agua del Sauz, de este punto pasa por la Tapona a bajar a un lugar de la orilla del Río de Xichú donde se encuentra un manantial de agua caliente enfrente de un peñazco alto, de aquí sigue el lindero en línea recta al punto llamado de las tierras blancas y continúa hasta el salto del Encinal donde colindan las tierras de los dos pueblos con las de la hacienda del Chapin. (124)

Jalpan en 1848 dividía su organización política entre las misiones, los minerales, las haciendas y los viejos pueblos indígenas. Tenía en este entonces 2 subprefecturas, landa y el mineral de Ahuacatlán. Como pueblos estaban, Concá, Saucillo, Bucareli (misión), Arroyoseco, Tancoyol (misión) y Xililpan. Los minerales de San José de los Amoles y San Pedro Escanela y las Misiones de Tilaco y Pacula. (125) (La otra misión en 1848 era San Miguel de las Palmas que pertenecía al Distrito de Tolinán). Distribución que se conserva todavía en 1876. Sin embargo también en Jalpan, que era el centro del conflicto de las sublevaciones de la Sierra, además del reparto de terrenos que relata González Navarro, se crean pueblos. En 1850 se elevó a la categoría de pueblo a la colonia Purísima de Arista en los terrenos de la hacienda de la Gata que era anexa de la hacienda de Concá. Septién y Villaseñor relata:

Dicha colonia esta situada en una mesa que se designaba con el nombre de la vibora, inmediata a la margen izquierda del río a Jalpan. En el principio estuvo anexa

(124) Ibidem.

(125) Antonio del Raso. Op.Cit. Pág. 38. Del Raso aclaraba que "los pueblos de Pacula y Xiliapan se han reclamado al departamento de México que los tiene agrupados indebidamente en partidos de Zimapan".

al territorio de Sirra Gorrda al mando de un capitán que dependía del inspector de las colonias que en la misma época se establecieron en los estados de México y San Luis Potosí. (126)

Los acontecimientos de 1853 que de nueva cuenta pusieron a los conservadores -encabezados por Lucas Alamán en el poder y sin duda con la necesidad de acabar con la fuerte insurrección de la Sierra, se decretó el 1 de diciembre de 1853, la formación del territorio de la Sierra Gorda. El 7 de marzo de 1854 se dió a conocer el territorio en sus colindancias. Decía el decreto del 1 de diciembre:

el territorio de la Sierra Gorda compuesto de las excolonias militares de San Ciro y Arista (la colonia a que se refiere Septián y villaseñor y que fue convertida en pueblo) y la parte correspondiente de la Sierra de Guanajuato hasta la de Santa Rosa Uruga". (Art.1). La villa de San Luis de la Paz sería la capital del territorio (art.2).(127)

Los límites dados a conocer el 7 de marzo de 1854 eran los siguientes:

Partiendo de su capital, que es San Luis de la Paz, una línea recta que pase por los linderos de Oeste de la hacienda de Jofre y pueblo de Tierranueva, y vaya a terminar en su prolongación al río Santa María. Desde este punto hacia el N.E., una línea que toque los linderos de la hacienda del Jabalí en su límite más meridional...desde aquí se trazará otra que se dirija al límite del norte de la Colonia San Ciro de Albercas, desde donde inclinándose a S.E. tocará los términos exteriores de la colonia de Arista. Desde el lindero sur se tirará una recta del S.O., hasta encontrar el límite meridional de San José de Iturbide, pasando también por los linderos meridionales de Xichú y Tierrablanca. Por último, de San José Iturbide iba a terminar el límite del territorio por una línea recta a San Luis de la Paz, que fue el punto de partida.

(126) Septián y Villaseñor, Op.Cit. Pág. 475.

(127) Dublán y Lozano No. 4125 y 4224.

El artículo 2 del decreto señalaba:

Todas las poblaciones, haciendas y ranchos que queden dentro de estos límites, se entenderán comprendidas en el territorio con cuantos terrenos y pertenencias le sean anexas, aunque alguna parte de estas últimas estén fuera de los límites señalados en el presente decreto.

El Art. 5 derogaba el decreto del 1 de diciembre de 1853 el que hacía referencia a la colonia de Santa Rosa Uraga ubicada en el Departamento de México".(128)

El territorio parecía creado sin conocer las especificidades de la zona y sin tener idea precisa -como todavía pasa- de cuáles propiedades estaban en un estado o en otro. El interés que parece desprenderse del documento era poner fin al debatido asunto planteado por los indígenas y favorecer a los jefes militares de la Sierra atrayéndolos al plan conservador. El asunto no prosperó y en el Constituyente de 1857, el territorio de la Sierra Gorda desapareció porque no había ningún armamento jurídico que lo sostuviese.

Las especiales condiciones de Jalpan nos dejan apreciar que existe una relación directa entre la fragmentación política y el proceso de concentración de tierras. Pero también se observa que, directamente proporcional al movimiento de los hacendados se organizan los pueblos en la defensa de sus tierras. La proliferación de ranchos en la zona en el corto periodo 1848-1876, en donde se crean 34 ranchos en veinte años, responde a la necesidad eminentemente política de satisfacer las aspiraciones de

(128) Edmundo O'Gorman, Op.Cit. Pág. 244-245.

los militares asentados en la región para apaciguarla. De hecho, en la Sierra cada jefe político y militar, usualmente hacendado, contaba con diestros administradores y con numerosos contingentes de trabajadores armados. La historia del general conservador Tomás Mejía y sus huestes serranas expresa las condiciones que reinaba en esta zona. La fuerza de Mejía en la Sierra era tan fuerte que, incluso en los momentos más críticos de la derrota de Maximiliano, siempre se supo que había una salida, la que otorgaban las huestes leales de serranos contratados por Mejía:

Sólo un camino nos quedaba, el de la Sierra. Allí no podría seguirnos el enemigo. Con sólo que lográsemos llegar a la boca de la sierra, que dista unas seis leguas de Querétaro, podríamos disponer, levantando los pueblos, de una fuerza que bien empleada habría sido suficiente para mantener en respeto a los disidentes que dejásemos a la espalda. Los indios de la Sierra Gorda pertenecían en cuerpo y alma al general Mejía a su don Tomasito como le llamaban; una vez éste en sus montañas, verían en él a su jefe natural... En esta última época, las tropas liberales habían tenido que padecer mucho en la sierra, cuyos habitantes siempre han pertenecido al partido conservador. (129)

Similares fueron las pugnas habidas entre los herederos, reconocidos o no de aquel primer propietario de la hacienda de Tampochocho, Ignacio Rubio y Ponce; en medio de los conflictos interfamiliares, los grandes negociadores y los más beneficiados eran los pequeños rancheros que en cada trifulca ganaban terrenos y gente adicta. En esta situación estuvo el después general Porfirio Rubio quien por los problemas interfamiliares y políticos se trasladó de la Misión, Hgo. a la población de Aguazarca, Qro.,

(129) El Sitio de Querétaro. Según protagonistas y testigos. Sepan Cuantos, Ed. Porrúa, No. 81, México, 1982, Pág. 97-98.

en donde asentó un emporio militar hasta su muerte en 1950. De la misma familia, aun cuando con una trayectoria política diferente, procede Noradino Rubio. El gobernador queretano de 1939 a 1943, importante gestor de las causas agrarias en el municipio de Jalpan en la década de los veinte.

El debate sobre los límites de Querétaro con los estados vecinos, y el de los pueblos con las haciendas de un siglo de duración, pone sobre el tapete y con toda crudeza que el fondo del problema de las pugnas políticas y económicas que se planteaban se encontraban en la expansión de las haciendas y el control del agua. En su afán de crecimiento, los hacendados mas fuertes arrollaban los territorios de las comunidades indígenas. A fuerza de expandirse, las haciendas se tocaban unas con otras de manera tal que las negociaciones sobre los linderos requerían del acuerdo práctico de los hacendados. Para delimitar las fronteras de los estados había que delimitar las fronteras de las propiedades rurales. Muchas fueron las ocasiones en que los linderos de las entidades federativas pasaban sobre el territorio de las haciendas. Era el caso de la hacienda de Molinos de Caballero en Michoacán o la de Xajay en Hidalgo, cuyos terrenos llegaban hasta Querétaro. También algunas fueron las haciendas que se apropiaron del agua perteneciente a los municipios y pueblos de Querétaro. Como fue el caso de Arroyozarco del estado de México. Con mayor frecuencia los territorios de las haciendas rebasaban los límites municipales generando serios problemas entre los pueblos asentados en los límites y a las administraciones municipales. Haciendas que habían expandido su territorio a costa de los terrenos de las

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

379

comunidades indígenas, en pleito abierto en la defensa de sus propiedades desde estos aciagos años hasta 1914 y 1915 y posteriormente en la década de los treinta del siglo XX.

Por estas situaciones y la política de los gobiernos conservadores y liberales -con excepción del corto periodo del Imperio de Maximiliano- continuada durante el porfiriato, de proteger la gran propiedad, los problemas de los límites estatales se arrastran durante más de un siglo y no se resuelven hasta el reparto agrario realizado de 1930 a 1936, que destruyó la hacienda como unidad económica, política y social. Cabe aclarar que si bien la hacienda se destruye como sistema durante esos años (1930-1936), el reparto agrario no acabó con la gran propiedad en Querétaro.

A partir de 1876, la política económica y social del porfiriato tendió a fortalecer el proceso de acaparamiento (de la tierra y el agua) por el que habían luchado los hacendados por más de 50 años. Con leyes benéficas, consolidaron el poderío económico de sus haciendas, diversificaron sus negocios y tomaron bajo sus manos el destino político de la entidad. Para fines del siglo XIX nada de lo que sucedía en Querétaro escapaba del control del poderoso grupo de los hacendados. Control que descansaba en una profunda desarticulación regional que garantizaba no solamente la fuerza hegemónica del centro, sino también el poder de los hacendados en las zonas que dominaban sus haciendas.

En medio de los grandes problemas y retos del siglo XIX, desde su cuestionado nacimiento como estado soberano, los queretanos nunca estuvieron de acuerdo con el territorio que se

les había dejado o que habían logrado defender en 1824. El gobernador porfirista Francisco González de Cosío que había tomado como un asunto personal la defensa de las fronteras y el crecimiento y expansión económica de la entidad, expresaba muy bien la inconformidad de sus contemporáneos y también el empeño político puesto durante su gobierno para transformar las condiciones:

Si atendemos a lo poco favorecido que fue nuestro estado respecto de otros de la Confederación Mexicana, cuando se marcaron los límites de los estados, por severo que se ponga el tribunal que ha de juzgar del actual orden de cosas, no podrá exigir mayor desenvolvimiento de los elementos bien escasos de que pudo disponerse. (130)

Posteriormente, a la caída de Díaz, el gobernador de Querétaro José Antonio Septién admirador del Ing. González de Cosío, retomó el asunto de los límites. Para el caso, el 16 de agosto de 1911 presentó una iniciativa ante el Congreso local para que a su vez éste la presentara ante la Cámara de Diputados del Congreso General, en la cual después de asentar que la división territorial en México ha sido "absolutamente arbitraria", demanda una nueva división territorial sobre bases más equitativas y económicas. Iniciativa que fue bien recibida por los estados de corta extensión territorial como Tlaxcala. Señala:

Esta división no es un juego de niños, es un problema tan serio y de tanta trascendencia que de su acertada solución depende en gran manera el progreso de la República; porque si la autoridad señala a cada Entidad Federativa una porción de territorio de tales dimensiones que ni sea tan

(130) Informe de Francisco González de Cosío, rendido el 16 de septiembre de 1892.

extensa que no alcance el poder a gobernarla, ni tan limitada que no proporcione los elementos indispensables para el sostenimiento y ensanche gradual y continuo de la acción administrativa...Nuestro Estado de Querétaro ha sido uno de los más perjudicados por las sucesivas divisiones que se han practicado en 100 años de vida independiente...y, unas veces acrecentada su división, y cercenada en otras lo vemos hoy reducido a una superficie de 10 200 kms cuadrados...En cambio sus colindantes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, México y San Luis Potosí, disfrutaban de dilatadas extensiones de terreno que les producen enormes rendimientos...mientras Querétaro apenas si puede llenar las exigencias de un escaso presupuesto...La justicia reclama que se emprenda una nueva repartición del territorio para que no subsistan esas odiosas desigualdades.

A su causa señala que,

La revolución triunfante no ha limitado sus energías ni ha ceñido sus ideas al solo principio de Sufragio Efectivo y no Reección; si la opinión pública la ha secundado en sus esfuerzos, es porque advierte que sus propósitos nobles y levantados son acabar con todos los males que afligen la República. (131)

La insatisfacción con las dimensiones territoriales fue llevada al Congreso Constituyente de 1917. Entonces se solicitaba reformar la división limítrofe entre los estados de Querétaro, México y Guanajuato, para favorecer la expansión de Querétaro. Cuestión que, como las solicitudes de otras entidades, no fue resuelta por los constituyentes, permitiendo así la sobrevivencia de las bases geográficas y sociales que habían hecho fuerte a los hacendados en el país.

4. La reorganizaciónnn de los pueblos en su lucha por la tierra

El proceso de expansión de la hacienda generó, al calor de la

(131) Sombra de Arteaga, octubre de 1911

revolución de Tuxtepec, la reorganización de los pueblos en defensa de sus fundos y de los pueblos establecidos en los terrenos de las haciendas. De hecho, los conflictos constantes y variados y la sistemática defensa jurídica, siempre exitosa, que de las expropiaciones hacían los hacendados, inevitablemente condujo a la última de las revueltas -casi generalizada en todo el estado- que en defensa de la tierra hicieron los pueblos de Querétaro.

En 1875, antes de la revolución de Tuxtepec, son varios los ocurros de los pueblos quejándose del trato que recibían de los hacendados. Por ejemplo, los vecinos del rancho de Cieneguita de Guanajuato se quejan, el 2 de enero de 1875, del "mal trato que les daban los hacendados". Los de la hacienda de Rancho Viejo y los vecinos del rancho de Tascalía, de la jurisdicción de Allende y los del rancho Santa Cruz, de la Palma, también se quejan de los procedimientos de los hacendados. Muchos de los inconformes levantados en armas, en este entonces, eran acusados de bandoleros. Por otra parte, se observa que al igual que cuando la lucha por la independencia, los cabecillas de los movimientos de los pueblos y las comunidades indígenas tendían a refugiarse en el territorio de la Sierra Gorda. Por ejemplo, el 12 de abril de ese mismo año, se informa al gobierno de Querétaro:

Se tiene noticia en México de que Vicente Paz que vive en la hacienda La Noria adelante del Colorado tiene una gavilla de bandoleros y próximamente caerá a los ranchos de Lagunilla y Ajuchitlancito para dirigirse enseguida a Río Verde a incorporarse a otras gavillas (132)

Posteriormente, los recursos de los pueblos ante el Supremo Magistrado de la Nación y los comentarios de los funcionarios federales a las demandas indígenas, sin lugar a dudas manifiesta la desvalorización de la población indígena que caracterizó a los liberales y la intención expedita de favorecer, bajo toda circunstancia, a los hacendados. De hecho, la apropiación más violenta de los terrenos se había realizado en la Sierra Gorda. En este sentido el depajo de las tierras de los pueblos en la Sierra Gorda, bastión de las rebeliones agrarias en Querétaro, sin duda auspició el resurgimiento de los movimientos demandando la devolución de las propiedades "usurpadas por los hacendados". Por otra parte, a partir de 1877 la demanda de los pueblos fue generalizada y se articulaba alrededor de los efectos más perniciosos acarreados por la expansión de la hacienda a costa de sus tierras: los había convertido en siervos contribuyentes dejándolos en la miseria y la orfandad. No descuidaban aclarar las causas o circunstancias que habían, directamente, propiciado la expansión de la hacienda a costa de sus terrenos, pese a las disposiciones jurídicas que les habían concedido el derecho a ellos: identificaban por un lado el uso de la fuerza y por otro las coaliciones políticas, desde antaño establecidas entre los funcionarios públicos encargados de aplicar las leyes y los hacendados, que permitía las ventas ilegales y la usurpación. De suma importancia, poco analizada aun hoy día, es la motivación o razón que ellos encuentran para explicar el interés de los

hacendados en despojarlos de sus terrenos: "para que el indigena no le haga contrapeso en el valor que ellos quieren fijar a las semillas". Finalmente, formulan las vías o medidas que consideran pertinentes para modificar la situación a su favor: cambio de autoridades, el apeo y deslinde de los terrenos, y la definición precisa de si "efectivamente son ciudadanos o todavía gozan de los derechos de menores de edad como los consideraban las leyes de indias". Ultima demanda que un funcionario federal interpretó como: "Casi piden que se les nombre un tutor" (133). Textualmente la exposición de Mandujano decía:

A pesar de las varias disposiciones existentes sobre repartos de terrenos de indigenas estos por mucho tiempo han carecido y carecen en la mayor parte de pueblos del uso y provecho que pudieran proporcionarles la propiedad de esas tierras de que se encuentran despojados por algunos hacendados y por la proliferación o mala interpretación que los municipios dieron a la ley de 25 de junio por la cual la mayor parte de los comisionados para el repartimiento de tierras a favor de los indigenas estos en vez de cumplir se apropiaron por vía de adjudicación la mayor parte de las tierras y constituyendo a los indigenas de cada lugar en ciervos contribuyentes que a la larga los ha venido a dejar en la miseria y la orfandad. Es público y notorio que la mayor parte de los hacendados colindantes de los pueblos han ido ensanchando sus propiedades a titulo de mayor fuerza o ventas figuradas por personas ilegítimas o apoderados..A causa de tales usurpaciones y ventas ilegales los indigenas poseen tan poco terreno que algunos pueblos ya nada tienen y los que poseen algo conforme a la ley nada disfrutan, porque las comisiones repartidoras que fueron nombradas y cierto número de individuos arreglan las cosas como mejor les conviene...El monopolio de usurpación de terrenos que han venido estableciendo algunos hacendados ha sido para que el indigena no le haga contrapeso en el valor que ellos

(133) Exposición que Pablo Mandujano, apoderado general de varios pueblos de indigenas de los estados de Guanajuato, Morelia, México, Querétaro, San Luis Potosí, envía al Supremo Magistrado de la Nación el 31 de noviembre de 1877. AGN, Gobernación, Sec. 2/877/8/Exp.5

quieren fijar a las semillas..(134)

El general José Cosío Pontones quien sin duda transcribe la exposición que a nombre de algunos pueblos indígenas hacía Mandujano, explica el por qué los indígenas solicitaban el apeo y deslinde de los terrenos. Motivación que, dice Gastón García Cantú, las historias comunes olvidaron:

una de las promesas de la rebelión de Tuxtepec había sido el prometer a los pueblos el apeo y deslinde de las tierras: promesa por la cual Díaz pudo levantar hombres para luchar contra Juárez y Lerdo de Tejada. Así lo señaló entre otros más Jose Maria Conzález: "hemos tenido ocasión, afirmó, de conversar con varios indígenas suficientemente ilustrados y nos han manifestado que las reclamaciones que están haciendo ante los tribunales para que les devuelvan los terrenos que les han susurrado, tienen por base una promesa que les hizo D. Porfirio Díaz, cuando era pronunciado, promesa que encierra un compromiso solemne de hacerles justicia" (135)

Bajo las promesas de Porfirio Díaz, y la frecuente demanda de los pueblos, también los hacendados y rancheros más fuertes de las regiones, firmando como "vecinos", aprovechaban para, resaltando los servicios prestados durante la revolución, solicitar la intervención del general para que se les concediera autonomía administrativa y política del centro de Querétaro. Por ejemplo el oficio que envían los "vecinos" del Distrito de Cadereyta, al General Porfirio Díaz, jefe del Ejército Constitucionalista, el 31 de enero de 1877, está firmado por conocidos hacendados y rancheros de la región como lo eran, Antonio y Rafael Resendiz,

(134) Idem.

(135) Gastón García Cantú, *El socialismo en México, Siglo XIX*, ed. Era, México, 3a. edición, México 1980, Pág.72

Justino, Rafael y Ventura Vega, Domingo Olvera, José María Maldonado, y Albino Lara, nombres confundidos entre 27 firmantes.

En esta ocasión los "vecinos" de Cadereyta de Montes dicen:

Terminada la campaña con las fuerzas Lerdistas e Iglesiasistas, cumple al deber de los pueblos manifestar de alguna manera su reconocimiento hacia los caudillos que con tanto valor y constancia han sabido llevar al Ejército regenerador hasta alcanzar el completo triunfo de una causa tan justa como lo es la de la nación que era presa del despotismo y la anarquía... Le suplicamos se sirva impartir su protección a esta pequeña y apartada ciudad recomendándola para que la autonomía de su Distrito sea respetada por el gobierno general y por el superior de este estado (136)

Las muchas demandas indígenas solicitando la devolución de sus terrenos en 1877 y la promesa de que obtendrían justicia del general Díaz una vez que éste llegara al poder, como bien comprueba Gastón García Cantú, influyó determinadamente para que se emitiera el reglamento de 20 de abril de 1878. Sin embargo, bajo esta nueva reglamentación los atropellos y las vejaciones a las poblaciones indígenas se arreciaron con la misma intensidad que éstos demandaban las dotaciones individuales y el apeo y deslinde de los terrenos. Por otra parte, a partir de entonces, las movilizaciones campesinas en defensa de sus terrenos eran calificadas de movimientos comunistas o socialistas. Calificación que, sin duda, justificaba la persecución de esa gavillas de revoltosos que podría alterar" el cauce del orden y el progreso" del país. El calificativo se había tomado por la promulgación del Plan de la Barranca y su demanda de un Congreso Agrario y, (136) AGN, Gobernación, Sec. 2/877/11/2

posteriormente, por la emisión del Plan Socialista de Sierra Gorda. (137)

Es evidente que la legislación del 56 y la del 78, suscitaron una gran movilización en los pueblos y las comunidades que venían pugnando por defender y recuperar las tierras de sus mayores. El llamado asunto de "los terrenos", en todo el país había generado serios conflictos. En Querétaro, en donde el proceso era insistente sobre todo en la Sierra Gorda sin obtener resultados favorables, la chispa de la revolución volvió a encenderse. Leticia Reina relata que,

su decepción los condujo a que en 1879 se levantaran en armas y tomaran la defensiva. La inquietud de los campesinos fue organizada por los representantes de los pueblos en lucha, quienes aglutinaron las protestas de aquellos en torno al Plan de la Barranca...El plan...hace una crítica al sistema económico mexicano: se denuncia la hacienda y todo lo que de ella se deriva...se desconocía al gobierno y a cambio se proponía un gobierno municipal o socialista regido por un congreso agrario, el cual sería el encargado de devolver las tierras usurpadas a los indígenas y de repartir los terrenos incultos. (138)

De manera independiente a la corriente de pensamiento que alimentaba las posiciones sostenidas en el Plan de la Barranca, el levantamiento campesino, constata Leticia Reina, "ya era un hecho: mil trescientos campesinos armados estaban en Sierra Gorda y otros grupos empezaron a unirse a ellos...(también) el general Miguel Negrete, cuyo movimiento político no había tenido eco, ni cobrado adeptos".

En Querétaro, primero se pretendió ocultar la situación. Un

(137) Leticia Reina, *Las rebeliones*, Op. Cit. Págs. 305-310

(138) Leticia Reina, *Las rebeliones...Op.Cit.* Pág. 308

editorial de la Sombra de Arteaga titulado "Cuestión de Terrenos" publicado en 1879 sostenía:

más de una vez, la sangre ha corrido en abundancia, en estados no muy lejanos al nuestro, porque la autoridad y los propietarios han tenido que apelar a la fuerza, para reprimir la usurpación de las propiedades rurales

El origen de la revolución de los pueblos de Sierra Gorda, que tan bien estructura Leticia Reina, va siendo relatada por Hipólito A. Vieytez en la memoria estadística del gobernador y Comandante militar del estado de Querétaro durante estos años, Antonio Gayón (23 de diciembre 1876 a 29 de marzo de 1880). De manera independiente al propósito explícito de restar importancia a la revuelta organizada, sus huellas se siguen en Amealco:

Los vecinos de Amealco se alarmaron con motivo de ciertas exigencias de los indígenas y el Ejecutivo con tino, tacto y prudencia arregló esos sucesos, trasladándose en persona al lugar citado, dictando las medidas conducentes a volverla paz a aquellos pueblos como lo consigue (139)

Posteriormente registra:

De cien hombres de las fuerzas del Estado que al mando del capitán Bros escoltaron una conducta a San Juan del Río, se amotinaron unos cuantos en el camino, ya de regreso, no por adquirir libertad de que no carecían supuesto que eran voluntarios, sino por causas personales e hirieron al referido capitán que murió poco tiempo después; el gobierno tomó energías providencias, y desde el 29 de octubre a la época en que escribimos esta reseña debido a aquellas disposiciones han sido capturados algunos de los insurrectos (140)

(139) Hipólito A. Vieytez, *Reseña histórica de la administración del Señor General Antonio Gayón Gobernador del Estado de Querétaro desde el 23 de diciembre de 1876 hasta el 20 de marzo de 1880*, Imprenta de Luciano Frias y Soto, Flor-baja No. 12, Querétaro 1880, Pág. 26

(140) Idem, Pág. 28

En vista de los problemas sobre "los terrenos" que empezaban a brotar en todo el estado, a partir de 1877 se organizó, perfectamente dice Vieytez, la tropa del estado y la Gendarmería de Rurales. Sin duda para prevenir la revuelta de los pueblos y pacificar la región por el uso de la fuerza militar. También y ante las incursiones violentas de los campesinos-indígenas arrollados por la expansión de las haciendas, a partir de 1879 se convino que los hacendados cedieran algunas tierras a los poblados, a fin de evitar "pérdidas mayores y más lamentables". Los Señores Jáuregui ceden de "manera voluntaria" algunos terrenos a Santa Rosa y Cadereyta; también los Legarreta ceden terrenos a Santa Rosa y Juan N. LLaca y Jesús Cabrera a Toliman. (141) Entre los pueblos beneficiados estaban los de Peñamiller, quienes obtuvieron un sitio y medio de ganado mayor cedido por Jose F. de Jáuregui dueño entonces del Extoraz. Sin embargo, este asunto se había detenido, informa el diario oficial del estado, Sombra de Arteaga el 28 de febrero de 1879, "porque el ayuntamiento había elevado un ocurso pidiendo se le cediera mayor cantidad de terreno". También los vecinos de Tolimán obtuvieron dos sitios de ganado mayor cedido por Juan N. LLaca, dueño de la hacienda de San Pablo y un aguaje que para el mismo pueblo cedió Benigno J. Cabrera. También habían cedido las fracciones de Chilar y Boquillas, de una extensión de 16 caballerías cinco centenas de caballería para el ayuntamiento de Peñamiller. (142) El pueblo de

(141) Sombra de Arteaga, 23 de enero de 1879

(142) Sombra de Arteaga, 28 de febrero de 1879

Tequisquiapan, sobre el que se podía ejercer mayor control por su cercanía con San Juan del Río y Querétaro, no disfrutó de estos beneficios. La propiedad fue garantizada al dueño de la hacienda La Magdalena. El problema de los indígenas de San Ildefonso con los dueños del rancho de la Cofradía, que había tomado un giro "alarmante" por la proclamación del plan socialista, dice Vieytez, en el Estado de México, fue resuelto amistosamente entre los litigantes en 1879.

Era un hecho que en Cadereyta, Peñamiller y Tolimán las fuerzas revolucionarias organizadas en defensa de la tierra iban ganando adeptos. Demandantes que la Sombra de Arteaga definía como "partidas de comunistas" que había que combatir. Las fuerzas federales organizadas desde San Juan del Río y Cadereyta fueron las encargadas de combatir a los revoltosos, apoyadas por "el cuerpo de los rurales que guarnecen estos distritos y el auxilio oportuno de los hacendados". (143) Sin embargo, para 1880, la revolución de la Sierra ya se interpreta como "desaveniencias graves" provocadas por el comportamiento del General Olvera quien había invadido, con fuerzas federales, una población en Tolimán; también había hecho prisionero al subprefecto de Peñamiller (Pedro Chavez). El conflicto, fue explicado por el prefecto de Tolimán, Ignacio Cabello, el 21 de febrero de 1880:

demolición de las mohoneras que hay en terrenos del Extoraz (Sic) para que quede cumplimentado al arreglo habido entre el gobierno del Estado y el dueño de la expresada finca...ordené al teniente coronel Torcez mandar poner en disposición de marcha cincuenta hombres del

(143) Sombra de Arteaga, 2 de noviembre de 1879

Batallón Tiradores, al mando del capitán Ruiz, diez rurales de Querétaro y treinta hombres de voluntarios de Santa María (Peñamiller) mandado por el C. Pedro Chavez. mandé llamar al Subprefecto interino C. Ignacio Cabello, ordenándole se pusiera a la cabeza de la expresada fuerza y marchara rumbo al rancho de los Encinos para que mandara ejecutar la disposición referida...En el rancho de los Encinos se encontraban las fuerzas olivaristas capitaneadas por Isaac Vega con 300 hombres obligando a retirarse a los rurales...(Al triunfo de las fuerzas rurales) se destruyeron las mohoneras levantadas por la hacienda y se ordenó al mayordomo colocara las mandadas construir por el perito agrimensor (144)

Los efectos de la revolución de la Sierra Gorda y de sus proclamas y planes, se deja ver en el ocuso del 5 de mayo de 1880, que envían los pueblos de Chicantepec, Huasteca Veracruzana, Villa de Valles, Huasteca Potosina, Montaña de Perote, Jalapa, Tula de Hidalgo, Huichapan, Yaniquilpan también de Hidalgo, y municipalidades del Estado de México al Ministro de Gobernación, en el que asientan:

En nuestras localidades sufren nuestros pueblos toda clase de vicisitudes por grandes que sean nuestros gastos y valiosos nuestros sacrificios todo por la cuestión del repartimiento de terrenos comunales cuya resistencia parte desde las primeras autoridades hasta los últimos empleados del poder ejecutivo y aun del poder judicial con distintos pretextos que reconocen una causa común ...las autoridades se ligan con los hacendados o temen la cuestión del comunismo, que con imprudencia y sin conciencia se atribuye a la clase indígena. Podemos dar garantías de que en los indios no germina la idea comunista menos aun el socialismo porque aun no está sembrada esa semilla...La subdivisión de la propiedad acumulada y que debe convertirse en lotes del dominio individual de cada indígena con derecho a repartimiento no es ni ha pertenecido al comunismo ni al socialismo pero si así fuera sin que nosotros lo comprendamos es obra de la nueva legislación especial que la desamortización que nos da inviolablemente el derecho que reclamamos y que nos niegan las autoridades con distintos y especiosos pretextos.

(145)

Para entonces ya se tenía certeza de que las demandas no eran aisladas y también que las revoluciones e invasiones de las haciendas provocaban un efecto contrario al buscado. En ese mismo curso se indica:

los pueblos en masa ostentados que en masa también reclaman pues sabemos que solo por conducto del abogado que suscribe representan cerca de 900 pueblos del centro de la República lo que prueba que nuestra actitud no es aislada y aventurada...sino parte de una justa exigencia ya muy general en la raza y clase abatida a la que pertenecemos...los gobernadores de los estados no cumplen las leyes del repartimiento. En Veracruz existe una ley que ordena el repartimiento pero no hay quienes la entiendan. En San Luis Potosí se tiene una revolución...en el sentido comunista y rige una abstención que lo agota y aplaza avanzando los hechos y aun los atentados. En México existe una ley que veta a los indios acudir a los tribunales sin licencia del gobierno...o con la condición de acudir a su Consejo de Gobierno donde influyen los hacendados, para no ser molestados con reclamaciones...En Hidalgo existe análoga prevención... (Demandan) se les den garantías, de que se administre justicia, mientras se complian en una ley agraria las leyes y resoluciones del repartimiento.(146)

Nadie sin embargo, quería enfrentar y resolver las demandas de los pueblos y las comunidades indígenas. La Secretaría de Gobernación turna la solicitud antes mencionada a la Oficina de Hacienda diciendo que era a esta dependencia a quien correspondía responder al asunto puesto que las "leyes habían salido de ese ministerio". No obstante la Secretaría de Hacienda responde que

La Secretaría (de Hacienda) no tiene injerencia alguna en esas operaciones que menos la tiene y puede tenerla en el

(145) AGN, Gobernación, Sec. 2/880/12/11

(146) AGN, Gobernación, Sec. 2/880/12/11

repartimiento de terrenos que antiguamente fueron de comunidad y hoy se hallan agregados a las haciendas o ranchos colindantes; pues para declarar la propiedad de esos terrenos debe proceder un juicio contradictorio en el cual se pruebe por parte de los individuos que los reclaman la propiedad que dicen tener y en la sentencia se resuelva sobre el dominio de esos predios...que no tratándose pues de terrenos que posean labradores pobres...ni de otros que estén sujetos a leyes de nacionalización...deben acudir a las autoridades judiciales (147)

El desprecio de la población indígena y la afirmación de que no tenían derecho alguno a demandar la propiedad de tierras que habían sido adquiridos por los legítimos propietarios "los hacendados" se sigue claramente en el análisis realizado por Gastón García Cantú. (148) No obstante, la reiterativa demanda del apeo y deslinde de terrenos para que se les hiciera justicia se tradujo en la legislación de Manuel González de 1883 que otorgaba gratuitamente 100 has, de los supuestos terrenos baldíos existentes en el país, a los labriegos pobres.

Es evidente que las divergencias ideológicas que sobre las cuestiones agrarias enfrentaron conservadores y liberales, a lo largo de tantos años de lucha, eran solamente aparentes. Para todos ellos las leyes de desamortización fueron vías para obtener recursos para la guerra. La presión de subvencionar los gastos de guerra con los bienes de manos muertas acabó destruyendo las posibles diferencias ideológicas que existían entre liberales y conservadores y unificando al país en torno a los viejos principios de la gran propiedad. La legislación agraria de Maximiliano y su propósito de efectivamente conceder a los

(147) AGN, Gobernación, Sec. 2/800/12/11

(148) Gastón García Cantú, Op.Cit. Pág. 75

indígenas la ciudadanía mexicana con todos los derechos y en igualdad de circunstancias que la de los hacendados -fueran liberales o conservadores- suscitó la unificación de las fuerzas hasta entonces separadas por el control político de la nación y no por supuestos principios ideológicos diferentes. De esta manera, el propósito desde 1813 de sentar las bases para la formación de un régimen de propiedad diferente al colonial recorre todo el siglo hasta la ley de 1894 sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de la República Mexicana que restablece el sistema de la gran propiedad.

CAPITULO V

ESTABILIDAD SOCIAL Y POLITICA DE QUERETARO: LA SUIZA DE LA REVOLUCION

Después de las invasiones a las haciendas y la revuelta armada de Sierra Gorda que desemboca en la crisis política que terminó con la gubernatura del general Antonio Gayón en 1880, en Querétaro se inicia un largo periodo de estabilidad social y política que culmina hasta 1920. La perdurabilidad de la paz queretana durante 40 años parece inexplicable cuando se observan los conflictos nacionales que, después de la emisión de la ley de terrenos baldíos de 1894, empezaron a proliferar en el país. Conflictos políticos, sociales y económicos escenificados en diversas regiones de la República, pródigamente estudiados desde diversos ángulos y perspectivas, que desencadenaron la revolución de 1910. Sin embargo, el largo periodo de la estabilidad queretana tiene una coherente explicación del todo amarrada al curso de la historia regional.

A lo largo de la conformación social y regional de los conflictos armados e ideológicos de los Ejércitos revolucionarios, Querétaro no sólo aparece imperturbable en el curso de su historia local: parecería que el temor a las guerras, revueltas y asonadas, presentes en su territorio desde 1810 hasta 1880, se tradujo en el deseo expreso de sus clases dirigentes para no vincularse, a alguna de las fuerzas en lucha. La "neutralidad" de Querétaro en los conflictos, además de su privilegiada posición geográfica, lo convirtieron en frontera ideológica y territorial de las fuerzas contendientes. Por otra parte, Carranza y Villa, los dos líderes

nacionales que tomaron el suelo queretano como lugar de promisión, no mostraron ningún interés en abrir un nuevo espacio de lucha en este territorio que se negaba a vincularse a la guerra y que tan dispuesto parecía a aceptar su presencia y a financiar las necesidades más perentorias de sus ejércitos. Los hacendados queretanos, también importantes comerciantes en la ciudades, si bien tendían a esconder los recursos disponibles en las haciendas y en sus almacenes, enfrentaban la subvención a los ejércitos que cruzaban su suelo (con caballos, forrajes, cereales y resintos para la tropa).

El Reporte del 10 de agosto de 1914, rendido por el prefecto de San Juan del Río, cuando Querétaro es tomado por los constitucionalistas, deja ver el temor que se tenía en la ciudad a los enfrentamiento armados y "el paso de los Ejércitos".

El día 29 de septiembre, evacuaron esta plaza las fuerzas federales por tierra y trenes, dejando el último convoy compuesto de 11 máquinas y cabus para destruir la vía, el cual convoy partió rumbo al sur a la una y cuarenta minutos de la tarde, habiendo arribado al punto la vanguardia de Fuerzas del General Murguía, al día siguiente llegaron fuerzas al mando del General Jesús Agustín Castro, quien citó a los vecinos, para hacer elecciones provisionales de Presidente municipal, habiendo recaído dicho puesto en el que suscribe...El Sr. Manuel Castro impuso un préstamo forzoso a los particulares residentes por valor de \$20 000.00, el cual no fue cubierto pues la mayoría de los vecinos pudientes de esta localidad la abandonaron a la salida de las tropas federales, pues la voz pública decía con insistencia que un combate en la ciudad o en sus cercanías sería inminente. El mismo general Castro tomó de la Receptoría de rentas de esta municipalidad la cantidad de \$5 285.60 y \$1 165.59 de la municipalidad de Tesquiquiapan...A las mismas tropas y a todas las que han continuado pasando se les ha proporcionado alojamiento, víveres ministrados por las haciendas comarcanas y forrajes para sus caballos (1)

(1) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 60.

Don Ruperto Ruiz, anciano hoy día de 90 años, originario ("criollo") de la hacienda de Calamanda, y trabajador de la hacienda toda su vida -desde los ocho hasta los 80 años- y mediero de 24 has de la hacienda, al rememorar el paso de la Revolución también muestra con nitidez la disposición que hacían los Ejércitos de los bienes de la hacienda, y lo distantes que estaban los peones y medieros queretanos de los conflictos de la Revolución. Comenta que,

El primer revolucionario que pasó a México fue Carranza. Cuando los primeros soldados llegaron a Calamanda había una puercada de puercos gordos, como treinta puercos y llegando, ahorita los mataron. Nomás los pelaban como si pelaran una res después tiraban los cueros y toda la carne se la comían. Duraron como nueve días pasando los soldados de Carranza a México. Y quien sabe si Villa sería compañero de Carranza, quien sabe, en seguida pasó él y también nueve días duraron pasando para México. Cuando Carranza llegó allá, ya no dejó entrar a Villa y entonces ahí viene la revolución. Por ahí en Querétaro fue donde ya pelearon, aquí no, aquí nomás se hacían tontos, se aventaban balazos pero no se pegaban. De aquí de Calamanda ninguno se fue para la Revolución. Toda esa gente venía de por allá, sabe Dios de dónde venían (2)

Muchos sin embargo, buscaban justificaciones para no entregar

Subrayado mio.

- (2) Entrevista con Don Ruperto Ruiz en junio de 1990. Don Ruperto Ruiz nació en la hacienda de Calamanda en 1901, propiedad entonces de la Sra. Maria Virgina de Mancilla (por herencia de su esposo, Romualdo Mancilla). Entró a trabajar a la hacienda a la edad de ocho años y permaneció vinculado a la misma por 80 años. Durante los últimos 58 años que trabajó en la hacienda además de mediero de 24 has, era velador. Dos de sus hijos fueron administradores de la hacienda. Celestino administró la hacienda durante 30 años y Eleuterio que estuvo los últimos 9 años hasta 1980. La hacienda posteriormente pasó a manos de José Montes, cuyas hijas son las actuales poseedoras de la hacienda.

los productos de las fincas. En el año 1914, Luis Helgueros de la hacienda Ajuchitlancito manifiesta que no tiene maíz "más que el requerido por la propia hacienda; el trigo lo tengo vendido en México lo mismo que el frijol...tengo ya entregados 20 caballados al gobierno del estado cuyo importe aun no me ha sido satisfecho". Raymundo Mora, reportaba que todo "el maíz ya había sido vendido a México". El Señor Severino Piña, administrador de los bienes de la Cia. The Republican Milling and Minig Co., en septiembre de 1914, solicitó al presidente Municipal constitucionalista, Severino Ayala, que

le entregue las llaves de los trojes y existencias de maíz y pasturas de dicha Cia. que...le fueron recogidas por el C. Gral. Hernández a su paso por esta población para utilizarlos como pastura para la caballada de las fuerzas que eran a su mando (3)

Posteriormente cuando la influenza y el hambre aparecieron en Querétaro entre 1918-1919 (4), los hacendados que tenían cosechas no querían vender la producción al gobierno. Este fue el caso de Remigio Noriega en 1919. Cuando Noriega ya había vendido la producción de trigo, que fue abundante ese año, el gobierno quería confiscar la producción para venderla en Querétaro. Los que

- (3) Archivo San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 60.
- (4) La mortandad por la influenza a fines de 1918 era tan grande que el subdelegado de San Pedro Ahuacatlán dice al Presidente municipal de San Juan del Río: "Comunico a Ud. que no ay (Sic) un lugar para que sigan exhumando los cadáveres porque este pueblo es en sumamente muy reducido, solamente que Ud. tenga a bien que se sepulten en sus mismas casas se podrá seguir sepultando porque no ay lla (Sic) ni adonde". Ante el número de las defunciones y la falta de panteones, la presidencia municipal ordena que los cadáveres sean enterrados en los terrenos de las haciendas y los ranchos. Archivo de San Juan del Río, Presidencia, 1911-1920, caja 59.

habían permitido la pastura de los animales de los Ejércitos querían recuperar sus terrenos. Este fue el caso de Alvaro Loyola de la hacienda la Venta, quien en octubre de 1918 pide al Presidente Mpal. de San Juan del Río que "interponga su valiosa influencia ante el coronel Barrera",

a fin de que la caballada de la tropa no me siga acabando los pastos tan reducidos que tengo en la loma y que Ud. conoce bien que es lo único en todo el año para los animales de aquí. Hoy vinieron 130 caballos traídos por unos soldados a quienes reclamé y me dijeron que traían orden expresa del referido coronel, cosa que no creo; porque muchas otras veces que lo he visto con el mismo objeto, me ha dicho que no se los permita. (5)

A partir de 1918, sucesivamente, los hacendados queretanos de los valles empiezan a protestar por los abusos del Ejército instalado en la entidad, ya fueran cometidos por los coroneles y generales o por la soldadesca. Aparentemente entonces, cuando proliferan los robos en las haciendas, cuando las peleas armadas entre los soldados y los peones son cotidianas y los abusos de los "jefes de armas" parecían interminables, los hacendados y rancheros pugnaban por conseguir que los Jefes de la tropa instalada en sus terrenos les fuera favorable. Este fue el caso con el coronel Barrera. Los comerciantes, hacendados y particulares de San Juan del Río solicitan el 17 de diciembre de 1918:

Los que suscribimos, comerciantes, hacendados y particulares, con la violencia que el caso requiere, nos dirigimos atentamente a usted para suplicarle pida a nuestro nombre al Sr. Presidente de la República que no

sea removido de esta ciudad el Sr. Coronel Federico Barrera, persona que estimamos por haber procurado siempre el mayor orden en las fuerzas de su mando y por ser además, un cumplido caballero (6)

No podían solicitar su erradicación para evitarse los males que les acarreaban, porque las gavillas de bandoleros también se habían incrementado. Por ejemplo, Jose F. Frías de la hacienda de Cazadero el 25 de noviembre de 1918 informa que:

detrás del cerro de la Cruz hay cerca de 40 de a caballo bien armados, en el mismo lugar donde estuvieron ayer me supongo quieren caer esta noche en ésta. Suplico darnos auxilio porque el destacamento de aquí se fue a Polotitlán.

La pasividad política de los hacendados y comerciantes (de 1912 a 1918) frente a las sucesivas fuerzas que se asientan y controlan la región (villistas y constitucionalistas), ubicados en la manera de pensar de las clases dirigentes, parece enraizar en la lucha sostenida por todos los sectores sociales para evadir las leyes de reforma y en la librada contra los liberales por la defensa del Imperio de Maximiliano. Los conflictos sociales y económicos suscitados por la aplicación de las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes de manos muertas, pugna que había tomado 20 años en resolverse, y la desolación de la entidad en 1867, seguían estando presentes en la memoria social en 1889.

Las revoluciones han sido...enemigos de la prosperidad de Querétaro. En 1855 fueron saqueadas algunas casas de comercio, los archivos públicos quemados, el pueblo

perseguido como fiera por los agentes del gobierno de la época y diezmada la población por la recluta forzada para el Ejército. Los préstamos, las exacciones de semilla y de animales para sostener y combatir la revolución de la Sierra cegaron a su vez las fuentes casi agotadas de la riqueza pública y privada...El famoso sitio de 1867, acabó de herir de muerte el progreso de la ciudad, destruidas sus fincas, extorsionados sus habitantes por el hambre y por las exacciones pecuniarias, y muerto su comercio, Querétaro casi sucumbió a los sucesos y se rindió a discreción a su destino.(7)

No obstante, hoy, a más de un siglo de distancia, se sabe que los queretanos lucharon con denuedo por superar la desolación y la tristeza que los consumía por la derrota de Maximiliano. También fue laudable la energía empeñada en recuperar la autonomía política de la entidad y por impulsar la expansión económica del estado a través del único medio que ellos (los queretanos) conocían: la expansión territorial de la hacienda. Es evidente que el esfuerzo realizado por los hacendados y los rancheros desde 1867 para recuperar la bonanza que había sido propia de Querétaro en épocas pasadas, y su alianza para expandir las propiedades a costa de los fundos y ejidos de las comunidades indígenas, los municipios y los pueblos -expansión que se realiza desde el restablecimiento de la República en 1867 y que culmina en 1880- fue exitoso. Por otra parte, la expansión territorial de la hacienda y su coexistencia pacífica con los rancheros fue legalizada por la legislación porfiriana de 1892 (que ratificaba la propiedad adquirida bajo las leyes de desamortización y nacionalización) y la de 1894 que ratificaba la expansión de la hacienda a costa de los fundos y los ejidos de los pueblos.

(7) Editorial de la Sombra de Arteaga del 12 de agosto de 1889

Después de 1880, los hacendados y los rancheros no se preocuparon por acumular más tierra o por concentrar el agua. Proceso violentamente realizado en la década pasada (1870-1880). Por otra parte, la circunstancia fortuita de que en Querétaro no existían terrenos baldíos que suscitara el interés de las grandes compañías deslindadoras creadas bajo la legislación de 1894, no auspició la incorporación de las "compañías agrícolas" que con capital extranjero se instalaron en otras regiones del país. En este sentido, en Querétaro no se dio un desarrollo capitalista brutal que aniquilara la vida de los pueblos.(8) Por el contrario, aun cuando la atención se dirigió a la recuperación de la productividad y a la creación de la infraestructura de riego que hiciera más productivo el suelo y por sostener el "orden y la paz" social y política que requerían para impulsar la expansión económica de la agricultura, se conservó el tradicional estilo paternal del hacendado español de fines del siglo XVIII. Así, el período de la paz y el orden instaurado bajo el rígido control político y social de González de Cosío, gobernador del estado por casi treinta años, y la recuperación económica del sector por las inversiones agrícolas realizadas con capital gubernamental y privado, fueron determinantes para que en 1910 el grupo de los hacendados y los rancheros apostara a la inmovilidad. No querían

- (8) Como indica Brading, "Las investigaciones recientes sugieren que el desarrollo económico general del porfiriato produjo una gran mejoría en la agricultura, mejoría que de ninguna manera se limitaba a las propiedades que se dedicaban a abastecer el mercado de exportación. Por consiguiente, no fue el feudalismo, sino una forma más intensa de capitalismo agrícola, lo que amargó a los campesinos mexicanos". D.A. Brading, Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, F.C.E., 1985, Pág. 27.

perder las ganancias obtenidas en los últimos 20 años. Ganancias que sentían en riesgo si se estimulaba la participación activa de peones y medieros en los Ejércitos y si ellos tomaban partido por alguna de las facciones políticas en pugna. Las experiencias de los conflictos habidos durante el Imperio y la desolación de la entidad en 1867, al triunfo de la República, todavía eran recordados por las clases dirigentes.

Desde la perspectiva de los indígenas, los peones y medieros de las haciendas, sostenidos en pie de lucha en Querétaro durante 80 años por la defensa de sus tierras, el resurgimiento agrícola de la entidad significó la oportunidad de contar con salarios y dotaciones diarias de maíz, además del pejugal que entraba como parte de los convenios de trabajo. Por otra parte, en el empeño de los hacendados, liderados por González de Cosío, por evitar las revueltas indígenas y de los "vecinos" de los pueblos y los municipios por recuperar las "excedencias y demasías" de la hacienda, forma eufemística de ratificar la expansión de las fincas rústicas a costa de las tierras comunales y de los municipios, se practicó con todo rigor la titulación individual de la propiedad comunal. Estas dotaciones concentradas en la zona indígena, Amealco, San Juan del Río y en los distritos de la Sierra (Cadereyta, Jalpan y Tolimán), temporalmente resolvieron muchas de las viejas disputas sobre el control de la tierra y el agua. La sobrevivencia física y social de los trabajadores de las haciendas, aun cuando los salarios pagados en el estado eran de los más bajos de la República (9) y las crisis cíclicas por los (9) 0.18 diarios cuando en el el país se pagaban, entre 0.25 y

malos temporales en muchas ocasiones obligaban la migración forzosa, mantuvo la estabilidad y, en general, garantizó la paz. Para 1900, hacendados, rancheros, peones, medieros y apareceros habían logrado una convivencia pacífica. Armonía que estaba fincada en el auge experimentado por la agricultura durante este periodo, en la titulación de la propiedad comunal y en la sobrevivencia de la cultura paternalista que conservaron todos aquellos que tenían los recursos suficientes para utilizar mano de obra asalariada: los hacendados y los rancheros.

A la estabilidad en la sobrevivencia, lograda durante estos años, se suma la renuencia de los indígenas, de los peones y los medieros a ser reclutados para la guerra. La práctica cotidiana de los reemplazos, al azar, durante el porfiriato y en los aciagos días que corren entre 1910-1911 -para organizar las fuerzas rurales en defensa de las haciendas y para impedir que "individuos sin trabajo" se presentaran en las localidades y rancherías a "soliviantar" a los pacíficos habitantes-, nunca fue bien aceptada por los trabajadores rurales queretanos.

La renuencia de los peones y medieros de las haciendas a ser soldados o guardias rurales era diestramente aprovechada por los hacendados para impedir que los trabajadores se rebelaran. En la

0.50. Cumberland indica que, "una comparación entre el trabajador mexicano y su equivalente contemporáneo en Estados Unidos revela el hecho asombroso de que el salario real del mexicano era alrededor de quince veces menor en relación con el trigo, doce veces menor en relación con el maíz, y diecinueve veces menor respecto a telas baratas...Francisco Bulnes concluía 'que el jornal real...(estaba disminuyendo), y su marcha tenía la dirección de la muerte por hambre'", Charles C. Cumberland, Madero y la revolución Mexicana, Siglo XXI Ed., México 2da. edición, 1981 Pág. 25

misma entrevista realizada a Don Ruperto, me aseguraba,

El mero patrón de la hacienda, Don Romualdo Mancilla mandó hacer la Iglesia de la Hacienda para sus gentes. Ahí íbamos todos. Pero no crea. Llevaban sus libros de rayas bien hechecitos y la gente era esclava de ellos. Eso de torear a la gente creo que no está bien. Agobiaban a la gente. Y no nos podíamos rebelar porque nos corrían de su rancho. Si nos rebelábamos nos quitaban el trabajo. Si nos rebelábamos nos mandaban como soldados. Y no nos queríamos ir.

Posteriormente, con el asesinato de Madero que "encendió la mecha de la Revolución", cuando se puso en práctica el uso de la gleba para engrosar las filas de los Ejércitos, siempre alimentados con las poblaciones indígenas y los trabajadores de las haciendas, de nueva cuenta peones, medieros y aparceros se opusieron a ser reclutados. No había en el estado un espíritu favorable a la guerra. Todavía en 1918, cuando los conflictos sociales, encubiertos por el bandolerismo, empiezan a tomar forma en Querétaro, los peones seguían renuentes a ser reclutados para el Ejército o para la policía municipal. El ocuso del subdelegado de Pedro Escobedo, Rafael Perrusquia, al presidente municipal de San Juan del Río del 27 de noviembre de 1918, deja ver la renuencia de los peones. Rechazo que se fortalecía si las haciendas ocupaban trabajadores y pagaban buenos salarios:

Hay grandísima necesidad de mejorar los sueldos a los policías de este lugar que apenas ganan \$3.54 diarios y como en la actualidad en las haciendas están pagando regular a la gente de trabajo... por lo que no hay quien quiera...tengo a muchos inútiles por su avanzada edad que para algunos casos de riesgo no se cuenta con ellos (10)

Los otros sectores sociales importantes en Querétaro, los llamados sectores medios urbanos, la clase burocrática, los empleados de las haciendas (administradores) y los profesionistas, maestros en el afamado Colegio Civil del estado, y la pléyade de estudiantes que al Colegio asistían, hijos de las familias "honorables de la entidad", estaban estrechamente vinculados con las élites dirigentes -hacendados, comerciantes e industriales textiles-. Este sector social, de administradores públicos y privados, había experimentado desde la aplicación de las leyes de Reforma un auge social y económico que respondía a las componendas políticas locales. Componendas acentuadas al triunfo de la República en 1867. De este grupo algunos habían venido a ser hacendados o, por lo menos, formaban parte del importante sector de rancheros que desde 1830 se venía conformando en la entidad. Otros se habían convertido en importantes prestamistas y en accionistas de los bancos instalados en la ciudad y de la Compañía Hidro-Eléctrica Queretana. En este sentido, el sistema para ellos había sido satisfactorio y no tenían resentimientos políticos acumulados para participar en el movimiento antireeleccionista encabezado por Madero. Por el contrario, para este grupo la perdurabilidad del Régimen era vital para consolidar las fortunas que habían ido acumulando.

Los únicos grupos susceptibles al ideario maderista eran los obreros de la industria textil, los trabajadores de los ferrocarriles y las familias de artesanos que trabajaban la cambaya, ubicados en la ciudad capital. Grupos que, por su

posición laboral, habían estado más cerca de los acontecimientos registrados en la República entre 1907-1910 y que llevaron a cabo las únicas huelgas y disturbios registrados durante estos años en el estado. Los grupos denominados en Querétaro "clase menesterosa", a la caída del gobernador González de Cosío invadieron la ciudad asaltando comercios y generando un caos transitorio fácilmente controlable. Es decir, fueron movimientos efímeros en gran medida porque no se conformó ningún liderazgo político local que pudiera conducir estas inconformidades y vincularlas a las grandes demandas y aspiraciones políticas nacionales. Esta tranquilidad perduró en Querétaro hasta 1918, no obstante que continuamente fue asediado por las "gavillas rebeldes" de Guanajuato e Hidalgo que incursionaban de cuando en cuando en la Sierra, y que en las haciendas y ranchos de los Valles de San Juan del Río y Querétaro fueron frecuentes las escaramuzas entre los rurales y los peones.

Se puede sostener que la modernización de la economía queretana durante el porfiriato y la transición de la propiedad comunal a propiedad individual sin destruir la vida de los pueblos y las comunidades indígenas, básicamente porque se conservó la cultura paternalista que había sido propia de los viejos hacendados españoles, permitió la larga estabilidad social que caracterizó a Querétaro durante el periodo revolucionario. Cultura paternalista que sujetaba la vida y hacienda de los peones al hacendado. Cuando los disturbios nacionales de 1912, y cuando los destacamentos militares de paso por las entidades se llevaban a los peones para los Ejércitos los hacendados y los prefectos

políticos de inmediato reclamaban su devolución, como algo propio.

El presidente municipal de Tula, Hidalgo, solicita al prefecto de San Juan del Río el 14 de mayo de 1912:

Un destacamento federal al pasar por estación se llevó a Severiano González vecino de esta encaréscole preste a este individuo garantías para que no sea atropellado y pueda volverse a esta

A la tranquilidad sostenida en el estado también contribuyó el rígido control político que mantenían (y mantuvieron hasta 1938) los hacendados al colocar en los puestos administrativos públicos (prefectos, comisariados y jefes de policía) a los trabajadores de la hacienda que les eran leales. Para los nombramientos de los Comisariados, delegados y jefes de policía se consultaba a los hacendados. Por ejemplo el 12 de mayo de 1912, Fernández y Sorrilla, dueño de la hacienda la De, responde a la solicitud del prefecto de San Juan del Río diciéndole:

Atanacio Olivera es la persona a nuestro juicio, que puede desempeñar el cargo de comisario en la hacienda La De y para jefe de policía en el mismo lugar creemos puede desempeñarlo el C. Bartolo Trejo, por lo que, si usted lo encuentra prudente, puede disponer la expedición de los nombramientos respectivos. (11).

En otras ocasiones, por así convenir a sus intereses, los hacendados pedían que se cambiaran a las personas que desempeñaban los puestos públicos. El administrador de la hacienda de Lira, propiedad de Francisco Rincón Gallardo, pide al prefecto de San Juan del Río el 30 de agosto de 1912:

(11) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 58.

Tengo la honra de comunicar a usted que al ser del todo necesario tanto para los intereses de ésta casa como para el orden interior la renovación del comisariado actual que lo es Toribio Landeros, suplico a usted muy encarecidamente se sirva aceptar su renuncia y libre sus acertadas disposiciones para que se expida al C. Magdaleno Trejo el respectivo nombramiento para ese puesto, que es la única persona que por el momento puede hacerse cargo de él (12)

La renuncia de Toribio Landeros la recibió el prefecto de San Juan del Río el día 31 de agosto de 1912. Como argumento para su renuncia Landeros decía que era: "Porque no me combino lla (Sic) estar por barias (Sic) circunstancias". Sin duda el cambio fue hecho de acuerdo a los intereses de la hacienda de Lira. Igual sucedió en estas mismas fechas en la hacienda de Guadalupe. En donde, por instrucciones del administrador Manuel Arredondo, es nombrado Agapito Pérez.

Sin embargo, en el seno de la estabilidad se venía gestando una profunda decadencia social y cultural de la sociedad queretana, tanto en el campo como en la ciudad. Decadencia que no fue perceptible mientras el destino de la entidad se mantuvo bajo el rígido control que establecía el régimen porfirista. Al romperse los esquemas tradicionales de dominio en 1911 fue evidente que en Querétaro desde 1900 se venía fraguando un cambio social importante: la ciudad era dominada por una clase media, los administradores públicos y privados y por los Licenciados egresados del Colegio Civil, que si bien tenía enormes aspiraciones sociales y económicas, no había nacido y crecido en un ambiente cultural que estimulara sus preocupaciones políticas.

(12) Idem.

Estos grupos de profesionistas y administradores tampoco habían participado en las grandes pugnas del 67 ni en la purga de los años 70. No tenían formación política. Al caer en sus manos el destino de la entidad no supieron que hacer con ella. Se consumieron en diatribas y ambiciones personales, se aislaron de la vida nacional e impusieron, por su incapacidad para negociar con las sucesivas fuerzas que pretendían el control del país, una cultura subterránea, pálida caricatura de las herméticas y sólidas alianzas del pasado. Lejos estaban, en 1915, los tiempos de los empresarios como los Rubio y los Veraza, de los políticos como González de Cosío y Timoteo Fernández de Jáuregui, de los militares rancheros como Rafael Olvera. La incapacidad política de la clase media queretana, abrió el camino para que los constitucionalistas se establecieran en la entidad. Por otra parte, de los distintos líderes revolucionarios era Carranza el que más cercanía tenía con los hacendados queretanos. Situados a escoger entre Villa a quien temían y Zapata a quien consideraban "tristemente célebre", la decisión por Carranza era la más positiva. Y no se equivocaron. Carranza les garantizaba lo que para ellos era lo primordial: el respeto a la propiedad privada.

En el campo, también se venían registrando cambios radicales que, sin violencia, tendían a fraccionar la hacienda. Por las prácticas nunca desarraigadas de hipotecar las fracciones y ranchos anexos, se dio un proceso netamente comercial de compra-venta de las propiedades. Los rancheros y los hacendados se habían incrementado en el corto periodo de 1900-1910. Sin embargo, a nivel cultural no se perciben transformaciones sustanciales

durante esta década (1900-1910): los hacendados todavía conservaban el estilo paternalista y la mano dura para mantener a sus trabajadores amarrados a las haciendas, prácticas y usos que los habían caracterizado, y los indígenas, peones y medieros de las haciendas, en su afán de sobrevivencia, parecían haber olvidado sus demandas de tierra.

Posteriormente, con la lucha entablada contra el usurpador Huerta y entre las diversas fuerzas militares y políticas organizadas en el país, se modificó el panorama social de Querétaro. Los acontecimientos revolucionarios ampliaron los límites geográficos de los trabajadores de las haciendas -en lugar de la hacienda o el rancho tenían al país ante sus ojos- y modificaron su percepción del mundo. La vida nacional, bajo la concepción e interpretación que de lo nacional hacían los constitucionalistas, entró en los ranchos, los pueblos y las comunidades indígenas. El zapatismo y sus demandas de restitución de tierras a las comunidades indígenas no llegó a Querétaro. Incluso el villismo que contaba con algunos adeptos en la entidad no penetró en la vida de los pueblos. Fue la visión de los constitucionalistas, encabezados por Carranza, la que se impuso en el estado. Bajo sus primeras leyes agrarias, la del 20 de diciembre de 1914 y la del 6 de enero de 1915 los viejos pueblos indígenas asentados en el estado empezaron a solicitar la restitución de sus tierras. Demandas aisladas que no tuvieron, en su mayoría, una resolución positiva.

En medio de la aparente inmovilidad de la sociedad queretana, la cosmovisión del indígena y de los trabajadores rurales se fue

modificando a lo largo de estos años. Al proceso de cambio de la sociedad indígena y de los peones y medieros de las haciendas también contribuyeron las organizaciones obreras de las fábricas textiles (de hilados y tejidos), de Hércules, La Purísima y la Cía. Bonetera queretana, y los ferrocarrileros que pronto extendieron su acción política a los ahora definidos genéricamente como campesinos. Los peones y medieros de las haciendas, en menor proporción las comunidades de indígenas, fueron conducidos a articular sus demandas al estilo de las planteadas por los incipientes grupos obreros de la ciudad de Querétaro: mejores salarios, jornada laboral de ocho horas y la organización sindical de los trabajadores del campo. Mejoramiento de las condiciones laborales que contemplaba la Ley del trabajo del estado de Querétaro elaborada por el gobernador José María Truchuelo (28 de noviembre de 1920 a 10. de octubre de 1923). La primera de este tipo en el país. Como reacción inmediata los hacendados y los rancheros empezaron a perder el estilo paternalista que los había caracterizado. No obstante, la despaternalización de los propietarios de la tierra y la ruptura de los vínculos que tradicionalmente habían mantenido atados y sumisos a los trabajadores de la hacienda, no fue homogéneo y mucho menos generalizado. Todavía en la década 1920-1930 persistía la administración de algunas haciendas al "viejo estilo de los hacendados", mientras en otras se había organizado una guerra a muerte entre los trabajadores que pugnaban por "la organización" y los que todavía temían desprenderse del tutelaje de los hacendados.

Palemón Ríos, agrarista de los años treinta, cercano colaborador de "El Jefe" Saturnino Osornio, relata que,

En el año 1922 eran medieros (Saturnino Osornio Ramírez y Palemón Ríos) de la hacienda de Xajay, Hgo. propiedad del Sr. Ignacio Guerrero quien fuera compadre de Porfirio Díaz. Trabajábamos por obligación en la hacienda de Xajay, ganando 25 centavos y un cuartillo de maíz desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde...andaba en la cosecha de maíz un grupo de 30 hombres del Sitio y Tlaxcalilla...se le pidió al Sr. Núñez (Carlos Núñez administrador de la hacienda) un aumento de sueldo y que aminorara las horas de trabajo de acuerdo con la ley del trabajo expedida en la ciudad de Querétaro por el gobernador del estado, el Lic. José María Truchuelo. Inmediatamente Saturnino Osornio, a quien reconocíamos como líder, recibió citatorio del dueño de la hacienda de Xajay para que se presentara en el despacho de la hacienda, que en aquella fecha presentaba como dueño al coronel carrancista Julio Herrera. Nos reunimos los 30 medieros y tras dialogar se acordó que no fuera solamente el llamado Saturnino Osornio, así que nos presentamos ante Don Julio Herrera en el despacho de la hacienda, quien un tanto disgustado pero con una sonrisa que se apreciaba en su rostro, nos preguntó cuáles eran nuestra pretensiones acerca del sueldo y, dijo que tenía instrucciones al administrador para que se aumentara el sueldo y se aminoraran las horas de trabajo. Saturnino Osornio contestó que queríamos ganar 50 centavos por 8 horas de trabajo de acuerdo a la Ley del trabajo que existía en Querétaro a lo que tuvo que acceder Don Julio Herrera durante ese año, pero nos dijo que ya no contáramos con las tierras como medieros para el año venidero. Esto dio origen para que hiciéramos una solicitud de tierras ejidales de acuerdo con las leyes de la materia que ya existía en todo el territorio nacional...En aquel entonces esto era una novedad que pronto se regó en todo el municipio de San Juan del Río y en todo el estado de Querétaro; la labor agrarista que llevábamos a cabo, organizando a los campesinos de las haciendas hizo popular a Saturnino Osornio y empezaron a llegar trabajadores de todos los municipios del estado...se presentaba en las rancherías (Saturnino Osornio) llevando a cabo juntas de campesinos de los propios lugares a veces por primera vez se lograba que se organizaran los hombres, otras veces se tenía que volver en otra fecha, pues había temor entre los trabajadores que las guardias blancas sostenidas por los terratenientes los asesinaran como sucedía en aquella época, en que los hacendados mandaban matar a los

representantes de los trabajadores organizados. (13)

Don Ruperto Ruiz, uno de los apadronados, como llamaban a los trabajadores que habían nacido y vivido en la hacienda y que permanecían leales al patrón, comenta que él no "agarró ejido",

Porque en aquel tiempo ya ve que según decían los padres que era pecado. Que era pecado agarrar los ejidos. También los patrones daban algo de centavitos y ya ve, por eso no agarramos tierra. Y ya después cuando ya hubo orden de que todos tuviésemos un pedazo de tierra (en 1932 durante el gobierno de Saturnino Osornio) ¡ya no había!. Si eso me hubieran dicho luego, luego, yo me agarro hasta unas tres tierras. (14)

Como resultado, en 1920, sin una clase dirigente local fuerte y con capacidad de negociación política, con profundas divisiones internas entre los trabajadores del campo, y con los hacendados y rancheros dispuestos a enfrentar todo tipo de riesgo antes que perder la tierra, Querétaro se sumió en la pobreza económica y cultural y en la revuelta agrarista que duró 15 años (de 1923 a 1938). Revuelta que, por la particular situación de la entidad durante el período revolucionario, no se inició, contrario a lo que se piensa, por motivos agrarios. Peones y medieros se

(13) Documento inédito sobre el Agrarismo en Querétaro, preparado por Palemón Ríos, mediero de Xajay, vecino del poblado de El Sitio, Mpio. de San Juan del Río, posteriormente cercano colaborador de Saturnino Osornio. Palemón Ríos ocupó varios cargos públicos en la década de los treinta, entre otros fue presidente Municipal de San Juan del Río, presidente del PNR y Presidente de la Confederación de Agrupaciones agrarias y campesinas del estado de Querétaro, adherida al PNR en 1932. También diputado local todavía en el período de gobierno de Camacho Guzmán en la década de los ochenta. Documento leído en la casa de Don Palemón, en el El Sitio, San Juan del Río, marzo de 1988. Subrayado mío.

(14) Entrevista con Don Ruperto Ruiz en Junio de 1990.

organizaron, como lo relata Palemón Ríos, para demandar aumentos de salarios y jornadas de 8 horas de trabajo. La renuencia de los hacendados para resolver las demandas de los trabajadores rurales, y la decisión de utilizar mano dura con los "rebeldes", suscitó la movilización agraria. Movilización que se entrecruzó con la lucha cristera de 1927 a cuya sombra crecieron las fuerzas agraristas organizadas por el general Calles para combatir la lucha religiosa. No obstante lo violento que fueron los enfrentamientos entre los agraristas demandantes de tierras encabezados por Saturnino Osornio, y las fuerzas organizadas de los hacendados, encabezados por el gobernador de Querétaro Ramón Rodríguez Familiar (1935-1939), los objetivos del reparto agrario fueron parcialmente obtenidos. Como reflexiona Brading, "el desafío del campo, sin importar que tan amenazador fuera, siempre fue pasajero, y por la naturaleza de las cosas estaba condenado al fracaso". (15)

1. La modernización de la economía: legalización de la gran propiedad

Las situaciones políticas por las que había cruzado Querétaro hasta 1870, habían abatido su economía y habían desmantelado, por así decirlo, la todavía incipiente estructura administrativa y la organización social que a intervalos muy espaciados se iba levantando.

(15) D.A. Brading, *Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana*, F.C.E. México, 1985, Pág.22

La costumbre arraigada de esconder los ingresos reales, dificultaba el establecimiento de los impuestos y frenaban la realización de los programas públicos de alta prioridad estatal en el ramo de los servicios sociales. Los arreglos de las cuentas, el ajustes de las inversiones, el ocultamiento de la extensión de la propiedad raiz, fueron acciones cotidianas de la clase propietaria a lo largo de todo el siglo XIX.

Los intentos de los gobernadores por ordenar la administración pública en el ramo de los impuestos, siempre encontraba fuertes obstáculos entre los hacendados y los industriales que se negaban a ser medidos. Tal fue el caso en 1878 cuando el gobierno de Antonio Gayón quería establecer las juntas cuotizadoras en los seis distritos del estado a fin de especificar los montos que se debían pagar al fisco por la propiedad raiz. (16) La fuerza de los hacendados es evidente en esta ocasión: a principios de abril de ese año (1878), Gayón tuvo que emitir una nueva Ley -la No. 20- ordenando que las juntas cuotizadoras emprendieran sus trabajos con el número de miembros que tuvierna. El hecho es que los hacendados se negaban al funcionamiento de la junta e influían para que los seleccionados rechazaran el cometido gubernamental. Decía la Ley No. 20 en su artículo único:

Si uno o más de los individuos nombrados por el Ejecutivo o por los prefectos de los distritos conforme al reglamento de 8 de febrero último, para componer las juntas cuotizadoras...renuncia o se niega a desempeñar el

(16) Reglamento para la instalación de las Juntas cuotizadoras, de acuerdo al artículo 3o. de la Ley No. 17 del 4 de enero de 1878. Publicada en Sombra de Arteaga el 15 de febrero de 1878

cargo por causa justificada, el gobierno y en su caso los prefectos nombraran estos y otros hasta que el tercero se negare, la junta emprenderá sus trabajos con el número de miembros que tuviera (17)

La renuencia de los industriales a contribuir al fisco, se manifestó abiertamente cuando la Secretaria de hacienda quiso imponer un impuesto sobre las mantas que afectaba a la fábrica Hércules y la Purísima de Cayetano Rubio. En el fondo de la discusión de la Cámara de Diputados local en donde se analizó la propuesta, se retomaba la añeja problemática de la protección a la industria a la que no eran afectos los liberales. De hecho, la casa Rubio pugnaba desde antaño por una legislación benigna que favoreciera su riqueza. Ante esto no es de extrañar que la Cámara de Diputados considerara que no era conveniente gravar la industria local de mantas, estampados, cambayas, hilaza, rebozos, frazadas y otros varios artículos porque de suyo, aseguraban, ya tenía varios problemas para subsistir. En favor a su oposición, los diputados enunciaban la fuerte competencia de los efectos extranjeros agravados,

principalmente desde que ha tomado tan grande incremento el escandaloso contrabando que se hace en la frontera del Norte. Por tan punible hecho se encuentran en los establecimientos de ropa extranjera una multitud de pintados a precios tan infimos, que han deprimido por completo los estampados y cambayas originales...los rebozos y cobertores franceses, de mucha mejor clase que los fabricados en los imperfectos telares que usan nuestros artesanos y que no obstante de hallarse gravados con los derechos de importación y consumo, se venden a precios iguales o menores que los nacionales (18)

(17) Sombra de Arteaga, 12 de abril de 1878

(18) Sombra de Arteaga, 18 de octubre de 1878

Así, se preguntaban si los productos nacionales gravados podrían hacer competencia a los bienes importados. Para ellos era evidente que no. Demandaban, entre otros, la protección a la industria, concretamente de Hércules por su carácter de empleadora y generadora de actividades productivas colaterales. Los diputados destacaban el impulso que daba la fábrica Hércules al comercio interno. De tal manera que las distintas actividades productivas de la entidad, agrícolas, comerciales y la arriería, como más importantes, se verían favorecidas si "El Hércules" crecía boyante. Manifestaban:

En una sola fábrica se emplean sobre 1 500 operarios que consiguientemente sostienen a otras tantas familias, y si calculamos a éstas solamente a cuatro personas cada una, tenemos la respetable cifra de 6 000 individuos que directamente viven de aquella. Esa industria de mantas ha creado en el estado un nuevo pueblo, cuyo censo es hoy de ocho mil habitantes, quienes de los efectos necesarios para la vida se surten del comercio de esta ciudad...además proporcionaría un gran tráfico de conductores que transportaban el algodón y mantas, las cuales hacen un considerable consumo de semillas y otros productos de la agricultura (19)

Con datos poco confiables, confesaban los diputados, se hacía el cálculo de que la diferencia entre los precios de venta de la fabricación nacional con la importada era de 0.02. Concluían por tanto, que si se gravaba esta diferencia como se pretendía con los diez centavos en libra, preponderarían las ventas importadas y esto traería como consecuencia nefasta el cierre de las fábricas, agudizando las condiciones del comercio y la agricultura sumamente abatidos por la falta de dinamización del mercado interno.

(19) Idem.

Aseguraban:

la agricultura se haya sumamente abatida, la producción del suelo del estado es mucho mayor que la que sus habitantes pueden consumir, los sobrantes no pueden exportarse, primero por la falta de fáciles medios de transporte, y segundo porque los demás estados se encuentran casi en el mismo caso; con sus productos se bastan a sí mismos y les sobra también. La falta de consumo que hace el tráfico de conductores de algodones, mantas y otros productos y efectos del comercio, pondría de peor condición a los agricultores (20)

Además de la defensa hecha por los legisladores queretanos a la no gravación de la producción industrial el gobernador Gayón, sin duda influenciado por los diputados, señalaba a la Secretaría de Hacienda que era prácticamente imposible establecer el impuesto sobre las mantas porque no se sabía con exactitud la producción de la fábrica. Producción que era inferior a los cálculos hechos por la Secretaría de Hacienda:

Dos son las únicas fábricas de tejidos e hilazas existentes en Querétaro: la "Hércules" y la "Purísima". Aquella tiene dos salones de tejidos y uno de hilados: ésta toda ella está reducida a dos salones de tejidos. Ambas movidas por una rueda hidráulica y dos máquinas de vapor; pero por la irregularidad en el obrar de estas dos potencias impulsoras, no menos que por la misma irregularidad en las épocas de recibir el algodón y en las cantidades en que le son remitidas, nunca se ha podido saber con exactitud el número de quintales que en dichas fábricas se consumen y es por lo mismo muy variable la cantidad de piezas de manta que se elaboran, y la hilaza que se hila; pero baste decir que cuando más llegará a la mitad de los que contienen los cálculos formados o remitidos a este ministerio. (21)

Por su parte la producción artesanal era tan insignificante

(20) Idem.

(21) Idem. Subrayado mío

que no sería posible, continuaba Gayón, "gravarlos en un solo centavo...sin que sin duda se les conduzca a la mendicidad". Por tanto, el gobierno del estado de Querétaro, aceptando que la libertad de comercio es una de las mayores conquistas....rechazaba el fuerte gravamen que restaba competitividad a los productos de Hércules y que, según el estudio de los legisladores, lesionaba seriamente el mercado interno.

La oposición de los queretanos al impuesto de las mantas fue rechazada. Para 1879, la Secretaria de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público en circular No. 169 remitía al gobierno de Querétaro:

el reglamento expedido (el 6 de junio de 1879) para la recaudación del impuesto que debe cobrarse a las manufacturas que se elaboran en fábricas o telares cuyo capital exceda de \$500.00.

El reglamento del impuesto fijado a las fábricas de hilados y tejidos de algodón y lana, dedicaba un capítulo, el primero, al escabroso asunto de "las manifestaciones" que con protesta a decir verdad, estaban obligados a rendir los dueños, encargados, administradores o arrendatarios de las fábricas de hilados y tejidos. Manifestaciones que debían realizarse en 15 días. (22) El capítulo II ordenaba la instalación de las odiadas y nunca bien recibidas "Juntas calificadoras"; juntas que, de acuerdo al artículo 8 del capítulo II, debían, "si se creyere que ha habido fraude en alguna manifestación", exigir al responsable la

(22) Sombra de Arteaga, 3 de julio de 1879

comprobación. (23)

En 1880 cuando inicia su periodo gubernamental el Ing. Francisco González de Cosío, quien sin duda se encontraba al lado de aquellos que se negaban a contribuir al fisco -pertenecía a las familias de los poderosos hacendados que habian estado sujetos a la falta de liquidez suscitada a raíz de la lucha por la independencia y a los denuncios de los capitales de bienes de manos muertas-, de entrada reconoce esta renuencia para ganarse la voluntad de los de su clase y obtener así mayores beneficios. En el informe del 16 de septiembre de 1888 a un año de haber retomado el poder después del periodo de gobierno del General Rafael Olvera, (1883-1887) decía:

Como no se han decretado nuevos impuestos y los que hoy rigen son los mismos que han existido desde hace varios años, y como el estado se halla en mala situación, por la miseria pública...ha sido preciso introducir una severa economía, que unida a la honradez con que se manejan los fondos públicos, permitan que se cubran los gastos de administración (24)

Vieja sugerencia de los hacendados e industriales queretanos en 1879 quienes, oponiéndose al impuesto sobre las fábricas de hilados y tejidos, decían:

En nuestro estado de Querétaro, sus funcionarios públicos y empleados ceden por ley, el 3% anual de sus respectivos emolumentos, para mejoras materiales...Este ejemplo

(23) Idem.

(24) Informe del Ing. Francisco González de Cosío del 16 de septiembre de 1888. Colección de los informes administrativos leídos por el C. Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Querétaro de Arteaga, de 15 de junio de 1888 a 16 de septiembre de 1906. Tipografía de Jesús A. Sierra, Capuchinas 15, Querétaro, 1906, Pág. 8-9

podiera sugerirse con éxito feliz por la federación, y unido a la disminución de la fuerza armada, a la reducción de empleados y baja de sueldos excesivos, nivelaría su erario, sin arruinar a la naciente industria nacional, que tan anémica y tan trabajosamente vive por falta de protección, de estímulo y de consumo. (25)

La administración de González de Cosío a lo largo de casi treinta años (5 de mayo de 1880 al 10 de octubre de 1883 y del 10 de octubre de 1887 al 31 de marzo de 1911) fue en todo favorable a la acumulación de la riqueza en los sectores productivos de la entidad. No solamente respondía su plan y programa de gobierno a los intereses de la clase propietaria sino que también estaba convencido de que diversificando las inversiones aumentaría el empleo y se intensificaría el mercado interno. Efectos todos que con un adecuado programa social -educación y salud- fortalecería al estado de Querétaro en la República.

Para la instauración de medidas novedosas que sabía no serían bien recibidas por sus contemporáneos agricultores, comerciantes e industriales aún cuando les dieran mayores beneficios en el mediano plazo, tenía González de Cosío la habilidad y la paciencia de preparar el terreno social en donde fructificaran sus políticas. Tal fue el caso de la derogación del sistema de alcabalas que le tomó casi una década: de 1888 a 1896, año en que por la ley del 23 de abril de 1896 de Porfirio Díaz se establecía, para el 10. de julio, el cambio rentístico en todo el país. De hecho eliminar las alcabalas fue uno de los grandes retos de su administración.

El comercio de Querétaro citado en dos ocasiones para
(25) Sombra de Arteaga, 27 de mayo de 1879

consultarle la adopción de tributos nuevos, se había pronunciado resueltamente por el sistema ya conocido (26). Pese a que la decisión del cambio era ordenada por el gobierno federal, decisión con la que él coincidía, González de Cosío respetó la opinión de los comerciantes queretanos y el cambio no se impuso. A partir de entonces fue analizando y discutiendo con los agricultores, los industriales y los comerciantes las ventajas que les ofrecía el nuevo sistema para hacerlos que cambiaran su opinión sobre la medida. Aun cuando desde 1889 el gobierno central planteaba la necesidad de sustituir el sistema de alcabalas por el derecho de patente que resultaba, por las características de su implantación -cuota fija-, inadecuado para Querétaro, se optó, decía el gobernador por el derecho de consumo "por ser más igualitario y proporcional".

El Querétaro de González de Cosío se distinguía por su "notoria moderación de las contribuciones existentes...que no habían sufrido, todavía en 1894, modificaciones sustanciales. (27) Por el contrario, procuraba el gobernador conceder exenciones fiscales a todos aquellos que incursionaran en renglones productivos nuevos, cuestión en que se apegaba a las disposiciones de la Ley de 1883, y también procuraba revitalizar a los antiguos negocios como la Fábrica Hércules que había disminuido su producción en 1889.

Las leyes protectoras de la agricultura para aquellos terrenos que se dedicaran al cultivo del girasol o helianto, del

(26) Informe del Ing. Francisco González de Cosío, del 16 de septiembre de 1889, Op. Cit. Pág. 20-21

(27) Sombra de Arteaga, 1894

lino y del tabaco dictadas por el gobernador Gayón, conservaban su vigencia en 1889. No obstante, a los agricultores, amén del fomento y exención concedidas para la introducción de nuevos cultivos, y la legalización del acopio del agua y la tierra que la legislación porfirista de 1894 les otorgaba, González de Cosío los tenía como colaboradores muy cercanos en los asuntos políticos y públicos.

Al comercio abiertamente lo favorecía al concederle "franquicias para que los comerciantes puedan almacenar sus mercancías, pagando sólo por los que dediquen al consumo de la localidad...pudiendo sacar de ellos (de los almacenados) los que le convenga destinar a otras plazas sin más pago que el muy módico del almacenaje equivalente a una pequeña renta del local del depósito. (28) A la minería, a la que quería devolver su anterior auge, la dejaba totalmente libre de gravámenes en la extracción y en la introducción de sustancias para el beneficio.

El informe del gobernador Cosío del 16 de septiembre de 1896, es en realidad una cátedra política-administrativa que sin duda cautivó a los grupos dirigentes de quienes pidió la colaboración para hacer el cambio de impuestos. Nadie podía negarse frente a la exposición del Ing. Cosío. La claridad de su argumentación sobre el significado histórico de la alcabala y sus injustas asignaciones y falsas exenciones y la presentación de las ventajas que proporcionaba el impuesto directo que se implantaba con la ley del 23 de abril, aun hoy son convincentes. No dejaba de

(28) Francisco González de Cosío, Informe de gobierno del 10. de septiembre de 1889, Op. Cit. Pág. 21-22

reconocer, y así lo manifestaba, que en algunas entidades el cambio había causado efectos nocivos en el corto plazo más por las costumbres adquiridas que por la nueva reglamentación. Señalaba en su informe:

El sistema alcabalatorio establecido en todo el territorio nacional desde que llevaba el título de Nueva España, era generalmente conocido, se había adaptado a la costumbres del pueblo mexicano y su uso estaba profundamente arraigado. Destruirlo, por lo mismo, era una obra magna y difícil.

Dificultades que serían vencidas, aseguraba el gobernador, una vez que se aquilatara socialmente el beneficio que traería el libre tránsito de las mercancías.

El cambio político y social registrado en Querétaro (y en el país) para 1896 queda manifiesto en la petición que hicieron los hacendados al gobierno del estado. Al convocarse las juntas de agricultores industriales y comerciantes para establecer las vías de instauración del nuevo sistema, los hacendados propusieron un cambio significativo:

Tomadas en consideración por la junta de agricultores las dificultades y molestias que ocasionaría un impuesto sobre ventas por la fiscalización que traía consigo, resolvieron y así lo pidieron al gobernador se transfiriese alzar el valor de las fincas que tuvieran valor fiscal bajo, con relación al verdadero y aumentar el impuesto directo sobre los predios. (29)

Pretendían evitarse, como lo decían, la fiscalización de la producción que ya para entonces estaba en auge. Sin duda, también

(29) Francisco González de Cosío, 16 de septiembre de 1896, Op. Cit. Pág. 92

contribuyeron al cambio las garantías a la propiedad otorgada por la ley de 1892, las reformas introducidas a la ley de 1883 y las seguridades de la Ley de 1894, que sin tapujo alguno favorecía la expansión de la gran propiedad. Por otra parte, desde 1879 cuando las revueltas campesinas surgían día a día en todos los lugares del país, los hacendados se habían organizado en una Sociedad Agrícola para "defender sus legítimos intereses" y "procurar el progreso y adelanto de la agricultura nacional". Los estatutos de esta sociedad son importantes porque reflejan que ya se había registrado un cambio en la mentalidad de los propietarios de fincas rústicas. Por otra parte, el balance de las leyes de reforma y los efectos resentidos por aquellos que tenían gravadas sus propiedades en favor de la Iglesia los había hecho conscientes de la necesidad de modernizar y agilizar las vías para obtener crédito fresco que eliminara a los "prestamistas" -fuera la Iglesia o los particulares- que tanto daño les habían hecho. La Fracción VIII del art. 30. asentaba:

Procurar que se utilice el crédito agrícola, promoviendo el establecimiento de bancos y compañías de seguros para los dueños y arrendatarios de propiedades rústicas así como el de Montes de Piedad y cajas de ahorro para los agricultores pobres (30)

-
- (30) Estatutos de la Sociedad Agrícola Mexicana, Imprenta de I. Cumplido, Rebeldes No. 2, México 1879, Pág. 5. Entre los hacendados firmantes se encontraban los queretanos Gil Echevarría, Manuel y Felipe Iturbe, Raymundo de la Mora y Manuel Guillén. Demanda nacional que en Querétaro se cristalizó en 1903 con la inauguración de las operaciones del Banco de Querétaro; posteriormente se abrió una sucursal del Banco de Londres y México y del Banco Nacional de México. Signo evidente de la recuperación de la industria queretana.

Para 1896, la crisis social suscitada por las leyes de Reforma había quedado liquidada y se habían olvidado las rencillas interfamiliares. La modernización de la economía era un hecho. Los pueblos y comunidades habían perdido sus tierras y también habían sido "consolidados" mediante su conversión a propietarios individuales que habían alcanzado su mayoría de edad. Todo parecía estar en orden a los inicios del siglo XX. Estos cambios, son evidentes al analizar las leyes emitidas desde 1870 a 1894. En ellas van quedando las preocupaciones de cada época y los giros obligados ante la necesidad de construir el país.

La transición de Querétaro a la modernidad, un hecho en 1896, ayuda a entender de mejor manera la legislación porfirista y a descifrar, apegada a las circunstancias que se vivieron en ese largo periodo, sus efectos en el corto plazo. También deja ver la armonía que guardaban las leyes con los intereses de las clases dominantes y con la necesidad del Estado de modernizar sus estructuras administrativas. El paso de la colonia a un Estado soberano moderno tomó un siglo de problemas y dificultades de toda índole. No obstante en 1894, el país se había transformado y los intereses de la nación se habían confundido con los intereses particulares.

Las últimas transacciones de bienes nacionalizados, realizadas en virtud de la ley de 8 de noviembre de 1892, confirmaban la propiedad a todos los propietarios de fincas nacionalizadas que lo solicitaran, bajo la condición que "expresen la renuncia absoluta de los derechos fiscales que por nacionalización o por otras causas pudieran tener sobre las

expresadas fincas". (31) Si también hubo los casos que se cerraron por la prescripción de 1900 como un último intento de acabar de una buena vez con el asunto liberal de la desamortización y nacionalización de los bienes de manos muertas, adquiere mayor importancia la Legislación de 1892 porque constituyó el antecedente para en diciembre de 1893 "reformular la ley vigente en la República sobre terrenos baldíos" (la de 1883) y abrir los cauces para la Ley de terrenos baldíos de 1894 que auspiciaba la formación de los grandes latifundios, la formación de compañías deslindadoras y de las compañías agrícolas con capital extranjero y otorgaba toda clase de seguridades a los hacendados. Los temores a la nacionalización o a la emisión de leyes que atentaran contra la gran propiedad quedaron, en 1894, olvidados. La seguridad de la tenencia de la tierra estaba avalado por una legislación hecha a la medida de los intereses particulares de los terratenientes.

Parecería que con la reforma de la Ley de 1883 emitida por el Presidente Manuel González que abordaba los asuntos referentes al deslinde de terrenos, de los colonos y de las compañías, y que tenía como preocupación fundamental poblar -colonizar- las regiones más desabitadas del país, (32) los legisladores

(31) AGN, Bienes nacionalizados, Caja 505, Exp. 33/521

(32) La ley concedía en su Art.7, exenciones de toda clase a los colonos que se acogieran a la ley y premios por trabajos notables y primas y protección especial para la introducción de nuevos cultivos o industrias. El Art. 16 concedía a los "mexicanos que residan en el extranjero y que deseen establecerse en los lugares desiertos de las fronteras de la República tendrán derecho a cesión gratuita de terreno, hasta en 200 has y al goce hasta por 15 años de las exenciones que otorga esta ley".

porfiristas pretendían impedir que los resabios de los "idealistas" que todavía defendían la pequeña propiedad se filtraran y sentaran un rechazo organizado a la ley de 1894. La distancia ideológica existente entre la ley sobre terrenos baldíos elaborada durante el régimen presidencial de Manuel González en 1883 (que asumía la propuesta hecha por los congresistas constituyentes de 1870), con la dictada por los porfiristas en 1894 se amortiguaba con la reforma de 1893.

La última Ley de terrenos baldíos vigente, que reformaba el Decreto de 1893, se apegaba a la propuesta hecha durante el 5o Congreso Constituyente en 1870 (33) que entre otras disposiciones en su Art. 14 establecía el límite territorial que podría adquirirse como terreno baldío: 2 500 has. Límite que la Ley de 1883 preocupada principalmente por "obtener los terrenos necesarios para el establecimiento de colonos" conservaba imperturbable y sin excepción para todos los casos en su Art. segundo (34). En la legislación de 1883 no se deseaba ni estimulaba la formación de grandes latifundios de más de 2 500

(33) Diario de Debates (1870) Op. cit. Pág. 562. Ya en el Congreso de 1857 se había abordado este delicado asunto y también Maximiliano había propuesto reglamentar las tierras baldías.

(34) La preocupación por repoblar el país, con su población diezmada por tantos años de guerra, había sido uno de los cometidos fundamentales de Querétaro desde 1824. En 1867 "la falta de brazos para los giros económicos de la entidad" era de tal magnitud que, al margen de "exagerados provincialismo que son remora constante a la inmigración", llevaron a los diputados que elaboraron el proyecto de Constitución a proponer que, "sean aceptados como ciudadanos queretanos absolutamente todos, aun los extranjeros, que manifiesten la voluntad de serlo...Querétaro recibirá con placer a todos los extranjeros, les dará las mismas garantías que a sus ciudadanos". Proyecto de Constitución, Op. Cit. Pág.VI.

has, difíciles de cultivar y que no estimulaban el arraigo de la población. Sus disposiciones eran favorables a la expansión de los ranchos y de la pequeña propiedad. La legislación cuidaba de que los rancheros e indígenas no pudieran tener ocasión de expandir las propiedades que a título gratuito les otorgaba la ley (fracción III del Art.3o.), y también que estos terrenos de 100 has no fueran adquiridos por las haciendas. Por un lado, las extensiones concedidas no podría exceder las 100 has y, por otro, la cesión de estos terrenos, decía el Art.4o., se haría en "lotes alternados". El resto de los terrenos deslindados se reservaría para irlos vendiendo bajo las condiciones que establecía la ley en el artículo 3o.

La legislación de 1883 deja ver los debates que se sostenían en la época para definir el sistema productivo y la organización de la cuestión agraria: ranchos, haciendas y propiedades individuales por un lado y haciendas exclusivamente por otro. De hecho la Ley de 1883 optaba por la primera alternativa y trataba de conservar los terrenos de 100 has en propiedad individual y como "giros" independientes de la hacienda. Por otra parte, parece evidente que la inclusión de los terrenos concedidos a título gratuito respondía a la serie de demandas y denuncias, de indígenas y rancheros, levantadas con ocasión de la "desvirtuada" aplicación del reglamento del 20 de abril de 1878 que otorgaba la propiedad individual de los terrenos del común y cofradías laicas. Pero también respondía a las demandas de los hacendados organizados en sociedades agrícolas de que se les "respetara" su propiedad continuamente amenazada por la turba de los revoltosos

"comunistas".

Bajo la legislación de 1893, que reformaba la de 1883, cesan las prohibiciones con las que los legisladores en 1870 y 1883 habían intentado controlar la formación de los grandes latifundios. Cesa el límite territorial establecido de 2 500 has. Cesa la obligación de tenerlos acotados y poblados, sin duda influenciados por el dictamen que, sobre el proyecto ley que para el descubrimiento, apeo y deslinde de los terrenos baldíos proponía el Imperio de Maximiliano, habían hecho los señores Collado y Pimentel quienes aclaraban que no era responsabilidad de los propietarios: "Si en México las haciendas están incultas y sin población no es culpa de los propietarios carecer de capital y de brazos" (35). También, porque la preocupación por repoblar el país había pasado a un segundo término en 1893.

En este año era importante impulsar el desarrollo agrícola, el minero, las comunicaciones y demás sectores productivos. Por otra parte, el embate liberal a los bienes de beneficencia había sido brutal y sus efectos se resintieron, sobre todo, en el sector salud (también en educación), actividades organizadas por los municipios. Las deficiencias sanitarias en el país habían sido, desde siempre, causa y motivo de las defunciones masivas de la población. (36) En este sentido, aun cuando de manera gradual y

(35) AGN, Gobernación, Caja 517, Exp. 15

(36) Miguel E. Bustamante reseña el informe de labores correspondiente al año 1879, del doctor Ildefonso Velasco, presidente del Consejo Superior de Salubridad: "El número asombroso de muertes explica una de las causas más poderosas que influyen en el aumento casi nulo de nuestra población, cuyo inapreciable crecimiento queda casi completamente explicado cuando se observa que la mortalidad de los niños de uno a tres años es también considerable...Encontró continúa

lenta, se fue estructurando un programa estatal de salubridad e higiene pública, al paralelo del desarrollo de la medicina privada y de las instituciones de beneficencia -que habían resurgido durante el Imperio-, primero con la creación del Consejo Superior de Salubridad y después mediante el primer Código Sanitario nacional, expedido en 1891 y reformado en 1894 y 1902. De hecho, como lo indica Miguel E. Bustamante,

el pensamiento dirigido hacia el concepto de la salud pública, como necesidad biológica, médica, individual y colectiva y social nacional, e internacional, no se manifestó hasta el Primer Congreso Nacional de Higiene en 1883 y en el Informe Presidencial del general Manuel González en 1885 cuando pidió: "se definan ciertas bases en relación con la salubridad común y se expida un código sanitario...Una ley que determine la esfera de acción que en materia de tan alta importancia corresponde a los poderes federales y a los gobiernos de los estados (37)

Para 1893, año en que se reforma la ley sobre baldíos de 1883, la atención concentrada en propiciar la colonización del país se había trastocado en la preocupación, como lo indica el doctor Bustamante en el texto ya citado, "de adecuar la organización sanitaria al progreso científico y a la inquietud social resultante del círculo pobreza-ignorancia-insalubridad", y en transformar las condiciones higiénicas que prevalecían en el

el doctor Bustamante, que la mortalidad hasta los 12 años era muy elevada y que, "en relación con la mortalidad general, la de la infancia tomada hasta los 12 años era en promedio comparada con la de todas las defunciones de 50.37 por 100". Miguel E. Bustamante, "La situación epidemiológica de México en el siglo XIX, en, Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, Compilados por Enrique Florescano y Elsa Malvido, Tomo II, IMSS, México 1982, Pág.433.

(37) Idem, Pág. 431

pais. (38)

La Ley de 1893 consignaba las nuevas preocupaciones económicas y sociales y dejaba expedito el camino para la legislación de 1894.

Sin duda el cambio de preocupaciones en 1893-1894 es notable. La colonización ya no es lo primordial. Lo esencial era disponer de la tierra: la fuerza de trabajo se daría por añadidura y se procuraría su sobrevivencia por la reglamentación sanitaria. También cesa la prohibición a las compañías deslindadoras para adquirir más de 2 500 has. La extensión permitida se dobla: 5 000 has en 1893 y desaparece en la de 1894 (Art.VII). Subsisten las prohibiciones que atendían a la seguridad nacional las que regulaban la adquisición de tierras baldías en los estados fronterizos, costas, zona marítima, etc.

La reforma de la ley emitida en 1893, inicia en el Art. V, la clasificación de los terrenos de la nación y el precio que tendrían "los terrenos baldíos, excedencias y demasías que se enajen conforme a la ley". El Decreto definía las formas de adquirir los terrenos. En su art. X:

Los terrenos que se clasifiquen como nacionales, serán enajenados por acuerdo de la Secretaría de Fomento, al precio y con las condiciones que ésta fije, en atención a la calidad y ubicación de los terrenos. Dicho precio pertenecerá íntegramente al Erario Federal, y no podrá ser inferior al señalado para los terrenos baldíos en la

(38) Sobre esta preocupación, Miguel E. Bustamante, cita el trabajo del doctor Manuel Septián y LLata, "Importancia de la higiene y conveniencia de la creación de un ministerio de salubridad" publicado en 1892. Idem. Pág. 431

tarifa vigente al acordarse la enajenación. (39)

En cambio la definición y reglamentación de los terrenos baldíos, excedencias y demasías poseídos por los particulares, aun sin títulos de propiedad, legalizaba la expansión de la hacienda. El Artículo VIII decía:

Para la enajenación de las excedencias y demasías y para las de los terrenos baldíos, simplemente ocupados por particulares, aun sin título de ninguna clase, serán preferidos y favorecidos los poseedores, en los términos que establezca la ley. (40)

Tres meses más tarde, el 25 de marzo de 1894, se emitió la "Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos de los Estados Unidos Mexicanos" (41), que no limitaba la extensión de las tierras baldías, excedentes y demasías que podían adquirir los particulares. Por otra parte en la definición de esta nueva caracterización de las tierras "baldías, nacionales, demasías y excedentes" se anulaban los derechos de las comunidades indígenas, pueblos y municipios, puesto que su definición se realizaba a partir de la gran propiedad. Las demasías hacían referencias a los terrenos poseídos por los particulares con título primordial (Art.3). Por este artículo, los terrenos en que estaban situados los pueblos y que habían pertenecido a las haciendas, eran tierras de demasía. Las excedentes eran las tierras poseídas por los particulares durante 20 años o más y que se ubicaban fuera de los linderos que señalaba el título primordial (Art.4). Las

(39) Decreto publicado en el Diario Oficial de Querétaro el 23 de enero de 1894.

(40) Idem

(41) Publicada en el Diario Oficial de Querétaro del 8 de abril de 1894.

expropiaciones a los pueblos, comunidades y municipios, violentas y arbitrarias, realizadas a lo largo de la historia del país se legalizaban como propiedad de la hacienda, no importando si los expropiados tenían los títulos respectivos. La medida legal para definir la propiedad era el tiempo de posesión no el derecho legítimamente adquirido de la propiedad. De igual manera, la definición de las baldías y las nacionales se hacía en función de la gran propiedad: baldío era un terreno que no había sido destinado a uso público ni cedido a título oneroso o lucrativo (Art.2) y nacionales lo eran los deslindados y medidos que no hayan sido legalmente enagenados (Art.5) Es decir, para la legislación de 1894 la única propiedad reconocida era la particular que tenían en sus manos los hacendados y las que pudieran adquirir los mexicanos mayores de edad y con capacidad legal de contratar (Art.6). Por ende el único sistema avalado era el de la hacienda. Aún más, como el Art. 43 establecía el Gran Registro de la propiedad y el 48 disponía textualmente:

Toda propiedad inscrita en el Gran Registro de la propiedad de la República, será considerada por el gobierno como perfecta, irrevocable y exenta de todo género de revisión...el simple certificado de una inscripción surtirá el efecto de un título perfecto e irrevocable, sin que por ningún motivo pueda rectificarse la extensión superficial de la propiedad inscrita,

los hacendados podían estar tranquilos. Las apropiaciones realizadas quedaban desde entonces legalizadas y, sobre todo, ya no estarían sujetos a las revisiones que habían sido tan frecuentes en el período de la desamortización y nacionalización

de los bienes de manos muertas. Sin duda este artículo llevaba el propósito de obligar a registrar las propiedades con sus reales colindancias -cuestión que nunca se había logrado- y aumentar mediante este recurso los ingresos al fisco procedentes del impuesto sobre la propiedad raíz. (42) Por ello el Art. 54 contenía los datos de la propiedad a registrar: nombre del solicitante, de la finca, ubicación, colindancias y linderos, fecha y extracto de todos los títulos primordiales y del último traslado de dominio. Última información que era vital pues desde 1854 en que se habían empezado las transacciones "ocultas" con las propiedades de la Iglesia y después por las leyes de desamortización y nacionalización entre los prestanombres, particulares y administradores, no se sabía quienes eran los propietarios de las fincas rústicas. En la fracción IV del Art. 55 la Ley consideraba la necesaria aceptación o conformidad de todos y cada uno de los colindantes con los linderos establecidos en los planos de la propiedad que se tratara. Fracción que dejaba abierto el recurso de oposición a la inscripción de las propiedades bajo el arbitrio de los hacendados. Pero también permitía la defensa de los límites, si el opositor era vencido en juicio. Con el control que tenían los hacendados de todos los puestos administrativos, no había duda que pocos serían los juicios a perder. El proyecto de Constitución de Querétaro de 1867

(42) La intención de "modernizar" el sistema de registro de la propiedad y el sistema tributario es evidente por el peso que en la Ley de 1894 tienen las especificaciones concedidas a la organización del Registro de la propiedad (18 artículos de los 78 que tenía la Ley se dedican al llamado "Gran Registro de la propiedad").

deja ver con toda claridad la hegemonía que tendría el poder y control político de la clase dominante:

El ejecutivo piedra angular del edificio tiene como es debido alguna intervención en los nombramientos de autoridades para los distritos y municipalidades, cosa justa y debida, puesto que ese poder es responsable de la marcha buena o mala de la administración; la comisión por eso da intervención en tales nombramientos al pueblo que va a ser gobernado y al ejecutivo que necesita tener cierta confianza en el personal de los que van a servir de brazos secundarios. La comisión con mucho placer hubiera dado preferencia a la elección directa sobre la indirecta, pero además de la razón que ha indicado tuvo presente que se trataba de legislar en el estado de Querétaro y que aquí aun no podemos contar con ilustración ni aun en la mitad de los habitantes. La elección directa sería conceder a los dueños de fincas rústicas tantos votos cuantos habitantes tenga la finca atendiendo que nuestro indios no tienen voluntad propia y que muchas veces, casi siempre, no saben ni aun los nombres que llevan escritos en sus boletos (43)

Que los legisladores en 1894 tenían en mente la gran propiedad queda claro en el Art. 61 que establecía el derecho a pagar en estampillas: las propiedades se organizan para este pago en tres grandes rubros, menos de 10 000 has, más de 10 000 y menos de 50 000 y más de 50 000.

Finalmente la ley dedicaba un artículo a la propiedad individual, en donde, por primera vez en esta monumental y moderna legislación, se ponen restricciones claras y bien definidas: no se puede tocar la propiedad particular ni exceder las concesiones coloniales. Textual el Art. 67 reglamenta:

Subsisten la prohibición e incapacidad jurídica que tienen las comunidades y corporaciones civiles para poseer bienes raíces; y los gobiernos de los Estados, auxiliados por las

autoridades federales, continuarán el señalamiento, fraccionamiento en lotes y adjudicación entre los vecinos de los pueblos, de los terrenos que formen los ejidos y de los excedentes del fundo legal, cuando no se hubieren hecho esas operaciones; sujetándose para el señalamiento a los límites fijados en las concesiones otorgados a los pueblos, ya por el gobierno español en la época colonial, ya por los gobierno de los Estados en la época en que pudieron disponer de baldíos. En caso de que en la concesión no se hubieran fijado ni la extensión ni los límites de dichos terrenos, se asignará a cada población una legua cuadrada, conforme a las disposiciones antiguas, siempre que haya terrenos baldíos en los que pueda hacerse el señalamiento, porque no ha de invadirse la propiedad particular ni ha de tomarse de los baldíos mayor cantidad de terreno que la que exprese la concesión. (44)

De esta manera, la ley de 1894, que empezó a regir a partir del 10. de julio, ratificaba la expansión territorial de la hacienda a costa de los terrenos de los pueblos de las comunidades indígenas y de los municipios. Y si tenemos en cuenta que desde 1857 se cuestionaba la existencia de baldíos en el estado de Querétaro, se aceptaba y legalizaba la expansión de la hacienda a costa de sus "demasías y exedentes" que habían sido inevitables en la entidad.

La legislación de 1894 dió sus frutos. El sistema de asignar el valor real a la propiedad raíz rural y la expansión de la hacienda legalizada, fueron condiciones que contribuyeron al alza del valor de las fincas rústicas, signo inequívoco de bonanza. En 1904, el suceso era reconocido por el Ing. Francisco González de Cosío:

Continúa el alza de la propiedad rústica...y ya se extiende también esa alza a la urbana en esta ciudad (Querétaro). El total valor fiscal ha llegado al duplo del que tenía en 1887, debido en su mayor parte a los nuevos

precios en que las fincas se enajenan (45)

A estos nuevos precios habían contribuido también las mejoras introducidas para la irrigación de los campos y en las instalaciones y casas habitación de las haciendas. También, por el interés de González de Cosío en incrementar y favorecer la concentración de la gran propiedad, que era un símbolo de la riqueza acumulada en el estado y la forma para que las propiedades fraccionadas volvieran al dominio de antes, se había disminuido el impuesto por transmisión de dominio. Disposición asentada en la fracción IV del artículo 10. de la ley No. 29 del 4 de junio de 1897.

La bonanza de los hacendados, industriales y comerciantes y el auge económico que se registró en todos los renglones productivos, además de la introducción de nuevas vías de comunicación (Ferrocarriles y caminos) infraestructura para el desarrollo agrícola, la instalación de sistemas de comunicación ágiles (telégrafo y teléfono), y el establecimiento del Cuerpo de Rurales que permitían el control del estado, (46) permitieron consolidar la paz y el orden, valores prioritarios sostenidos

(45) Francisco González de Cosío, Informe del 16 de septiembre de 1906, Op.Cit. Pág. 200

(46) El 15 de junio de 1889, el Gobernador González de Cosío informaba: "Con los telégrafos y teléfonos establecidos, tiene el gobierno violentas noticias de lo que pasa en muchas de las poblaciones del Estado, pero hasta hoy el Distrito de Amealco carece de un telégrafo o teléfono que el Gobierno se propone establecer muy pronto para unirlo con San Juan del Río y Tequisquiapan, de la misma manera que lo hará más tarde con Colón, Bernal y Vizarrón a fin de que queden unidos todos esos puntos con la capital". Colección de los Informes administrativos leídos por el C. Gobernador Constitucional... Op. cit. Pág. 15-16

durante el porfiriato.

Aun cuando desde la aplicación de las leyes de la reforma liberal y más concretamente a partir del reglamento del 20 de abril de 1878, la expansión de la hacienda y la formación de los ranchos fue acompañada por la proliferación de los propietarios individuales, no fue este un proceso significativo que pudiera contrarrestar la consolidación de la gran propiedad territorial. Los campesinos, los indígenas y los arrendadores de las tierras de los municipios y de las corporaciones religiosas, que fueron beneficiados por las leyes de 1856, los decretos de 1859 y el del 20 de abril de 1878 que tendieron a fraccionar la propiedad comunal y a convertirla, a través de las titulaciones, en propiedad individual, guardaron en su memoria las viejas disputas en defensa de los fundos legales y los derechos adquiridos sobre las propiedades. Cuando la legislación revolucionaria, expedida en Veracruz por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el Decreto del 12 de diciembre de 1914 y la Ley del 6 de enero de 1915 abordó los ideales "agraristas" -de "los terrenos" en el lenguaje del siglo XIX- los pueblos afectados por la expansión de la hacienda resucitaron las viejas demandas por recuperar los fundos y los ejidos que la hacienda se había apropiado por considerarlos sus "excedentes y demasías".

2. De la propiedad comunal a la propiedad individual

El proceso de concentración de la propiedad rural realizado

por los hacendados y los rancheros fue acompañado por el surgimiento de un nuevo sector de propietarios de la tierra, creado por la aplicación de las leyes de desamortización de 1856 y por el Reglamento de 20 de abril de 1878. Ley y reglamento que tendieron a fraccionar la propiedad comunal y ha convertirla, a través de las titulaciones, en propiedad individual. Los problemas suscitados en todo el país por los indígenas demandantes de los ejidos y de los fundos que les había despojado la hacienda eran motivo de preocupación para los encargados federales de estos asuntos: la Secretaría de Gobernación y Fomento. De hecho, con la legislación de 1883, que otorgaba a título gratuito 100 has a los "labradores pobres", terrenos que serían tomados de las supuestas tierras baldías existentes en el país, sumada a las dos legislaciones anteriores, se pensaba que podría ponerse fin a las reiterativas demandas de restitución de tierras. No obstante, las "preferencias arbitrarias y hasta una injusta especulación", decía la Sombra de Arteaga del 11 de noviembre de 1889, se deja "sin participio (sic) en el reparto de terrenos o sin la porción que les corresponde a los que tienen acción de ser considerados".

Sin embargo, para 1889 la Ley de 1883, aun cuando todavía vigente, ya había sido relegada por la administración federal. Para entonces se insiste -y éste sería el espíritu de la ley de 1894- en que se efectúe el repartimiento de los fundos y los ejidos de las comunidades indígenas. La circular del 28 de octubre de 1889, recomendaba a los gobernadores que promovieran el reparto de las tierras comunales:

en vista de que aun subsisten en individuos otros terrenos de repartimiento que no están sujetos a las leyes de desamortización ni a la de baldíos sino que es una verdadera propiedad poseída por los indígenas desde tiempo inmemorial...debe propiciarse que la disfruten en interés individual...promueva el repartimiento tanto de los ejidos...como de los otros relacionados terrenos que están amparados con justo título (47)

La circular llevaba el propósito de aumentar el número de los propietarios individuales, posiblemente con el interés de romper los lazos comunales y las prácticas productivas propias de las comunidades indígenas que no tendían -tampoco hoy día- a una explotación del suelo con caracter mercantil. La tensión creada durante el porfiriato por romper los viejos esquemas coloniales e iniciar la construcción del México "moderno", basados en la propiedad privada y en la intensificación de la agricultura comercial y tecnificada, sostenía el reparto individual de los fundos de los pueblos. Se pensaba que pulverizando la propiedad comunal, los indígenas serían fácilmente absorbidos por la tendencia general del sector privado. Sabido es, en la actualidad, que no fue así.

La presión ejercida por la Secretaría de Gobernación a los gobernadores de los estados para que realizaran el repartimiento de los terrenos comunales queda explícita en el informe que rinde el Ing. González de Cosío, el 16 de septiembre de 1890, en donde asienta que una de las constantes miras del gobierno a su cargo había sido,

el cumplimiento de la ley general de 25 de junio de 1856, para que de acuerdo a sus humanitarios principios, los

(47) Diario Oficial, Sombra de Arteaga, 11 de noviembre de 1889

terrenos de común repartimiento se distribuyan entre los labradores pobres, con sujeción a lo dispuesto en la circular del 9 de octubre referido y reglamento de 20 de abril de 1878. Como a este laudable fin tienden las circulares que frecuentemente expiden las Secretarías de Gobernación y Fomento, el gobierno a mi cargo,...ha ordenado a las autoridades políticas activen la expedición de títulos (48)

La distribución de los terrenos de los llamados en la época "de común repartimiento" avanzaba lentamente. En 1894, cuando se emite la Ley de Terrenos Baldíos, y para cuya promulgación se había procurado, desde 1877, tener ya repartidas individualmente las tierras comunales, el gobernador aseguraba que se había puesto especial atención para que estas "enajenaciones de terrenos sean de aquellos que han estado y pueden estar en pacífica posesión los vecinos de las localidades del estado, para evitar con esto complicaciones y litigios". Al reconocer el derecho de los pueblos sobre sus fundos y ejidos se deseaban evitar los levantamientos armados y las invasiones de las haciendas que hasta 1880 habían sido frecuentes en el estado. Concesión que no significaba ni conllevaba el sacrificio de las tierras calificadas como excedentes y demasías de las haciendas. Es decir, se buscaba conciliar dos intereses y racionalidades productivas profundamente antagónicas. En virtud de este propósito, claramente delimitado en la ley de 1894, se resuelve la adjudicación de 120 títulos de tierras individuales en Jalpan y 4 en Cadereyta. Adjudicaciones que, señalaba el gobernador:

mucho contribuirán al fomento de la agricultura y consolidación de la propiedad en el estado, que son dos

(48) Informe del Ing. Francisco González de Cosío del 16 de septiembre de 1890, Op.Cit. Pág. 28-29

grandes beneficios adquiridos al amparo de la ley (de 1894) (49)

Es importante señalar que el repartamiento de los terrenos en propiedad individual se intensificó entre 1894 y 1898, por la crisis que sacudió al estado entre 1892-1893. La población en ese año sufrió hambres y penurias y el tifo y la escarlatina se enseñorearon entre las "clases menesterosas". La ciudad de Querétaro fue invadida por los migrantes, "multitud de mendigos que venian de otros lugares de la federación en busca de alimentos y albergue" (50) y hubo levantamientos de las masas empobrecidas y hambrientas en casi todos los poblados. La pérdida de las cosechas de 1892 a 1896 (con excepción de 1893) por los malos temporales, habían encarecido y propiciado la especulación con los cereales y en general se había entorpecido la marcha de todos los giros económicos de la entidad. Los motines en las trojes de las haciendas y en las bodegas de la ciudad, inevitables por el hambre de los pobladores, fueron controlados por la venta de maíz americano al costo y por la dotación de raciones entre "los menesterosos". (51) Vital para "la tranquilidad y el orden

(49) Informe del Ing. Francisco González de Cosío del 16 de septiembre de 1894, Op. Cit. Pág. 57-58

(50) Informe del Ing. Francisco González de Cosío del 16 de septiembre de 1893, Op. Cit. Pág. 47-48

(51) Stanley Ross señala: "La tradicional agricultura de temporal de los cereales, siguió rigiéndose por esa paradoja que Genaro Raygosa resumió en la frase de que a una agricultura pobre correspondía un salario bajo y un producto caro. Continuaron los seculares problemas derivados de las frecuentes sequías que originaban la escasez del maíz, con las consecuentes hambres que periódicamente asolaban al país. Sin embargo, con el establecimiento de los ferrocarriles se logró remediar parcialmente estos males importando rápidamente el cereal norteamericano". Citado en, *Lecturas Universitarias* 22, Antología, México en el siglo XX 1900-

público" fue el poderoso Cuerpo de Rurales del estado. Fuerza de "seguridad", elegantemente vestida con sus sombreros de fieltro, sus pantalones de piel y sus blusas de lana, constante y tenaz para "perseguir a los criminales". Con sus caballos siempre renovados y armados con las carabinas sistema Remington y sables para sorprender a "los delincuentes" los rurales sostenían la paz imperturbable tan cara al general Díaz. El repartimiento de los terrenos, en medio de panorama tan sombrío, venía a llenar un espacio de esperanza en las asoladas comunidades.

Como las disposiciones jurídicas tenían en la mira a las comunidades indígenas, los títulos de propiedad individual fueron extendidos a los pobladores de Amealco, Jalpan, San Juan del Río y Cadereyta lugares de asiento de las poblaciones indígenas constantemente atropelladas por la expansión de la hacienda. En 1897, por ejemplo habían sido repartidos 436 títulos en Jalpan, Amealco y Cadereyta. En 1898, 122 documentos de propiedad entre los pobladores de Amealco y San Juan del Río y estaban en proceso la expedición de los títulos en la Congregación de Barranca de Cocheros. En total, informaba el gobernador, se habían repartido 3 297 títulos entre labradores pobres. (52)

Sin embargo, el viejo problema de establecer los límites y colindancias de los ejidos y fundos comunales con las excedencias y demasías de las haciendas seguía estando presente. Las propiedades de menor extensión que las haciendas, la de los

1913, Textos y documentos, Tomo I, preparada por Mario Contreras y Jesús Tamayo, UNAM, México 1983, Pág. 102

(52) Informe del Ing. Francisco González de Cosío del 16 de septiembre de 1898, Op.Cit. Pág. 118

ranchos que se venían formando desde 1830, no son consideradas.

Andrés Molina Enriquez con gran apego a la realidad de estos años reseña estas dificultades:

Desde luego esas disposiciones (la Ley de 1894) no podían tener ni han tenido otra aplicación, que a la gran propiedad, es decir, a las haciendas, que en lo general, son las únicas bien tituladas, pero la Ley olvidó que la titulación misma de las haciendas, en una gran parte quedó descabezada por las operaciones hechas en virtud de la desamortización y de la nacionalización, puesto que esas operaciones se hicieron sin las primordiales respectivas que se perdieron o fueron ocultadas; toda la gran propiedad de los criollos nuevos estaba en ese caso...La misma ley desconoció las condiciones en que la desamortización vino a formar la propiedad pequeña de menos de \$200.00 de valor...nadie puede saber ahora si los pueblos reportados tenían títulos primordiales o no.

Molina Enriquez no olvidó poner casos concretos

No se nos borrará jamás de la memoria el caso de los pueblos Tixmadeje y de Pungú, del estado de México, pueblos fundados antes de la conquista y uno de ellos ya repartido en virtud de las leyes de desamortización, declarados baldíos en virtud de no tener títulos primordiales (53)

En Querétaro en 1899, las dotaciones anunciadas para los habitantes de la Congregación de Barranca de Cocheros no se habían entregado porque todavía "no se medían los terrenos". Con las dificultades del caso, en ese año se entregaron 184 títulos de propiedad en Amealco y San Juan del Río. La suma total del gobernador era de 3 481 títulos.

Por otra parte, a partir de 1894 se inicia una nueva etapa en Querétaro que busca establecer una infraestructura mínima que revirtiera las crisis cíclicas que asolaban a la agricultura por

los malos temporales. Obras que venían a resolver viejas demandas de los pueblos en su lucha por el agua. En San Juan del Río para 1899 ya estaba en construcción la presa que surtiría de agua a la población y para "el regadío de las huertas y sembrados del lugar". La canalización del Río San Juan empezaba a ser un hecho para "beneficiar a la mayor parte de las haciendas de aquel lugar". Se aprovecharían las caídas de agua en Tequisquiapan para establecer nuevas fábricas. Para 1910 se inaugura la presa del Centenario construida por la Cía. Hidroeléctrica Queretana. Y también en ese año se inicia la construcción de la presa llamada "Independencia" en San Juan del Río para aprovechar el agua captada (10 000,000 Mts³) como fuerza motriz y para el riego de los terrenos que circundaban la población. En Cadereyta se estaban terminando las cortinas de calicanto en la "Fuente grande" y en la denominada del Carrizal. En Humilpan en 1905 se estaba levantando una presa para recoger agua. Obras realizadas con recursos gubernamentales y contribuciones de los hacendados. En la hacienda Chichimequillas el propietario, Remigio Noriega, había iniciado la construcción de la Presa Grande llamada "Del Carmen" que quedó concluida en 1902. Obra de ingeniería hidráulica levantada bajo la dirección del Ing. austriaco Alfredo Rosenweit quien también diseñó el plano para la presa chica llamada del "Pilar". Guillermo Parra, dueño de la hacienda "Algives" situada entre Querétaro e Hidalgo, asienta que desde tiempos inmemoriales los terrenos de la hacienda eran irrigados por las aguas del río San Juan. En virtud de este derecho, en 1910 solicita se le conceda aprovechar 2 000 litros por segundo de las aguas

mencionadas para utilizarlas como fuerza motriz. También en 1910, Miguel Peón solicita se le concedan 3 millones de metros cúbicos para derivar aguas torrenciales del Río San Juan para sus haciendas Cazadero y Anexas, San Antonio y Agua Zarca.

Se roturan y componen los caminos, conectándolos a las grandes vías para la comercialización nacional y comunicando a las haciendas entre sí para facilitar la "violenta movilización", como se decía en la época, de las fuerzas de seguridad para proteger a los hacendados de las incursiones de los menesteros. Una mejora, asentaba González de Cosío en 1898, "de utilidad recíproca para los hacendados y las autoridades respectivas".

La efectiva comunicación de las haciendas con los caminos nacionales y los ferrocarriles para facilitar la comercialización de los productos fue evidente en 1912, cuando los hacendados por el Decreto No. 2 emitido por el gobernador Carlos M. Loyola, hicieron las manifestaciones sobre sus propiedades. Además de las grandes haciendas del Valle de San Juan del Río y Querétaro que tenían las estaciones de ferrocarril en su territorio, como la de Cazadero y La Griega se pueden mencionar las siguientes conexiones: La fracción de la Griega, Coyotillos, por ejemplo, se encontraba a 5 km. de la estación de ferrocarril la Griega. Ranchos pequeños como Lindawillanita de William E. Gray de 14-26-51, se encontraba a 15 metros de la estación de pasajeros del Ferrocarril Nacional y a 1/2 km. de la ciudad de Querétaro. La hacienda San Rafael de 900 has se encontraba a 12 kms. de la Estación de Ferrocarril de la Griega. La valiosa hacienda de Chichimequillas, de 22 463-64-18 has, se encontraba a 23 Km. de la

estación la Griega y entroncaba con varios caminos entre ellos el camino Real. La hacienda La Capilla se encontraba a 1 km. de la Estación de Querétaro del Ferrocarril Nacional de México. Es decir, que las haciendas mejor comunicadas se encontraban en la zona de los valles. (54)

Entre las que se encontraban ubicadas en puntos distantes se puede mencionar la hacienda El Aguacate, ubicada en Conzá, Jalpan, propiedad de Antonio de la Torre, medía 3 358 has., que era una de las que más distante, se encontraba a 120 Kms. de la estación de Río Verde. De igual manera, San Cristóbal de 5 000 has, ubicada en Vizarrón de Montes, distrito de Cadereyta, propiedad de de O.T. Braniff, se encontraba a 90 Kms. de la estación de Bernal. La

- (54) Por ejemplo, la hacienda La H de Vicente Ugalde hermanos, de 3 150 has de extensión, ubicada en San Juan del Río, se encontraba a 10 Kms. de la estación de esta ciudad. San Antonio de Palmillas de 18 000 has, ubicada en San Juan del Río, propiedad de Marcela Godoy Viuda de Ruiz, se encontraba a 2 km. de la Estación del Cambio de Palmillas. La hacienda de Galindo de 31 122 Has. ubicada en San Juan del Río, propiedad de Francisco Rincón Gallardo, se encontraba a 12 Kms. de la Estación de San Juan del Río. Una de las haciendas anexas de Galindo, El Sauz, (del mismo Rincón Gallardo) de 3 510 has. se encontraba a 4 Kms. de la Estación de Chintepec. La hacienda de Lagunillas ubicada en Huimilpan, (en este año 1913 perteneciente a Amealco) propiedad de Trinidad Vázquez, de 2 374-68-56 has, se encontraba a 30 Kms. de la Estación de El Ahorcado. La hacienda Miranda de 3 300 has. ubicada en la Cañada de Dominga C. de Olvera, se encontraba a 2 kms. de la Estación de ferrocarril de Querétaro. El rancho La Luz, de 249 has. ubicado en la Cañada, de Ramón Pozas, se encontraba 3 Km. de la Estación La Griega. El rancho La Campana y Arroyo Seco de Rosendo Rivera con una extensión de 350-48-62, ubicado en la Cañada, se encuentra a 3 Kms. de la Estación La Griega. La hacienda La cueva, de 6 975-68-46, ubicada en el Pueblito, propiedad de Angela G. de Cosío y hermanas, se encontraba a 15 km. de la estación de Querétaro. La 6a fracción de Menchaca llamada "San José", de 125 has, propiedad de Juan Mendoza, se encontraba a 6 Kms. de la Estación de Querétaro. La hacienda Apapátaro de 933 has, ubicada en el Pueblito, se encontraba a 16 Kms. de la Estación de Querétaro.

hacienda Mesa de León también ubicada en Cadereyta propiedad de Ausencio Trejo, de 5 000 has de extensión, se encontraba a 72 Kms. de la Estación de Bernal. (55) No todos los ranchos ubicados en los distritos de la Sierra se encontraban lejos de las vías del ferrocarril. Por ejemplo, el rancho San Antonio de 685 has. propiedad de Vera Hermanos, ubicado también en Cadereyta, se encontraba a 15 Kms. de la Estación Bernal. (56) También Tiziquia, Estancia Cerro Prieto unidas, de 20 000 has ubicada en Cadereyta, propiedad de Guillermo Basich, se encontraba a 28 kms. de la Estación de Ferrocarril de Huichapan, Hidalgo. (57)

- (55) De las haciendas ubicadas en los distritos de la Sierra también se encontraban distantes, Boquillas de 8 700 has, ubicada en Las Palmas, distrito de Toliman, también propiedad de Dominga C. de Olvera, se encontraba a 100 km. de la estación de Bernal. El rancho Nuestra Señora de los Dolores de 40-82-50, ubicado en Jalpan, propiedad de Blas Castillo, se encontraba a 76 Km. de la estación de San Luis Potosí. El rancho de Trejo, de 153.30 has. de Macedonio Trejo, ubicado en el Doctor, se encontraba a 113 Kms. de Bernal.
- (56) Entre las haciendas y ranchos de la Sierra que no se encontraban distantes de las líneas del ferrocarril se pueden mencionar: La hacienda La Cueva ubicada en Cadereyta de Montes de 500 has, propiedad de Aurelio Maldonado, se encontraba a 30 Kms. de Bernal. Yexthó y Algives de 271-77-18 has. ubicada en Cadereyta, del Dr. Guillermo Parra, se encontraba a 16 Kms. de la Estación de Rayón, en Hidalgo. El rancho El Charcón de 600 has. ubicado en Cadereyta, propiedad de Gerónimo Hernández, se encontraba a 16 Kms. de la estación de Rayón. La hacienda de Panales, de 29 835 has, ubicada en Colón, propiedad de Pedro M. Gorozpe, se encontraba a 60 km. de la Estación de La Noria. La hacienda Loberas, de Ausencio Trejo, ubicada en Cadereyta de 4 000 has. se encontraba a 32 Kms. de la Estación de Bernal. El Ranchito propiedad del mismo Ausencio Trejo de 1 300 has de extensión se encontraba a 36 Kms. de la Estación de Bernal. Una de las fracciones de la hacienda El Rincón de 498 has, ubicado en Cadereyta de Montes propiedad de Domingo Muñoz, se encontraba a 36 Kms. de la Estación de Bernal. Las otras tres fracciones de esta hacienda El Rincón eran propiedad de Emeterio Vega.
- (57) Las distancias en que se encuentran las distintas fracciones de la antes extensa y unida hacienda de Esperanza muestran las diferentes condiciones de los terrenos de las haciendas que permitía la hipoteca de las fracciones menores

Algunos propietarios no indicaron las vías de comunicación que les quedaban cercanas como fue el caso El Rancho "Neblinas", ubicado en Tilaco, Jalpan, de 50 has, propiedad de Pompeya R. Vda. de Villanueva que no reportó a qué distancia le quedaba la estación de ferrocarril más cercana.

Entre las pocas incomunicadas se puede mencionar a la hacienda de Bolaños de Mariana Herrera de 296-49-60 has, que sin acceso a vías importantes, transportaba su producción en "animales de carga". (58)

Con el mismo sentido, se construyen puentes y se instalan teléfonos en las haciendas para comunicarlás entre sí y con las poblaciones más cercanas. En 1896, por ejemplo, se compuso el camino de Saldarriaga (hacienda y pueblo) y Jerécuaro y se construyó un puente de cantera de tres arcos sobre el río Batán. Para 1900, se comunicaba la Puerta de Palmillas y la Palma y la cuesta de Saldarriaga con la Cañada, en el camino de México. Otro camino se abrió entre la Estancia de las Vacas a Puente Grande en el camino a Celaya; otro que iba de Querétaro al Picacho en el camino de Jerécuaro y otro entre Querétaro y Santa Rosa de Jáuregui, en el camino de San Luis Potosí. En 1898 se inició el camino carretero que arrancando en Tolimán, pasaba por Panales,

favorecidas para propiciar el desarrollo de las mejor ubicadas, en los tiempos en que las haciendas estaban unidas. La hacienda de Esperanza, de 375 has, ubicada en Pinal de Amoles, Distrito de Jalpan, propiedad de Santiano de Minifie y Herrera hermanos, se encontraba a 148 Kms. de la Estación de Bernal. En cambio, una de las fracciones de la hacienda Esperanza, "Viborillas" de 1 260-70 has propiedad de Moreno y Díaz, se encontraba a 5 km. de la Estación la Noria del Ferrocarril Nacional Mexicano.

(58) Manifestaciones de los propietarios de haciendas y ranchos publicadas durante el año 1912 por la Sombra de Arteaga.

Colón, Ajuchitlán, Esperanza y desembocaba en la capital. En Colón se construía otro que comunicaba a la población con la cabecera distrital y que consideraba un puente de calicanto. En el Pueblito se compuso el camino que conducía a la capital del estado y el que lo comunicaba con la hacienda del Cerrito. También se arreglaron los hospitales civiles en Querétaro, Tequisquiapan, San Juan del Río y Cadereyta y se multiplicaron las escuelas en las haciendas.

Para 1904 el panorama de la agricultura en el estado había cambiado. La titulación de los terrenos parece suspenderse durante los siete años que median entre 1899 y 1904, posiblemente porque las haciendas, al contar con suelos irrigados, pudieron diversificar los cultivos y mantener una producción intensiva en su territorio. Expansión que requería de una mayor cantidad de trabajadores. (59) Así, de 1899 en que ya habían sido titulados 3 481 terrenos de común repartimiento no se informa de más titulaciones hasta 1904 en que se reparten 1 075 en Jalpan y 420 en Amealco y en 1905 que se entregan otros 256 en el mismo Jalpan

(59) Como un ejemplo se puede mencionar la producción de Chichimequillas en el año 1916. En octubre de ese año, la hacienda había recogido 2 500 cargas de trigo (vendidas a 10.25 en oro americano), producción que tenía almacenada en las trojes de la hacienda. Motivo por el cual Noriega solicita al comprador del trigo, José María Rodríguez, que proceda a la "saca del trigo que la harán en burros según me dicen...pues ya se aproximan las cosechas de maíz y de frijol y voy a tener necesidad de disponer de las trojes". La hacienda tenía tres trojes: la de la izquierda llamada "San Pablo", que guardaba 190 metros 61 centímetros cúbicos de trigo colorado, clase media. La de la derecha llamada "San Pedro" tenía 600 costales de 50 kilos cada uno y en la tercera denominada del "Sagrado Corazón" había 2 000 cargas de trigo colorado, 500 de segunda clase y 300 costales de primera, así como dos arcinas grandes y dos chicas en greñas. AGN, Período Revolucionario, Caja 265, Exp. 61

y 71 en Amealco. Se habían repartido en 15 años (de 1889 a 1905) 5 303 títulos de propiedad individual a los indígenas. Como caso excepcional, en ese mismo año, la Congregación de Arroyoseco, en 1904 denominada Pedro Escobedo, recibe una dotación de tierras concedidas por la hacienda de Lira propiedad de los Rincón Gallardo.

Para estos años (1904-1905) algunos síntomas de inestabilidad económica empiezan a aparecer en el rígido sistema porfiriano y la insuficiencia de los granos básicos ya era un problema crónico. De igual manera, se resienten los albores de la disidencia política organizada alrededor de los clubes liberales bajo iniciativa de estudiantes e intelectuales de San Luis Potosí (60), y como indica Guerra, la difusión en la prensa nacional sobre "los daños que produce la gran propiedad, del mercantilismo de los extranjeros, de la semiesclavitud de los peones del sur indígena o de la península de Yucatán, de la represión de las revueltas locales, de la corrupción de la justicia, de las elecciones ficticias, del atraso de la educación, etc" (61) y la campaña, decía el *Harper's Weekly* de New York en su edición del 2 de mayo de 1908, "que ha venido sosteniendo el gobierno de México desde hace tiempo contra los indios yaquis residentes en el territorio de Sonora", artículo que incluía fotografías alarmantes de los indígenas colgados y de las matanzas realizadas por el Ejército de Díaz, eran manifestaciones tangibles de la fractura ideológica que se estaba registrando en el sistema porfiriano.

(60) Francois-Xavier Guerra, Op. Cit. Tomo II, Pág. 9

(61) Idem

Al calor de la represión de los obreros del mineral de Cananea en Sonora y de los acontecimientos de Río Blanco, (1906-1907) en Querétaro se empezaron hacer presentes las inconformidades de los obreros textiles y de los trabajadores del ferrocarril. También en las áreas rurales empezaron a surgir conflictos que fueron rápidamente sofocados. Por ejemplo, en la municipalidad de Humilpan del Distrito de Amealco, en junio de 1906 se realizó un motín, eficazmente reprimido por los Rurales de la federación y del estado y el subsecuente encarcelamiento de sus líderes.(62) Al año siguiente, el 7 de enero de 1907, por laudo del presidente Porfirio Díaz con motivo de la huelga de los trabajadores de la industria de Hilados y tejidos, se dispuso la apertura de las fábricas que estaban cerradas en los estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y en el Distrito Federal y la igualación de los salarios. Los obreros de la fábrica El Hércules de Querétaro, obtuvieron un aumento del 20%. Tres años más tarde, en noviembre de 1910 la Sombra de Arteaga informa que se habían declarado los obreros de Hércules en huelga pero que ésta no tuvo mayores repercusiones y que todos los obreros habían vuelto a su trabajo. En 1909, y como parte de un movimiento nacional, se suspendieron por dos semanas las actividades del Ferrocarril Central Mexicano (63)

A pesar de estos problemas, las cuentas del Ing. González de Cosío, en 1908, teniendo como referencia la situación general del país, afectado por la crisis económica internacional de 1907 y la

(62) Informe del Ing. Francisco González de Cosío del 16 de septiembre de 1906, Op. Cit. Pág. 225

(63) Los Gobernantes de Querétaro, Op.Cit. Pág. 136

crisis política de la sucesión presidencial, bien desarrolladas en sus vinculaciones por Francois-Xavier Guerra (64), eran positivas:

La agricultura en la mayor parte del estado ha recibido el beneficio oportuno de las lluvias (hay) fundadas esperanzas de obtener una cosecha mejor que la del año pasado, motivo que redundará en bien de las circunstancias económicas por las que atravesamos, a pesar de que...debe sernos grato saber que no hemos sufrido grande escasez en lo que ha transcurrido del presente año y que continúa la dificultad de adquirir predios rústicos pues no los hay de venta ni aun a precios altos. Las industrias se han conservado con loable energía, a pesar de la crisis que sufre toda la nación, sin que hayamos tenido la pena de lamentar clausuras de fábricas u otras industrias, ni descuentos a los salarios de los trabajadores, ni ninguna otra circunstancia desastrosa digna de llamar la atención (65)

Si bien el comercio local había sido afectado por la crisis, se pensaba que "las buenas cosechas de cereales", que sin duda se darían por el buen temporal en ese año, reanimarían el movimiento mercantil. Para el año siguiente la situación de la minería, agricultura, comercio e industria presentaban el mismo panorama que en 1908. En gran medida, decía el gobernador, porque "el temporal de lluvias había sido errático o no había sido uniforme en todo el estado". (66)

No obstante la crisis y posiblemente debida a ella que obligaba a concentrar la atención en la importación de los cereales para satisfacer las necesidades de las "clases

(64) Francois-Xavier Guerra, Op. Cit. Pág. 235-255

(65) Informe Administrativo del Ing. Francisco González de Cosío, leído en la apertura de sesiones de la XIX Legislatura el 16 de septiembre de 1908. Tipografía de la Vda. de González, Santa Clara No.19, Querétaro, 1908

(66) Informe del Ing. Francisco González de Cosío del 16 de septiembre de 1909, Op.Cit.

menesterosas" concentradas en la capital, los títulos de propiedad otorgados entre 1905 a 1908 fueron relativamente pocos. En Jalpan 20 y en Amealco 54. Haciendo una suma total de 5 337 títulos. Suma a la que se agregan 71 expedidos en los distritos de San Juan del Río, Amealco y Jalpan en 1909 y 48 en estos mismos distritos en 1910. De esta manera desde 1878 que se emitió el reglamento a 1910 se repartieron 5 496 títulos de propiedad entre la población indígena del estado. Este reparto, que sirvió para contrarrestar las demandas de los pueblos, tendrá una vital importancia en el curso que sigue la entidad durante el período revolucionario. Aparentemente, la población indígena y los trabajadores de las haciendas, no tenían, para 1910, los resentimientos sociales acumulados en otras regiones del país. Sin duda la distribución de los terrenos en propiedad individual y la proliferación de la oferta de trabajo que la recuperación de la agricultura abría, no obstante las crisis cíclicas provocadas por los malos temporales, fueron factores determinantes en la paz consolidada de Querétaro.

3. La sociedad queretana en los albores del despertar democrático

En 1910, y pese al recorrido de Madero por la capital en 1909, que no levantó las expectativas suscitadas en otros lugares del país, la situación general del estado parecía y estaba controlada. El general Díaz podía pernoctar en la capital sin temor a las reclamaciones que eran usuales en otros lugares de la República. (67) En ese año 1910 en medio del regocijo por la

(67) Valentín F. Frías, en *Las Calles de Querétaro*, Op.Cit, Pág 37-38, reseña que el hoy Jardín Obregón, en estos años jardín

celebración del centenario de la independencia, en Querétaro fue conmemorado con la inauguración de la Presa del Centenario en Tequisquiapan, y cuando el ideario político de Madero circulaba por el país, la preocupación en el estado se concentraba en el lamentable estado de las cosechas de cereales perdidas en el año anterior no sólo por las sequías sino también por las heladas tempranas. Panaroma que en 1910 no pintaba mejor porque "por la escasez de lluvias, los depósitos de agua quedaron vacíos y las siembras de trigo y de otras semillas fueron muy cortos".

La preocupación que se anota en los últimos informes de gobierno del Ing. González de Cosío y a lo largo de todo su período sobre la escasez de los cereales y la urgencia de importarlos y venderlos a precios bajos a las clases menesterosas creando juntas especiales a este efecto (68) y el constante empeño en efectuar el reparto individual de los terrenos comunales, pone en evidencia que en el Estado se pensaba que la única causa que

Zenea, había sido profusamente iluminado en 1903 con motivo: "de haber asistido a la gran serenata al C. Presidente, Gral. D. Porfirio Díaz y su ilustre consorte la Sra. Doña Carmen Romero Rubio, a quienes la sociedad, que asistió de todo lujo, y el pueblo, no cesaron de vitorear. Al verlos aparecer y andar a pié entre nosotros, aquello rayó en delirio, el cual no cesó hasta que se retiraron del parque".

- (68) "En vista de las pérdidas de cosechas habidas el año pasado, el Sr. gobernador deseando que el pueblo no sufra tantas penalidades con el alza del maíz, con toda oportunidad pidió a los Estados Unidos la cantidad que creyó necesaria para abastecer a la población. El precio que piensan asignarle al maíz será equitativo, de manera que no se perjudiquen los expendedores que hay en la actualidad; pero si éstos aumentan sus precios y no convienen en asignarle uno equitativo, la Junta, de acuerdo con el Sr. Cosío, bajará sus precios aun cuando se tenga una pérdida en el negocio, pues la única mira, como antes dijimos, no es más que beneficiar a las clases menesterosas". Diario Oficial Sombra de Arteaga, marzo 3 de 1910.

podía introducir a Querétaro en el debate político nacional era el hambre que siempre había asediado a las llamadas "clases menesterosas" y la falta de resolución de los problemas agrarios. Y de hecho tenían razón. Las medidas tomadas para que las clases menesterosas tuvieran acceso al maíz a precios bajos y el reparto de los terrenos en propiedad individual disolvieron los motivos que podían pesar para que estos grupos sociales se sumaran al movimiento democrático de Madero. El movimiento maderista no prendió en Querétaro, ni en la ciudad ni en el campo.

En apariencia, la marginalidad de Querétaro en el proceso revolucionario desde sus inicios en 1910 hasta su culminación en el Congreso Constituyente de 1917, se encuentra definida más que por las cuestiones políticas y económicas, por las condiciones geográficas de su suelo. Y, lo que en una primera instancia, a la sombra de las legislaciones emitidas sobre terrenos baldíos, se consideraba una limitante, la falta de baldíos en el estado que estimularan la inversión extranjera en la agricultura, vino a ser, en 1910, una de las principales condiciones que mantuvieron en paz al estado: en Querétaro no se escenificaron los acontecimientos que con dolor y rabia denunciaban los indígenas de Oaxaca, Yucatan y Sonora. En este sentido, el decreto de Porfirio Díaz que suspendía las disposiciones de la Ley de 26 de marzo de 1894, publicado en el diario oficial del estado Sombra de Arteaga el 20 de enero de 1910, vital en otras regiones del país profundamente asoladas por las compañías deslindadoras y el capital extranjero invertido en las "negociaciones agrícolas", no tenía ninguna importancia en la entidad puesto que la legislación se había

aplicado en su sentido más positivo. Sirvió para regularizar la propiedad rural privada por un lado y por otro, para otorgarles títulos de propiedad individual a la población indígena del estado asentada en los Distritos de San Juan del Río, Amealco, Jalpan, Tolinán y Cadereyta.

No obstante de que, en apariencia, el estado estaba tranquilo y completamente al margen de las pugnas entre las élites porfiristas por la sucesión presidencial y del movimiento antireeleccionista de 1910, el gobernador Cosío no dejó de tomar providencias para evitar conflictos. Primero estableciendo un estrecho cerco de vigilancia en las haciendas, pueblos y rancherías y después buscando la formación de guardias rurales que fueran fijadas en el territorio del estado. En el distrito de San Juan del Río, por ejemplo, durante el mes de abril de 1910 los comisarios radicados en los distintos poblados, fueran ranchos, haciendas o pueblos, fueron reportando las medidas tomadas de acuerdo a las instrucciones remitidas. El 23 de abril de 1910 el comisario radicado en la hacienda de Cazadero, Trinidad Resendiz, informa al prefecto de San Juan del Río: que ya toma las providencias necesarias para evitar que viva en la hacienda "alguna persona que no viva de su trabajo y cuando lo crea yo necesario, poner las rondas que se sirve Ud. indicarme". También el comisario de la hacienda la LLave informa el 25 de abril:

procuraré hacer las investigaciones de toda gente sospechosa que pase por los terrenos de esta hacienda, así como de aquellos que se encuentran sin ocupación. Desde el mes de marzo los vecinos de esta hacienda están dando

servicio (de las rondas) y han continuado haciéndolo (69)

Así, sucesivamente los comisarios de las diferentes haciendas, Trinidad Tejeida de Ajuchitlancito, Andrés Luna de Banthí, Marcial Ugalde del Rancho San Jacinto, Jesús Helgueras del Rancho Guadalupe Helgueros, Modesto Sánchez del Sáuz, Marcial Enriquez de Cerro Gordo, Ramón Domingues de Tequisquiapan, Toribio Landeros de Lira, Catarino Mancilla de Pedro Escobedo, Efrén Rivera de la H, Aguilar Atilano de San Antonio, etc. van informando de las medidas tomadas "en previsión de lo que por otras partes está sucediendo".

Para septiembre de 1910 la situación nacional parecía estable. Sin embargo, González de Cosío, en apariencia confiado de que las cosas volverían a su cauce y tranquilo porque en Querétaro no había motivos fundados para esperar la inestabilidad, en el informe de ese año, leído el 16 de septiembre, deja la sensación de estar preparando su salida del gobierno. En lo que parece una despedida del poder por tantos años detentado, hace una síntesis de la obra de gobierno por él realizada en las últimas dos décadas.

Para fines del año, los disturbios en el país y los efectuados en el vecino San Luis Potosí, alarmaban a los queretanos. De este modo, los banqueros, agricultores, comerciantes y numerosos particulares, "a nombre del pueblo queretano", dice la Sombra de Arteaga el 10. de diciembre de 1910, secundaron la protesta del "pueblo potosino" contra "la infame

(69) Archivo Municipal de San Juan del Río, Cabildos, Caja 74 Exp.

conducta de esa turba sediciosa". Escrito firmado por connotadas personalidades queretanas el 24 de noviembre de 1910. (70) A esta protesta sucedió otra del Ayuntamiento de Querétaro que fue secundada por todos los Ayuntamientos del Estado. Era evidente que los profesionistas, los administradores y los individuos dedicados a los negocios, agricultura, industria y comercio no estaban a favor del cambio de régimen. Por otra parte, bajo el rígido control y vigilancia que se impuso en los distritos y sin líderes manifiestos que los informaran de los cambios que se registraban en el país, la población indígena y los trabajadores de las haciendas tampoco hicieron manifestaciones a favor de algunas de las tendencias políticas. ¿Cómo podrían si ignoraban los acontecimientos?

El General Díaz también tomó algunas prevenciones sociales además de las militares. El 31 de diciembre de 1910 la Secretaría de Gobernación mandó la circular No 7489 a los estados

(70) Por mencionar algunos de los firmantes, Jesús M. Loyola, Francisco Sánchez, Aurelio Camacho, Ricardo Rodríguez Herrera, T. García, F. García C., J. Olvera, Carlos M. Loyola, Fernando Loyola, Jesús Suárez, Manuel Campos, Francisco de P. Chávez, Ignacio Reséndiz, Matías Sánchez, A. Sánchez, E. de la Llata, José M. Sosa, Francisco Guevara Ríos, Eduardo M. de la Llata, J. Manuel de la Peña, Francisco Muñoz, Juan C. Gallegos, J.R. del Castillo, Antolín Mier, Manuel E. Gómez, Miguel J. Ríos, Manuel Ramírez, Félix Santoyo, José Mantecón, Enrique Villa, E. Llaca, A. Altamirano, Manuel Altamirano, Martín Soto, Gabriel Estrada, Jesús A. Sierra, Antonio Luque, Antonio M. Loyola, Andrés G. Arias, C. M. Loyola de la Torre, Samuel Barquin, Francisco Mendoza, Lic. Agustín Ruiz Olloqui, Gustavo M. Bravo, Francisco M. Díaz, José M. Rubio, Alfonso Truchuelo, Antonio Echávarri, Carlos M. Esquivel, Alfonso F. de Jáuregui, Alvaro Isla, José Septién, Rafael Luque, Ladislao Pastor, Juan N. Frias, Valentín F. Frias Uriel J. de Samaniego, Fernando, Agustín y Ricardo Isla...y otros más. Sombra de Arteaga lo. de diciembre de 1910.

en las que se disponía que no figuraran en las oficinas públicas federales retratos de personas que aun viven,

tanto porque esto no debe concederse más que como un honor póstumo, cuanto porque es conveniente evitar que las pasiones de los contemporáneos otorguen y lleguen esa distinción inconsideradamente, avivando pasiones que se deben, en todo caso, amortiguar hasta desaparecer.

En Querétaro no se presentaron las revueltas de los pueblos quejándose de los tratos recibidos o buscando la restitución de sus tierras que en 1911 sucedían en otras localidades del país, como fue la de Ojitlán, Oaxaca, en donde según el Manifiesto a la Nación dado en Oaxaca de Juárez el 24 de febrero de 1911:

Los que firmamos...nos levantamos en armas para impedir las arbitrariedades que se están cometiendo en todo el país por las autoridades usurpadoras de cargos públicos como son: las ventas de indios a las negociaciones agrícolas; cobro de contribuciones onerosas sin más autorización que la que se da a las personas que cobran...Comenzamos hoy el levantamiento aprehendiendo a todas las autoridades arbitrarias a quienes entregaremos a las autoridades que el pueblo nombre con sujeción estricta a la ley...Declaramos libres a los ciudadanos que se encuentren oprimidos y esclavizados en las negociaciones agrícolas...Nos adherimos al programa que nos proponen los patriotas antireeleccionistas de México...(71)

El movimiento, en versión del Jefe Político de Tuxtepec, era ejecutado por un considerable número de indígenas del pueblo de Ojitlán, (57 personas) mal aconsejados por algunos principales del lugar, movimiento que pronto cundió en otros pueblos cercanos como Usila, Soyaltepec, Ixcatlán y Jalapa de Díaz. Para el 27 de

(71) Manifiesto firmado en Ojitlán el 21 de enero de 1911 por el Jefe de Armas Sebastian Ortiz y demás firmantes. AGN, Período Revolucionario, Sec.1/ 910/ 15/ 1.

febrero se informa que "de un sólo golpe" había sido sofocado por las fuerzas que oportunamente había enviado para el efecto el Supremo Gobierno.

Por el contrario, el estado general de la entidad en 1911 era de tranquilidad. Había una convivencia armoniosa entre peones, medieros y aparceros con los dueños y administradores de las haciendas. La tranquilidad que imperaba en el estado se reflejó en las dificultades puestas por los hacendados para establecer la guardia rural creada por el gobernador González de Cosío mediante la ley del 21 de marzo de 1911, cuyo objetivo era la vigilancia de los caminos y terrenos de las propiedades rústicas (Art. 2) De hecho, al no sentir necesaria la fuerza de defensa, objetaban proporcionar, como lo indicaba el Art. 3 de la ley, "Un hombre montado y armado, por ahora, de espada y arma de fuego". La renuencia de los hacendados la esperaba el gobernador quien dispuso: "Cuando los propietarios o encargados de las fincas, a quienes corresponde facilitar los hombres armados se nieguen a hacerlo, se les impondrá por los prefectos o subprefectos, una multa de \$50.00 a \$100.00".

Sin duda para estimular la aceptación de la iniciativa, González de Cosío hizo publicar en el Diario Oficial, la propuesta voluntaria de su amigo Emilio Valdemar. Hacendado que ofreció el 24 de marzo de 1911, (al gobernador Cosío) 30 hombres útiles para

Tomar las armas, a quienes me propongo dar instrucción militar, y con cuyo objeto me permito suplicar a Ud. tenga a bien ordenar se me presten 30 fusiles de los pertenecientes al gobierno...Procuraré atraer algunos individuos más de otras fincas de campo comarcanas, como de la población llamada del Pueblito, cercana a mi

rancho...Si llegare a alterarse la paz pública en este Estado, creo que se podría contar con los servicios de los hombres a que me he referido, ya instruidos en el manejo de las armas. (72)

La realidad era otra. Nadie pensaba que podría alterarse la paz pública en el estado. El prefecto de San Juan del Rio, el Dr. Enrique Herrera, por ejemplo, cumpliendo la disposición había citado el 11 de abril de 1911 a los "prominentes hacendados o administradores" del extenso distrito a su cargo, para establecer la guardia rural. Entre ellos, Javier F. Ceballos, Alvaro Loyola, Vicente Ugalde Ruiz, Benito de la Peña, Severino Ayala, Marcial Nieto, Marcial Ugalde, Alberto Ugalde Ruiz, José María Romero, Jesús Helgueros, Andrés Basurto y Jesús Pichardo, por mencionar algunos de los nombres de los hacendados que seguirán presentes en la historia regional hasta 1940. La respuesta de los hacendados fue diversa. Algunos como F. Yarsa de la hacienda la Muralla, quien no pudo asistir a la junta porque "el semanero de la hacienda" le había entregado el mensaje hasta el día 16 a las 8 de la noche, no ponía dificultades a la medida. Para el 22 de abril de 1911, Yarsa pedía instrucciones porque ya contaba con la persona que había conseguido para Guardia rural. Marcial Ugalde, por su parte, arrendador del Rancho Guadalupe Helgueros, pidió información al prefecto para saber a qué ranchos debía agruparse para la defensa de sus propiedades. No obstante, la mayoría y bajo diferentes motivos, se oponía a la medida. Por ejemplo, Alvaro Loyola de la hacienda La Venta, demostraba que no era él el que se oponía a prestar ese servicio. Así, dice Loyola al (72) Diario Oficial Sombra de Arteaga, marzo 1911

Prefecto,

Está a la disposición de esa prefectura, el caballo, silla y arma que debe llevar el guarda rural que corresponde a la hacienda La Estancia; pero en cuanto al hombre no encuentro persona que voluntariamente quiera desempeñar el cargo" (73)

Presionado Alvaro Loyola para designar a un peón como guardia rural lo contrató. Sin embargo, poco tiempo después informó que el tal guardia no había "tardado en escaparse llevándose consigo algunos objetos".

Marcial Nieto era más explícito. Decía al Prefecto el 4 de mayo de 1911:

Mucho hemos trabajado para ver si conseguimos una persona para el servicio rural, pero una voz general me ha dicho que no. Tienen un miedo insoportable a que se los ayunen y creo que tienen razón.

Esta misma situación expresaba Vicente Ugalde Ruiz, dueño de la hacienda la H, quien pedía al Dr. Enrique Herrera el 7 de mayo de 1911:

(Dígame) si la persona que debo mandar para resguardo o guardia rural debe ser voluntario o forzoso para el individuo, puesto en cuanto a lo primero estoy seguro que ni por ningún sueldo va, en cuanto a lo segundo si puedo mandar alguno como me ordena, advirtiéndole que cualquiera que vaya será inútil para manejar el caballo lo mismo que las armas.

La argumentación de Vicente Ugalde era verdadera. Había casos que los reemplazos ya cotidianos en este año 1911, eran

(73) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 61 Exp. 1

devueltos a sus lugares de origen por su "inutilidad". Por ejemplo, el 14 de marzo de 1911, se envía a San Juan del Río el oficio No.537 en el que se asentaba:

Habiéndose devuelto al reemplazo Anastasio Mejía a quien remitió Ud. el 5 del presente, con oficio No.164, por haber resultado inútil, por la cordillera de estilo tengo la honra de devolverlo a Ud. para los efectos que procedan (74)

Así, argumentando unas razones u otras, los hacendados de San Juan del Río, se negaban a integrar las escoltas de la Guardia Rural con los peones y medieros de las haciendas. Decían al prefecto que estaban de acuerdo en aportar el caballo, el arma y el suelo del "soldado" que se había estipulado en \$0.50 diarios, pero que la gente, que él la contratara. Algunos hacendados, como Alfonso Helguera de la hacienda de Ajuchitlancito, ante la oposición de sus peones, había contratado gente de Querétaro.

La renuencia de los hacendados no era entendida por el gobernador de Querétaro, puesto que se hacía en virtud de los acontecimientos nacionales y ¡para seguridad de las fincas de campo!. Para finales del mes de mayo, los hacendados -por ejemplo los dueños de la LLave, la Estancia y Lira- seguían negándose a poner como guardia rural a los peones de su hacienda. González de Cosío le dice al secretario de gobierno, Ignacio Godoy Herrera, que les explique a los Prefectos que, "obrando con la mayor prudencia, convenzan a los hacendados de que la medida tomada por el gobierno, resultaba en beneficio de ellos".

(74) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 61. Subrayado mio.

De hecho, en parte porque los hacendados no querían armar a sus gentes, posiblemente por el temor a los conflictos sociales que podrían suscitarse de armar a su gente, y en parte porque los peones no querían "ser soldados" y se escapaban en cuanto podían, como lo había hecho el guardia rural pagado por cuenta de la Estancia y sus anexas, la fuerza de las guardias rurales tardó en crearse en San Juan del Río.

Todavía a mediados de junio de 1911, los hacendados pese a su voluntad, no lograban convencer a los peones. Javier Ceballos decía que la peonada le decía que "preferían separarse de la hacienda antes que ser reclutados".

El soldado, como se calificaba al guardia rural no era bien visto ni por los peones ni por los hacendados. Los peones porque no querían desarraigarse del suelo y porque "sabían" que las condiciones de vida de la soldadesca eran insorportables amén del riesgo de muerte que corrían. El temor que decía el hacendado Marcial Nieto que tenían a "que se los ayunen". No obstante, las escoltas de las guardias rurales se formaron a un costo muy alto no solamente en el plano económico. También lo fue en lo social. A partir de su conformación, nunca utilizada para los fines con que había sido creada, de contrarrestar la marea revolucionaria, los hechos sangrientos, hasta entonces excepcionales empezaron a ser parte de la vida cotidiana. Los actos delictivos hasta 1911 se reducían a los clásicos robos en pequeña escala, severamente castigados por los dueños de las haciendas. Las mantadas de maíz, ropa de vestir, el robo de algunos animales para comer carne y las no tan frecuentes peleas a golpes al calor del pulque o por líos

de falda. Pero no eran usuales los asesinatos y heridos de arma blanca o fuego ni el bandolerismo ni el abigeato que habían desaparecido por la tenaz persecución de estos delitos en los años anteriores. 75)

La no violencia de los trabajadores rurales en estos años tiene mucho que ver con el control ejercido sobre la población desde 1880, que se había intensificado por los desórdenes revolucionarios suscitados en todo el país.

Así no sólo era ese carácter dócil del peón queretano que enarbolaban los hacendados lo que impidió la formación de la guardia rural. Era importante también el rechazo generalizado al reclutamiento obligado para cubrir las bajas del Ejército federal mediante los famosos sorteos cotidianamente verificados en el estado durante 1910 y 1911 (casi diarios). El proceso de reemplazos de la tropa, normado por la ley general de 1869 y su reglamento de 3 de noviembre de 1902, no era en ninguna forma popular. Las actas levantadas con motivos de los sorteos

(75) En 1889 Gonzáles de Cosío aseguraba: "La fuerza pública cuida de la seguridad y a esto se debe seguramente que el robo en los caminos públicos no exista y que los casos de abigeato hayan disminuido, lo que debe atribuirse a la constancia con que se persigue a los criminales y al buen criterio del pueblo que secunda las disposiciones del gobierno ayudando a capturar a los delincuentes". Informe del 16 de Septiembre de 1889, Op. Cit. Pág. 25. En 1890 dejaba ver la importancia que se concedía a la seguridad y el orden público y los excesos que, sin duda, en defensa de estos principios se cometían: "La seguridad y el orden públicos se han conservado durante todo el periodo, no habiéndose tenido la necesidad de aplicar la pena de muerte como ejemplar castigo para evitar disminuir la perpetración de los delitos, por lo cual debemos felicitarnos. Este notable hecho demuestra la moralidad del pueblo y el empeño y actividad de los encargados de dar garantías a los habitantes del estado, en prevenir los delitos". Informe del 16 de septiembre de 1890. Op. Cit. Pág. 34. Subrayado mio.

verificados para cubrir las bajas del Ejército son abundantes en 1911. Sin embargo los seleccionados siempre buscaban y en ocasiones encontraban, la vía para escapar a ese destino. El ingenio utilizado y también el apoyo de sus familiares para lograr sus propósitos, ponía en verdaderos aprietos a los celadores. Precisamente por esta impopularidad, generalmente los reemplazos seleccionados eran enviados bajo la custodia del destacamento de rurales que guarnecía la población. Aun así, muchos de ellos lograban escapar, como lo hicieron Eufemio Saucedo y Silverio Chavando, originarios del puesto "La Puerta". Su escapatoria tuvo lugar en la hacienda de Cazadero, en donde pernoctaron en su camino a Polotitlán, estado de México, en donde tomarían el tren a su destino final, que era Pachuca, Hgo., según expresaba el derrotero marcado en el pliego con que los conducían. Las explicaciones del juez auxiliar Juan González el 8 de febrero de 1911 son bastante ilustrativas:

con motivo de no ser apropiada la hora en que se recibieron para remitirlos al punto indicado, me ha parecido conveniente retenerlos en esta hasta hoy, para mandarlos muy temprano, y para este fin, fueron encerrados en uno de las trojes de la hacienda, en donde siempre se han custodiado todos los presos que de igual manera se reciben. Desafortunadamente esta mañana al ir a conducirlos a Polotitlán he visto con bastante pena que haciendo uso de una barra que casualmente se había dejado olvidada en dicha troje, habían levantado varias lozas hasta hacer una excavación bastante grande debajo del quicio de la puerta, por la cual han conseguido evadirse (76)

Las imágenes de los Rurales del estado, auténtica policía de

seguridad que en muchas ocasiones habían atropellado a las poblaciones, y el desarraigo que implicaban los reemplazos siempre destinados a otros lugares del país (77), eran situaciones que impedían que hacendados y los medieros y peones vieran con buenos ojos su conversión en soldados o en guardias rurales. Con toda seguridad poca gente se enlistó cuando se emitió la convocatoria del 17 de abril de 1911 enviada por el jefe de reemplazos, Francisco P. Alvarez, al prefecto de San Juan del Río. Convocatoria expedida el 11 de abril de 1911 por el C. General en Jefe de la 6a. zona militar, José María de la Vega, en León Guanajuato, dentro de cuya jurisdicción se encontraba Querétaro. La convocatoria señalaba que el servicio sería por seis meses y ofrecía como salarios: \$1.00 a los soldados, \$1.25 a los cabos, \$1.50 a los sargentos segundos y \$1.75 a los sargentos primeros. Los salarios ofrecidos eran atractivos si consideramos que el sueldo de los peones en las haciendas de todo el estado era de \$0.18 o cuando mucho 25 centavos diarios en el caso de aquellos mejor pagados, que eran los menos. En la hacienda La Venta, por ejemplo, en 1912 se pagaban a los 261 hombres que empleaba la hacienda 0.18, 2 litros de maíz y terreno -pejugal- para que sembraran por su cuenta. A las 30 mujeres contratadas se les pagaba 0.12 y 2 litros de maíz.

La renuencia de los queretanos a los reemplazos ya tomaba

- (77) Por ejemplo, los pasajes solicitados (en el bimestre de julio y agosto de 1913) por el gobernador Carlos M. Loyola para la conducción de los individuos que el estado de Querétaro consignaba a las armas se observa que se solicitan 34 pasajes de ida para Silao, Guanajuato. AGN, Gobernación Sec. 1/913/12 /1.

formas violentas para impedir que los sorteos se verificaran en las poblaciones o para impedir el traslado de los levantados por "la gleba". Charles C. Cumberland, transcribe una comunicación del gobernador de Querétaro en 1913, Carlos M. Loyola en donde se asienta con claridad el rechazo que la población tenía a ser reclutada para engrosar las filas de los Ejércitos:

Si los reclutas son retenidos por algún tiempo hay gran excitación entre las familias y los amigos de los reclutas, que rápidamente se extienden al pueblo, que a través de la camaradería y la compasión hace causa común con los conscriptos, provocando todo esto escenas que dejan una mala impresión...por estas razones este gobierno ha seguido la práctica de enviarlos rápidamente, escoltados por rurales del estado y en pequeños grupos a fin de llamar menos la atención (sobre las prácticas de reclutamiento)...provocando así la menor indignación posible entre las clases más bajas, que contemplan con horror el servicio militar, aun cuando es legal (78)

Al triunfo maderista en 1911 y después de firmada la paz en ciudad Juárez el pueblo queretano (el bajo según las autoridades), que se había mantenido al margen de los acontecimientos nacionales, celebró con júbilo el derrocamiento de la dictadura. El Ing. Francisco González de Cosío, ante la magnitud de "las circunstancias verdaderamente anormales por que viene atravesando todo el País" como decía José Antonio Septién, se había retirado del poder, por licencia concedida el 31 de marzo, y había sido sucedido por distintas personalidades todas ellas pertenecientes a la clase administrativa que se había expandido durante la dictadura. El Ing. Adolfo de la Isla, director del Colegio Civil,

(78) Charles C. Cumberland, La Revolución Mexicana, Los años constitucionalistas, F.C.E. México, 2a. reimpresión, México 1983, Pág. 66

(gobernador interino del 31 de marzo al 20 de mayo) Alfonso Veraza (de los pocos maderistas en el estado del 20 de mayo al 26 de junio) y finalmente José Antonio Septién, catedrático de matemáticas en la Escuela Normal, pertenecían todos a las familias "honorables" y habían sido funcionarios importantes durante el largo periodo de gobierno del Ing. González de Cosío.

Pese a la inestabilidad política de estos tres meses, José Antonio Septién reconocía, "en obsequio a la verdad" que el estado era el que menos males había experimentado con "motivo de la última sangrienta lucha". El único suceso a lamentar era que,

con motivo de la celebración de manifestaciones mal organizadas se cometieron por nuestro pueblo bajo actos censurables como lo fue la destrucción de vidrieras de algunas casas situadas en las principales calles, el incendio del palacio municipal de Santa Rosa con todas sus oficinas y archivos, en el cual existían documentos de verdadera importancia para la población, la sustracción en Cadereyta de 15 fusiles y 50 carabinas sistema Remington, que servían para la fuerza de seguridad de aquel lugar, y de la suma de \$777.70 que era lo que constituía la totalidad de los fondos de su tesorería municipal

Nacionalmente se criticaba la "pasividad de los queretanos" ante los acontecimientos que removían todas las bases sociales de México. Crítica que permitió a los queretanos defender su posición "neutral" ante los conflictos, la gestión del gobernador González de Cosío y el esfuerzo de la iniciativa privada para impulsar el desarrollo económico de la entidad sin recurrir al capital extranjero. La editorial de El Tiempo del 4 de abril de 1911 había insertado un comentario que es rechazado por varios queretanos 4 días más tarde mediante una larga misiva que es

bastante ilustrativa de su deseo expreso de constituirse en la "Suiza mexicana":

En una nota editorial de "El Tiempo" de fecha 4 de corriente mes (abril), afirma su autor que en el Estado de Querétaro, "nada se mueve, nada se inicia, nada se reforma; que permanece tranquilo e ignorado, como el filósofo del cuento, y se considera que toda innovación es perjudicial, toda reforma trae molestias, toda mejora ocasiona gastos, y que a sufrir penas y trabajos tratando de adelantar, es preferible vivir en la medianía más insignificante, aunque se acerque a la miseria". Estas afirmaciones están muy lejos de la verdad, y se comprende que el autor del Editorial las hizo inspirándose en informes proporcionados por persona que desconoce el Estado... Todo el que visite hoy la capital de nuestro Estado, y la haya conocido hace treinta años, puede apreciar a primera vista los notables progresos que se han hecho en ese relativamente corto período de tiempo... Ciertamente es que no han sonado mucho nuestros adelantos; pero ello es debido a que somos enemigos de la ostentación y trabajamos en silencio, tranquilos, como dice el articulista, pero con asiduidad... Nuestro ideal es hacer de Querétaro una Suiza, que si bien es corta en extensión y no tiene gran número de habitantes, se distingue por su perseverante laboriosidad, por su cultura, por el respeto a las autoridades constituidas, por su amor a la paz... Por lo que hace a la iniciativa privada, puede decirse que los queretanos, no obstante que aquí no hay grandes capitales, son tan emprendedores y progresistas como pueden ser los hombres de negocios en cualquier otra parte, y ahí están para comprobarlo la Compañía Hidro-Eléctrica formada con una capital, exclusivamente queretano, de más de un millón de pesos... ahí está también la Compañía de Tranvías cuyos accionistas son asimismo queretanos... El amor que los queretanos tenemos a la paz pública está patente ahora que por algunas partes de la República existen movimientos subversivos, pues en el territorio de esta Entidad Federativa se nota gran bienestar y no se ha registrado un sólo caso que pudiera inspirar temores de que se altere el orden. Y no podía ser de otro modo de un pueblo que siempre ha dado muestras de alto patriotismo y de lealtad a toda prueba. Luchó con denuedo en la guerra de Independencia y contra los americanos en el 47; sus batallones se distinguieron en Acultzingo y en Puebla, el memorable 5 de mayo de 1862... Todos sepan que Querétaro marcha por el sendero del progreso paralelamente con las Entidades más prósperas de la República... y que bien podemos, parodiando la frase de Nelson, exclamar orgullosos, que el Gobierno y el Pueblo de este histórico

Estado han cumplido con su deber. (79)

En realidad no se puede negar que en Querétaro los acontecimientos nacionales se tomaban con una gran distancia. Lo mismo se celebraban "corridos de Toros" para destinar lo reunido en beneficio de las familias afectadas por la guerra o recibían instrucción militar "un numeroso grupo de caballeros" grupo formado por "personas muy honorables y distinguidas" para estar preparados en caso de que se necesitaran sus servicios, o se ofrecía un homenaje a Madero, en tránsito a la capital, que parecía más bien un sainete de opereta que los honores debidos al individuo que la Sombra de Arteaga calificaba como "líder democrático". Con motivo de la visita del Presidente Interino de la República, queretano de origen, Francico León de la Barra, se puede apreciar lo lejos que estaban los queretanos para organizar demandas políticas o sociales. El programa de atención a León de la Barra consideraba:

Gran manifestación popular organizada por el H. Ayuntamiento; banquete ofrecido por el gobierno del estado; Visita a los lugares históricos, entre otros a la casa en que nació el Sr. de la Barra; gran serenata en el Jardín Zenea; concierto en el teatro Iturbide (80)

(79) Texto de la carta enviada a Victoriano Agüeros, Director de El Tiempo, firmada por Francisco Frias Alcocer, F. Sánchez, Juan B. Alcocer, Alfonso Soto Díaz, Fr. Martínez Uribe, G. Zenea, J. García, Alfonso Jaso, F. García, Felipe Jaso, Carlos M. Loyola, Fernando Loyola, A. Truchuelo, J. Acevedo, Herminio Camacho, F. Arámburo, A.G. Arias, Jesús M. Loyola, R. Herrera, Emilio Valdemar, Macario Nieto, Gustavo M. Bravo, Jesús Regalado Gómez, Severo Bárcena, S. Septién, Javier Muñoz Ledo, Jesús E. Burgos y Rosendo Rivera, inserto en la Sombra de Arteaga el abril de 1911.

(80) Sombra de Arteaga, Mayo de 1911

Las dificultades del gobierno nacional de sostener la paz en varios lugares de la República motivó varias circulares a los estados pidiendo que se cambiaran las autoridades políticas del viejo Régimen y que se fomentara la paz. Para el 26 de julio de 1911 la Secretaría de Estado y del Despacho de gobernación envía una circular en la que se afirma:

Los lamentables excesos que se han registrado en algunos puntos de la República comprometen la tranquilidad de los pueblos, y nos hacen aparecer en el extranjero como incapaces de dominar nuestras exaltadas pasiones. Todo el mundo civilizado tiene, en estos momentos, fijas en nosotros sus miradas, y es imperiosa la necesidad de probar que, si nuestro pueblo tiene la energía bastante para recobrar sus libertades, la tiene también para reprimir los excesos que son consiguientes a todo cambio político que se verifica por medio de las armas...se recomienda a los Gobernadores de los Estados y se ordena a todos los jefes y oficiales del Ejército Libertador...que consignen inmediatamente a las autoridades competentes, para que sean castigados con todo el rigor de las leyes, a todos los que de algún modo alteren el orden público...

En medio de esa búsqueda reiterativa de la paz, y con las organizaciones partidistas creadas de 1910 a 1911 -El Club Patriótico de Querétaro, El Club político Independiente (que dió lugar al después llamado Unionista Regenerador) y el Club democrático-, los queretanos celebraron las elecciones para gobernador. Con algunos problemas en el Distrito de Jalpan, fue electo Carlos M. Loyola, accionista de la Compañía Hidro-Eléctrica queretana, para el período 1911-1915. Para entonces las manifestaciones de una sociedad por tanto tiempo controlada, tendían a concentrarse durante estos meses en las críticas personales y en expresiones cargadas de fuerte dogmatismo religioso. Como ejemplo se pueden mencionar las virulentas

críticas del Partido Unionista Regenerador, que había apoyado a Alfonso A. Veraza, en contra del gobernador nombrado Loyola. En cuanto a las expresiones dogmáticas religiosas se puede citar el discurso del Pbro. Ignacio M. Loyola director del Circulo Católico de Obreros, creado para contrarrestar la movilización que se venía registrando entre los trabajadores textiles. (81) El Pbro. Loyola habló, dice la Sombra de Arteaga en Diciembre de 1911:

de los males que produce el socialismo, que como sutil veneno pretende infiltrarse en el corazón de los obreros; dijo que no temía que ese mal invadiera su asociación porque todos los obreros que le formaban eran ciudadanos patriotas que jamás turbarían el equilibrio social con anárquicos amagos demagógicos

También empezaron a proliferar los periódicos partidistas como "La voz del Pueblo" del Partido Unionista tratando de influir en los derroteros políticos de la entidad. Más tarde aparecieron entre otros, el periódico dominical "Querétaro al día" y el órgano del Circulo Católico y patriótico de Obreros queretanos (el que dirigía el Pbro. Loyola) denominado "El amigo del obrero".

Posteriormente, cuando los rebeldes se habían vuelto "tan poderosos en Morelos", como señala Womack y que su "ejemplo había contagiado a los descontentos en otras partes" (en Tlaxcala,

(81) La sólida alianza de la Iglesia con el gobierno de Carlos M. Loyola es denunciada a nivel nacional. "El Noticioso" informaba que el gobierno de Querétaro estaba supeditado al "Obispo y su camarilla" y que subvencionaba al Circulo Obrero católico. Denuncias que estaban apegadas a la realidad. En Querétaro el clero católico ejerció una gran influencia tanto en los trabajadores del campo como en los de la ciudad. No se puede desconocer que "el rosario", era cotidianamente rezado en las fábricas Hércules y la Purísima, lo mismo que en las haciendas.

Puebla, el estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (82), en Querétaro se temía que las comunidades indígenas del estado, y las poblaciones de la Sierra Gorda se sumaran al Plan de Ayala que recogía sus añejas demandas de restitución de tierras. La Sombra de Arteaga, siempre eficaz para crear una corriente de opinión en los queretanos, se sumó a la crítica nacional que calificaba a los grupos zapatistas y a todos los rebeldes levantados en el país como "gavillas de bandoleros". Bajo la excusa de felicitar los servicios proporcionados a la patria por un "hijo" del estado, la Sombra de Arteaga proporciona su evaluación del movimiento zapatista:

En estos últimos días la prensa, en general, ha hecho encomios de la valerosa conducta que ha observado el Sr. Mayor D. Guillermo Rubio, en la campaña emprendida en el Estado de Morelos contra las hordas que manda el tristemente célebre Emiliano Zapata... Como el valeroso jefe es hijo de nuestro Estado y cuenta entre nosotros con numerosos amigos, muchos de ellos nos encargan que lo felicitemos por su honroso comportamiento (83)

Los temores de los queretanos se cumplieron. Las gavillas, como las llamaban, intentaban penetrar en el territorio queretano ya fuera para esconderse de la persecución de las fuerzas federales y rurales de los estados vecinos o para insurreccionar la zona. Por ejemplo, en el mes de septiembre de 1911, fuerzas de Mata habían intentado esconderse en Querétaro. Eduardo Cisneros, ubicado en Jacala, el 29 de septiembre de 1911 envía un telegrama al Teniente Porfirio Rubio, radicado en Pisaflores, Hidalgo, en el

(82) John Womack Jr, *Zapata y la Revolución Mexicana*, Siglo XXI Ed., 12a. edición, México 1982, Págs. 129 y siguientes.

(83) *Sombra de Arteaga*, Marzo de 1912

que le gira instrucciones:

En telegrama NO. 507 de ayer, Sria. General me dice: "Enterado el ejecutivo del Telegrama de Ud. fecha 26 de actual, relativo a que el Teniente Porfirio Rubio tiene noticias de que en el rancho de Ricardo Valderas, jurisdicción de Querétaro se encuentran varios refugiados de los dispersos de las fuerzas de Mata, acordó que se procure solamente la aprehensión de los cabecillas que se encuentran dentro del Estado, dándose cuenta a esta Sria. siempre que para tales órdenes medie orden judicial". Lo transcribo a Ud para que se sujete a esta disposición (84)

A partir de marzo de 1912, las gavillas de revolucionarios intentaban penetrar al territorio de la Sierra Gorda queretana para insurreccionarla. Dichas partidas, decía la Sombra de Arteaga,

están mal armadas, no tienen ninguna organización militar, son hordas que vienen con la esperanza de medrar protegidos por lo accidentado de la Sierra y en busca de adeptos que no han conseguido

El gobernador de Querétaro, Carlos M. Loyola, informado del ataque de las gavillas organizó la defensa del estado conjuntamente con las fuerzas federales y las rurales de Guanajuato y San Luis Potosí. Los alzados, capitaneados por Julio Rangel del Castillo, Rafael Lejarza, Aniceto Florez y León Medellín, penetraron al territorio queretano por Atarjea Guanajuato, el 24 de marzo de 1912 a las 12 de la noche, atacando Atarjea y Tolimán. El mayor Vicente Rojas y el prefecto de Tolimán, Abraham de la Vega, que encabezaron la defensa del terreno queretano informaron que Pinal de Amoles no tenía peligro.

(84) Archivo personal del general Porfirio Rubio. Originario de Pisaflores y posteriormente radicado en Aguazarca, Querétaro.

Organizadas las fuerzas federales en Atarjea y los Rurales de Querétaro en Tolimán, persiguieron a los rebeldes de tal manera que para el 27 de ese mes de la Vega y Rojas informaban que había sido totalmente dispersada la partida de alzados. (85)

Mientras la Sombra de Arteaga aseguraba que el estado estaba tranquilo, el periodico "Querétaro al día" que había empezado a salir los domingos informaba que una gavilla de 100 hombres había atacado la hacienda Casa Blanca, situada en los límites de la ciudad. Información que tendía a alarmar a las familias urbanas y que era ratificada por los periódicos nacionales el Heraldo Independiente y el Intransigente. Periódicos que aseguraban que en el estado reinaba la anarquía, que los revolucionarios habían penetrado en las principales haciendas, y que se habían llevado armas y animales, arrastrando a su paso a los hombres trabajadores. No obstante, en realidad la Sombra de Arteaga tenía razón. Pese a las esporádicas y sistemáticas incursiones de los alzados en la Sierra, y las supuestas amenazas que tenía San Juan del Río por las gavillas de Hidalgo (86) el estado se mantuvo tranquilo.

La tranquilidad de Querétaro fue difundida nacionalmente, cuando se buscaba, como parte de la estrategia militar para

(85) Idem. Abril de 1912

(86) Por ejemplo, Eduardo Suárez, Jefe Político de Huichapan, el 16 de agosto de 1912 le dice al de Querétaro que el Presidente municipal de Tecozautla le informaba que "corrian rumores" de que: "Simón Beltrán encabezando 400 hombres merodean por Tequisquiapan amenazando tomar el referido Tecozautla". El prefecto de San Juan del Río contesta que "si existen rumores", sin embargo no había certeza de dónde estaban las fuerzas comandadas por Beltrán. Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 58

perseguir a los rebeldes según demuestra Womack, que los individuos migraran de las zonas que estaban levantadas en armas.

Decía la Sombra de Arteaga que publicaba el artículo por creerlo de "suma utilidad para nuestro Estado",

ya que en él se hacen resaltar las ventajas que ofrece a los que desean cambiar de residencia para escapar de los peligros a que están expuestos en otros lugares de la República...Sirve como bálsamo eficaz para minorar nuestra tristeza el ver que existe en el país un rincón que ha permanecido tranquilo durante esta época luctuosa, que no ha sido regado con sangre mexicana...Bien se comprende que nos referimos al Estado de Querétaro, cuyos hijos han sabido agregar a los timbres que conquistaron en pasadas lides con poderosos invasores, los que por derecho corresponden a la cordura y a la verdadera civilización por los altos ejemplos que ha dado desde que comenzaron las revoluciones que aun no terminan... Querétaro, la ciudad de privilegiado clima, la que vive con tantos heroicos recuerdos, ha servido de seguro refugio para muchos de nuestros hermanos, que huyeron aterrorizados de sus hogares para buscar la tranquilidad perdida.(87)

No obstante la "confianza que se tenía de que se conservara la paz interior", decía en su primer informe de gobierno Carlos M. Loyola, "hubo necesidad, por precaución, de aumentar el efectivo de las fuerzas rurales". Fuerzas que fueron equipadas con "armamento moderno" importado de Alemania: 200 carabinas Maüser y veinte mil cartuchos. También fueron dotados de uniformes nuevos de paño y sus característicos sombreros de fieltro.(88) La previsión tenía justificadas razones. Los asaltos y robos a las haciendas, por "gente armada" aseguraban pero seguían siendo mantadas de maíz o mazorcas robadas en las labores de las

(87) Sombra de Arteaga, Agosto de 1912

(88) Primer Informe de gobierno de Carlos M. Loyola, leído en la apertura de sesiones del Congreso el 16 de septiembre de 1912. Publicado por La Sombra de Arteaga.

haciendas, para 1912 habia adquirido proporciones alarmantes en la zona de los valles. Durante este año, son diversos los reportes de los rurales informando que habian aprehendido a los "asaltantes" de las haciendas. En la carta que envia el comisario de la hacienda La LLave, Dolores Resendiz, el 26 de febrero de 1912 al presidente municipal de San Juan del Rio, se informa que fueron aprehendidos Herminio Verde y un individuo originario de La Raya, Valentin Soria, por haber robado "unos cajones de colmenas del rancho del Tejocote que quedo impune y unos caballos en la hacienda La Laja". En Pedro Escobedo, en marzo de 1912, el gendarme rural Refugio Rodriguez dio muerte a Emiliano Pina, cuando trataba de aprehenderlo, supuestamente por robos que habia hecho a las haciendas comarcanas. A Juan Rangel vecino de Pedro Escobedo se le habian recogido "un timpiate y un ayate que contienen frijol y maiz en marzorca que se lo robo en las labores de esta hacienda", individuo que es enviado a San Juan del Rio "con los soldados".

La fuerza utilizada por los rurales cuando cateaban y aprehendian a los supuestos "asaltantes de las haciendas y los ranchos" tendian a atropellar a las personas. Asi, en lugar de servir para defensa de las haciendas, ranchos y poblaciones generaban mas problemas sociales. No obstante, por la situacion politica de ese año 1912 no se podia desarmar a los rurales. Debido a ello, el gobernador Carlos M. Loyola, enterado de los abusos de los rurales y la serie de heridos y muertos que se daban bajo la excusa de su aprehension, recomienda a los prefectos que,

los rurales no sean enviados en substitución de la policía municipal que debe haber en todas partes organizadas de entre los mismos vecinos (89)

No obstante los rurales no respetaban las fuerzas municipales. Por ejemplo en junio de 1912, Prisciliano Almaraz delegado de la hacienda San Clemente informa al presidente municipal que se había presentado Petronilo Cervantes, uno de los vecinos que hacían el servicio de ronda en Chintepec para informarle que,

el sábado como a las 8 de la noche se le presentaron en la casa dos rurales que creo serán los que guarnecen esa plaza y que tengo enterado andan por estos rumbos a ver que novedad encuentran...de los dos rurales mencionados, uno es Julio Moreno, el otro no supe su nombre, éstos andaban con el individuo Guadalupe Tecozautla, los tres en estado de ebriedad...al encontrarse con Petronilo le pidieron su credencial y al entregársela Petronilo, la rompieron y tiraron; como me siento yo ofendido por esto, sirvase indicarme si esta clase de gente borracha tiene ese poder, pues que ahora lo hicieron con uno de mis ayudantes, por decirlo así, pues otro día lo harán conmigo (90)

Así, en San Juan del Río abundan los problemas de armas generados por los rurales y los conflictos que empiezan a sucitarse entre los prefectos, subdelegados, comisarios, rurales y hacendados por el control de la población. El 8 de julio de 1912 el prefecto de San Juan del Río, que exigía a los hacendados "un papel de buena conducta de todos sus peones" para evitar, aseguraba, "las fechorías que cometen dichos peones", se quejaba de que el hacendado Celso Becerril y Vicente Díaz consideraban que no era necesario hacerlo y que habían obtenido la aprobación del

(89) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 58.

(90) Idem.

gobernador. De ser esto cierto, decía el prefecto, "pues nada me creerán de lo que yo les diga".

Los trabajadores de las haciendas, continuamente vejados por los guardias rurales buscaban la ocasión de vengarse de ellos. Por ejemplo, el 8 de noviembre de 1912, Prisciliano Almaraz, delegado de la hacienda San Clemente, envía mal herido al rural Pedro Esquivel a San Juan del Río para que fuera atendido. En la explicación del caso señala:

Ayer, sin ningún motivo se le tiró el mozo de estribo de esta hacienda, causándole una descalabrada en el ojo izquierdo con una hoz homera...al avisarme salí violentamente yo mismo a aprehenderlo para tráermelo a la hacienda y en los momentos de hacerlo llamar al orden o sea que enderasesa para la hacienda me contestó con palabras altaneras diciéndome que le presentara la orden y que él no venía, como al contestarme todo esto observara yo ánimos de tirárseme encima, tuve la precisa necesidad de hacer uso del sable que porto en estos casos, precisamente cuando se trata de algún individuo atrevido e insubordinado como es éste

Como castigo y escarmiento, Almaraz sugiere:

que sea consignado al servicio de las armas; pues esta clase de hombres como es este, no sirven más que para darle un disgusto a uno (91)

Los hacendados, por su parte, empezaron a temer a los rurales y a las supuestas "gavillas" que decían se estaban organizando. Por este motivo a partir de marzo de 1912, cuando arreciaron los movimientos de los rebeldes en Morelos, empezaron a solicitar permisos para armar a sus peones. Fernández Zorrilla, comerciante y comisionario de San Juan del Río y propietario de la hacienda la De, dice al Prefecto Enrique Herrera el 24 de abril de 1912:

(91) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 58

Tenemos noticias...que una gavilla de bandoleros, ya se aproxima a nuestro distrito por el rumbo de Ajuchitlancito, teniendo conocimiento de que el gobierno del estado ha tomado las providencias necesarias, que para que resulten de más eficacia, necesita la ayuda de los hacendados, cuya gente, conocedora del terreno, prestará servicios de mucha importancia. Encaminados a este fin, muy atentamente le suplicamos nos facilite unos diez Remingtons (Sic) con su parque correspondiente para poner 10 hombres sobre las armas en la hacienda la De, quedando así constituido un destacamento que moral y prácticamente dará buenos resultados en contra del bandolerismo...

El gobierno del estado de Querétaro, a cargo de Carlos M. Loyola, respondió al Prefecto de San Juan del Río que tramitó esta solicitud y la de varios hacendados del Valle,

Como el Gobierno General no prestó por fin el armamento que tanto le pidió, y como éste (el estado) no está en posibilidad de armar a todos los hacendados que lo solicitan, quienes deberían procurarse armarse por su cuenta, pues es imposible que el gobierno de esta entidad federativa satisfaga tanta demanda, a pesar de ser buenos sus deseos de hacerlo. Solamente se podrá proporcionar unos 20 rifles a la prefectura de su cargo para la defensa de la población, pero será conveniente que mande Ud. persona segura que los reciba en esta ciudad (Querétaro) y los conduzca con toda seguridad a esa (San Juan del Río) (92)

-
- (92) Idem. A partir de junio de 1913 por la circular de 8 de junio que autorizaba en su artículo I: "Todo agricultor o industrial que quiera tener un número de hombres armados para la defensa de sus propiedades se dirigirán a la Secretaría de Gobernación solicitando las armas necesarias y comprometiéndose a mantener el número de hombres que hayan de servirse de ellas". El art. IV. especificaba: No se atenderá ninguna solicitud que no se refiera a un grupo de 50 hombres en adelante, de manera que aquellos...que por sí solos no puedan sostener 50 hombres, deberán si quieren hacer uso de esta franquicia, reunirse con sus vecinos...como caso excepcional el Art. V permitía que fueran 25 hombres, "pero en todo caso no menos de 25", los hacendados queretanos armaron a sus peones.

A la toma del poder por Victoriano Huerta, los queretanos organizaron el club "Paz y Justicia de Querétaro", correspondiente al Club Liberal Democrático organizador y Central del Partido Nacional Felicista, el cual se encargaría de la propaganda en el Estado a favor de la fórmula Díaz-de la Barra. El presidente de la filial queretana era el Dr. José Antonio de Echávarri. Vicepresidente, Julian Malo Juvera y el Dr. Benito Gómez. Secretario el Lic. Florencio Herrera, Pro-secretario Javier Muñoz Ledo. Tesorero Francisco Sánchez. (93) La toma de Victoriano Huerta también fue acompañada de la destitución de todos los prefectos políticos del estado y del establecimiento de nuevas zonas militares con personal militar adepto a Huerta. A la división del Centro que comprendía a San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Michoacán, fue comisionado el general Rómulo Cuellar. Como jefe de armas de Querétaro fue nombrado el General Juan J. Navarro.

Por otra parte, las incursiones armadas a la Sierra Gorda se incrementaron y varias fueron las ocasiones en que Jalpan fue asediado por las fuerzas revolucionarias. Primero, 140 hombres del 21 cuerpo Rural de Tlanepantla, Hgo. que se habían insurreccionado, entraron al territorio de Querétaro por el distrito de Jalpan. Fuerzas que fueron combatidas por 47 vecinos

(93) Los vocales eran: Feliciano María Calvo, Lic. Felipe Cabañas, Alfonso Jáuregui, Ing. Adolfo de la Isla, Manuel Urquiza, Dionisio Maciel, Manuel Altamirano, Jesús M. Loyola, Lic. Bernardo Bandala, Lic. Agustín Ruiz Olloqui, Ramón Martínez Uribe, Leopoldo Martínez Uribe, Ramón Martínez, Fernando Martínez Uribe, Gustavo M. Bravo, Adolfo Aguilar, Ing. Juan B. Alcocer, Rosendo Rivera, Francisco García, Dr. Ignacio Guevara, Felipe Herrera, entre otros. *Sombra de Arteaga*, abril 1913.

de Jalpan armados para defensa del lugar y los 20 hombres del 3er. Cuerpo de Rurales de la federación que iban al mando de Teódulo Pérez. Supuestamente la partida de insurrectos fue obligada a abandonar el territorio de Jalpan. (94) Julio Castillo, que comandaba una fuerza de Revolucionarios de San Luis Potosí también incursionó en el territorio de Jalpan, penetrando por Tancoyol y Saucillo hasta la población de Landa en el mes de mayo de 1913. Según la Sombra de Arteaga del mes de abril, con esta partida no hubo enfrentamiento armado puesto que se habían vuelto a introducir al territorio de San Luis Potosí cuando supieron que las fuerzas de Rurales federales y del estado, comandadas por Pánfilo Alatorre y Jesús Reyna, iban a combatirlos.

También en la municipalidad de Pacula, del estado de Hidalgo, se había levantado una fuerza revolucionaria que intentaba introducirse a la Sierra Gorda del lado queretano y llegar a la población de Jalpan. Ante las continuas pretensiones de las fuerzas revolucionarias de los estados vecinos de levantar en armas a la población de Jalpan, el gobernador solicitó la ayuda del gobierno federal. Las partidas de revolucionarios habían formado tres columnas para dispersar los ataques. Una radicada en Tres Lagunas, otra en Acatitlán de Tilaco y la última radicada en Pisaflores, Hidalgo. Posteriormente, el 30 de mayo, fuerzas de Joaquín Amaro comandando 1 300 Sanchiztas, intentaron de nueva cuenta tomar Jalpan, pero fueron combatidas por el coronel huertista Abraham Aguirre, en los cerros de Corimeo, Pelón y Plan de Corimeo, según informó al gobernador de Querétaro el general (94) Sombra de Arteaga, abril de 1913.

Rómulo Cuellar el jefe de la división militar del centro.

Finalmente, en julio de 1913, las fuerzas rurales del estado de Querétaro, comandadas por el Mayor Alatorre fueron devastadas por las gavillas revolucionarias en el rancho la Paz, cerca de la hacienda Extoraz. Las líneas telefónicas fueron interrumpidas, las casas comerciales de Peñamiller, Arroyoseco y Conca fueron saqueadas y no se sabía el camino que habían tomado las gavillas.

El 2 de octubre de 1913, por "motivos de salud" se concedió licencia "por tres meses" al gobernador Carlos M. Loyola, y tras el breve periodo de gobierno del General huertista Joaquín Chicarro (2 de octubre de 1913 a 16 de julio de 1914), las fuerzas constitucionalistas tomaron la ciudad. El 2 de agosto de 1914, el comandante en Jefe del Ejército del Noreste, Pablo González, nombró gobernador y comandante militar del estado al coronel de artillería, Federico Montes. Carrancista que mantuvo bajo su autoridad al estado hasta 1917, con excepción del periodo villista.

El rígido control que se mantuvo para evitar que las ideologías agraristas penetraran en el estado y para evitar la inclusión de Querétaro en las lides revolucionarias dió resultados. Aun cuando la Sierra Gorda fue continuamente asediada el estado conservó imperturbable la paz. Las ideologías que demandaban la restitución de tierras no penetraron en el estado. En Querétaro los indígenas, peones y medieros únicamente conocieron la legislación emitida por Carranza del 6 de enero de 1915 y aparentemente fue hasta 1916 cuando empezaron a solicitar la restitución de las tierras. Los movimientos políticos de los

profesionistas y administradores en las ciudades fueron detenidos por la persecución y encarcelamiento de todos aquellos que apoyaban a las otras fuerzas militares y políticas en pugna. Los hacendados, alarmados primero por la exigencia del gobernador Montes para que presentaran sus respectivos títulos de propiedad bajo el concepto de que la no presentación facultaba al gobierno para tomar posesión y administrar provisionalmente las fincas (95), y seguros más tarde de que sus bienes no corrían peligro, no opusieron resistencia a los constitucionalistas. El estado logró conservarse en tranquilidad.

Fue después de 1917 cuando la efervescencia social urbana y la rural de eminente carácter "popular" hizo acto de presencia en Querétaro. El pueblo "bajo" y las "clases menesterosas", imbuídos de la doctrina católica y de la doctrina política que, después de la creación de la Casa del Obrero Mundial, empezó a filtrarse en los grupos obreros y artesanos de la capital, tomaron una fuerte ingerencia en los asuntos políticos y públicos. Los peones y medieros de las haciendas de los valles obligados a migrar durante el año del hambre (1918-1919) y a establecer vínculos comerciales con la Sierra (conducían los arrieros armas y chismes políticos a Porfirio Rubio sólidamente asentado y controlando a Jalpan desde la idílica población de Aguazarca, y traían a los Valles los cereales que escaseaban) y con Querétaro, ampliaron sus horizontes y estuvieron al tanto de lo que acontecía en el país. La inclusión y participación activa de toda esta masa de

(95) Decreto emitido el 13 de agosto de 1914. Sombra de Arteaga, 13 de agosto de 1914.

trabajadores, del campo y la ciudad, en los bandos políticos en que se dividía la clase media, definía el triunfo o el fracaso de los movimientos. También es cierto que como su conformación ideológica y política estaba vinculada a los grandes movimientos nacionales, la balanza de las fuerzas se inclinaba a uno u otro bando de acuerdo a las definiciones del centro. Los dirigentes queretanos, quienes también dependían de los líderes nacionales procuraban atraer las simpatías de los "jefes nacionales" para sus propósitos. De esta manera los queretanos perdieron el control de los derroteros de la entidad y parecían, después de 1917, plumas al viento sin fuerza ni vigor para defender la sociedad a la que pertenecían.

4. La propiedad rural durante la revolución

La definición y formación de los propietarios rurales en Querétaro tomó 60 años (1830-1900). Proceso que estuvo determinado por el acomodo de los diversos intereses y racionalidades productivas que caracterizan a los tres regímenes de propiedad claramente definidos en 1900: Los ranchos, las haciendas y las parcelas individuales y los fundos comunales de los indígenas. A lo largo de esos 60 años, cada uno de éstos regímenes de propiedad estuvo sujeto, para su sobrevivencia, a las dos corrientes ideológicas que debatían el tipo de propiedad más indicado para romper el dominio colonial primero y, posteriormente, para

impulsar el desarrollo capitalista del país. El régimen de pequeña propiedad para unos, y la perdurabilidad de la gran extensión territorial de inevitable carácter colonial para otros. Para ambas ideologías el gran dilema a resolver era la propiedad comunal de las comunidades indígenas, los pueblos y los municipios, también de inevitable carácter colonial. Con el agravante que esta propiedad comunal guardaba una estrecha relación con los patrones culturales propios de las sociedades indígenas. Sociedades que, pese a los esfuerzos de los liberales, no solo conservaron su diversidad cultural y social sino que lucharon intensamente, hasta 1880, (96) por conservar los fundos y los ejidos de los pueblos concedidos por mercedes reales.

El propósito de la Constitución liberal de 1857 de crear la igualdad de los mexicanos ante la ley y generar una sociedad de propietarios individuales, sin distinción de razas, clases sociales y credo, llevaba el claro fin no sólo de romper la condición de "minoría de edad" con que la legislación española había protegido a los indígenas, sino de impulsar la integración de estos grupos, mayoritarios, a la dinámica nacional. Sin duda el afán de lograr la integración de todas las fuerzas sociales de la República alimentó la incomprensión de los liberales -también de los conservadores- al problema indígena. Dentro del caos y la anarquía propias del siglo XIX, hasta el porfiriato, los indígenas irrumpen violentamente en la escena nacional por la defensa de sus

(96) El año de corte de las pugnas indígenas, 1880, se establece para Querétaro, puesto que en otras regiones del país las demandas indígenas continuaron a lo largo del porfiriato e irrumpen en la Revolución de 1910.

fundos que era la defensa de su identidad. En este sentido, cuando la ley de 1894 asentaba que sin violentar la propiedad privada y las concesiones coloniales se repartieran los terrenos del común entre los individuos que los habían poseído desde tiempos inmemoriales, se estaba normando, con sentido práctico, una realidad social diversa desde siempre (en el México independiente) concebida y entendida como un gran lastre que impedía avanzar hacia la modernización del país. Sin embargo, como la ley introducía la defensa de la gran propiedad y legalizaba la pertenencia de sus "excedentes y demasías", también normaba con sentido práctico una realidad social: la expansión territorial de la hacienda a costa de los fundos y los ejidos de los pueblos. Los conflictos suscitados por la aplicación de la ley eran inevitables puesto que si bien reconocía la diversidad, optaba por la defensa y predominio de un sistema sobre otro. Por otra parte, la legislación porfirista no consideró en ningún momento la pequeña propiedad llamada entonces "ranchos" que se suponía se había creado bajo auspicios de las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes de manos muertas y que había quedado definitivamente establecida por la ley de 1892.

De esta manera, en Querétaro de 1880 a 1900 se expande el régimen de propiedad individual en los distritos poblados por población indígena y se consolida el territorio de las haciendas. Los ranchos, sin normas establecidas, siguieron creándose bajo la dinámica propia de la oferta y la demanda. Como los hacendados siguieron hipotecando sus fincas muchas fueron las ocasiones en que se pusieron en venta las fracciones de las haciendas o sus

labores y ranchos anexos. De esta manera, bajo las diversas legislaciones (reglamento de 1878 y ley de 1883) que desembocan en la de 1894 y de acuerdo a las leyes del mercado, para 1900 en Querétaro aparecen claramente diferenciados los tres regímenes de propiedad: haciendas, ranchos y propiedad individual-comunal de las comunidades indígenas.

Aun cuando en la época no se dió importancia a la expansión de los ranchos y las haciendas de menor extensión, este sector de propietarios medios, los rancheros, había alcanzado una proliferación numéricamente mayor a la de los hacendados que habían conservado sus propiedades.

Las nuevas propiedades, los ranchos y las haciendas, se componían de extensiones más pequeñas que las haciendas famosas de más de 30 000 has, como Estoraz con 41 032. El Lobo y su anexa Alfafayucan con 36 170; Buenavista y sus anexas Santa Catarina y Montenegro con 32 000; San Francisco o la Gata con 31 171. Galindo con 36 107 más las extensiones de Lira con 916.45 y el Sauz con 2 855 que eran del mismo propietario. Las nuevas propiedades eran aun más pequeñas que las otras fincas rurales de menor extensión pero no de menor importancia productiva como Ajuchitlancito y anexas de 16 903 37 has; la de San Clemente con 10 121, y la LLave con 12 762, por mencionar sólo algunas.

No obstante, para sus nuevos propietarios, sus haciendas pequeñas o ranchos, eran sin duda extensos y suficientes no sólo para enriquecerlos sino y sobre todo para permitirles empezar a participar del prestigio social de "los grandes hacendados", los grandes señores de Querétaro.

Entre estas nuevas propiedades creadas podemos tomar como modelos en el Distrito de San Juan del Río, a la hacienda la Dé de 2 000 has. Las instalaciones conservadas demuestran que la Dé había sido uno de las trojes-fortalezas propias del siglo XVI. La fortaleza de la troje de la Dé habla de épocas ya pasadas, a principios del siglo XX cuando fue adquirida por la sociedad comercial Rodríguez Saro y Socios de San Juan del Río. Venta realizada por Cirilo Helguera dueño de la hacienda de Ajuchitlancito. Las sencillas instalaciones de la casa-habitación, construida ya a fines del siglo XIX, posiblemente galera-habitación de los encargados del granero, indica que sus nuevos propietarios no alcanzaban todavía la acumulación de riqueza necesaria para levantar esas monumentales casas-habitación de las haciendas como la de Lira tan cercana (aun cuando de corta extensión 2.725 has) o la de Cazadero, El Ahorcado y Ajuchitlancito a quien pertenecía hasta 1906.

Más pequeña era la hacienda Santa Matilde de Javier Cevallos, con sólo 1 205-71-64 has. Sin embargo, Cevallos también era propietario de la hacienda Santa Rita que tenía 2 500 has. Extensión sin duda grande pero nunca comparable al tamaño de Ajuchitlancito, La llave y mucho menos con Galindo, el Lobo o Extoraz.

Entre los ranchos había muchos de diferentes tamaño pero del mismo dueño. Los Saucitos de José Ma. Romero era de los más pequeños, 8 has de riego. El rancho San Rafael de Victor Ramos tenía 131 has. El Mirador de Felipa Ruiz de Chávez era de 305 has. El rancho de la Sra. Marcela viuda de Ruiz y el rancho de

Palmillas y anexos, tenían 930 has. También de ella era el rancho de Arroyoseco de 40 has. Victor Ramos, dueño de San Rafael, también era dueño del rancho La Vega de 90 has, del rancho La Mesa de 60 has, del rancho La Palma de 126 has. Arnulfo Ugalde, por ejemplo, era dueño del rancho de Pedregoso de 66 has y de Zatlauco de 106 has. (97)

En cifras globales, según datos proporcionados por Consuelo y Alicia Soto Mora (98) se observa un notable incremento de la propiedad raíz de 1877 a 1910. En escasos 33 años, la propiedad casi se duplicó: de 413 propiedades se pasa a 641. De las 413 fincas rurales de Querétaro en 1877, 121 eran haciendas y 292 eran ranchos. Para 1910, los ranchos se habían incrementado en un 100%. De 292 habían pasado a ser 495. Las haciendas si bien habían aumentado no lo hacen en la proporción de los ranchos. Las haciendas en 1910 eran 146. Es decir, 25 más que en 1877.

No obstante, según los datos del censo de 1900 (99), el estado de Querétaro contaba entonces con 4 ciudades (Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta de Méndez y Tolimán), 5 villas, 33 pueblos, 118 haciendas, 17 congregaciones, 148 ranchos y 32 rancherías. Es decir, comparando los datos proporcionados por Consuelo y Alicia Soto Mora y los del censo de 1900, el gran

(97) Estadística Agrícola de San Juan del Río de 1909. Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1910-1920, Caja 74, Expediente 1.

(98) Consuelo y Alicia Soto Mora, "La tenencia de la tierra en el estado de Querétaro", en Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM, Vol. VI, México 1971.

(99) Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Dirección General de Estadística a cargo del Dr. Antonio Peñafiel, División Territorial de la República Mexicana, formada con los datos del censo verificado el 28 de octubre de 1900, Estado de Querétaro, México 1902.

incremento de haciendas y ranchos se da en un periodo mucho más corto: de 1900 a 1910. Pues si en 1877 son 121 haciendas y para 1900 son 118, se puede observar que la propiedad raiz durante el porfiriato se consolidó como gran propiedad. Y que, aspecto muy importante, su fraccionamiento se dá de 1900 a 1910, pues de 118 haciendas en 1900, pasan a ser 146 en 1910. Es decir, que en 1910 hay 28 haciendas más que en 1900. En cambio de 1877 a 1900, hay por el contrario 3 haciendas menos. En cuanto a los ranchos se puede observar que su incremento es notable: de los 292 que se reportan en 1877, pasan a ser 148 en 1900 y 495 en 1910.

Entre los factores que intervienen para que se fraccionen las haciendas en sus ranchos y fracciones entre 1900 y 1910 se encuentra el declive físico de una generación de hacendados que solía casarse con mujeres casi siempre 20 años más jóvenes. Las viudas herederas abundan en 1910. Ellas por sí fueron fuente de riqueza a través de varias formas: vía el matrimonio por segunda vez, vía la venta de sus propiedades y a través de un sistema que hizo rico a más de uno, el de ceder la administración de sus bienes a miembros de la clase media. Podemos mencionar entre otros administradores colaboradores de viudas en San Juan del Río a Restituto Rodríguez y a José Ma. Romero.

Entre las viudas de San Juan del Río en 1909, estaban la viuda de Ortiz, la viuda de Ruiz, la viuda de Peña (madre de Benito y del general Joaquín), en Querétaro la viuda de Reséndiz y la viuda de Centeno y en Toluca la viuda de Olvera. Esta última, Dominga Cabrera heredera del extenso latifundio de Olvera dueña entre otras haciendas de la de Estoraz se casó en segundas nupcias

con Luis L. Mondragón, heredero universal de su esposa a la muerte de ésta y propietario por lo tanto de este latifundio en 1925.

En muchas ocasiones las hijas mujeres de los grandes hacendados contribuían, como dote al matrimonio una hacienda o fracción del patrimonio paterno. La hacienda, rancho o fracción que dote se entregaba empezaba a constituir una nueva hacienda. No fueron pocos los juicios y demandas de fines del siglo XIX iniciados por los padres contra los yernos a la muerte de sus hijas. Por ejemplo, una de las hijas de Timoteo Fernández de Jáuregui, Fabiana, se había casado con Francisco Contreras, "llevando ésta al matrimonio como bienes maternos la hacienda de Santa María de los Molinos...A la muerte de Fabiana, Francisco Contreras se considera su heredero y como tal, decide vender la hacienda a José María Romero, uno de los hacendados en ascenso durante estos años. A esta venta se opone y lo manifiesta públicamente Timoteo, argumentando que su yerno no puede heredar los bienes de su hija,

habiéndose celebrado ese matrimonio antes de la publicación del código civil, no puede heredar a mi conforme ese Código, porque el matrimonio como todo contrato produce derechos y obligaciones conforme a la legislación vigente en el momento de contraerlo; así es que esa hacienda es sólo de mis nietos que son todos menores de edad, y siendo así...protesto con mi carácter de abuelo contra cualquier venta que Francisco Contreras haga de esa hacienda que mis menores nietos heredaron de mi hija Fabiana. (100)

No obstante el proceso paralelo y más frecuente fue la costumbre de los hacendados de pedir préstamos y dar como garantía

(100) Sombra de Arteaga, 14 de diciembre de 1879

fracciones de sus extensiones territoriales. Las hipotecas vencidas eran liquidadas, las más de las veces con fracciones o terrenos -generalmente pequeñas y las menos valiosas- de las haciendas. Así, el pago de las deudas en especie y la venta de "pedazos" de tierra para obtener recursos financieros, es una de las vías que se sigue a fines del siglo XIX y hasta 1930, por lo menos, en este fraccionamiento de las haciendas.

Como ejemplos de esta práctica se pueden mencionar algunos de los juicios hipotecarios celebrados entre 1910 y 1912, por préstamos obtenidos de 2 a 4 años antes, o por capitales que se quedaron debiendo por las ventas de fracciones realizadas entre 1904 a 1908:

En 1910, entre otros se encuentra el juicio hipotecario seguido por el gerente del Banco de Querétaro Carlos Kofahl, contra Procopio de León por \$2 000.00 y los réditos de esa suma a razón de diez por ciento anual. Capital avalado por la casa No. 7 de la calle de la Loma con el solar que le es anexo, un solar de riego conocido con el nombre "La Canoa", y un solar llamado "La soledad"; predios situados en la villa de Colón, Distrito de Tolimán. La Sra. Carolina Carmona promueve juicio hipotecario contra la Sra. Serapia Ordáz viuda de Urbina por la cantidad de \$500.00 a razón de 2% mensual. Los bienes hipotecados eran las casas situadas en el pueblo de Hércules -edificada en terrenos de la fábrica El Hércules-, otra edificada en terrenos de la hacienda de Carretas, la denominada "La marina", dos casas sin marca, colindantes también con Carretas y las denominadas La "Encantadora" y "El farol". José María Calvo demanda en juicio

hipotecario a Salvador Vértiz por \$8 000.00, avalados por el rancho "Las trojes", situado en Guanajuato, que era la fracción VI del rancho El Rocillo. Herminio Camacho demandó a la Sra. Narcisa Amaro viuda de Yañez y al Señor Timoteo Yañez por una cantidad de \$1 250.00 al 6% anual, hipotecando las fracciones de terrenos "El Arenal", "La Lagunita" y "La Vuelta" y un mesón ubicado en la calle de Bravo No. 2 de Jerécuaro, jurisdicción en donde se encontraban los terrenos. El Banco Nacional de México, embarga la casa de la Sra. Carlota Arana viuda de Reséndiz ubicada en la calle de Juárez, antes del Jardín Zenea, No. 2 de Querétaro. Por su parte, la viuda de Reséndiz sigue juicio contra la viuda de Centeno por un capital de \$1 000.00 avalados por la casa No. 10 de la segunda calle de San Felipe.

En 1911, el Lic. Juventino Guerra demanda a Manuel V. Martínez por la cantidad de \$1 400.00 y los réditos vencidos a razón de 9% anual, sobre la casa No. 18 de la primera calle de Lepe de Querétaro. El Banco de Querétaro anuncia que el 10. de mayo de 1911 va a rematar dos casas, una en la calle Miguel Hidalgo, con la fábrica de sodas y aguardiente taladas en la misma y la No. 5 de la de Buenos Aires en unión del molino de harinas y la No. 1 de Lozada, ubicadas en Querétaro y que pertenecían la primera y la última a José Longinos Fernández de Jáuregui y la segunda a José Trinidad Fernández de Jauregui. Miguel García reconocía a Carlos M. Rubio un capital de \$3 000.00 con interés al 8% anual, sobre la casa No. 9 de la segunda calle de Lepe, capital que es cobrado por su hija Victoria Rubio. Constantino LLaca remata el rancho "La Candela" ubicado en Bernal y tres fincas

urbanas que eran propiedad de Rafael Cabrera por el préstamo de \$590.00. El 27 de abril se remata la casa y terreno en la calle de la Loma, un terreno llamado de "La Soledad", sito en Los Trigos y el terreno La canoa, situados en la villa de Colón, distrito de Tolinán. El 19 de mayo se remata el rancho denominado "La Cazuela", ubicado en el estado de Michoacán, propiedad de Joaquín García por juicio hipotecario que le seguía Gilberto B. Muñoz. Francisco R. Cabañas promueve juicio hipotecario contra sus hermanos Lic. Felipe, Joaquín, María, Guadalupe, Ana María y Concepción R. Cabañas, por la cantidad de \$10 000.00, sobre la fracción IV de la hacienda de Balvanera nombrada "Trojititas" ubicada en la municipalidad de El Pueblito. El Ing. Adolfo Isla demanda en juicio hipotecario a Daniel Martínez por la cantidad de \$8 000.00 al rédito de 6% anual, gravados sobre la fracción VI de la hacienda de Potrero Grande y San José de las Islas, conocida también por "La quesera" ubicada en Guanajuato.

En 1912, el 27 de marzo se remata la fracción No. VI de la hacienda "La Quesera" y tres terrenos situados en Cadereyta de Montes. En el mes de abril, el Banco de Londres y México cuyo apoderado era el Lic. Germán Landgrave, inicia juicio hipotecario contra el Lic. Manuel de la Peña por un préstamo de \$51 162.00, a cuyo resguardo se había dejado la hacienda de Tesquiquiapan y sus terrenos anexos. El préstamo se había hecho para emprender obras de irrigación. Para garantía de los réditos habían quedado 538 bueyes, 1 584 cabezas de ganado vacuno, doscientos siete caballos, noventa y tres mulas, cuarenta y tres cerdos, ochenta y tres cabezas de ganado lanar, dos burros manaderos y ochenta y una

cabezas de ganado mular y caballar para silla y tiro que forman el pie de cría de la hacienda. El Sr. Eduardo LLata vendió en 1904 a Desiderio Cortés las haciendas de Santa Isabel y Santa Cruz del Llano, ubicadas en el distrito de San Juan del Río. Como parte del precio de venta se habían quedado a reconocer \$22 500.00 en calidad de censo consignativo y con hipoteca de 27 predios rústicos ubicados en Irapuato, Edo. de Guanajuato. Enrique Rodríguez y la Sra. Luz Fernández de Jáuregui tenían hipotecada el rancho "las tuzas" ubicado en Cadereyta de Montes y tres casas de la ciudad de Querétaro. Guillermo Peña compró en 1909 al Sr. José María Gómez la fracción de la hacienda La Griega llamada de "Coyotillos" (900 has) en \$40 000.00 quedando a deber la cantidad de \$26 000.00. Capital que Gómez había transferido a Juventino Guerra. Por su parte, Guillermo Peña, vendió al Sr. Antonio Peña una fracción de Coyotillos de 50 has en \$2 056.00 que quedó debiendo al 6% anual de interés. Guillermo Peña también vendió otra fracción de Coyotillos de 100 has a su hermano José María Peña, en \$4 112.50. Transacciones hechas en 1905. En 1912 se interpone el juicio hipotecario sobre la fracción Coyotillos. El Banco Nacional de México siguió juicio hipotecario contra José Morado, Felipe Castañón y Esteban y Doña Fernanda Plaza por el pago de \$7 368.84 préstamo hecho por la sucursal de Guanajuato y \$3 432.98 préstamo hecho por el Banco de Querétaro. Como bienes hipotecados por estos préstamos eran 31 terrenos y solares de sembradura de entre 31,16, 6 y 2 Has, ubicados en Pinal de Amoles, Pedro Escanela, Ahuacatlán y Jalpan.

Este proceso ininterrumpido que habla de la escasez de

capital, escasez que permitió la sobrevivencia de los prestamistas particulares, permitía la fragmentación de las haciendas y la proliferación de los ranchos. Para 1931, el 90% de las haciendas y ranchos de Querétaro se encontraban gravados con fuertes hipotecas. (101)

Sin embargo, el fraccionamiento de la hacienda y la proliferación de los ranchos no eliminó el dominio que tenían los hacendados en Querétaro. Incluso cuando en 1912 los acontecimientos revolucionarios en distintas partes del país reclamaban la restitución de las tierras, los hacendados hicieron todo lo posible, por su temor a resucitar las viejas demandas de restitución de tierras de los pueblos, para que en el estado se guardara una férrea oposición a la ideología zapatista, por un lado, y por otro para evitar la implantación de las medidas agrarias tomadas por Madero sobre estos asuntos. Demasiada tierra habían perdido por la situación económica que se venía arrastrando desde 1905 y en su afán de impulsar la infraestructura de riego, para permitir que los terrenos, que todavía conservaban, les fueran arrebatados por los pueblos. Bajo esta clara y decida oposición, el decreto de Madero que ordenaba el deslinde, amojonamiento, fraccionamiento y reparto de ejidos de los pueblos expedido el 24 de febrero de 1912, no tuvo ninguna repercusión en el estado.

En gran medida, como la instrucción dada a los gobernadores el 8 de enero de 1912 dejaba en manos de los Ayuntamientos la promoción del deslinde, amojonamiento, fraccionamiento y reparto (101) Sombra de Arteaga, 9 de junio de 1932

de ejidos en los pueblos (102) y la capacidad de convocatoria de todos los jefes de familia que habitaban en los pueblos y demás disposiciones jurídicas para:

Señalado el ejido, separar el fundo legal del pueblo, destinado exclusivamente para solares de habitación, calles, escuelas, mercados, plazas, correos, telégrafos, etc. y las porciones de terrenos que se reserven para caminos, panteones, hospitales, paseos, rastros y demás usos públicos. El sobrante de terreno se fraccionará y repartirá entre los jefes o cabezas de familias anotados en la lista (que elaborarían los Ayuntamientos) (103)

ningún munícipe procedió a efectuar lo ordenado. La disposición del Decreto que ordenaba se colocara, a la usanza, en los lugares públicos para que la población se enterara de la medida, tampoco fue cumplida. La Sombra de Arteaga como medio de comunicación eficaz de la época tampoco dió difusión al Decreto. Sin duda se deseaba que pasara sin pena ni gloria. La población rural de Querétaro, marginalmente integrada a la Revolución por medio de la gleba para los Ejércitos, y por la estancia de éstos en las localidades, sintió renacer sus esperanzas y también que había llegado el momento de solicitar la restitución de sus terrenos cuando Venustiano Carranza emitió el Decreto de 12 de diciembre de 1914 y la Ley del 6 de enero de 1915. Al margen de las motivaciones políticas que presionaron al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista para emitir la ley, analizadas por

(102) Para el efecto, se debían regir por la Circular del 30 de agosto de 1888, a las tres circulares de 28 de octubre de 1889, y a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de tierras de 26 de marzo de 1894. Circular Número 1 del 8 de enero de 1912. Archivo de San Juan del Río, Cabildos, caja 12 Exp. 2

(103) Idem.

Jesús Silva Herzog (104) y de las divisiones registradas entre las fuerzas reunidas en la Convención de Aguascalientes, a raíz de la cual Francisco Villa instaló su Cuartel General en Querétaro el 17 de enero de 1915, los indígenas empezaron, amparados en el decreto y la Ley carrancista, a demandar la restitución de sus tierras. Para entonces ya habían surgido algunas figuras de queretanos que abrazaban las causas del General en Jefe del Ejército Convencionista "que opera en el Norte y Centro de la República", Francisco Villa, como el general Joaquín de la Peña que es nombrado Jefe de Operaciones Militares del Estado, hacendado de San Juan del Río. Otros como el Dr. José Siurob se vincularon a las fuerzas carrancistas. A la caída de Villa en Querétaro ante las fuerzas obregonistas, el 2 de abril de 1915 es designado gobernador del estado el Dr. Siurob. Puesto que ocupó hasta el 18 de junio de 1915 cuando de nueva cuenta es colocado en la gubernatura el leal carrancista Federico Montes.

Sin embargo, en el corto periodo de gobierno del Dr. Siurob, escasos dos meses, se iniciaron algunas medidas que, sin duda, fueron resentidas por los hacendados en todo el estado: el Decreto que obligaba a todos los propietarios de fincas rústicas a sostener la instrucción rudimentaria dado el 28 de abril de 1915. (105) Decreto después ratificado por Federico Montes.

(104) Jesús Silva Herzog, *Breve Historia de la Revolución Mexicana. La etapa constitucionalista y la lucha de facciones*, Vol. II, F.C.E., México 1983, Pág. 171

(105) La emisión del decreto no sorprende pues desde 1911 había sido comisionado el Dr. José Siurob, por el gobierno federal, para organizar en el estado las Escuelas Rudimentarias. Resulta interesante medir los criterios ideológicos que normaban en este entonces a los revolucionarios maderistas sobre la ignorancia del indígena:

Posteriormente el Decreto del 18 de marzo de 1915 emitido en San Juan del Río que ordenaba la devolución de las aguas del Río San Juan que arbitrariamente se había apropiado la hacienda de Arroyozarco. En los considerandos del decreto se decía:

el pueblo de San Juan del Río gozó durante algún tiempo por derechos innegables de una parte del agua que se colecta en lapresa de Arroyozarco, de cuyo beneficio se vió despojado por los malos manejos administrativos anteriores...se decreta por tanto, que sea devuelta el agua de que gozaba primitivamente el pueblo de San Juan del Río, tomándola de la presa del Arroyozarco (106)

La pelea de San Juan del Río por el agua que tenía la hacienda de Arroyozarco venia, como se vió en el capítulo IV, desde mediados del siglo XIX. En este sentido el Decreto de Siurob era bienvenido por el pueblo pero, por las vicisitudes políticas, de poca eficacia real. Posteriormente, en el Cabildo extraordinario del 10 de febrero de 1917, se dice que se recibió un comunicado en donde se le informa al Ayuntamiento que,

por gestiones del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista...se emite el Decreto para que esta ciudad recobre sus derechos a las aguas de ArroyoZarco (Sic)

"El fruto será ver al indígena antes embrutecido y después consciente, leyendo a la débil luz de su buhardilla, en las horas de descanso, los grandes principios que rigen el trabajo humano, el ahorro, la bella literatura mexicana, que suavizará su rudo espíritu y lo hará más mexicano todavía; en una palabra, el humilde ranchero vendrá a los comicios, y sin pedir favor al intruso, sin titubear, sin vender sus convicciones eligirá a los hombres que realizen sus aspiraciones y calzará ese documento, germen de libertad, con el noble orgullo de su firma, Carta enviada por el Dr. José Siurob a la Sombra de Arteaga el 28 de diciembre de 1911.

(106) Archivo de San Juan del Río, Cabildos, Caja 18, Exp. 1.

Los miembros del Cabildo por unanimidad decidieron:

que se cite a los propietarios de huertas y terrenos de regadío para organizar fiestas que se celebren el día 20 en que llegará el agua a la ciudad...(107)

El problema sin embargo no se resolvió en 1915 con el Decreto de Siurob ni en 1917 con el de Carranza. En plena etapa de la reconstrucción nacional, el 2 de febrero de 1920 la Secretaría de Agricultura y Fomento informaba al gobierno del Estado que se había tomado una decisión que podríamos evaluar como salomónica:

En vista de los expedientes que se han formado con motivo de las aguas que constituyen el Río San Juan, cuyo nacimiento se encuentra en la hacienda de "Arroyo Zarco" ubicada en el Distrito de Jilotepec, Edo. de México, y de las solicitudes hechas tanto por los vecinos de Polotitlán y San Juan del Río ...(así como) la oposición formulada a ellos por la señora María Dolores Rosas viuda de Verdugo, actual propietaria de la mencionada hacienda...se había el siguiente acuerdo: las agua almacenadas en el vaso de Huapango-Teupa son propiedad mancomunadamente, de la hacienda de Arroyo Zarco y de las poblaciones de Polotitlán y San Juan del Río, hasta un volumen de 25 millones de metros cúbicos, el volumen de aguas excedentes que se almacenen en un año en el citado vaso, es de propiedad exclusiva de la hacienda Arroyo Zarco. De los 25 millones de metros cúbicos, 80% serían para Arroyo Zarco y 20% para San Juan del Río y Polotitlán (108)

La resolución de 1920, notablemente seguía favoreciendo a los propietarios de Arroyozarco, los Rosas. Pese a las medidas de control que se señalaba se iban a colocar para garantizar que el agua llegara a los pueblos, en realidad tanto los volúmenes

(107) Archivo de San Juan del Río, Cabildos, Caja 16, Exp. 3

(108) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 57, Exp. 1. He conservado la forma de escribir el nombre de la hacienda en una sola palabra hasta 1920, "Arroyozarco", y separada "Arroyo Zarco" como aparece en los documentos oficiales a partir de entonces.

concedidos como el control de la salida del agua, lo seguían teniendo los dueños de la hacienda. Esta es la razón por la cual en el municipio de San Juan del Río, año con año, se enviaba atenta solicitud a la Sra. Rosas viuda de Verdugo para que "dejara venir el agua a San Juan del Río". Sin duda Polotitlán haría lo mismo.

Posteriormente con el reparto de tierras que se inicia en los treinta, los pueblos solicitantes de los terrenos de Arroyo Zarco tenían que enfrentarse a San Juan del Río y Polotitlán, porque muy hábilmente la hacienda sacaba a luz las concesiones raquíticas ya dadas a los pueblos. La hacienda se negaba a nuevas dotaciones alegando, en estos años, que las aguas ya no eran de su propiedad. (109)

Las peleas de San Juan del Río por el derecho a las aguas del Río San Juan no eran únicamente con Polotitlán y con los sucesivos dueños de la hacienda Arroyo Zarco; también los tenían con los dueños de la hacienda "Algives" situada entre los estados de Querétaro e Hidalgo -por el rumbo de Ixmiquilpan- quienes asentaban que desde tiempos inmemoriales la hacienda disfrutaba del uso y aprovechamiento de las aguas de dicho río. En 1910, su propietario Guillermo Parra, había solicitado el "aprovechamiento de 2 000 litros por segundo del citado río para aprovecharlos como fuerza motriz" (110). En el mismo municipio eran frecuentes las

(109) En el Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1930-1940, se pueden seguir a detalle los conflictos habidos entre los pueblos de Polotitlán y San Juan del Río con los solicitantes de tierras dotados con las aguas del sistema Teupa-Huapango.

(110) Sombra de Arteaga, 5 de mayo de 1910

pugnas con los hacendados. Por ejemplo con los dueños de la hacienda La Guitarrilla quienes continuamente desviaban el agua del río para sus propiedades. Sobre esta situación, años más tarde en 1918, decía el comisionado de aguas Tomás Helgueros al Presidente municipal:

siendo esto una grave falta, tanto por no respetar órdenes de la comosión como por hacer uso de agua que es una propiedad que no les pertenece, con el agravante de ser persona ilustrada el propietario de la Guitarrilla y darse cuenta exacta del mal que comete (111)

El Decreto del Dr. Siurob que restituía las aguas del río San Juan para el poblado de San Juan del Río, que hoy sabemos no tuvo ninguna eficacia, generó en la época nuevas expectativas en los pueblos. Los indígenas de San Ildefonso Tultepec de la municipalidad de (Santa María de) Amealco elevaron un ocurso al gobernador y comandante militar de Querétaro, Federico Montes el 12 de junio de 1916, pidiendo que se les restituyeran unos terrenos llamados del "Tejolote" o "Mitigehé" ubicados en el cerro El Pelón en la colindancia con el Nadó que el año 1554 había entregado al pueblo Juan Ignacio Vicuña a nombre y representación del Virrey. Entre los ejidos pertenecientes a San Ildefonso se encontraban al Norte, el Cerro del Añil, el Tepozán y Santiaguito, y por el este, el llamado de Cofradía, el Carrizal, Peña Colorada, y la Laguna Seca, tierras que, aseguraban, "desde hace 20 han sido segregadas del ejido por los hacendados vecinos". En cuanto a los títulos de propiedad manifiestan que "los han extraviado pero que están registrados en el Archivo de la Nación".

(111) Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Exp.1

El expediente formado por la demanda de restitución de tierras de San Ildefonso es sumamente ilustrativo de los efectos que tuvo el repartimiento de las tierras del común en estos años y las vinculaciones que se establecían para negar los derechos de los pueblos.

Iniciada la tramitación de la solicitud, la oficina local agraria de Querétaro informa que

ignora la fecha de fundación del pueblo, el cual nunca ha cambiado de nombre; sus límites actuales son por el Norte el pueblo de San Lucas, por el Sur los de San Francisco Sasnis y Santa Maria Tinazdejé, por el Oriente la hacienda de Nadó y por el Poniente la hacienda de Noche Buena. Desde hace 45 años ha estado el pueblo en litigio con la hacienda De la Torre, hoy de la Noche Buena pues ella ha sido la usurpadora de sus tierras. Entre los terrenos reclamados hay uno que Juana Granados legó al municipio en 1871. Los despojos se iniciaron en 1785 y terminaron en 1871, con mediación del juzgado de Jilotepec que hoy pertenece al Estado de México y el de Amealco sin que los interesados hayan presentados documentos u otra clase de pruebas concernientes a los despojos.

La información sobre los títulos que los indígenas aseguraban que existían en el Archivo de la Nación (durante el Imperio de Maximiliano y una vez restablecida la República cuando los pueblos en masa pedían la restitución de tierras, habían recurrido al Archivo para que les enviara copias de los títulos. De esta época databa su certeza) no aparecieron en el Archivo que únicamente envió testimonios de las composiciones de tierras efectuadas en 1710 y 1716 y del juicio sumario de 1827 seguido contra San Ildefonso por el apoderado de Cosme y Francisco Damián González, dueños del rancho Mixtejé. Ninguna información se encontró sobre los procesos que arrancaban de mitad del siglo XIX. Y, lo más

grave, los títulos no existían. Al presentar el pueblo una copia de los títulos el perito paléografo nombrado para dictaminar su legalidad opinó que la "copia debía haber sido tomada de un documento apócrifo".

Además de no poderse legitimar los derechos sobre las tierras apropiadas por las haciendas, en el plano topográfico mandado a levantar sobre las tierras de San Ildefonso aparecía que San Ildefonso era dueño de 6 383- 13- 63 has. El padrón, en el que no figuraban 10% de indígenas emigrantes y otros 10% de mestizos, "que no se mezclan con los asuntos de los indios", dió una población de 195 hombres, 456 mujeres y 275 niños. En suma 926 personas. Las cabezas de familia eran 326 y de ellas solamente 39 no eran propietarias. De los individuos adjudicados sólo 158 poseían en conjunto 725 has 56 áreas y 36 centiareas. Una gran parte del ejido permanecía indiviso y era poseído en común. En virtud de esta información, se decidió que no era procedente la restitución de tierras que demandaba San Ildefonso. Decisión que fue ratificada por la Comisión Nacional Agraria quien señalaba:

el pueblo está poseyendo en común una considerable superficie siendo el número de no propietarios solamente 39. Suman las propiedades particulares 728 has de las 6 383 que miden las tierras ejidales, resulta que el pueblo posee 5 655 has extensión suficiente para nuevos repartos..no es necesaria la dotación de acuerdo a la ley del 6 de enero de 1915 (112)

La arbitrariedad de la Comisión Nacional Agraria es más que evidente al medir los "supuestos terrenos particulares" con los que habían sido adjudicados a partir del Reglamento de 1878. No (112) AGN, Período Revolucionario, Sec. 2, Caja 271, Exp. 33

pasaban de 2 has por persona. La cantidad es ridícula. Si se considera por otra parte que las famosas 5 655 que todavía quedaban por repartir eran en su mayoría terrenos cerriles que les habían legado las haciendas para despojarlos del agua, según se vió en el capítulo IV, se ratifica que la decisión era arbitraria y que no había ningún interés, pese a la ley del 6 de enero de 1915, de efectivamente dotar a los pueblos con tierras y mucho menos devolverles los terrenos que habían usurpado las haciendas. Por el contrario, se sigue dotando a las haciendas de aguas para sus terrenos. Mientras la población de San Juan del Río no lograba que la hacienda de Arroyozarco les devolviera el agua que acumulaba en su presa, y los de San Ildefonso tampoco lograban la restitución de sus terrenos, dado que se consideraba que 2 has eran suficientes para sostener a una familia, el dueño del rancho Ojo de Agua de San Juan del Río, obtiene por decreto que se ratifique que el Arroyo "La cieneguita" forma "parte integrante del rancho Ojo de Agua y que el aprovechamiento de sus aguas es libre para el propietario de la finca". (113) Isidoro Fernández de Jáuregui, propietario de la hacienda de Vanegas, ubicada en las inmediaciones de El Pueblito, solicita en 1911 dos mil litros de agua de las aguas torrenciales sobrantes del río de Querétaro, que se tomarían en el punto en que el río arriba al pueblo de Hércules y abajo del pueblo de la Cañada, para el riego de 500 has de la hacienda. Solicitudes que se hacen en virtud del Reglamento de la Ley de 13 de diciembre de 1910. (114)

(113) AGN, Período Revolucionario, Sec. 2, Caja 271, Exp. 61

(114) Sombra de Arteaga, 1911.

Esta Ley, el decreto del 18 de diciembre de 1911 que pretendía favorecer el riego y el fraccionamiento de terrenos y para preparar la organización del crédito agrícola y la Ley No. 2 expedida por el Congreso del Estado en noviembre de 1911, que obligaba a los propietarios de fincas rústicas cuyo valor fuera mano de \$5 000.00 a presentar manifestaciones sobre la extensión de la propiedad si ejercieron un fuerte impacto en el estado. Sobre todo, la Ley No. 2 emitida por el gobernador Loyola a fines de 1911 y que empezó a aplicarse en 1912, puso en riesgo su puesto porque afectaba los intereses de los hacendados al pretender un aumento en el pago de contribuciones. El debate suscitado amerita el juicio de La Sombra de Arteaga:

No es cierto que los hacendados se negarán a pagar el aumento de las contribuciones, ni que éste haya sido demasado corto para algunos: todos los señores hacendados con quienes hemos hablado nos han manifestado que aceptarán el impuesto que se les asigne, pues están seguros de éste será justo, porque la honorable junta calificadora que ellos mismos nombraron, nunca cometerá una injusticia con sus representados. Tampoco es cierto que por esa oposición, que dice harán los hacendados, piense renunciar el Sr. Gobernador. (115)

No obstante el comentario del periódico oficial, el puesto de Loyola si estuvo en riesgo. Tan lo estuvo que días más tarde, Carlos M. Loyola tuvo que emitir el Decreto No. 10. Decreto que en sus considerandos decía,

Que los valores fiscales de algunos predios de corta extensión, ubicados en el Estado, son relativamente altos, resultando muy oneroso para los causantes el impuesto respectivo; que por otra parte es preciso que las

(115) Sombra de Arteaga, mayo de 1912

propiedades que deben reportar ese impuesto, y que ahora se hayan substraídas a él, paguen lo que en justicia les corresponde, y finalmente que es una necesidad imperiosa distribuir de un modo equitativo la contribución predial, a fin de armonizar los intereses de los particulares con los del fisco,

Por lo tanto, se decreta:

Art.1o. Todas las fincas rústicas cuyo valor fiscal, si lo tienen, no llegue a \$5 000.00 y aquellas que no lo tengan, sea porque no han sido manifestadas, o por cualquier otro motivo...y a reserva que la oficina general de Hacienda determine qué predios habrán de quedar por su corto valor o por otras circunstancias, exentas del pago de contribuciones.

Es decir, los hacendados podían entrar entre aquellos de "otras circunstancias" para quedar exentos de contribuciones.

Los problemas políticos suscitados en Querétaro entre las fuerzas convencionistas y las constitucionalistas una vez que éstas últimas retoman el control del Estado y se restituye al gobernador Federico Montes hasta 1917, nunca, ni por descuido, afectaron la propiedad rural. Cuando los bienes de los partidarios de las otras causas eran "intervenidos" siempre eran las fincas urbanas las afectadas. A Fernando Martínez Uribe, se le cobraban \$300 000.00 por su libertad poniendo como testigos al Ing. Juan Antonio Septién y al Lic. Edudardo López. Martínez Uribe había sido hecho prisionero bajo la acusación que calumniaba a las fuerzas constitucionalistas y de haber apoyado al gobierno del usurpador Huerta. De hecho habían sido interferidas unas cartas en las que se informaba:

las fuerzas constitucionalistas han hecho su entrada a la población con las fechorías acostumbradas el mercado lo saquearon y está solo y cerrado lo mismo que las tiendas aquí no se dice nada de nuestros vecinos ¿qué habrá pasado

con ellos?

La familia de Martínez Uribe en defensa de la "neutralidad" política del acusado señalaba que la casa Martínez Uribe en San Juan del Río estaba ocupada por las fuerzas constitucionalistas y que en semillas y ganado había dado al Ejército de esta causa más de \$100 000.00. Era injusto que le cobraran \$300 000.00 por su libertad cuando no era culpable de nada. Al General Joaquín de la Peña, hacendado de San Juan del Río, reconocido Villista, le fue intervenida en 1915 la casa No. 100 de la Ave. Juárez en San Juan del Río, pero ninguno de sus bienes rurales. Bienes que, por otra parte tenía en propiedad mancomunada con su hermano Benito quien era el que hacía la defensa de los bienes.

En el informe que se rinde en abril de 1919 sobre bienes intervenidos en Querétaro aparecen 76 bienes intervenidos, todas ellas casas ya fuera del clero (64) o de enemigos de la causa. Entre los bienes intervenidos a enemigos de la causa se encontraban una casa de Francisco Alvarez, 7 casas de Juventino Guerra, 2 casas de Manuel Reynoso. De las fincas rústicas intervenidas según éste mismo informe únicamente aparecen las magueyeras de Francisco Velazquez y no se sabía por qué habían sido intervenidas.(116)

Con la celebración del Congreso Constituyente en Querétaro los pueblos se organizaron para pedir la restitución de sus

(116) AGN, Período Revolucionario, Caja 208, Exp. 13. Al triunfo del Plan de Agua Prieta, y aparentemente este fue el único caso, fue intervenida la hacienda "San Felipe" ubicada en el distrito de Amealco y que pertenecía al General Federico Montes. Archivo de San Juan del Río, Presidencia 1911-1920, Caja 56.

Concá, El Sitio, San Miguel Carrillo, San Pedro Ahuacatlán, Huimilpan, San Pablo, San Sebastián de las Barrancas, Purísima de Arista, Boyé y Santa María del Palmar. Eran, la mayoría, vecinos de los pueblos que desde 1857 estaban en pie de lucha por la defensa de las propiedades comunales. Indígenas, analfabetas y peones de las haciendas asentados en los terrenos que eran de sus progenitores, que conocían la historia del despojo que de generación en generación se había ido transmitiendo para que, llegado el momento, lucharan por lo propio. Como lo hicieron uno a uno los pueblos, en cuanto se abrió la posibilidad jurídica. Momento que sintieron llegado con la ley del 6 de enero de 1915.

Sin embargo, según los datos del censo general de habitantes de 1921, (118), el estado de Querétaro está dividido en 6 ciudades, 10 villas, 35 pueblos, 15 congregaciones, 3 barrios, 130 haciendas, 32 rancherías, 655 ranchos, 2 minerales y 3 estaciones que arrojan un total de 890 localidades. En diez años y sin duda bajo el influjo de la revolución el fraccionamiento de las haciendas es notable medido a través de la proliferación de los ranchos. De 148 ranchos que eran en 1900, pasan a 655 en 20 años. Las haciendas también se fraccionan y tenemos 12 haciendas más en 1921.

El proceso de fraccionamiento de la hacienda se intensifica entre 1920-1930, y no así los ranchos que decrecen. El censo de 1930 reporta 140 haciendas y 637 ranchos.

Aun cuando aparentemente hay una disminución de ranchos, de

(118) Departamento de Estadística Nacional, Censo general de habitantes, 30 de noviembre de 1921, México 1925

655 en 1921 a 637 en 1930, esta disminución no debe confundirnos: tiene que ver con la reagrupación que hacen los hacendados de sus propiedades más chicas y con la estrategia seguida de fraccionar sus haciendas y constituir pequeñas propiedades a fin de evitar ser afectados por las dotaciones y restituciones del programa agrario. Programa que en Querétaro era sumamente lento para dar oportunidad a los hacendados de instrumentar la defensa de sus propiedades. Como una muestra del grado de lentitud del programa agrario en Querétaro podemos tomar el caso de los vecinos del pueblo de Chitejé, Mpio. de Amealco, quienes habían hecho su solicitud de tierras en 1921. Para 1924, la Comisión Local Agraria les concedió la posesión provisional de la superficie dotada. Siete años más tarde, en 1927, el propietario de la finca afectada, "Molinos de Caballeros", Manuel Sánchez Navarro, presentó la defensa de su propiedad. En este caso el laudo fue favorable para los vecinos de Chitejé, pero no siempre ocurrió así. De hecho de 1918 a 1927, de 28 solicitudes de los pueblos, 12 son rechazadas y 16 reciben un laudo positivo.

El mecanismo que permitía rechazar las solicitudes de los pueblos era entre otros (el predominio jurídico de la hacienda sobre los pueblos y comunidades; el ascendente moral sobre los peones; denuncias de abandono de las tierras ya concedidas; el uso de la fuerza y la violencia) el derecho de amparo. El Senador Caloca en 1931, señalaba que hasta 1928 el número de resoluciones otorgadas por la Corte habían sido 6 000 contra 5 500 amparos promovidos en el mismo periodo. (119)

(119) Excelsior, 3 de diciembre de 1931

No obstante la emisión de las leyes agrarias que ordenaban la restitución y dotación de tierras a los pueblos, mucho tuvieron que esperar los queretanos para obtener alguna dotación o restitución de tierras. De hecho sus demandas únicamente alcanzaron su realización después de la revuelta agrarista encabezada por Saturnino Osornio originario de El Sitio, poblado de San Juan del Río. Revuelta que se inicia a partir de 1920 y que alcanza su punto culminante en 1931 cuando Osornio asume la gubernatura del estado.

El movimiento agrarista queretano iniciado por Osornio en demanda primero del "salario oficial" que concedía la legislatura local para los trabajadores del campo y que después, confundido con la lucha cristera tomó un carácter más radical, conjuntó las demandas de tierras de los pueblos (120). A partir de 1927 los pueblos y comunidades que desde el siglo pasado venían peleando con los hacendados en defensa de sus propiedades, con las primeras 16 dotaciones -aunque fueran a cuenta gotas- y con las seguridades que les otorgaban las fuerzas agraristas, volvieron a acumular esperanzas. Este es el caso de los vecinos de San Miguel de las Palmas del Municipio de Tolimán que en 1928, señalaban

Hasta ahora que sabido es y lo estamos palpando que a los pueblos de Pedro Escobedo y Santa Rosa, se les han devuelto sus ejidos, que de igual caso carecían de ellos...(nos) atrevemos a reclamar lo que por derecho nos corresponde...puesto que hemos sido usurpados por los propietarios de las haciendas de Loquillas y Agostadero de Charcas y Chapin..."(121)

(120) Ver de Marta Eugenia García Ugarte, "Saturnino Osornio: reminiscencias de una época en Querétaro" en *Estadistas, caciques y caudillos*, IIS-UNAM, México 1988.

(121) *Sombra de Arteaga*, 23 de febrero de 1928

Los habitantes de San Miguel de las Palmas habían sido despojados de sus tierras comunales en 1877 cuando a través del apeo o deslinde de límites se había favorecido a la hacienda de Chapin, caso estudiado en el capítulo IV.

Si consideramos que en 1927, avalados en la organización militar de los agraristas, empiezan los poblados a solicitar las dotaciones de tierras, se puede afirmar que la propiedad estuvo intocable en la década 1920-1930, aún cuando se registra un incremento de 10 haciendas. De las 130 haciendas que había en el estado en 1921, se pasa a 140 según el censo de 1930. Incremento que corresponde al fraccionamiento realizados por los hacendados entre los miembros de su propia familia para evitar la afectación agraria. También la posición de los revolucionarios en el poder, la del General Calles, había dado un giro. En estos años apareció la ley sobre el fomento de la pequeña propiedad y se discutía un nuevo plan y programa que tenía que ver con el reparto y el tamaño de las dotaciones. (122)

El movimiento de la propiedad raíz en San Juan del Río es ilustrativo sobre los factores culturales determinantes en la distribución y extensión de las haciendas y ranchos en el estado.

En 1793 había en San Juan del Río 37 haciendas y 17 ranchos. Para 1870 el número de haciendas había disminuido a 19, casi la mitad de las existentes en 1793. Los ranchos en cambio eran 48. Si esto es así, resulta interesante constatar que para 1909 se reportan en la zona 30 haciendas -incluyendo a las de (122) Excelsior, 12 de octubre de 1931

Tequisquiapan- y 35 ranchos (123). Es decir que durante el porfiriato la hacienda se fracciona casi en un 50% y los ranchos por el contrario son 13 menos que en 1870. Proceso que coincide con el panorama general del Estado, excepto en el número de ranchos, que en lugar de aumentar desciende.

Esta diferencia en la cantidad de ranchos puede deberse a la forma casi familiar en que se daban los datos. De tal manera que los ranchos de las haciendas fraccionadas, en ocasiones se reportaban como parte integral de las haciendas a las que habían pertenecido. Por lo menos en 1909, la hacienda la De apresuradamente se incluye, a mano, en la estadística elaborada ese año, pero no se registran sus datos agrícolas porque ya habían sido considerados en la hacienda de Ajuchitlancito.

En San Juan del Río no se registran modificaciones sustanciales en las haciendas entre 1900 y 1910. Los trabajadores rurales y sus patrones habían logrado estabilizar sus relaciones hasta 1880 conflictivas. Sin duda la movilización que auspiciaron los Ejércitos revolucionarios y la vía jurídica abierta por las legislaciones obreras y agrarias dadas durante el gobierno de José María Truchuelo en la década de los veinte, además de la ampliación de las escuelas rudimentarias, que desde 1915 se insiste se instalen en cada finca o rancho de las haciendas, habían ido penetrando en el mundo rural. Peones, medieros y aparceros en una década (1910-1920) modificaron sus patrones de comportamiento. En aras de obtener y recuperar la tierra y el agua para mejorar sus condiciones de vida, que los hacendados les (123) Estadística Agrícola de San Juan del Río de 1909, ya citada.

negaban, iniciaron una escalada de violencia que tomó 20 años en resolverse (1920-1940).

Los hacendados no se quedaron impasibles. Pretendieron tener el control político de los puestos administrativos más importantes del estado, y también continuaron armando a los trabajadores que les eran más leales. De hecho las fuerzas rurales de las haciendas en diferentes épocas creadas, se habían intensificado después de 1912 por las incursiones de los rebeldes de los estados vecinos en el territorio queretano de la Sierra Gorda. A partir de 1920 y después con la conformación de los fuerzas agraristas organizadas por el general Calles, los peones y medieros de las haciendas de uno y otro bando -cristeros y agraristas- estaban armados. Bajo estas condiciones los hacendados también armaron a sus trabajadores más leales. Los conflictos entre los diferentes grupos de trabajadores rurales armados fueron cotidianos desde 1918 hasta 1938. Conflictos que no siempre surgían por el reparto de las tierras o por las diferencias religiosas. También se creaban por problemas personales. Por ejemplo Manuel Prado Jefe de la Acordada de Zamora, Michoacán, denuncia ante el ministro de gobernación el 8 de diciembre de 1918 que Francisco Miranda y José María Barrera trabajadores de la hacienda La Estanzuela, habían sido asesinados por intrigas del mayordomo de la hacienda. Asienta criticando el suceso que,

Las acordadas cuando no están mandadas por hombres honrados...sólo sirven para cumplir mandatos de los hacendados que las paga para desprestigio del ejército; la mayoría de la gente nuestra no sabe que son

distintos.(124)

Por otra parte, se inició la formación de los ranchos con las extensiones legalmente reconocidas de la pequeña propiedad para evitar las afectaciones. Su estrategia se reflejó en el movimiento registrado en la propiedad rural de el distrito de San Juan del Río durante estos años. Conservándose el nombre original de las 28 haciendas, casi las mismas que había en 1909, se inició un fraccionamiento acelerado perceptible en el número de los ranchos. Estos se multiplicaron. De 35 en 1909 pasaron a ser 97 en 1921. Como de hecho pasó en todo el Estado. Esta distribución de la propiedad casi es la misma en 1930. Año en que según el censo hay 28 haciendas y 91 ranchos en San Juan del Río.

Coincidiendo con la emisión de las leyes agrarias pero no exclusivamente bajo su estímulo, la gran transformación de la propiedad raíz se da de 1910 a 1920, cuando proliferan los ranchos y las pequeñas propiedades. En la década siguiente, con los hacendados controlando la gubernatura, la propiedad permanece establece hasta el año 1931 cuando se inicia el reparto agrario. Sin embargo, un análisis del censo de 1950 deja ver que de hecho las leyes agrarias o el programa de reparto agrario únicamente fue aplicado en las comunidades y pueblos indígenas que venían demandado la restitución de sus tierras y en la zona que controlaban las fuerzas agraristas de 1920. El censo de 1950 reporta 84 ejidos en el estado localizados 6 en Colón, 16 en Pedro Escobedo, 51 en San Juan del Río, 9 en Tequisquiapan y 2 en

(124) AGN, Gobernación, Sec.1/918/1/7/.

Tolimán. En la zona que podemos denominar de Osornio, San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo, en comparación con el resto del estado, los otros sistemas, haciendas y ranchos casi desaparecen. Solamente 4 haciendas contra 91 (el 4.21%) y 21 ranchos contra 541 (el 3.75%). Es decir, salvo la zona controlada por Saturnino Osornio, los distritos de San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo, el sistema de la hacienda se impuso en el estado.

De la estabilidad de la propiedad agraria alcanzada en Querétaro hay varios ejemplos. Se puede citar entre las grandes haciendas queretanas que sobreviven a la Revolución mexicana y a la revuelta agrarista de 1920 el caso de la hacienda El lobo, ubicada en el Municipio del Marquez, que todavía en 1941, cuando es rematada en "rebeldía" de su dueña Josefa de la Mota (por hipotecas vencidas) en \$170 019 54, conservaba 14 000 has 74 areas y 55 centiareas de extensión. Una de las haciendas colindantes con el Lobo, Alfafayucan pertenecía también a la familia Mota. A María de la Mota de Fernández de Jáuregui. Es decir, el circuito del Lobo y su anexa Alfafayucan seguía imperturbable en 1940. ¿Cómo lograron esta estabilidad?

Puede sostenerse que la estabilidad alcanzada en la propiedad rural de Querétaro a lo largo de 40 años (1880-1920), es producto de tres factores combinados que arrancando desde la lucha por la independencia desembocan en la recuperación del sector agrícola durante el porfiriato y en la consolidación de la gran propiedad.

-la fragmentación territorial del estado en tres microregiones económicas y sociales claramente diferenciadas entre

si pero plenamente integradas a los derroteros políticos generales que se emitían desde el centro del poder local, el ejecutivo estatal, fue eliminando los viejos cacicazgos militares de la Sierra, como el detentado por el general Olvera, y auspiciando la hegemonía de los hacendados establecidos en los valles de Querétaro y San Juan del Río. Sin embargo, la hegemonía política y económica de los hacendados de los Valles fue acompañada por la proliferación de una clase de profesionistas y de empleados públicos y privados a su servicio que también fueron favorecidos con la entrega de algunas propiedades. Los administradores públicos y privados se convirtieron en hacendados, aun cuando siempre bajo el dominio y autoridad moral y política de los grandes propietarios. Estos propietarios medios parte integrante del grupo de los hacendados no gozaban del prestigio social de las viejas familias de hacendados ni sus terrenos alcanzaban la productividad de las famosas haciendas queretanas. Sin embargo su incorporación -a partir de la aplicación de las leyes de Reforma y posteriormente por las leyes del mercado- produjo como resultado la diversificación de la estracción social y económica de los hacendados desde 1880.

-La crisis económica de las familias propietarias después de la lucha por la independencia incrementada por la aplicación de las leyes de Reforma que obligaron la liberación de los capitales piadosos, auspició la fragmentación temprana de los grandes latifundios, surgiendo desde entonces un nuevo sector social entre los propietarios de la tierra: los rancheros. Así, los rancheros y los dueños de haciendas de menor extensión que las grandes

propiedades famosas en Querétaro, como el Lobo y sus anexas, Chichimequillas, Galindo, La llave, Cazadero o el Estoraz, por mencionar algunas, sin duda sentían satisfechas sus aspiraciones sociales. Este proceso ininterrumpido desde 1830 amplió considerablemente el número de propietarios de la tierra. En contraste con lo acontecido por ejemplo en San Luis Potosí en donde eran 9 los grandes propietarios según los datos proporcionados por Martínez Assad, (125) o en el Chihuahua de los Terrazas, en Querétaro la propiedad de la tierra se encontraba distribuida entre más de 300 individuos si consideramos los ranchos.

-La perdurabilidad de una cultura paternalista entre los grandes hacendados que les garantizó la sumisión y lealtad de los trabajadores. Hoy día a tantos años de distancia de los acontecimientos de 1931, cuando se inició el reparto de las tierras, muchos trabajadores de las haciendas siguen recordando que muchos de ellos no participaron en el reparto por la lealtad que le debían al patrón, tal como lo dijo Don Ruperto Ruiz, trabajador de la hacienda Calamanda. Por otra parte, no se puede ignorar que los trabajadores rurales que permanecieron fieles a los hacendados habían nacido y crecido en el territorio de la hacienda. Los vínculos afectivos entre los trabajadores y los patrones eran más fuertes de lo que usualmente se cree. La Sra. Angela Vega de 83 años, empleada de la hacienda de Ajuchitlancito relata:

(125) Carlos Martínez Assad, "Alternativas del poder regional en México" en *Revista Mexicana de Sociología*, Año XL, No. 4, México, IIS-UNAM, octubre-diciembre de 1978

Yo en esta hacienda nací y me crié; entré a trabajar a la edad de unos 5 años. Me casé y volví a estar yo aquí. Entonces el patrón era Alfonso Helguera. Tenía yo diez años cuando él murió (en 1917). Cuando murió el Sr. Don Alfonso, quedó su hermano Don Fernando Helguera. Y después murió él, Don Fernando, y quedó Fernando el chico que era sobrino de ellos. La muerte del Sr. Alfonso aquí se sintió bastante. El le ayudaba a la gente pobre, venían carros de México, furgones de carros con cobijas, con mantas, con telas, bueno, era una cosa grandísima para repartirle a toda la gente. El era Doctor. Dos veces al año hacía unas fiestas grandes. El quería mucho a la Inmaculada aquí en la Iglesia. El le compró sus anillos de oro. Sus aretes de oro. Pero ya que él murió le robaron todo a la virgen. El tocaba en las misas y cantaba con un coro de señoritas de aquí de Ajuchitlancito. Era una cosa hermosa. El 19 de marzo y el 8 de diciembre hacía unas fiestas grandes. Había castillos aquí abajo, unos castillos grandísimos. En ese entonces había una señores que les decían los "chitaces" se vestían de puras "carlanguitos" (vestidos viejos). Venían por el Sr. aquí con la música y lo llevaban a sentarlo allá abajo para que él viera su fiesta. El compraba costales de cacahuete, costales de caña para repartirlos a toda la gente. Las fiestas duraban dos días. Con Don Fernando todo se acabó. De la huerta que había abajo se sacaban barriles altos de cuero donde juntaban el chabacano, la pera, el cacahuete. Aquí se daba caña de castilla, aquí se daba fresa, jícama. Todo, todo se acabó. Ya no hay nada. Ya entonces empezaron a repartir las tierras con la reforma agraria. Yo seguí aquí con ellos. Después Fernando el chico vendió aquí a la Srita Concha Rubio. Con ella seguimos trabajamos (la Sra. su hija y su esposo) Mi esposo trabajaba con los Helguera. Hace 12 años que murió. El hacía queso, pan, cada tercer día. Y ya después cuando la Srita. Rubio lo cambió a una tienda y ya de allí quitó la tienda y se la dejó a él. La Srita Concha venía aquí con su cuñado. Ella falleció y ya dejó como heredera a su sobrina. Ella le vendió a Nicolás González Fernández de Jáuregui. Ya tiene muchos años que ellos compraron. El señor es tan bueno. Pero desde que murió su esposa (María Rivas) ya no viene. Son unos señores muy buenos. Aquí he trabajado siempre. Yo siempre me quedé aquí trabajando con ellos. Nuestra vida ha sido trabajar con ellos. Cuidamos la casa. Mi hija va todas las semanas a verlos porque: para mi, para mi hija y para mi, haga de cuenta que fueron nuestros padres porque han visto por nosotros hasta donde más han podido y nosotros los queremos, los adoramos con toda nuestra alma, porque han sido unos patrones como los primeros que fueron. Así, así han sido de buenos ellos con nosotros y así nosotros tenemos que ser con ellos hasta los últimos días de

nuestra vida. (126)

El predominio de los hacendados, en todos los renglones de la vida local, fue resquebrajado con la irrupción de la Revolución. De 1910 a 1917 Querétaro estuvo controlado, salvo el período de los tres sucesores del Ing. González de Cosío, de Carlos M. Loyola, y el breve periodo del Dr. Siurob, por el Primer Jefe Carranza quien colocó a Federico Montes de cuya lealtad no había duda alguna. Las fuerzas populares urbanas tomaron auge y la debacle política parecía acabar con los esfuerzos por tantos años sostenidos por garantizar el progreso económico, el orden y la estabilidad social. A partir de 1917, en medio de grandes conflictos suscitados por la emisión de las leyes agrarias y el resurgimiento del caudillismo político en la Sierra Gorda, en San Juan del Río y en Querétaro, los hacendados intentaron tomar la égida del control estatal. Sin embargo, ya no eran los mismos de antes y carecieron de la fuerza moral para arrastrar a todas las clases sociales tras de sí. En 1931 perdieron el control del estado. Las fuerzas agraristas, comandadas por Saturnino Osornio en la zona de los Valles y por Porfirio Rubio en la Sierra Gorda, se dividieron el control de la entidad y tomaron el poder político local. (Saturnino Osornio fue gobernador de Querétaro de 1931 a 1935, y Noradino Rubio Ortiz de 1939 a 1943). Al final de tantos años de conflictos, los profesionistas de la clase media fueron los grandes triunfadores. A partir de 1940 ellos tomaron bajo sus manos el destino de la entidad. Nuevos aires y nuevas ideologías

(126) Entrevista realizada en Ajuchitlancito en 1990

empezaron a circular en Querétaro, entonces engolosinado por el desarrollo industrial y por recuperar el esplendor que había sido propio del estado.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde el Congreso Constituyente de 1824 hasta el Constituyente de 1870, el estado de Querétaro tuvo que enfrentar los poderosos poderes federales para defender su derecho, inalienable, de darse la conformación política, social y económica idónea para prosperar. La vergüenza socialmente acumulada ante la denuncia que, bajo diversas circunstancias políticas y sociales de la historia nacional, se fue reiterando a Querétaro: "de no luchar por la libertad de México", pesaron en el curso que sigue la historia de este pequeño estado de la federación. Pero también pesaba en la memoria social el hecho, incuestionable, de que la mejor época, la del esplendor y señorío de Querétaro que había convertido a su ciudad capital en la reina y señora del Bajío, databa de los tiempos en que había sido corregimiento novohispano.

Pro-español en 1824 y pro-imperialista en 1867, Querétaro fue acosado sin tregua por la ideología liberal que quería arrasar, de raíz, a todos aquellos que defendían los principios políticos de la España colonial y optaban -congruentes con su anhelo político- por el partido del "retroceso": el conservador.

No obstante, fue en vano el empeño de los liberales, los ganadores de la batalla política e ideológica del siglo XIX, por destruir la visión que los queretanos tenían de la España colonial. Visión cargada de nostalgia por la nobleza y la bonanza de las familias aristocráticas. Los grandes señores de Querétaro, dueños de haciendas y obrajes, buscaron sin sosiego la recuperación del régimen que los conservadores prometían y que

ellos añoraban. La esperanza y la confianza renacían cuando el destino de la entidad se ponía en las manos seguras de los que querían construir sobre las bases sólidas del pasado. Todo lo contrario acontecía con los grandes visionarios que oteaban en el futuro la nación que soñaban en sus sueños. La pobreza y la miseria, la desolación y el infortunio de la entidad siempre venía acompañado de los liberales y de su pelea a muerte con los conservadores. Así fue en 1833 cuando el gobernador liberal, Lino Ramírez, sustituyó al conservador, "hombre de bien", Manuel López de Ecala. Así sucedió en 1860, cuando el General liberal José María Arteaga sucedió a los conservadores Octaviano Muñoz Ledo, Tomas Mejía, Cayetano Montoya, Manuel María Escobar, Mariano Reyes y Miguel Piña. Y así sucedió, sobre todo, en 1867 al triunfo de la República sobre el Imperio de Fernando Maximiliano de Habsburgo.

Los queretanos en 1867 estaban convencidos: las ideologías nacionales tanto de los conservadores como de los liberales no tenían un sustrato real con la sociedad que ellos vivían. No tenían, incluso, la visión del país que querían construir para el mañana. En su idea de "nación" destruían las diferencias regionales. Había que dejarlos debatirse en sus quimeras integradoras y enfrentar el futuro del pequeño pedazo de territorio que las denuncias del pasado remoto (1824) y los temores del presente distante (1857) les habían dejado. Había que defender el territorio estatal asediado por los hacendados vecinos cuyas propiedades se extendían hasta el suelo queretano. Había que recuperar la estrategia definida en 1824 de concentrar el agua

para aumentar los suelos irrigados y la productividad de la agricultura. Con denuedo defendieron la soberanía y la autonomía estatal.

Por encima del interés nacional que no se concretaba en su cotidianeidad, los queretanos privilegiaron el interés regional. Esclarecieron la figura política que necesitaban para negociar con las fuerzas triunfantes de la República: el ejecutivo estatal. Delimitaron la estrategia económica para recuperar la prosperidad: el sistema de la hacienda. Restablecieron categóricos la distribución territorial novohispana: tres regiones autárquicas en lo económico fuertemente supeditadas política, social y culturalmente a la muy noble y muy leal Santiago de Querétaro. Restablecieron las fuerzas rurales del estado para encargarles el "orden y la tranquilidad pública". El curso de la historia podía retomarse.

No obstante, cuando sentían que habían triunfado y que confiados y seguros podían ponerse a trabajar, descubrieron que la sociedad queretana no se reducía a la ciudad que era en donde se colocaba la mesa de las discusiones. Estaban los pueblos indígenas de la Sierra Gorda (Cadereyta, Tolimán y Jalpan), de Amealco y de San Juan del Río. Estaban los mestizos, siempre numerosos, y la muchedumbre de las "clases menesterosas". La antes monolítica clase propietaria de la tierra se había pulverizado y al lado de los hacendados aparecían frondosos los rancheros y los todavía escasos propietarios individuales. Los administradores públicos y particulares y los profesionistas habían proliferado y también se habían acostumbrado a las

componendas políticas y económicas que tantos años de anarquía favorecían. La pugna entre lo nacional y lo regional pasó a un segundo plano porque las diferencias políticas, económicas y sociales no se velaban con los conflictos de la República: se habían arraigado en la entidad. Las negociaciones tenían que ser regionales. Había que entretener los intereses particulares y ofrecerles la imagen que cada uno tenía de la prosperidad. En 1870 las pugnas regionales detonaron, la entidad fue declarada en estado de sitio y el país entero parecía reclamar la fragmentación territorial que tanto había costado sumar en 1824.

Así, sin hacerlo programa y aprovechando el caos y la anarquía los hacendados y los rancheros, los únicos que tenían claro que el valor a defender era la tierra y el agua, sus fuentes de riqueza, iniciaron la apropiación de las tierras comunales. La escalada de violencia parecía incontrolable porque en su propósito enfrentaron a los pueblos indios y a los municipios que era el otro grupo que también tenía claro el valor a defender: la tierra. La década 1870-1880 fue violenta y brutal porque los distintos propietarios de la tierra, hacendados, rancheros y los pueblos y barrios indígenas y los municipios luchaban con denuedo por sus bienes como si hubieran sabido, como ahora lo sabemos, que era la última oportunidad del siglo, por lo menos en la entidad, para resolver el problema de la tenencia.

El interminable período de la anarquía (1810-1870), estrechamente amarrado a la necesidad de los liberales por destruir las bases sociales novohispanas (el latifundio, la Iglesia y las instituciones indianas) para crear un nuevo país, en

Querétaro se había traducido en la miseria. Si bajo el régimen novohispano las grandes fortunas se habían consolidado con el sistema de la hacienda mientras que con la proliferación de los ranchos y el fraccionamiento de las propiedades del México independiente se había generalizado la pobreza, ¿puede considerarse lógico que intentaran restablecer el sistema de la hacienda? Era desatinado, según la experiencia que habían registrado ¿volver al régimen político y territorial que había sido exitoso en el pasado?

Sin embargo Querétaro nunca había sido un lugar de promisión. La visión romántica del pasado novohispano, como buena ideología, había "olvidado" las lascerantes condiciones de "la plebe". Bajo el sistema novohispano la división de la sociedad había sido tajante: españoles, mestizos e indígenas. Señores y siervos. En este sentido, con la decadencia económica registrada a raíz de la lucha independentista que deterioró el prestigio social y el poderío de los señores, y con la cauda de intereses creados bajo el predominio de la ideología liberal, que pugnaba por la construcción de una sociedad de propietarios individuales y no de clanes, feudos y estamentos, bajo cuyas leyes se había eliminado la servidumbre, las fronteras de clase, antes radicales, se fueron desdibujando. Los grupos sociales se diversificaron con excepción de la población indígena que permaneció culturalmente imperturbable.

Para las clases dirigentes en 1870, fueran conservadores o liberales, imperialistas o republicanos, era claro que la fragmentación de la propiedad rural había contribuido a la

diversificación de los grupos sociales. Fragmentación que en Querétaro se había logrado tanto por la decadencia que se experimentó en la entidad después de la lucha por la independencia como por las leyes que ordenaron la disolución de los mayorazgos, y la desamortización y nacionalización de los bienes de manos muertas. No es por eso extraño que después de 1870 nacionalmente se siguiera insistiendo en la necesidad de fragmentar la propiedad comunal de los pueblos indígenas considerando que las políticas que habían funcionado para diversificar la antes monolítica clase aristocrática, podían ser efectivas con los indígenas. Sin embargo esto no fue así. Sin sumarse a la ideología nacional los indígenas conservaron su sistema cultural y siguieron defendiendo la conservación de sus fundos comunales.

Después de años de embate parece inexplicable que los indígenas, siempre considerados el grupo más débil de la sociedad, resistieran los ataques ideológicos de los liberales y las agresiones armadas y jurídicas de los hacendados. En apariencia, y esta sería una hipótesis a indagar, la cosmovisión indígena, determinada por la etnia y por la circunscripción geográfica, descansaba en la memoria social oralmente transmitada de generación en generación. Memoria que guardaba los sucesos propios e intransferibles de cada comunidad y las "grandes legislaciones nacionales" que afectaban, para bien o para mal, el equilibrio de su mundo. Al depender de "la memoria" para registrar la historia era inevitable que los sucesos de los otros grupos afines por la etnia -el pueblo otomí "escaso y disperso en ocho diferentes estados de la República", Van de Fliert:1988- no

se incorporaran. Las incursiones armadas y las escaladas reivindicatorias de la tierra de los indígenas, por lo menos en Querétaro, siempre se articularon, hasta 1880, desde y por sus circunstancias locales. Por otra parte, el Estado mexicano del XIX nunca tuvo, ni tiene en la actualidad, una visión integrada frente al "problema indígena". La concepción de la España colonial que los consideraba "menores de edad" que había que proteger, es decir que los individualizaba frente a la sociedad de españoles, se permea en la concepción liberal de igualarlos ante la ley. Aparentemente la nunca lograda igualdad jurídica de los mexicanos que pretendía la integración cultural de los pueblos indígenas, no sólo responde a la resistencia heroica de las comunidades indígenas. También responde a la supervivencia de los dos criterios jurídicos, después reforzada por las corrientes antropológicas mexicanas y, básicamente, a las deficiencias y desviaciones que sufren las leyes en su aplicación. Deficiencias y desviaciones que han caracterizado a México a lo largo de su historia independiente y que son notablemente notorias en lo que concierne a la aplicación de la Justicia (como acto jurídico).

Los pueblos indígenas en el siglo XIX sabían que la balanza se inclinaba, inevitablemente, hacia el lado de los hacendados y así lo denunciaron, insistente y reiteradamente, durante el Imperio de Maximiliano. Es decir, cuando sintieron que un gobierno "nacional" estaba por encima de las diatribas locales y que mostraba interés en resolver sus añejas demandas de restitución de tierras. Por otra parte, el seguimiento de los procesos de integración y fragmentación de la propiedad rural en

Querétaro a lo largo del siglo XIX sugiere que los indígenas hacían oír su voz cuando a nivel nacional se emitían leyes que enunciaban la restitución de sus tierras: así fue durante el Imperio y con las promesas de Porfirio Díaz en el Plan de Tuxtepec. Regionalmente su demanda irrumpe con violencia cuando la voracidad de los hacendados y los rancheros no tiene límites. Última pelea efectuada de 1870 a 1880 ganada por los hacendados y los rancheros tanto porque "pueden mover a su favor resortes e influencias de las que nosotros carecemos" y porque emplean en su defensa "no solo recursos legales sino esos que se llaman en el foro chicanas" (Pueblo de San Juan de Güedo de la Villa Santa María de Amealco:1865), y por el empleo sistemático de los Cuerpos Rurales para aprehender y expulsar de la sociedad -enviándolos como reemplazo del Ejército- a los "individuos" disidentes. Individuos que no eran tales sino pueblos. Pueblos indios que se negaban a desaparecer. (Guerra:1988)

Con una racionalidad histórica propia siempre enfrentada a la versión oficial también tenazmente preocupada en desaparecer las diferencias molestas e irreductibles, con parámetros culturales firmes e inmutables amarrados a la tierra, los pueblos indígenas a lo largo del siglo XIX midieron las coyunturas nacionales y regionales que les eran favorables para actuar o para, en un silencio imperturbable, no hacerse sentir en la marea ideológica nacional: "Ya no es posible negarle al campesino atributos intelectuales e ideológicos como contrapartida al concepto de la imbecilidad de los campesinos" (Alan Knight:1989)

De esta manera al triunfo del Plan de Tuxtetepec en 1876 los

grandes problemas nacionales, parafraseando a Molina Enriquez, se habían diversificado. Se tenía un proceso anárquico e inconcluso que, por lo menos en Querétaro, había sido causa y motivo de profundas desaveniencias sociales: la aplicación de las leyes de reforma. Las tendencia centrífugas regionales se habían intensificado y todo apuntaba a la dispersión. Los caciques locales pugnanaban por consolidar sus cacicazgos regionales y la nación, como concepto, se había perdido en la marea militarizada que había vivido el país. Incluso la estructura jurídica de la República antes aceptada por liberales y conservadores, había sido despojada de contenido por la eficacia jurídica e institucional del Imperio. Había que empezar desde el principio asegurando a todos el bienestar. A los indígenas la restitución de sus tierras. A los hacendados la seguridad en la propiedad. A la naciente clase media, los nuevos criollos de Enriquez, la movilidad social rápida y expedita. A los peones y medieros de las haciendas trabajo asegurado. A la Iglesia devolverle sus viejas y desgastadas vestiduras sociales. Con la diversidad restablecer la República y el Estado nacional.

No obstante ¿Cómo se entendía en 1876 la República y el Estado nacional? ¿Cómo se asumían en 1876 los saldos del período de la anarquía? ¿Cómo se volvía a restablecer la paz?. La salida hoy lo sabemos fue una estructura jurídica que afirmaba la intención liberal de destruir la propiedad comunal (Reglamento de 1878 y circulares de 1888-1889), legalizaba la propiedad individual creada por las leyes de Reforma (Ley de 1892) y que aseguraba y ratificaba la legitimidad de las "excedencias y

demasías" de la hacienda" (Ley de 1894). Los valores sociales "nacionales" serían el orden y el progreso cuya consecución legitimaba el establecimiento de un rígido control social y militar para evitar los disturbios. La disolución de todas las tendencias políticas que no emanaran de una figura única: el ejecutivo nacional. Y sus brazos fuertes en las entidades: el ejecutivo estatal. Un rígido sistema que fortalecía los vínculos personales del gran cacique y permitía la construcción de la paz necesaria para trabajar y fortalecer el Estado. Una estructura de poder piramidal (Guerra:1988). Por otra parte, con excepción de los indígenas que seguían reclamando los fundos expropiados por las haciendas y los ranchos, la demanda de paz era generalizada. Como corolario la modernidad: en las estructuras administrativas, en la legislación y en la introducción de nuevas tecnologías productivas y nuevas industrias sostenidas con capital extranjero. (Ley de 1894). La inserción plena de México en el mercado internacional, en el concierto de las naciones.

La pirámide de poder instaurada por Porfirio Díaz tuvo una calorosa acogida en Querétaro, que desde 1867 planteaba ese esquema político. Esquema que si bien permitía la construcción del Estado nacional auspiciaba el predominio de los intereses particulares sobre los generales. Los valores nacionales "prosperidad y progreso" pronto se tradujeron en Querétaro en el orden y la paz pública que era sostenida por los guardias rurales. Pero también se tradujeron, bajo el ímpetu "modernizador" que caracterizó al gobierno de Díaz después de 1883, en una administración pública más ordenada, en una fuerte inversión

pública y privada en la infraestructura para el desarrollo (vías de comunicación e ingeniería hidráulica) y en la seguridad en la tenencia de la tierra. Por un lado, la propiedad adquirida por las leyes de nacionalización y desamortización de los bienes de manos muertas quedó legitimada con la legislación de 1892. Las expropiaciones de las tierras comunales y la expansión territorial de la hacienda quedó certificada por la ley de terrenos baldíos de 1894. Y los pueblos fueron compensados con la titulación individual de la propiedad comunal por medio del reglamento de 1878 y las circulares de 1888 y 1889 que ordenaban la titulación de la propiedad comunal en los lugares donde no se hubiera efectuado. Los peones y medieros de las haciendas, con la expansión territorial de las fincas rurales y su recuperación productiva, pudieron aumentar los terrenos y ranchos que cultivaban a medias al quinto o al rajar con la hacienda y dispusieron de salarios seguros (dinero, maíz y pejugal).

Aparentemente los diferentes grupos sociales habían logrado una convivencia pacífica. Los pueblos indígenas se habían conformado a perder las tierras que la hacienda se había apropiado por métodos violentos. Los hacendados y los rancheros restauraron el estilo paternal propio de los viejos hacendados y el control político de todos los puestos administrativos lo que permitió una relación pacífica con los peones y medieros de la hacienda y su efectivo control. Los profesionistas y administradores públicos y privados tenían una rápida movilidad social y habían consolidado un fuerte prestigio social y económico incursionando en la enseñanza del afamado "Colegio Civil", en el Congreso del estado y

en las nuevas negociaciones creadas (bancos, la Cía. Hidro-Eléctrica, comercios). Querétaro había logrado la estabilidad y empezaba la recuperación económica.

Durante el porfiriato y bajo el mando del Ing. Francisco González de Cosío a partir de 1880, los queretanos olvidaron sus añoranzas del Corregimiento novohispano. La sociedad se aceptaba diversa en sus dos grandes mundos: hacendados, industriales textiles, rancheros y profesionistas por un lado, y la masa de pueblos indios, peones y medieros y los trabajadores textiles y de la cambaya y la "clase menesterosa" que pululaba en la ciudad capital. La sociedad, representada por el primer mundo, estaba engolosinada con los logros y triunfos conseguidos en escasos 20 años. Los trabajadores urbanos y rurales y los pueblos indios y la clase menesterosa habían logrado la sobrevivencia física y social y estrechado los lazos afectivos con los patrones en el campo y la ciudad. Nadie en Querétaro quería apostar a los cambios que se prometían en 1910. El cambio en la entidad, largamente anunciado desde 1830, se había asentado con el porfiriato y requerían de los tiempos de paz para consolidar sus logros. Por eso, cuando los acontecimientos revolucionarios empiezan a apuntar en el país, Querétaro se aisló, al estilo de sus pueblos indios, en un "silencio imperturbable".

Los acontecimientos revolucionarios no lo beneficiaban. Por el contrario venían a interrumpir el proceso de recuperación económica y la estabilidad social y política que tanto había costado conjuntar. La transformación tecnológica de la agricultura, que las Compañías agrícolas con capital extranjero

instaladas en otros lugares de la República habían intensificado, llevaba un ritmo lento pero continuado. Había la certeza entre los profesionistas, los industriales, los políticos, los hacendados y los rancheros que lo único que necesitaban era tiempo. Y tiempo de paz. Por otra parte, al resurgimiento de las demandas de restitución de tierras y de las corrientes ideológicas que volvían a poner sobre la mesa las grandes disputas liberales, los queretanos elaboraron su versión de la historia: el desastre del 57, su enérgica participación en el 62, su amor eterno por la paz y olvidaron su pasado Imperialista. El cerco ideológico creado para evitar que alguno de los grupos sociales queretanos se sumara a las fuerzas políticas contendientes, fue reforzado por el diario oficial *Sombra de Arteaga*. Periódico que únicamente difundía los documentos nacionales que coincidían con la ideología queretana. Y si nos ubicamos en el Querétaro de aquellos años, en donde el diario oficial era el único que circulaba, podemos calcular el efecto que su discurso tenía en la población que no tenía otro medio de acceder a la información. Los otros, los que tenían acceso a la información nacional más general, sin duda no tenían ningún interés en dispersar, por ejemplo, el proyecto zapatista de restitución de tierras. Las viejas alianzas queretanas, sólidas y fuertes cuando la reforma, volvían a resurgir para impedir el paso a las noticias que no eran favorables a los hacendados y a los rancheros.

Es un hecho irrefutable que los grupos sociales claramente definidos en el Querétaro de 1910 no se entusiasmaron con el movimiento antireeleccionista de Madero, ni después con los

acontecimientos revolucionarios. No se produjo en la entidad ninguna manifestación en contra de la tiranía opresora de Díaz ni en 1910 ni años más tarde. Sin embargo no se puede reducir la explicación a la falta de periódicos o a la falta de circulación de las noticias revolucionarias, o al cerco ideológico creado por los grupos mayormente beneficiados con la dictadura porfirista. El argumento no se sostiene ante el paso continuado de los Ejércitos después de 1912 que obligaban el intercambio de información. Mucho menos al analfabetismo de la población que en Querétaro era mayoritario. La población queretana en sus diversas composiciones sociales sabía lo que estaba pasando a nivel nacional. Aun así no se involucraron en los conflictos.

No se puede ignorar que el estado fue asediado continuamente por las "gavillas" revolucionarias limítrofes con la siempre "belicosa" Sierra Gorda, sorprendentemente tranquila durante estos años. También lo intentaron por la frontera de los pueblos indios de Amealco y San Juan del Río con Hidalgo. En este caso tampoco se puede sostener el argumento que dichas fuerzas revolucionarias no lograron su cometido, como lo aseguraba la Sombra de Arteaga en 1912-1913, por la efectividad de las Fuerzas Rurales del estado. La pregunta de la época y también hoy día es: ¿Por qué Querétaro no participó en la Revolución?

Sobre la "neutralidad" de Querétaro se dieron varias explicaciones en aquellos años. Resurgió la vieja y reiterada denuncia nacional de que en la entidad "no pasaba nada". Los queretanos argumentaban, y con razón, que en la sociedad queretana pesaba la última batalla celebrada al triunfo de la República con

el Imperio y que por eso ellos optaban por la paz. No obstante la argumentación parece insuficiente. Tratando de contribuir a esa reflexión encuentro varias razones que se encuentran entreveradas con las posiciones e intereses de los grupos sociales, y con el proceso social de la entidad durante el porfiriato.

No sólo influía la pasada lucha entre imperialistas y liberales; en Querétaro también pesaban los conflictos armados y la lucha sangrienta entablada entre las haciendas y los ranchos con los pueblos de indios y los municipios en la década 1870-1880. Pelea que ideológicamente se deseaba "olvidar" en el momento en que los zapatistas enarbolaban el Plan de Ayala, pero que los pueblos recordaban con exactitud. No obstante, y siendo verdad que nadie quería resucitar los conflictos armados, el estudio realizado sobre Querétaro sugiere que su llamada "neutralidad" en la revolución se debe a un proceso histórico no planificado: la aceptación de la diversidad de los grupos sociales en 1880 como un hecho consumado, inmodificable. La presencia clara y delimitada de los grupos fue determinante para que cada uno de ellos a lo largo de los últimos 20 años de gobierno de González de Cosío reforzaran su identidad y sus formas de sobrevivencia. La sociedad queretana no tendió un manto ideológico para cubrir las diferencias sociales. Al contrario su estabilidad se fundaba en acentuar las diferencias que eran muchas, tanto en el grupo dirigente como en el de los trabajadores. Cabe destacar que las diferencias sociales entre los diversos grupos de trabajadores de la hacienda, se han perdido por el uso generalizado del concepto "campesino" utilizado en los análisis contemporáneos. En el

Querétaro que llega a 1910 nunca se utilizó el término "campesino" para referirse a los trabajadores rurales. Cuando mucho se usaba el término "jornalero" que hacía referencia a los "trabajadores libres" que carecían de tierra y que establecían contratos de trabajo temporales con las haciendas y los ranchos. Precisamente porque la masa de los trabajadores rurales no era uniforme como tampoco eran uniformes los beneficios que recibían según fueran peones, medieros, aparceros, mandones o mayordomos de las haciendas.

La sociedad rural queretana estaba integrada en círculos concéntricos de poder que hacían referencia a la tenencia de la tierra: haciendas, ranchos, terrenos -solares- individuales y terrenos comunales y municipales. No obstante esta diversidad el sistema dominante era la Hacienda. En gran medida porque los otros sistemas de propiedad -ranchos y terrenos individuales y la propiedad comunal- mantenían relaciones productivas con la hacienda. Los rancheros eran a su vez arrendadores de las tierras y de los ranchos de las haciendas y, en muchas ocasiones, sus administradores. (Por mencionar uno: Teófilo Gómez en Galindo). Los peones y medieros podían ser los "trabajadores libres" presentes en Querétaro desde principios del siglo XIX, que carecían de tierras. Pero también lo eran los propietarios individuales, fueran indígenas o mestizos. (Por mencionar uno: Saturnino Osornio) Caso aparte eran los peones y medieros propios de la "casa" individuos también sin tierra. Los trabajadores que habían nacido y crecido en la hacienda y que eran los más cercanos al patrón. Los que velaban por sus intereses como cosa propia.

Los "apadronados". En el centro y eje de este sistema estaban los rancheros y los administradores que gozaban de las prerrogativas del poder del hacendado en ausencia de éste.

En lo referente a la fragmentación de la propiedad rural Querétaro parece un caso excepcional en la República. A fines del porfiriato los propietarios de haciendas y ranchos se acercaban a 200 (en números conservadores) y los propietarios individuales pasaban de 5 000. Esta proliferación de propietarios realizada entre 1830-1860 ya en el porfiriato no constituía una amenaza a la gran propiedad. Por el contrario fue su aval y garantía para conquistar la inafectabilidad.

En la ciudad la diversificación social también era considerable. Pero a diferencia de los trabajadores del campo, en la ciudad se buscaba limar las diferencias. Junto a los industriales, los hacendados, los comerciantes y los accionistas de las nuevas empresas creadas, estaban los profesionistas y los administradores públicos y privados. Casi todos ellos dueños de pequeños ranchos o de pequeñas haciendas. De este grupo, la clase dirigente en mi interpretación, eran los profesionistas y los administradores los que cuidaban mantener la "distancia social" con los trabajadores textiles y el "pueblo bajo". Grupos que necesitaban para reforzar su identidad con las clases privilegiadas y hacia los que tenían actitudes prepotentes. Actitud que se encubría bajo la preocupación de procurarles la atención especializada de las juntas de beneficencia. Fue por esta relación que las "clases menesterosas", el "pueblo bajo" en expresión de uno de los profesionistas (José Antonio Septién,

director del Colegio Civil, uno de los sucesores de González de Cosío), irrumpieron con júbilo al triunfo de Madero.

Los profesionistas tomaron en sus manos el destino de la entidad a la caída de Díaz -y a la renuncia de González de Cosío- pero fueron rechazados por el "pueblo bajo". La aceptación la tuvo Carlos M. Loyola accionista de la Cia. Hidro-Eléctrica queretana. Es decir un miembro nato de la clase dirigente. La clase que mantenía relaciones de compasión -paternales- con las "clases menesterosas". No obstante, los profesionistas lucharon con denuedo contra estos elementos de la clase dirigente para asumir el poder. En gran medida, porque ellos en su momento creían que tenían la capacidad y la habilidad para dirigir las negociaciones políticas en las que habían sido diestras las antiguas clases dirigentes. Sin embargo, se consumieron en diatribas personales, fueron incapaces de medir la composición de las fuerzas contendientes y otorgaron sus apoyos a las distintas fuerzas políticas y militares nacionales como individuos nunca como grupo. (El general Joaquín de la Peña: villista; el Dr. José Siurob: carrancista). Su incapacidad política para integrar un frente y generar una base social con nuevos componentes de articulación, abrió el camino a los constitucionalistas y a mediano plazo permitió que los agraristas (con fuerzas armadas, y más diestros en la política y en las lides con las bases), les arrebataran el poder. Los hacendados industriales y comerciantes, los hombres fuertes de Querétaro, temerosos de Villa y de Zapata, y cautos con las veleidades de los profesionistas, recibieron con agrado el carrancismo. El único entre las fuerzas revolucionarias

que les garantizaba la propiedad de las tierras.

Al emitirse la Ley del 6 de enero de 1915 por Carranza, con los carrancistas dominando la entidad, y con el Congreso Constituyente establecido en la ciudad en 1916, los pueblos indios consideraron que había llegado el momento de pedir la restitución de tierras: Santa Rosa de Jáuregui, el barrio de la Magdalena en Tequisquiapan, San Ildefonso en Amealco. Uno a uno fueron los pueblos pidiendo, en base a las leyes emitidas, la restitución de sus terrenos. Ni en la Sierra Gorda ni en los Valles de Querétaro y San Juan del Río, los peones y medieros y los apadronados de las haciendas solicitaron la dotación de tierras durante estos años. Para que lo hicieran, tuvo que mediar la revuelta de Saturnino Osornio en San Juan del Río y el impulso del teniente Porfirio Rubio ya para 1920 cacique de Jalpan.

El comportamiento de los pueblos indios de esperar a la emisión de una ley favorable a sus intereses, corresponde plenamente a su comportamiento a lo largo del siglo XIX. En cambio, el letargo de los peones y medieros en solicitar las tierras parece radicar tanto en "el bienestar relativo" que disfrutaban hasta 1915, por lo menos, como en la ausencia de líderes regionales que pudieran articular sus demandas. Líderes que surgen al momento en que las condiciones de sobrevivencia hasta 1917 estables, se hacen añicos. La movilización de los peones y medieros de las haciendas, coincide con el año del hambre y de la influenza (1918-1919) y definitivamente con el Plan de Agua Prieta que enarbolaba Alvaro Obregón. Es decir, cuando la oferta de trabajo en la localidad se había escaseado y cuando a

nivel nacional de nueva cuenta se hacían las grandes promesas agrarias.

Cuando las condiciones del país habían cambiado y se empezaba de nueva cuenta el proceso de construcción del Estado nacional la revolución agrarista irrumpió en Querétaro.

El curso de la propiedad agraria de Querétaro sugiere que los cortes históricos establecidos por la visión nacional de la historia no siempre corresponden con los procesos regionales. Destaca los efectos de largo alcance de la lucha por la Independencia -llegan hasta la aplicación de las leyes de Reforma en Querétaro en 1860- y pone en evidencia la necesidad de otorgar mayor atención al corto periodo del Imperio de Maximiliano en donde parece fenecer la vieja disputa conservadores-liberales y el periodo de la anarquía 1810-1867. Una indagación más a fondo de la década 1870-1880, apretada entre el triunfo de la República y la estabilidad del porfiriato, puede aclarar las grandes transformaciones realizadas en el país durante la dictadura de Díaz. Por lo menos, en el caso de Querétaro ésta fue la época en que se sentaron las bases de la estabilidad social y política queretana que duró 40 años. Bases que fueron ratificadas por la dictadura porfirista pero que no fueron creadas por ella. Por otra parte, si bien las grandes transformaciones de Querétaro son producto de la lucha independentista y de las políticas liberales también es evidente que durante 1870-1880, fue la reacción regional enardecida contra las ideologías nacionales lo que impulsó la creación del sistema político y la estructura económica que los queretanos sentían como propios. Esta afirmación obliga a

replantear las relaciones centro-regiones y las relaciones de fuerza establecidas durante el porfiriato. También sugiere la necesidad de los estudios comparativos no tanto entre los estados que sí se vieron involucrados en la Revolución sino entre las regiones geográfica y culturalmente afines que tuvieron un comportamiento diferente. En este caso, las excepciones, como lo fue Querétaro, contribuyen a bajar del pedestal las ideologías nacionales que impiden avanzar. En la exaltación de la ideología liberal como "nacional" y los frutos de la Revolución mexicana como la base de la legitimidad del sistema político mexicano actual, se han perdido los cortes sincrónicos que permiten una mejor comprensión de los procesos de largo alcance: las etapas de dominio de los conservadores que culminan en el Imperio de Fernando Maximiliano de Habsburgo. Una indagación más a fondo de estos periodos permitirá articular y comprender mejor las ideologías que campeaban en el país que emerge después de 1917 y los grandes retos que todavía quedan por resolver: encauzar la desigual distribución de los recursos naturales y las multifacéticas expresiones culturales y productivas que dividían, y siguen dividiendo, al territorio mexicano. El proceso de construcción de la moderna sociedad mexicana que arranca en 1917, ha avanzado sin resolver los añejos problemas de la desigualdad y la diversidad social. Como consecuencia, en nuestra historia de todos los días, los desencantos políticos y las desventuras económicas, como antaño, siguen siendo sistemáticas y recurrentes.

F U E N T E S

1. A R C H I V O S

Archivo General de la Nación (AGN)
 Fondo Bienes Nacionalizados
 Fondo Gobernación
 Fondo Período Revolucionario
 Mapoteca

Archivo y Biblioteca Condumex

Archivo Histórico del estado de Querétaro
 Biblioteca

Archivo Municipal de San Juan del Río, Querétaro
 Fondo Presidencia
 Fondo Cabildos

Archivo Personal de Porfirio Rubio

2. E N T R E V I S T A S P E R S O N A L E S

3. D O C U M E N T O S

Acuerdos curiosos, Tomo IV, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1989.

Bando dado en el Real Palacio de México a 16 de Mayo de 1810. Por mandato de la Real Audicencia Gobernadora.

Bando de José Antonio Andrade de 3 de diciembre de 1822.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano e Independiente de Querétaro de Arteaga, Luciano Frias Impresor, Querétaro, 1879.

Catálogo ramo de limites, Archivo

Histórico del Estado de México,
Gobierno del Estado de México, 1988.

Departamento de la Estadística
Nacional. Censo General de
Habitantes, 30 de noviembre de 1921,
México, 1925.

El Diario de Debates del 5º Congreso
Constitucional de la Unión, Tercer
período de sesiones, Imprenta del
Gobierno de Palacio, México, 1870.

Estatuto de la Sociedad Agrícola
Mexicana, imprenta de I. Cumplido,
Rebeldes N° 2, México, 1879.

Estatuto provisional del Imperio
Mexicano, Imprenta de Andrade y
Escalante, México, 1965.

La Revolución de Independencia en la
Sierra Gorda, manuscrito inédito con
los partes de guerra en los años
1814 y 1815, Gobierno del Estado de
Querétaro, Querétaro, 1971.

Ley sobre libertad de cultos.
Precedida de la nota con que fue
circulada por el Ministerio de
Justicia, México, Imprenta de
Vicente García Torres, Calle de San
Juan de Letrán, N° 3, México, 1861.

Perrusquia, Ernesto, Informe
administrativo, del 16 de septiembre
de 1917.

Proyecto de Constitución presentado
a la H. Legislatura del Estado de
Querétaro, por la comisión especial
nombrada en 23 de noviembre de 1867,
Tipografía de Mariano Rodríguez
Velázquez, Calle de los Locutorios
N° 6, Querétaro, Qro. 1868.

Saturnino Osornio. I Informe de
Gobierno. 16 de septiembre de
1932.

Secretaría de Fomento, Colonización
e Industrialización. Dirección
General de Estadística y División
Territorial de la República

Mexicana, fondo en los datos del censo de 1900.

4. PERIODICOS Y REVISTAS

Diario Oficial del estado de Querétaro, Sombra de Arteaga

Diario del Imperio

Diario de circulación nacional, El Excelsior

Revista del Gobierno del estado de Querétaro: Querétaro

5. BIBLIOGRAFIA

Abad y Queipo

"Representación sobre la inmunidad personal del clero, reducida por las leyes del nuevo código, en la cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harían la base principal de un gobierno liberal y benéfico para las Américas y su Metrópoli", en José María Luis Mora, Crédito Público, UNAM y Miguel Angel Porrúa, México, 1986.

Alamán, Lucas

"Carta a Santa Anna del 23 de marzo de 1853", en Alvaro Matute, Antología México en el Siglo XIX, UNAM, México, 1972.

Alamán, Lucas

Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 1808 hasta la época presente, Tomo I, Instituto Cultural Helénico y F.C.E., México, 1985.

Alcala Alfonso-Olimón Manuel, Episcopado y Gobierno en México. Cartas pastorales colectivas del Episcopado Mexicano 1859-1875. Ediciones Paulinas S.A. México 1989

Altamirano, Ignacio M.

"Biografía de Ignacio Ramírez" en Ignacio Ramírez, México en pos de la libertad, México, Empresas editoriales, S.A., 1949.

- Arcila Fariás, Eduardo Reformas económicas del Siglo XVIII en Nueva España, industria, Minería y Real Hacienda, Tomo II, Sepsetentas, México, 1974.
- Argomaniz, Francisco Xavier Diario de Querétaro 1810, documentos para la historia de Querétaro No. 5, Querétaro, 1972.
- Diario de Querétaro 1821, documentos para la historia de Querétaro No. 6, Querétaro 1973.
- Ayala Echavarri, Rafael San Juan del Río, Geografía e Historia, 2da. edición, México 1981.
- Balbontin, Juan Maria Estadística del estado de Querétaro, Formada en los años 1854 y 1855, Imprenta de Vicente G. Torres, Querétaro, 1867.
- Barbosa Ramirez, René La estructura económica de la Nueva España 1519-1810, México, 3a. ed. Siglo XXI Ed., 1975.
- Bassols Batalla, Angel "Las dimensiones regionales de México Contemporáneo". Ponencias presentada en el Seminario sobre estudios regionales, coordinador por el IIS-UNAM, en 1988.
- Bazant, Jean Los bienes de la Iglesia en México (1856-1875), Colegio de México, México 1971.
- Bazant, Milada Debate Pedagógico durante el porfiriato, ed. El Caballito, SEP, México 1985.
- Brading, D.A. Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, F.C.E., México, 1985.
- Haciendas y Ranchos del Bajío, León 1700-1860. Enlace, Grijalbo, México 1986.
- Mineros y Comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), F.C.E. México, 1975.
- Noticias sobre la economía de Querétaro y de su Corregidor Don Miguel Domínguez 1802-1811.

- Bustamante, Miguel E. "La situación epidemiológica de México en el Siglo XIX", en Ensayos sobre la historia de las epidemias en México.
- Chevalier Francois La formación de los grandes latifundios en México, F.C.E., 2a. ed., México, 1976.
- Cooper, Donald B. Las epidemias en la ciudad de México 1761-1813, IMSS, México, 1980.
- Córdova, Arnaldo La ideología de la revolución mexicana. La formación del nuevo régimen, ed. Era, IIS-UNAM, México 1977 5a. ed.
- Costeloe, Michel P. La Primera República Federal de México (1824-1835), F.C.E., México 1975.
- Cumberland, Charles C. La Revolución Mexicana, los años constitucionales, F.C.E., México, 2ª reimpresión, México, 1983.
- Cumberland, Charles C. Madero y la Revolución Mexicana, Siglo XXI, Ed. 2da. ed. México 1981.
- Del LLano Ibañez, Ramón "Transformación de la Tenencia de la Tierra a partir de las leyes de desamortización en Querétaro: 1856-1872", en Historia de la cuestión agraria mexicana, Estado de Querétaro, Vol. II, Siglo XIX (1765-1910), Juan Pablo Ed., Gobierno del Estado de Querétaro y Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, México, 1989.
- Del Raso, Antonio Notas estadísticas del Departamento de Querétaro, Imp. José Maria Lara, Querétaro, 1848.
- Díaz del Castillo, Bernal Historia de la conquista de Nueva España, Ed. Porrúa, México, 1960.
- Díaz Ramírez, Fernando Historia del Estado de Querétaro, Tomos III al VI, Gob. del Estado, Querétaro, 1979.
- Domínguez Paulín, Arturo Integración Social y económica del estado de Querétaro, México, 1966.
- Dulles John W.F. Ayer en México, ed. F.C.E., México, 1977..

J.R. Fortson, Cia.

Los gobernadores de Querétaro. Historia 1823-1937, ed. J.R. Fortson. Cia. S.A. 1987.

Florescano, Enrique

Precios del maíz y crisis agrícolas 1708-1810, México, El Colegio de México, 1969.

Florescano, Enrique y
Malvido, Elsa

Historia de las epidemias en México, 2 vols. IMSS, México, 1982

Frias F. Valentín

Levendas y tradiciones queretanas, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1989.

Las Calles de Querétaro, ed. Gobierno del estado de Querétaro, 1984.

Galindo, Refugio

"Informe presentado al segundo congreso agrícola de Tulancingo", en La Servidumbre agraria en México en la época porfiriana, Sepentas 303, México 1976.

García Cantú, Gastón

El socialismo en México, Siglo XIX, Ed. Era, 3ª ed., México, 1980

García Ugarte,
Marta Eugenia

"Saturnino Osornio: remembranzas de una época en Querétaro" en Estadistas, caciques y caudillos, IIS-UNAM, México 1988.

González, Epigmenio

Memorias. Relato histórico de los principios de la Revolución de Independencia en 1810, Documentos para la historia de Querétaro, Querétaro, 1970.

González, Luis

Los artifices del cardenismo, Colegio de México, 1981.

González de Cosío, Francisco

Colección de Informes administrativos, leídos por el C. Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Querétaro de Arteaga, De 15 de junio de 1888 a 16 de septiembre de 1906.

González Navarro, Moisés

Anatomía del poder en México 1848-1853, 2a. edición, Colegio de México, México 1983.

- Gómez Canedo, Lino Sierra Gorda un típico enclave misional en el centro de México, Siglos XVII y VIII. ed. Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1988.
- Guerra, Francois-Xavier México, el antiguo régimen a la Revolución, F.C.E. 2 Vol. México 2988.
- Guerra, José -Fray Servando Teresa de Mier- Historia de la Revolución de la Nueva España, antiguamente Anahuac o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1813. ed. Facsimilar, IMSS, México 1980.
- Guevara Niebla, Gilberto La educación socialista en México 1934-1945, ed. El Caballito, Sep. México 1980.
- Hale, Charles A. El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, Siglo XXI, Ed. México 1977.
- Isla Estrada, Juan Antonio Coordinador General, Querétaro Ciudad Barroca, ed. Gobierno del Estado, Querétaro, 1988.
- Katz, Friedrich "Condiciones de trabajo en las haciendas de México durante el porfiriato: modalidades y tendencias", en La servidumbre agraria en México.
- Knight, Alan "Caudillos y campesinos en México Revolucionario, 1910-1917", en D.A. Brading, Caudillos y campesinos en la revolución mexicana, ed. F.C.E., México 1985.
- Lemoine, Ernesto "Los intelectuales en la Revolución mexicana", en Revista Mexicana de Sociología, Abril-junio 1989, México, IIS-UNAM.
- Loyola M., Carlos "Ideario político de la revolución de 1810", en Independencia y Revolución, UNAM, México 1986.
- "Informe que rinde el Ejecutivo del estado al H. Congreso del mismo, sobre la visita oficial que se hizo

a todos los distritos en los meses de septiembre y octubre de 1912". Querétaro 15 de enero de 1913.

Manuscrito inédito

La revolución de independencia en la Sierra Gorda, Manuscrito inédito, con los partes de guerra en los años 1814-1815. Documentos para la historia de Querétaro, No. 4 Querétaro, 1971.

Martínez Assad, Carlos

Los lunes rojos, la educación Nacionalista en México, ed. El Caballito, SEP México, 1986.

Martínez Assad, Carlos

"Alternativas del poder regional en México", en Revista mexicana de Sociología, Año XL, No. 4, México, ISS-UNAM, octubre-diciembre 1978
La cristiada, siglo XXI Ed., México, 1980.

Meyer, Jean

Miranda Correa, Eduardo

El Congreso Constituyente, CIS-UAQ, Querétaro, 1988.

Miranda, José

Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, UNAM, México, 1978.

Molina Enriquez, Andrés

Los grandes problemas nacionales 1909, ed. Era. México 1978.

Mora, José María Luis

México y sus revoluciones, ed. Facsimilar, F.C.E. e Instituto Cultural Helénico, México, 1986.

Mora, José María Luis

Revista Política de las diversas administraciones que ha tenido la República hasta 1937, México, UNAM-Porrúa, 1986.

Moreno García, Heriberto
(Coord.)

Después de los latifundios (la desintegración de la gran propiedad agraria en México, El Colegio de Michoacán, FONAPAS, 1982.

Muñoz Cota, José

Querétaro, Sinai en Llamas. La Constitución de 1917, Costa Amic, México 1967.

Nieto Ramírez, Jaime

Los habitantes de la Sierra Gorda, UAQ, Querétaro 1984.

O'Gorman, Edmundo

Historia de las divisiones

- Scholes, Walter V. Política Mexicana durante el régimen de Juárez, 1855-1872, F.C.E., México, 1972.
- Septién y Septién, Manuel Acueducto y fuentes de Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro, 1988.
- Septién y Villesenor, José Antonio Memoria Estadística del Estado de Querétaro, obra póstuma publicada por los hijos del autor, Tip. González Legarreta, Querétaro, 1875.
- Serrera Contreras, Ramón María "La ciudad de Santiago de Querétaro a fines del siglo XVIII apuntes para su historia urbana", en Anuario estudios Americanos, 1973.
- Shryer Frans, J. Una burguesía campesina en la revolución mexicana. Los rancheros de Pisaflores, ed. Era, México.
- Silva Herzog, Jesús Historia de la Revolución Mexicana. Los antecedentes, la etapa maderista, F.C.E. México 1983.
- Silva Herzog, Jesús Breve historia de la Revolución mexicana. La etapa constitucionalistas y la lucha de facciones, Vol. II, F.C.E., México, 1983.
- Sin autor El sitio de Querétaro, según protagonistas y testigos. Sepan cuantos Ed. Porrúa, México, 1982.
- Soto Mora, Consuelo y Alicia "La tenencia de la tierra en el estado de Querétaro", en Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM, vol. VI, México. 1971.
- Super C., John La vida en Querétaro durante la colonia 1531-1810, ed. F.C.E., México 1983.
- Tutino, John From insurrection to revolution in Mexico. Social Bases of agrarian violence 1750-1940, Princeton University Press, USA, 1988.
- Van de Fliert, Lydia El Otomí en busca de la vida, Universidad Autónoma de Querétaro,

Querétaro, 1988

Vasconcelos, José

Memorias II, El desastre, F.C.E.
México 1984.

Vergara Hernández,
María Josefa

Testamento, Ed. del Gobierno del
Estado de Querétaro, Querétaro,
1987.

Vieytez, Hipólito A.

Reseña histórica de la
administración del señor General
Antonio Gayón, gobernador del estado
de Querétaro desde el 23 de
diciembre de 1870, hasta el 20 de
marzo de 1880, Imprenta de Luciano
Frías y Soto, Querétaro 1880.

Zarco, Francisco

Congreso Extraordinario
constituyente 1856-1857, El Colegio
de México, 1957, reimpresión, 1979.

Zavala, Silvio

Apuntes de historia nacional,
México, Sepsetenta, 1975.

Zavala, Silvio

Las instituciones jurídicas en la
conquista de América, 2ª ed., Ed.
Porrúa, México, 1971.